

COLECCIÓN DE HISTORIA



**LA REVOLUCIÓN
CAPITALISTA DE CHILE**
(1973-2003)

MANUEL GÁRATE CHATEAU



EDICIONES UNIVERSIDAD
ALBERTO HURTADO

COLECCIÓN DE HISTORIA



**LA REVOLUCIÓN
CAPITALISTA DE CHILE
(1973-2003)**

MANUEL GÁRATE CHATEAU



EDICIONES UNIVERSIDAD
ALBERTO HURTADO

**LA REVOLUCIÓN CAPITALISTA
DE CHILE**

(1973-2003)

LA REVOLUCIÓN CAPITALISTA DE CHILE

Desde la tradición del liberalismo decimonónico (1810-1970) a la búsqueda de una utopía neoconservadora (1973-2003)

© Manuel Gárate Chateau

Este texto corresponde a la tesis doctoral dirigida por: Doctora Mme. Frédérique Langue, siendo jurados Olivier Dabène, Annick Lempérière, Luc Capdevila, Juan Carlos Garavaglia, Jean Piel y Frédérique Langue, mención “Très bien”, con felicitaciones del jurado, EHESS, 29 marzo 2010.

ISBN 978-956-8421-56-4

eISBN 978-956-9320-09-5

Registro de propiedad intelectual N° 209877

Dirección Colección Historia

Marcos Fernández Labbé

Dirección editorial

Alejandra Stevenson Valdés

Editora ejecutiva

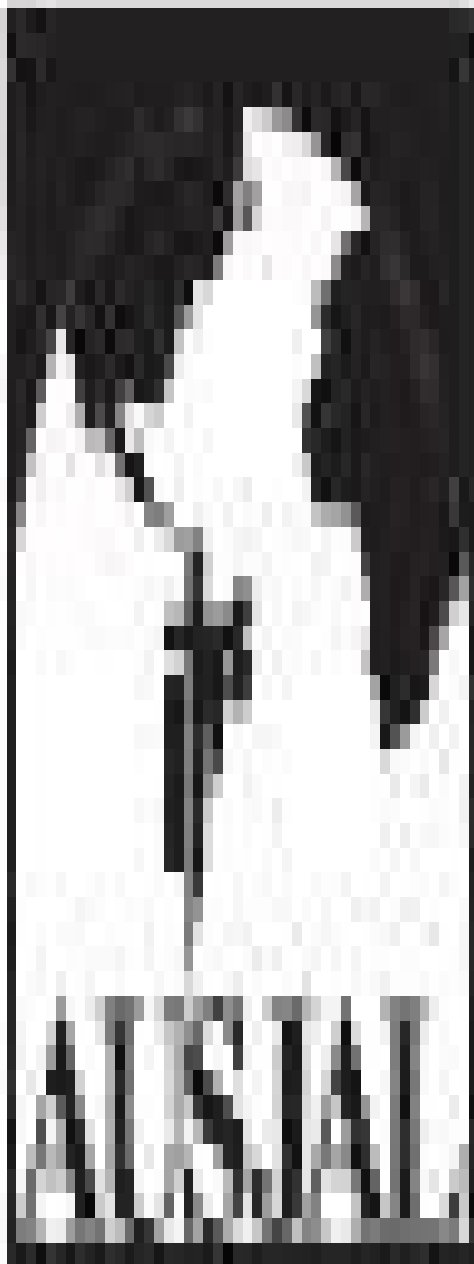
Beatriz García Huidobro

Diseño de la colección y diagramación interior

Francisca Toral

Fotografía de portada

Álvaro Hoppe. Sello en detalle de fachada Banco Central de Chile, Santiago.



MEMBROS DA
REDA
EDITORIALES
UNIVERSITARIAS
DE ALISTIA

UNIVERSIDADE DE LISBOA
UNIVERSIDADE DE COVILHÃ
UNIVERSIDADE DE BRAGA
UNIVERSIDADE DE VISEU
UNIVERSIDADE DE AVEIRO

UNIVERSIDADE DE
SANTARÉM

Con las debidas licencias. Todos los derechos reservados. Bajo las sanciones establecidas en las leyes, queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamos públicos.

LA REVOLUCIÓN CAPITALISTA DE CHILE

(1973-2003)

Manuel Gárate Chateau



ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS

PRÓLOGO

INTRODUCCIÓN

PRIMERA PARTE

Antecedentes históricos del liberalismo económico en Chile (1810-1970)

CAPÍTULO I

La economía chilena y los teóricos clásicos del laissez-faire

Los precursores y la influencia de los teóricos liberales clásicos

Política económica y consenso liberal

Liberalismo y librecambismo: la llegada del primer Money Doctor

Algunos elementos fundamentales del pensamiento económico de Jean Gustave Courcelle-Seneuil

La depresión de los años 1870: la primera crisis del liberalismo económico

El fin de una época: la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión y el repliegue liberal

Notas

CAPÍTULO II

Transferencia ideológica: de los últimos liberales clásicos a los Chicago Boys (1930-1973)87

El último de los liberales clásicos en la era de la planificación

El liberalismo pragmático de los años 1930

La misión Klein & Saks: el tercer equipo de Money Doctors y un antecedente del proyecto neoliberal

Mesianismo, abstracción matemática y ‘verdad científica’

La economía como ciencia normativa

La Universidad Católica de Chile y el convenio con la Universidad de Chicago

Los actores en cuestión

La lucha contra el estructuralismo en economía

La mirada estructuralista

La crítica neoclásica de los economistas de Chicago

Los hombres de la Escuela de Economía y la purga de los heterodoxos

Gremialismo y monetarismo: una fusión renovadora

Conservadores a la ofensiva: la Unidad Popular y la guerra ideológica

Notas

SEGUNDA PARTE

El régimen militar y su proyecto socioeconómico (1973-1989)

CAPÍTULO III

La implantación del modelo La alquimia entre liberalismo económico, autoritarismo y conservadurismo político (1973-1981)

La ausencia de proyecto económico de los militares (1973-1975)

El peso de la tradición castrense desarrollista

El triunfo de los neoliberales sobre los nacional-desarrollistas

El fin del modelo de Estado de Compromiso y la implantación del neoliberalismo ortodoxo (1975-1982)

El significado ideológico del ajuste recesivo o tratamiento de shock

El experimento neoliberal como doctrina económica

Una nueva tecnocracia autoritaria: el caso de ODEPLAN

El denominado ‘milagro económico chileno’ (1977-1981)

La nueva institucionalidad y el fin de la antigua democracia. El papel clave de Jaime Guzmán

Notas

CAPÍTULO IV

De la crisis del monetarismo ortodoxo a la aplicación del liberalismo pragmático: la consolidación del modelo socioeconómico chileno (1981-1990)253

[Las modernizaciones clave](#)

[Las reformas económicas](#)

[Las reformas sociales](#)

[La crisis de 1982: el fin del monetarismo ortodoxo](#)

[Origen y desarrollo de la crisis](#)

[Elementos ideológicos implícitos en el origen y desarrollo de la crisis de 1982](#)

[Las lecciones de la crisis y el liberalismo pragmático](#)

[Un breve período de heterodoxia y medidas expansivas](#)

[El regreso del rigor económico, pero con regulación pragmática](#)

[El costo social del retorno a la ortodoxia económica](#)

[La segunda ola de privatizaciones y el ocaso del 'Estado empresario' \(1985-1989\)](#)

[El contexto de la segunda ola privatizadora](#)

[Resultados del proceso de privatizaciones](#)

[La herencia del régimen militar y el 'amarre' económico](#)

[El inesperado inicio de la transición política a la democracia](#)

[Las medidas de amarre institucional y económico](#)

[Notas](#)

TERCERA PARTE

[La continuidad del modelo económico en democracia \(1990-2003\)](#)

CAPÍTULO V

La evolución del discurso y la praxis económica en el nuevo escenario de transición a la democracia (1990-2000)

Una nueva élite tecnocrática: los economistas de CIEPLAN

Los orígenes de CIEPLAN

De la crítica al grupo de Chicago a la búsqueda de consensos

La llegada al poder y los primeros dilemas de la transición

La economía política de la transición y el discurso del Consenso de Washington

Elementos principales de la política económica de la nueva democracia

Chile y las recomendaciones del Consenso de Washington

¿Gobernando con las ideas del otro?: la discusión sobre neoliberalismo y pragmatismo

La tesis del pragmatismo incremental

La tesis del continuismo y la renuncia

La transición y el modelo económico: la disputa entre autocomplacientes y autoflagelantes al interior de la Concertación

Notas

CAPÍTULO VI

¿Cuándo triunfa una revolución? Las formas del discurso económico liberal en el Chile posdictatorial y sus nuevas élites

[El Chile de los economistas](#)

[La invención del economista como asesor experto](#)

[El economista académico-empresario](#)

[El economista al servicio del Estado El caso chileno](#)

[La autonomía del discurso \(del asesor al generador de políticas\)](#)

[Poder, consolidación y hegemonía](#)

[El estatus privilegiado del economista-técnico](#)

[La política de los think tanks Las nuevas formas de ejercer influencia política y económica en el Chile posautoritario](#)

[La problemática en torno al concepto de think tank](#)

[La experiencia chilena: ¿quiénes son los actores?](#)

[¿Juego democrático o mercado de ideas?](#)

[Una sociedad de mercado y competitiva La nueva élite del capitalismo chileno](#)

[La nueva élite político-empresarial](#)

[Origen de la nueva élite](#)

[Fisonomía de los nuevos grupos dirigentes](#)

[Élite, religión y mercado](#)

[Notas](#)

CONCLUSIÓN

Notas

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES

LISTA DE ABREVIACIONES

Para Acacia, Amalia y Clara.

¿Cómo y por qué me convertí en historiador? La pregunta puede parecer simple.
La respuesta no lo es. Yo podría decir que viví la historia antes de escribirla, o
más bien de intentar escribirla.

Pierre Vidal-Naquet

AGRADECIMIENTOS

Esta investigación no podría haberse transformado en libro sin la ayuda inestimable de numerosas personas. Espero no haber olvidado a ninguna.

En primer lugar quiero agradecer a mi familia, sin la cual habría sido imposible llevar a puerto este proyecto. En segundo lugar, mis agradecimientos van dirigidos a mi directora de investigación, Mme. Frédérique Langue, quien me abrió las puertas del laboratorio americanista CERMA y de la revista Nuevo Mundo de la EHESS de París, y exigió al máximo mis capacidades en la redacción de esta investigación. También en el plano académico y humano, los consejos de Anne Perotin-Dumont, Alfredo Riquelme, Alfredo Joignant, Claudio Rolle y Antonio Elizalde fueron de una inmensa ayuda para sortear las diversas dificultades de la investigación histórica. Un lugar especial ocupan también mis amigos científicos políticos y colegas de discusión del grupo Propolco: Enrique Fernández, Horacio Larraín y Joaquín Fernández, así como a mis colaboradoras en los archivos Cindy Iriarte y Camila Krauss.

La mirada crítica y motivante de los miembros del GRESCH (Groupe d'Études sur le Chili) fue un pilar esencial en la culminación de este trabajo, especialmente de Maite de Cea, Geraldine Kerneur, Marco Ceballos, Antoine Maillet y Antoine Faure.

En cuanto a la redacción y organización del texto, quiero destacar el apoyo de Adeline Joffres, quien actuó además como la traductora oficial del manuscrito al francés. Su paciencia, consejos y amistad fueron de gran ayuda durante mis tres años de estadía en Francia. Un lugar especial cabe también a Tatiana Calderón, quien corrigió y revisó la obra, aportando sugerencias que —desde la literatura— enriquecieron notablemente la traducción. Nuestras largas conversaciones me permitieron valorar aún más las sutilezas del lenguaje escrito, y por supuesto su amistad.

En cuanto a la edición del libro en español, deseo agradecer las correcciones, sugerencias y buena disposición permanente de Beatriz García Huidobro, Alejandra Stevenson y Marcos Fernández. Deseo también hacer un reconocimiento especial a la Universidad Alberto Hurtado por haber apoyado la publicación de esta investigación.

Finalmente quiero agradecer a quienes me apoyaron en todo momento, especialmente en los momentos de duda y agotamiento lejos de mi tierra. Mi reconocimiento especial para Delphine Grouès, Hernán Saavedra, Manuel Arriagada, Lydia Robin, Gabriel Arriagada, Claudia Giacoman, Rodrigo Booth, Cecilia Baeza, Julian Kassum, María Chateau, Claudio Albornoz, María Eugenia Albornoz, Fernanda Gómez.

PRÓLOGO

Una mirada historiográfica sobre la modernización económica de Chile que cubra los treinta años transcurridos entre 1973 y 2003, no puede dejar ausente un asunto que nos parece fundamental. Si planteamos la existencia de una ‘revolución conservadora’ surgida de una variante extrema del liberalismo económico, lo que a primeras luces aparece como una contradicción o al menos una paradoja, debemos ser capaces de explicar aquello a partir de lo que existía antes.

Nuestra reflexión nos llevó a dividir la investigación en tres partes, que incluyen dos capítulos cada una. La primera está consagrada a la construcción de una genealogía del pensamiento liberal económico en Chile a lo largo de casi un siglo y medio de historia republicana. La segunda está centrada en las profundas transformaciones económicas realizadas durante el régimen militar al mando del general Augusto Pinochet (1973-1990) y sus consecuencias en el discurso económico contemporáneo. La tercera y última la hemos dedicado a explicar el surgimiento de una sociedad de mercado en Chile, la cual posee una nueva élite capitalista con todos los rasgos de una clase capitalista moderna, pero que, a su vez, conserva algunos rasgos aparentemente contradictorios, que se explican muy bien al conocer la historia reciente del país¹. Además de lo anterior, existe un elemento que cruza toda nuestra investigación. Se trata del rol ocupado por el economista y el discurso económico en el espacio público. Nuestra intención ha sido mostrar no solo la evolución de la disciplina económica en Chile, sino el rol creciente que ocupan los economistas. Ellos han llegado a transformarse en los íconos de una nueva imagen del país y en una de las profesiones más influyentes, pero también más cuestionadas al interior de la sociedad chilena.

Las transformaciones del liberalismo económico y de la economía política en Chile no siguieron los mismos rumbos que en el resto del continente, a pesar de poseer un legado histórico y cultural similar, fruto de la colonización española. Tampoco queremos insistir en una supuesta ‘excepcionalidad’ permanente de Chile, pero sí marcar claramente las diferencias que mantenemos con miradas historiográficas que no dan cuenta de las particularidades locales de nuestra historia continental y, que muchas veces, en una loable búsqueda de la comparación, caen en simplificaciones o generalidades que, más que aclarar,

dificultan la comprensión histórica. La sociedad chilena, debido a su pequeñez, aislamiento geográfico, estructura social y cierta homogeneidad de su élite dirigente, ha constituido un espacio propicio para diversas experiencias sociales e ideológicas, que incluso se acentuaron durante la segunda mitad del siglo XX. La historia del liberalismo económico en Chile es parte de este proceso y no está exenta de particularidades, y solo teniéndolas en cuenta resulta posible hacer una mejor historia comparada a nivel continental.

Notas al Prólogo

[¹ Nos referimos específicamente al extremo catolicismo conservador de su élite empresarial, que es al mismo tiempo radicalmente liberal en lo económico.](#)

INTRODUCCIÓN

En los primeros días de julio de 2004, el Senado de EE.UU. reveló que el general Augusto Pinochet (1915-2006) mantenía una gran suma de dinero no declarado en una cuenta del Banco Riggs. Posteriormente, se estableció que el ex dictador poseía no menos de ciento veinticinco cuentas bancarias en el extranjero por un valor superior a los ocho millones de dólares, utilizando además identidades falsas¹. Fuera del país, el episodio no resultó demasiado sorprendente, aunque al interior se rompía otro de los mitos fundadores de la transición democrática en Chile. Hasta entonces, la élite conservadora sostenía que las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el régimen militar representaban el precio —doloroso, pero inevitable— que el país había tenido que pagar por su modernización económica y el fin de los ‘experimentos socialistas’². Sin embargo, el hecho de que el general Pinochet se hubiese enriquecido ilegalmente resultó ser un shock insoportable para la mayoría de sus seguidores. El mito del militar austero que había abandonado el poder con las ‘manos limpias’ para dar paso a una transición democrática, se derrumbaba definitivamente³.

Nuestra interpretación de esta actitud se basa en la tesis de que la lealtad de la élite empresarial chilena para con el general Pinochet se sustentaba principalmente en el legado de su revolución capitalista. Finalmente, les pareció aceptable pagar el precio de abandonar políticamente al anciano ex dictador si la bases del modelo se mantenían intactas⁴. Este razonamiento pone de relieve uno de los elementos explicativos centrales del Chile de hoy. Aquí radica nuestro interés particular en la reciente modernización económica del país desde la perspectiva de la evolución de las ideas, especialmente el liberalismo económico, pero con una preocupación especial en los debates surgidos en torno a la Historia del Tiempo Presente (HTP).

El estudio del pasado reciente en América Latina se ha convertido en un tema central de la disciplina histórica durante la última década. El retorno a la democracia en la mayoría de los países del continente, desde mediados de la década de 1980, ha aumentado la demanda por el conocimiento del pasado reciente. Incluso, si este campo —a menudo controvertido— fue abordado inicialmente por sociólogos, politólogos y periodistas, solo recientemente se ha

convertido en un objeto y área de investigación preferencial para muchos historiadores, especialmente de la generación más joven. Como afirma Henry Rousso, el estudio de la historia del presente, invariablemente, implica un ejercicio introspectivo, según lo que Pierre Nora ha definido como la ego-historia, en que la experiencia del investigador se encuentra estrechamente relacionada (temporal e incluso emocionalmente) con el tema de investigación⁵.

Esta nueva problemática al interior del campo historiográfico, de acuerdo con Luc Capdevila⁶, da cuenta de un nuevo régimen de historicidad distinto al de la historia contemporánea, debido a la aparición de nuevos problemas relacionados específicamente con asuntos de nuestro tiempo⁷. En última instancia, la atención se centra en la presencia y la influencia del pasado sobre el presente, cuando implica la presencia del historiador no solo en calidad de testigo sino también, en ocasiones, como un actor. Otros historiadores como Frédérique Langue sostienen que, a través de la historia reciente, se plantea la cuestión de la recepción del acontecimiento incluso en el plano de las emociones y sensibilidades, lo que amplía el horizonte del campo de estudio al ámbito de las subjetividades, sin ningún tipo de discriminación⁸. Este argumento nos lleva finalmente a la conclusión de Paul Ricoeur, quien sostiene que la historia es una epistemología mixta, un entrelazamiento de objetividad y subjetividad⁹.

En Francia, los historiadores ‘del tiempo presente’¹⁰ surgieron de las problemáticas ligadas a los grandes conflictos mundiales, especialmente la Segunda Guerra Mundial y el episodio de la ocupación alemana (gobierno de Vichy) y sus profundas consecuencias posteriores¹¹. Ellos han sido los testigos de un pasado que se impone al presente según la lógica revelada por Henry Rousso y desarrollado por Gérard Noiriel, de un ‘pasado que no pasa’¹². En última instancia, la historia se construye sobre la base de una relación no siempre armónica entre la memoria y las huellas documentales (archivos)¹³. El historiador se ha convertido hoy en día en el receptor de una demanda social de memoria, reparación y justicia de parte de todos los actores políticos de la sociedad civil en general.

En América Latina, especialmente en el Cono Sur, la aparición de la Historia del Tiempo Presente está ligada a las transiciones democráticas y a la necesidad de renovar sobre los estudios en el trauma de la época de las dictaduras militares de los años 1970 y 1980¹⁴. Es precisamente a esta demanda que intenta dar respuesta nuestra investigación sobre la modernización económica emprendida en Chile entre 1973 y 2003, dentro de una mirada de largo plazo sobre la historia

del pensamiento liberal económico. En este contexto, asumimos también que se trata de un ‘pasado que no pasa’ a pesar de los reiterados intentos oficiales por cerrar el capítulo de la historia reciente chilena bajo el argumento de ‘pacificar los ánimos’, ‘reconciliar al país’ y establecer verdades históricas derivadas de comisiones de expertos sobre verdad y justicia. En tal sentido, el trabajo coordinado por Anne Perotin-Dumon denominado: *Historizar el pasado vivo en América Latina* nos muestra también hasta qué punto resulta difícil adentrarse en el pasado reciente de nuestros países. La complejidad de la tarea implica, muchas veces, la necesidad indispensable del trabajo interdisciplinario de sociólogos, antropólogos, abogados e historiadores¹⁵.

Los estudios recientes dedicados a los regímenes militares sudamericanos, han dado prioridad al tema de la represión política y el de la violación de los derechos humanos. En el caso de Chile, en particular, otros elementos relacionados con un tipo de violencia más sutil, pero no menos importante han sido efectivamente excluidos. Se trata de la violencia simbólica originada en las transformaciones económicas y la persistencia de este legado de la dictadura en el presente inmediato. Estas marcas de continuidad del pasado ejercen una influencia cotidiana en las personas y los afecta tanto como el trauma directo fruto de la violencia física. La diferencia es que ellas actúan en un período más prolongado de tiempo como representación del sentido común. Por lo tanto, la pregunta sobre cómo se ha instalado en Chile la lógica del mercado se extiende a lo largo de todo nuestro trabajo¹⁶.

La elección del tema de investigación comenzó a tomar forma durante la década de 1990, cuando Chile iniciaba su transición democrática. Fue durante estos años que el país fue descrito por varios países desarrollados, entre ellos Francia, como el ‘jaguar de Latinoamérica’, comparándolo con las economías emergentes del sudeste asiático. Este episodio, aparentemente anecdótico, dio lugar a otras preguntas que constituyen el tema central de nuestra investigación. En primer lugar, se trataba de entender cómo Chile transformó radicalmente su economía y sociedad en el espacio de tan solo treinta años. En segundo lugar, puso en duda la existencia de un vínculo entre el liberalismo económico —predominante en Chile desde mediados del siglo XIX— y el modelo económico de estilo neoclásico y monetarista impuesto en el país desde 1975. Finalmente, hemos optado por explicar los cambios que se produjeron en la sociedad chilena, desde mediados de 1970, en el contexto específico de una sociedad de mercado y liberalismo extremo. En este contexto, la aparición de una nueva élite y el papel que la figura del economista y la ciencia económica han tenido en Chile, desde

mediados de 1960, nos parecía fundamental. En este sentido, apoyamos la tesis de que el Chile de hoy no se explica sin esta transformación económica radical extendida en el tiempo y que constituye el principal legado de la dictadura militar del general Augusto Pinochet.

El marco de tiempo específico que hemos elegido se remonta a las primeras décadas del siglo XIX, y se concentra especialmente entre 1973 y 2003, es decir, a los treinta años transcurridos entre el establecimiento del gobierno militar (cuando se implantaron las reformas de libre mercado), y la consolidación del modelo económico en democracia tras la firma de tratados de libre comercio con la Unión Europea y los Estados Unidos. Estos dos últimos eventos marcan una suerte de ‘acreditación’ internacional de las reformas económicas llevadas a cabo en Chile desde la década de 1970, que en el momento de escribir este estudio, recibió un nuevo impulso con el ingreso del país en el grupo selecto de las naciones miembros de la OCDE¹⁷. El año 2003 marcó la trigésima conmemoración del golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Ello provocó una verdadera avalancha de libros, artículos, documentales y una controversia política sin precedente en el país. De hecho, se puso en entredicho la política de la transición democrática —asociada casi obsesivamente con la razón de Estado— basada en el silencio y el olvido. Fue así como asistimos a lo que Peter Winn diagnosticó como una ‘marea memorial’, donde el pasado se vuelve un tema central, obligando a los historiadores a ocuparse de un período que, hasta entonces y salvo contadas excepciones, habían evitado¹⁸.

Teniendo en cuenta estos diversos asuntos y problemas, es que sostenemos la existencia de una ‘revolución conservadora’ en Chile, fruto de una variante extrema del liberalismo económico que, si bien a primera vista parece una contradicción o por lo menos una paradoja, se impuso en el país antes que en los países anglosajones y evidentemente antes de la caída de los llamados socialismos reales¹⁹.

Notas a la Introducción

¹ A pesar de la muerte del general Pinochet en el 2006, la investigación continúa con su familia y sus colaboradores más cercanos. Los resultados preliminares han demostrado que el dinero provenía de comisiones por la venta de armas (legales e ilegales), así como el uso personal de los fondos destinados a la Presidencia de la República durante su mandato (1973-1989). Ver: “Cronología del Caso Riggs”, El Mundo, 03/01/2007, disponible en: <http://www.elmundo.es/elmundo/2005/11/23/internacional/1132769105.html> (consultado el 16/10/2009).

² En cuanto a las fuerzas de oposición, un lenguaje similar había aparecido. Si bien condena las violaciones de los derechos humanos, a su juicio, aún hoy, sostiene que las reformas económicas llevadas a cabo durante el régimen militar son políticamente rentables.

³ Macari, Mirko, “La dictadura era el terror, pero también la corrupción” (entrevista con el sociólogo Tomás Moulian), La Nación, 25/07/2004. T. Moulian: “Esto es solo la punta del iceberg, ya que Pinochet puede causar confusión en nuestra mente, puede parecer que él solo ha logrado acumular ocho millones de dólares, pero en realidad no. Pinochet pertenece a un grupo social que se ha enriquecido a través de la venta de empresas públicas, la privatización, y prebendas especiales. Los ocho millones son solo un accidente. Pinochet es otra cosa: que Chile se ha convertido en el lugar donde los empresarios son la principal fuerza social y, por tanto, estos ocho millones de dólares, yo los considero como una metáfora”.

⁴ Hasta ahora, el mundo conservador chileno se refiere al legado económico de la dictadura como la ‘obra del gobierno militar’ en un intento de separar el legado institucional de la persona del general Pinochet, de la Junta militar y el resto de

los civiles que participaron en este plan. Cáceres, Carlos, “Gobierno militar: La Herencia era la institucionalidad”, Revista Libertad y Desarrollo, N°. 133, agosto de 2003. Versión electrónica disponible en: <http://www.lyd.com/noticias/opiniones/gobierno.html> (consultado el 16/10/2009).

⁵ Rousso, Henry, “La Trayectoria del tiempo de un historiador actual, 1975-2000” por Perotin-Dumon, Anne, Historizar el pasado vivo en América Latina, <http://www.historizarelpasadovivo.cl> (consultado el 11/10/2009), y Nora, Pierre (Ed.), Ensayos sobre el ego-histoire, Gallimard, 1987.

⁶ Recomendamos la lectura de : Capdevila, Luc, “Le temps présent paraguayen”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Coloquios, 2007, <http://nuevomundo.revues.org/index3636.html> (consultado el 11/10/2009).

⁷ Se ha optado por privilegiar la definición del régimen de historicidad desarrollado por Patrick García: “La reflexión sobre la noción de regímenes de historicidad —es decir, el valor social asignado a cada uno de los tiempos (pasado/presente/futuro) —se desarrolló especialmente a partir de la década de 1980 para tratar de capturar la especificidad del tiempo presente en la mirada contemporánea del historiador. García, Patrick, «Les régimes d’historicité: un outil pour les historiens ? Une étude de cas: la «guerre des races», Revue d’histoire du XIXe siècle, 25 | 2002, [En ligne], mis en ligne le 07 mars 2008. URL: <http://rh19.revues.org/index418.html> (consultado el 15 de octubre 2009).

⁸ Langué, Frédérique, “L’histoire des sensibilités. Non-dit, mal dire ou envers de l’histoire? Regards croisés France-Amérique latine”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Coloquios, 2006, <http://nuevomundo.revues.org/index2031.html> (consultado el 11 de octubre de 2009).

⁹ Ricoeur, Paul, La Mémoire, l'histoire, l'oubli, París, Editions du Seuil, 2000.

¹⁰ Aconsejamos consultar la obra colectiva: IHTP (Ed.), Écrire l'histoire du temps présent, París, CNRS éditions, 1992.

¹¹ Rousso, Henry, Le syndrome de Vichy de 1944 à nos jours, París, Points Seuil, 1990.

¹² Conan, Éric & Rousso, Henry, Vichy, un passé qui ne passe pas, París, Folio, 1996.

¹³ Consultar: Ricoeur, Paul, “Histoire et mémoire: l'écriture de l'histoire et la représentation du passé”, Annales. Histoire, Sciences Sociales, n.55, julio 2000, pp. 731-747.

¹⁴ Ver en particular: Capdevila, Luc & Langue, Frédérique (Eds.), Entre mémoire collective et histoire officielle. L'histoire du temps présent en Amérique Latine, Rennes, PUR, Rennes, 2009.

¹⁵ Pérotin-Dumon, Anne, Historizar el pasado vivo en América Latina, disponible en: <http://www.historizarelpasadovivo.cl> (consultado el 15/10/2009).

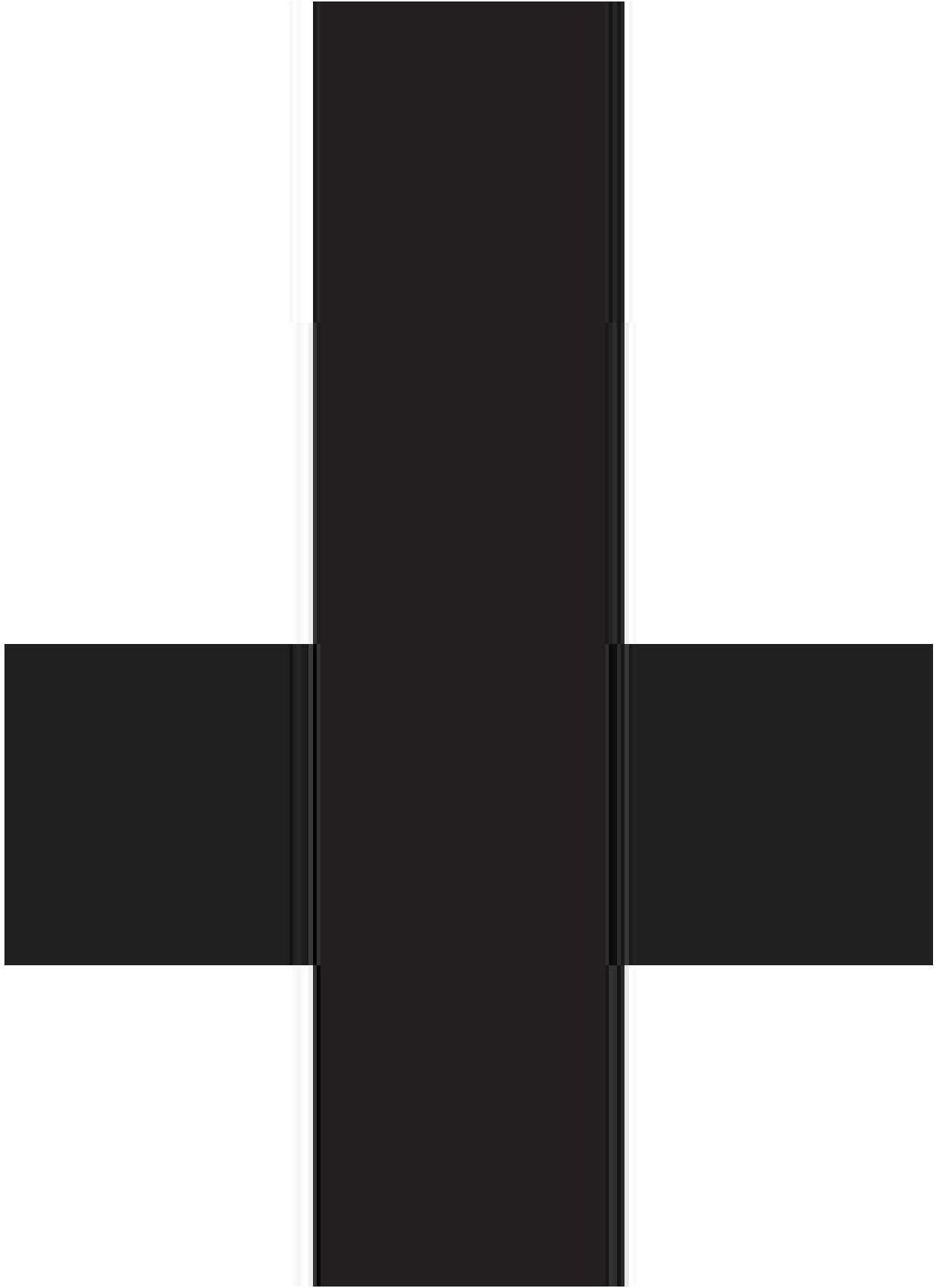
¹⁶ Waissbluth, Mario, “¿Necesitamos un nuevo Ladrillo?”, Qué Pasa, 27/05/2006; Couso, Javier, “Pinochet y el modelo económico”, El Mercurio, 05/01/2007.

¹⁷ Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Consultar: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN), “Ingreso a la OCDE: Chile a un paso de los países poderosos”, BCN, 29/06/2007. Disponible en: http://www.bcn.cl/carpeta_temas_profundidad/temas_profundidad.2007-07-25.4772415999 (consultado el 08/08/2009).

¹⁸ Winn, Peter, “The Past is Present: History and Memory in Contemporary Chile”, en *Historizar el pasado vivo en América latina*, disponible en: http://www.historizarelpasadovivo.cl/en_contenido_chile.html (consultado el 11/10/2009).

¹⁹ Respecto a la historia de la idea de mercado, aconsejamos la lectura de: Rosanvallon, Pierre, *Le capitalisme utopique. Histoire de l'idée de marché*, París, Seuil, 1999.

PRIMERA PARTE

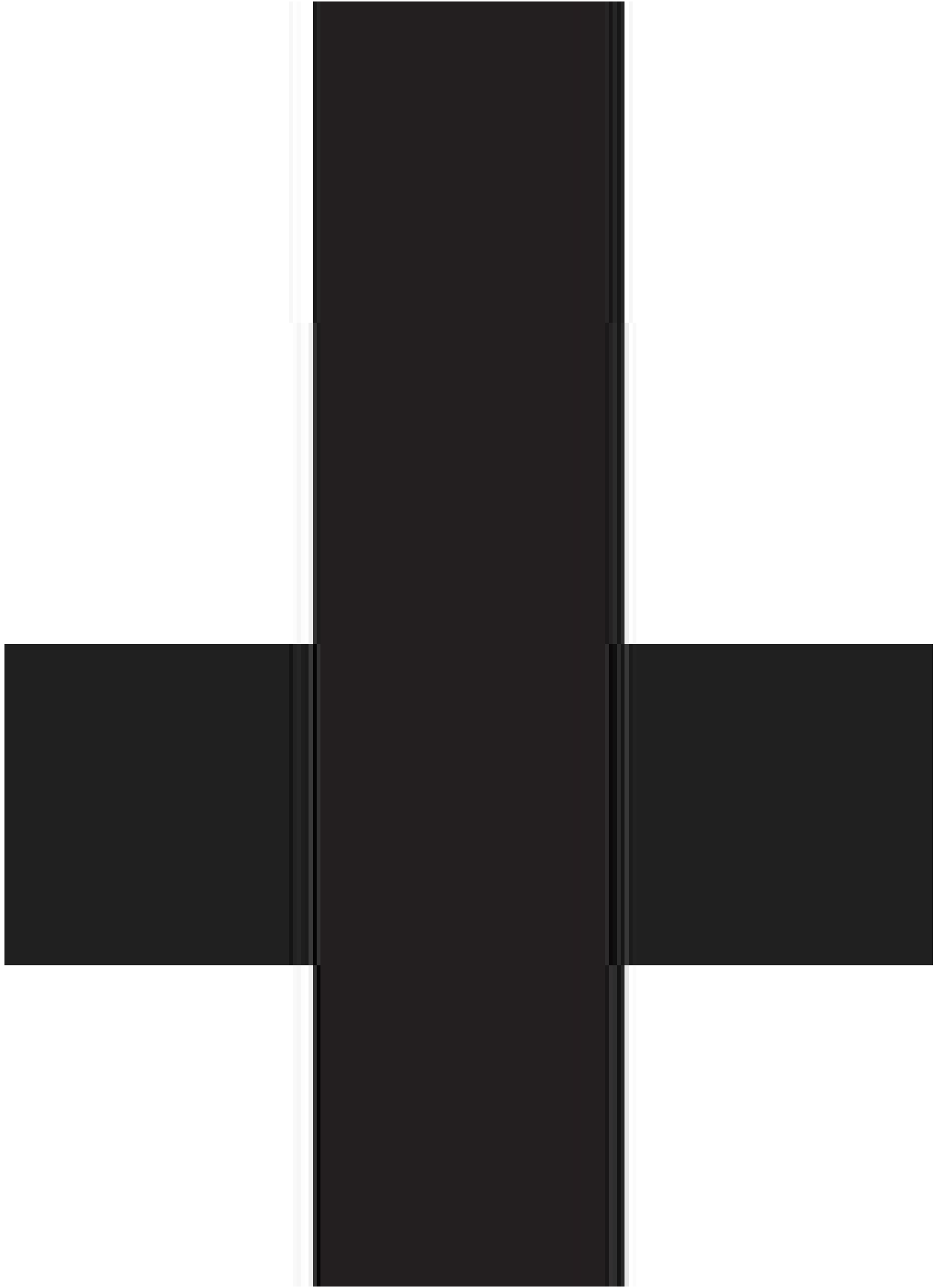


ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL LIBERALISMO ECONÓMICO EN
CHILE (1810-1970)



Calle Ahumada, esquina portal Fernández Concha, 1890. Fondo Medina.
Archivo fotográfico y digital, Biblioteca Nacional

CAPÍTULO I



LA ECONOMÍA CHILENA Y LOS TEÓRICOS DEL LAISSEZ-FAIRE

En política y en economía no concebimos ni estimamos otro sistema que el de la libertad, tan contrario a la protección, desigual a quien quiera que sea, como al régimen comunista o de arreglos de artificio... Reservamos nuestra adhesión sin reserva y nuestra entera consagración a la obra de la libertad ¹. Editorial de la Revista Económica de Valparaíso (1886)

Los precursores y la influencia de los teóricos liberales clásicos

Existe un consenso general en la historiografía chilena en torno al arribo de las ideas de la teoría clásica liberal económica al país hacia mediados del siglo XIX, específicamente tras la llegada del catedrático francés de economía política, Jean-Gustave Courcelle-Seneuil (1813-1892)². Justamente a él se le atribuye la enseñanza y difusión sistemática de la economía política entre la élite chilena a partir de 1855, momento de su llegada al país. No obstante lo anterior, diversos estudios llevados a cabo desde la década de 1960 han aportado una mirada distinta en torno a la cuestión de la teoría económica clásica y su circulación entre la élite de la nueva república, a partir de los primeros años de la República.

El ya clásico estudio de Robert M. Will³ sobre la introducción de la economía clásica en Chile, continúa siendo un referente ineludible en la materia. El autor discute la tesis donde se plantea que las obras de economistas liberales como Adam Smith, David Ricardo o Jean-Baptiste Say⁴ eran prácticamente desconocidas en Chile antes de la creación del curso de Economía Política en el Instituto Nacional por Courcelle-Seneuil, en 1856. Por el contrario, Will⁵ plantea que ya a inicios del siglo XIX existía un conocimiento de tales teorías por un pequeño grupo de chilenos, quienes habían tenido acceso a estas obras principalmente durante sus viajes a Europa o a través de las escasas traducciones al francés que se encontraban en algunas bibliotecas particulares de las ciudades de Santiago y Concepción.

A través de artículos publicados en periódicos de la época, nos ha sido posible detectar la circulación de estas ideas aplicadas a temas como el papel del gobierno en la economía, la importancia de la moneda y especialmente lo relacionado con las políticas en torno al uso de las tarifas aduaneras. Más que un desconocimiento teórico por parte de la élite criolla, lo que se aprecia es una cierta desconfianza respecto de la posibilidad de aplicar la teoría clásica en la naciente república. Las autoridades del período estaban convencidas de que aquello que funcionaba bien para las potencias europeas como Inglaterra y Francia no era necesariamente adecuado para una economía pequeña y débil como la chilena, si bien se podía estar de acuerdo con los principios generales y

el fondo de la teoría. En otras palabras, se trataba de mantener una posición pragmática aunque se compartieran en gran medida los principios del liberalismo clásico. Las doctrinas del laissez-faire y el librecambismo les parecían más acordes a sociedades más avanzadas y con un mayor nivel de industrialización. Se prefería aplicar un modelo de economía política que tomara en cuenta el estado del país y que permitiera alcanzar un mayor grado de desarrollo. Esta idea era aprobada incluso entre quienes defendían públicamente los principios de la teoría clásica.

La pregunta en cuanto a la desconfianza respecto de la aplicación de dicha teoría durante el primer período de vida republicana (1810-1860), es un asunto que aún permanece abierto en el campo historiográfico. Sin embargo, nos parece que una de las explicaciones más plausibles es aquella que plantea Will con respecto a la pervivencia y resistencia de las ideas neomercantilistas⁶ en el imaginario de la élite criolla, incluso entre aquellos que se ubicaban en el ala más liberal del espectro político de la época.

El neomercantilismo predominó en la España del siglo XVIII y fue aplicado en sus colonias americanas incluso décadas después de que estas se independizaran. Esta corriente de pensamiento reformador había influido fuertemente a las élites locales principalmente a través de la obra de autores como Pedro Rodríguez de Campomanes⁷, Bernardo Ward⁸ y José Campillo y Cosío⁹. Estos trabajos tuvieron una difusión mucho mayor en el continente americano que los de autores del liberalismo clásico como Adam Smith, cuya obra “La Riqueza de las Naciones” fue traducida al español recién en 1794, solo seis años después de la muerte del rey Carlos III.

En el contexto de las reformas borbónicas¹⁰, el impacto de estos tres autores en Hispanoamérica fue decisivo. Prueba de ello es que se encuentran numerosas referencias a sus obras tanto en los archivos nacionales de los diversos países latinoamericanos como en la prensa de la época. Es el caso de Manuel de Salas (1754-1841), uno de los intelectuales chilenos más importantes del período, quien refleja claramente la influencia de estos autores en su obra, especialmente tras su estadía en España entre 1777 y 1783. Esto, a pesar de que aún se lo suele clasificar como un liberal clásico. Su preferencia pragmática por el neomercantilismo quedó demostrada tras su paso como alto funcionario del Real Tribunal del Consulado de Santiago, desde donde trabajó por la protección de la industria local y la diseminación de nuevas técnicas industriales y de cultivo. Si bien abogó por una mayor libertad de comercio entre la colonia y España¹¹, en

ningún caso defendió el libre comercio al estilo inglés.

Para Salas, el Estado debía cumplir un papel central en la economía ayudando a las industrias, promoviendo la educación, utilizando las tarifas aduaneras y haciéndose cargo de los más desposeídos. No deja de llamar la atención que Salas, en 1813, hiciera mención a la necesidad de incorporar cursos de economía política en la educación de los jóvenes, sugiriendo para ello el estudio de las obras de economistas liberales como Jean-Baptiste Say, Adam Smith o el napolitano Antonio Genovesi.

Lo que parece ser claro durante los comienzos de la vida republicana chilena, es que en el ámbito educativo se prefirió una formación en los autores de la teoría clásica liberal, pero en la práctica aún primaba el peso de la doctrina neomercantilista. En efecto, el curso de economía política estaba originalmente incluido en el plan de estudios del Instituto Nacional de 1813, aunque este debió cerrar sus puertas a causa de la reconquista española¹². Cuando el Instituto reabrió finalmente sus puertas, en 1819, la enseñanza de la economía política se hizo obligatoria para todos los estudiantes de Derecho, especialmente a partir de la obra de Jean-Baptiste Say: *Traité d'Économie Politique*¹³, originalmente publicada en 1803. Es justamente a través de esta obra que las ideas de la teoría clásica comienzan a difundirse en Chile, a partir de la traducción española de Juan Sánchez Rivera, especialmente en su edición de 1821¹⁴.

Durante la década de 1820, se comienza a apreciar en la prensa y en los discursos públicos la aparición de argumentos basados en la obra de Say y otros economistas librecambistas. Periódicos como *El Telégrafo*¹⁵ ya abogaban por una reducción de los aranceles a la exportación de metales, contradiciendo uno de los pilares de la doctrina mercantilista, la acumulación de activos en metálico. Se insistía, al mismo tiempo, en garantizar el valor de la moneda y en la reducción de las tarifas arancelarias como método de combatir el contrabando. La discusión en torno a la política económica a seguir por la nueva nación se mantuvo de forma persistente entre los años 1820 y 1830, considerado hasta no hace mucho como un período de 'anarquía política'¹⁶, justamente cuando aparecen los primeros autores que defienden el librecambismo, aunque en un ambiente donde mayoritariamente predominaban las ideas neomercantilistas.

Es importante destacar que autores como Robert M. Will y Rafael Sagredo¹⁷ concuerdan en que no se debe forzar la influencia de las ideas liberales antes de 1818. Es claro que, por ejemplo, no se puede atribuir un principio librecambista

al Decreto de Libre Comercio de 1811, cuyo único objetivo fue romper el monopolio comercial con España y abrir el intercambio hacia otros países, y no, como se ha pretendido, establecer el libre comercio¹⁸ en tanto doctrina. En términos reales el decreto había liberado, por primera vez, los puertos a embarcaciones extranjeras y permitido el comercio directo con los mismos, pero incluyó un arancel de 30% a todas las importaciones y autorizó numerosas prohibiciones a toda importación que fuera considerada ‘dañina al desarrollo de la industria local’¹⁹. Desde el punto de vista práctico, se trató claramente de un documento que reivindicaba el proteccionismo pragmático neomercantilista y en ningún caso las ideas de Say, Smith o Ricardo.

Hacia 1820, un pequeño grupo de chilenos influyentes ya tenía conocimiento de los principios del liberalismo clásico gracias a la obra de Say y a la circulación de algunas copias de “La Riqueza de las Naciones” de Adam Smith. Sin embargo, estos notables no tuvieron el poder o la influencia suficiente para imponer estas ideas a nivel político y lograr una rebaja general tarifaria o terminar con el proteccionismo vigente desde 1811. Como ejemplo, durante el último año (1822) de la administración del Director Supremo Bernardo O’Higgins, el alza de aranceles alcanzó niveles nunca vistos para la época con el objetivo de favorecer la producción nacional.

La idea generalizada de que el país no podía abrirse al comercio en una posición de desventaja, primaba al interior de la élite criolla por sobre cualquier acuerdo teórico en cuanto a los beneficios del libre comercio. Ni Bernardo O’Higgins ni sus ministros, ni tampoco sus sucesores se inclinaron por la implantación de las nuevas ideas liberales en boga durante la década de 1820. Por el contrario, persistieron en la doctrina de la literatura neomercantilista, asociada con las actividades del Real Tribunal del Consulado y orientadas hacia la industrialización con la asistencia y apoyo directo del Estado. No solo se aplicaron aranceles, sino impuestos especiales para industrias de lino, cobre y otros productos hechos de materias primas nacionales. El énfasis apuntaba claramente hacia el fomento de la industria nacional. José Rodríguez Aldea, Ministro de Hacienda de O’Higgins entre 1820 y 1823, sostenía de manera pragmática que estaba de acuerdo en lo general con la doctrina de Smith sobre las tarifas aduaneras, pero consideraba que no era una política adecuada para el estado actual del país: ‘Somos todos liberales en todo aquello que no nos arruine’²⁰.

Uno de los chilenos con mayores conocimientos de economía clásica durante

este período, fue el clérigo Camilo Henríquez, creador del periódico independentista *La Aurora de Chile* (1812-1813). Su interés por la disciplina surgió durante su exilio en Buenos Aires (1814-1822). Allí conoció obras que no estaban disponibles en Chile ni tampoco en Lima (donde había sido encarcelado por difundir las obras de Voltaire y otros libros prohibidos). Estaba impresionado por el desarrollo de la economía política en Buenos Aires, aspecto que a sus ojos acentuaba el atraso que apreciaba en Chile, y admiraba la influencia de los economistas liberales en la política gubernamental del Río de la Plata. En 1822 escribió a Manuel de Salas: ‘Es sabido por experiencia que la economía política y la estadística son tan necesarias para el gobierno como lo son las matemáticas para la física’²¹.

Siendo un neomercantilista en sus comienzos, Henríquez vuelve al país convencido de la necesidad de implementar en Chile las ideas de la nueva economía de Smith y de los economistas clásicos ingleses. A comienzos de la década de 1820, creó el periódico de corta vida *El Mercurio de Chile* (1822-23), donde se entregaban constantemente consejos sobre finanzas públicas al gobierno. Entre otras propuestas, se insistía mucho en establecer un sistema de crédito público similar al inglés. Henríquez fue miembro del primer Congreso Nacional y de la Comisión del Tesoro; además, presentó uno de los primeros planes para establecer un banco, aunque sin sospechar la desconfianza que estas instituciones generaban entre los chilenos de la época. De hecho, el primer banco propiamente tal se estableció solo después de 1850.

Otro influyente chileno que también conocía la teoría clásica durante los primeros años de la Independencia, fue Diego José Benavente, sucesor de Rodríguez Aldea en el Ministerio de Hacienda. Fue editor del periódico *El Liberal*, para el cual redactó regularmente artículos sobre economía. Conocía bien tanto la obra de Adam Smith como la de otros autores franceses (Garnier y Ganilh). Como columnista fue crítico de la protección tarifaria, pero como ministro fue bastante tolerante con estas medidas. Creía que Chile necesitaba políticas especiales, distintas de aquellas que daban buenos resultados en los países más avanzados: “No es lo mismo una sociedad nueva con una tierra virgen, una población robusta que ha vivido durante tres generaciones en la ignorancia”²².

Benavente no solo estaba de acuerdo con las ideas de Smith respecto del rol del Estado en la economía, sino que creía que este debía fortalecerse. Para este autor, las tareas fundamentales de todo gobierno eran: (1) la defensa de la sociedad

contra la violencia interior y exterior, (2) el apoyo al culto público, (3) la administración de justicia, (4) la educación pública, (5) el control de las relaciones diplomáticas con las potencias extranjeras, (6) la mantención de los funcionarios públicos y (7) la recolección y administración de los ingresos fiscales. Siguiendo la lógica tributaria de Smith, Benavente propuso en 1824 que cada habitante contribuyera con sus tributos de acuerdo con su capacidad (lo que se denominaba en la época como impuesto sobre bienes inmuebles y propiedad tangible).

Probablemente el arribo en 1828 de José Joaquín de Mora, marcó una inflexión en el pensamiento liberal chileno, pues se trataba de alguien que había tenido una experiencia directa con los pensadores clásicos ingleses de los años 1820. Mora era un intelectual liberal, periodista, poeta y político peninsular. Expulsado de España por sus posturas liberales, se instaló en Londres hacia 1823. Fue justamente allí donde se puso en contacto y leyó a los más destacados autores de la economía política anglosajona. Fue invitado a Buenos Aires en 1827, llegando a Chile el año siguiente. Mora era un liberal sin ataduras. Creía que solo siguiendo la doctrina de Adam Smith los países de América alcanzarían el ansiado desarrollo. Insistió, como ya lo había hecho Camilo Henríquez, en la necesidad de contar con un sistema de crédito público para aumentar la productividad de la economía chilena. Para Mora, el acceso al crédito público ‘crea riqueza donde antes no existía’²³. Pero a su juicio ello solo funcionaba a condición de que el Estado fuera solvente y responsable en sus finanzas.

Mora fue invitado a Chile para intentar contrarrestar intelectual y políticamente el creciente poder del bando conservador. Sirvió durante la breve administración de Francisco Antonio Pinto (1828-1829) y fue el autor de la Constitución Liberal de 1828, además de ser nombrado como encargado oficial de estudiar la cuestión de la banca²⁴. La revolución de 1829, el triunfo militar del bando conservador y la llegada del Ministro Diego Portales al gobierno, pusieron un abrupto fin a sus actividades en Chile. Fue forzado a partir al exilio en 1831. Sin embargo, buena parte de su pensamiento económico quedó plasmado en las páginas de El Mercurio Chileno del año 1828.

En términos simples, Mora defendía los cuatro criterios básicos smithianos para la implantación de impuestos:

1. Se deben gravar los ingresos y no el capital (fuente de riqueza).
2. Debe distinguirse entre ingresos y entradas, descontando los costos y depreciaciones.
3. El impuesto solo lo pagan quienes se benefician del gobierno.
4. Los impuestos deben ser lo más bajos posibles para no desincentivar la producción.

Su creencia absoluta en el *laissez-faire* dejaba, no obstante, algunos espacios de ayuda o estímulos (rebajas impositivas) para aquellas industrias que no tenían mayor interés en establecerse en el país. Sin embargo, no estaba de acuerdo con el establecimiento de impuestos indirectos y su supuesta facilidad de recolección: “Es un problema menor para el rico y una gran carga para el pobre” (ponía como ejemplo el impuesto al té)²⁵.

Probablemente, no hay tema de la política económica que haya generado más debate en los años posteriores a la Independencia que el del libre comercio, y su idoneidad para un país en la condición de Chile. José Joaquín de Mora inicia esta discusión pública a partir de 1827 con un texto publicado en Buenos Aires²⁶: “la idea de obstruir las importaciones para dar un impulso a la industria nacional nos parece la más absurda de todas las ideas capaces de entrar en la mente de un economista”²⁷. Según Mora, estas medidas no beneficiaban a la nación sino a un pequeño grupo de productores protegidos de toda competencia, pues para la mayor parte de la población las tarifas significan mayores precios. Sin embargo, las ideas de Mora tuvieron poco eco en una sociedad marcada aún fuertemente por la doctrina neomercantilista.

A pesar de que ya se conocían las ideas de la teoría clásica liberal, primaba aún en la élite criolla de los primeros años de vida independiente una visión pragmática de un país que aún no estaba apto para establecer el libre comercio. Se sostenía que dicha política podría ser beneficiosa para países como Inglaterra o Francia pero no para un joven país como Chile. Para los pragmáticos, el proteccionismo se justificaba solo por el hecho de producir productos sin necesidad de gastar los valiosos metales necesarios para pagar tales importaciones, lo cual también constituía un resabio de la teoría neomercantilista del valor del dinero. Los proteccionistas de la década de 1820, y hasta 1850,

consideraban que un período inicial de tarifas aduaneras implicaba algunos sacrificios, entre los cuales se encontraban el alza de precios y una menor calidad de los productos, pero esto sería recompensado posteriormente con ganancias en el empleo, mejores salarios y un mayor nivel de riqueza.

En 1828, Mora apeló incluso a la ley natural para justificar el libre comercio y oponerse a los aranceles: “solo el Poder Supremo (Dios) tiene el derecho de intervenir en el libre movimiento de mercancías entre los países”²⁸. Consideraba que los aranceles debían ser bajos, de lo contrario disminuían el consumo y los ingresos del Estado. Además, su recaudación le parecía una tarea difícil, fuente de fraude y corrupción, aspecto que no asociaba al levantamiento de otros impuestos.

Todavía hacia fines de la década de 1840 se discutía en Chile sobre el libre comercio, pero la política proteccionista seguía primando. Una tesis de grado de 1847 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile²⁹, refutaba los beneficios del librecambismo y planteaba que la nación solo se desarrollaría gracias a un riguroso sistema de protección arancelaria. La tesis fue publicada en Anales de la Universidad de Chile y tenía por finalidad la objeción de los siguientes puntos de la teoría clásica sobre el libre comercio:

- 1) El libre comercio permite la acumulación de capital y el crecimiento de la población.
- 2) Mejora las relaciones internacionales y disminuye los riesgos de conflicto.
- 3) Una política proteccionista de un producto desestimula la producción de otro normalmente exportado.
- 4) El consumo creciente de productos importados estimula la producción de productos nacionales que se intercambian por los primeros.
- 5) Los aranceles no son un medio justo para aumentar el ingreso del gobierno.

Otro autor del período, Cristóbal Valdés, también se mostraba contrario a la doctrina del libre comercio, pues consideraba que “aquello que puede parecer

una estupidez para los países del Viejo Mundo (aranceles), puede ser interesante entre nosotros”³⁰. Creía que solo una política de aranceles altos sería capaz de establecer las factorías e industrias necesarias para alcanzar la prosperidad del país. Se citaba a Estados Unidos como ejemplo de un proteccionismo exitoso que favorecía un mercado interno industrializado. El mismo tipo de opiniones se escuchaba en el círculo cercano a los gobiernos conservadores de Joaquín Prieto (1831-1841) y Manuel Bulnes (1841-1851), lo cual se tradujo en la puesta en marcha de una nueva política arancelaria (Ordenanza de 1834). Este documento, a pesar de que liberaba numerosos productos, establecía aranceles ad valorem de más de un 35% en otros artículos importados según fuesen considerados más o menos ‘favorables’ a la economía del país. En cuanto a la política económica, el criterio pragmático neomercantilista seguía primando a pesar de la aceptación teórica del librecambismo.

Resulta interesante insistir en el hecho que la Economía Política se enseñaba en el Instituto Nacional de Chile desde 1820 como parte del currículum obligatorio de la carrera de Derecho y, por cierto, varias décadas antes que se estableciera como disciplina autónoma en las universidades anglosajonas. En 1827, veintiún estudiantes asistieron al curso de Economía Política del Instituto Nacional, y setenta en 1845. El curso impartido por esta institución tenía fama de ser muy básico y repetitivo antes de la llegada de Jean Gustave Courcelle-Seneuil (1855). En muchos casos, solo se trataba de repetir de memoria las lecciones del libro de Jean-Baptiste Say (*Traité d’Économie Politique*). Ya en 1848 el rector de la Universidad de Chile, Andrés Bello, se quejaba de no contar con un texto de economía política adecuado a la realidad chilena. Valdés criticaba que se siguiera usando el texto de Say, cuando existían otros mejores como el de Joseph Garnier (1813-1881), *Éléments d’Économie Politique*³¹, a su juicio más actualizado y adaptable a Chile. Dicho texto fue incorporado a la bibliografía del curso incluso antes de que Courcelle-Seneuil iniciara su labor académica en la Universidad de Chile.

Los libros de economía política se encontraban preferentemente en las bibliotecas privadas ya desde comienzos de la década de 1820. La biblioteca del Instituto Nacional poseía solo dos textos sobre la materia, y uno de ellos era el de Say. Según Robert M. Will, una de las bibliotecas particulares más completas era la del constitucionalista Mariano Egaña Fabres, que contaba, entre otras, con las obras de los economistas James Maitland Lauerdale, James Steuart, Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo, John Stuart Mill, Jean-Baptiste Say y Jean-Charles Sismondi. Entre quienes poseían dinero y eran capaces de leer el

francés, la circulación de estos auto-res fue relativamente frecuente. La mayor parte de estos libros estaban redactados en esta lengua, incluso en el caso de los economistas anglosajones anteriormente mencionados.

Aunque los nombres de Adam Smith y Jean-Baptiste Say eran bastante conocidos en Chile hacia 1819, existieron pocas oportunidades para la diseminación de las doctrinas clásicas en el país incluso después de la Independencia. Los libros y los periódicos sirvieron para la divulgación de estas ideas, pero no fueron sino tema de un pequeño círculo influyente hasta la llegada de Jean Gustave Courcelle-Seneuil en 1855. Aquellos que defendían el libre comercio y el laissez-faire se encontraban en una posición disidente respecto de la corriente principal de pensamiento económico. Por lo tanto, se puede decir que antes de 1860 los dos hombres que más hicieron por las ideas de la teoría clásica liberal fueron los ya mencionados Camilo Henríquez y José Joaquín de Mora³², quienes compartían el hecho de haberlas conocido fuera de Chile, y cuyo éxito fue bastante limitado.

La economía política clásica no fue una corriente de pensamiento dominante en Chile antes de 1856, y tampoco fue aceptada como política económica debido, al menos, a tres razones:

1)

Antes de Courcelle-Seneuil, la enseñanza de la teoría clásica no contó con una verdadera figura o maestro en Chile con suficiente elocuencia para cambiar la forma de pensar de los chilenos sobre el comercio y el papel del Estado en la economía.

2) Los medios de difusión eran inadecuados para generar una revolución del pensamiento económico o influir en quienes tomaban las decisiones políticas. Los libros eran escasos y mayoritariamente en lengua extranjera (francés). Los periódicos eran esporádicos, generalmente de corta vida y circulación restringida. La enseñanza del Instituto Nacional, basada únicamente en el texto de Say, era poco estimulante y orientada al aprendizaje memorístico. Con dificultad, se alcanzaban a dominar algunas nociones básicas sobre libre comercio y laissez-faire, dando la impresión de ser una doctrina inaplicable en Chile.

3) El tercer factor es la herencia del pasado y la persistencia de las ideas neomercantilistas, basadas en el proteccionismo, el apoyo a la industria local y la intervención del Estado.

Durante la primera mitad del siglo XIX, se encontraba muy enraizada la idea — influenciada por el neomercantilismo español— de que la teoría clásica no tenía un valor universal. Desde un punto de vista pragmático, la élite criolla la consideraba como algo relativo, como una guía a la acción política que podía ser modificada y adaptada a la situación (estado de desarrollo de la economía) de cada país. Este era el énfasis del pensamiento económico español tardío del siglo XVIII, orientado a la idea del desarrollo protegido, la educación y la mejora de las artes industriales, lo que atrajo a las élites chilenas emancipadas y contribuyó a la resistencia de este cuerpo de pensamiento proteccionista, bastante tiempo después de que las enseñanzas de los economistas clásicos fueran conocidas en Chile.

Política económica y consenso liberal

La historia económica de los primeros años de vida independiente de las nacientes repúblicas americanas, estuvo marcada, entre otras disputas³³, por el debate entre proteccionistas y libremercantistas. Sin embargo, consideramos importante destacar que limitar esta disputa a dos posiciones antagónicas irreductibles nos parece un error y una manera de simplificar la riqueza de una polémica bastante más compleja y llena de aristas. Como bien lo ha establecido Eduardo Cavieres³⁴ para el caso de Chile, no es posible establecer una relación directa entre conservadores-proteccionistas o liberaleslibremercantistas. Por el contrario, las ideas económicas circulaban de manera bastante más fluida entre la élite criolla chilena. Este rasgo aparece con más fuerza a partir de la década de 1830, denominada por la historiografía del ‘período conservador’ (1831-1860)³⁵, durante el cual se consolidan las instituciones políticas y se inicia así el primer ciclo de expansión económica, que se extenderá hasta la crisis mundial de la década de 1870.

Durante gran parte del siglo XIX, existió un consenso importante en lo económico a pesar de las diversas disputas culturales entre liberales, conservadores, laicos y clericales. En términos prácticos, la mayoría defendió, al menos teóricamente, el libremercantismo, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuando se produjo un retroceso de las posiciones tradicionalmente neomercantistas. Para Cavieres, lo anterior se explica por un sentimiento de clase ligado a intereses económicos que superan por mucho las disputas ideológicas en el plano de la cultura y los valores. Este autor hace incluso un paralelo respecto de lo que ha ocurrido en la sociedad chilena de fines del siglo XX y comienzos del XXI, donde predominaría una suerte de consenso elitista en torno a la democracia liberal y el crecimiento económico como fundamentos del desarrollo de la sociedad. Algo similar, al menos en el plano económico, predominaba entre la élite del siglo XIX chileno.

Lo anterior no significa, en ningún caso, que este consenso implicara una lectura ortodoxa de las teorías del libremercantismo y el *laissez-faire*. Por el contrario, lo que prevaleció fue un pragmatismo que reclamaba del Estado aquello que el

mercado no era capaz de proveer a la élite, especialmente en tiempos de crisis. Ello se explica durante un período (1818-1924) donde el Estado y los intereses de aquellos grupos que lo controlaban no se diferenciaban mayormente. Esta característica de la sociedad chilena se mantuvo estable hasta la segunda mitad del siglo XX, momento en que nuevos sectores sociales presionaron para participar de la política y de las decisiones gubernamentales.

A pesar de este consenso económico, las élites presionaron por una mayor intervención del Estado: se esperaba que este asumiera los costos de la modernización al regular las actividades privadas e incluso que participara como inversionista en actividades productivas. El estado liberal respetaba la independencia de estos sectores en términos de sus utilidades, pero podía ser — al mismo tiempo— el mejor socio para reducir sus costos de producción y eventualmente cargar con las pérdidas de sus ejercicios. Es lo que en la actualidad se denomina como ‘subsidio a la oferta’.

A mediados del siglo XIX, se establece un plan de obras de infraestructura, que finalmente financió mayoritariamente el fisco, aumentando de paso el endeudamiento externo del país con la banca londinense. Incluso, durante la crisis de 1873-79, los diferentes grupos empresariales presionaron al gobierno para obtener concesiones y beneficios particulares, fortaleciendo con ello al Estado y su capacidad reguladora. Durante todo este período se produjo un debate constante respecto de impuestos y la necesidad del Estado de aumentar su injerencia en la educación. Para la mayor parte de los empresarios de la época, los temas sanitarios y de educación debían ser financiados por el Estado, pues aquello les ahorra costos en la mantención de la mano de obra. Al Estado se le exigía además una mayor cobertura administrativa y de justicia, pero al mismo tiempo se abogaba por evitar las alzas impositivas. En otras palabras, en pleno período del liberalismo decimonónico, el aparato estatal no disminuyó, sino que, por el contrario, comenzó a desarrollarse fuertemente. Este aumento de la presencia social estatal alteró significativamente la estructura social del país, lo cual quedó de manifiesto en la década de 1920.

Eduardo Cavierres establece una periodización en cuatro etapas para explicar el modelo económico liberal chileno entre 1840 y 1930:

1840-1860: Se aprecia un débil pero positivo crecimiento económico. El régimen político es de tipo conservador, aunque se aplica una liberalización arancelaria a pesar del discurso proteccionista.

1860-1873: Se produce un importante crecimiento económico como producto de la integración del país a la economía mundial, principalmente gracias a la venta de minerales (oro, plata y cobre) y granos. El debate económico gira en torno a una mayor liberalización comercial y al tipo de ordenamiento tributario que requiere el país. Este período coincide con la expansión del comercio exterior, la europeización de la élite y el refinamiento de los grupos dirigentes.

1873-1920: Se aprecian subperíodos fluctuantes de crecimiento económico. Hay debate constante e infructuoso entre librecambistas y proteccionistas. Se trata de un período marcado por la economía del salitre y la Guerra Civil de 1891. Es el momento donde surgen los primeros conflictos sociales ligados a la estructura de producción capitalista. El aporte tributario no viene del empresariado local, sino que principalmente del impuesto de venta del salitre que pagan las compañías extranjeras.

1920-1930: Comienzo de las regulaciones estatales, creación del Banco Central, adopción de medidas proteccionistas y replanteamiento de la tributación interna.

Entre 1840 y 1930, lo que existe es una base de liberalismo económico compartido, aunque temperado por corrientes proteccionistas e intervencionistas. Sin embargo, en lo que prácticamente toda la élite está de acuerdo es en la estructura del sistema capitalista. De hecho no se lo cuestiona, pues —a nuestro entender— se lo consideró como una cuestión propia del sentido común. Es por ello que se permiten las desviaciones proteccionistas, en tanto no existe aún un modelo alternativo (como lo será posteriormente la doctrina marxista) que obligue a una defensa ideológica, como ocurrirá con posterioridad a la Primera Guerra Mundial y la creación de la Unión Soviética. Más fuerte que la teoría económica del liberalismo clásico, lo que predomina es la fuerza de las

tradiciones mercantiles y la idea de que el crecimiento económico es un elemento más de una tarea civilizadora de ‘propagación de las luces’³⁶. Ese peso de las tradiciones y la adecuación a lo que se comprende en la época como ‘tarea civilizadora’ es lo que da cuerpo al sentido común con el que se aborda el tema. Se configura así una tensión permanente entre el manejo pragmático de la economía y una confianza casi ciega en el progreso, confiando en que los errores se corregirán durante el camino hacia el ansiado desarrollo.

Bajo esta perspectiva de análisis, la importancia que generalmente se le ha otorgado a la teoría económica y a su difusión por parte de Jean Gustave Courcelle-Seneuil a partir de 1856, resulta a lo menos discutible³⁷.

El liberalismo decimonónico chileno habría necesitado menos de tratados teóricos sobre economía, que de códigos comerciales y de costumbres librecambistas. El modelo a seguir por las casas comerciales locales estuvo principalmente influenciado por la práctica comercial inglesa³⁸, sobre todo en lo referente al sector exportadorimportador. El modelo de las grandes potencias europeas dio impulso al desarrollo de nuevas actividades financieras, aseguradoras y de intermediación. De esta manera, se fue modernizando el liberalismo independientemente de las disputas teóricas que se daban en Europa o América Latina. El acomodo a los mercados externos es el detonante de muchos de los cambios, más que profundas convicciones personales en lo referente a la doctrina económica. En tal sentido, la política monetaria³⁹ aplicada durante la segunda mitad del siglo XIX es un claro ejemplo de los vaivenes acomodaticios de los grupos dirigentes chilenos.

El liberalismo chileno del s. XIX y, a lo menos, hasta mediados de la década de 1920, ha sido denominado como un liberalismo ortodoxo, de muy poca participación del Estado en los ámbitos de la vida privada y de las relaciones económicas. Un liberalismo del laissez-faire observable especialmente en términos de una legislación social o, más particularmente, de una legislación laboral. Efectivamente, no hubo legislación social en una economía que todavía distaba de ser moderna y en donde las relaciones y nuevas estructuraciones sociales recién comenzaban a configurarse en un nuevo sistema de clases. No obstante, el problema va mucho más allá. Es, en definitiva, el de las inconsistencias entre los principios doctrinarios y el análisis de los comportamientos económicos⁴⁰.

En términos generales, así como ocurre en toda América Latina durante el siglo XIX y al menos hasta la primera década del siglo XX, el debate en torno al liberalismo es mucho más fuerte respecto de los temas valóricos e institucionales que respecto de la posibilidad de instaurar cambios concretos en las relaciones económicas y sociales. El debate económico pareció seguir un carril paralelo al debate de las ideas sobre la política y la sociedad. Dentro de esta perspectiva, el Estado jugó principalmente un papel de defensor del statu quo y de las rentas productivas de los grupos dirigentes. Las discusiones entre proteccionistas y librecambistas o posteriormente entre oreros y papeleros⁴¹, no ponían en duda el carácter capitalista del Estado y de la economía chilena. Hoy en día diríamos que eran discusiones al interior del modelo, pero no discusiones sobre el modelo. El problema era que las realidades económicas del Chile decimonónico no coincidían con los planteamientos rígidos de la teoría clásica y daban pie a un pragmatismo heterodoxo.

Si se mira la realidad política y económica del país se observa que la Constitución conservadora de 1833 funciona en paralelo con una política aduanera pragmática que es aún proteccionista en sus principios, pero ya liberal en la práctica⁴².

El ánimo civilizador de los grupos dirigentes chilenos los llevó a imponer una modernización de las prácticas culturales a través del Estado (educación, leyes laicas, cementerios), entidad que al mismo tiempo era el principal enemigo teórico del liberalismo europeo. La paradoja es que se trataba de una sociedad que avanzaba hacia el liberalismo respecto de lo que había sido el período 1830-1860, pero que igualmente alentaba el crecimiento de un Estado cuyo control después reclamarían otros grupos sociales durante el siglo XX. Según Cavieres, la gran diferencia con la liberalización post 1973 fue justamente que aquella del siglo XIX tenía un anclaje cultural y valórico (ilustrado) mucho mayor, mientras que la segunda estuvo centrada casi exclusivamente en lo económico y técnico.

La evolución económica de Chile durante el siglo XIX da cuenta de un liberalismo práctico, fruto de una economía pequeña e inserta en la red del

comercio internacional decimonónico. A partir de la segunda mitad del siglo, se aceptó el librecambio sin hacer demasiado hincapié en sus aspectos doctrinarios a pesar de la instauración de una cátedra formal de Economía Política en la Universidad de Chile a cargo de Jean Gustave Courcelle-Seneuil. El Estado requería impuestos y los productores mineros y agrícolas mercados para vender sus productos. La inserción de la economía en el espacio atlántico generó importantes lazos con Europa y especialmente con Inglaterra. Esto influyó mucho más en la adopción de mecanismos modernos económicos liberales que la doctrina en sí. Se puede decir entonces, que la ruta del liberalismo económico chileno del siglo XIX se recorrió por las costas, los puertos, más que a través de los senderos de la academia, la política y la discusión pública.

Coincidimos con Cavieres en que el Estado liberal que se construye desde el siglo XIX y que se extiende durante dos décadas del siglo XX, se basa en la mantención del Estado patrimonial colonial y de un sistema democrático que cada vez incorpora a más individuos, pero que no forma ciudadanos activos e integrados equitativamente en el concierto social del país.

Desde la reorganización de los sistemas monetarios, de medidas y pesos, pasando por la legislación sobre sociedades anónimas, bancos, Código de Comercio, hasta la redefinición de los derechos de propiedad con una gran connotación en el sector minero de fines de siglo, el liberalismo del siglo XIX fue mucho más libertad económica que igualdades políticas. Sin embargo, desde esa propia búsqueda de libertad económica, desde las mayores complejidades alcanzadas en el manejo oficial de la economía, desde las debilidades del sistema para competir externamente y desde la competencia entre intereses sectoriales respecto a la obtención de garantías por parte del Estado, surge el nuevo liberalismo que se venía anunciando desde comienzos del siglo XX: liberal en lo doctrinario, limitado en lo político, proteccionista en lo productivo⁴³.

Las limitaciones de la economía chilena durante el siglo XIX no impidieron que esta se incorporara plenamente al circuito capitalista del comercio internacional. No obstante, la pregunta por el limitado desarrollo industrial chileno en los inicios del siglo XX ha permanecido como una constante en la literatura económica y en la historiografía respecto del período.

En la actualidad, existe un relativo consenso entre los historiadores respecto de la crítica a la teoría estructuralista⁴⁴ sobre las causas de este fenómeno. Desde los años 1980, los estudios sobre la economía chilena del siglo XIX han puesto de manifiesto la necesidad de evitar las visiones simplistas que la ubican únicamente como una economía periférica y dependiente de los centros económicos mundiales, presuntamente coludidos con unas élites locales desinteresadas por la industrialización interna y más preocupadas de cuidar sus parcelas de poder y absorbidas por el consumo de artículos de lujo y la cultura europea. Si bien algo de esta caricatura existe, prima actualmente una versión más problematizada y contrastada sobre el período, especialmente durante los años que dan origen a lo que se ha denominado como ‘el ciclo salitrero’ (1879-1930).

Liberalismo y librecambismo: la llegada del primer Money Doctor

45

Si bien establecimos que las ideas de la teoría económica clásica ya se conocían en Chile desde las primeras décadas del siglo XIX, el verdadero impulso al estudio y difusión de esta corriente solo se produjo a partir de la década de 1850 con la llegada a Chile de Jean Gustave Courcelle-Seneuil⁴⁶. El gobierno del Presidente Manuel Montt había decidido invitar a este economista y profesor francés para establecer definitivamente en Chile la cátedra de Economía Política en el Instituto Nacional y en la Universidad de Chile.

La misión tenía una duración inicial de cinco años e incluía también el cargo de consultor técnico del Ministerio de Hacienda. Fue el General Manuel Blanco Encalada, ministro plenipotenciario del gobierno de Chile en París, quien lo contactó a fines de 1854 para venir al país⁴⁷. La llegada del economista francés coincidió con la creciente influencia de las casas comerciales inglesas en la economía chilena⁴⁸, fenómeno que sucedía al mismo tiempo que el predominio internacional del librecambismo británico. En tal sentido, el gobierno de Chile necesitaba de un apoyo teórico y técnico que permitiera aplicar tales ideas y discutir las a nivel académico.

Algunos elementos fundamentales del pensamiento económico de Jean Gustave Courcelle-Seneuil

La Economía Política

Jean Gustave Courcelle-Seneuil⁴⁹ era conocido por sus posturas liberales democráticas. En política era considerado un republicano adscrito a la escuela de Tocqueville y Laboulaye. Había sido tanto enemigo de la restauración borbónica como de las diferentes formas de autoritarismo que se habían aplicado en Europa desde el fin de la Revolución Francesa y creía que el bienestar y la justicia solo podían llegar en un régimen de la más amplia libertad política y económica.

Courcelle-Seneuil escribió sus primeras obras en el momento en que el librecambismo triunfaba en Europa gracias a la propaganda de la denominada Escuela de Manchester⁵⁰. En lo doctrinario, se oponía a los economistas de la Escuela Histórica Alemana y al método inductivo, pues abogaba por un conjunto de leyes universales que regían la ciencia económica. Courcelle-Seneuil concebía la Economía Política como una rama de una ciencia social única, cuyo objeto es determinar el estudio del ‘estado de la riqueza’. Como ciencia determinaba las causas de su acrecentamiento o disminución y, como arte, señalaba los medios de aumentarla. En tal sentido, la Economía Política solo debía guiar la actividad económica sin atentar la libertad de los individuos y de la sociedad, dejando a la moral y a la política las consideraciones sobre lo justo y lo adecuado. En síntesis, las bases de la ciencia social económica propuesta por Courcelle-Seneuil —en consonancia con la teoría clásica— se resumen en el siguiente principio:

La leyes de la producción y del consumo, que resultan de la relación entre el hombre y la naturaleza, son absolutas e independientes. En cambio, las formas de la distribución pueden modificarse de acuerdo con el tiempo, el lugar y la

voluntad humana. Una vez determinado aquel conjunto de principios invariables, se tendría un punto de partida para todos los sistemas económicos y un criterio con que apreciar su valor⁵¹.

Su discípulo y amigo Diego Barros Arana definía de esta forma la visión de Courcelle-Seneuil al momento de escribir su obituario en 1892:

El señor Courcelle-Seneuil buscaba en los fenómenos económicos i sociales, i en su gradual transformación por efecto de los progresos de la civilización, el origen de la evolución de las leyes civiles, que los jóvenes se habían habituado a creer inherentes a todos los tiempos i a todos los países. Para presentar sus ejemplos, utilizaba hábilmente su asombrosa ilustración en historia, en jeografía i en tecnología, esplicando con frecuencia en la forma más elemental i sumaria los procedimientos industriales, las maravillas operadas por el comercio, i las inmensas dificultades que ha tenido que vencer para abrirse vías del comunicación i para acercar artificialmente todos los países de la tierra⁵².

En cuanto a la distribución de la riqueza, Courcelle-Seneuil reconocía dos sistemas: el de la autoridad y el de la libertad. Solo del segundo, a partir de los intereses particulares, surgen las ‘leyes invariables’ de la distribución. Ello se pierde bajo el imperio de la autoridad y los reglamentos, por lo que el estudio de la moneda, los intercambios, el crédito, el capital, los salarios y los costos de producción, toman sentido únicamente en un estado de libertad. Si bien reconocía los inconvenientes principales de un sistema económico libertario: pobreza, desigualdad, crisis, quiebras, postulaba que aun así el individuo aceptaba esta suerte con resignación, pues no surge de una autoridad arbitraria, sino de aquello que él denominaba ‘la naturaleza de las cosas’.

En su concepto, la leyes económicas tienen un carácter universal y permanente. Dependen de la naturaleza de la mate-ria y del hombre... que no cambia⁵³.

A diferencia de buena parte de los defensores de la teoría clásica y del liberalismo en general, Courcelle-Seneuil rechazaba la concepción absoluta e inviolable de la propiedad privada como una cuestión fundada en la religión o el derecho natural. A su juicio ella era el resultado de simples convenciones sociales que tienen como objetivo hacer más eficaz la fuerza creadora del trabajo.

Libertad bancaria

Uno de los temas a los que más dedicó tiempo Courcelle-Seneuil, fue al de la libertad bancaria. A su juicio, solo el régimen de libertad absoluta para los bancos permitía generar un sistema financiero moderno y eficaz, incluso permitiéndoles la emisión de billetes sin limitaciones previas. Hasta ese momento, tanto liberales como conservadores pensaban que la emisión de moneda era un asunto de soberanía nacional —propia del gobierno— que no debía dejarse al libre arbitrio de los particulares. Es por ello que la teoría del economista chocaba con una fuerte tradición arraigada en la clase política chilena. A juicio del francés, los bancos libres ejercían una vigilancia mutua, y las emisiones irresponsables de billetes serían rechazadas por los otros bancos, haciendo totalmente innecesaria cualquier intervención de la autoridad. Reconocía de todos modos que en un país joven como Chile era necesario algún tipo de restricción temporal a la completa libertad bancaria.

El economista francés se opuso con fuerza a la idea de la creación un banco estatal de crédito, tema que había surgido regularmente en el debate público desde los años de la independencia. Sin embargo, como se dijo anteriormente, la élite política y comercial chilena se había resistido a la creación de bancos comerciales en el país⁵⁴. Esto solo comienza a cambiar a partir de 1850, cuando aparecen los primeros defensores de la emisión de billetes. Estos ya circulaban de manera no oficial a través de vales de algunas de las principales casas comerciales chilenas y extranjeras⁵⁵ avecindadas en el puerto de Valparaíso. Hasta la llegada de Courcelle-Seneuil, predominaba en Chile la doctrina del economista J. B. Say, quien aceptaba —al menos en principio— la regulación estatal de la emisión de billetes bancarios. Por el contrario, Courcelle-Seneuil rechazaba toda intervención de la autoridad en la materia, defendiendo a ultranza el principio de la libertad bancaria. Según su punto de vista, dicho modelo había dado muy buenos resultados para el comercio europeo y norteamericano, por lo

que no podía ser perjudicial para Chile.

Respecto del actuar de los bancos, para el economista francés no cabía ninguna restricción a la emisión de billetes, pues estos reemplazaban a la moneda y estaban limitados por las necesidades del mercado.

El abuso en las emisiones era imposible mientras los billetes fueran pagados a la vista y al portador y su aceptación no fuese obligatoria. Solo convenía asegurar la responsabilidad del banco mediante la posesión de un capital propio. Conseguido esto, ninguna institución podía hacer emisiones excesivas ni realizar malas operaciones sin provocar su ruina⁵⁶.

Si los bancos operaban en un entorno de libre competencia, la emisión de billetes se repartiría en forma natural entre un número mayor de bancos, aumentando así su garantía. Si hubiesen casos de mala administración, quebrarían los bancos deficitarios o sus acreedores, pero sobrevivirían aquellos bien administrados. La simpleza del argumento de Courcelle-Seneuil era la consecuencia general de su creencia en lo que denominaba la 'ley general del comercio'. Si bien comprendía los perjuicios que una quiebra bancaria generaría en los hábitos comerciales, el encarecimiento del crédito e incluso en la ruina de los particulares, ello no era más que el cumplimiento del principio universal de dicha ley natural.

Finalmente, la ley de bancos de 1860 se inspiró fundamentalmente en los principios defendidos por Courcelle-Seneuil. Ello ocurrió tanto a nivel del poder ejecutivo como entre sus defensores al interior del poder legislativo. En el Congreso Nacional, había triunfado la idea de que en materia bancaria debía permitirse una libertad absoluta, únicamente restringida a la publicidad de sus operaciones. Esta era la postura de un grupo mayoritario de parlamentarios hacia 1859, entre quienes destacaba el diputado Maximiano Errázuriz.

(...) cualquier individuo puede establecer un Banco, recibir depósitos, circular billetes, etc.; se le deja una completa libertad de acción y solo se le exige publicidad. No le pone trabas ni le priva de ciertas operaciones como el artículo 21 del proyecto del Gobierno y otros que no se justifican, y a los cuales no se les

ve objeto⁵⁷.

No obstante lo anterior, el proyecto de ley aprobado el 23 de julio de 1860 incluyó algunas mínimas restricciones al ejercicio de la actividad. Se introdujo la inspección, por parte del Ministerio de Hacienda, del capital inicial y se definió la existencia obligatoria de estatutos para los nuevos bancos. Mensualmente las instituciones financieras debían entregar un balance de sus operaciones al gobierno, quien pondría agentes especiales a cargo del registro de los libros contables y las carteras de los bancos. Por último, la emisión de billetes quedaba limitada al 150% del capital efectivo de cada institución.

De acuerdo al análisis de Leonardo Fuentealba Hernández, la Ley de Bancos de 1860 estaba imbuida de un espíritu incontestablemente liberal. Fuera de la restricción a la emisión y al valor de los billetes, no contenía prohibiciones efectivas y la vigilancia del gobierno no tuvo en la práctica ninguna eficacia en el control de las actividades bancarias entre 1860 y 1925. A su juicio, la ley de 1860 no consultaba sino el interés de los accionistas y directores de tales instituciones.

(...) se basaba en la creencia de que el talento y la probidad de estos últimos constituía garantía suficiente de un severo régimen administrativo. Se abandonaba al criterio y buena fe de los banqueros la seguridad de los capitales del público, el cumplimiento de sus obligaciones y la suerte misma de las instituciones bancarias.

Leonardo Fuentealba incluso responsabiliza a esta ley, inspirada en los principios de Courcelle-Seneuil, de los efectos desastrosos de las crisis bancarias de 1865, 1878 y 1898, que obligó al gobierno a decretar el curso forzoso del papel moneda. En su opinión, los excesos de la banca privada habrían sido la principal causa de que el gobierno decidiera, en 1898, reservar únicamente al Estado el derecho de emisión de dinero⁵⁸. En términos generales, y salvo algunas pequeñas modificaciones, la ley de 1860 tuvo vigencia hasta la reforma monetaria y bancaria de 1925.

Libre comercio

Otro de los asuntos que apasionaban a Courcelle-Seneuil era el del proteccionismo y el libre comercio. Este se opuso tenazmente al argumento del déficit de la balanza comercial como justificativo a la implantación de barreras arancelarias, pues consideraba que este era superado por la nueva ciencia económica que tanto defendía. Consideraba cualquier tipo de protección discriminatoria a la producción nacional como contraproducente para el conjunto de la economía, pues significaba subvencionar a los productores nacionales en perjuicio del consumidor. A su parecer, los productos importados dentro de un régimen de libre comercio no tenían necesariamente que ser más caros. En tal sentido, aplicaba una máxima económica propia al librecambismo que todavía hoy en día es defendida por los economistas neoclásicos: no existe distinción alguna entre la ley que rige los intercambios internacionales y la que reglamenta las relaciones entre los particulares. En lo relativo a la intervención gubernamental, Leonardo Fuentealba resume muy bien la visión del economista francés:

(la intervención del gobierno)... solo se justifica en un pueblo de escasa evolución económica, pero allí donde reina el espíritu de empresa y el amor al trabajo su acción es siempre inútil y a menudo desastrosa. El Estado solo debe contribuir a la difusión de la enseñanza. En la vida económica su mejor política es la 'dejar hacer'. Partidario convencido de la doctrina librecambista, Courcelle-Seneuil considera que sobre todos los obstáculos solo 'importa marchar hacia el fin que es la libertad'⁵⁹.

La enseñanza de la economía

El primer curso de Economía Política dictado por Courcelle-Seneuil se inició en 1856, siendo postergado durante los años 1858 y 1859, cuando el académico formó parte de la delegación chilena que tuvo por misión conseguir un préstamo en Europa para la construcción y puesta en marcha de líneas de ferrocarril. El curso se reanudó en 1860 con un programa vinculado estrechamente al texto del

mismo profesor: Tratado teórico y práctico de economía política⁶⁰. Según el historiador liberal y alumno de Courcelle-Seneuil, Diego Barros Arana⁶¹, en el curso se enseñaba la Economía Política como una “ciencia exacta, positiva en sus principios fundamentales, positiva en la manifestación de los hechos y fenómenos económicos, y positiva en las consecuencias que de ellos se derivan”. Al tratar los problemas de la banca, de la riqueza, de la libertad o de la autoridad, nunca dejaba de insistir en los beneficios de un régimen de libertad, según el cual estas materias debían ser dejadas al ‘libre juego de las leyes naturales’. Al Estado solo le correspondía ‘dejar hacer’.

La influencia del economista francés en toda una generación de hombres públicos de la segunda mitad del siglo XIX⁶², no fue menor, y así lo atestigua la siguiente frase de uno de sus discípulos más aventajados y heredero de la cátedra de Economía Política en la Universidad de Chile, Zorobabel Rodríguez⁶³:

...dando un amplio desarrollo a la enseñanza teórica y práctica del ramo, y más que todo, tratando, y no en vano, de infundir en sus alumnos —entre los cuales tuvimos el honor de contarnos— el espíritu científicamente liberal y de la ciencia, la convicción de su utilidad inmensa y el celo ardiente y desinteresado por la propagación de sus hermosas y benéficas doctrinas debe ser considerado, por lo tanto, como el fundador de la enseñanza de la Economía Política en Chile y como el primer autorizado intérprete con que esas doctrinas han contado en las aulas de nuestra Universidad⁶⁴.

El peso intelectual de Courcelle-Seneuil no solo se dejó sentir en la Universidad a través de sus cursos; destaca especialmente en su labor como asesor técnico del Ministerio de Hacienda y como asiduo polemista en la prensa de la época. El economista francés escribió sobre los más diversos temas de la realidad nacional de fines de la década de 1850 e inicios de los años 1860, teniendo una especial sensibilidad por aquellos asuntos que se relacionaban con la política económica⁶⁵. La política aduanera de Chile fue uno de ellos: su opinión influyó directamente en la legislación del 31 de octubre de 1864, que estableció una normativa liberal en cuanto al comercio internacional, la cual terminó con las ventajas del comercio de cabotaje local al imponer la ‘igualación de bandera’ con las principales potencias europeas.

La teoría monetaria

En cuanto a la política monetaria, Courcelle-Seneuil se mostró partidario, desde un comienzo, de una legislación no intervencionista que dejara a libre juego de las fuerzas económicas el valor de la moneda. Desde el año 1851, el país vivió una crisis monetaria que se manifestó en la falta de circulante y en la constante fuga de metálico, producto del pago de las importaciones y del servicio de las deudas del Estado. El punto más álgido de la crisis se produjo hacia 1861, en lo que se ha denominado ‘la primera crisis moderna de la economía chilena’. Para el académico francés no cabía otra solución que el restablecimiento de una balanza comercial favorable, especialmente respecto de las grandes economías europeas. Ello implicaba aumentar las exportaciones y disminuir las importaciones, para lo cual se necesitaba un sustantivo aumento de la producción agrícola y minera del país. Sin embargo, el punto central de su tesis es que tal ajuste debía ser llevado a cabo por los privados, sin esperar ninguna injerencia del Estado. Para ello recomendaba modernizar la tecnología productiva y la búsqueda de nuevos mercados en reemplazo de los de Australia y California, que acababan de cerrarse. Las causas que habían originado la crisis económica estaban fuera del ámbito del gobierno y, en consecuencia, poco y nada podía hacer para remediarla.

El comercio era libre y responsable de sus actos. Si se había equivocado en sus especulaciones, a él correspondía enmendarlas, impelido por el curso natural de las cosas. Cualquier intervención de la autoridad, además de constituir un atentado contra la libertad de las transacciones y la inviolabilidad de los contratos, sería de efectos contraproducentes⁶⁶. No es, decía, la exportación de la moneda la que causa la crisis; esta es la que causa la exportación de aquella⁶⁷.

A juicio del economista francés, la crisis se debía fundamentalmente a una desfavorable balanza comercial. Ello producía la exportación de la moneda de plata, la cual era estimulada por el alza de los lingotes de plata y las emisiones de billetes bancarios. Finalmente, era el resultado del libre juego de los agentes económicos, quienes estaban fuera de la acción gubernamental. El Estado no

podía hacer nada en beneficio del comercio, pues los particulares debían enfrentar y superar la situación. Esta visión correspondía exactamente a aquella idea de la teoría clásica que postula que el mercado se autorregula por sí mismo y donde toda intervención ajena al juego de los propios actores involucrados es vista como una intromisión, un error y finalmente un vano intento por oponerse a las leyes universales que gobiernan el intercambio comercial entre los seres humanos. En relación a la crisis económica de 1861, consideraba que no debía protegerse a las empresas con problemas y que no quedaba otro recurso que la ‘liquidación general e inmediata’ de todas las empresas que resultaran comprometidas en la crisis.

... el desorden tenía lugar en el campo que los ‘arreglos sociales’ asignaban a la actividad libre y responsable de los particulares. Si estos habían cometido el error, debían expiarlo y repararlo. Acreedores y deudores recibirían así una severa lección por la sola aplicación de las leyes naturales. Cualquier excepción que se hiciera a la soberana ley de los contratos, al libre juego de los intereses individuales, podría ser fatal al futuro desarrollo de las fuerzas productivas⁶⁸.

Courcelle-Seneuil se opuso a toda medida fiscal tendiente a limitar la exportación de monedas de plata o a su depreciación mediante una baja del porcentaje de metal incluido en su acuñación. Según su perspectiva, todo ello redundaría en una serie de daños irreversibles al comercio y a la credibilidad externa del país. Su mayor temor era la idea de implantar el curso forzoso de papel moneda fiduciario. Siguiendo su línea de pensamiento, solo correspondía a los particulares superar esta crisis natural de la economía mediante la disminución del consumo de bienes importados y el aumento de la producción local. Finalmente, el Congreso Nacional aprobó un proyecto de ley sobre la moneda el 25 de julio de 1860, que seguía, en grandes líneas, las recomendaciones de Courcelle-Seneuil, y que solo incluía algunas reformas menores como el aumento del porcentaje de oro en la moneda y la introducción de un peso de plata de menor valor intrínseco⁶⁹.

Legado intelectual

La influencia de Courcelle-Seneuil en la intelectualidad chilena de la segunda mitad del siglo XIX siguió siendo considerable incluso mucho después de su regreso a Francia en 1863. Desde París, el economista francés mantuvo un fluido contacto con sus discípulos chilenos⁷⁰, quienes le consultaban habitualmente sobre cuestiones relativas a la enseñanza de la Economía Política, como también respecto de la política económica chilena. Sus servicios también fueron requeridos con motivo de la guerra entre Chile y España (1865-1866), convirtiéndose en un asiduo defensor de la causa chilena frente al gobierno francés y otras autoridades europeas. Courcelle-Seneuil prestó servicios al Instituto Nacional y a la Universidad de Chile al adquirir numerosos textos de estudio y tratados científicos por encargo de sus amigos chilenos.

Sin duda, uno de los momentos más interesantes del epistolario de Courcelle-Seneuil es aquel en que, con su discípulo Marcial Martínez en 1886⁷¹, analiza las causas de la crisis de 1878, y la consiguiente política monetaria y comercial que debía adoptar Chile. Ello se produjo en un período en que las tesis liberales comenzaban a ser cuestionadas tanto en Europa como en Latinoamérica, debido a la difusión de las doctrinas proteccionistas de la ‘Escuela Histórica’ de Federico List y a los sorprendentes resultados económicos mostrados por la Alemania unificada tras la guerra francoprusiana.

Para el economista francés, las causas de la crisis continuaban siendo, en términos generales, las mismas que él había expuesto durante su estadía en Chile, es decir, una baja en las exportaciones nacionales seguida de una crisis de la moneda. A ello se sumaba ahora el curso forzado de billetes inconvertibles. A su juicio, la única solución racional era el aumento del volumen de las exportaciones, reduciendo al mínimo sus costos de producción. En tal sentido, solo correspondía a los particulares asumir la tarea sin esperar ninguna injerencia del poder público.

Por el contrario, Marcial Martínez se mostraba partidario de ciertas medidas de protección, citando las experiencias exitosas de otros países como Alemania y Estados Unidos. Martínez rechazaba ser tildado de ‘proteccionista’, pues se definía como un fiel seguidor de la escuela liberal. Sin embargo, se consideraba ecléctico y pragmático, pues decía reconocer aquellas medidas ‘saludables’ dadas las circunstancias de tiempo y lugar donde debían ser aplicadas. Se definía como un economista no sectario, con lo cual criticaba al maestro su falta de adecuación a las distintas realidades económicas y su excesivo apego a los principios generales.

La postura crítica y pública de Marcial Martínez, sin embargo, no fue compartida por la mayor parte de los discípulos de Courcelle-Seneuil. Mucho más fieles a su doctrina continuaron siendo Zorobabel Rodríguez, Miguel Cruchaga Montt, Julio Montt, Manuel Miquel, Camilo Cobo, Francisco Nogueira, y especialmente Diego Barros Arana, verdadero hagiógrafo del economista francés.

No es de extrañar que en sus últimos años de vida Courcelle-Seneuil haya tomado partido por el bando parlamentario durante la Guerra Civil chilena de 1891. A su juicio, los defensores de la libertad estaban del lado de los opositores al presidente José Manuel Balmaceda, pues este último representaba todo aquello que el economista francés abominaba: la intervención estatal en la economía, el aumento de los gastos del Estado y el intento de tener un mayor control sobre las riquezas del país, en este caso el salitre, mayoritariamente en manos de empresarios extranjeros.

De acuerdo al análisis crítico de Leonardo Fuentealba⁷², la presencia de Courcelle-Seneuil vino a consolidar la condición de Chile como país exportador de materias primas, en especial minerales, e importador de productos manufacturados extranjeros. En tal senti-do, el legado del economista francés no habría sido sino la afirmación de esta cualidad por medio de la instauración de una ciencia económica que consagraba tal situación en tanto ideología, silenciando de paso las voces de quienes exigían para Chile una política de desarrollo industrial orientada a la producción de manufacturas de mayor valor agregado.

Para un hombre como él, verdadero apóstol de una ciencia que había predicado desde las columnas del *Journal des Economistes*, resultaba interesante informar con sus principios a la ‘elite’ intelectual que se le confiaba. En los cinco cursos que alcanzó a realizar antes de su regreso a Francia, varias decenas de jóvenes y muchos hombres ya maduros, que no tuvieron inconvenientes en descender hasta el banco de la clase, bebieron sus enseñanzas y se empaparon en el espíritu de sus ideas económicas⁷³.

A juicio de Fuentealba, el *laissez-faire*, *laissez-passer* de Courcelle-Seneuil

sustituyó al instinto político propio de los primeros organizadores de la República. Esto se habría comprobado especialmente en la política comercial chilena, la cual habría renunciado a exigir mejores condiciones en los distintos tratados comerciales firmados por Chile en la segunda mitad del siglo XIX. Habría predominado entonces el principio de 'igualación de banderas' con potencias del tamaño de Inglaterra, Alemania, Francia o Estados Unidos, lo cual habría generado un desequilibrio crónico de la balanza comercial chilena, arruinando de paso a la incipiente marina mercante local.

Según esta visión, la posesión de las nuevas riquezas salitreras del norte del país no habría mejorado la situación en el largo plazo, pues se habría producido una dependencia de las rentas del nitrato, distorsionando la estructura tributaria del Estado. Este también se habría debilitado frente al poder de los bancos privados, cuya supuesta irresponsabilidad habría originado la instauración del curso forzoso de billetes inconvertibles en 1878, y las posteriores crisis monetarias.

La reacción a las ideas liberales se produjo entonces hacia finales del siglo XIX, cuando el gobierno se vio prácticamente obligado abandonar el laissez-faire para intervenir en la economía, hasta entonces una esfera reservada a los privados. La influencia de los seguidores del economista alemán Federico List se notó en la reacción al librecambismo, especialmente a partir de 1887, cuando Malaquías Concha⁷⁴ funda el Partido Demócratico (Radical Democrático), cuya principal bandera de lucha era la protección de la industria nacional y la oposición al liberalismo económico. A juicio de Fuentealba, el retraso de Chile en la instauración de las ideas proteccionistas se debió a la influencia del liberalismo económico de la élite política y empresarial chilena. Ello se habría debido especialmente al peso tanto de las prácticas comerciales inglesas como de la industria salitrera en la economía nacional y a la influencia dejada por las enseñanzas de Jean Gustave Courcelle-Seneuil en toda una generación de políticos e intelectuales chilenos.

La depresión de los años 1870: la primera crisis del liberalismo económico

Nos interesa detenernos en la crisis de los años 1870, porque justamente es en este período cuando se produce uno de los debates más interesantes del siglo XIX entre liberales-librecambistas y proteccionistas. Si bien estos últimos terminan siendo derrotados y sus tesis opacadas por el nuevo ciclo salitrero que se inaugura tras la Guerra del Pacífico (1879-1883), fue un momento donde el consenso liberal se vio fuertemente cuestionado incluso desde sectores de la propia élite.

El fin del primer ciclo expansivo de la economía chilena coincide con la crisis mundial de los años 1870⁷⁵. Sin embargo, ya desde la década de 1860, a pesar del repunte en las exportaciones, se apreciaban algunas señales que anunciaban el agotamiento de esta primera fase de crecimiento de la economía chilena. Los mercados internacionales para los productos agrícolas chilenos se habían vuelto más competitivos en términos de precios y volumen, al mismo tiempo que la demanda de trigo en los mercados de California y Australia había caído drásticamente a fines de la década de 1850. A esto se sumaba la falta de renovación tecnológica en la producción de plata y cobre, lo cual redundaba en una menor producción debido al agotamiento de los yacimientos de más alta ley. Sin embargo, ninguna de estas causas tuvo el peso de la caída en los precios de los principales productos chilenos de exportación. Por primera vez, quedaba expuesta la enorme fragilidad de la economía chilena de exportación respecto del contexto internacional.

La década de 1870 había comenzado con gran prosperidad para Europa. Alemania era la principal beneficiada de las reparaciones de guerra producto del conflicto con Francia, además de haber obtenido las ricas regiones mineras de Alsacia y Lorena. La inversión industrial y comercial de las principales potencias europeas se había doblado, aunque mayormente correspondía a inversiones de carácter especulativo. La crisis económica terminó por desatarse en Austria en 1873, generando inmediatamente corridas bancarias y enormes pérdidas tanto en los bancos alemanes, franceses e ingleses, quienes vieron aumentar de manera violenta sus tasas de interés.

En los Estados Unidos, se había producido un fenómeno similar y contemporáneo producto de la masiva construcción de ferrocarriles tras la guerra civil, lo cual generó un enorme endeudamiento respecto de los bancos norteamericanos. La crisis estalló cuando las enormes inversiones en infraestructura no produjeron los retornos esperados, lo cual se tradujo en una quiebra generalizada de numerosos bancos. El pánico se expandió rápidamente a los distintos mercados accionarios con la consecuente quiebra masiva de empresas, despidos y caída de la demanda a nivel general.

Argentina y Chile fueron los primeros países del Cono Sur en sentir los embates de la recesión mundial, especialmente debido a su carácter de economías orientadas a la exportación de materias primas. En un comienzo, la reacción de las autoridades chilenas fue recurrir a las recetas clásicas de la teoría liberal. En otras palabras, ajustar la economía a las nuevas condiciones del mercado externo y promover una disminución en los costos de producción de los principales productos exportables. Tras el predominio del librecambismo en los años 1860, por primera vez se volvían a escuchar opiniones que llamaban a asumir medidas proteccionistas a favor de la industria chilena.

La caída de la producción de granos aumentó el precio de los alimentos en el país, llegando al punto de tener que importar trigo en 1878, agravando de paso el déficit comercial y la penuria de divisas.

Lo peor estaba por venir. Las cosechas de 1878 fueron tan malas que en algunos casos los agricultores no lograron producir ni siquiera lo suficiente para la siembra⁷⁶.

Las escenas de vagabundos y pobres en las calles muriendo de hambre generaron preocupación y temor en la clase política. La crisis se había expandido al conjunto de la economía. La caída del precio de las acciones mineras en más de un 50% indicaba el impacto de la depresión y su difusión al resto de las actividades productivas del país. Los bancos privados sufrieron gravemente la recesión tras haber invertido durante años en empresas insolventes o simplemente especulativas. El caso de la quiebra del Banco Thomas, en 1877 (siendo técnicamente una Casa Comercial de Valparaíso), es un buen ejemplo del

colapso de una institución cuyo portafolio tenía un valor de un millón de pesos, mientras que sus pasivos ascendían al doble de esta cantidad⁷⁷. El Banco del Pobre colapsó en 1878, obligando a muchas personas de bajos ingresos a recurrir a las criticadas casas de empeño.

Tras el descalabro del Banco del Pobre, el pánico se extendió por todo el sector financiero. Las reservas de metálico se hicieron insuficientes y temiendo una corrida bancaria, el Presidente de la República, Aníbal Pinto, declaró la ‘inconvertibilidad’ de los billetes en 1878. La medida generó un enorme rechazo en el exterior, pues alejaba al país de la ortodoxia monetaria, desfavoreciendo de paso los términos de intercambio para los países exportadores de manufacturas. Ello repercutió inmediatamente en la caída de los bonos del gobierno chileno en Inglaterra.

De acuerdo al estudio de W. Sater, la inconvertibilidad fue una medida urgente, pragmática e inevitable para las autoridades chilenas, pues ya no quedaban suficientes existencias de metálico en los bancos para cubrir los depósitos⁷⁸. La circulación forzosa del papel moneda se había vuelto inevitable en el contexto de la crisis. Fue así como comenzaron a publicarse editoriales de prensa que culpaban a los bancos privados de realizar emisiones irresponsables y abogaban por el establecimiento de un Banco Central estatal que supervisara a las instituciones de crédito⁷⁹.

Algunos liberales como Zorobabel Rodríguez (discípulo de Courcelle-Seneuil) se mostraron absolutamente contrarios a la medida. Este último la consideró literalmente como un ‘robo’, pues engañaba a los inversionistas, quienes habían depositado moneda dura y recibirían a cambio solo papel con valor fiduciario. Acusó, además, al gobierno de violar una ‘obligación contractual’ al establecer dicha medida, pues atentaba contra algo tan sagrado como el derecho de propiedad. Hubo algunos que incluso llamaron a la rebelión armada para oponerse a la inconvertibilidad.

Como se vio, la crisis de 1870 devastó la economía chilena, debido principalmente a causas externas (baja demanda de materias primas, especialmente el cobre), y aunque los productos agrícolas no habían corrido peligro, el clima y las malas cosechas terminaron por arrastrarlos también a ellos en la crisis. La caída del comercio internacional no solo afectó al gobierno en su principal entrada, sino que redujo dramáticamente los ingresos de la mayor parte de los habitantes del país.

Se criticó la debilidad del Presidente Pinto para superar la coyuntura. Su ministro de finanzas, Rafael Sotomayor, enfrentó la crisis con algunas medidas tradicionales como ajustar el gasto fiscal especialmente en la policía y el ejército. Los más doctrinarios incluso deseaban reducir los salarios de los empleados públicos. Finalmente, ninguna de estas medidas sirvió para reducir el déficit del Estado.

Zorobabel Rodríguez y Marcial González llamaban a apoyar las medidas de Sotomayor como única salida a la crisis y culpaban a la élite y sus gastos superfluos de haber desencadenado la crisis⁸⁰. La importación de lujo habría drenado las divisas metálicas del país. También culpaban al gobierno por sus gastos en obras públicas. Según estos economistas liberales, la solución había que buscarla en la austeridad del gobierno y los ciudadanos. La defensa del *laissez-faire* de Rodríguez proponía que los intendentes y gobernadores no recibieran salario, lo cual mejoraría la eficacia del gobierno, la descentralización, y ahorraría gastos al Estado.

Los opositores al librecambismo como Domingo Morel, Enrique Vergara Montt o Francisco Miralles, columnistas habituales de la revista *La Industria Chilena*, veían principalmente dos alternativas al dogmatismo liberal⁸¹: la reforma tributaria (mayor papel del Estado) y el establecimiento de una industria nacional. Acusaban a la clase rentista de preservar su capital e ingresos a expensas de los impuestos que pagaban los trabajadores por los productos importados ya gravados. Culpaban también a las grandes potencias económicas de ahogar el desarrollo industrial de los países más ‘jóvenes’:

(sobre el proteccionismo)... cuando hay naciones en pleno uso de sus fuerzas industriales, pretendiendo aplastar el esfuerzo de otras que comienzan, es necesaria esa arma de defensa. Sin ella, el progreso industrial es imposible, y el monopolio de los poderosos sería eterno.

¿De qué manera sería realizable una fabricación cualquiera en un país nuevo, si en sus primeros pasos se encontrara combatida por una competencia invencible y tenaz, venida de países enriquecidos precisamente por el desarrollo industrial?... Los Estados Unidos comprendieron muy bien esta verdad cuando formaron el propósito de ser el país más rico...⁸².

El establecimiento de industrias nacionales por la vía del proteccionismo era otra alternativa para estos reformistas⁸³. Esto los ‘liberaría del tributo que se paga a los extranjeros’⁸⁴. Según este punto de vista, la industrialización proveería de trabajo a los hombres, mujeres y niños, creando también una clase media. Este grupo reformista criticaba la forma en que el libre comercio se había instalado en Chile: debido a la notable influencia de los intelectuales europeos, este había pasado a ser una especie de objeto de culto. Otros decían que la oligarquía prefería este sistema porque le permitía comprar productos europeos caros y exclusivos a mejores precios. Se criticaba a los comerciantes importadores, pues desincentivaban la industrialización y mantenían un monopolio respecto del comercio internacional.

Los liberales como Marcial González postulaban que Chile había logrado enormes progresos y que ‘los pobres de hoy vivían como los ricos de ayer’⁸⁵. A su juicio, la crisis era algo temporal y se resolvería con la iniciativa individual. Aceptaba efectuar reformas en aduanas, pero sin caer en el proteccionismo, que solo crearía industrias artificiales de costos altos a expensas del consumidor, aumentando el costo de la vida. Su principal argumento era que el país no contaba con suficiente capital y tecnología para ello. Por su parte, Zorobabel Rodríguez consideraba al proteccionismo como una blasfemia, pues ‘Dios regulaba el universo y las leyes de la economía’⁸⁶. No reconocer esto era, a su juicio, un sacrilegio. Pensaba que el derecho al trabajo era una negación de la propiedad, ‘un robo y una caricatura del santo derecho a los frutos de la libertad de trabajo’⁸⁷. En su opinión, un Estado interventor solo llevaría al comunismo.

Finalmente, el Ministro Rafael Sotomayor rechazó todas las propuestas de medidas tarifarias proteccionistas. También se opuso a los impuestos directos y al gravamen de la renta. Por ello se lo acusó de proteger los intereses de la banca.

La propuesta de instaurar nuevos tributos también encontró la oposición de los políticos conservadores y liberales. La única solución parecía recurrir una vez más a un préstamo en el exterior. Sin embargo, los países europeos no se mostraron entusiasmados en prestar dinero al gobierno de Chile, especialmente tras la devaluación reciente, resultado de la circulación forzosa de billetes. Además, existía peligro de que el país cayera en cesación de pagos.

El sucesor de Sotomayor en el Ministerio de Hacienda, Augusto Matte, no se oponía a los impuestos directos, y logró que se gravaran las herencias y las donaciones. Solo en 1878, producto de la presión internacional por imponer un tributo que respaldara nuevos préstamos al gobierno chileno, se discutió en el Congreso Nacional un impuesto a la renta. Sin embargo, el inicio de las hostilidades con Bolivia y Perú, en 1879, postergó el debate sobre los impuestos, pues Chile rápidamente se hizo con las riquezas salitreras de Antofagasta, cuya demanda internacional estaba en pleno aumento.

La Guerra del Pacífico permitió la salida momentánea de la crisis financiera. El salitre se convirtió en la principal materia prima de exportación del país, desplazando por lejos al cobre, la plata y los cereales, generando importantes entradas para el Estado. El impuesto a la exportación de salitre llenó las arcas del fisco, haciendo innecesaria la instauración de nuevos impuestos.

En términos generales, la crisis de la década de 1870 generó un amplio debate en cuanto a hacer de Chile un país menos dependiente del sector exportador. Fue así como surgió una corriente que planteaba la necesidad de industrializar el país por medio de una re-forma tributaria. William Sater constata que pocos países sudamericanos se embarcaron en un proyecto tan ambicioso de reforma para enfrentar la crisis mundial. Perú prefirió transferir su dependencia económica del salitre al azúcar, mientras que Argentina optó por imponer tarifas arancelarias sin alterar su estructura impositiva. No obstante lo anterior, para este autor la victoria en la Guerra del Pacífico hizo resurgir la mentalidad económica tradicional de la élite chilena, abandonando la política reformista y dejando a la economía embarcada en los bruscos ciclos de alza y baja propios de un país exportador de materias primas.

El fin de una época: la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión y el repliegue liberal

La Guerra del Pacífico había permitido ‘salvar’ el modelo exportador librecambista chileno, al mismo tiempo que frenó la crítica proteccionista que surgió durante la década de 1870. Ello no impidió que las ideas proteccionistas continuaran desarrollándose al interior de diversos grupos críticos de la élite gobernante, especialmente de aquellos que surgieron a partir del aumento del aparato público y de la pequeña industria (grupos medios), además de quienes decían representar al mundo obrero y al artesanado urbano⁸⁸.

Los ingentes recursos obtenidos del impuesto a la exportación salitrera inyectaron a la economía chilena una cantidad inmensa de dinero, lo cual permitió anular —o al menos postergar— aquellas transformaciones que se consideraban necesarias para industrializar y diversificar la economía del país⁸⁹. Si bien las doctrinas librecambistas encontraron oposición en aquellos economistas seguidores de la escuela historicista alemana, en los hechos el país siguió funcionando, en términos económicos, dentro de un esquema de *laissez-faire* hasta 1920 e incluso hasta la Gran Depresión de 1930⁹⁰. Ello no implica restar importancia a las polémicas que se dieron a principios del siglo XX en torno al apoyo a la industria nacional, o respecto de las disputas monetarias sobre la emisión de dinero, la inflación y el posible retorno al patrón oro. Lo que nos interesa recalcar es la ‘inercia’ y el peso del modelo salitrero, que llegó a concentrar más del 80% de las exportaciones y de los ingresos públicos del país hacia 1914⁹¹. Hasta ese momento, el futuro económico de Chile se veía promisorio.

Es importante destacar que este ambiente de optimismo con que comenzó el siglo XX era parte de una ideología liberal del progreso, que confiaba en la ciencia, en el crecimiento económico, en la educación y en la democracia como los pilares del desarrollo de los pueblos. La élite chilena no estaba ajena a esta corriente propiamente europea⁹². Sin embargo, ya durante la primera década de 1900, numerosas voces se levantaron para cuestionar esta imagen del país. Entre ellas destacaron las de Tancredo Pinochet⁹³ y Francisco Antonio Encina⁹⁴,

quienes criticaron la supuesta frivolidad y despilfarro de una clase dirigente que había desperdiciado la oportunidad de invertir las riquezas del salitre, perdiendo de paso la oportunidad de educar al pueblo en la industria y el trabajo productivo. La Primera Guerra Mundial solo hizo aumentar esta sensación de ‘fin de civilización’, cuestionando los presupuestos del pensamiento burgués de la época, los cuales mezclaban liberalismo, racionalismo y positivismo:

En efecto, las promesas optimistas de un progreso continuo, aseguradas por el progreso material y la evolución científica; por el aumento del comercio mundial y la pacificación relativa de Europa tras la guerra Franco-prusiana, parecen hundirse. Al mismo tiempo, el triunfo de la revolución bolchevique refuerza la idea de la necesidad de un cambio radical propuesto por los nuevos partidos de izquierda. Este sentimiento también se refleja en la clase dominante chilena, muy permeable a las modas europeas⁹⁵.

Durante este período, ni el Estado ni la élite gobernante necesitaron de mayores esfuerzos para extender la administración fiscal y los servicios de educación y salud⁹⁶. Sin buscarlo expresamente, quienes concentraban los frutos de la riqueza salitrera terminaron por transferir al Estado una parte importante de estos recursos, sin que por ello existiera una política activa de desarrollo del sector público o de redistribución de la riqueza⁹⁷. El consenso liberalparlamentario era cuestionado por diversos grupos al interior de la sociedad chilena, pero al menos —hasta 1920—, se mantuvo como el patrón de funcionamiento de la política y la economía nacional⁹⁸. Solo el shock económico de 1929-30 pondría fin al segundo ciclo de expansión de la economía chilena, desplazando al ideario económico liberal de la esfera pública hasta la década de 1970.

El estallido de la Primera Guerra Mundial marcó el inicio de la crisis del modelo exportador y la lenta transición hacia un esquema de sustitución de importaciones, el cual solo se aceleraría con la Gran Depresión de 1930. La guerra afectó la economía del país de una manera muy peculiar. En un comienzo, incluso aumentaron las exportaciones debido al uso del salitre como insumo básico en la fabricación de explosivos. Junto con ello, se produjo una caída de hasta un 75% de las importaciones manufactureras y de bienes de capital (maquinaria, insumos metálicos, repuestos) con respecto a los años anteriores al

conflicto. Ello obligó a reorientar esa demanda hacia el mercado interno, el cual respondió con relativo éxito durante todo el desarrollo de la guerra.

Se estima que la tasa de crecimiento de la industria chilena, entre 1914 y 1918, alcanzó a un 53%. Esto solo fue posible porque ya existía cierta capacidad industrial anterior a 1914, que se había ido desarrollando dentro del modelo exportador. No obstante lo anterior, este crecimiento industrial interno terminó abruptamente con el fin de las hostilidades en Europa. La caída en la demanda de salitre para explosivos y la invención del nitrato sintético, por parte de Alemania, deprimieron de manera ostensible la economía chilena a partir de 1919. Este mismo año, las ventas del mineral solo alcanzaron una cuarta parte de lo vendido durante el año anterior, afectando al resto de la economía y a los ingresos del Estado.

Si bien la década de 1920 presentó una importante recuperación de la industria salitrera y de sus términos de intercambio, ella estuvo marcada por una fuerte inestabilidad general que no la abandonaría hasta la crisis definitiva del modelo exportador de salitre en 1930. Autores como Gabriel Palma⁹⁹ estiman que, entre 1919 y 1929, se presentaron variaciones anuales del precio del nitrato cercanas al 11% en promedio, lo cual significó una oscilación del ingreso nacional del orden de 3 a 4% por año. La inestabilidad en el precio internacional del salitre obligaba a los productores a restringir la oferta, debiendo cerrar oficinas y detener faenas, lo cual se traducía en desempleo y menores ingresos para el fisco. Desde fines del siglo XIX, la respuesta tradicional del Estado había sido recurrir a empréstitos, a lo cual se sumaba la inestabilidad monetaria ligada a las constantes devaluaciones que realizaron los gobiernos de la época¹⁰⁰.

La inestabilidad monetaria se convirtió en un problema político para las autoridades chilenas. Las continuas alzas de precios y las devaluaciones terminaron por generar un malestar generalizado en los sectores medios y obreros. En general, los grupos que dependían de un salario se vieron fuertemente perjudicados por la pérdida constante de poder adquisitivo. Este fue uno de los factores desencadenantes de la crisis social y política de 1924¹⁰¹, donde los militares exigieron cambios profundos a la élite gobernante, especialmente en lo referente a las reformas sociales.

Fue en este ambiente de convulsión social y política donde se dieron las condiciones para una de las reformas más importantes al sistema monetario chileno. Los militares estaban convencidos que solo presionando a los políticos

se alcanzarían las reformas necesarias para aliviar la crisis social y terminar con la inestabilidad monetaria de la economía chilena. Fue así como presionaron para que el gobierno chileno invitara al economista norteamericano Edwin Walter Kemmerer para remodelar el sistema bancario y monetario del país¹⁰². Kemmerer era uno de los Money Doctors¹⁰³ con más experiencia en la materia, pues ya había realizado reformas similares en Perú, Bolivia, Colombia, Polonia, Sudáfrica y China. La piedra angular de sus reformas estuvo en la creación de Bancos Centrales y la reinstauración del patrón oro¹⁰⁴.

Hasta la implantación de estas medidas, aún prevalecía la idea de que la inflación era producto de una economía monodependiente en constante peligro de recesión. La depreciación monetaria permitía entonces una cierta defensa ante esto, manteniendo los gastos del fisco en los momentos de baja del precio de los productos de exportación. El temor de volver al patrón oro radicaba justamente en la posibilidad de caer en ciclos recesivos durante las fluctuaciones a la baja de las exportaciones. Sin embargo, el miedo a los trastornos sociales y a la falta de crédito externo generó un ambiente propicio a las propuestas de la comisión Kemmerer. El propio asesor expuso su diagnóstico liberal en un artículo publicado en 1926, enfatizando en el consenso mayoritario que generaron sus recomendaciones de retorno al patrón oro y ajuste automático de la masa monetaria.

Las malas consecuencias, económicas, sociales y políticas de Chile con un papel moneda inestable han sido aquellas comunes a todos los países de con papel moneda, pero se han acentuado en Chile por el largo período durante el cual persistió. Mientras que el valor en oro del peso fue disminuyendo de 90 a 12 centavos de dólar, los precios fueron en aumento y el costo de vida crecía, pero los precios de las diferentes tipos de mercancías respondieron con diversos grados de retraso a las fuerzas de la inflación, los precios de las materias primas nacionales por debajo de las mercancías de los productos importados, los precios minoristas aumentaron más tardíamente que los precios al por mayor, y los salarios mucho más tardíamente que los precios al por menor. Los trabajadores sufrieron mayormente como resultado de la inflación del papel moneda, y aunque el interés de la mano de obra fue en general favorables al dinero barato durante los años de la mayor inflación, los trabajadores, en última instancia, aprendieron la lección y en los últimos años fueron los más firmes defensores de la vuelta al patrón oro¹⁰⁵.

La holgura crediticia que gozó el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo entre 1925 y 1929 se debió, en gran medida, a las reformas propuestas por Kemmerer, pero también volvió a la economía chilena aún más dependiente del sector externo al aplicar medidas procíclicas y favorecer el ajuste automático¹⁰⁶. La Gran Depresión de 1929-1930 golpeó con enorme fuerza a Chile, cerrando las puertas al crédito y generando una enorme fuga de divisas, además de una crisis profunda y terminal de la industria salitrera¹⁰⁷.

La institucionalidad económica liberal propuesta por Kemmerer no fue capaz de resistir la magnitud del shock externo, pues estaba diseñada para asumir un ajuste automático mediante la contracción económica y la deflación. Ni los políticos ni los industriales estuvieron de acuerdo en pagar este precio y presionaron al Estado para aplicar medidas de expansión monetaria y protección arancelaria. Los sindicatos tampoco soportaron el costo del ajuste ante el enorme desempleo y la caída de los salarios¹⁰⁸. Esto asustó a las élites ante la posibilidad de una ola de efervescencia social y política. Si en 1925 los trabajadores e industriales habían apoyado la instauración del sistema de Kemmerer para estabilizar los precios, hacia 1931 demandaron su completa anulación.

Esta expansión monetaria inició la recuperación de Chile de la depresión, lo que alcanzó su mayor ímpetu hacia 1933. La transformación del Banco Central en un guardián pasivo de las tasas de cambio a una activa institución de desarrollo crediticio continuó por décadas de ahí en adelante. Los ‘papeleros’ habían regresado¹⁰⁹.

Compartimos la visión de Paul Drake en cuanto a que la celeridad de los eventos de 1930-32, más allá de cualquier cambio en el pensamiento económico, motivó a las élites chilenas a dejar de lado las recetas de Kemmerer. Incluso, durante los momentos más duros de la depresión, algunos editorialistas y comentaristas pidieron el abandono de cualquier tipo de patrón, desligando así —para siempre— la emisión monetaria de su vinculación al sector externo. Aunque muchos siguieron creyendo en los preceptos liberales del modelo Kemmerer, se convencieron de que, a partir de ese momento, cualquier solución requeriría de

una mayor intervención del Estado y de nuevas protecciones frente a las oscilaciones externas.

Controles de cambio, aranceles y facilidades crediticias del gobierno y del Banco Central para la industrialización dan la tónica fundamental a una nueva era de capitalismo estatal entre 1930 y 1950. Como en los demás países andinos, el Banco Central de Chile llegó a ser cada vez más un socio subordinado de las políticas gubernamentales. Sirvió como una fuente de créditos de desarrollo para el Estado y el sector privado, tanto como un regulador de dinero y de cambio. En concordancia con el creciente nacionalismo económico, el banco diseñaba ahora sus políticas monetarias principalmente para preservar el poder adquisitivo interno del peso, y no para ajustarse a las oscilaciones en la balanza de pago. Debido a que el banco y el gobierno cooperaron para alcanzar un equilibrio entre crecimiento y estabilidad, la recuperación y virtualmente un total empleo se consolidaron hacia 1934-35. Por lo tanto la inflación disminuyó después de haberse disparado en 1932, pero no hubo retorno a los niveles monetarios y de precios de los años de Kemmerer. El circulante más que se duplicó entre 1933 y 1930. Durante el período 1931-41, el índice de precios se elevó casi en un 100% en Chile, 14% en Perú, 45% en Colombia y 690% en Bolivia. Los agricultores, industriales, trabajadores y todos los grupos sociales buscaban crédito y ayuda en el sector público y la inflación llegó a ser un rasgo estructural permanente de la política económica de Chile¹¹⁰.

Para la economía chilena, la mayor diferencia entre el efecto de la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión fue que la primera afectó principalmente a las importaciones, mientras que la segunda lo hizo tanto con las importaciones como con las exportaciones. Según Palma, en 1932, el valor real de las exportaciones chilenas había caído a $\frac{1}{6}$ del nivel de 1929¹¹¹. A esta brusca y sistemática caída del precio de las exportaciones salitreras, se sumó la imposibilidad de conseguir empréstitos en el extranjero y el bajo nivel de reservas de oro del país. Todo ello contribuyó a que las importaciones cayeran también a niveles históricos. Un informe de 1933, elaborado por la Liga de las Naciones, estimó que Chile había sido el país más afectado por la crisis económica¹¹².

Lo paradójal de la situación es que Chile ya había diversificado, en buena parte, su sector exportador desde principios de la década de 1920. Sin embargo, ello no le ayudó a disminuir su vulnerabilidad respecto de los ciclos de la economía mundial. Chile había dejado de ser un país únicamente monoexportador de salitre, don-de este mineral había llegado a significar el 80% del total de las exportaciones. Para 1929, las exportaciones de salitre representaron un 48% del total, mientras que el cobre aumentó hasta un 38%¹¹³. La situación de la balanza de pagos era aún peor, pues durante la década de 1920 el país se había endeudado fuertemente en el exterior. Ello obligó a las autoridades a decretar la cesación de pagos en abril de 1931, generando con ello una brusca devaluación de la moneda y una crisis política de proporciones. En un país tradicionalmente minero, la crisis de este sector generó un desempleo masivo y una enorme migración de familias pobres y desempleadas hacia los grandes centros urbanos.

El consenso liberal que se había instalado en la élite chilena desde la década de 1860, y que políticamente hizo crisis en 1920, pareció derrumbarse también desde su base económica con la Gran Depresión. Ello solo confirmó una tendencia mundial de descrédito de la teoría económica clásica. Los últimos refuerzos del consenso liberal-librecambista decimonónico se habían roto. Un nuevo paradigma de nacionalismo económico comenzó a tomar forma.

Notas al Capítulo I

¹ Editorial (1886). Revista Económica, Valparaíso, p. 9.

² Barros Arana, D., “Necrolojías. Don Juan Gustavo Courcelle-Seneuil”, Anales de la Universidad de Chile, 1892, 22 p.

³ Will, R. M., “The introduction of Classical Economics into Chile”, The Hispanic American Historical Review, Vol. 44 (N° 1), 1964, pp. 1-21.

⁴ Según Eric Hobsbawm, tres ediciones de la Riqueza de las Naciones de Adam Smith circularon en Francia antes de la revolución y otras cuatro durante su desarrollo. La primera edición del Traité d'économie politique de Jean-Baptiste Say (discípulo de Smith) fue publicada en 1803, pero sin embargo su obra no fue difundida sino a partir de La Restauración (1815). Ver: Hobsbawm, E. (2007), Aux armes historiens. Deux siècles d'histoire de la Révolution Française (J. Louvrier, Trans.), Éditions La Découverte, París, 2007, p. 25.

⁵ Existe una versión en español del artículo de Robert Will, publicado en Chile en 1964: Will, R., “Economía clásica en Chile antes de 1856”, Revista Chilena de Historia y Geografía, N° 131, 1964, pp. 177-204.

⁶ El neomercantilismo del siglo XVIII consistió principalmente en una práctica y en un con-junto de ideas económicas (no unificadas) que postulaban la necesidad de priorizar una balanza comercial positiva con el objetivo de acumular riquezas

en el tesoro nacional. En otras palabras, la riqueza era asimilada al dinero y a su cantidad disponible, es decir, al capital con que contaba cada nación. Para evitar la salida de dinero (metales preciosos), los neomercantilistas proponían una serie de medidas proteccionistas, entre las que destacaban las tarifas aduaneras, las cuotas de importación, el apoyo a las industrias locales, o simplemente la prohibición de exportar oro y plata. En otras palabras, se buscaba que las exportaciones superaran a las importaciones, priorizando las manufacturas de mayor valor agregado. Para ello proponían una serie de medidas de fomento para la agricultura y la industria, incluyendo también políticas de aumento de la población.

El neomercantilismo fue una de las prácticas que estuvo en el origen de los Estados nacionales europeos a partir del siglo XVI y hasta el siglo XVIII. Esta corriente económica promovía el comercio internacional, pero favoreciendo siempre la exportación por sobre la importación de productos o materias primas. Las teorías mercantilistas defendieron una fuerte presencia e intervención del Estado en la economía, lo cual estuvo en el origen de las críticas de pensadores liberales como Adam Smith o David Hume. Los estudiosos del tema, en general, reconocen tres corrientes mercantilistas: el Bullionismo o mercantilismo español, que en sus comienzos dio preferencia a la acumulación de metales preciosos (moneda, divisa); el Colbertismo o mercantilismo francés, que promovía principalmente la industrialización y el comercio local, y el Comercialismo inglés, que alentaba un comercio exterior agresivo pero protegiendo fuertemente las industrias locales.

Actualmente, el concepto de neomercantilismo ha sufrido diversas modificaciones producto de la llamada Globalización o Mundialización. En el discurso actual, se lo entiende como un sinónimo de la competencia entre las naciones o ‘guerra económica’ por los diferentes mercados a escala mundial. Para mayor información sobre el mercantilismo hispano, recomendamos la lectura de: Smith, R. (1955). “Economists and the Enlightenment in Spain: 1750-1800”. The Journal of Political Economy, Vol. 63 (N° 4), pp. 345-348. Para una visión contrastada del mercantilismo español, sugerimos: Sidney Smith, R., “Spanish antimercantilism of the seventeenth century: Alberto Struzzi and Diego José Dormer”, The Journal of Political Economy, Vol. 48 (N° 3), 1940, pp. 401-411. Con respecto a los movimientos del comercio imperial español de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, recomendamos el siguiente artículo: Fischer, J., “Commercial and Imperial Decline: Spanish Trade with Spanish America, 1797-1820”, Journal of Latin American Studies, Vol. 30 (N° 3), 1998,

pp. 459-479.

⁷ Rodríguez Campomanes, Pedro, Discurso sobre el momento de la industria popular, Madrid, 1774. Citado por Robert Will. Op.cit. p. 2.

⁸ Ward, Bernardo, Proyecto económico, Madrid, 1779. Citado por Robert Will. Op.cit. p. 2.

⁹ Campillo y Cosío, José, Nuevo sistema de gobierno económico para la América : con los males y daños que le causa el que hoy tiene, de los que participa copiosamente España, y remedios universales para que la primera tenga considerables ventajas, y la segunda mayores intereses. Impr. de Benito Cano, Madrid, 1789. Disponible en la biblioteca virtual Memoria Chilena: www.memoriachilena.cl.

¹⁰ Una de las reformas borbónicas que más repercusiones económicas tuvo en el continente americano, fue la de 1778, que estableció un nuevo reglamento comercial entre España y las colonias americanas. Por primera vez, diversos puertos del continente fueron autorizados para comerciar directamente con la metrópoli. Se pretendía así aumentar la tributación real y disminuir el contrabando: Anónimo, Reglamento y aranceles reales para el comercio libre de España a Indias de 12 de Octubre de 1778, Imprenta de Pedro Marín, Madrid, 1778.

¹¹ Para un estudio del comercio chileno antes del período independentista, recomendamos el clásico trabajo de Agustín Ross, especialmente en lo referente a la colonia: Ross, Agustín, Reseña histórica del comercio de Chile durante la era colonial, Imprenta Cervantes, Santiago, 1894. Para un estudio más pormenorizado del comercio colonial de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, sugerimos la lectura de la obra de Sergio Villalobos, quien cuestiona, entre

otras ideas, la tesis de una rebelión criolla producto del monopolio español o de la marginalidad y falta de importancia de la colonia de Chile para España: Villalobos, Sergio, El comercio y la crisis colonial: un mito de la Independencia, Universidad de Chile, Ed. Universitaria, Santiago, 1968. Una interesante reseña comentada de esta obra puede encontrarse en: Collier, Simon, “El comercio y la crisis colonial. Un mito de la independencia, Sergio Villalobos R”., The Hispanic American Historical Review, Vol. 53 (N° 4), 1973, pp. 686-689.

¹² La Reconquista española ha sido denominada por la historiografía chilena como el período comprendido entre la derrota de las fuerzas patriotas en Rancagua, el 1 y 2 de octubre de 1814, y su posterior victoria en la batalla de Chacabuco, el 12 de febrero de 1817. Tras la derrota en Rancagua, que significó el exilio de los restos del ejército patriota al otro lado de los Andes, el jefe militar realista, Mariano Osorio, asumió el mando del país con el título de gobernador. La campaña de contrarrevolución, emprendida por el Virrey del Perú, Fernando de Abascal, tuvo éxito, siendo el paso siguiente restituir la autoridad del rey Fernando VII, repuesto en el trono de España tras la caída de Napoleón. De inmediato se abolieron todas las iniciativas republicanas decretadas por José Miguel Carrera y Bernardo O’Higgins y se restauraron las instituciones de gobierno, administrativas y judiciales de la Colonia (fuente: Memoria Chilena).

¹³ Jean-Baptiste Say es uno de los fundadores de la escuela librecambista. Su obra más difundida fue su Tratado de Economía Política. En ella plantea que la economía tiende siempre a una situación de equilibrio con pleno empleo, y, en tal sentido, elaboró una teoría que alcanzó en general difusión con el nombre de ‘Ley de los mercados’ de Say. Esta ley es una pieza básica, pues fundamenta la supuesta propiedad de ajuste automático de los mercados defendida por los economistas clásicos. En términos simples, esta ley plantea que ‘la oferta crea su propia demanda’.

¹⁴ La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes cuenta con una copia digital de esta edición de 1821, traducida directamente de la 4a edición original del Tratado de

Economía Política de Juan Bautista Say. Documento disponible en:
<http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01383842000359839755024>

¹⁵ El Telégrafo, N° 7 (25 de mayo, 1819). Citado por Robert Will. Op.cit., p. 5.

¹⁶ La historiografía chilena contemporánea prefiere referirse al período como ‘época de ensayos constitucionales’ o de ‘organización de la República’.

¹⁷ Sagredo, Rafael, “Chile: 1823-1831. El desafío de la administración y organización de la hacienda pública”. Historia. Instituto de Historia. Pontificia Universidad Católica de Chile, Vol. 30, 1997, pp. 287-312.

¹⁸ Robert Will duda incluso de que el concepto de ‘libre comercio’ (free trade), tal como lo plantea la teoría clásica smithiana, haya sido conocido en Chile antes de 1818.

¹⁹ Will, Op.cit., p. 4.

²⁰ Ibíd., p. 7

²¹ Ibíd., p. 8.

²² Ibíd., p. 9.

²³ El Mercurio Chileno, N° 1 (abril 1828), p. 6.

²⁴ Es interesante recalcar que Chile solo contó con una legislación bancaria a partir de 1860. Hasta ese momento, perduró en la élite chilena la desconfianza, propia del mercantilismo, hacia los bancos privados de emisión de billetes.

²⁵ El Mercurio Chileno, N° 3 (junio 1828), p. 104.

²⁶ La Clave, N° 26 (1827) (citado por Robert M. Will).

²⁷ *Ibíd.*, p. 102.

²⁸ Will, *Op.cit.*, p. 15.

²⁹ Sanfuentes, Vicente, “Memoria sobre la libertad del comercio, leída ante la Facultad de leyes i ciencias políticas por D. Vicente Sanfuentes el día 24 de julio de 1847 a fin de obtener el grado de Licenciado en dicha Facultad”, *Anales de la Universidad de Chile*, 1847. Disponible en línea: <http://www.anales.uchile.cl/1s/1847/index.html> (revisado el 07-05-2007).

³⁰ Valdés, Cristóbal, “Estudios histórico-económicos”, Parte I, *Revista de Santiago*, I, 1848, p. 22. (citado por Robert Will, *Op.cit.*).

³¹ Garnier, Joseph, *Éléments d'Économie Politique*, Guillaumin et Cie Libraires, París, 1848.

³² En un período más reciente, los historiadores Sergio Villalobos y Rafael Sagredo han cuestionado el carácter liberal-económico de José Joaquín de Mora, atribuyendo su librecambismo más a una posición teórica que a un convencimiento sobre la política más apropiada para Chile: Villalobos, S., & Sagredo, R., *Ensayistas proteccionistas del siglo XIX*. DIBAM, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Santiago, 1993.

³³ Durante el siglo XIX chileno, es posible apreciar otras disputas en términos de política económica: intervencionistas frente a los defensores del laissez-faire, defensores del patrón oro respecto de quienes defendían el papel moneda sin respaldo metálico, o incluso entre defensores de una política de industrialización con apoyo del Estado, frente a quienes preferían dejar operar libremente a las fuerzas del mercado.

³⁴ Cavieres, Eduardo, “Anverso y reverso del Liberalismo en Chile, 1840-1930”. *Historia*, Vol. 34, 2001, pp. 39-66.

³⁵ Consideramos que la mejor y más actualizada cronología de la historia de Chile es aquella disponible en el sitio de la Universidad de Chile: “Fuentes documentales y bibliográficas para el estudio de la historia de Chile” (http://www.historia.uchile.cl/CDA/fh_cronologia/index.html).

³⁶ Cavieres, *Op.cit.*, p. 7.

³⁷ La historiografía clásica del siglo XIX, especialmente a partir de autores como

Diego Barros Arana, ha puesto el acento en la importancia de la llegada de Jean Gustave Courcelle-Seneuil como el inicio de la verdadera difusión del liberalismo clásico a nivel académico y de la élite política del país.

³⁸ Existen varios trabajos que analizan la influencia y prácticas del comercio inglés en Chile. Entre ellos, destacamos el de John Mayo (Mayo, John, “Britain and Chile, 1851-1886: Anatomy of a Relationship”, Journal of Interamerican Studies and World Affairs, V.23 (N° 1), 1981, pp. 95-120.). oumd- oumdjian, Juan Ricardo, “El alto comercio de Valparaíso y las grandes casas extranjeras, 1880-1930. Una aproximación”, Historia, Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, Vol. 33, 2000, p. 33). Por último, recomendamos la lectura del interesante trabajo de Eduardo Cavieres (Cavieres, Eduardo, Comercio chileno y comerciantes ingleses, 1820-1880. Un ciclo de historia económica, Ed. U.Valparaíso, Valparaíso, 1988, pp. 116-127).

³⁹ Véase: Clavel, C., & Jeftanovic, P., “Causas de la emisión en Chile: 1878-1919”, Revista de Economía, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Vol. 5 (N° 10), 1983, pp. 27-34.

⁴⁰ Cavieres, Op.cit., p. 14.

⁴¹ La discusión sobre la política monetaria en Chile a fines del siglo XIX y comienzos del XX, estuvo animada por la disputa entre los partidarios del patrón oro, denominados ‘oreros’, y los partidarios del papel moneda sin respaldo metálico, los ‘papeleros’.

⁴² Cavieres, Op.cit., p. 16.

⁴³ Ibíd., p. 19.

⁴⁴ La denominada teoría estructuralista surge de los economistas ligados a la CEPAL (1948). Para el caso de Chile, la obra más influyente fue la de Aníbal Pinto Santa Cruz (Pinto, Aníbal, Chile, un caso de desarrollo frustrado, Ed. Universitaria, Santiago, 1959, 198 p.). Este texto tuvo una enorme influencia en el pensamiento económico chileno de los años 1950-1970. Esta obra analiza las supuestas causas del subdesarrollo chileno a partir de la supuesta oportunidad perdida durante el ciclo salitrero para haber dado el salto hacia la industrialización del país. En la misma línea se encuentra un interesante y clásico artículo de Claudio Véliz, “La mesa de tres patas”, donde se analizan las causas de la falta de una política industrial en Chile, especialmente debido a la acción de tres grupos de interés que favorecían el librecambismo y se oponían a toda política proteccionistas o de fomento de la industria nacional. Según Véliz, estos grupos fueron (1) los exportadores mineros, (2) los grandes agricultores de la zona central y sur, y (3) los comerciantes y casas comerciales extranjeras del puerto de Valparaíso: Véliz, Claudio, “La mesa de tres patas”, Desarrollo Económico, Vol. III (N° 1-2), 1963, pp. 1-18.

⁴⁵ Si bien el concepto de Money Doctor es posterior a la época que hacemos alusión, lo utilizamos en este capítulo con el objetivo de realzar la influencia del ‘experto técnico’ en economía desde mediados del siglo XIX. En relación al concepto mismo, recomendamos el trabajo de Paul Drake para un estudio pormenorizado de la difusión de las ideas económicas liberales norteamericanas entre la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión de 1930: Drake, Paul, The Money Doctor in the Andes: U.S. Advisors, Investors, and Economic Reform in Latin America from World War I to the Great Depression.: Duke University Press, North Carolina NC city, 1988. En la misma línea, existe otro interesante trabajo del mismo autor publicado en 1993: Drake, Paul (1993), Money Doctors, Foreign Debts, and Economic Reforms in Latin America from the 1890s to the Present, SR Books, 1993. Para el caso específico de Chile, recomendamos el siguiente artículo: Drake, Paul, “La misión Kemmerer a Chile: consejeros norteamericanos, estabilización y endeudamiento, 1925-1932”, Cuadernos de Historia, julio (4), N° 27,1984.

⁴⁶ Recientemente, ha sido publicado un completo artículo sobre el legado de Courcelle-Seneuil en Chile. Ver: Mac-Clure, Óscar, “El economista Courcelle-Seneuil en el período fundacional de la economía como disciplina en Chile”, Revista Universum N° 26, Vol. 1, I Sem. 2011, pp. 93-108.

⁴⁷ La petición de un académico profesional de Economía Política ya había sido solicitada por el rector de la Universidad de Chile, Andrés Bello. Originalmente, la persona elegida había sido el francés Andrés Cochut, quien ya gozaba de cierto prestigio en Chile a través de sus columnas en el periódico El Araucano. Sin embargo, este último declinó el ofrecimiento y recomendó en su lugar a Courcelle-Seneuil, quien ya contaba con cierta fama tras redactar el *Traité théorique et pratique des opérations de banque*.

⁴⁸ A mediados del siglo XIX, las casas mercantiles inglesas, como por ejemplo Gibss & Sons, tomaron el control del comercio exterior chileno. Afincados en el puerto de Valparaíso, convertido en emporio comercial del Pacífico, controlaron las exportaciones de cobre y plata a Europa y las importaciones de manufacturas. Asimismo, financiaron a los empresarios locales y participaron en el financiamiento y creación de sociedades de bancos, navieras y comercio (fuente: Memoria Chilena).

⁴⁹ Nacido en Vanxains, departamento de Dordogne (Francia) el 22 de diciembre de 1813, Jean Gustave Courcelle-Seneuil tomó su segundo apellido de la localidad donde se había criado (Seneuil). En sus comienzos, estudió letras clásicas (griego y latín) en Poitiers. En 1835 se titula de abogado en París. En 1840 escribe su primer libro: *El crédito y la banca*, donde propone un sistema financiero con condiciones de libertad semejantes a las de Escocia y Estados Unidos. Fue el traductor en Francia de las obras de John Stuart Mill. El ambiente intelectual de la Segunda República Francesa (1848-1851) le permitió difundir sus ideas por la prensa, combatiendo fuertemente a los defensores del Manifiesto Comunista. Sin embargo, el Golpe de Estado de 1851 puso fin a este período de

libertad, instaurando el Segundo Imperio y un fuerte control sobre la prensa y la discusión intelectual. Si ideario liberal y las restricciones impuestas por el nuevo régimen influyeron en su decisión de aceptar, en 1855, la invitación del gobierno de Chile para crear la cátedra de Economía Política en la Universidad de Chile y asesorar al Ministerio de Hacienda. Durante su estadía en Chile, influyó notablemente sobre toda una generación de políticos e intelectuales, asentando las bases de un pensamiento económico liberal chileno, además de influir directamente en la legislación bancaria y comercial de la época. A su regreso a Francia en 1863, siguió prestando numerosos servicios al Estado de Chile. Fue nombrado Consejero de Estado por el gobierno francés en 1879. Al momento de su muerte, en 1892, seguía escribiendo y manteniendo contacto con sus discípulos y amigos chilenos. Entre sus obras más destacadas, están el Tratado Teórico Práctico de Economía Política (1858), El crédito y la banca (1840), Estudios sobre la ciencia social (1862) y La Banca Libre (1867).

⁵⁰ La Escuela de Manchester estuvo formada por un grupo de hombres públicos, economistas y empresarios británicos, que abogaron activamente, entre 1820 y 1850, por una política de libertad económica sin limitaciones. Esta corriente de pensamiento nace en oposición al pensamiento económico mercantilista vigente en la mayor parte de Europa durante el siglo XVIII. Su nombre ha quedado indisolublemente asociado a la defensa del laissez-faire, por lo que se habla de liberalismo manchesteriano cuando se aboga por la total prescindencia del Estado en materia económica y social. Su origen estuvo en la oposición a las leyes que restringían el comercio de granos en Inglaterra (Corn Laws, 1815), siguiendo las tesis de David Ricardo sobre las ventajas del libre comercio. Entre los pensadores más reconocidos de la Escuela de Manchester, destacan Richard Cobden y John Bright.

⁵¹ Fuentealba, Leonardo, “Courcelle-Seneuil en Chile, errores del liberalismo económico”, Anales de la Universidad de Chile, CII, 1944, p. 115.

⁵² Barros Arana, D. Op.cit., p. 7.

⁵³ Fuentealba, Op.cit., p. 117.

⁵⁴ Al momento de la llegada de Courcelle-Seneuil al país, un importante grupo de comerciantes de Valparaíso se habían manifestado en oposición a la existencia de bancos de emisión. El principal argumento fue la inconveniencia de dar al papel moneda la garantía propia de los metales preciosos. Con ellos se corría el riesgo de la desvalorización en momentos de crisis, especialmente a causa del abuso del crédito. A su juicio, el tesoro público debía quedar fuera del alcance de los particulares.

⁵⁵ En 1856 la firma Ossa y Cía., usando ya el apelativo de Banco, inició la emisión de billetes a la vista y al portador. Según Leonardo Fuentealba, estas operaciones fueron finalmente legalizadas cuatro años más tarde al fundarse el Banco de Chile.

⁵⁶ Fuentealba, Op.cit. p., 148.

⁵⁷ Sesión de la Cámara de Diputados del 30 de junio de 1859. Citado por Fuentealba, Op.cit., p. 152.

⁵⁸ Ley del 31 de julio de 1898.

⁵⁹ Fuentealba, Op.cit., p. 120.

⁶⁰ Courcelle-Seneuil, J. G., Tratado teórico y práctico de economía política, Revista del Pacífico. Imp. y Lib. del Mercurio de Santos Tornero, Valparaíso, 1858.

⁶¹ Barros Arana, D. Op.cit.

⁶² Uno de los seguidores más prolíficos de Courcelle-Seneuil, fue su alumno Manuel Miquel, quien posteriormente también se dedicó al estudio y difusión de la Economía Política de tendencia librecambista.

⁶³ Sobre el pensamiento económico y político de Zorobabel Rodríguez, recomendamos la lectura del artículo de Sofía Correa sobre la relación entre liberalismo y catolicismo en el siglo XIX: Correa, Sofía, “Zorobabel Rodríguez, Católico Liberal”, Estudios Públicos (66), 1997, pp. 387-426.

⁶⁴ Fuentealba, Op.cit., p. 129.

⁶⁵ Diego Barros Arana y otros de sus seguidores e incluso críticos, le reconocen a Courcelle Seneuil un amplio conocimiento erudito en Historia y Filosofía, así como en lo que se dio a llamar en la época ‘la Ciencia de la Sociedad’, en otras palabras, lo que serían los primeros pasos de la futura sociología.

⁶⁶ Editorial (anónima pero atribuida a Courcelle-Seneuil), (1857). “La crisis comercial y la exportación de monedas”. El Araucano (13 de enero, 1857). Texto citado por Fuentealba, Op.cit., p. 139.

⁶⁷ Fuentealba, Op.cit., p. 140.

⁶⁸ Ibíd., pp. 161.

⁶⁹ Courcelle-Seneuil había aceptado a regañadientes estas reformas, pero la presión del ejecutivo por medidas tendientes a disminuir la penuria de circulante y la fuga de plata, lo obligaron a incluirlas en el proyecto de ley enviado al Congreso Nacional.

⁷⁰ Entre estos destacaban el historiador Diego Barros Arana, los economistas Marcial Martínez y Manuel Miquel, y el político y profesor de Economía Política Zorobabel Rodríguez.

⁷¹ Marcial Martínez escribió una extensa carta dirigida a Courcelle-Seneuil, la cual fue finalmente publicada por El Mercurio en la edición del 24 al 27 de mayo de 1886. En ella exponía sus consultas al maestro francés, aunque reconocía tener algunas discrepancias con él, especialmente en lo relativo al fomento de la industria nacional.

⁷² El exhaustivo trabajo de Leonardo Fuentealba Hernández sobre la influencia de Jean Gustave Courcelle-Seneuil en Chile es uno de los más completos en la materia. Sin embargo, es importante aclarar que su crítica se enmarca en la corriente económica estructuralista, cuya máxima expresión fue el pensamiento desarrollado en torno a la CEPAL, especialmente tras la crisis mundial de 1930. Esta corriente intentó explicar el subdesarrollo ‘estructural’ de las economías latinoamericanas sobre la base de una industrialización fracasada, producto de una integración incompleta a la economía mundial. Ello se debía especialmente a la incapacidad de estos países de desarrollar una industrialización moderna y así salir del estado de meros productores de materias primas e importadores de manufacturas.

⁷³ Fuentealba, Op.cit., p. 195.

⁷⁴ Malaquías Concha Ortiz (1859-1921) formaba parte del Partido Radical, pero sus posiciones progresistas y cercanas al mundo obrero lo llevaron a entrar en conflicto con esta agrupación. Fue así como en 1887, junto a Abelino Contarbo y otros miembros del radicalismo, decide crear el Partido Radical Democrático. Esta agrupación proponía la efectiva democratización de la vida política, la instauración del sufragio universal, la profundización del proceso de laicización, y la educación amplia y gratuita para los obreros. Sin embargo, su plan más ambicioso se relacionaba con la protección y fomento de la industria nacional. Posteriormente, sus ideas fueron evolucionando hacia posiciones más cercanas a la Alianza Liberal, alejándose de los sectores obreros y artesanos que habían estado en el origen de la nueva agrupación.

⁷⁵ El estudio de William Sater sobre el impacto de la crisis económica de la década de 1870 en Chile, es uno de los más completos e interesantes en la materia. La mayor parte de los datos que incorporamos en este acápite provienen de este trabajo publicado justamente al cumplirse cien años de la crisis y del comienzo de la Guerra del Pacífico: Sater, William, “Chile and the World Depression of the 1870’s”, Journal of Latin American Studies, Vol. 11 (N° 1), 1979, 67-99.

⁷⁶ Sater, W., Op.cit., p. 78.

⁷⁷ Según William Sater, el Banco Thomas había contado con la confianza de numerosos industriales chilenos y extranjeros, así como de organizaciones de caridad e incluso del Consulado Británico, quienes habían confiado sus depósitos a esta institución. Ello debía principalmente a la supuesta probidad de sus dueños escoceses y a las altas tasas de retorno que prometía.

[78 Sater, W., Op.cit., p. 84.](#)

[79 Editorial, El Ferrocarril, Edición del 27 y 28 de julio de 1878.](#)

[80 Sater, W., Op.cit., p. 89.](#)

[81 Un interesante capítulo sobre los defensores de la industria nacional a fines del siglo XIX se halla en: De Vos Eyzaguirre, Bárbara, El surgimiento del paradigma industrializador en Chile \(1875-1900\), Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile, Santiago, 1999.](#)

[82 Editorial, “La industria nacional”, La Industria Chilena, N° 12, Santiago, 1875. Citado por: de Vos Eyzaguirre, B. Op.cit., p. 37.](#)

[83 Una recopilación de obras de los principales autores proteccionistas chilenos del siglo XIX se encuentra en: Villalobos, S., & Sagredo, Rafael, Ensayistas proteccionistas del siglo XIX, DIBAM, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Santiago, 1993. Sin embargo, discutimos la inclusión de José Joaquín de Mora y Marcial Martínez dentro de la recopilación, pues si bien en algún momento tuvieron opiniones proteccionistas, la mayor parte de sus escritos mantuvieron una línea mucho más acorde con el liberalismo económico.](#)

[84 Sater, W., Op.cit., p. 90.](#)

⁸⁵ González, M., “Condición de los trabajadores rurales en Chile”, Estudios económicos, 1885, pp. 317-321.

⁸⁶ Sater, W., Op.cit., p. 92.

⁸⁷ Ibíd., p. 92.

⁸⁸ Justamente el Partido Democrático (Radical Democrático, 1885) de Malaquías Concha se había constituido como portavoz de estos sectores frente a los partidos tradicionales de la élite chilena (Conservadores, Liberales y Radicales), asumiendo un programa de reforma social, así como de industrialización y protección de las manufacturas nacionales.

⁸⁹ Esto no impidió, como dijimos anteriormente, que se produjera en Chile un proceso de industrialización anterior a 1929, lo cual ha sido suficientemente demostrado por los trabajos de Carmagnani (1971), Cariola y Sunkel (1976).

⁹⁰ A partir de 1920, el Estado chileno comienza a intervenir directamente en la economía con la creación de un Banco Central y diversas cajas de crédito e instituciones dedicadas al fomento de la minería y la industria. Por primera vez, el Estado chileno asumió la producción directa de bienes a través de la Imprenta Nacional, de FAMA E (Fábrica y Maestranzas del Ejército) o de empresas productoras de energía como la Compañía Electro-Siderúrgica e Industrial (1926).

⁹¹ Sobre el paso de la economía de exportación al modelo de sustitución de importaciones, recomendamos el siguiente trabajo: Palma, G., “Chile 1914-1935: de economía exportadora a sustitutiva de importaciones”, Colección

Estudios CIEPLAN, Vol. 81(N° 12), 1984, pp. 61-88.

⁹² Algunos historiadores chilenos como Manuel Vicuña incluso han acuñado el concepto de una Belle Époque chilena, queriendo con ello destacar la influencia de estas ideas al interior de la élite local. Vicuña, Manuel, La Belle Époque chilena: alta sociedad y mujeres de élite en el cambio de siglo, Ed. Sudamericana, Santiago, 2001.

⁹³ Pinochet, T., La conquista de Chile en el siglo XX, Ed. La Ilustración, Santiago, 1909.

⁹⁴ Encina, F. A., Nuestra inferioridad económica: sus causas, sus consecuencias, Ed. Universitaria, Santiago, 1955.

⁹⁵ (Tesis) Boisard, S., L'émergence d'une nouvelle droite: monétarisme, conservatisme et autoritarisme au Chili (1955-1983), Université de Toulouse 2 le Mirail, Toulouse, 2001, p. 61.

⁹⁶ Para tener una perspectiva general del siglo XX chileno, y especialmente de sus tres primeras décadas, véase: Correa, S., Figueroa, C., Jocelyn-Holt, A., Rolle, C., & Vicuña, M., Historia del siglo XX chileno. Balance paradójal, Editorial Sudamericana, Santiago, 2001.

⁹⁷ La administración pública chilena contaba con aproximadamente 3.000 funcionarios en 1880. Estos aumentaron a 13.000 en 1900 y a más de 27.000 hacia 1919. En lo que se refiera a la educación pública, hacia 1880 no había más de 500 funcionarios. En 1930 no eran menos de 12.650. Se pasó de 150.000 alumnos en 1895 a casi 500.000 en 1925.

⁹⁸ A diferencia de la mayoría de los historiadores chilenos, Brian Loveman estima que dicho consenso político se rompió tras la Primera Guerra Mundial. Véase: Loveman, Brian, Chile. The legacy of hispanic capitalism, Oxford University Press, New York, 1988.

⁹⁹ Correa, Op.cit., p. 66.

¹⁰⁰ Según Correa y otros, la moneda chilena (peso) llegó a valer 24 peniques en 1890. Sin embargo, ya en 1913 su precio había disminuido a 9 peniques y a solo 6 en 1929.

¹⁰¹ El 4 de septiembre de 1924, un movimiento militar asumió el poder y el Congreso Nacional debió aprobar sin mayor debate las leyes sociales que estaban pendientes. La Junta Militar clausuró el Congreso mientras el presidente Arturo Alessandri hizo entrega del mando al Vicepresidente, debiendo dejar el país. En enero de 1925, un nuevo movimiento militar reemplazó a la junta anterior y promovió el regreso de Alessandri, quien en marzo de 1925 reasumió el poder, realizando importantes reformas. En materia política, se dictó una nueva Constitución (1925), que fortaleció el poder presidencial y terminó con el régimen parlamentario. En lo económico, se creó el Banco Central y se estableció el régimen de patrón oro; asimismo, se promulgó una nueva legislación tributaria con el fin de compensar los menores ingresos fiscales del salitre. A pesar del éxito obtenido, las divisiones y desconfianzas entre Alessandri y los militares se fueron agudizando, hasta culminar con la renuncia del Presidente frente a las presiones del coronel Carlos Ibáñez del Campo, caudillo que asumió la Presidencia entre 1927 y 1931, período en el cual Alessandri se exilió nuevamente en Europa (fuente: Memoria Chilena: www.memoriachilena.cl).

¹⁰² De acuerdo al estudio de Paul Drake, ya existía en Chile desde principios de

la década de 1920 un consenso general en la necesidad de crear un Banco Central y controlar la emisión monetaria de acuerdo a parámetros técnicos. Los sindicatos, los importadores y los industriales también apoyaban la reforma monetaria, pues se manifestaban agotados de la inestabilidad de los precios y la especulación bancaria. Kemmerer habría sido entonces únicamente el catalizador de un conjunto de medidas que se venían discutiendo al menos desde 1920, pero que la coyuntura política no había permitido implementar. La Junta Militar obligó al poder político a aceptar todas y cada una de las propuestas de Kemmerer sin lugar a enmiendas o debates. Véase: Drake, Paul, “La misión Kemmerer a Chile: consejeros norteamericanos, estabilización y endeudamiento, 1925-1932”, Cuadernos de Historia, julio (4), 27, 1984, p. 5.

¹⁰³ Money Doctors fue el nombre vulgar que se les dio a estos asesores privados contratados por los distintos gobiernos latinoamericanos para realizar reformas monetarias acordes con el nuevo papel que había adoptado la economía estadounidense tras el fin de la Primera Guerra Mundial.

¹⁰⁴ “Entre la conferencia de Génova de 1922 y el retorno de Inglaterra al oro en 1925, fue instaurado en Occidente un sistema monetario conocido como el Gold Exchange Standard o Patrón de Cambios Oro. En este sistema —con tipos de cambio fijos en relación al oro el metal casi no circulaba y los diversos países, a diferencia del Gold Standard tradicional— mantenían sus reservas, no en forma de oro, sino en saldos de las principales divisas del mundo. De este modo, el Gold Exchange Standard economizaba el uso del oro, lo cual fue visto como una manera moderna y cómoda de hacer las cosas. Como las monedas estaban sujetas al oro a una tasa fija, ese dinero era ‘tan bueno como el oro’”. Véase: Martínez Rodríguez, G., “Causas de la Gran Depresión de los años 30: aportes recientes”, Revista Universitaria. Instituto de Historia Pontificia Universidad Católica de Chile (N° 9), 1983, pp. 81-97.

¹⁰⁵ The evil consequences, economic, social, and political, of Chile’s experiences with an unstable paper currency have been those common to all paper money countries, but they have been accentuated in Chile because of the long period

during which they persisted. While the gold value of peso was declining from about 90 cents to 12 cents, prices were rising and the cost of living was increasing, but prices of different classes of commodities responded with widely varying degrees of lag to the forces of inflation, prices of domestic commodities lagging behind those of imported commodities, retail prices rising more tardily than wholesale prices, and wages much more tardily than retail prices. Labor suffered greatly as a result of paper money inflation, and although labor interest were generally favorable to cheap money during the years of the greatest inflation, laboring men ultimately learned their lesson and in recent years organized labor in Chile has been one of the staunchest advocates of the return to the gold standard. Kemmerer, E. W., "Chile returns to the gold standard", The Journal of Political Economy, Vol. 34 (N° 3), 1926, pp. 265-273.

¹⁰⁶ "El coronel Carlos Ibáñez entró en la escena política nacional el año 1924, liderando a un grupo de oficiales que, desde las galerías del Senado, expresaron su molestia contra el Parlamento. Este movimiento se denominó 'ruido de sables' debido al estruendo que produjeron los oficiales con sus armas. Fue la primera incursión de los militares en la política en casi cien años y consiguieron que los parlamentarios aprobaran en pocos días las leyes sociales que habían sido permanentemente aplazadas durante el gobierno de Arturo Alessandri, al llegar al poder en 1920. Luego de la renuncia del presidente Alessandri, el entonces coronel Ibáñez ocupó un puesto clave de Ministro de Guerra en los gobiernos de transición que se sucedieron. Durante el breve gobierno de Emiliano Figueroa, que fue elegido en 1925 tras la segunda renuncia de Alessandri, Ibáñez se convirtió en el verdadero poder tras las sombras. En 1927, Figueroa renunció e Ibáñez arrasó en las elecciones de ese mismo año, con más del 98% de los votos. Una vez en el poder, introdujo un estilo claramente autoritario, reprimió a la oposición estableciendo censuras a la prensa y sometió al movimiento sindical al control del Estado. Sin embargo, su gobierno gozó de gran aceptación por parte de la población, en un país que experimentaba un auge económico producto del alza de los precios del salitre, la instalación de la gran minería del cobre en el país y la afluencia de créditos blandos. Sin embargo, el alto nivel de endeudamiento público y la errada política monetaria del gobierno frente a la gran crisis mundial de 1929, hicieron inmanejable la política económica y llevaron a un colapso fiscal, productivo y financiero. En 1931, el apoyo al gobierno era nulo; las multitudes descontentas salieron a las calles y los estudiantes universitarios junto con los profesionales iniciaron una gran huelga.

El movimiento se hizo incontrolable e Ibáñez se vio obligado a renunciar. Tras un breve intervalo constitucional, no tardaron en volver los militares al poder; esta vez con la bandera de la revolución socialista” (Fuente: Memoria Chilena: www.memoriachilena.cl).

¹⁰⁷ La inconvertibilidad total y la salida definitiva del patrón oro fue decretada en abril de 1932.

¹⁰⁸ De acuerdo a las cifras manejadas por Paul Drake, los trabajadores fueron quienes más sufrieron con la depresión, especialmente en los centros mineros y en las ciudades. Aquellos que buscaban nuevos trabajos llegaron a ser 129.000 en 1932 de acuerdo a cifras oficiales, pero el número total de cesantes probablemente fue el doble de la cifra señalada, alcanzando algo así como el 20% de la fuerza de trabajo.

¹⁰⁹ Drake, Paul. Op.cit., p. 18.

¹¹⁰ Ibíd., p. 20.

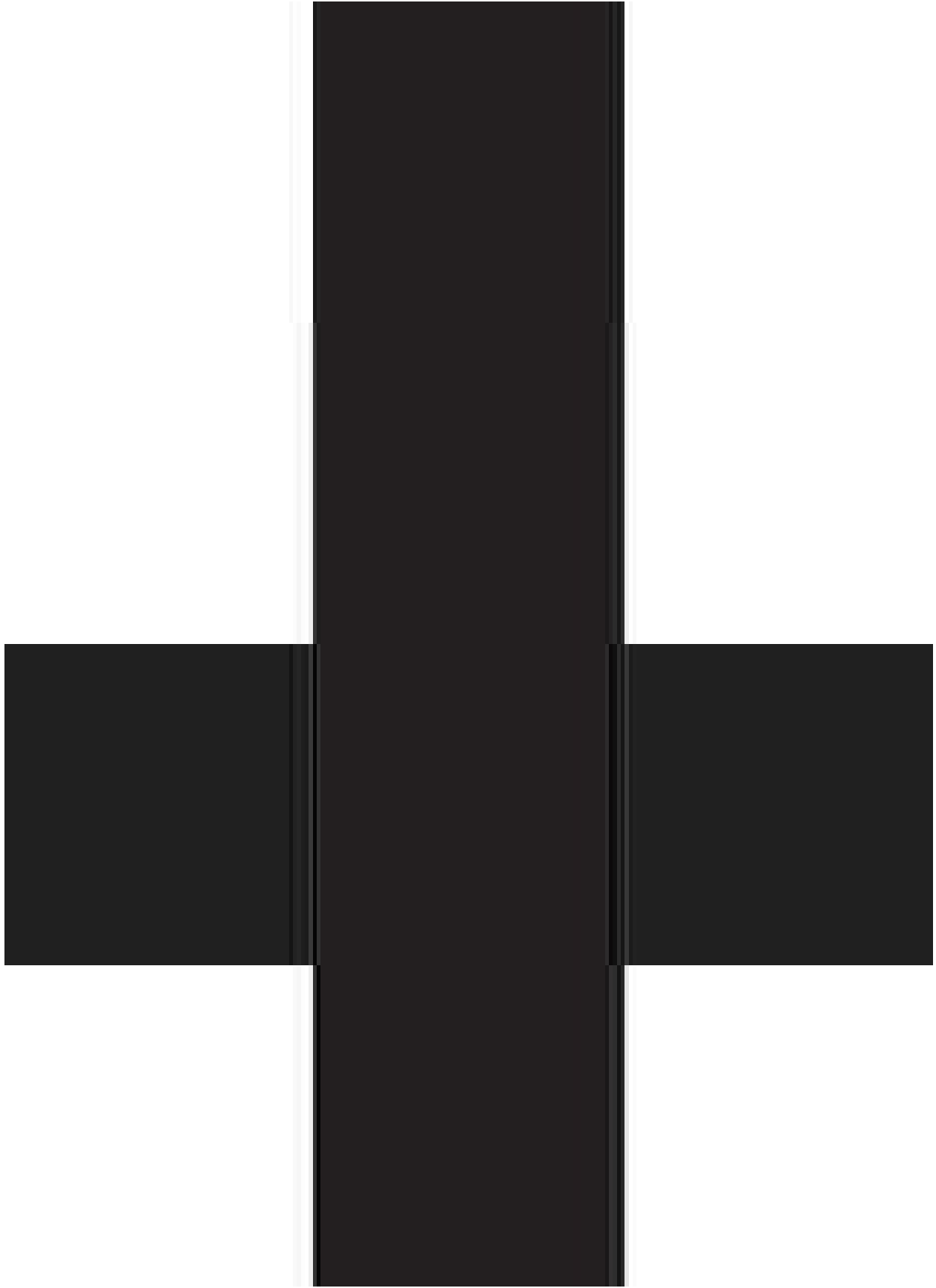
¹¹¹ Palma, G. Op.cit., p. 76.

¹¹² Véase: Condliffe, J. B., League of Nations: World economic survey, 1932-33, League of Nations, Ginebra, 1933. Para una reseña crítica del informe, ver: Kincaid, E., “League of Nations: World Economic Survey 1932-33”, The Accounting Review, Vol. 9 (Nº 4), 1934, pp. 348-349.

[113 Palma, G. Op.cit., p. 76.](#)

CAPÍTULO II

**TRANSFERENCIA IDEOLÓGICA: DE LOS ÚLTIMOS LIBERALES
CLÁSICOS A LOS CHICAGO BOYS (1930-1973)**



La crisis por la que el mundo entero ha atravesado tiene un significado mucho más profundo del que generalmente se le atribuye. Ella significa el término de toda una época del desarrollo de la civilización. El liberalismo económico que dio a esta época su brillo y grandeza, indudablemente se encuentra en decadencia...

Banco Central de Chile (BCCH). Novena Memoria Anual, 1934, p. 181

El último de los liberales clásicos en la era de la planificación

El fin del llamado consenso liberal en lo relativo a la economía política aplicada en Chile, no puso fin a la teoría clásica como doctrina. Sin embargo, le arrebató su centralidad y preponderancia en tanto discurso de buena parte de élite política chilena, la cual también se encontraba en vías de cambiar su tradicional composición oligárquica.

Si la Europa occidental en su totalidad aplicaba las nuevas ideas del nacionalismo económico y de la intervención contracíclica del Estado, entonces no parecía razonable seguir defendiendo un ideario que estaba siendo abandonado por las principales potencias mundiales, incluido Estados Unidos, donde se siguió sosteniendo la libertad de comercio como política general, pero que internamente aplicó un plan de recuperación e intervención económica conocido como New Deal ² (1933-1938). No obstante lo anterior, la supuesta inevitabilidad de la implantación del modelo de Estado de Compromiso, que surge normalmente de las visiones sobre el siglo XX chileno, no fue tal. Un ejemplo es lo estrecho del resultado de las elecciones presidenciales de 1938³, que revela que las cosas podrían haber sucedido de otra forma⁴.

Si bien el clima intelectual mundial apuntaba hacia un tipo de economía planificada y reguladora del comercio internacional, en Chile se aplicó una política económica esencialmente liberal durante el período inmediatamente posterior a la Gran Depresión. Sin embargo, esta vez se trató de un modelo esencialmente pragmático y que daba cuenta de las nuevas tendencias mundiales, el cual fue conocido como Ross Regime, en alusión al Ministro de Hacienda que lo puso en marcha. Paradojalmente, la nueva coalición política que accedió al poder en 1938 utilizó numerosos elementos de este modelo para instaurar su propia concepción económica y desplazar a los defensores de la teoría económica clásica del espacio público.

La gravedad y profundidad de la crisis política y económica de 1930-1932, generó una nueva distribución del mapa político chileno, configurando la diada derecha-izquierda, tan propia del período de entreguerras europeo, y que habría

de perdurar en Chile durante todo el siglo XX, pulverizando —de paso— la tradicional división decimonónica entre conservadores y liberales. La vía del cesarismo populista⁵ fue derrotada con la caída del régimen autoritario de Carlos Ibáñez del Campo⁶ (1927-1931), así como la breve tentativa de la República Socialista⁷ (de junio a septiembre de 1932), surgida como la respuesta de un sector de la izquierda (militarista) ante el descalabro político y económico que vivía la sociedad chilena.

En Chile se daban todas las tendencias características de los treinta en Europa: comunismo, fascismo, derechas e izquierdas. En estos años por lo demás se empieza a hablar en Chile claramente de ‘derecha’ e ‘izquierda’ como polos definitorios del espectro político⁸.

Chile en estos años es plenamente parte de la ‘política mundial’, en el sentido de la simultaneidad planetaria de los temas del momento. Estos son los años de confrontación ideológica mundial, y el espectro que se da en Europa está al mismo tiempo presente en Chile. Ni la Revolución Mexicana, ni el APRA (a pesar del influyente exilio de muchos peruanos), ni el nacionalismo de los mexicanos de los años treinta tienen remotamente el mismo peso sobre el país que el desarrollo del marxismo, especialmente el comunismo...⁹.

A partir de 1933, el país retomó lentamente una relativa normalidad institucional, ayudado por una incipiente recuperación económica y la puesta en marcha de la nueva Constitución de 1925. Las figuras del Presidente de la República, Arturo Alessandri Palma¹⁰ (1868-1950), y su Ministro de Hacienda, el financista internacional Gustavo Ross Santa María (1879-1961), fueron determinantes en la articulación de una política que, sin ser ortodoxa, intentó sacar a Chile de la crisis, ciñéndose al legado de la economía política liberal. Ello planteó numerosos desafíos, sobre todo en un momento donde el sentido común de la época y la mayor parte de los economistas y políticos (especialmente en Europa) recomendaba la adopción del nacionalismo económico, el cual planteaba una serie de restricciones y controles al comercio internacional. De esta forma, el abandono por parte de Inglaterra del patrón oro, el 20 de septiembre de 1931, marcó un cambio radical en la percepción del comercio internacional y el libre intercambio de bienes y capitales. A partir de

aquel momento, se abrió una época de predominio del nacionalismo económico que duraría prácticamente cuarenta años.

El nacionalismo económico es mirado como un mandato para olvidarse de la ‘era liberal’, del ‘tradicionalismo’, y para ‘independizarse de los mercados extranjeros’. Todavía no existe una ideología Norte-Sur, pero está latente el principio de ‘desarrollo hacia adentro’ y, esencialmente, al menos en potencia, de la autosuficiencia, de la autarquía¹¹.

El período 1932-1938 resulta entonces, desde nuestro punto de vista, particularmente interesante, pues constituye el último intento de insertar al país en la economía capitalista global antes del llamado período del Estado de Compromiso¹² (1938-1970) o, como bien se lo ha dado a llamar, del modelo de Industrialización y Sustitución de Importaciones (ISI), donde dominó la planificación y la teoría estructuralista defendida por los economistas y técnicos de inspiración Cepaliana (CEPAL)¹³. Fue justamente en este segundo período cuando se instauró el sistema CORFO¹⁴, que daba cuenta de toda una corriente mundial que planteaba un crecimiento económico basado en la industrialización interna, el control del comercio internacional y una especial preocupación por el pleno empleo y la planificación económica.

Las últimas investigaciones en torno a la década de 1930 muestran una transición entre el liberalismo de antes de la Gran Depresión y el modelo de Estado de Compromiso y nacionalismo económico aplicado a partir de 1938. Entonces, la ruptura del consenso liberal no fue solo el resultado del programa de gobierno de una coalición política (Frente Popular Chileno), sino también la consolidación de un conjunto de medidas económicas que venían aplicándose desde 1932, pero cuya implantación tenía un carácter esencialmente temporal y orientado a la superación de la crisis. Es en este sentido que utilizamos la expresión del “último de los liberales clásicos” para referirnos a la política económica del Ministro de Hacienda, Gustavo Ross que, actuando desde el paradigma de la teoría clásica económica, paradójicamente preparó el camino para el modelo de nacionalismo económico que perduraría hasta 1970. Como plantea Joaquín Fermandois¹⁵ en su obra sobre el ministro Ross y las relaciones entre Chile y Estados Unidos entre 1932 y 1938, estamos frente a un proceso

donde se fusionan continuidad y cambio¹⁶. Este mismo autor estima así la crisis del liberalismo clásico en economía:

...esto se debía en buena medida a la pérdida de protagonismo de las ideas liberales de la derecha en la política chilena como consecuencia del cataclismo que significó la Depresión (1930). Esta no solo incrementó la idea de intervención estatal —y de potencialidad de la acción pública—, idea que venía de antes, sino que además le restó casi todo prestigio al mundo económico predepresivo. La economía política liberal (teoría clásica), es decir, de apertura a la economía mundial de mercado, quedó horra de legitimidad¹⁷.

La complejidad del declive liberal en los años de 1930 no pretende desconocer que, a partir de 1938 y hasta 1970, surge un modelo muy diferente al que había conocido el país hasta ese momento, y donde el Estado jugó el papel principal como el gran agente económico. A esto se sumaba un ambiente político y social donde se había instalado el conflicto de clase, acentuado por la nueva diada izquierda-derecha, a pesar de que la derecha en su conjunto (liberales y conservadores principalmente) seguía manteniendo una reserva de votos bastante alta, especialmente en las zonas rurales más tradicionales, donde el cohecho y las prácticas electorales clientelistas eran de antigua data. Ello no impidió que se expandiera la idea de que estos sectores solo representaban un sector ínfimo de la sociedad, cuyos intereses no correspondían al de la mayoría de la sociedad chilena.

La situación económica y social del país en 1932 era delicada. Se habían agotado las fuentes de crédito y financiamiento externo; al mismo tiempo, no había mercados para los principales productos de exportación del país o su precio había caído a niveles históricos (principalmente el salitre, cobre y productos agrícolas). Solo la producción manufacturera resistió mejor la crisis gracias a las primeras políticas de fomento de la industria nacional que se habían llevado a cabo desde los años 1920 (entre 1928 y 1935 los aranceles alcanzaron la cifra de 300%)¹⁸. El proteccionismo de la industria chilena, que inicialmente tuvo el carácter de una respuesta inmediata a la crisis y a la escasez de divisas para la importación de productos manufacturados, se convirtió en una de las principales doctrinas económicas (por casi cuarenta años) debido a un clima internacional de

entreguerras que favorecía el nacionalismo económico por la vía de los ejemplos europeos y especialmente de los regímenes fascistas y autoritarios de la década de 1930.

El liberalismo pragmático de los años 1930

La política económica del ministro Ross tuvo como objetivo principal el equilibrio del presupuesto y el superávit de las cuentas fiscales tras su caída en $\frac{2}{3}$ durante 1930. Solo se alcanzó tal equilibrio en 1934 y 1935. Por ello recibió numerosas acusaciones de ‘ortodoxo’ y ‘rígido’ en materias financieras¹⁹, haciendo caso omiso de muchas de las nuevas tendencias internacionales marcadas por las ideas del economista inglés John Maynard Keynes.

Fernandois plantea que un segundo elemento clave de la política económica de Ross fue el control sobre el Banco Central, generando una expansión moderada, aunque siempre en el límite del peligro inflacionario. Su política monetaria se alineó con un manejo del cambio fijo, lo cual favoreció las importaciones y la revaluación del peso chileno.

A pesar de la imagen de ‘ortodoxo’, su política en los años treinta deja ver un activismo económico que está más allá de cualquier ‘automatismo’; de hecho usó al Banco Central para ofrecer crédito a instituciones que promovieran la actividad económica, ejerciendo presiones inflacionarias delicadas, pero que no pasaron a mayores²⁰.

Una tercera clave de su plan fue el alza de impuestos, verdadero anatema para un seguidor de la escuela clásica, aunque aplicada principalmente a la compra y venta de productos agropecuarios. En el primer caso, se trató de un impuesto indirecto, que suele ser el menos resistido por los liberales, al considerársele ‘proporcional’ al consumo de las personas.

Las medidas de ajuste de Ross apuntaron a evitar los despidos masivos en el sector público, pero no impidieron que los sueldos se mantuvieran en un nivel mínimo durante todo su período, generando, según Fernandois, una política de contención de las demandas sociales que debió recurrir a la represión policial²¹, la censura e incluso la relegación de opositores políticos. Un cuarto elemento a mencionar fue su política de fomento de la construcción a través de incentivos tributarios, pero también de las obras públicas con el objetivo de reducir la

altísima tasa de cesantía posdepresión. En tal sentido, Ross asumió sin complejos algunas de las recetas keynesianas de la época, como —por ejemplo— el aumento del gasto público en ciertas áreas con un fuerte impacto sobre el empleo. A esto se sumó una política cambiaria de apoyo a las exportaciones a partir de instrumentos heredados incluso de la ‘República Socialista’, como fue la vigilancia y control de divisas, lo cual fomentó indudablemente el proteccionismo.

Finalmente, Ross mantuvo una fuerte línea de acción a favor de la recuperación de los precios de las materias primas que exportaba el país, especialmente producto de su convicción en el restablecimiento del comercio internacional a los niveles anteriores a la Gran Depresión²². El ministro actuó en forma pragmática y en muchos casos de manera autoritaria, pero teniendo en vista un supuesto retorno al equilibrio perdido, lo que demuestra su profunda confianza en los fundamentos de la economía política clásica y en lo que hemos denominado como consenso liberal²³.

Es indudable que la política de Ross no es producto de un liberalismo económico ‘puro’, especie que nunca ha existido. Pero tampoco se la puede tipificar como lo contrario —esquema que era y es popular—, es decir, como ‘estatismo’. Era producto de una orientación del modelo ‘clásico’ de economía, pero de un país donde la sociedad civil económica era débil, porque el ‘capitalismo’ (o economía de mercado) había sido débil en Chile²⁴.

Ross mantuvo y estabilizó su modelo económico gracias al apoyo de una cerrada coalición de derechas donde confluían liberales y conservadores, pero que defendían un modelo de sociedad que juzgaron amenazado por la formación del Frente Popular, el cual incluía no solo a los partidos de izquierda, sino que también al Partido Radical (centro), cuya crítica al sistema no era propiamente ideológica²⁵.

Si bien el ministro alineó a su sector político durante seis años tras un modelo de economía liberal-pragmática, ello no fue obstáculo para que los roces con Estados Unidos disminuyeran. Las medidas para salir de la crisis pusieron en juego intereses esenciales de la potencia del norte, y a su vez instalaron la idea

del nacionalismo económico, contrario al libre comercio que deseaba promover a nivel global. El New Deal del Presidente F. D. Roosevelt operó en términos de la política interna de Estados Unidos, pero no así de su relación comercial con el resto del mundo. En tal sentido, siguió siendo el adalid del librecambismo y de los acuerdos comerciales bilaterales. Ross debió maniobrar entre una poderosa oposición unificada en torno al Frente Popular, y que exigía la implementación de un plan económico, según el lenguaje de la época, y las exigencias compensatorias y comerciales de Estados Unidos producto de las medidas tomadas a partir de 1932.

La respuesta económica chilena ante la Depresión, el control de las divisas, el intervencionismo estatal, que ya de alguna manera alcanzó a las grandes empresas norteamericanas, los cambios discriminatorios, el congelamiento de fondos en dólares pertenecientes a ciudadanos norteamericanos, el cese del pago de la deuda externa y, sobre todo, la tendencia chilena a canalizar su comercio internacional por medio de los ‘tratados de compensación’ con los países europeos, todo ello no podía sino provocar las iras de Estados Unidos. Será esta óptica la que coloreará lo esencial de la mirada con que Washington observará a Chile en los años treinta...²⁶.

Aquello que los economistas liberales como Ross aceptaban únicamente como provisorio, terminó siendo, en 1938, el comienzo del modelo económico chileno de la segunda posguerra hasta 1970. Incluso, Eduardo Frei Montalva (Presidente de Chile entre 1964 y 1970) defendió durante los años 1930 posturas corporatistas y decretó la muerte del ‘viejo Estado liberal e inorgánico’ y el nacimiento de una nueva sociedad orgánica y jerárquica que a la vez evitase el socialismo estatista, al cual calificaba como una ‘grave plaga’²⁷. Opiniones como esta no solo revelan el peso de las ideas de la época, sino también el desencanto reinante respecto de la economía liberal y el comercio internacional.

Incluso, dentro del ambiente de los industriales y comerciantes, dominaba la idea de que si el mundo se encontraba en una franca etapa de defensiva económica, era absolutamente suicida que Chile estuviera desprovisto de controles y salvaguardias. El presidente de una de las asociaciones de empresarios más importantes de la época (SOFOFA)²⁸, Walter Müller, citaba a las economías

alemana y japonesa como ejemplos dignos de imitarse²⁹. Para ello recomendaba al gobierno la protección de la industria nacional y la puesta en marcha de un conjunto de restricciones a las importaciones. Fermandois, sin embargo, advierte sobre la importancia de no despreciar la crítica que tuvo esta postura por parte de otros liberales de formación más teórica, como fue el caso del senador conservador Héctor Rodríguez de la Sotta y el economista Daniel Armanet. Para este último, la protección aduanera violaba un principio básico de equidad, pues no solo se trata de un pago al Estado, sino también al particular que se beneficia de la protección. A su juicio, todo esto no tendría otro resultado que hacer permanente la inferioridad económica del país. Sin embargo, las visiones de liberales como Ross, Rodríguez de la Sotta y Armanet fueron minoritarias incluso entre los sectores empresariales de las décadas de 1930-40. Esto, sin duda, favoreció a quienes defendieron un modelo de planificación proteccionista.

La planificación, como técnica universal que atraviesa el universo ideológico, se presenta como panacea, y al revés de lo que ocurriría poco después, esta noción llevaría a darle la connotación de inevitabilidad positiva a la idea de ‘tecnocracia’. ‘Economía dirigida’ parecía estar en relación de ecuación con ‘economía científica’³⁰.

La racionalidad técnica entendida como planificación alcanzó su apogeo en estos años, especialmente al mirar los modelos de crecimiento económico de la Alemania nazi y de industrialización acelerada de la URSS durante la década de 1930³¹. Como bien señala Fermandois, el entusiasmo progresista en las virtudes prometeicas de la técnica y la centralización de la información, no dejaron espacio a la tradicional concepción clásica de la economía a la cual se juzgaba sin mayor base científica y sujeta a la experiencia empírica de las costumbres comerciales.

El modelo implantado por Ross durante los años 1930 (Ross regime) no aspiró, de ningún modo, al denominado ‘desarrollo hacia adentro’, sino que constituyó un episodio heterodoxo de liberalismo clásico, pero —a su juicio— necesario para la reincorporación de Chile al circuito de la economía internacional y el libre comercio. Sin embargo, el camino que seguiría el país a partir de fines de la

década de 1930 fue muy diferente, y es ahí donde las elecciones de 1938 y el triunfo del Frente Popular aparecen como un importante punto de inflexión.

Si bien la derecha apoyó en bloque la candidatura presidencial de Gustavo Ross, ello no significó que su labor estuviese libre de críticas provenientes de su propio campo. La principal acusación se relacionó con su escasa sensibilidad social, obsesión por los equilibrios presupuestarios y su imagen portadora de los aspectos más reprobables de una economía supuestamente de 'otra época'. Es más, se lo definió como un financista de modales afrancesados, proextranjero y soberbio al momento de discutir sus medidas con quienes no consideraba suficientemente instruidos en economía. La crítica de oposición al gobierno de Alessandri se concentró en la persona de Ross y de su política económica.

El señor Ross no es sino un gran especulador, y sabe aplicar su audacia de agiotista a sus actuaciones políticas, económicas o financieras. Es solo un arbitrista, un oportunista... No tiene preparación alguna para manejar las finanzas de una nación que se respeta. No es lo mismo ganar una gran fortuna en el tapete verde o en especulaciones de bolsa, que llevar bienestar, justicia y tranquilidad a un pueblo. El manejo de la Hacienda pública no es un negocio. En esto se han equivocado los que creen en el talento y en la preparación del señor Ross como estadista³².

La principal diferencia entre la doctrina de Ross y la de su principal contendiente (el candidato del Frente Popular, Pedro Aguirre Cerda), radicaba en que el primero no creyó nunca en el 'fin de la era liberal', sino que en una asociación entre el sector público y privado, que aprovechando las ventajas de los mercados interno y externo modernizasen al país. Aguirre Cerda, en cambio, defendía firmemente la necesidad de contar con un plan, liderado y conducido por el Estado, como principal actor y agente económico, que a su vez controlara el sector interno y externo de la economía. Paradojalmente, Ross tuvo menos apoyo de Estados Unidos que Aguirre Cerda, siendo que el primero estaba en mejor sintonía con el modelo de economía norteamericana. De acuerdo con Fermandois, ello se explicaría principalmente por la situación estratégica mundial de los años previos al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos necesitaba alinear en su órbita de influencia a la mayor cantidad de

países y alejarlos de otras potencias como Japón, Alemania y la URSS.

Gustavo Ross provenía de lo que se conoce tradicionalmente como la oligarquía chilena, es decir, de la élite que concentró el poder político y económico en Chile de manera exclusiva hasta el primer cuarto del siglo XX, y cuya riqueza estuvo asociada primeramente a los yacimientos mineros, el latifundio y, en menor medida, al comercio y a la industria. Su mundo intelectual y social era el de esta clase, y en tanto hombre de finanzas, su visión económica difícilmente podía ser otra que la del liberalismo clásico. No obstante lo anterior, su actuar en política estuvo marcado por el peso de la Gran Depresión y el posterior éxito de las teorías económicas estructuralistas. Sus referencias teóricas en economía venían especialmente de Francia, aunque admiraba especialmente el modelo inglés³³. No fue un hombre de formación académica sino un profesional autodidacta del mundo de las altas finanzas internacionales, que basaba su experiencia a partir de sus múltiples lecturas y del conocimiento empírico de los mercados mundiales. Ross demostraba el desprecio tradicional de los sectores conservadores chilenos hacia el mundo intelectual y la cultura popular del siglo XX chileno. Su apego de la democracia era más bien táctico, pues se confesaba admirador del 'autoritarismo desarrollista', encarnado en la figura del dictador y economista portugués Antonio de Oliveira Salazar (1889-1970), para quien el progreso económico solo podía ir de la mano de la disciplina fiscal un orden férreo en política.

El liberalismo autoritario de Ross se deriva de sus propias palabras, las cuales dan cuenta de su admiración por el individuo, las élites y su desprecio por todas las doctrinas que planteaban la preponderancia del Estado y de lo colectivo.

Para mí, comunismo, nazismo y fascismo son iguales; son la destrucción del individuo por el Estado; los repudio con igual fuerza a los tres. Cuando la democracia degenera en forma tal que se asemeja a cualquiera de esos tres regímenes no merece el nombre de tal y la repudio. Yo defiendo el régimen capitalista y no me asusta el decirlo; defiendo los principios de la democracia pero no sus abusos... La democracia es el gobierno de la selección y no de la masa inculta. Para mí el régimen ideal de gobierno es el de Inglaterra³⁴.

No fue un hombre apegado a los manuales teóricos clásicos, pues su experiencia financiera lo hacía dudar de las divagaciones demasiado intelectuales. De acuerdo con Fermandois, Gustavo Ross fue el último experto ‘aficionado’ en manejar la economía chilena antes de la llegada de los ingenieros y de los economistas profesionales de formación académica.

La orientación antidemocrática de Ross está cruzada por la necesidad de contar con un poder total que le permitiese implantar aquellas instituciones destinadas a evolucionar hacia sistemas políticos abiertos. En tal sentido, no está muy lejos del tradicional ideal portaliano de lo que se ha dado a llamar posteriormente como ‘democracia restringida’ o incluso ‘tutelada’³⁵, y que representa muy bien el ideal político de la derecha chilena durante todo el siglo XX. La cuestión del espíritu de cuerpo, la defensa de intereses particulares y de desprecio por la suerte de las mayorías, estuvieron en el centro de la crítica a Ross, incluso de sectores escindidos del Partido Conservador, como fue el caso de La Falange³⁶. A partir de las acusaciones de estos jóvenes socialcristianos, para quienes el dinero y el liberalismo poseían un aire perverso, se gestó la imagen de Ross como el Ministro del Hambre, y terminó por sepultar su carrera política. Para los partidos de la izquierda marxista, Ross no era otra cosa que un agente del imperialismo norteamericano, aunque sus mayores conflictos los haya tenido justamente con los representantes de Estados Unidos en Chile. Todo lo anterior, sumado a la tragedia del Seguro Obrero, generó un ambiente donde el modelo Gustavo Ross, el último de los liberales clásicos, tendría poco margen de maniobra. Los resultados de la elección de 1938, a pesar de lo estrecho de las cifras, confirmaron el peso de este clima antiliberal.

...este cuadro nos indica cómo el naufragio de la candidatura presidencial del Ministro en 1938 consolidó las fuerzas que se oponían a la economía política internacional que estaba implícita en el desempeño de Ross. Con ello la fuerza del modelo de ‘desarrollo hacia adentro’ y del temor a la competencia externa, como la captación de recursos financieros no estatales, que también estaba presente en el ambiente económico de los años 1930, aunque no en el Ministro, adquirió una fuerza que la hará pervivir por varias décadas³⁷.

La misión Klein & Saks: un antecedente del proyecto neoliberal

El período transcurrido entre 1938 y 1952 se conoce en Chile, desde la óptica de la historia política, como la época de los gobiernos radicales y el momento de instalación del modelo de Estado de Compromiso. Durante estos catorce años, la principal colectividad política fue indudablemente el Partido Radical, actuando como bisagra entre las colectividades de derecha e izquierda, y formando coaliciones indistintamente con unos y otros, pero siempre manteniendo un fuerte sello de identificación con las estructuras del Estado. Su carácter pragmático y el aprovechamiento de la situación política internacional (Segunda Guerra Mundial), le permitió conseguir tres administraciones consecutivas: Pedro Aguirre Cerda (1938-1941), Juan Antonio Ríos (1942-1946) y Gabriel González Videla (1946-1952), cada uno con un sello particular y una alianza política coyuntural. Durante estos tres gobiernos, se puso en marcha el modelo económico de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), el cual concentró la mayor parte de la economía productiva bajo el alero del Estado.

No obstante lo anterior, durante la década de 1950, comenzó a cuestionarse el modelo especialmente desde la derecha política, que formaba un bloque que incluía a conservadores y liberales. Aquí le cupo un papel central al periódico *El Mercurio*, el cual diagnosticó una crisis profunda, cuyo comienzo coincidía con la instauración de las políticas del Frente Popular a partir de 1939, las cuales definió como ‘socializantes’ y destinadas al fracaso. De acuerdo con Sofía Correa³⁸, el periódico omitió expresamente la participación, veinte años antes, de figuras claves de la derecha y del empresariado nacional en la puesta en marcha del modelo ISI (Ej.: Arturo Matte y Jorge Alessandri)³⁹. La causa principal del fracaso económico, a juicio de *El Mercurio*, se encontraba en el intento del Frente Popular de mejorar artificialmente las condiciones de vida de la población sin un aumento paralelo y equivalente de la producción, lo cual repercutió en una inflación creciente. Para lograr este salto social se abusó de la intervención estatal en el proceso económico, lo cual dio como resultado un Estado ‘hipertrofiado’, desproporcionado con respecto a la real capacidad productiva del país.

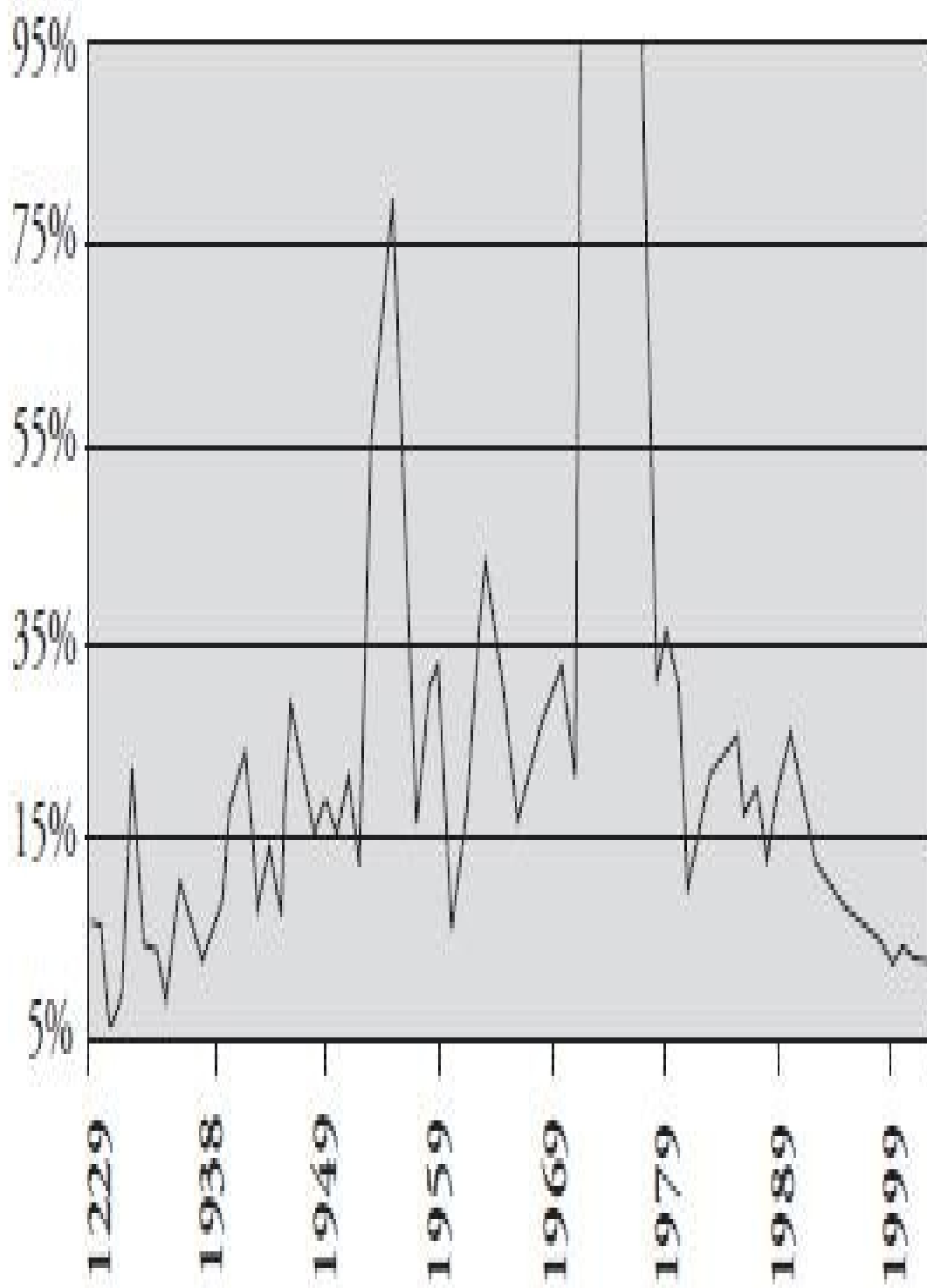
El deber del Estado es respetar la propiedad privada de los medios de

producción, asentado en el amparo de las libertades económicas y políticas de la ciudadanía. Su fracaso como empresario y productor de riquezas, además de ser mal administrador, está dado por su falta de sentido comercial y la propia naturaleza de las fluctuaciones de los precios en el mercado⁴⁰.

Según esta mirada, el crecimiento desproporcionado del Estado y de su burocracia había absorbido recursos propios y legítimos de la empresa privada, contradiciendo los ‘más básicos principios económicos’. En definitiva, el diagnóstico aseguraba que el desorden social, las huelgas y el peligro de Golpe de Estado solo se evitaría revirtiendo las políticas de los veinte años anteriores y volviendo al buen camino que dictaban las decisiones técnicas. Para ello se necesitaba liberalizar la economía de las trabas artificiales que la mantenían constreñida por debajo de sus reales capacidades, lo que se solucionaría a través de un régimen de libre empresa. A juicio de los editorialistas del diario, la falta de un plan de desarrollo armónico de industria y agricultura, que había afectado especialmente a la segunda, dio como resultado una falta crónica de divisas y el aumento constante de la inflación⁴¹. La solución solo podría provenir de una nueva política económica basada en la capitalización y en el aumento de la producción. La intervención estatal debía ser reemplazada por las leyes del mercado y el Estado, limitarse a dar orientaciones generales y hacer inversiones en obras públicas⁴². Por lo tanto, había que poner atajo a las políticas socialistas, estableciendo un nuevo plan cuya primera medida tendría que ser el control de la inflación.

Evolución de la inflación en Chile (1929-2002)

Inflación(1929-2002)



Fuente: Morandé, F. & Noton, C., “La conquista de la inflación en Chile”, Base para la Conferencia del Presidente de la Sociedad de Economía de Chile, Departamento de Economía - Universidad de Chile, 2004, p. 3.

En 1955, se había producido un giro importante en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo⁴³. Su administración decidió abandonar las políticas nacionalistas y populistas inspiradas en la imagen del modelo peronista argentino⁴⁴. Entonces, a partir de este momento, el gobierno forjó una alianza con la derecha para evitar, entre otras cosas, el descontrol de la inflación⁴⁵. Sin embargo, los líderes de esta última ya contaban con una idea bastante clara del modelo de desarrollo que, a su juicio, necesitaba el país. Fue así como se contactó en Washington, y posteriormente se contrató a los economistas estadounidenses Julius Klein y Julien Saks⁴⁶ para elaborar un plan económico general, el cual constituyó: ‘la primera propuesta política económica ortodoxa de corto plazo y de liberalización paulatina de la economía chilena’⁴⁷.

Los técnicos norteamericanos rápidamente diagnosticaron que la economía chilena sufría un desequilibrio entre el consumo y la capacidad productiva del país. La explicación monetarista era sencilla: el déficit presupuestario obligaba a emitir dinero que no estaba respaldado con la producción, lo que terminaba elevando los precios. Ello conducía a un nuevo aumento de las remuneraciones que a su vez acrecentaba el déficit fiscal, alimentando así el círculo vicioso. Las causas les parecieron evidentes: el enorme tamaño del sector público, el gasto fiscal excesivo en remuneraciones, la burocracia y la baja inversión pública en el sector productivo. Las políticas económicas de los últimos dos decenios habían, a su juicio, desincentivado la inversión privada a causa de las excesivas restricciones: fijaciones de precios, reajuste automático de salarios, control de las importaciones y del tipo de cambio, además de la protección de ciertas industrias artificiales respecto de la competencia extranjera.

Las medidas aconsejadas por la misión se inscribieron en la línea de la ortodoxia clásica⁴⁸.

En otras palabras, en primer lugar, debía atacarse el problema de la inflación disminuyendo el déficit fiscal y rompiendo la indexación (keynesiana) entre

salarios y precios. Con ello se pretendía retornar a la libertad de negociación y remuneraciones, para así avanzar posteriormente hacia la liberalización del comercio exterior. Se propuso también eliminar los subsidios, los controles de precios y los monopolios públicos y privados. De acuerdo con Sofía Correa, estas medidas no fueron especialmente bien recibidas por el empresariado chileno en su conjunto, a pesar del apoyo irrestricto de algunos sectores de la derecha y del diario El Mercurio⁴⁹. A juicio de Correa, esto no se debió a una mirada corporatista y cortoplacista de la derecha chilena, como sí lo sostienen entre otros los autores Tomás Moulian y Marcelo Cavarozzi⁵⁰, sino que justamente al hecho de que las recomendaciones de la misión Klein & Saks no conformaron un plan integral que beneficiara a este sector en términos de sus intereses de largo plazo. A juicio de los críticos contemporáneos, se trató más bien de un conjunto de medidas y recomendaciones, pero que no implicaron una visión de la economía en su totalidad, pues tendieron a explicar la crisis inflacionaria en términos exclusivamente monetarios.

A juicio de las principales organizaciones empresariales de la época, los economistas norteamericanos se preocuparon en exceso por la inflación sin tomar en cuenta la necesidad de aumentar el crédito y la producción. Solo El Mercurio continuó defendiendo incondicionalmente la labor de la misión, al considerar sus informes y recomendaciones de política pública como un primer paso hacia el necesario saneamiento económico. El diario insistió en que las políticas adoptadas, gracias al aporte de estos economistas, habían permitido evitar el descalabro de los precios del país, impidiendo con ello el desorden público, la caída de las instituciones democráticas e incluso, utilizando un argumento propio de la Guerra Fría, el fortalecimiento del comunismo. El periódico culpó al gobierno de Ibáñez y al Congreso Nacional de la prolongación de la crisis y de la falta de un programa global de transformaciones. Correa insiste muy bien en el punto al decir que difícilmente El Mercurio podía desentenderse de la misión, en tanto había sido el principal gestor de su contratación y, por lo tanto, la defendió incluso corriendo el riesgo de distanciarse de la opinión de la mayor parte de la derecha⁵¹.

Las crisis económica y social de la década de 1950, así como el desgaste político del gobierno de Ibáñez, dieron la oportunidad a la derecha, por primera vez, desde 1938, de recuperar el poder a través de las elecciones de 1958. El contexto mundial y la influencia de Estados Unidos en pleno período de la Guerra Fría, habían convencido al mundo conservador chileno de la necesidad de abandonar toda política de fortalecimiento y colaboración con el Estado y así reinstalar una

economía liberal a partir del Estado⁵². El discurso por la libertad se volvió también ideológico e intransable para este sector de la sociedad chilena, pues — a su entender— ya no había compromiso posible entre ‘libertad y comunismo’. El capitalismo era la única opción viable frente el intervencionismo estatal socialista y el último resguardo de las libertades políticas democráticas. Esta política dicotómica los hizo negar, como bien sostiene Correa⁵³, su participación activa y comprometida en los gobiernos radicales y en la propia conformación del modelo de Estado de Compromiso. Ello los obligó a revisar y reinterpretar su historia reciente, calificando los veinte años anteriores únicamente como un período de predominio de la centro-izquierda.

En el nuevo espacio de lucha internacional, la derecha se abrió un camino para llevar a cabo su proyecto de modernización capitalista sin alianzas políticas ni transacciones. Les faltaba solo un apoyo teórico propio al interior del país, tan influyente como podía serlo la CEPAL en aquellos años. Dicho programa no vendría de Europa, como había sido la tradición intelectual desde el siglo XIX, sino que de una universidad del medioeste de los Estados Unidos.

Mesianismo, abstracción matemática y ‘verdad científica’

Un grupo con una misión

Probablemente, uno de los rasgos que distinguen de manera más clara a los economistas formados en la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago⁵⁴, es su particular tradición intelectual y la visión del mundo que reciben y posteriormente deben transmitir. Esta visión de la disciplina como una ciencia normativa se consolidó especialmente en Estados Unidos como una reacción a la revolución keynesiana y el aumento del intervencionismo estatal a partir de la década de 1930.

Juan Gabriel Valdés argumenta que, no obstante lo anterior, la visión ortodoxa en economía y el conservadurismo de la Universidad de Chicago pueden rastrearse hasta el mismo momento de su creación, en 1892, cuando recibió generosas donaciones privadas como las de John D. Rockefeller (1839-1937), por lo cual algunos contemporáneos se refirieron peyorativamente a ella como la Universidad de la Standard Oil⁵⁵. Lo que resulta innegable es que existió un alto grado de concordancia entre los líderes industriales que usaron sus recursos para construir un vasto sistema de educación superior en Estados Unidos y un grupo de académicos que los asistieron en esta tarea. Esto generó la reputación de la Universidad de Chicago como esencialmente conservadora y pro-business, lo cual se confirmó durante toda la década de 1890 y a comienzos del siglo XX. Sin embargo, es solo a partir de la década de 1930 que se configura un grupo de destacados economistas conservadores en torno a la Universidad de Chicago y liderados por Jacob Viner⁵⁶. Entre ellos, destacaron las figuras de Henry Simons, Frank Knight y Lloyd Mints. A toda esta renovación, se agregó también el gran desarrollo de las ciencias sociales en la misma universidad gracias a los aportes de Charles Merriam y a la presencia del filósofo político conservador Leo Strauss. Las enseñanzas de este último impactaron fuertemente en el surgimiento de la idea del economista filósofo, cuya misión continúa siendo el defender los verdaderos principios y valores de la economía clásica.

Knight y Simons fueron quienes más influyeron en el carácter de la Escuela de Economía al insistir, más allá de todo conocimiento técnico o fundamento teórico, en el valor intransable de la libertad individual (individual freedom), en lo que Knight⁵⁷ denominaba como ‘la pasión irracional por la racionalidad desapasionada’. Simons, a su vez, fue el encargado de enseñar los principios fundamentales de esta visión mediante los cursos de Teoría de Precios y Finanzas Públicas. De esta época, destaca su texto: *A positive program for Laissez Faire* (1934), donde hace un llamado y un manifiesto a preservar la libertad personal en la vida económica ante el intervencionismo estatal post Gran Depresión. Estos hombres fueron los creadores del estilo que —otro connotado economista y Nobel de Chicago— George Stigler, ha definido como de ‘predica económica’, tan característico de los graduados de esta escuela y cuyo impacto sobre sus estudiantes produce aún hoy verdaderas ‘conversiones’ y una singular relación de afecto y protección entre maestros y aprendices. Para Valdés, tanto Viner, Mints, Simons y Knight fueron, sin contar sus indesmentibles aportes teóricos, los creadores de una singular concepción del economista: ‘...un cruzado cuyo trabajo es despojar a la gente de los prejuicios para que así puedan ver las cuestiones tal y como realmente son’⁵⁸.

Pero esta tradición se desprestigió y perdió el apoyo de sus principales mentores durante el período de la Segunda Guerra Mundial, y solo recuperó su fuerza con la incorporación del joven Milton Friedman en 1946⁵⁹. Este último pertenecía a la primera generación de estudiantes formados al alero del grupo fundador, junto a George Stigler, Rose Director Friedman, Allen Wallis y Aaron Director. Friedman se convirtió prontamente en la figura intelectual más destacada y en el máximo defensor de las ideas del libre mercado. Se había completado así la primera fase de la transición entre la vieja y la nueva escuela de economía de Chicago, la cual solo se consolidaría durante la década de 1950.

La visión económica de Chicago tomó realmente su forma más reconocible a partir de la década de 1930, cuando Keynes publica *The General Theory of Interest, Money and Employment* (1936), rebatiendo la clásica ‘Ley de Say’⁶⁰ bajo el argumento que en el largo plazo las reales fuerzas de la economía tenderían hacia el equilibrio del pleno empleo. Su mayor crítica estaba dirigida hacia las clásicas políticas deflacionarias como método de combate a la depresión económica. Insistía, a su vez, en la importancia del papel del Estado en asegurar un volumen global de demanda destinado a asegurar el pleno empleo. Tras décadas de desocupación persistente en Inglaterra y otros países capitalistas, Keynes ofreció una explicación convincente sobre el origen del

problema, pero también una serie de prescripciones que se aplicaron durante la guerra y posteriormente. Ello la convirtió además en la corriente principal de pensamiento económico en Estados Unidos y el Reino Unido, tanto a nivel gubernamental como académico. El predominio indiscutible de la visión keynesiana al interior de las más prestigiosas universidades de ambos países, alentó la paulatina profesionalización de la disciplina, así como su creciente prestigio intelectual al interior de la élite cultural y política anglosajona.

De acuerdo con Valdés, frente a la imparable nueva ortodoxia macroeconómica keynesiana, la tradición oral de la Universidad de Chicago apareció como una suerte de bastión de resistencia de aquellos pocos iniciados en los fundamentos de la verdad económica.

Aquellos que estaban profundamente preocupados por el peligro para la libertad y la prosperidad del crecimiento del gobierno, especialmente desde el triunfo del Estado de bienestar y de las ideas keynesianas, fueron una pequeña minoría asediada y considerados como excéntricos por la gran mayoría de nuestros colegas intelectuales⁶¹.

Esta característica de grupo asediado, incluso de iniciados, es lo que Valdés denomina como el carácter de secta racional que fue adquiriendo la Escuela de Economía de Chicago a partir de la década de 1940. Para este grupo, se hizo absolutamente necesario detener 'la vía colectivista' en Occidente o lo que Friedrich Hayek denominaba como El camino de la servidumbre⁶², mediante el restablecimiento de la enseñanza de la economía clásica. Para ello era necesario expandir estas ideas más allá de la universidad, reclutando nuevos adherentes tanto entre los irreductibles defensores del liberalismo como entre aquellos atraídos por la exhaustiva lógica económica de Chicago. Para 1950, ya se la reconocía entre sus pares norteamericanos como una escuela doctrinal, con visiones relativamente homogéneas en las cuestiones fundamentales.

El fortalecimiento de esta visión económica se benefició de las primeras fisuras visibles de la ortodoxia keynesiana. Al igual que como sucedió con la teoría clásica a principios del siglo XX, la nueva economía también comenzó a ser criticada hacia fines de la década de 1940. Ello producto de la primacía

indiscutible del enfoque del desempleo, por sobre algunas de sus consecuencias menos deseadas y más temidas: la inflación. A esto se sumaba la arrogancia con la que los economistas keynesianos más experimentados trataban a sus colegas más jóvenes, lo que tendió a reprimir la crítica constructiva y generar un problema de dependencia de la autoridad. El monetarismo se convirtió entonces en un refugio intelectual y posteriormente en una herramienta para la contrarrevolución teórica, pues justamente ponía énfasis en la explicación al problema de la inflación y las políticas necesarias para superarla, lo cual el keynesianismo no estaba en condiciones de hacer, al menos de una manera tan clara y directa.

Valdés insiste en la importancia de la figura de Milton Friedman durante los años 50 como un segundo factor de difusión y consolidación de la visión económica de Chicago. Es durante estos años que Friedman publicó tres trabajos que sentaron las bases de la 'contrarrevolución monetarista': *The Quantity Theory of Money: A restatement* (1956), *Program for Monetary Stability* (1959) y *Capitalism and Freedom* (1957-1962). Especialmente el último adquirió la categoría de un manifiesto de la filosofía económica y los fundamentos ideológicos que dieron fuerza y consolidaron a esta escuela de pensamiento económico.

La economía como ciencia normativa

Uno de los elementos centrales de la visión de la escuela económica de Chicago es la definición de su disciplina, y especialmente de su propia corriente como una ciencia positiva, en el mismo plano de las ciencias de la naturaleza⁶³. Sin embargo, el uso de conceptos como ‘equilibrio general’ o ‘utilidad máxima individual’ no solo dan cuenta de una visión filosófica sobre el ser humano, sino que también respecto del ‘deber ser’ de la sociedad en términos políticos y sociales (aspecto normativo). Valdés lo resume muy bien en el siguiente párrafo:

Chicago representa (a) una articulación particularmente coherente y vigorosa de la economía ideológica y positivista, apoyada con una metodología instrumentalista que, al final, sitúa la validación de su hipótesis en el ámbito de la actividad social y política. (b) Heredando una larga tradición de desconfianza económica y un desprecio por la política, Chicago constituye la “extrema vanguardia” del proceso de penetración actual de la economía en el pensamiento político⁶⁴.

En estos términos, la visión de Chicago es una doctrina que combina una vanguardia intelectual del neoclasicismo en economía, así como una penetración de las nociones económicas en el pensamiento político. El economista asume el rol de un reformador radical más allá de la teoría económica pura (o neutra), asumiendo de esta manera el carácter normativo que asigna a su disciplina⁶⁵. No le interesa solo comprender el mundo económico y explicar sus supuestas leyes, sino que transformarlo en lo que debe ser a partir de su particular visión sobre ‘lo natural’⁶⁶. La Escuela de Chicago optó por fusionar los aspectos positivos y normativos de la disciplina, vinculando de manera ineludible ciencia económica con política económica. En palabras del propio Milton Friedman:

En el debate de la política económica, Chicago representa la creencia en la eficacia del libre mercado como medio para organizar los recursos, el escepticismo acerca de la intervención del gobierno en los asuntos económicos,

y el énfasis en la calidad del dinero como un factor clave en la producción de la inflación. En los debates de la ciencia económica, Chicago es sinónimo de un enfoque que toma en serio el uso de la teoría económica como una herramienta para el análisis de una sorprendente y amplia gama de problemas concretos, más que como una estructura matemática abstracta de gran belleza, pero poco poder; como un enfoque que insiste en la comprobación empírica de las generalizaciones teóricas y que rechaza por igual los datos sin la teoría y la teoría sin los datos⁶⁷.

Siguiendo a David Wall⁶⁸, se pueden resumir los rasgos distintivos del economista de Chicago en los siguientes puntos. En primer lugar, la teoría les resulta de vital importancia (theory matters)⁶⁹. En segundo lugar, ella se vuelve irrelevante cuando no está inserta en un contexto empírico y, en tercer lugar, en ausencia de evidencia contraria, la mejor solución es siempre el mercado.

Otro aspecto no menos importante del rol del economista, es el poder que le confiere su dominio de la teoría. Según Boisard⁷⁰, esto se refuerza por el aspecto científico de la economía que deriva de la introducción de las matemáticas y de la modelización compleja a lo largo del siglo XX. Ello derivó en una fascinación de los economistas por los instrumentos matemáticos y los modelos abstractos⁷¹, los cuales están al alcance solo de los iniciados, generando de paso una frontera infranqueable entre el saber ‘experto’ y el saber ‘profano’.

Ello permite al economista reafirmar su posición como el único intérprete posible de la sociedad y detentor de la verdad. Lo que Pierre Bourdieu ha resumido en un aforismo: el verdadero poder de la magia de los enunciados reside en el misterio del ministerio⁷².

Esto se confirma en la propia visión de Friedman en *Essays in Positive Economics*⁷³, cuando define a la economía moderna como una ciencia axiomática y matemática, la cual —en tanto disciplina— es independiente de la forma, el valor, la belleza o la bondad de todas las cantidades no mensurables. Este funcionalismo modernista y anti-histórico muestra todo su desdén por las tradiciones culturales o intelectuales de la sociedad⁷⁴.

Siguiendo a Valdés, existen al menos tres elementos centrales detrás de la visión normativa de la economía de la Escuela de Chicago: el mercado, el gobierno y el monetarismo. El mercado es entendido como el marco natural de intercambio libre individual e informado de los seres humanos. Asimismo, constituye el paradigma de la libertad y de la organización social libre y no coercitiva. Este también es el foco y el objetivo de la acumulación económica científica. Dentro de este marco, el ser humano se desenvuelve, y es concebido como un ser racional y maximizador de utilidad, lo cual da origen a la actividad económica.

Al ejercer su libre arbitrio (*free will*) en forma natural, los seres humanos realizan transacciones económicas bilaterales que, por definición, son voluntarias e informadas, según Friedman. Es así como 'los otros' sirven de medios para los objetivos propios, en lo que se define como el principio del libre consenso mutuo. De este modo, se construye la noción básica de mercado a partir de las definiciones de Adam Smith y la creencia irrestricta en el principio de eficiencia del óptimo de paretiano⁷⁵. Se trata de un estado de equilibrio natural y armonía social basado en el intercambio individual que, en tanto marco central del análisis, no es afectado mayormente por las complejidades de la sociedad moderna (empresa, división del trabajo, dinero disponible, capital social y cultural, entre otros). El individuo es concebido entonces como un ente maximizador y utilitario, quien calcula sus ventajas y ajustes a partir de las oportunidades que encuentra al interior de un mercado donde los demás siguen el mismo patrón de comportamiento. El mercado es el único espacio donde es posible lograr la completa libertad, y por ello es necesario fomentarlo. La libertad se vuelve posible porque el mercado funciona generando competencia e impidiendo la coerción a todo nivel⁷⁶.

Dentro de esta concepción, la existencia de un gobierno se justifica solo en tanto actúa como árbitro del juego e intérprete de las leyes comunes para todos. En la medida que un mercado opere con mayor libertad, Friedman postula que se hace más democrático y, por lo tanto, se elimina la necesidad de un poder coercitivo. El mercado es el mecanismo que reduce la coerción al mínimo, en otras palabras, la necesidad de un gobierno y finalmente de la política.

En la larga tradición de la Escuela de Chicago, y retomando el principio de Adam Smith, el gobierno ha sido concebido como una suerte de monopolio, el cual inhibe la libertad efectiva al denegar todas las alternativas individuales posibles de una transacción particular⁷⁷. Incluso, autores como Milton Friedman y Gary Becker han confesado preferir los efectos nocivos de los monopolios

privados (naturales o no) antes que la regulación estatal⁷⁸. Para esta doctrina, más importante que el gobierno es el respeto por las reglas, las leyes y el orden, en tanto salvaguardias ante la coerción de un individuo sobre otro. Sin embargo, para Fried-man, una tarea ineludible del gobierno es la definición y defensa del derecho de propiedad, así como la mantención de un esquema monetario.

Un tercer elemento clave de la visión de Chicago es el llamado monetarismo, o como Friedman ha preferido llamarlo: la adhesión a la Teoría Cuantitativa del Dinero. En otras palabras, se trata de la teoría económica basada en la relación de causalidad que existe entre la cantidad de dinero en circulación y el nivel general de precios, de lo cual deriva que un aumento de la masa monetaria conlleva un alza de precios.

El principio director del monetarismo es que la inflación es en todo momento y en todas partes un fenómeno monetario. Su corolario principal es que solo un ritmo lento y constante de aumento de la oferta monetaria —en una línea con el crecimiento real de la economía— puede garantizar la estabilidad de precios⁷⁹.

Lo que se rescata aquí es el argumento de la economía clásica prekeynesiana, el cual postula que el nivel general de precios no aumenta si la cantidad de dinero se mantiene constante, pues el sector privado se ajusta automáticamente. De lo anterior Friedman dedujo que la inestabilidad de los precios tiene su origen principalmente en la política fiscal, monetaria y en las acciones regulatorias de los gobiernos⁸⁰. Este era el principal argumento contra la doctrina keynesiana, la cual postulaba que las variaciones en el gasto público, los impuestos y la deuda pública estabilizarían el nivel de precios y la economía real. Lo que estaba en juego era finalmente la defensa del principio del equilibrio general, del mercado como espacio privilegiado de intercambio y de la no injerencia gubernamental en la economía.

Para los economistas de la Escuela Chicago, la economía es —ante todo— la ciencia del mercado, de la elección de los hogares y de las empresas expresadas al interior del mismo; de un sistema racional cuya lógica responde finalmente a las decisiones libres e individuales de sus integrantes. En última instancia, el orden de la sociedad no proviene de la autoridad, sino que del mercado y del

sistema racional/natural que implica. Si el corpus de Chicago se redujese a una sola teoría, esta sería —según Karl Brunner⁸¹— la Teoría de Precios, capaz de explicar prácticamente todos los fenómenos sociales. En tal sentido, se la considera como el paradigma científico social por antonomasia, más allá de cualquier aporte de la sociología, la historia o la ciencia política.

Solo la economía y, especialmente, la economía basada en la teoría de los precios, tiene un valor analítico en materia social⁸².

El típico punto de vista sociológico apoya la teoría de la buena voluntad del gobierno y favorece la existencia de un Estado grande e ilimitado. Una aplicación del análisis económico, por el contrario, nos alerta sobre el hecho de que los políticos y los burócratas son los empresarios en el mercado político. Que persiguen sus propios intereses y tratan de encontrar las estrategias óptimas de atención a sus intereses. Y aquello que es ideal para ellos no es casi nunca óptimo para el “interés público”⁸³.

En definitiva, el apego estricto a un modelo basado en equilibrio perfecto, según el óptimo paretiano, tiende a una visión teórica que, más que internalizar el mundo económico, intenta modelarlo de acuerdo a su concepción previa. Esto, según Valdés, lleva incluso, en casos extremos, a desestimar o a considerar como anómalos aquellos resultados empíricos que implicaran una revisión de los principios de racionalidad y optimización de los actores. Lo que se intenta, entonces, es ajustar el mundo real a las hipótesis de trabajo y a los modelos.

El economista, en tanto gran ordenador, asume la doble misión de explicar la realidad y producir las reglas del juego de la sociedad. Estas son impersonales y válidas en todo tiempo y lugar, pues derivan del principio universal del mercado y de las leyes de la competencia. Entendido así, el economista es concebido como el garante último de la libertad individual, la cual da forma a la sociedad. Su tarea se vuelve trascendental, pues supera la mera competencia técnica para así elevarse a la esfera filosófica e incluso de lo que podríamos denominar como una misión cuasi religiosa.

La defensa de Friedman del mercado y de la libertad individual implica una motivación a la acción. No se trata solo de conocimiento, el cual se considera falso en la medida que permanece en la teoría y no intenta cambiar el mundo. En esta concepción económica, hay un llamado a la acción y al compromiso en el ámbito de la política pública. Sin embargo, la política no es concebida como una esfera propia de análisis, sino reducida a un mercado de intereses, lo mismo que el proceso democrático. Este es uno de los elementos más potentes de la visión económica de la Escuela de Economía de Chicago, la cual desarrolló una visión de una comunidad de ‘verdaderos’ economistas, quienes poseían supuestamente una verdad revelada sobre el poder redentor del mercado. Fue así como, de acuerdo con Valdés, se han convertido además de técnicos calificados, en filósofos morales y sociales siguiendo, según el concepto de Max Weber, el camino de una ‘secta racional’.

La Universidad Católica de Chile y el convenio con la Universidad de Chicago

El período transcurrido desde el fin del gobierno de Arturo Alessandri Palma (1938), la sucesión de gobiernos radicales (1938-1952) hasta el experimento político del caudillo populista Carlos Ibáñez del Campo (1952-1958), estuvo marcado por la puesta en marcha del modelo de Estado de Compromiso, es decir, con una fuerte intervención del Estado en términos del control del comercio internacional, la regulación de salarios, la emisión monetaria, la protección de la industria nacional y la propiedad estatal de diversas empresas consideradas como estratégicas. La teoría económica en boga fue el llamado ‘Estructuralismo’, defendido por los economistas de la CEPAL y cuyos fundamentos teóricos se hallaban, entre otros aportes, en las tesis del economista inglés John Maynard Keynes. El liberalismo de la escuela clásica prácticamente desapareció del debate público y de las aulas universitarias tal y cual se lo había conocido hasta las primeras dos décadas del siglo XX, e incluso aquel que denominamos como ‘liberalismo pragmático’ de la década de 1930.

Solo a partir de mediados de los años 1950, las ideas liberales comenzarían tímidamente a ser debatidas públicamente, pero ahora bajo el prisma de la Guerra Fría y de una concepción positivista de la economía que posteriormente sería conocida como ‘monetarismo’ o teoría ‘neoclásica’. Pero indudablemente se trató de una postura muy minoritaria, defendida por algunos irreductibles defensores del liberalismo clásico reunidos en torno el periódico El Mercurio, pero —sobre todo— a partir la nueva generación de economistas que se formaron en la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) a partir de 1955.

Cuando se mira en perspectiva la instauración por la fuerza de una economía liberal basada en el denominado paradigma neoclásico, desde 1973, resulta imposible no referirse a la influencia de la Escuela de Economía de la Universidad Chicago y a la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ambas Instituciones formaron parte de un acuerdo de cooperación firmado en 1955, el cual incluía el intercambio de profesores y la puesta en marcha de un programa de becas de posgrado para estudiantes chilenos

en la Universidad de Chicago.

La PUC había sido creada en 1888 como una respuesta de la Iglesia Católica frente a lo que se pensó como una creciente ola de laicización de la sociedad chilena. Fue una de las respuestas del mundo conservador católico chileno ante la influencia, cada vez mayor, de la Universidad de Chile en la vida política y cultural del país, así como por la conquista, la autonomía y el reconocimiento por parte de las autoridades públicas ante la labor educativa de esta institución. Según Ricardo Krebs, esta primera etapa de instalación y consolidación se extiende hasta los inicios de la década de 1950, cuando se produce una expansión importante de las áreas del conocimiento cubiertas por la universidad, así como de su infraestructura, creación de sedes regionales y especialmente en cuanto al número de estudiantes⁸⁴. Solo entre los años 1957 y 1967, la universidad dobló su número de alumnos, dejando de ser —al mismo tiempo— un reducto del conservadurismo católico chileno y abriéndose hacia nuevos sectores socioeconómicos y también políticos, aunque manteniendo claramente su sello religioso. Durante estos años de expansión, la PUC firmó numerosos convenios con universidades extranjeras, destacando el realizado con la Universidad de Chicago, el cual, de acuerdo a los trabajos de Stéphane Boisard⁸⁵ y Juan Gabriel Valdés⁸⁶, estaba destinado especialmente a renovar la escuela de economía⁸⁷, a partir de los preceptos de lo que se consideraba en esta institución norteamericana como la ‘verdadera ciencia económica’.

El convenio de intercambio fue ofrecido originalmente a la Universidad de Chile, cuyo director de la Facultad de Economía, Luis Escobar Cerda, lo rechazó debido al carácter supuestamente ortodoxo e ideológico de la formación económica de la Universidad de Chicago y a su negativa de abrir la cooperación a otros planteles universitarios chilenos. La PUC no poseía en aquellos años el prestigio internacional, la influencia ni el tamaño de la Universidad de Chile, y su carácter confesional generó algunas resistencias iniciales en los encargados norteamericanos del proyecto, acostumbrados a trabajar con universidades públicas o bien privadas, pero sin filiación religiosa expresa.

De acuerdo con Juan Gabriel Valdés, la transferencia ideológica realizada entre el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago y la Facultad de Economía de la PUC, fue un evento organizado entre las autoridades de ambas instituciones a través de ciertos actores claves, a quienes se sumaron un grupo de hombres de negocios (conservadores chilenos) que deseaban revivir las ideas del libre mercado a partir de mediados de los años 1950. Para esto, Valdés propone

algunos elementos claves del análisis:

- La transferencia ideológica desde la Escuela de Economía de Chicago fue originalmente promovida en 1955 por la ICA (International Cooperation Administration), perteneciente al gobierno de Estados Unidos. Ello se hizo en el marco del programa de ayuda a países en desarrollo. La ICA necesitaba un interlocutor que le permitiera iniciar el ‘experimento’ que implicaba insertar a Chile en el universo de las ideas más conservadoras con respecto al libre mercado que se estaban proponiendo en Estados Unidos. Lo que se buscó fue combatir y contrarrestar lo que se percibía como una ‘concepción socialista’ en la enseñanza de la economía en Chile (estructuralismo cepaliano), y así transformar la administración económica del país en el lapso de una década.
- La institución encargada de ‘transferir’ el mensaje, la Universidad de Chicago, era reconocida por producir un tipo especial de profesional de la economía, lo cual no era negociable en el acuerdo original ofrecido a las universidades chilenas (Universidad de Chile y PUC). Para ellos, las razones estuvieron en la oposición de esta escuela a las teorías del desarrollo propuestas por las Naciones Unidas a través de la CEPAL, y a la experiencia de los economistas de Chicago en la Teoría del Capital Humano, lo cual interesaba especialmente a los encargados de los programas de asistencia del gobierno norteamericano.
- La entidad receptora, en este caso la PUC, presentaba una vacante y una deficiencia justamente en la formación de economistas, lo cual no ocurría en la Universidad de Chile. Esta debilidad sirvió para pensar en una reestructuración total que permitiese crear un departamento de estudios económicos y al mismo tiempo servir de apoyo técnico a una clase empresarial en formación.
- Las circunstancias inmediatas de la transferencia fueron organizadas minuciosamente. Para ello se envió a un grupo de estudiantes chilenos a la Universidad de Chicago, quienes fueron cuidadosamente seleccionados por profesores de esta entidad. Con ello se minimizó cualquier posibilidad de distorsión en la socialización de los futuros detentores del conocimiento. Este aislamiento ‘ideológico’ respecto de un continente en plenos cambios sociales, reforzó una cierta idea mesiánica de grupo y de una ‘ciencia perseguida por razones políticas’, ayudando —al mismo tiempo— a resaltar el papel de la Universidad de Chicago como único referente legítimo de estas ideas

importadas.

El proceso de implantación de estos conceptos transferidos ocurrió al interior de un grupo específico de estudiantes e intelectuales de la PUC. El grupo no solo se reapropió de los conceptos, sino que los reprodujo por medio de la enseñanza y la investigación, pero también adaptando el modelo de transferencia hacia otros países de Latinoamérica como Argentina y Colombia.

- La capacidad de hacer operativo el modelo de transferencia dependía de la posibilidad de alterar completamente el medio donde fuese aplicado. En este caso, el micromundo de la enseñanza de la economía en la PUC. En cambio, las posibilidades de hacerlo en el plano ‘macrosocial’ del país estaban, en aquellos años, completamente bloqueadas debido a las características de la sociedad chilena, su sistema político y a la tradición de un Estado fuerte y centralizado. Según Valdés, las ideas de Chicago fueron un producto importado ajeno a los empresarios y economistas chilenos, y también a la clase política tradicional, incluso de aquellos que se identificaban con el capitalismo decimonónico chileno. Los cambios sugeridos no eran realizables dentro del contexto de Estado de Compromiso que caracterizó a la sociedad chilena entre 1938 y 1973. La implantación del modelo transferido requería, por lo tanto, de una revolución completa respecto a las circunstancias políticas y sociales del país.
- La socialización⁸⁸ creciente de la sociedad y de la economía que se produjo a partir de los gobiernos de Eduardo Frei Montalva (1964-1970) y Salvador Allende Gossens (1970-1973), y la consecuente polarización ideológica y política, crearon gradualmente la posibilidad para que el grupo de recepción expandiera su influencia y despegase en el momento en que la agudización de la crisis pusiera fin a la democracia chilena y se abrieran las puertas para la reacción autoritaria.
- El marco provisto por la crisis y el establecimiento de un régimen autoritario (dictadura militar), hicieron posible la imposición de las ideas importadas dieciocho años antes, y así —a partir de 1974— desde la estructura del Estado, se inició una radical y acelerada transformación de la economía y de la cultura en Chile.

Estos ocho puntos propuestos por Valdés, objetivados desde un enfoque

sociológico, dan cuenta del marco en el cual se produce la transferencia de un nuevo tipo de liberalismo económico en Chile (neoliberal), cuyo origen no está únicamente en los teóricos europeos clásicos del siglo XVIII y XIX ni tampoco en las costumbres y tradiciones del comercio internacional observadas en Chile hasta aquel momento. Tampoco se enlaza con la corriente filosófica y económica liberal inaugurada en la Universidad de Chile por el economista francés Jean Gustave Courcelle-Seneuil en los años 1850. Lo que se verá, a partir de la década de 1950, es un tipo especial de concepción del liberalismo nacido en la época de entreguerras como reacción al intervencionismo estatal democrático (Keynes), como así a sus versiones totalitarias de izquierda (colectivismo soviético) y de derecha (fascismo desarrollista).

Los actores en cuestión

El acuerdo de cooperación entre la Universidad de Chicago y la PUC no se habría realizado de manera tan expedita sin la participación de tres actores centrales: Albion Patterson, Theodore W. Schultz y Julio Chaná. Estos hombres pueden ser llamados con justeza los ‘padres’ de los Chicago Boys, aunque no hay que dejar fuera al verdadero mentor de este grupo de economistas: el profesor Arnold Harberger. Posteriormente, otros individuos tendrán gran influencia en el desarrollo de esta particular élite intelectual: Agustín Edwards, dueño del periódico conservador más influyente de Chile (El Mercurio) y más adelante el General Augusto Pinochet.

Albion Patterson es una pieza clave en la concepción del modelo de ayuda al desarrollo (‘ideología del desarrollo’ según Valdés) que Estados Unidos pone en marcha en la década de los 50, dentro de un contexto de freno a la expansión de la izquierda a nivel mundial. El interés de Patterson por la disciplina económica surge durante su estadía en Paraguay, como consultor en temas agrícolas. Esta experiencia y la falta de información técnica disponible en América Latina, lo convencieron de la necesidad de formar cuadros altamente calificados en estas áreas, especialmente en temas económicos.

Patterson consideraba demasiado pobre la formación de los economistas locales, mayoritariamente de clase media y, a su juicio, demasiado ‘estatistas’, pero valoraba su mirada crítica al latifundio y ansias de modernización. Patterson no concebía una buena asistencia al desarrollo sin economistas y técnicos bien entrenados para tomar decisiones a nivel gubernamental, y evitar lo que denominaba la ‘inestabilidad política crónica’ de los gobiernos de la región. En su opinión, los economistas debían estar por encima y ojalá alejados del conflicto político, y su efectividad solo se mediría en tanto reserva de excelencia y objetividad técnica. Aunque no se trataba de cualquier tipo de técnica, sino de aquella surgida de la organización social y económica estadounidense que, según su criterio, era la mejor que este país podía exportar. Aquí se halla, según Valdés: ‘El impulso fundamental del espíritu misionero norteamericano... La ingenuidad es quizás una de las características típicas de los misioneros de todo tipo’⁸⁹. Detrás de esta actitud, se vislumbraba la idea de que América Latina debía reconocer, después de todo, la innegable superioridad de la civilización norteamericana.

Fue en Paraguay donde Albion Patterson estableció su primer contacto con Theodore Schultz, Decano del Departamento de Economía de Chicago, experto en temas de agricultura y desarrollo económico y, a su vez, le pareció el más moderno e inspirador de los consultores con quien había entablado relación. En 1953, Patterson llegó a Chile, desde Paraguay, como director del programa AID Point Four en reemplazo del anterior consejero norteamericano de agricultura, catalogado como arrogante por las autoridades locales. De inmediato, Patterson propuso al gobierno de Carlos Ibáñez del Campo la puesta en marcha del Plan Chillán para el desarrollo agrícola e integral de esta zona al sur del país⁹⁰. Patterson consideró que Chile poseía mucha mayor y mejor información técnica que Paraguay, pero una muy mala formación académica. Fue durante las discusiones para implementar este plan que Theodore Schultz comentó a Patterson sus trabajos sobre el Capital Humano, lo que produjo una enorme impresión en Patterson y le dio un sustento científico a sus convicciones sobre la importancia de la educación en el crecimiento económico. Schultz era una figura reputada como experto en temas de agricultura y desarrollo, además de decano de uno de los centros de estudios económicos más reconocidos en Estados Unidos.

Patterson poseía una buena relación con el rector de la Universidad de Chile (Juan Gómez Millas), por lo que ofreció primero a esta casa de estudios el acuerdo de intercambio financiado por el gobierno norteamericano y bajo la dirección de los profesores de Chicago. Ellos conducirían la modernización de los estudios de economía en la Universidad de Chile y el establecimiento de un programa de becas de posgrado en Chicago. Sin embargo, el plan fue rechazado por el rector al considerar que los profesores de la Facultad de Economía, mayoritariamente ‘estructuralistas’, se opondrían tenazmente al proyecto, debido a la reputación conservadora de los economistas de Chicago y al patrocinio de Estados Unidos. Valdés menciona que la versión de Gómez Millas difiere en cuanto a que el rechazo no fue de carácter ideológico, sino respecto a la restricción del acuerdo a solo una universidad estadounidense, cuestión que para Patterson no era negociable. En otras palabras, el acuerdo se realizaba con la Universidad de Chicago o simplemente no habría acuerdo.

El rechazo de la oferta de Patterson estaría más bien en la percepción crítica que había sobre el tipo de economía que se enseñaba en Chicago, al contrario de las corrientes estructuralistas y del desarrollo que predominaban en la Universidad de Chile.

Fue en 1954 cuando el rector de la PUC, el obispo Alfredo Silva Santiago, contactó a Patterson para solicitarle ayuda, específicamente para la reorganización del Departamento de Agricultura de la Universidad⁹¹, el cual contaba con un significativo número de estudiantes provenientes de las familias latifundistas más importantes del país. Sin embargo, Patterson lo convenció de trabajar juntos en un nuevo programa para la formación de economistas, el cual se puso en marcha antes de transcurrido un año de esta primera reunión.

Estábamos todos emocionados, esto fue una gran cosa para el país, la introducción a la economía a nivel de posgrado para lograr un equilibrio en el pensamiento económico en el país. Allí estaba el mejor grupo de libre mercado para venir a ayudarnos. Estábamos generando una alternativa⁹².

La frase anterior de Patterson refleja el deseo de contrarrestar la influencia del estructuralismo y del marxismo en la formación de los economistas chilenos. A este último se lo acusaba de haber ‘infiltrado’ al gobierno chileno y a las universidades, no obstante que era mucho más importante, en este aspecto, el peso de las teorías de Keynes y del cepaliano Raúl Prebisch. No se puede dejar de notar el lenguaje propio del período de la Guerra Fría⁹³, donde la lucha no se daba solo en el ámbito militar o de la política, sino que también en el del conocimiento, sobre todo de aquel relacionado con la economía y la organización social. La imposición de la Universidad de Chicago se explica justamente por la necesidad de contrarrestar el pensamiento económico de izquierda a través de la más reputada escuela económica de libre mercado (Free Economics) disponible en Estados Unidos. Pero finalmente no se trató solo de un acuerdo de apoyo externo, como se definió en un principio, sino que de una suerte de apropiación de una débil facultad por parte de otra institución poseedora de una fuerte tradición académica⁹⁴.

Las autoridades de la PUC habían demostrado, desde inicios de la década de 1950, su incomodidad con el predominio de la enseñanza de la economía estructuralista en Chile. Ya en 1953 se habían opuesto a la creación de una ‘facultad modelo’ para la enseñanza de las teorías del desarrollo en Chile. Ello ocurrió durante la Conferencia de Facultades de Ciencias Económicas, desarrollada en Santiago durante el mismo año⁹⁵. Fue aquí donde el abogado y

profesor de la PUC, Julio Chaná Cariola, recibió la misión de oponerse a tal idea, pues —a su juicio— restaría autonomía a su propia Facultad, pero más importante aún, pondría en peligro las enseñanzas de la Iglesia Católica frente al predominio de otro plantel (la Universidad de Chile), donde predominaban las orientaciones ‘francmasonicas, marxistas y materialistas’ de toda índole.

Dentro de este contexto, el decano Julio Chaná y su equipo iniciaron la modernización de la Facultad de Economía de la PUC⁹⁶. Rápidamente se integraron al organigrama ingenieros comerciales, civiles, abogados, educadores y líderes empresariales, quienes tuvieron la misión de transmitir sus conocimientos y especialmente su experiencia en los negocios privados. Chaná, además, tenía la convicción y la necesidad de contar con profesores extranjeros que enriquecieran el currículum de la enseñanza económica. Fue a través de un ex-alumno de la PUC y graduado del MIT⁹⁷, Patricio Ugarte Hudson, que Chaná se puso en contacto con los encargados de la ayuda internacional del gobierno de Estados Unidos, y específicamente con Albion Patterson.

En este punto, coincidimos con Valdés en el hecho que estos contactos no estuvieron ajenos a la dificultad de buscar un acuerdo con instituciones que proponían un tipo de liberalismo pragmático muy ajeno al conservadurismo clásico de corte hispanista que predominaba en la PUC y en la derecha chilena de mediados del siglo XX. Esta tensión se vivió al interior del núcleo de las autoridades de la PUC, donde la influencia intelectual de un Estados Unidos ‘protestante y liberal’, respecto de la tradición europea clásica, y de las enseñanzas de las encíclicas de la Iglesia Católica, no era vista con buenos ojos.

En un principio, Chaná y su equipo propusieron a Patterson la creación de un instituto de promoción de la inversión extranjera, ligado a la Facultad de Economía de la PUC. Este último aceptó la idea solo en la medida en que se mejorara la formación económica al interior de la universidad. De lo contrario, a su juicio, no habría mayor interés por parte de las autoridades norteamericanas en poner en práctica el plan. Por su lado, Patterson insistió en que se firmara un contrato, este se haría únicamente con la Universidad de Chicago. Fue así como durante el mes de enero de 1955, con la anuencia de las máximas autoridades de la PUC y de Albion Patterson, se avanzó hacia un acuerdo general sobre las características del intercambio académico.

Estamos convencidos de que el desarrollo económico nacional debe llevarse a cabo esencialmente a través de la iniciativa del capital privado. No estamos, por tanto, a favor de las políticas de planificación de los recursos económicos del país, que suponen una dirección única, sino de un estudio sistemático de nuestras condiciones y recursos con el fin de dar eficacia a la inversión de capital privado... Para alcanzar nuestro objetivo nos falta un elemento que es indispensable: nos faltan los expertos o líderes que puedan proporcionar la orientación necesaria para obtener la máxima promoción de la economía nacional mediante la aplicación de los recursos privados⁹⁸.

Patterson debió lidiar también con la desconfianza de algunos profesores norteamericanos encargados de evaluar el proyecto, para quienes el hecho de establecer un acuerdo con una universidad católica donde los principios religiosos podían intervenir en el desarrollo del quehacer científico, planteaba un problema no menor para la viabilidad del plan. Chaná ofreció, por su parte, la no interferencia religiosa ni ideológica en la enseñanza de la ciencia económica al interior de la universidad, lo cual constituye —hasta el día de hoy— una particularidad de la enseñanza económica de la PUC⁹⁹. Fue justamente Theodore Schultz el encargado de exponer los aspectos centrales de la enseñanza económica impartida en Chicago, lo cual —según Valdés— habría ‘fascinado’ a las autoridades de la PUC, especialmente al decano Chaná.

El acuerdo definitivo entre ambas universidades comenzó a tomar forma a partir de junio de 1955, tras lograr la autorización de la embajada norteamericana para traer a un grupo de profesores de esa nacionalidad para establecerse en Chile y crear una escuela de posgrado en economía y formar capital humano. El 27 de junio del mismo mes, Theodore Schultz, director del Departamento de Economía de la Universidad de Chicago, llegó a Santiago acompañado de otros académicos, entre quienes destacaba el profesor de economía de la misma unidad, Arnold Harberger. Tras permanecer una semana en el país y discutir los detalles del acuerdo, el equipo retornó a los Estados Unidos para conseguir las autorizaciones en sus respectivos departamentos. Los contratos finales fueron firmados los días 29 y 30 de marzo de 1956, estableciéndose un período inicial de trabajo de tres años.

Si miramos de manera retrospectiva, una de las claves para el éxito del proyecto fue el apoyo inicial de una serie de personalidades y líderes gremiales del mundo

empresarial chileno de la época, quienes ayudaron de diversas formas a los nuevos economistas que se formarían en la PUC a partir de 1955¹⁰⁰. Para este selecto grupo de hombres de negocios, la reintroducción del libre mercado en Chile por la vía académica fue una clara oportunidad de revalorizar sus ideas, al mismo tiempo que preparar el terreno para enfrentar el modelo desarrollista del Estado Empresario por medio del lenguaje científico y el debate público. Ello también permitiría generar una élite tecnocrática para cuando pudiese reinstalarse en el país una economía liberal desregulada e integrada a los circuitos del comercio internacional.

Si bien estamos de acuerdo con la tesis anterior, la información que poseemos del período no nos permite inferir hasta qué punto existía conciencia en los alcances que tendría el acuerdo entre la PUC y la Universidad de Chicago, ni menos respecto de las circunstancias históricas que permitirían ponerlo en práctica en tanto modelo macrosocial a partir de 1974. Hasta mediados de la década de 1960, incluso en los Estados Unidos, la teoría neoclásica monetarista era defendida por muy pocos expertos, pues lo que predominaba era el paradigma keynesiano y el papel central del Estado en la economía.

El grupo de economistas que fueron formados en la PUC a partir de 1956, constituyó un verdadero reducto, absolutamente minoritario respecto de la mayor parte de sus colegas de la época, incluso de aquellos pertenecientes al campo conservador. Pensar entonces en una suerte de plan o conspiración destinada a cambiar por completo la economía y la enseñanza de la economía en Chile, nos parece exagerado. Ello no implica descartar la fuerza que tuvo la idea de constituir un grupo especial y compacto, detentor de un tipo de conocimiento supuestamente superior al de sus pares y que por medio de la práctica y el lenguaje científico no podría sino intentar imponerse más temprano que tarde.

La lucha contra el estructuralismo en economía

La mirada estructuralista

Las llamadas teorías del desarrollo dominaron la esfera económica mundial a partir de la década de 1930 hasta mediados de la década de 1970. Su origen es diverso, pero surgieron en un momento donde el impacto de la Gran Depresión se hizo sentir a nivel global, a lo cual se sumó el rápido proceso de descolonización que se inició con la Primera Guerra Mundial y que se aceleró a partir de 1945.

La necesidad de contar con un cuerpo teórico que permitiese pensar el desarrollo y el crecimiento económico de las sociedades recientemente liberadas, estuvo en el origen de estas teorías y en la masificación de la ortodoxia keynesiana. En América Latina, estas ideas comenzaron a tomar la forma de una teoría económica y de propuestas concretas de política pública a comienzos de la década de 1950, sobre todo con las publicaciones de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), especialmente a partir de los trabajos del economista argentino Raúl Prebisch¹⁰¹, quien confiaba profundamente en la capacidad del Estado para transformar la sociedad¹⁰².

Para el caso chileno, la influencia de figuras de la CEPAL como los economistas Aníbal Pinto Santa Cruz¹⁰³ y Jorge Ahumada¹⁰⁴, fueron fundamentales para el desarrollo de esta teoría en el país. El primero tuvo una importante repercusión continental a través de su obra *Chile: un caso de desarrollo frustrado*¹⁰⁵, donde explora las supuestas causas estructurales del atraso económico del país, y se plantean, además, las posibilidades de salir del círculo del subdesarrollo.

En síntesis, el cuerpo teórico de la economía cepaliana se basó en los siguientes puntos:

- Una crítica a las tradicionales teorías del comercio internacional, más específicamente a la naturaleza de la relación entre el centro y la periferia.
- Las razones que favorecen la industrialización y el análisis de los principales problemas de la región.
- Planificación estatal como un imperativo para el desarrollo (reforma Agraria +

industrialización por sustitución de importaciones).

- Las formas de financiamiento externo deben promover el desarrollo.
- La integración regional como un imperativo para el desarrollo.
- La naturaleza estructural de la inflación en América Latina y una crítica a las políticas convencionales de estabilización.
- La dimensión social del desarrollo económico. El análisis de los factores sociales que lo sostienen y los efectos en la estructura del empleo según los diferentes sectores sociales.
- La situación y la posición de América Latina frente a las políticas del comercio internacional y los intercambios entre los países en desarrollo y las naciones industrializadas.
- Una visión integradora y global de los problemas del desarrollo en la región, y de los cambios estructurales necesarios para promover un desarrollo más dinámico y una distribución más equitativa de los recursos¹⁰⁶.

En definitiva, las ideas centrales de la propuesta cepaliana se basaban en (1) la premisa de una desigual distribución de las ganancias del comercio entre el centro y la periferia, y (2) la inadecuación de los mecanismos del mercado en la asignación de los recursos necesarios para el desarrollo, lo cual implicaba un papel central del Estado en esta tarea. Es aquí donde se encuentra el núcleo del modelo de 'desarrollo hacia adentro', propio de lo que se conoció entre 1938 y 1973 como Estado de Compromiso, Estado Desarrollista o Estado Benefactor.

De lo que se trató, en definitiva, fue de la puesta en marcha, a partir de 1938¹⁰⁷, de un sistema político y económico que descansaba tanto en un proceso de democratización creciente de la sociedad como en el desarrollo económico conducido por el Estado. Este modelo orientado hacia adentro fue la respuesta a las sucesivas crisis producidas tras el fin de la Primera Guerra Mundial y que desembocaron en la Gran Depresión de 1929/30. Pero la política de sustitución de importaciones y planificación de la economía por parte del Estado, necesitaba de reformas estructurales tanto a nivel productivo e impositivo como respecto de la propiedad de la tierra. La CEPAL consideraba ambos puntos como elementos

claves e intransables para el éxito de la estrategia desarrollista. Pero tales cambios solo de produjeron de manera gradual y limitada entre 1938 y 1964, y a partir del gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970) se intentó ponerlos en marcha por medio de una re-forma agraria de mayor alcance y una serie de medidas orientadas a dotar al Estado de nuevos poderes en el ámbito de la economía¹⁰⁸.

Durante este período, el Estado, a través de la Corporación de Fomento (CORFO), alcanzará su máxima importancia como motor de la economía chilena. En estos años, se ‘chilenizó’¹⁰⁹ la industria cuprífera (la más importante del país en términos productivos) y se puso en marcha un ambicioso programa de educación, vivienda y salud para los sectores medios y pobres de la población. Sin embargo, el Estado chileno comenzó a sentir el desgaste de estas políticas a partir de 1967, aunque el modelo ya mostraba signos de agotamiento desde fines de la década anterior.

Alfredo Calgagno distingue dos períodos (clásico y moderno) en el desarrollo de la teoría cepaliana¹¹⁰. El primero se extiende entre 1948 y 1965, donde predomina una interpretación estructuralista del subdesarrollo. El segundo comienza a partir de este año y está centrado en la Teoría de la Dependencia y la Teoría del Capitalismo Periférico¹¹¹. Ambas épocas dan cuenta de una concepción voluntarista de la economía política, donde los factores sociales, históricos y económicos están profundamente imbricados, pero donde sobre todo el Estado tiene un papel que jugar como conductor y promotor principal de una política de desarrollo sustentada en la planificación y en la racionalidad. La concepción del mundo en dos polos es vital dentro de esta teoría, pues la relación centro-periferia es la que explica las diferencias estructurales de las distintas economías, las cuales se han acentuado desde la Revolución Industrial en desmedro de los países periféricos.

La crítica neoclásica de los economistas de Chicago

La efectiva libertad de la persona solo se garantiza a través de un gobierno autoritario que ejerce el poder a través de normas impersonales, iguales para todos (Sergio de Castro)¹¹².

La transferencia de la concepción económica de los profesionales formados en Chicago, tenía por objetivo contrarrestar la influencia de las teorías descritas anteriormente. En otras palabras, presentar una alternativa al pensamiento de la CEPAL y de las ideas desarrollistas, pero insistiendo en su obsolescencia y en su origen ideológico. Por el contrario, los detentores del nuevo conocimiento pensaban que el simple desplazamiento del desarrollismo y la aplicación de los nuevos principios y métodos al ámbito de las políticas públicas, potenciarían el desarrollo económico como en una suerte de automatismo.

“Yo no creo que exista más una Escuela de Chicago como tal. La Escuela de Chicago fue realmente George Stigler y Milton Friedman. Ambos eran muy fuertes y muy claros defensores de un punto de vista conservador en la política del gobierno en un momento en que esa mirada no era predominante. Ellos fueron los exponentes de las fuerzas del libre mercado en un momento en que la intervención del gobierno era una solución muy popular para prácticamente todos los problemas... Así que creo que el resto del mundo se ha movido mucho más cerca del punto de vista de la Escuela de Chicago, y como resultado Chicago ya no es diferente del resto del mundo”¹¹³.

A juicio de los primeros profesores visitantes de Chicago, el subdesarrollo de Chile se debía principalmente a malas decisiones económicas. En otras palabras, el país estaba sumido en este estado producto de que su economía y sus economistas eran deficientes e ignorantes de los principios básicos de la disciplina. Se los consideró, según su particular visión, demasiado influyentes,

pues sus decisiones habían provocado un enorme control gubernamental que había impedido el correcto funcionamiento de los principios del mercado y, por lo tanto, frenado el desarrollo.

En otras palabras, de acuerdo a lo que plantea Valdés, el objetivo del acuerdo entre la Universidad de Chicago y la PUC (Proyecto Chile¹¹⁴) no solo tuvo como objetivo promover a un grupo de profesores e investigadores bien entrenados en economía, sino también crear un tipo especial de economista encargado de una misión específica¹¹⁵: generar el conocimiento necesario para servir a los sectores modernos y dinámicos de la economía chilena dentro de los preceptos estrictos de una disciplina científica que sacaría al país del mal camino que venía siguiendo desde fines de la década de 1930. Este sería, entonces, el origen de que la única opción ofrecida por la ICA a las universidades chilenas haya sido el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago.

Los diferentes reportes de los académicos de dicha institución revelan la idea de que Chile serviría como un laboratorio de investigación sobre ciertos temas de especial interés para algunos profesores de este plantel, pero también para el estudio de la economía de los países en desarrollo. Fue lo que ocurrió respecto de las teorías de Theodore Schultz y Gary Becker sobre el Capital Humano¹¹⁶, pero sobre todo para la puesta en práctica de las ideas monetaristas sobre el origen de la inflación¹¹⁷. Chile constituía en aquellos años un buen caso de estudio sobre este último punto.

En oposición directa a la mirada estructuralista, el modelo de economía neoclásica de la década de 1960 despreciaba el papel de la historia y de los factores socioculturales en el análisis de los elementos que determinan el desarrollo económico de los países. Al contrario, se pensaba que la simple introducción de la ‘buena ciencia económica’ más la adopción de correctas políticas públicas, impulsaría la modernización y el desarrollo en el mejor interés de todos los grupos sociales. Esta mirada presuponía un consenso normativo entre los objetivos individuales y sociales. Entonces, más que una oposición a ultranza respecto de la mirada estructuralista, lo que vemos es un desprecio hacia una escuela de pensamiento que se había vuelto dominante en la región gracias al trabajo de difusión de la CEPAL. Los reportes de Chicago consideraban esta situación únicamente como el resultado de la acción de grupos de interés locales: una deficiente formación económica o incluso la simple ignorancia¹¹⁸. Las discrepancias y la lucha ideológica entre monetaristas y estructuralistas no fueron reconocidas como tales por los primeros, negando de esta forma

legitimidad discursiva a los segundos.

La formación económica importada en la PUC puso un énfasis especial en los aspectos más reconocidos del corpus neoclásico; es decir, la teoría de precios y monetaria¹¹⁹, incluyendo el necesario efecto lateral de minimizar, sino directamente menospreciar todos aquellos elementos del conocimiento que no estaban incluidos en la definición profesional de la actividad del economista. Esto abarcó todas las explicaciones históricas, culturales, estructurales e incluso psicológicas, las cuales fueron consideradas como ajenas a la disciplina o, en la mayoría de los casos, simplemente descritas como pura y simple ideología. Esto tuvo claras repercusiones en la formación profesionalizante de los nuevos economistas de la PUC y en su aislamiento respecto de otras escuelas, pues el estructuralismo cepaliano se alimentaba fuertemente de referencias históricas y sociales como determinantes de las estructuras económicas¹²⁰. El desprecio hacia la política económica chilena de fines de los años 50 se tradujo también en una crítica abierta al Estado chileno, los empresarios políticos, pero especialmente a los adversarios tradicionales de la CEPAL.

En este entorno confuso aparecen algunas publicaciones de los adelantados¹²¹ de Chicago, recién retornados al terruño. Ellas recomiendan menor intervención estatal en el comercio exterior, mayor racionalización de los procedimientos para seleccionar proyectos públicos de inversión y de las barreras para reducir enormes ineficiencias que producen y abogan por un tipo de cambio más libre. ‘¡Oh Señor, esto es escandaloso!’ grita el Estado, los empresarios políticos (ministros de Jorge Alessandri)¹²², la CEPAL y sus entornos¹²³.

Todo lo anterior viene a reafirmar lo que Valdés define acertadamente como la negación de la condición de economista por parte de los detentores del nuevo conocimiento importado.

La adopción de la perspectiva de profesionalismo de Chicago llevó, como resultado, no solo a la conclusión de que eran malos economistas (los cepalianos), sino a la consideración más drástica de que no eran economistas, al menos no en el sentido moderno y científico del término¹²⁴.

La Universidad de Chicago encontró entre los economistas chilenos y otros profesionales, una cierta desconfianza frente a los procesos del libre mercado y la convicción de que el libre mercado y la estructura de precios libres no asignan los recursos de manera eficiente. Los economistas locales parecen estar convencidos de que el análisis tradicional de la economía marginal no es útil para el caso chileno (y el de otros países latinoamericanos). El equipo de Chicago notó una cierta reticencia entre ellos para someter a un examen crítico sus puntos de vista sobre la política económica. Cuarto reporte enviado desde la PUC a la Universidad de Chicago por el equipo de profesores visitantes de esta última entidad¹²⁵.

La investigación económica al interior de la PUC se organizó, en gran medida, bajo el modelo de Chicago, el cual enfatizaba en que los principios desarrollados en los cursos no solo debían ser internalizados, sino también aplicados en plena sincronía. Esta práctica constituyó la premisa básica de una concepción positivista de la ciencia económica. De esta manera, los jóvenes profesionales formados bajo esta perspectiva participaron de un programa cuya hipótesis principal fue la necesidad de corregir las supuestas malas decisiones económicas de las autoridades del Estado.

Sí, se puede decir que en Chicago los profesores estaban, y están, imbuidos del convencimiento de que los mercados operan eficientemente y que, por ello, son la mejor forma de organizar la distribución de los recursos productivos de los países. Otra convicción profunda es que el papel del economista es entender cómo funciona una economía, para describir y medir los efectos (costos y beneficios sociales y/o privados) que producen las políticas y distorsiones introducidas por los gobiernos y los shocks internos y externos que las golpean. El fin último es esclarecer los efectos para convencer sobre políticas eficientes que lleven a los países a su máximo potencial productivo. En pocas palabras, lo que se pretende es influir en las políticas públicas¹²⁶.

Para enmendar el rumbo de las políticas públicas era necesario generar un

cambio radical en la teoría y en las prácticas de los economistas. Justamente, la fortaleza de la formación de la Universidad de Chicago residía en esta estrecha vinculación entre teoría y práctica (como diagnóstico y técnica aplicada en políticas públicas). Las concepciones de tipo estructural (sociales, históricas, antropológicas) debían quedar fuera de todo análisis, al ser consideradas poco rigurosas según sus estrictos parámetros científicos.

A medida que pasaba el tiempo, se configuraba la visión de una escuela científica, donde lo importante era buscar la mejor y más simple explicación de cómo funciona nuestra sociedad, y eso se obtiene con una combinación de análisis teórico y verificación empírica en forma profunda y repetida¹²⁷.

...(antes de Chicago) no estábamos acostumbrados a esa disposición lógica y positivista. Nuestra formación universitaria chilena había sido una mezcla de institucionalismo, historia, poca lógica y sí mucho de normativo y de imaginación¹²⁸.

A partir de esta mirada, el economista chileno Dominique Hachette¹²⁹ hace un breve resumen de los fundamentos aprendidos en la Universidad de Chicago como claves del desarrollo económico y en las antípodas de la visión estructuralista.

Lo que aprenderemos en Chicago, entre otras cosas, es que (1) el realismo de los ciclos sobrepasa al realismo de la explicación estructuralista, (2) que la inflación tiene algo que ver con el dinero y este con el déficit fiscal, (3) que nadie nace con 20% de inflación como órgano corporal complementario obligatorio, (4) que el ahorro y la inversión son escasos por las regulaciones que los obstaculizan y la inflación que falsea el marco de los precios, (5) que no hay nada sagrado en el tipo de cambio fijo, si no se dan otras condiciones de estabilidad macroeconómicas, (6) que las barreras aduaneras y no aduaneras pueden introducir más costos sociales que beneficios sociales aunque puedan ser favorables a algunos agentes económicos en particular, (7) que la integración no es panacea y que no se soluciona automáticamente la falta de extensión y profundidad de los mercados firmando tratados comerciales bilaterales y

plurilaterales, (8) que el almuerzo gratuito no existe, y (9) que la inflación es la única forma de impuesto que se puede imponer sin legislación¹³⁰.

En la cita anterior, se aprecia el uso de un lenguaje que busca, por medio de la ironía y la metáfora, explicar los principios económicos a un público más amplio y denostar al adversario. Este recurso solía y suele ser utilizado dentro de lo que se conoce como la tradición oral de la enseñanza de la economía en la Universidad de Chicago y que se remonta a la década de 1930.

Un último elemento que ayudó a cimentar el proceso de transferencia fue el entorno social propio de la Facultad de Economía de la PUC. Se trataba de un espacio pequeño constituido por un número muy limitado de estudiantes que, en su mayor parte, poseían varios rasgos en común. En primer lugar, se trataba de jóvenes —mayoritariamente de género masculino— provenientes de clase media/alta y con una sólida formación en inglés producto de una educación secundaria en colegios privados y bilingües altamente selectivos. En segundo lugar, si bien algunos se definían como ‘apolíticos’, gran parte de ellos simpatizaba con las ideas conservadoras o a lo más social cristianas, pero con una visión más individualista en contraposición al conservadurismo chileno de viejo cuño. Esto último, según Valdés, habría favorecido el alto grado de recepción ideológica de las nuevas ideas.

A lo anterior, se sumó que un número no despreciable de estos estudiantes provenían de familias de inmigración europea relativamente reciente, lo que favoreció la idea de movilidad social a través del éxito económico individual y lo que en la actualidad se ha denominado como ‘espíritu emprendedor’¹³¹. Esto también permitió la buena recepción de los valores clásicos individualistas de la sociedad norteamericana (ideal del self made man), tradicionalmente poco estimulados en un Chile donde las élites habían sido, desde los inicios de la República, culturalmente europeo-céntricas y más propicias al espíritu de cuerpo.

Los hombres de la Escuela de Economía y la purga de los heterodoxos

Los primeros economistas de la PUC formados en Chicago eran parte de una pequeña comunidad epistemológica aislada, incluso dentro de su propia facultad. Por ello, de acuerdo con Valdés¹³², debieron refugiarse en las redes latinoamericanas promovidas por la Universidad de Chicago a partir de los contactos del profesor Arnold Harberger. El Proyecto Chile pareció estar en peligro durante los primeros años de la llegada de los nuevos economistas, pues estos contaban únicamente con el apoyo de sus profesores norteamericanos. Pero esta situación cambiaría en 1964, cuando el grupo de los Chicago Boys desplazó al cuerpo académico tradicional del control de la Facultad de Economía de la PUC.

Valdés destaca que un elemento central del aislamiento del grupo se explica por la desconfianza de una buena parte del empresariado chileno de la época y de los políticos tradicionales de la derecha chilena respecto de la nueva ciencia económica de Chicago. Estos la veían solo como una disciplina académica, con la cual compartían —a grandes líneas— sus principios básicos. Sin embargo, la realidad política les decía que vivían en un sistema de compromiso, donde lo más importante era la integración social, no como resultado de unos valores democráticos internalizados por la élite, sino que como una estrategia de equilibrio frente al conflicto social y la posibilidad de una revolución. El Chile de las décadas de 1940-70 se caracterizó por un modelo de creciente demanda por participación social y política, pero en un contexto de insuficiente crecimiento económico. El mantenimiento de la paz social y de los equilibrios políticos resultaba más importante que el desempeño de la economía en términos de sus capacidades máximas. El mundo conservador chileno había aceptado, de una u otra manera, participar de este modelo al cual la mayoría de los economistas estructuralistas y desarrollistas chilenos adhería. En otras palabras, la explicación económica pura estaba sujeta e incluso determinada por lo que se denominaba en la época como las ‘realidades políticas y sociales’ del país¹³³.

La modernización en la enseñanza de la economía en Chile fue seguida por el Proyecto Cuyo, en Mendoza, Argentina, y también bajo la coordinación de

Harberger. Este espacio sirvió de refugio y de aliciente a los economistas chilenos llegados de Chicago, quienes aún no se consolidaban al interior de la PUC. Esta experiencia les sirvió como antesala a lo que posteriormente realizarían en su propia casa de estudios.

Los primeros graduados de Chicago contratados por la PUC en 1958 fueron Sergio de Castro, Luis Fuenzalida y Pedro Jeftanovic. Ellos propusieron un cambio fundamental en los cursos al introducir el sistema semestral, además de un fuerte énfasis en la estadística, econometría y la teoría monetaria. Los resultados en términos de postulaciones a la carrera de Ingeniero Comercial fueron importantes al aumentar de 70 a 300 estudiantes entre 1957 y 1959. Después de 1958, un nuevo grupo de graduados de Chicago llegó para integrarse como académicos a la Escuela: Ernesto Fontaine, Benito Vignolo (1959), Rolf Lüders, Mario Albornoz, Alberto Valdés, Raúl Yver (1960), Juan Naveillán, Ricardo Ffrench-Davis (1961), Mario Corbo, Gert Wagner, Pablo Baraona, Sergio Muñoz y Hans Picker (1962)¹³⁴. Varios de ellos fueron contratados como profesores de tiempo completo.

Los estudiantes y miembros de la Escuela recibieron con preocupación al equipo de profesores y al cursus de la nueva economía. Las novedades fueron percibidas como amenazas tanto para completar sus carreras académicas como respecto de su posición al interior de la facultad. Tanto el decano Julio Chaná como el resto del equipo de profesores estaban muy lejos del patrón que imponían los recién llegados. Desde los inicios de la década de 1960, fue especialmente Sergio de Castro quien lideró la transformación de la Facultad y no Chaná, quien había concebido originalmente el proyecto. El conflicto entre ambas visiones solo estalló a partir de 1962, cuando este último decidió apoyar al grupo de académicos y estudiantes que habían criticado el modelo de modernización.

Las críticas al Proyecto Chile fueron de tres tipos: primeramente, se lo consideró abstracto e inaplicable, debido al supuesto carácter ‘esotérico’ y ‘dogmático’ de sus diagnósticos y propuestas. En segundo lugar, el corpus normativo neoclásico chocaba con muchos de los postulados de la Doctrina Social de la Iglesia, que orientaba todas las actividades universitarias de la PUC, especialmente en los momentos en que se llevaba a cabo el Concilio Vaticano II. Por último, el argumento más contundente se relacionaba con la manifiesta intolerancia de la nueva escuela de pensamiento respecto de la enseñanza de otras perspectivas económicas al interior de la facultad, especialmente si ello incluía un desprecio manifiesto hacia el entorno sociohistórico del país, elemento fundamental de la

teoría estructuralista.

Las críticas de un reconocido economista cepaliano como Aníbal Pinto Santa Cruz a las ideas de los economistas de Chicago sobre el origen de la inflación, reforzaron en estos últimos no solo un sentimiento 'anti-izquierda', que muchos de ellos ya poseían, sino que además fortalecieron su espíritu de cuerpo y el modelo del técnico profesional que se fomentaba en la Universidad de Chicago. Esta idea de grupo de minoría, de 'fortaleza asediada', provocó un tipo de reacción específica contra todo tipo de críticas, especialmente las estructuralistas, las cuales fueron sistemáticamente tildadas de políticas. Como recalca Valdés, para la mayoría de los profesores que venían de Chicago, como para sus nuevos alumnos en Chile, el choque entre ambas visiones dentro de la Facultad de Economía de la PUC era la expresión inevitable de la modernización.

La elección como Presidente de la República del candidato de la derecha, Jorge Alessandri Rodríguez, en 1958, marcó un momento importante para los economistas monetaristas. Por primera vez, tuvieron la posibilidad de asesorar directamente a un gobierno en ciertos aspectos de la política económica¹³⁵. Sin embargo, no consideraron esta participación como política, sino que esencialmente técnica. El grupo estuvo encargado de entregar a las autoridades información destinada a disminuir el papel del Estado y hacerlos entender los problemas económicos y los efectos posibles de ciertas políticas en la economía del país¹³⁶. No obstante lo anterior, fueron muy críticos de la presencia de empresarios y administradores industriales en puestos técnicos de responsabilidad económica. Estas críticas directas al gobierno de Alessandri y también a ciertos aspectos de su política cambiaria, causaron incomodidad entre las autoridades de la Facultad de Economía de la PUC. Finalmente, se acordó que sería respetada la libertad en los temas de investigación de cada profesor, pero tendría que llegarse a un acuerdo consensual para publicar cualquier documento bajo el nombre del Centro de Investigación Económica de la Facultad.

El decano Chaná intentó incorporar nuevos investigadores con distintas visiones, pero el equipo de Chicago percibió esto último como una falta de confianza en sus capacidades. A esto se sumó el apoyo y la crítica del sacerdote jesuita Roger Vekemans, director de la Escuela de Sociología de la PUC, quien temía por la predominancia de la Facultad de Economía y la introducción del monetarismo en la universidad. Veckemas no podía aceptar una doctrina que dejara de lado los

valores morales y las enseñanzas de la Iglesia. Esto atentaba además contra su proyecto de hacer converger las disciplinas de economía y sociología en tanto ciencias afines.

Entre 1962 y 1963, el Centro de Investigación Económica se mantuvo aislado intelectualmente del resto de la PUC y de la sociedad chilena, concentrando el trabajo de los académicos venidos de la Universidad de Chicago en sus temas que, en tanto comunidad epistemológica, les interesaban mayormente. Sus publicaciones circularon de manera interna, siendo leídas principalmente por ellos mismos y por sus mentores norteamericanos. Financieramente fueron apoyados desde el exterior, pero sus servicios no fueron requeridos por la comunidad local, al menos en la medida que ellos lo esperaban inicialmente. En términos generales, el proyecto parecía estar en peligro debido al aislamiento y la falta de perspectivas. Algunos de los nuevos profesores dejaron la universidad en 1962 para dedicarse al proyecto de la Universidad de Cuyo (Ernesto Fontaine y Raúl Yver), mientras otros partieron a Colombia producto de las fricciones con el decano Chaná (Sergio de Castro y Luis Arturo Fuenzalida).

El apoyo definitivo a los Chicago Boys vino de un grupo de estudiantes convencidos en las virtudes de la nueva teoría y de la no intervención de otras unidades académicas en su facultad. La tradición oral de Chicago había finalmente surtido efecto entre las nuevas generaciones de estudiantes chilenos, instalando la idea de que lo que enseñaban los nuevos académicos formados en Estados Unidos era la ‘verdadera’ economía a pesar de la creciente dificultad de los cursos, la insistente abstracción matemática y el alto número de lecturas en inglés. A ello contribuyó también la intervención de Vekemans debido a un incidente entre estudiantes por una cuestión de exámenes, lo cual generó la molestia entre los alumnos de economía, quienes se unieron a sus profesores en rechazo del interventor¹³⁷.

A partir de este y otros episodios, Valdés plantea el surgimiento de un ethos del economista profesional, que rechaza la intervención externa, generando una suerte de sello identitario que portan hasta el día de hoy los egresados de economía de la PUC. De hecho, este autor va más allá al postular que:

La independencia y el carácter esencial de la Escuela de Economía fue probablemente el elemento básico en la generación de una ideología tecnocrática

que vincularía a un grupo de estudiantes y de profesores de manera durable¹³⁸.

Rolf Lüders¹³⁹, uno de los economistas formados en Chicago que regresó en 1962, plantea que para ese año el ambiente en la facultad era mucho más proclive hacia los nuevos profesores, especialmente debido al prestigio alcanzado por estos últimos a través de algunos cursos como Teoría de Precios I y II. Incluso, algunos estudiantes se mostraban orgullosos de obtener las mejores notas en algunos de estos ‘complicados’ cursos. Para 1963, la relación de fuerzas favorecía a los economistas de Chicago, quienes además se quejaban de los bajos sueldos que recibían, argumentando que las fuerzas del mercado los podrían hacer emigrar hacia mejores horizontes salariales.

En parte, esta incertidumbre derivaba de la falta de comunicación entre el Decano y los miembros la Facultad. Comentarios como los que les hizo el Decano durante el año anterior, sin embargo, les sugirió que el futuro del equipo de profesores estaba amenazado. Antes de finales de enero el tema fue llevado a un punto culminante mediante una carta dirigida al decano, firmada por todos los miembros de jornada completa de la Facultad de Economía, presentando sus quejas. El decano Chaná renunció rápidamente¹⁴⁰.

El grupo de economistas monetaristas, liderados por Sergio de Castro¹⁴¹, tenía clara conciencia de su capacidad para comandar la Escuela de Economía. A esto se sumaba el apoyo de los profesores de Chicago: Arnold Harberger y Gregg Lewis, quienes además se encontraban en aquel momento de visita en Chile para monitorear el proyecto.

El apoyo de los estudiantes al equipo de Chicago tuvo como consecuencia directa la renuncia del decano Julio Chaná, del director del Centro de Investigación, Mario Albornoz, y de Alberto Neumann, director de la Escuela de Economía. El rector de la Universidad Católica, el obispo Alfredo Silva Santiago, decidió no apoyar a Chaná ni a Vekemans en su querrela sobre el tipo de economía que se enseñaba en la facultad, dejando el camino libre para una identificación directa e unívoca entre el Proyecto Chile y la Escuela de Economía de la PUC. Ya no era posible una solución de compromiso, tras la

presión de los profesores norteamericanos. La universidad arriesgaba nada menos que el fracaso de un proyecto clave y la pérdida de interés de otras fundaciones estadounidenses en financiar acuerdos similares. El costo de una renuncia generalizada y perder a todo el staff de profesores formados en Chicago, era demasiado alto para la universidad. Finalmente, Pablo Baraona fue nombrado Director de la Escuela de Economía, mientras que Sergio de Castro retornó de Colombia para hacerse cargo del Centro de Investigación Económica. Para el año 1964, los heterodoxos de la escuela tradicional habían sido derrotados y ya no hubo dos visiones de cómo enseñar economía en la PUC.

Fue así como el Proyecto Chile había cumplido exitosamente su primera etapa de implantación, no sin la ayuda y protección constante de los profesores norteamericanos, quienes además transmitieron su particular visión económica a toda una generación de discípulos en Chile.

Sin plantear la existencia de un plan ni menos de una conspiración, podemos decir con certeza que el siguiente desafío para el grupo era poder influir decisivamente, y ojalá definir, las políticas económicas a nivel nacional. La oportunidad estaba a solo algunos años de distancia.

Gremialismo y monetarismo: una fusión renovadora

El surgimiento en Chile, durante la década de 1960, de un discurso económico que incorpora elementos liberales, neoclásicos pero políticamente conservadores, es el resultado de una fusión entre sectores del catolicismo integrista de la PUC y un sector importante de los economistas formados bajo las nuevas ideas importadas desde la Universidad de Chicago. Esta particular relación entre un materialismo económico liberal, importado de un país de cultura protestante como Estados Unidos¹⁴², y un catolicismo cercano del hispanismo peninsular, solo se explica por las especiales condiciones de efervescencia política del Chile de la década de 1960, y el ambiente singular de disputa ideológica al interior de una universidad relativamente pequeña como la PUC. Las consecuencias posteriores que tendría para el país el surgimiento de esta corriente no se condicen con lo acotado y limitado que resulta apreciar, desde la actualidad, un conflicto aparentemente intrauniversitario.

Desde fines de la década de 1950 y gracias al influjo de la renovación católica¹⁴³ (Encíclica *Gaudium et Spes*), se planteó en Latinoamérica la necesidad de conciliar la doctrina de la Iglesia Católica con la modernidad y la realidad sociocultural del continente. Esto producirá una división en el mundo católico entre quienes estaban a favor del *aggiornamento* y de aquellos que se oponían al cambio. La Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) fue uno de aquellos espacios en donde el enfrentamiento ideológico se dio con mayor fuerza. Una enorme brecha se abrió al interior del mundo católico chileno, cubriendo desde la actividad política (división entre la Democracia Cristiana y el Partido Conservador) hasta el mundo universitario e incluso al interior de las propias familias católicas.

Las elecciones de la Federación de Estudiantes de la PUC de 1959 (FEUC) dieron el triunfo a los sectores progresistas vinculados a la Democracia Cristiana, relegando a un segundo plano a los conservadores católicos tradicionales. La crítica a las autoridades y a las estructuras de la universidad se hizo sentir con fuerza de parte de un sector importante del estudiantado. Los nuevos dirigentes exigieron una modernización de los cursos universitarios, así

como de los mecanismos de acceso al plantel (eliminación de cartas de recomendación), considerados elitistas y discriminatorios en favor de algunos estudiantes privilegiados. También pedían la apertura de la universidad de los problemas del país, pues se insistía en la creación de una nueva sociedad centrada en los problemas de los grupos sociales más desposeídos. A partir de 1964, este discurso se agudizó, insistiendo en la necesidad de democratizar la universidad, separarla de la tutela directa de la Iglesia Católica y orientarla hacia las necesidades del pueblo. El carácter radical de estas propuestas desencadenó una ruptura entre los partidarios de la reforma y los conservadores. La unidad del mundo católico al interior de la universidad estaba en juego.

El Centro de Estudiantes de Derecho (CED) de 1966 encabezó la oposición conservadora al ala reformista que controlaba la federación estudiantil. Se definieron como ‘corporatistas’, nacionalistas y vinculados al recién creado Partido Nacional, el cual a su vez fusionó, en una sola entidad de derecha, a los tradicionales partidos Liberal y Conservador¹⁴⁴. Sin embargo, estos jóvenes decían estar alejados de la órbita de los partidos políticos y orientados solo a los intereses y necesidades de los alumnos. Su defensa de la jerarquía y de los intereses puramente estudiantiles de los jóvenes fue el sello que caracterizó el origen del Movimiento Gremial o Gremialismo. La defensa de la autonomía frente a las instancias superiores, así como del principio de subsidiariedad, fueron sus principales banderas de lucha¹⁴⁵.

El Movimiento Gremial nace oficialmente el 1 de marzo de 1967 en la Escuela de Derecho de la PUC como consecuencia de las actividades de la directiva del CED de 1966 y reivindicando un tipo de demanda estudiantil supuestamente no politizada a la imagen de un movimiento sindical estrictamente corporatista. La organización recibió, desde sus inicios, el apoyo del profesorado tradicionalmente más conservador de la Escuela de Derecho de la PUC. El Gremialismo tomó las banderas del combate contra lo que se denominaba la ‘politización de la universidad’, adoptando una estrategia ofensiva que apuntó a ganar las siguientes elecciones de la federación de estudiantes.

La toma y ocupación de la Casa Central de la PUC, en agosto de 1967, por parte de los estudiantes reformistas que exigían la salida del rector y obispo Alfredo Silva Santiago, fue el detonante que fortaleció la unidad de los gremialistas. Estos se aliaron al periódico conservador El Mercurio para denunciar el supuesto intento de la Democracia Cristiana por controlar la universidad y ponerla al servicio de su proyecto político de ‘Revolución en Libertad’¹⁴⁶. Fue entonces

cuando surgió la figura del estudiante de Derecho Jaime Guzmán Errázuriz como representante del Gremialismo ante las autoridades de la PUC y de la Iglesia Católica chilena¹⁴⁷. Organizados en torno a su persona, los gremialistas intentaron evitar la toma de la Universidad al mismo tiempo que fustigaron a sus autoridades por no haber sabido defenderla de sus agresores y actuar de manera pusilánime. En este momento, el conflicto adquirió una dimensión nacional, pues la PUC se sumó a la movilización estudiantil que se había originado en la ciudad de Valparaíso solo algunas semanas antes. Este movimiento general, que se amplía a todo el país, dará origen al proceso de Reforma Universitaria¹⁴⁸.

Para los líderes del Gremialismo, la toma de la Casa Central de la PUC y el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, constituyen los dos hitos fundadores del movimiento y de su futura proyección política¹⁴⁹.

El liderazgo de Jaime Guzmán salió fortalecido de estos sucesos, pues logró que el Gremialismo ganara la FEUC en octubre de 1968, solo un año después de la toma de la universidad y del inmenso entusiasmo que había generado la movilización reformista. Sin embargo, la reforma ya se había puesto en marcha, comandada por un nuevo rector, el arquitecto y católico progresista Fernando Castillo Velasco. El Movimiento Gremial reconoció muchos de los cambios realizados al interior de la universidad, así como la modernización de su estructura y de los cursos. Sin embargo, su crítica principal estuvo dirigida hacia lo que se consideró como “un intento (por parte de algunas autoridades) de transformar la reforma en un instrumento de revolución política y social”¹⁵⁰. Por el contrario, el tipo de reforma defendida por los gremialistas era una transformación de la universidad según el modelo norteamericano¹⁵¹, la cual excluía la idea de una comunidad formada por académicos, estudiantes y funcionarios. Se trataba más bien de una modernización que incorporaba el concepto norteamericano de créditos, la creación de unidades académicas independientes, la contratación de profesores de tiempo completo, pero la exclusión explícita de los estudiantes y funcionarios del gobierno universitario.

El triunfo gremialista de 1968 no solo fue el resultado de la reorganización de las fuerzas conservadoras al interior de la universidad, sino también de la escisión del movimiento estudiantil reformista. Una parte de este extremó sus posiciones políticas, dejando de lado la idea de una modernización universitaria y planteando definitivamente la necesidad de una revolución social e incluso de una ‘proletarización’ de los estudiantes. Esto último debilitó a las fuerzas de izquierda dentro de la PUC, dejando el camino libre al Gremialismo que, sin

embargo, ganó las elecciones de 1968 por un estrecho margen.

Esta pequeña victoria al interior de una universidad que aún hoy representa un microcosmos muy particular de la sociedad chilena, tuvo una profunda influencia en el surgimiento de una élite de derecha convencida en la posibilidad del éxito de una revolución conservadora, especialmente en una época donde la historia parecía acompañar a las fuerzas progresistas. Este sentido mesiánico y volcado hacia el futuro fue preponderante al momento de entender su participación en la transformación económica y cultural que vivió Chile tras el Golpe de Estado de 1973. Hasta aquel momento, el mundo conservador y la derecha chilena habían vivido en una suerte de nostalgia del pasado y en una posición defensiva¹⁵². El Gremialismo y el posterior aporte de la teoría económica neoliberal estuvieron en el origen del quiebre de esta tendencia y en la aparición de una nueva derecha optimista y con visión revolucionaria.

Antes de los eventos de agosto de 1967, los estudiantes de Economía y de Derecho de la PUC no tenían prácticamente ningún tipo de contacto ideológico, a pesar de compartir el espacio de la sede de la Casa Central de la universidad. La separación se hizo mayor al momento del traslado de la Escuela de Economía al sector oriente de la ciudad de Santiago. La revuelta estudiantil de 1967 permitió el encuentro de estos dos mundos y la creación de un polo común antirreformista. Estos sucesos aún son recordados como una suerte de gesta libertadora en contra de la anarquía y la revolución de los estudiantes de izquierda. El propio Jaime Guzmán recordaba dichos eventos como el fenómeno revolucionario más radical que le tocó presenciar, incluso comparándolo con el período posterior de la Unidad Popular¹⁵³. La ocupación de la universidad, según la interpretación de Boisard, fue vivida como un verdadero sismo por los estudiantes de derecha, y dio pie a un punto de inflexión en la estrategia, hasta aquel momento de repliegue, del mundo conservador chileno de la década de 1960¹⁵⁴.

La necesidad de oponerse a la toma y de proteger las instalaciones universitarias contra la ocupación de los reformistas, dio origen a la formación de un Comando de Defensa de la Universidad, el cual reagrupó a las escuelas de Derecho, Economía y Agronomía de la PUC. En aquel momento, los primeros jóvenes economistas formados en Chicago no formaban parte del estamento estudiantil, sino que mayoritariamente ejercían como profesores de la Escuela de Economía, aunque compartían una crítica profunda al proceso de reforma universitaria. Sin embargo, una segunda generación de estudiantes de la disciplina —formados en

los 60s— se comprometió abiertamente en la lucha política. El acercamiento entre el Gremialismo y los economistas monetaristas (Chicago Boys) se realizó a través de los estudiantes de esta segunda generación¹⁵⁵. Los gremialistas vieron en la Escuela de Economía una concordancia y un espíritu de cuerpo perfectamente en armonía con su visión corporatista de la sociedad, especialmente en un momento de crisis como fue lo fue el mes de agosto de 1967. En palabras de uno de los protagonistas:

...la unión del gremialismo con la Escuela de Economía fue muy fácil, porque la escuela representaba muy bien lo que el gremialismo buscaba a nivel universitario. Se trataba de una escuela que era universitaria y que no se ponía al servicio de ninguna ideología. La escuela no estaba al servicio del Partido Nacional o del Partido Radical¹⁵⁶.

Tanto la segunda generación de estudiantes de economía, sus profesores monetaristas y los estudiantes antirreformistas, compartían al menos dos elementos clave: la simpatía por el gremialismo y el apoliticismo. De acuerdo con Boisard, los gremialistas propusieron despolitizar la universidad, al mismo tiempo que los economistas dieron cuerpo y sustento técnico a su ideología. Para estos últimos, lo importante era finalmente, y bajo su particular mirada de lo público, ‘despolitizar’ la economía. Fue así como dieron origen a un tipo de movimiento de derecha absolutamente inédito en Chile, al fusionar catolicismo integrista y monetarismo¹⁵⁷. Esta síntesis no se reconocía en el tradicionalismo conservador de viejo cuño, lo que se manifestó en la no siempre fluida relación con el recién creado Partido Nacional.

La Iglesia Católica chilena del siglo XX ha seguido tradicionalmente las posiciones del Vaticano, las cuales han sido poco favorables en relación al liberalismo político y económico, a pesar de su defensa acérrima de la propiedad privada. Incluso durante toda la primera mitad del siglo XX esta crítica constituyó un punto de encuentro entre católicos progresistas y conservadores. La posición de los partidos políticos católicos chilenos respecto del capitalismo tuvo siempre un tinte pragmático, tanto si se trató del Partido Conservador, después el Partido Nacional o bien de la Democracia Cristiana. Como bien explica Boisard, ellos aceptaron tácitamente un liberalismo económico

moderado, más o menos temperado por la acción reguladora del Estado. Por el contrario, los intelectuales conservadores de la década de 1930 se opusieron siempre al liberalismo individualista en todas sus formas, proponiendo el integrismo hispanista (antiseccular y antirracionalista) como alternativa tanto al capitalismo como a las distintas vertientes socialistas¹⁵⁸.

Tanto la doctrina católica como el liberalismo individualista de Hayek comparten su rechazo al igualitarismo democrático y al constructivismo social de origen racionalista. Ambos defienden la existencia de un orden natural espontáneo, anterior a todo contrato, y que para los católicos tiene su origen en la Divina Providencia, mientras que para los liberales se encarna en el mercado como espacio natural de las relaciones humanas.

Si bien el pensamiento de Jaime Guzmán se nutre fuertemente de las ideas del integrismo católico antiliberal del abogado e historiador chileno Jaime Eyzaguirre, Guzmán tuvo un acercamiento privilegiado a la economía liberal e indirecto a la filosofía de Hayek a través de los economistas monetaristas que participaban del movimiento gremial (Ernesto Illanes y Juan Carlos Méndez). Su integrismo le permitió la defensa a ultranza de la propiedad privada y de la libre iniciativa como principios fundamentales del orden social, al mismo tiempo que le sirvieron de argumento de base contra el denominado ‘dirigismo estatista’.

...los principios capitalistas de propiedad privada... y de libre empresa en el campo económico, no solo no se oponen a la doctrina social de la Iglesia, sino que son supuestos fundamentales de esta, como fruto de la ley natural¹⁵⁹. Pero la influencia de Hayek se deja sentir en su aceptación del liberalismo económico que antes había rechazado (Guzmán) en conformidad con la doctrina social de la Iglesia. Su defensa del capitalismo pasa a ser ahora una defensa del capitalismo liberal. Esto lo conduce a abandonar algunas de las instituciones tradicionales que retenía como resultado de su adhesión al capitalismo orgánico y corporativo, y que ahora ve como obstáculos para el pleno funcionamiento del mercado¹⁶⁰.

La mayor parte de los alumnos de la Escuela de Economía de la PUC se situaban políticamente a la derecha, aunque muchos de ellos se definían como apolíticos. Un número no despreciable participaba de la organización católica

ultraconservadora Fiducia, mientras que otros ya mostraban simpatía por el Opus Dei, en aquellos años aún una pequeña organización católica prácticamente desconocida y con pocos adherentes¹⁶¹. Esta relación aparentemente contradictoria entre integrismo católico y ultraliberalismo económico, no generó mayores conflictos al momento de definir la práctica económica como una disciplina científica y autónoma respecto de la doctrina social de la Iglesia. Frente al adversario común que representaba el socialismo, las doctrinas seculares e incluso el catolicismo progresista, las diferencias fueron superadas e incluso ignoradas. El sentimiento de fortaleza asediada y de constituir la última defensa de un mundo y de una clase social en peligro, fueron los principales catalizadores de esta particular fusión entre catolicismo integrista y monetarismo ultraliberal.

La aparición de la revista Portada (1969), cercana al Opus Dei, marcó un momento de consolidación en el acercamiento entre los economistas monetaristas y los gremialistas. Su creación tuvo como objetivo difundir el pensamiento conservador al interior de la PUC como contraofensiva a lo que se consideraba como una revolución de la izquierda marxista. La publicación pretendía reunir a un grupo bastante heterodoxo de personas de derecha (profesores de economía, historia y derecho de la PUC, periodistas cercanos a El Mercurio, empresarios, entre otros). Entre sus participantes, destacaron de inmediato algunos de los economistas más conocidos entre los Chicago Boys, como Sergio de Castro, Pablo Baraona o Emilio Sanfuentes. Portada era una revista semanal de actualidad política, cultural, social y económica, que se presentó desde sus inicios como renovadora y transformadora, pero no revolucionaria¹⁶².

Los participantes de la revista se declararon herederos del pensamiento de Jaime Eyzaguirre y de la corriente corporatista y nacionalista del conservadurismo chileno. La publicación fue dirigida por Gonzalo Vial, historiador conservador y futuro ministro de educación durante la dictadura del general Pinochet. De acuerdo con Carlos Ruiz, los autores tuvieron conciencia de su postura política rupturista respecto de la derecha tradicional, y de su oposición abierta a la democracia liberal, aunque fueron cautelosos de mostrar un carácter demasiado antidemocrático¹⁶³. Un diagnóstico compartido por todos los miembros de la revista fue la idea de que en Chile se vivía una crisis de autoridad en todos los niveles e instituciones de la sociedad, partiendo por la familia, la Iglesia, la universidad, pero especialmente respecto de la dirigencia política del país. En el origen de la crisis se encontraba, a su juicio, la degeneración partidaria, la

politización de la sociedad, el excesivo poder del Estado y los proyectos utópicos tanto de la Democracia Cristiana como de la izquierda socialista:

...como un cáncer, la influencia de los partidos se extiende a campos que debieran estarle vedados. Municipios, Juntas de Vecinos, gremios, colegios profesionales, universidades... ¡hasta los conventos y las escuelas secundarias!... todo está invadido y desnaturalizado por la política partidista...

164.

Es justamente en su lucha contra la política y la intervención estatal que los economistas formados en Chicago encontraron un espacio privilegiado al interior de esta revista de tendencia nacionalista.

El nacionalismo debe ser concebido sobre todo como ‘sano egoísmo nacional’, unido al respeto a las tradiciones y al rechazo de las ideologías extranjerizantes, expresadas en los partidos políticos, todo esto junto al respeto más acrisolado por la esfera privada de la vida y, e primer lugar, por la libre empresa que es ‘una fiel expresión de la naturaleza humana y una salvaguardia de su propia libertad’¹⁶⁵.

Para Ruiz, un elemento fundamental de las ideas emanadas de Portada se encuentra en el doble uso del principio de subsidiariedad (como solución de compromiso). Este se utilizó en una lectura corporatista, de cuño franquista, para atacar a los partidos políticos. Sin embargo, y al mismo tiempo, se lo citaba para justificar una posición materialista e individualista de defensa del ‘Estado mínimo’ y la libertad económica. La revista tendió a identificarse cada vez más con el pensamiento de los economistas monetaristas.

Portada está inserta en esta dinámica (reversión del proceso democratizador), dentro de la cual se caracteriza por el radicalismo de su opción, por su proyecto

netamente autoritario, y por la elaboración de un programa de economía de mercado que comienza muy luego a encontrar seguidores entusiastas, sobre todo después de la elección de Allende, entre los medios de comunicación tradicionales de la derecha y algunos de sus representantes políticos y empresarios¹⁶⁶.

Portada reunió en un mismo espacio de reflexión y propaganda a tres corrientes ideológicas tradicionalmente antagónicas: el corporatismo integrista, el nacionalismo autoritario y el liberalismo económico, dando forma a un grupo que tendrá un papel central en la reorganización de la sociedad chilena tras el Golpe de Estado de septiembre de 1973. Esta efímera experiencia editorial constituyó, en palabras de Boisard, “una verdadera renovación del pensamiento de derecha en Chile, incluso si en este Estado solo es posible hablar de un laboratorio de ideas o como prefieren denominarlo los economistas monetaristas de una comunidad de pensamiento”¹⁶⁷.

Conservadores a la ofensiva: la Unidad Popular y la guerra ideológica

La llegada al gobierno de la coalición de izquierda (Unidad Popular) tras las elecciones presidenciales de septiembre de 1970, marcó una nueva etapa en la organización de la oposición conservadora no solo respecto del proyecto socialista encabezado por Salvador Allende, sino que también en relación al modelo de Estado de Compromiso instaurado en Chile a partir de 1938. Para la derecha, sus peores pesadillas se volvían una realidad. Ya no solo se trataba de combatir a un Estado que consideraban como intervencionista, sino que el peligro de una real revolución socialista aparecía en el horizonte. Las escaramuzas de la Reforma Universitaria y los conflictos sociales de la segunda mitad del gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970), no podían compararse a lo que temieron vendría a partir de fines de 1970.

El resultado de las elecciones presidenciales dio una pequeña mayoría a la coalición de izquierda con un 36% de los votos (Unidad Popular). Sin embargo, la tradición constitucional indicaba que le correspondía al Congreso Nacional confirmar al candidato ganador de entre las dos primeras mayorías¹⁶⁸. En aquel momento, surgió entre los grupos conservadores la idea de lograr un acuerdo parlamentario secreto para que la Democracia Cristiana apoyase al candidato de la derecha (Jorge Alessandri)¹⁶⁹ como segunda mayoría en perjuicio de Salvador Allende. De esta manera, Alessandri renunciaría llamando posteriormente a nuevas elecciones donde podría imponerse fácilmente el demócratacristiano Eduardo Frei, e impidiendo así la victoria de la izquierda. Según Valdés, el mismo Arnold Harberger estaba al tanto de esta idea durante su visita a Chile en septiembre de 1970. En una carta a sus colegas de Chicago, Harberger confirmó sus temores de un fracaso de la maniobra, así como su seguridad en que los militares chilenos no estaban dispuestos a dar un golpe debido a su tradición constitucionalista. En palabras del propio general René Schneider, comandante en jefe del Ejército en 1970:

(...) El Ejército es garantía de una elección normal, de que asuma la Presidencia

de la República quien sea elegido por el pueblo, en mayoría absoluta, o por el Congreso Pleno, en caso de que ninguno de los candidatos obtenga más del 50 por ciento de los votos... Nuestra doctrina y misión es de respaldo y respeto a la Constitución Política del Estado¹⁷⁰.

La Democracia Cristiana decidió continuar con la tradición republicana al confirmar al candidato más votado, pero no sin antes exigir de Allende un compromiso de garantías constitucionales.

Para Harberger, el programa político y económico de Allende estaba destinado al fracaso debido a sus promesas y al alto nivel de expectativas creado durante la campaña presidencial. En segundo lugar, estaba el rechazo que causaba la Unidad Popular en la élite empresarial y tecnocrática del país, el cual podía derivar fácilmente en pánico y en medidas desesperadas¹⁷¹. No pocos empresarios y familias adineradas habían abandonado el país tras la elección por temor a un gobierno socialista, lo cual se vio reflejado en los altísimos precios del dólar alcanzado durante el mismo mes de septiembre de 1970.

La personas que planean irse están dispuestas a vender todo lo que no pueden llevarse, a abandonar sus puestos de trabajo y/o prácticas profesionales, dejar sus casas, negocios, fábricas, etc., frente a un destino incierto. ¿Qué tan grande es este éxodo nos resulta del todo desconocido¹⁷².

Los tres años del gobierno de Allende fueron un período en que las disputas y contradicciones políticas e ideológicas que caracterizaron el siglo XX chileno llegaron a un punto máximo, haciendo irreconocibles a los mismos grupos que diez años antes aún se mantenían dentro de un cauce democrático¹⁷³. La tensión y la polarización llegó a un punto donde la disputa se definió en los términos maniqueos de la Guerra Fría: Comunismo o Fascismo. Los niveles de participación social en las elecciones se habían elevado de manera significativa de 1,5 a 3,5 millones de electores solo entre 1958 y 1970, alcanzando a un 30% de la población en edad de votar. A esto se suma el hecho que durante el gobierno de Frei el número de sindicatos se duplicó en solo seis años, especialmente entre los funcionarios de 'cuello blanco'. A esto se sumó un

aumento de 2.000 a 114.000 campesinos organizados entre 1964 y 1970.

Todo lo dicho anteriormente ayudó a generar un ambiente de revolución social que tuvo diversas manifestaciones de violencia organizadas tanto por la izquierda como por la derecha. El país se encontraba en un grado de movilización inédito, exigiendo al máximo los engranajes del modelo de Estado de Compromiso al cual los sectores de conservadores ya habían decidido poner fecha de expiración. Al mismo tiempo, al extremo izquierdo del mapa político, los sectores ultra de la coalición pedían que la Democracia Cristiana (que jugaba las veces de centro político) mostrara su ‘verdadera naturaleza reaccionaria’, forzando también con ello el viraje desde un centro ideológico hacia la oposición de derecha.

La creciente movilización obrera, campesina y de los pobladores de los barrios marginales de las grandes ciudades, promovida principalmente por los partidos de la UP, tuvo el objetivo de ‘agudizar las contradicciones’ y apresurar la nacionalización de empresas y la requisición de predios agrícolas. Esto fue lo que desencadenó el llamado ‘miedo a los pobres’ en los sectores más favorecidos de la población, así como del sector empresarial. Dichos grupos promovieron la radicalización de los gremios profesionales, las asociaciones patronales e industriales. Se comenzó también a impulsar todo tipo de acciones de fuerza, actos de sabotaje e incluso de terrorismo, acelerando así la sensación de crisis y de un posible desenlace violento por medio de la intervención de las fuerzas armadas.

Los sectores tanto de derecha como de centro, los cuales se habían opuesto fuertemente en el período inmediatamente anterior, comenzaron a trabajar en conjunto en base a la defensa de ciertos ‘principios’. De acuerdo con Valdés, esta alianza fue motivada por la radicalización política e ideológica del momento, promovida por algunos grupos al interior del gobierno de Allende a través de las expropiaciones y la desaparición gradual de los mecanismos de mercado al interior de la economía chilena. Fue así como la derecha y prácticamente toda la comunidad empresarial concluyó que el ‘remedio’ para la situación política y económica de Chile debía ser extremo. Este punto es muy importante, porque con ello no solo se plantea que estuvieron a favor de una salida de fuerza a través de un golpe de Estado, sino que asumieron que el modelo instaurado con posterioridad a este no podía ser similar al sistema de Estado de Compromiso, sindicado como culpable de la crisis en última instancia, sino algo absoluta y radicalmente distinto. Por primera vez, la derecha chilena comenzaba a

vislumbrar un proyecto de cambio revolucionario y no solo una idea de restauración o de reacción.

La radicalización ideológica que se dio en el período electoral de 1970 hizo que las ideas que antes parecían como exageradas o extremas, se volvieran a ojos de muchos como posibles. Tal fue el caso de las recomendaciones de los técnicos monetaristas, poco tiempo antes considerados como fanáticos radicales o poco realistas. Los economistas de Chicago afianzaron la colaboración con la élite empresarial del país, atrayendo —a su vez— a algunos profesionales demócratacristianos a pesar de las anteriores disputas por el control de la Universidad Católica. Por primera vez, desde el comienzo de la transferencia ideológica hacia Chile, los hombres de Chicago salían de su aislamiento académico y antagonismo intelectual, logrando aceptación en diversos medios políticos, económicos y académicos, unidos junto al grupo de los demócratas opositores a la Unidad Popular. Sus posturas aparecieron, entonces, en perfecta consonancia con la idea de un frente amplio no marxista. En una sola década, el debate había evolucionado desde las políticas económicas hacia los principios económicos. En este punto, tanto conservadores como liberales y buena parte de los demócratacristianos estaban de acuerdo.

Las virtudes generales del mercado y la libre competencia, el rechazo del Estado y la protección del desarrollo industrial que caracteriza a las ideas neoliberales parecieron entonces combinarse sin entrar en conflicto con los conceptos demócrata cristianos de un mercado libre con la participación del Estado en la promoción de “justicia social”, participación de los trabajadores, y la redistribución del ingreso. Las contradicciones entre estos temas se consideraron menos importantes que la de formar un frente de defensa contra la incontrolable “colectivización” de la economía¹⁷⁴.

El antiguo dogmatismo que buena parte de la clase empresarial había visto en los economistas de Chicago, calificando sus ideas como ‘fuera de lugar’, desde fines de la década de 1950, apareció como realista y pragmático frente al deterioro rápido de la economía en un contexto de cambios revolucionarios de izquierda. Las medidas correctivas no solo pasarían por el recurso de la fuerza militar para derrocar al gobierno de Allende y de la Unidad Popular, sino también por la

erradicación inmediata y definitiva de las ideas socialistas de la sociedad chilena.

Tanto los economistas monetaristas como los demócratacristianos estuvieron bajo constante presión para proveer de material crítico y ‘munición’ política a los parlamentarios que se oponían a la Unidad Popular. Sin embargo, fue en este momento cuando un grupo de economistas pertenecientes a los llamados Chicago Boys decidió explorar otras vías clandestinas e incluso conspirativas para acabar con la experiencia socialista chilena.

Dos iniciativas surgieron cuando quedó en evidencia que las fuerzas armadas no intervendrían mientras estuvieran comandadas por generales constitucionalistas. Por una parte, un grupo de economistas se organizó como equipo asesor de la SOFOFA, y en segundo lugar se comenzó a elaborar un programa económico secreto para un posible nuevo gobierno¹⁷⁵. Fue así como se formó el llamado Grupo de los lunes en torno a Hernán Cubillos, quien reemplazó a Agustín Edwards como patrón de El Mercurio¹⁷⁶. Junto con el presidente de la SOFOFA —Orlando Sáenz— y los economistas Jorge Ross, Javier Vial, Manuel Cruzat, Arturo Fontaine, Fernando Bravo y Emilio Sanfuentes, la agrupación se convirtió en la principal asesora de los empresarios chilenos, proveyendo además de importantes contactos en el exterior tanto en Estados Unidos como con el resto de las asociaciones empresariales del continente americano.

Sin embargo, otro de los economistas ligados al grupo, Sergio Undurraga, sugirió que debían trabajar de manera independiente a la SOFOFA, por lo cual se organizaron como un centro de estudios. La nueva organización fue dirigida por el propio Undurraga y Emilio Sanfuentes (ambos vinculados a Agustín Edwards), además de Álvaro Bardón, otro economista de Chicago muy cercano a la Democracia Cristiana. Su objetivo fue realizar análisis diarios y mensuales, además de emitir informes sobre la proyección económica del país.

Los primeros reportes fueron decepcionantes para el empresariado, pues confirmaron un crecimiento importante de la economía durante el primer año del gobierno de la UP (1970-1971), cercano al 8%, y no el esperado caos que pronosticaron en un comienzo. La inflación parecía disminuir (de 36,1% a 22,1%) así como también hubo una caída importante en el desempleo, hasta un 3,8%; también, mejoras en los salarios y en la distribución del ingreso. No obstante, los informes hacían hincapié en ciertas señales preocupantes producto de enormes desequilibrios económicos causados por las políticas expansivas oficialistas: aumento desmesurado del déficit fiscal, caída de las reservas

internacionales y de la inversión, además de un creciente déficit comercial. Los problemas comenzaron efectivamente en 1971 con el alza sostenida de la inflación, lo cual el equipo había detectado acertadamente con anterioridad. Fue así como ganaron prestigio entre los círculos de negocios y finalmente su ciencia económica comenzó a ser reconocida.

A partir de este momento, iniciaron asesorías para congresistas del Partido Nacional y la Democracia Cristiana, entregándoles periódicamente información y análisis económicos de coyuntura con los cuales pudiesen rebatir las cifras oficiales e interpelar a los Ministros de Estado. Emilio Sanfuentes fue el encargado de diseminarlos a través de la prensa, principalmente por medio de la revista conservadora *Portada* y posteriormente en el semanario *Qué Pasa*¹⁷⁷. Entre agosto de 1971 y mediados de 1972, el equipo de Undurraga comenzó a preparar un programa de gobierno, aunque solo algunos sabían cuál sería el uso y objetivo final del documento. La tarea requirió la participación de todos los miembros del grupo monetarista de la Universidad Católica en Chile: Sergio de Castro, Luis Federici, Manuel Cruzat, Pablo Baraona y Juan Braun. Es así como Valdés consigna que el gran objetivo del primer grupo de economistas de Chicago se había alcanzado después de más de una década de dura batalla ideológica. A partir de este momento, se convirtieron en los principales consejeros de las más importantes organizaciones empresariales chilenas.

Solo Orlando Sáenz, presidente de la SOFOFA, reclamó la participación de otras miradas económicas al interior de la oposición a Allende, incluyendo la de la Democracia Cristiana, pues consideraba que los hombres de Chicago proveían de excelente ‘munición’ intelectual contra el socialismo, pero no reunían el criterio amplio necesario para preparar un programa de gobierno inclusivo.

La crisis económica llegó a su punto máximo en 1972, cuando Undurraga y Bardón pronosticaron una inflación superior al 180% para fines del mismo año. El gobierno no hizo nada tampoco por evitar los desequilibrios. Para ello aumentó los salarios ganando popularidad entre los sectores más pobres de la población, lo que finalmente volvió incontrolable la espiral inflacionaria. Como contrapartida, se aumentaron los subsidios estatales, mientras que la recaudación impositiva disminuyó dramáticamente.

El desequilibrio fiscal alcanzó a un 30,5% en 1973, llevando a la economía a una recesión con tasas de inflación superiores al 600%. La precariedad de la situación forzó al grupo de economistas a acelerar sus planes y finalmente

incorporar a algunos profesionales demócratacristianos de alto perfil técnico como José Musalem, Andrés Sanfuentes, Juan Villarzú y José Luis Zavala. En total, se formó un grupo de diez economistas, quienes se distribuyeron el trabajo por grupos que laboraron en el más sigiloso secreto, pues el plan debía ponerse en marcha en 1973, no obstante el gobierno de Allende finalizase legalmente en 1976. Para ello, la oposición contaba con ganar una mayoría suficiente en las elecciones parlamentarias de 1973, con lo cual forzaría una salida constitucional del Presidente y llamar a nuevas elecciones. Sin embargo, aun en las duras circunstancias del momento, el gobierno de la UP obtuvo un 45,3% de los votos, lo cual fue celebrado como un triunfo por la izquierda, echando por tierra los planes constitucionales de la oposición. Ante tal dilema, el mundo conservador se vio enfrentado a la posibilidad de negociar con el gobierno, para lo cual ya no estaban dispuestos, o presionar definitivamente por una salida de fuerza a través de un golpe de Estado¹⁷⁸.

El dinero llegaba de todas partes y nadie preguntó de dónde venía: hay que tener en cuenta que con Allende, Chile había entrado en la lógica de la “Guerra Fría”¹⁷⁹.

El trabajo del grupo de profesionales economistas no requirió de grandes sumas de dinero, pues ya existía una base de estudios llevados a cabo durante toda la década anterior¹⁸⁰. A fines de 1972, dos empleados de Agustín Edwards y ex oficiales navales, Roberto Kelly y José Radic, fueron ‘sondeados’ por altos miembros de la marina para conseguir un programa económico en caso de producirse un pronunciamiento militar. Kelly se contactó con Emilio Sanfuentes, quien le prometió un documento en treinta días, el cual finalmente estuvo terminado para mayo de 1973, cuando los distintos proyectos del grupo de economistas fueron comparados durante un seminario en el balneario de Viña del Mar. El documento reflejó la disparidad de criterios entre algunos de los profesionales, como las distintas miradas entre monetaristas puros y demócratacristianos. Primó entonces la solución de compromiso para así cumplir a tiempo con lo demandado por la marina. El documento no constituyó el fiel reflejo de la ortodoxia monetarista, pero fue lo más parecido a ella después de treinta y cinco años de predominio estructuralista y keynesiano.

El epílogo del episodio se puede rastrear hasta el mismo 11 de septiembre de 1973. Según Valdés, aquel día las máquinas copiadoras de la Editorial Lord Cochrane (vinculada también con el diario El Mercurio), trabajaron en forma ininterrumpida para duplicar el largo documento bautizado entonces como El Ladrillo. Fue así como estuvo preparado el Plan económico en los escritorios de los comandantes en jefe de la junta militar de gobierno el día 12 de septiembre a primera hora¹⁸¹.

Notas al Capítulo II

¹ Citado por: [Fermendois, J., Abismo y cimiento. Gustavo Ross y las relaciones entre Chile y Estados Unidos, 1932-1938 \(1a. ed.\), Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 1996.](#)

² [Fermendois cita una interesante editorial de Hoy del 28 de enero de 1937. Ahí se deja muy en claro que el país abandona una era de primacía de un 'individualismo' que ocultaba poderes corporativos y que subordinaba los derechos humanos a los derechos de propiedad. Este era el clima intelectual que reinaba en la mayor parte de la sociedad chilena de la década de 1930, y por lo tanto no es difícil imaginar la sensación generalizada de la desaparición del 'modelo clásico', por otro nacionalista y sobre todo 'antiimperialista'.](#)

³ [Las elecciones presidenciales de 1938 dieron como resultado un 51% de los votos para el candidato del Frente Popular, Pedro Aguirre Cerda, y un 48,9% para el candidato de derecha \(liberal\) Gustavo Ross Santa María. La muerte de sesenta y tres jóvenes fascistas el 5 de septiembre del mismo año \(Matanza del Seguro Obrero\) por parte de fuerzas policiales, influyó en el resultado, restándole votos al candidato de la derecha y probablemente privándolo de un triunfo que se durante meses se dio por asegurado.](#)

⁴ [Esta tesis de la inevitabilidad, defendida por Fermendois, nos parece pertinente, incluso tomando en cuenta el clima ideológico de la época, ya que no se aleja de lo que sucedió en las elecciones presidenciales chilenas de 1970, donde la diferencia de votos entre el candidato de la derecha y de la izquierda fueron mínimas, por lo que no creemos que existan movimientos unívocos e inexorables de la historia, si bien el peso del 'clima epocal' es de suma importancia.](#)

Podemos decir que este influye, a veces, de manera incontestable, pero en ningún caso determina.

⁵ La vinculación de Ibáñez con los sindicatos es propia del modelo de líder populista latinoamericano de las décadas de 1930 y 1940. El corporativismo y la crisis del liberalismo clásico dieron espacio al surgimiento de modelos autoritarios que también imitaban a los movimientos fascistas europeos. Respecto de la relación de Ibáñez con los sindicatos, véase: Rojas Flores, Jorge, La dictadura de Ibáñez y los sindicatos: (1927-1931), Santiago, DIBAM, 1993.

⁶ La caída de Carlos Ibáñez a causa de la crisis económica, a diferencia de lo ocurrido en otros países del continente, deslegitimó el modelo autoritario como fórmula de ‘modernización’ del país. Sobre las políticas económicas llevadas a cabo durante el gobierno de Ibáñez, recomendamos la lectura de: Bernedo, P., “Prosperidad económica bajo Carlos Ibáñez del Campo, 1927-1929”, Historia, Instituto de Historia. Pontificia Universidad Católica de Chile(N° 24), 1989, pp. 5-105.

⁷ Para un estudio acabado de la República Socialista, recomendamos la lectura de la tesis de Susana Simonetti sobre el período: Simonetti de Groote, Susana, El gobierno de Carlos Dávila: (16 de Junio - 13 de Septiembre de 1932), Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 1993. Para una crónica contemporánea a los sucesos, recomendamos el texto de Jorge Grove: Grove, J., Descorriendo el velo: episodio de los doce días de la República Socialista, Aurora de Chile, Valparaíso, 1933.

⁸ Ferandois, J. Op.cit., p. 48.

⁹ Ibíd., p. 49.

¹⁰ Sobre la figura de Arturo Alessandri Palma, existen algunos estudios interesantes entre los que destacan: Varios autores, 7 Ensayos sobre Arturo Alessandri Palma, Instituto Chileno de Estudios Humanísticos, Santiago, 1979. Un estudio clásico pero más completo puede encontrarse en: Donoso, R., Alessandri. Agitador y demoleedor (cincuenta años de historia política de Chile), Fondo de Cultura Económica (2 volúmenes), México, 1952.

¹¹ Fermandois, J. Op.cit., p. 83.

¹² Se utiliza también el concepto de Estado empresario, especialmente para resaltar la naturaleza de la actividad productiva, como también el origen de la propiedad.

¹³ Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Su sede central, desde su creación (1948), ha estado ubicada en Santiago de Chile.

¹⁴ “Los orígenes de la Corporación de Fomento a la Producción, más conocida como CORFO, se encuentran en los postulados y proyectos que intelectuales, ingenieros y gremios empresariales difundieron sobre la necesidad de impulsar una industrialización nacional mediante una intervención del Estado, así como, también, en las políticas económicas proteccionistas y de sustitución de importaciones que se implementaron, después de la Gran Depresión de 1930. Su fundación, en abril de 1939, estuvo relacionada con las iniciativas del gobierno de Pedro Aguirre Cerda para socorrer a los damnificados del terremoto de Chillán (sur de Chile) y el fomento de la infraestructura productiva. Se crearon dos corporaciones, una bajo el nombre de ‘Corporación de Reconstrucción y Auxilio’ y otra denominada ‘Corporación de Fomento a la Producción’. Esta última estaría encargada de elaborar y realizar un vasto plan de fomento productivo, autorizándose para su financiamiento la contratación de empréstitos, un aumento general de los impuestos, un impuesto adicional a las utilidades de

[las empresas del cobre y el empleo transitorio de los fondos asignados al servicio de la deuda externa.](#)

El desarrollo de los planes de fomento se vio dificultado durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente en la obtención de créditos externos y transferencia de tecnología. Empero, el término del conflicto bélico permitió a la CORFO la concreción de empresas estatales básicas para la industrialización: la Empresa Nacional de Electricidad S.A. (1944), con un plan de electrificación nacional exitoso; la Compañía de Acero de Pacífico S.A. (1946), una gran usina de acero en Huachipato; la Empresa Nacional de Petróleos S.A. (1950), prospección petrolífera en Magallanes y abastecimiento de crudo nacional” (2004, Memoria Chilena). Existe un interesante artículo sobre los orígenes del Estado empresario: Ibáñez, A., “El liderazgo en los gremios empresariales y su contribución al desarrollo del Estado Moderno durante la década del treinta: el fomento a la producción y los antecedentes de CORFO”, Historia, Instituto de Historia. Pontificia Universidad Católica de Chile (N° 28), 1994, pp. 183-216. Para un interesante análisis del modelo CORFO dentro de la perspectiva de la economía mundial y como una corriente de nacionalismo económico compartida por casi todos los sectores políticos, recomendamos ver: Fermandois, Joaquín, Mundo y fin de mundo. Chile en la política mundial 1900-2004, Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2005, Cap.VII: El sistema CORFO y la era del ‘subsidio’ 1939-1973, pp. 173-193.

[15 Fermandois, J. Op.cit., p. 19.](#)

[16 Fermandois ha querido resaltar la importancia del período 1932-1938 no solo como la transición entre dos modelos de política económica, sino que también como el engranaje sin el cual no se explica el paso de uno al otro. A esto se suma su interés en demostrar el carácter no determinista de los sucesos en el sentido que las tradicionales interpretaciones de la historia del período han querido darle.](#)

[17 Fermandois, J. Op.cit., p. 28.](#)

¹⁸ Lüders, R., “Una Historia Monetaria de Chile”, Cuadernos de Economía PUC, Vol. 7 (N° 20), 1970, pp. 4-28.

¹⁹ Entre los medios de comunicación opositores y sus detractores, Gustavo Ross fue conocido como “El ministro del Hambre”, debido a su inflexibilidad para ceder a las presiones por el aumento del gasto público. También fue apodado “El último pirata del Pacífico” por parte de sus opositores falangistas (que formaron parte de la juventud del Partido Conservador) debido a sus estrechos vínculos con el mundo de las finanzas internacionales, del cual había participado y participaría activamente antes y después de su paso por el Ministerio de Hacienda.

²⁰ Fermandois, J. Op.cit., p. 41.

²¹ Aquí cabe mencionar especialmente la matanza de comuneros indígenas en Ranquil (1934) y la matanza de los jóvenes nacistas del Seguro Obrero (1938).

²² Ante las numerosas barreras existentes al comercio internacional, Ross optó, en ciertos casos, por una asociación entre el Estado y los grandes productores privados (COVENSA, Corporación de Ventas de Salitre y Yodo de Chile), cuyo objetivo fue aunar fuerzas, defender los precios de los minerales no metálicos y alcanzar acuerdos comerciales o compensatorios con distintos países.

²³ Gustavo Ross no era representante de una élite tecnocrática ni tampoco poseía el perfil del político tradicional. Se trataba más bien de un hombre de negocios (finanzas), que operaba sobre el pragmatismo de una relación supuestamente virtuosa entre Estado y empresa privada. Su publicitada falta de carisma político y desdén por las campañas electorales ayudan también a explicar la derrota en las elecciones de 1938.

[24](#) [Fermandois, J. Op.cit. p. 43 \(aquí el autor cita las palabras del historiador conservador chile- no Mario Góngora respecto de la tradicional falta de arraigo del espíritu capitalista en Chile\).](#)

[25](#) [Para los sectores de la coalición de centro-izquierda que no eran marxistas, el problema del ‘imperialismo’ era una cuestión real, especialmente respecto de la intervención de Estados Unidos en América Latina. Por ello las promesas del New Deal estuvieron en sintonía con su visión de una planificación racional de la producción, que no implicaba una revolución, sino que un reformismo y un nuevo trato con los países de la región. Incluso, un periódico tradicionalmente asociado a los sectores conservadores y a la derecha política como El Mercurio, reconocía en aquellos años la evolución inevitable de los Estados Unidos hacia los valores colectivos y hacia un ‘estatismo’ respetuoso de las ‘libertades individuales’ básicas \(El Mercurio, 4 de julio de 1937, citado por Fermandois, J. Op.cit., p. 69\).](#)

[26](#) [Fermandois, J. Op.cit., p. 73.](#)

[27](#) [Frei Montalva, E., Chile Desconocido, Ediciones Ercilla, Santiago, 1937. Citado por Fermandois, J. Op.cit., p. 83.](#)

[28](#) [Sociedad de Fomento Fabril: principal organización patronal fundada en 1883, y que reúne a los empresarios industriales más importantes de Chile.](#)

[29](#) [Ambos países representaban en la década de 1930 el paradigma exitoso de la economía dirigista, centralizada y antiliberal de corte autoritario y militarista.](#)

³⁰ Fermandois, J., Op.cit., p. 87.

³¹ Posteriormente, a lo largo de este trabajo, veremos cómo el monetarismo adoptará también un lenguaje científico incontestable a partir de la década de 1970. La concepción del mercado como un espacio ‘natural’ donde debe jugar libremente la oferta y la demanda, en tanto ley científica, estará en el centro del paradigma de recomposición de la teoría clásica.

³² Crítica del dirigente socialista Marmaduke Grove. Citado por Fermandois, J. Op.cit., p. 106.

³³ Uno de sus referentes fue el francés Jacques Rueff (1896-1978), uno de los economistas liberales más importantes de la segunda posguerra europea, siendo uno de los miembros fundadores de la Sociedad Mont Pèlerin, en 1947. Asiduo impulsor del mercado común europeo y del plan económico de la V República Francesa, durante gran parte de su carrera académica y política, se lo reconoció como uno de los mayores críticos de las ideas de John Maynard Keynes y del dirigismo en la economía. Entre sus numerosos escritos, destaca un artículo de 1976 donde anuncia el fin de la era keynesiana. Este texto está disponible en: Claassen, E.-M., & Lane, G. (Eds.), Oeuvres complètes de Jacques Rueff: Politique économique (Vol. III), Plon, París, 1979.

³⁴ Carta de Gustavo Ross a Rafael Urrejola. París, 11 de diciembre de 1937. Citado por: Fermandois, J. Op.cit., p. 120.

³⁵ Sobre el concepto moderno de Democracia Restringida o Tutelada y sus orígenes en la historia republicana de Chile, recomendamos la lectura de la obra del sociólogo Felipe Portales: Portales, F., Chile: una democracia tutelada, Editorial Sudamericana, Santiago, 2000.

[36 Sobre el pensamiento de la juventud del Partido Conservador de la década de 1930, recomendamos la lectura de este breve texto: Garretón, M., Nuestro concepto de la política, Lircay, Santiago, 1937. Disponible en la Biblioteca Nacional de Chile. Una buena síntesis del origen de La Falange puede encontrarse en el sitio Memoria Chilena de la DIBAM. Aquí reproducimos solo un extracto: “El colapso del régimen parlamentario, la activación de los movimientos sociales producto de la crisis económica de 1929, el surgimiento en el mundo de modelos políticos no liberales y el fragor de la movilización estudiantil que terminó con la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, fueron el clima propicio para que un grupo de la Juventud Conservadora asumiera una posición crítica frente a la línea oficial del partido, limitada a defender el status quo de la sociedad y, a predicar la resignación entre los pobres y la caridad entre los ricos. Los jóvenes, en oposición, pensaban que desde el Estado debían impulsarse reformas que remediaran las necesidades del pueblo y estimularan la colaboración entre los distintos estamentos de la sociedad.](#)

Las diferencias con los adultos se agudizaron hasta que, al finalizar el segundo gobierno de Arturo Alessandri, la juventud del partido decidió apoyar a Pedro Aguirre Cerda en los comicios presidenciales de 1938, candidato del Frente Popular que representaba a los estratos medios y bajos. El quiebre derivó en la formación de un nuevo referente político: la Falange Nacional, donde confluía un selecto grupo de profesionales formado en las enseñanzas sociales de la Iglesia y algunos diputados conservadores afines a la tendencia social cristiana”(Copyright 2004, Memoria Chilena).

[37 Fermandois, J. Op.cit., p. 134.](#)

[38 Uno de los mejores trabajos sobre la derecha chilena, y sin duda sobre el período de la misión Klein-Sacks, es el de Sofía Correa: Correa, S., Con las riendas del poder. La derecha chilena en el siglo XX, Editorial Sudamericana, Santiago, 2004, 313 p.](#)

³⁹ [Arturo Matte Larraín \(1893-1980\) fue abogado, educador \(Sociedad de Instrucción Primaria\) y empresario chileno. Junto con su hermano, Luis Matte creó la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones \(CMPC\), y fue pionero de las plantaciones forestales. También fue Ministro del gobierno radical de Juan Antonio Ríos \(1943-1944\), fundador y presidente de la Compañía de Acero del Pacífico \(CAP\), Senador por Santiago \(1951-1957\), candidato presidencial en 1952, operador político y consejero de dos presidentes de la República: Arturo y Jorge Alessandri, respectivamente su suegro y su cuñado. Tanto Matte como Jorge Alessandri fueron Ministros de Hacienda durante los gobiernos radicales, por lo que su participación en la política económica pro-Estado había sido directa y más que circunstancial.](#)

⁴⁰ [Editorial, “Frenando el factor inflacionista fiscal”, El Mercurio, 08-08-1959, p. 3. Citado por: Soto, Á., El Mercurio y la difusión del pensamiento político económico liberal 1955-1970, Centro de Estudios Bicentenario, Santiago, 2003.](#)

⁴¹ [Se proponía modernizar la agricultura desde los cultivos de subsistencia hacia la producción exportadora. Detrás de estos planteamientos, estaba René Silva Espejo, quien asumió la dirección de El Mercurio en 1952 y ejercía como secretario de la Sociedad Nacional de Agricultura \(SNA\) desde 1942.](#)

⁴² [Correa, S., Op.cit., p. 193.](#)

⁴³ [Sobre el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, consultar el estudio de Tomás Moulian disponible actualmente en Memoria Chilena: Moulian, T., El gobierno de Ibáñez: 1952-1958, FLACSO, Santiago, 1986, 83 p. Sobre el ascenso de los grupos medios y su incidencia en este período, recomendamos también la lectura de: Barr-Melej, P., Reforming Chile: cultural politics, nationalism, and the rise of the middle class, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 2001. 304 p. Para tener una visión general sobre la relación ambivalente de Ibáñez con el populismo y el socialismo, es pertinente la lectura de: Drake, P., Socialismo y populismo: Chile 1936-1973, Eds. Universitarias de](#)

Valparaíso, Valparaíso, 1992, 321 p. Por último, recomendamos también la lectura del texto de Verónica Valdivia sobre la relación del ibañismo con el nacionalismo y el populismo: Valdivia Ortiz de Zárate, V., Nacionalismo e ibañismo, Universidad Católica Blas Cañas, Santiago, 1995.

⁴⁴ Juan Domingo Perón poseía contactos políticos de larga data con Chile. Durante su segundo mandato, realizó una visita oficial al país entre el 20 y el 26 de febrero de 1953, en la cual ofreció al Presidente Ibáñez un pacto comercial entre Argentina, Brasil y Chile (ABC). Dicho acuerdo sentaría las bases de una supuesta unidad del Cono Sur, la cual enfrentaría al mismo tiempo el doble peligro de la ‘influencia norteamericana’ y del ‘marxismo’. Perón despreciaba tanto a los partidos políticos de la derecha como los de la izquierda chilena, por lo que aconsejaba a Ibáñez a seguir un camino independiente. Perón fue derrocado en 1955 e Ibáñez decidió pactar con la derecha para finalizar su gobierno de mejor manera, lo cual finalmente no sucedió. Su conducción fue errática, caracterizada por alianzas políticas inestables y una altísima inflación (de 40% en 1953 a 86% en 1955). Su política de ajuste económico severo, a partir de 1955, generó malestar en la población y agitación popular, obligando a Ibáñez a alejarse de la derecha.

⁴⁵ Un texto antiguo pero bastante explicativo sobre el origen y desarrollo de la inflación en Chile desde fines del siglo XIX hasta 1960, puede encontrarse en: Davis, T., “Eight Decades of Inflation in Chile, 1879-1959: A Political Interpretation”, The Journal of Political Economy, Vol. 71, N° 4, 1963, pp. 389-397.

⁴⁶ Esta firma de consultores estadounidenses era conocida por sus buenas relaciones con el Fondo Monetario Internacional, además de ser fiel a sus recomendaciones. Estos economistas ya habían trabajado en Perú, de lo cual el gobierno chileno tenía antecedentes, debido a sus informes sobre la reevaluación de la moneda peruana y los subsidios estatales. Ver: Editorial, “Progress to Prosperity”, Time, Jun.13-1955, pp. 1-4.

⁴⁷ Correa, S., Op.cit., p. 201.

⁴⁸ Hemos decidido utilizar la misma expresión que propone Sofía Correa en su interesante estudio sobre la derecha chilena en el siglo XX: Correa, S., Op.cit., p. 201.

⁴⁹ De acuerdo con Tomás Moulian, las medidas propuestas por la misión Klein & Saks efectivamente puestas en práctica fueron: una mayor liberalización del comercio exterior, un control más estricto a la expansión del crédito bancario, un severo control de los reajustes de salarios (por debajo de la inflación esperada), la supresión de los subsidios a los bienes de primera necesidad y un alza compensatoria de las asignaciones familiares. Moulian, T., Op.cit., p. 39.

⁵⁰ Ver: Cavarozzi, M., The Government and the Industrial Bourgeoisie in Chile: 1938-1964 (tesis no publicada), Berkeley, University of California at Berkeley, 1974.

⁵¹ Ibíd., p. 206.

⁵² Sobre la influencia de la lógica de la Guerra Fría en Chile, véase: Moulian, Iñaki, “Bipolaridad en Chile 1960-1973”, Revista Austral de Ciencias Sociales, N° 5, 2001, pp. 39-52.

⁵³ Cavarozzi, M., Op.cit., p. 207.

⁵⁴ Una interesante interpretación sobre la historia de esta escuela de pensamiento puede encontrarse en: Stigler, G. (1992). “La Escuela de Chicago”, Estudios Públicos (N° 47).

⁵⁵ Coats, A.W., “The Origins of the Chicago School”, Journal of Political Economy, 71, February-December 1963. Citado por: Valdés, J. G., Pinochet’s Economists: The Chicago School in Chile, Cambridge University Press, Cambridge (UK), 1995, p. 53.

⁵⁶ Lo anterior no impidió la presencia de otras corrientes de pensamiento económico al interior de la Universidad de Chicago (institucionalismo, socialismo), pero sin el peso ni la influencia de los primeros.

⁵⁷ Un interesante texto sobre la personalidad de F. Knight y su influjo sobre sus estudiantes, puede encontrarse en: Stigler, G., “Frank Knight as Teacher”, The Journal of Political Economy, Vol. 81 (N° 3), 1973, pp. 518-520.

⁵⁸ Valdés, J., Op.cit., p. 57.

⁵⁹ Algunos fallecieron como Henry Simons y otros emigraron a otras universidades (Jacob Viner).

⁶⁰ La Ley de Say es un principio atribuido al economista francés Jean-Baptiste Say (1767-1832), que indica que no puede haber demanda sin oferta. Un elemento central de la Ley de Say es que la recesión no ocurre por un problema de demanda o por carencia de dinero. Cuantos más bienes (para los que hay demanda) se produzcan, más bienes existirán (oferta) que constituirán una demanda para otros bienes. De acuerdo con esta teoría, la prosperidad debe ser

aumentada estimulando la producción y no el consumo. En la opinión de Say, la creación de más dinero da lugar simplemente a la inflación; más dinero demandando los mismos bienes no implica un incremento real en la demanda.

⁶¹ ...Those of us who were deeply concerned about the danger to freedom and prosperity from the growth of government, from the triumph of welfare state and Keynesian ideas, were a small beleaguered minority regarded as eccentrics by the great majority of our fellows intellectuals. Friedman, M., Capitalism and Freedom, The University of Chicago Press, Chicago, 1975, p. vi. Citado por Valdés, J., Op.cit., p. 60.

⁶² La primera edición del libro de Hayek es de marzo de 1944, publicado en Inglaterra y posteriormente el mismo año en la Universidad de Chicago. Hayek, F., The Road to Serfdom, University of Chicago Press, Chicago, 1944.

⁶³ Utilizamos aquí la distinción de Dilthey y Rickert, que reconocen dos tipos de ciencias: las de la naturaleza y aquellas del espíritu o de la cultura.

⁶⁴ Chicago represents (a) a particularly coherent and forceful articulations of ideological and positive economics, bestowed with an instrumentalist methodology which, in the end, locates de validation of its hypothesis in the area of social and political activity. (b) Inheriting a long tradition of economic mistrust and contempt for politics, Chicago constitutes the 'extreme vanguard' of the process of contemporary penetration of economics into political thought. Valdés, J., Op.cit., p. 62.

⁶⁵ Para Pablo Baraona, economista chileno formado en la Universidad de Chicago, no cabe duda del carácter positivo de la teoría económica de Chicago, especialmente gracias a su capacidad objetiva de predicción más allá de todo principio moral. De acuerdo con esta visión, la teoría monetaria no es abstracta

en la medida que analiza problemas concretos y se valida a través de la verificación empírica. Ver: Baraona, P., Curso de economía monetaria, Sociedad de Fomento Fabril, Santiago, 1966. Citado por: Boisard, S., L'émergence d'une nouvelle droite: monétarisme, conservantisme et autoritarisme au Chili (1955-1983), Thèse soutenue à l'Université de Toulouse 2, Le Mirail, Toulouse, 2001.

⁶⁶ Sobre la representación naturalista y el lenguaje abstracto de la economía, recomendamos la lectura de la tesis de Mariana Heredia sobre los economistas argentinos: Heredia, Mariana, Les métamorphoses de la représentation. Les économistes et le politique en Argentine (1975-2001). Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), París, 2007. Tesis defendida en la EHESS el 02 de julio de 2007 para obtener el grado de Doctor de Sociología.

⁶⁷ En el debate de la política económica, Chicago representa la creencia en la eficacia del libre mercado como medio para organizar los recursos, el escepticismo acerca de la intervención del gobierno en los asuntos económicos, y el énfasis en la calidad del dinero como un factor clave en la producción de la inflación. En los debates de la ciencia económica, Chicago es sinónimo de un enfoque que toma en serio el uso de la teoría económica como una herramienta para el análisis de una sorprendente y amplia gama de problemas concretos, más que como una estructura matemática abstracta de gran belleza, pero poco poder; como un enfoque que insiste en la comprobación empírica de las generalizaciones teóricas y que rechaza por igual los datos sin la teoría y la teoría sin los datos. Friedman, M., "Schools at Chicago", University of Chicago Magazine (autumn 1974), 1974, pp. 11-16.

⁶⁸ Wall, D., Chicago Essays in Economic Development, p.vii., University of Chicago Press, Chicago, 1972. Citado por Valdés, J., Op.cit., p. 66.

⁶⁹ Milton Friedman solía utilizar esta frase para enfatizar la importancia del corpus teórico neoclásico.

[70 Boisard, S., Op.cit., pp. 126-127.](#)

[71 Montecinos, V., Economics and Power, Chilean economists in government 1958-1985, tesis de doctorado defendida en Universidad de Pittsburg en 1988, Pittsburg.](#)

[72 ...Il permet à l'économiste de réaffirmer sa position en tant que seul interprète possible de la société et détenteur de la vérité. Ce que Pierre Bourdieu a résumé dans un aphorisme: le pouvoir véritable de la magie des énoncés réside dans le mystère du ministère. Boisard, S., Op.cit., p. 127](#)

[73 Friedman, M., Essays in Positive Economics, University of Chicago Press, Chicago, 1953.](#)

[74 Sobre la crítica al lenguaje de los economistas, recomendamos la lectura de: McCloskey, D., The Rhetoric of Economics \(2nd ed.\), University of Wisconsin Press, Wisconsin, 1998.](#)

[75 Enunciado por Vilfredo Pareto \(1848-1923\), el concepto de eficiencia de Pareto \(también llamado óptimo de Pareto, Pareto-optimalidad u óptimo paretiano\) es aquella situación en la cual se cumple que no es posible beneficiar a más elementos de un sistema sin perjudicar a otros. \(fuente: Osborne, M.J. and Rubenstein, A., A Course in Game Theory, MIT Press, 1994, p. 7. Ver también entrada en Wikipedia\).](#)

[76 Sobre la concepción y la defensa del concepto de Competencia Perfecta por](#)

parte de la visión económica de Chicago, es conveniente la lectura de: Stigler, G., “Perfect Competition, Historically Contemplated”, The Journal of Political Economy, Vol. 65 (N° 1), 1957, pp. 1-17.

⁷⁷ Respecto de la visión sobre la relación entre los economistas y el Estado, leer el artículo de George Stigler sobre la materia: Stigler, G., “The Economist and the State”, The American Economic Review, Vol. 55 (N° 1), 1965, pp. 1-18.

⁷⁸ Sobre la visión de los economistas norteamericanos y especialmente de Chicago, recomendamos la lectura de: Stigler, G., “The Economists and the Problem of Monopoly”, The American Economic Review, Vol. 72 (N° 2), 1982, p. 1-11.

⁷⁹ The principal tenet of monetarism is that inflation is at all times and everywhere a monetary phenomenon. Its principal corollary is that only a slow and steady rate of increase in the money supply—one in line with the real growth of the economy— can ensure price stability. Macesich, G., Monetarism, theory and policy, Praeger, New York, 1983, p. 3. Citado por Valdés, J., Op.cit., p. 71

⁸⁰ Probablemente donde Friedman desarrolló con más fuerza este argumento fue en su monumental trabajo sobre la historia monetaria de Estados Unidos: Friedman, M., & Schwartz, A. J., A Monetary history of the United States, 1867-1960, Princeton University Press, Princeton N.J., 1971.

⁸¹ Karl Brunner (1916-1989) es un economista de origen suizo que emigró a los Estados Unidos en 1943 y trabajó en a Universidad de Chicago. Su principal interés en economía fue la naturaleza del proceso de provisión del dinero (money supply) y la filosofía de la ciencia.

⁸² Only economics and, specially, economics based on the price theory, are of analytical value in social matters. Valdés citando a Brunner respecto de su visión sobre las ciencias sociales. Valdés, J., Op.cit., p. 77.

⁸³ The sociological view typically supports the goodwill theory of government and yields conclusions favoring a large and unlimited government. An application of economic analysis, in contrast, alerts us to the fact that politicians and bureaucrats are entrepreneurs in the political market. They pursue their own interests and try to find optimal strategies attending to their interests. And what is optimal for them is hardly ever optimal for the 'public interest'. Rowman & Allanheld, Totowa, N.J., 1984, p. 185. Citado por Valdés, J. Klammer, A., Conversations with economists: new classical economists and opponents speak out on the current controversy in macroeconomics.

⁸⁴ Krebs, R., Valdivieso, P., & Muñoz, M. A., Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile: 1888-1988, Eds. Universidad Católica de Chile, Santiago, 1994.

⁸⁵ Boisard, S., Op.cit.

⁸⁶ Valdés, J. G., Pinochet's Economists: The Chicago School in Chile, Cambridge University Press, Cambridge (UK), 1995.

⁸⁷ Hasta ese momento lo que existía en la PUC desde 1920 era una escuela de comercio (Academia de Economía y Estudios Comerciales), donde se impartían los principios de contabilidad, administración y matemáticas, pero muy poco de economía. Según los estudiantes de la época, su nivel académico no alcanzaba los estándares universitarios requeridos, pues la mayor parte del cuerpo de

profesores eran abogados con un conocimiento limitado de la ciencia económica y cuya jornada de trabajo era raramente de tiempo completo, a lo que se sumaba una biblioteca escasa en textos de la materia. Esto contrastaba con la situación de la Universidad de Chile.

⁸⁸ Hemos aplicado el concepto de socialización con el sentido político que se lo utilizaba en las décadas de los 60 y 70 en Chile y no en su acepción sociológica. En aquellos años, se lo entendió como la participación creciente de los sectores medios y populares en la actividad política, así como el traspaso de propiedad privada hacia el Estado por la vía directa de la estatización de empresas, de la Reforma Agraria o bien la participación directa de los sindicatos en las decisiones administrativas de las empresas privadas.

⁸⁹ *Ibíd.*, p. 111.

⁹⁰ Se trata de la segunda presidencia del General Carlos Ibáñez del Campo (1952-1958), a la cual accedió como candidato civil de una heterogénea coalición de partidos (una facción socialista, socialcristianos e incluso radicales), pero cuya inspiración era el modelo nacionalpopulista argentino del General Juan Domingo Perón. Ver: Bizzarro, S., *Historical Dictionary of Chile* (3a ed.), The Scarecrow Press, Inc, Toronto, 2005.

⁹¹ En Chile, existe hasta el día de hoy la carrera profesional de ‘Ingeniero Agrónomo’, nombre que se utiliza para referirse a lo que internacionalmente se reconoce como una formación técnica en agricultura.

⁹² We were all excited, this was a great thing for the country, the introduction to economics at the graduate level to strike a balance in the economic thought in the country. There it was, the best free market group to come and help. We were giving an alternative. Valdés, J.V. *Op.cit.*, p. 116. Entrevista personal con Albion

Patterson (1984)

⁹³ El embajador norteamericano en Chile de la época, Willard L. Beaulac, se refería a la Facultad de Economía de la Universidad de Chile como un ‘nido de comunistas’. Valdés, J.V. Op.cit., p. 117.

⁹⁴ Valdés define este proceso como un verdadero ‘transplante institucional e ideológico’ por medio de la educación.

⁹⁵ Esto se produjo dentro del contexto del Congreso de la Unión de Universidades Latinoamericanas, realizado en Santiago de Chile en 1953.

⁹⁶ Entre los colaboradores cercanos del decano, estuvieron Alberto Neumann, Hugo Hanisch (director y secretario de la Facultad), Ricardo Cox y Domingo Arteaga.

⁹⁷ Massachusetts Institute of Technology (MIT).

⁹⁸ We are convinced that national economic development should be realized essentially through the initiative of private capital. We are not, therefore, in favor of planning policies of the country’s economic resources which suppose a unique direction, but of a systematic study of our conditions and resources in order to give efficacy to private capital investment... To get to our objective we are lacking an element which is indispensable: we lack those experts or leaders who can provide the necessary orientation to obtain the maximum promotion of our national economy through the application of private resources. Valdés, J.V. Op.cit., p. 124. Extracto de la carta enviada por Julio Chaná a Albion Patterson el 27 de enero de 1955.

⁹⁹ Para ello, debió enfrentar la dura oposición de otras personalidades de la Iglesia chilena como el obispo progresista Manuel Larraín, quien criticó fuertemente un intercambio de una universidad católica con una institución que adhiere a la “rama más conservadora de la economía, donde no existe ni la menor consideración por la justicia social”. Valdés, J.V. Op.cit., p. 125.

¹⁰⁰ Entre ellos se cuenta al Presidente de la Asociación de Bancos de la época (Walter Müller) y Domingo Arteaga (Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura). Posteriormente, sería crucial el apoyo de Agustín Edwards Eastman, dueño del periódico El Mercurio y heredero de una de las familias económicamente más influyentes de la sociedad chilena.

¹⁰¹ Raúl Prebisch (1901-1986) fue el mayor exponente de la teoría ‘estructuralista’ latinoamericana. Fue profesor de economía política en la Universidad de Buenos Aires, Presidente del Banco Central de Argentina (1935-1943) y Secretario General de la CEPAL entre 1950 y 1963. Fue uno de los inspiradores de la llamada ‘Teoría de la Dependencia’. Prebisch sostenía que el comercio internacional y el tipo de industrias coloniales orientadas hacia la exportación de materias primas habían bloqueado el desarrollo de América Latina durante todo el siglo XIX y parte del XX, generando problemas de dependencia respecto del primer mundo (relación centro-periferia) y el enriquecimiento excesivo de sectores minoritarios de la población. A su juicio, para que estos países pudieran entrar en una senda de desarrollo sostenido, era necesario que se les permitiera un cierto proteccionismo en el comercio exterior y estrategias de sustitución de importaciones. Escribió numerosas obras, entre las que destacan Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano (informe de 1963 a la CEPAL); La crisis del desarrollo argentino; y El desarrollo económico de América Latina y algunos de sus principales problemas (1949). Este último trabajo, conocido como ‘El Manifiesto’, lo impulsó a la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL (Fuente: CEPAL y EUMEDNET).

¹⁰² Halperin Donghi, T., Conferencia: Una mirada histórica sobre la CEPAL en su tiempo, Séptima Cátedra Raúl Prebisch, CEPAL, 16 agosto 2007.

¹⁰³ Aníbal Pinto Santa Cruz (1919-1996). Fue uno de los economistas chilenos más reconocidos en América Latina por su labor en la CEPAL y su trabajo teórico. Formado en la Universidad de Chile y en la London School of Economics, fue posteriormente profesor en la primera por largos años. Véase: Fredes, Carlos, “Aníbal Pinto”, Pensamiento Iberoamericano, N° 0, 2a época, 2007, pp. 287-290. Disponible en: <http://www.pensamientoiberoamericano.org/articulos/0/31/0/anibal-pinto.html>.

¹⁰⁴ “El economista chileno Jorge Ahumada, nacido en 1915, de profesión ingeniero agrónomo, fue uno de los primeros chilenos en realizar estudios de economía en Estados Unidos, obteniendo un master en Harvard. A principios de la década de 1950, fue contratado por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina, CEPAL, donde alcanzó un importante prestigio. Al mismo tiempo, fue un entusiasta colaborador de la Democracia Cristiana, amigo y consejero del presidente Eduardo Frei Montalva, al punto de participar en la redacción de su programa de gobierno. Entre sus obras principales, destacan En vez de la miseria (1958) y La crisis integral de Chile (1966)”. (Fuente: Memoria Chilena, 2004).

¹⁰⁵ Pinto Santa Cruz, A., Chile, un caso de desarrollo frustrado, Ed. Universitaria, Santiago, 1959.

¹⁰⁶ CEPAL, El pensamiento de la CEPAL, Editorial Universitaria, Santiago, 1969.

¹⁰⁷ Aquí diferimos con la posición de Stéphane Boisard, quien inicia el período en 1930, con la Gran Depresión. Creemos que lo que se produce entre 1932 y

1938 es un intento de reinsertar a Chile dentro de la economía internacional, aceptando, por cierto, muchos de los postulados keynesianos, pero siempre del paradigma de lo económico liberal. El pragmatismo demostrado por el Ministro de Hacienda, Gustavo Ross Santa María, da cuenta de este fenómeno.

¹⁰⁸ “Con la llegada al poder de la Democracia Cristiana en 1964, y a través de la presidencia de Eduardo Frei Montalva, el proceso de reforma agraria alcanzó un impulso vertiginoso. Bajo el lema ‘la tierra para el que la trabaja’ el programa reformista del nuevo gobierno buscó la modernización del mundo agrario mediante la redistribución de la tierra y la sindicalización campesina. Para lograr este objetivo, se promulgó una nueva Ley de Reforma Agraria N° 16.640 y la Ley N° 16.625 que permitió la sindicalización campesina. Sobre la base de estos dos instrumentos legales se expropiaron alrededor de 1.400 predios agrícolas, 3,5 millones de hectáreas, y se organizaron más de 400 sindicatos que sumaron más de 100 mil campesinos. Al mismo tiempo, comenzaron a producirse huelgas y tomas masivas de predios que polarizaron a la sociedad agraria chilena.

El nuevo gobierno de Salvador Allende (1970-1973) continuó el proceso de reforma agraria, utilizando los instrumentos legales promulgados por el anterior gobierno, con el fin de expropiar todos los latifundios y traspasarlos a la administración estatal, cooperativas agrícolas o asentamientos campesinos. Este proceso también estuvo acompañado de una gran efervescencia campesina que se expresó en la ocupación o tomas masivas de predios, desatándose en el mundo rural un clima de violencia y enfrentamiento. Al producirse el golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973, la Unidad Popular había expropiado cerca de 4.400 predios agrícolas, que sumaban más de 6,4 millones de hectáreas. El viejo orden latifundista que había prevalecido por más de 400 años había llegado a su fin. En las dos décadas siguientes el modelo neoliberal irrumpió en el mundo rural, produciéndose el traspaso de la tierra a nuevos capitalistas y proletarizando al antiguo campesinado”. (Fuente: Memoria Chilena, 2004).

¹⁰⁹ “La llamada ‘chilenización’ del cobre (1964) permitió la intervención estatal en la propiedad y dirección de la gran minería del cobre mediante la asociación con el capital extranjero; asimismo, propuso un aumento sustancial de la producción mediante fuertes inversiones y la refinación completa del cobre en

Chile (1966). En plena marcha de este proceso, el alza del precio del cobre y las altas utilidades de las corporaciones norteamericanas, reavivaron en la opinión pública el debate sobre una nacionalización total, obligando al gobierno de la época a poner en marcha la llamada nacionalización pactada. De esta manera, al finalizar el gobierno de Eduardo Frei Montalva, el camino a la nacionalización integral de la gran minería del cobre quedó abierto, y fue recogido por las candidaturas presidenciales de Radomiro Tomic y de Salvador Allende. El triunfo del candidato de la Unidad Popular en 1970 puso en marcha un inmediato proceso hacia la nacionalización y estatización de la gran minería del cobre. Este proceso culminó el 11 de julio de 1971, cuando el Congreso Nacional de Chile aprobó, con muy pocas modificaciones y por votación unánime, la enmienda constitucional que hizo posible la nacionalización total del cobre, caratulada como Ley N° 17.450". (Fuente: Memoria Chilena, 2004).

¹¹⁰ Calcagno, A., El pensamiento económico latinoamericano: estructuralistas, liberales y socialistas, Ediciones de Cultura Hispánica, Madrid, 1989. Citado por Boisard, Stéphane, Op.cit., p. 141.

¹¹¹ Ver: Love, Joseph, "The origins of Dependency Analysis", Journal of Latin American Studies, Vol. 22, N° 1, 1990, pp. 143-168.

¹¹² El Mercurio, 15 de febrero de 1976. Citado por: Vergara, P., Auge y caída del Neoliberalismo en Chile, FLACSO, Santiago, 1985, p. 98.

¹¹³ I don't think there is a distinct Chicago School anymore. The Chicago School was really George Stigler and Milton Friedman. Both were very forceful and very articulate proponents of a conservative point of view on government policy at a time when that point of view was not so much in favor. They were exponents of the strengths of the free market at a time when government intervention was a very popular solution for practically every problem... So I think the rest of the world has moved much closer to the Chicago School point of view, and as a result Chicago is not different from the rest of the world

anymore. Entrevista a la profesora y académica de la Universidad de Chicago, Nancy L. Stokey en el periódico The Region, diciembre de 2000. Citado por Lüders, R. y Rosende, F., “La teoría monetaria de Chicago” en: Rosende, F. (Ed.), La Escuela de Chicago (1a. ed.), Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 2007.

¹¹⁴ El economista de la PUC Dominique Hachette cuestiona fuertemente e incluso caricaturiza la tesis de la transferencia ideológica de Juan Gabriel Valdés al señalar: “Es falso que hayamos ido a Chicago para recibir un lavado de cerebro de parte del gobierno norteamericano como lo da a entender una tesis de ciencias políticas de Yale, cuyo autor, desgraciadamente no captó bien el mensaje principal que estábamos recibiendo, ni el ambiente en el cual estábamos inmersos, que permitía obtener una buena formación científica, positivista y no una ideología diseñada por el ‘Gran Satán’.” Hachette, D., “La génesis de la ‘Escuela de Chicago’: fines de los cincuenta y de los sesenta”, en: Rosende, F. Op.cit., p. 40.

¹¹⁵ Valdés, J.V. Op.cit., p. 129. Según Valdés, los chilenos no solo recibirían una sólida formación e instrucción curricular, sino también una ‘misión’ en el sentido religioso del término. Este economista sería un nuevo tipo de filósofo, que transmite la ciencia y la modernidad al mismo tiempo que defiende la libertad, guiando al político en las correctas decisiones económicas gracias al apoyo de la ciencia y a la visión racional que esta provee de la sociedad.

¹¹⁶ Gary Becker y Theodore Schultz (ambos recibieron el premio Nobel de economía en 1992 y 1979, respectivamente) son probablemente los economistas de la Universidad de Chicago que más han colaborado a difundir esta teoría internacionalmente. Sus libros han sido traducidos a diversos idiomas y el concepto de Capital Humano constituye un tópico básico de las principales escuelas de economía y negocios a nivel mundial. Esta idea se basa en el principio de que existen otros capitales diferentes del puramente material (dinero, propiedades, títulos financieros) y cuyo retorno puede ser finalmente mucho más lucrativo en el mediano y largo plazo (educación, entrenamiento,

habilidades, destrezas, buenos modales, puntualidad). Entre los textos principales de ambos autores sobre el tema, destacan: [Becker, G., “Human Capital and the personal distribution of income”, W.S. Woytinsky Lecture N° 1, University of Michigan, 1967; Becker, G. S., Human capital: a theoretical and empirical analysis, with special reference to education \(3rd. ed.\), The University of Chicago Press, Chicago; London, 1993.; Becker, G. S., Murphy, K. M., Tamura, R. F., & National Bureau of Economic Research, Human capital, fertility, and economic growth, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA, 1990.; Schultz, T. W., & Committee on Basic Research in Education, Investment in education; the equity-efficiency quandary, University of Chicago Press, Chicago, 1972; Schultz, T. W., Investment in human capital; the role of education and of research, Free Press, New York, 1970.](#)

¹¹⁷ [“Entre 1945 y 1989, Chile vivió un proceso de inflación crónica motivada en gran medida por los trastornos internos y externos de la economía, especialmente las relacionadas con los sostenidos déficit fiscales que eran financiados por emisiones del Banco Central. Distintos gobiernos buscaron contener la inflación mediante planes de estabilización; sin embargo, ante la incapacidad de los gobiernos de resistir a las presiones corporativas de los distintos actores sociales, estos solo tuvieron un éxito momentáneo para luego volver a tasas de inflación de dos o tres dígitos”. \(2004, Memoria Chilena\).](#)

¹¹⁸ [Ibíd., p. 131.](#)

¹¹⁹ [Al hecho de poner especial atención en la teoría de precios y en la teoría monetaria, se sumó la fuerte identificación entre el profesionalismo en economía y la tendencia a aplicar explicaciones económicas para los fenómenos más insignificantes de la vida diaria. Recientemente, el best seller mundial \(2005\) de Steven Levitt y Stephen Dubner, formados en esta teoría, ha puesto nuevamente en el debate el uso de la economía para explicar todo tipo de fenómenos sociales. Levitt, S., & Dubner, S., Freakonomics: a rogue economist explores the hidden side of everything, William Morrow Ed., 2005.](#)

¹²⁰ El alejamiento teórico, discursivo respecto de las otras ciencias sociales, en las cuales se inserta históricamente la disciplina económica, se hizo evidente durante la década de los 60 al interior de la PUC.

¹²¹ Las cursivas son mías y destacan la autoimagen que aún hoy conservan los primeros economistas que se formaron en esta escuela de pensamiento. Se trata de una idea de misión casi trascendental, de adelantados a su tiempo, incluso de iluminados poseedores de un pensamiento ‘superior’.

¹²² Nos referimos a Jorge Alessandri Rodríguez, empresario y Presidente de Chile entre 1958 y 1964. No se debe confundir con su padre, Arturo Alessandri Palma, quien también fue Presidente de Chile por dos períodos (1920-1925 y 1932-1938).

¹²³ Hachette, Op.cit., p. 34.

¹²⁴ The adoption of the Chicago perspective of professionalism led, as a result, not only de conclusion that they were bad economists (the cepalianos), but to the more drastic consideration that they were not economists at all, at least not in a modern and scientific sense. Valdés, J.V. Op.cit., p. 147.

¹²⁵ The University of Chicago staff has found among chilean economists and other professionals a certain distrust of free market processes and a conviction that free markets and the structure of free prices do not dispose of resources efficiently. The economists seem to be convinced that the traditional marginal analysis of economics is not useful for the Chilean (and other Latin American) case. The Chicago staff has sensed a certain reluctance among them to submit their points of view on policy to close critical examination. Citado por Valdés,

J.V. Op.cit., p. 149.

¹²⁶ De Castro, S., Prólogo, en: Rosende, F. Op.cit., p. 13.

¹²⁷ Hachette, Op.cit., p. 37.

¹²⁸ Ibíd., p. 39.

¹²⁹ Ibíd., p. 52.

¹³⁰ Hachette, Op.cit., p. 35.

¹³¹ Especialmente a partir de la década de 1990 el concepto de ‘espíritu emprendedor’ se ha difundido y banalizado al interior de la sociedad chilena, incluyendo a sectores anteriormente reacios a la idea. Las campañas políticas del presidente socialista Ricardo Lagos (1999) o del senador (ex-PPD) Fernando Flores, estuvieron cargadas de alusiones al emprendimiento individual como receta del éxito colectivo. En el mundo de la empresa privada, la idea es moneda común e incluso ha ido permeando el lenguaje académico al interior de las universidades. La Universidad del Desarrollo (cuyos dueños están ligados al primer grupo de economistas formados en Chicago y que participaron del Régimen Militar), entrega anualmente un galardón denominado ‘Premio al espíritu emprendedor’.

¹³² Valdés, J., Op.cit., p. 163.

¹³³ Ibíd., p. 163.

¹³⁴ Un listado exhaustivo de los académicos de Chicago contratados por la PUC y de sus grados respectivos, se encuentra en: Valdés, J., Op.cit., p. 165.

¹³⁵ Esto último se llevó a cabo mediante asesorías y publicaciones del Centro de Investigación Económica de la Facultad de Economía.

¹³⁶ Los economistas Carlos Massad y Ricardo Ffrench-Davis no pertenecían a este grupo, pues sus simpatías políticas estuvieron con el candidato demócratacristiano Eduardo Frei Montalva.

¹³⁷ Valdés relata este episodio como ‘el incidente del corte de pelo’, que sucedió en 1959 cuando un grupo de estudiantes decidió no presentarse a un examen complejo sin autorización del profesor. Los cuatro alumnos que se negaron a seguir la consigna sufrieron un corte de pelo como humillación pública. Esto provocó la expulsión de los agresores de la universidad y la intervención de las autoridades.

¹³⁸ Valdés, J., Op.cit., p. 177.

¹³⁹ Ibíd., p. 177.

¹⁴⁰ In part this uncertainty stemmed from lack of communication between the

Dean and de Faculty members. Such comments as the Dean has made to them in the preceding year, however, suggested to them that the future of the faculty team was threatened. Before the end of January the issue was brought to a climax by a letter to the Dean, signed by all of the full-time members of the economics faculty, presenting their grievances. Dean Chaná promptly resigned. The Chicago Report, The Chile Project under contract AID/w-74, Between The US Agency for International Development and the University of Chicago, 1 January 1963 to 15 June 1963, pp. 17-18. Citado por: Valdés, J., Op.cit., p. 177

¹⁴¹ Sergio De Castro nunca dejó de mantener estrecho contacto con sus colegas de Chile durante su 'exilio' intelectual en Colombia.

¹⁴² Conviene recordar que la doctrina liberal, tanto en su vertiente económica como política, había sido condenada por el Concilio Vaticano I en 1870. También fueron incluidas en el Syllabus las doctrinas socialistas, el racionalismo y el galicanismo.

¹⁴³ La Constitución Apostólica Gaudium et Spes (1965) fue uno de los logros principales del Concilio Vaticano Ecuménico II (1962-1965). Su nombre proviene de las primeras palabras de esta en latín, que en castellano significa Los gozos y las esperanzas. Trata acerca de la Iglesia en el mundo actual, y es la manifestación más clara del aggiornamento pretendido por el Papa Juan XXIII.

¹⁴⁴ La identificación de la Iglesia Católica chilena con la doctrina social del Concilio Vaticano II y las posiciones reformistas y progresistas de carácter estructural, la alinearon con la visión de la Democracia Cristiana en desmedro del partido Conservador, tradicionalmente el bastión del catolicismo chileno. Este viraje del electorado católico hacia la DC generó la debacle de los partidos de derecha en 1965, obligándolos a fundirse en una nueva entidad: el Partido Nacional. La línea doctrinaria del nuevo partido fue consistente con un proyecto de cambio social ya no defensivo como había sido hasta aquel entonces en la derecha chilena. Su ideología se definió como nacionalista, vinculando las

corrientes hispanistas y corporativistas que convivían en la derecha chilena tradicional, pero agregando además una fuerte crítica al modelo de democracia liberal, especialmente a partir de su versión ‘intervencionista’ de 1938. Solo a partir de 1972 y durante el gobierno de la Unidad Popular, el Partido Nacional adoptará una línea de ruptura con el orden institucional de 1925.

¹⁴⁵ El principio de subsidiariedad forma parte de la doctrina socialcristiana y establece que una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de su autonomía y, en consecuencia, del pleno ejercicio de sus competencias, sino que, por el contrario, su función, en tanto que estructura de orden superior, debe consistir en sostenerle, ayudarle a conseguir sus objetivos y coordinar su acción con la de los demás componentes del cuerpo social a fin de alcanzar más fácilmente los objetivos comunes a todos. Es decir, la sociedad debe dejar a las personas o los grupos que la componen todo lo que ellos realicen responsable y eficazmente. La subsidiariedad dicta que la autoridad debe resolver los asuntos en las instancias más cercanas a los interesados. Por tanto, la autoridad central asume su función subsidiaria cuando participa en aquellas cuestiones que, por diferentes razones, no resuelvan eficientemente en el ámbito local o más inmediato. Fuente: Luzón Peña, D. (1999). Curso de Derecho Penal; parte general. Madrid: Ed. Universitas.

¹⁴⁶ Boisard, S., Op.cit., p. 162.

¹⁴⁷ Jaime Guzmán Errázuriz (1946-1991) tendrá un papel relevante en la política chilena entre la segunda mitad de la década de 1960 y principios de los 90. En 1991 es asesinado por un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) cuando ejercía el cargo de Senador de la República. Guzmán, formado en el conservadurismo católico corporatista hispánico, fue un estrecho colaborador del régimen militar encabezado por Augusto Pinochet y uno de los articuladores de la Constitución de 1980 y del sistema electoral binominal. Reconocido polemista y orador, reagrupó a las fuerzas del Gremialismo para organizar el partido político de derecha Unión Demócrata Independiente (UDI)

en 1983. Su pensamiento es el resultado de una fusión pragmática entre un catolicismo conservador tradicional y un individualismo económico anticomunitario deudor del pensamiento de F. Hayek.

¹⁴⁸ Para más información sobre la Reforma Universitaria chilena, recomendamos la lectura de: Huneus, C. (1988). La reforma universitaria: veinte años después. Santiago: CPU; Scherz García, L., “Reforma y contrarreforma en la Universidad Católica de Chile: (1967-1980)”, Realidad universitaria / Revista del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea, 1988, pp. 36-53; Gárate, M., Los sueños comienzan en casa: el grupo de ‘La Reforma’ y el primer proyecto de vida comunitaria inspirado en el modelo del rector Fernando Castillo, Tesis Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 1995.

¹⁴⁹ Haciendo una mirada retrospectiva, el asesinato de Jaime Guzmán, en 1991, puede agregarse, en términos comparables, como el tercer hito que ha marcado la vida política de esta colectividad.

¹⁵⁰ Directiva del Movimiento Gremial, Carta al Rector de la Universidad Católica de Chile, (s.r), non daté, Fundación Jaime Guzmán Errázuriz. Citado por Boisard, S., Op.cit., p. 162.

¹⁵¹ Boisard hace explícita referencia al modelo de la Universidad de Chicago, reconocido por su verticalidad y estructura jerárquica. Boisard, S., Op.cit., p. 168.

¹⁵² La crisis terminal de los partidos Conservador y Liberal tras el triunfo presidencial, en 1964, del demócratacristiano Eduardo Frei Montalva, marcó el comienzo de una rearticulación de las fuerzas de derecha en torno a un nuevo proyecto nacional. La polarización de la sociedad chilena estuvo marcada por el lenguaje del enfrentamiento en un contexto internacional de Guerra Fría, donde

las distintas posiciones políticas alcanzaron un alto grado de maximalismo. El Estado de Compromiso surgido en 1938 y el sistema de partidos políticos sancionado por la Constitución de 1925, se vieron presionados al máximo durante la segunda mitad de la década de 1960.

¹⁵³ Jaime Guzmán Errázuriz, “Las razones de su vida”, Cosas, N° extraordinario, 5 de abril 1991, p. 18. Citado por: Boisard, S., Op.cit., p. 229.

¹⁵⁴ Ibíd., p. 229.

¹⁵⁵ Ibíd., p. 230.

¹⁵⁶ Entrevista a Javier Leturia (dirigente gremialista). Citado por: Boisard, S., Op.cit., p. 231.

¹⁵⁷ Stéphane Boisard estima que dos influencias europeas pueden explicar esta particular fusión ideológica. En primer lugar, el surgimiento de una ‘economía social de mercado’ elaborada por la Unión Demócrata Cristiana alemana (CDU) durante la década de 1950, y que asigna al Estado y a la moral cristiana un papel de regulador de las desigualdades del mercado en nombre de la justicia social. En segundo lugar, el ‘ascetismo mundano’ del movimiento católico español Opus Dei, que reconcilia definitivamente al capitalismo con el catolicismo integrista. Los aportes de estas corrientes de pensamiento, sumadas al monetarismo de Chicago y al integrismo gremialista, se detectan en la publicación chilena Portada, creada en 1969 por el grupo conservador surgido principalmente como consecuencia de la Reforma en la PUC.

¹⁵⁸ El máximo exponente de esta intelectualidad conservadora surgida en la

década de 1930, fue el abogado e historiador chileno Jaime Eyzaguirre (1908-1968), reconocido por su defensa de las tesis hispanistas y su rechazo de la tradición historiográfica liberal chilena. A esta corriente de pensamiento ultraconservador, pertenecieron también autores como Julio Philippi y el sacerdote y mentor de Jaime Guzmán, Osvaldo Lira.

¹⁵⁹ Guzmán, J., “El capitalismo y los católicos de tercera posición”. Fiducia, Vol. III (N° 20), 1965, pp. 4-5. Citado por: Cristi, R., El pensamiento político de Jaime Guzmán (1a. ed.), LOM Ediciones, Santiago, 2000, p. 30.

¹⁶⁰ Cristi, R. Op.cit., p. 17.

¹⁶¹ El Opus Dei comenzó su labor estable en Chile y Argentina en 1950. Fundado en 1928 por el sacerdote español José María Escrivá (1902-1975), su estatus ha ido evolucionando al interior de la Iglesia Católica hasta convertirse en Prelatura Personal (1982). La estructura de la organización, altamente jerarquizada, comprende diferentes estamentos para sus miembros dependiendo de su disponibilidad y grado de compromiso. El hermetismo con que opera a nivel internacional ha impedido conocer hasta ahora con exactitud sus redes de influencia económica, cultural, social y política.

¹⁶² Un análisis detallado sobre la orientación y contenidos de la revista Portada, puede encontrarse en el artículo de Francisca Alessandri sobre la materia: Alessandri, Francisca, “La tradición hispana y la revista “Portada”, Cuadernos de Información (Universidad Católica de Chile), N° 2, 1985, 14/06/2008, http://fcom.altavoz.net/prontus_fcom/site/artic/20041215/pags/20041215212733.

¹⁶³ Ruiz, C., “El conservantismo como ideología. Corporativismo, y neo-liberalismo en las revistas teóricas de la derecha”. In C. Ruiz & R. Cristi, El pensamiento conservador en Chile (163 p.), Editorial Universitaria, Santiago,

1992, p. 106.

¹⁶⁴ Revista Portada, 1970, N° 9, p. 7. Citado por: Ruiz, C., & Cristi, R. Op.cit., p. 108.

¹⁶⁵ Revista Portada, 1969, N° 2, p. 6. *Ibíd.*, p. 109.

¹⁶⁶ Ruiz, C., Op.cit., p. 111.

¹⁶⁷ Boisard, S., Op.cit., p. 248.

¹⁶⁸ La misma tradición indicaba que invariablemente siempre se había confirmado a la primera mayoría, aunque su ventaja fuera muy estrecha. Este era el caso de Salvador Allende en 1970.

¹⁶⁹ Hasta solo algunos días antes de la elección, las fuerzas conservadores daban por segura la victoria de su candidato, Jorge Alessandri.

¹⁷⁰ Declaraciones del general René Schneider al periódico El Mercurio (08-05-1970).

¹⁷¹ El asesinato del Comandante en Jefe del Ejército, general René Schneider, llevado a cabo por un ‘torpe’ comando de jóvenes de extrema derecha, simulando ser un grupo de izquierda, demuestra el grado de desesperación de los

sectores más ultra. Este atentado realizado el 22 de octubre de 1970, el cual originalmente sería solo un secuestro en palabras de sus autores, tenía como objetivo obligar a las Fuerzas Armadas a intervenir antes de que asumiera oficialmente el gobierno la Unidad Popular.

¹⁷² ...The people planning to leave are ready in effect to sell all they can't take with them, to abandon their jobs and/or professional practices, and to leave their houses, business, factories, etc., to an uncertain fate. How large the exodus will be is entirely unknown. Seminario: "The last Dope from Chile". Mimeo firmado por Arnold Harberger, 07 de septiembre de 1970, 6 p. Citado por: Valdés, J., Op.cit., p. 242.

¹⁷³ En los círculos conservadores chilenos, gustan de llamar al período como 'Los mil días de la Unidad Popular', haciendo hincapié en lo dificultoso y largo de cada uno de aquellos días.

¹⁷⁴ The overall virtues of the market and free competition, the rejection of the state and its protection of industrial development that characterized neo-liberal ideas seemed then combine without conflict with Christian Democratic concepts of a free market with state participation in promoting 'social justice', worker participation, and income redistribution. The contradictions between these issues were considered to be less important than that of forming a defensive front against the uncontrollable 'collectivization' of the economy. Valdés, J., Op.cit., p. 246.

¹⁷⁵ Sociedad de Fomento Fabril: principal organización patronal fundada en 1883, que reúne a los empresarios industriales más importantes de Chile.

¹⁷⁶ Agustín Edwards se había trasladado a Estados Unidos para conseguir ayuda de Henry Kissinger y Richard Nixon para aumentar la presión en contra del

gobierno de la Unidad Popular. Durante su estadía fue nombrado vicepresidente de la Pepsi Cola Company.

¹⁷⁷ En la revista Qué Pasa, Sergio de Castro ejercía como editor económico.

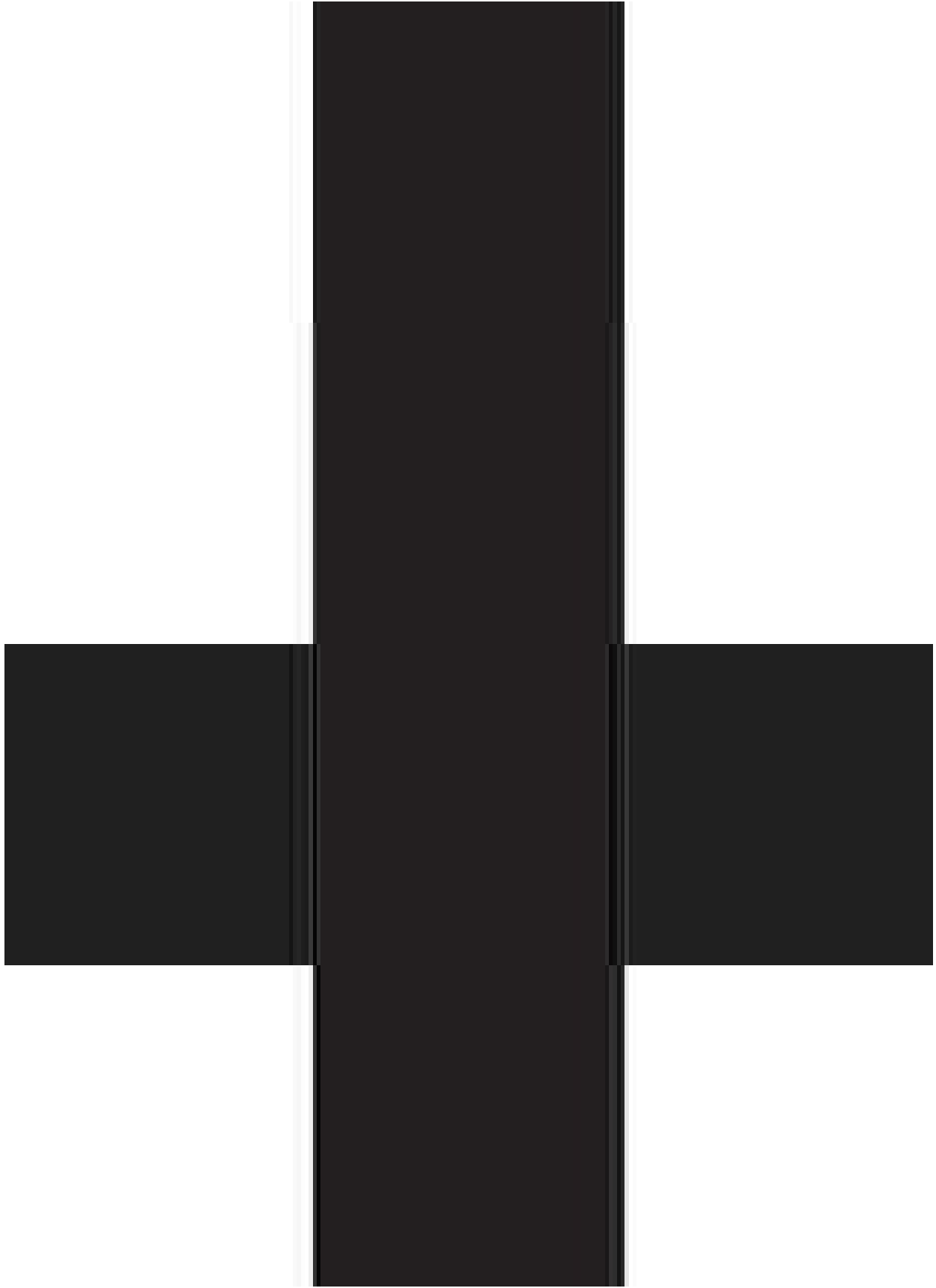
¹⁷⁸ En una entrevista personal de Juan Gabriel Valdés con Orlando Sáenz, este último admite que ya desde 1971 existía la convicción en un sector importante del empresariado de que el gobierno de la UP era incompatible con la libertad económica y, por lo tanto, la única salida era su derrocamiento.

¹⁷⁹ Money was coming from everywhere and nobody asked where it came from: one must keep in mind that with Allende, Chile had gone into a 'Cold War' logic. Palabras de Sergio Undurraga: citado por Valdés, J., Op.cit., p. 251.

¹⁸⁰ La Democracia Cristiana mantuvo a sus economistas trabajando en secreto con el grupo de la SOFOFA, mientras por otra parte dilataba la posibilidad de un acuerdo con el gobierno.

¹⁸¹ De manera irónica, Valdés destaca que el timing fue perfecto entre el derrocamiento y muerte del último presidente constitucional y la puesta en marcha del primer plan económico de los Chicago Boys.

SEGUNDA PARTE



EL RÉGIMEN MILITAR Y SU PROYECTO SOCIOECONÓMICO (1973-
1989)



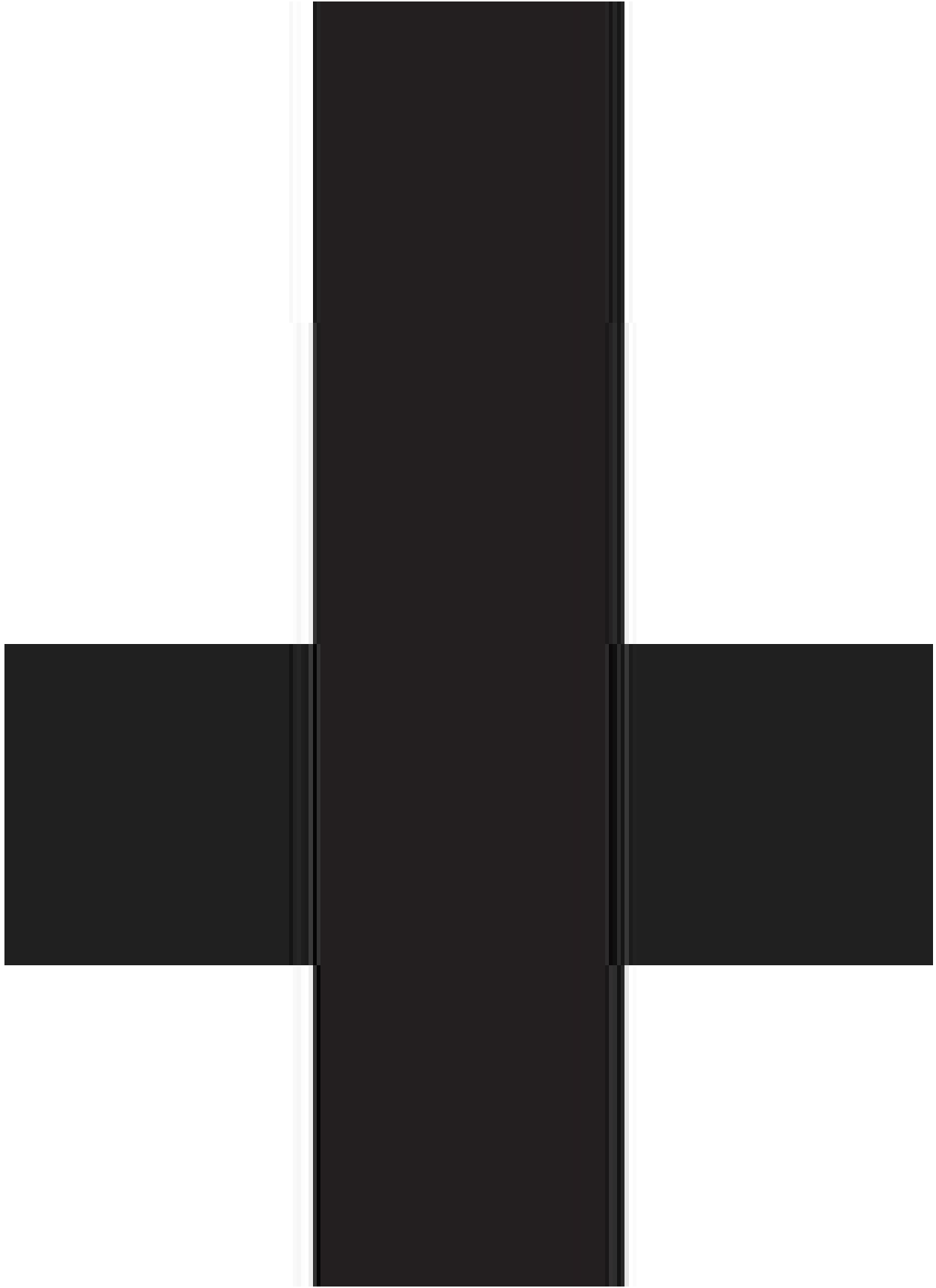
Represión política, entre 1980-1989. Fondo general.

Archivo fotográfico y digital, Biblioteca Nacional

CAPÍTULO III

LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO.

LA ALQUIMIA ENTRE LIBERALISMO ECONÓMICO, AUTORITARISMO Y CONSERVADURISMO POLÍTICO (1973-1981)



(..) caerán los que tengan que caer. Porque así es esto. Es la selva del mundo de la vida económica. Una selva de animales salvajes, donde el que pueda matar al del lado, lo mata. Esa es la realidad.

Almirante José Toribio Merino, miembro de la Junta de Gobierno (1973-1989)¹.

In 1975, when inflation still raged and a world recession triggered a depression in Chile, General Pinochet turned to the ‘Chicago Boys’—as the group of economists later became known— and appointed several of them to powerful positions in the government.

Milton Friedman²

La ausencia de proyecto económico de los militares (1973-1975)

El interés historiográfico por la transformación económica de Chile durante el régimen militar chileno, ha dado prioridad a la influencia de los civiles en el gobierno, especialmente la del grupo de economistas conocidos posteriormente como los Chicago Boys y a los sectores gremialistas representados en la persona de Jaime Guzmán Errázuriz³, uno de los principales articuladores de la nueva institucionalidad chilena⁴. Esta mirada, que bien refleja los resultados de las políticas puestas en marcha en Chile durante las décadas de 1970 y 1980, parte del supuesto teórico de que las Fuerzas Armadas fueron principalmente un ‘instrumento de clase’ en manos de los civiles que buscaban la caída del gobierno de la Unidad Popular y el fin de modelo de Estado de Compromiso o Benefactor, iniciado durante la década de 1930.

Un análisis más completo de la situación, el cual incorpora reciente bibliografía sobre el tema⁵, nos ha llevado a introducir otras variables y tener una mirada más compleja sobre la cuestión, si bien esto no altera el hecho de que fueron finalmente los civiles, aliados al régimen, quienes tomaron control del modelo económico a partir de la segunda mitad de la década de 1970. Sin embargo, ello no resta importancia al hecho de que al interior del gobierno militar hubo diferentes corrientes y disputas respecto del modelo económico a aplicar, y que finalmente fueron derrotados aquellos que defendían visiones más nacionalistas o estatistas de la economía, especialmente en el ámbito social, aunque —resulta importante aclararlo— siempre dentro de un esquema profundamente antimarxista.

El hecho de que al momento del golpe de septiembre de 1973 ya existiera un proyecto económico liberal como El Ladrillo⁶, aludido en el capítulo anterior, no significa que el plan estuviese completamente trazado y que los militares lo aplicarían de manera inmediata. Por el contrario, hubo posiciones nacionalistas e incluso corporativistas que disputaron la primacía a las visiones más liberales. Fue necesaria una labor de convencimiento sobre los militares, especialmente respecto de Pinochet, el advenedizo y el último en sumarse a la conspiración, puesto que la mayor parte de los oficiales golpistas eran cercanos al nacional-

desarrollismo estatal⁷. Hoy en día la teoría más plausible es justamente la que sostiene que esta falta de proyecto de Pinochet y su necesidad de afirmarse en el poder y legitimarse, fue lo que lo incitó a buscar un proyecto propio, revolucionario e incluso fundacional. Solo en la marina existía un ambiente más propicio a las reformas liberales, pero en la Fuerza Aérea, el Ejército y Carabineros, numerosos generales y altos oficiales de la conspiración inicial continuaron identificándose con la tradición nacionaldesarrollista, vinculada con el ibañismo de corte populista:

Entendemos por Ibañismo militar la añoranza castrense por un gobierno fuerte y eficiente, que despreciaba a los políticos y prefería a los tecnócratas, que valorizaba la función económica y social del Estado; proclive a la integración controlada y despolitizada de los sectores subalternos, que creía en la necesidad de una nueva era de modernizaciones y esperaba recuperar el status y la valorización social alcanzados en otra época. Desde nuestra óptica, la Doctrina de la Seguridad Nacional actuó sobre este basamento y no sobre una tabla rasa, discrepando de las interpretaciones que ven un total vacío doctrinario a la llegada de los principios norteamericanos⁸.

Al momento de dar el Golpe de Estado de septiembre de 1973, los militares no contaban con un proyecto económico consensuado ni menos un modelo fundacional de país. Ello se fue constituyendo durante los primeros meses e incluso años del régimen (al menos hasta 1975-77). Se debe recordar que el objetivo inicial de los militares alzados en contra del gobierno de la Unidad Popular era, en sus propias palabras, ‘restablecer el orden social y económico, la unidad nacional y darle la fuerza suficiente al Estado chileno para resistir cualquier agresión externa o interna’⁹. El único consenso básico que existía entre la oficialidad golpista estuvo dado por la necesidad de poner fin a un gobierno (la Unidad Popular) al cual se lo consideraba como ‘caótico e ideologizado’.

El peso de la tradición castrense desarrollista

El fin abrupto del Estado de Compromiso a partir de 1973 coincide también con la desaparición de una mirada del mundo castrense sobre la sociedad chilena inaugurada con la sublevación militar de 1924¹⁰. Esta última se había llevado a cabo en busca de una política social más activa del Estado frente a la mala situación profesional y económica de las Fuerzas Armadas, y como advertencia al poder creciente de las ideas socialistas europeas entre los sectores obreros y el pequeño artesanado urbano¹¹.

Compartimos la posición de Verónica Valdivia respecto a que los militares que dieron el Golpe de Estado de 1973 se hallaban mucho más cerca del estatismo-desarrollista de viejo cuño, que respecto a la revolución neoliberal que se terminaría por instaurar entre 1975 y 1989¹². La mirada nacional-desarrollista y corporativista había estado representada, durante buena parte del siglo XX, por la figura del general de Ejército Carlos Ibáñez del Campo¹³ (dictador entre 1927 y 1931, y presidente constitucional entre 1952 y 1958). Ella reflejaba los tradicionales ideales de los militares chilenos: el orden, la unidad nacional en torno a la idea del pueblo, el progreso económico, una constante desconfianza hacia las élites y los partidos políticos y su idea de un Estado fuerte, además de un anticomunismo visceral. Su visión era esencialmente nacionalista, y aunque respetuosa de la propiedad privada y el capitalismo¹⁴, defendía un papel activo del Estado en sectores estratégicos, manteniendo distancia del liberalismo librecambista como así también de las corrientes socialistas más ortodoxas. Existía un ideal de justicia social en estos oficiales, heredado del ibañismo, pero también una idea de participar del progreso del país, siendo parte de la lucha contra la miseria y el subdesarrollo. A su juicio, esta era la mejor manera de alcanzar la reforma en paz y así contrarrestar lo que denominaban como el ‘peligro marxista’ y la ‘desintegración social’.

Esta posición varió con el tiempo al agudizarse el conflicto Este-Oeste a partir de la década de 1950. Es en este momento cuando Estados Unidos inició un vasto programa de formación militar y apoyo en material bélico en América Latina con el objetivo de evitar que los países del continente pudiesen orientarse hacia el bloque soviético¹⁵. Fue así como los oficiales chilenos de la década de 1960 se enfrentaron a una nueva idea de la guerra y de las formas de definir y derrotar a los nuevos enemigos, pues se estaba frente a una nueva concepción de

los objetivos nacionales y de la labor de la Fuerzas Armadas. De lo que se trataba finalmente era de una batalla ideológica, política y estratégica, que ponía al mundo castrense en el centro del conflicto político al interior de sus propias sociedades.

En concreto esto significó que se privilegiaron las funciones policíaco-represoras de los ejércitos, en lugar de la de fensa de la soberanía externa, lo cual afectó fuertemente la percepción castrense acerca de la lucha política nacional. Desde ese punto de vista, el instrumental doctrinario de la Seguridad Nacional comenzó a operar en forma más activa en los análisis militares y la extensión del comunismo por el continente empezó a ser vista como menos lejana¹⁶.

A lo anterior se sumaba la crisis de la derecha chilena, la cual había terminado con la creación del Partido Nacional (1965)¹⁷, sumando no solo las fuerzas de liberales y conservadores, sino que también de sectores nacionalistas de larga tradición antidemocrática¹⁸ y antiliberal, quienes eran partidarios de una democracia orgánica y un gobierno autoritario, donde se les asignaba a las Fuerzas Armadas un papel preponderante como ‘garantes de la institucionalidad’¹⁹.

Todo esto significaba que, en los albores del Golpe de 1973, las Fuerzas Armadas chilenas se encontraron cada vez más tensionadas por el conflicto político local, a la vez que sus tareas y objetivos habían sido reorientados hacia la contrainsurgencia y a la lucha contra el ‘enemigo interno’, a lo que se sumaban las nuevas tareas policíacas a las cuales el poder político las destinó (no pocas veces en contra de su voluntad) a partir de mediados de la década de 1960. Sin embargo, en ningún caso esta situación permitía prever que el futuro régimen militar adoptase un modelo ultraliberal en lo económico y conservador en lo institucional, pues la posición dominante dentro de la oficialidad seguía siendo, hasta 1973, el nacional-desarrollismo social de la década de 1930 y no el anticomunismo norteamericano de quienes seguían a pie firme los dictados de la Doctrina de la Seguridad Nacional.

Como se dijo anteriormente, los militares no tenían un proyecto económico ni tampoco institucional al momento de dar el Golpe de Estado. Su objetivo fue

explícitamente la restitución del orden social y económico, pues —a su juicio— se había producido un exceso de ‘estatismo’ y ‘desorden social’, lo cual había puesto en peligro la seguridad del país. La gestación del Golpe tomó forma entonces cuando un grupo importante de oficiales estimó que la autoridad y disciplina sociales debían ser recuperadas y la crisis económica, revertida urgentemente. La caída del gobierno de la Unidad Popular se explicaba, para estos oficiales, en el hecho de que las autoridades gubernamentales habían dejado de cumplir las tareas que les eran propias, es decir, fomentar el crecimiento económico y el desarrollo del país. Por el contrario, ellas habrían propiciado la politización de la sociedad y tolerado e incluso alentado el desarrollo de la izquierda-marxista más revolucionaria. En palabras del propio Pinochet:

[las Fuerzas Armadas] deberían recuperar el nivel de progreso que tenía nuestro país, y que ha sido detenido y subvertido por el gobierno marxista de Allende durante tres años²⁰.

De lo que se trataba, entonces, era de poner fin a lo que llamaron el estatismo de la experiencia socialista, pero sin romper del todo con la política económica que conocían desde hace cuarenta años. Había un cierto sentido de restauración en la mayor parte de los oficiales golpistas; es decir, la idea de un retorno hacia una supuesta situación de normalidad que se había perdido con la Unidad Popular²¹. El problema principal fue que los militares no tenían la menor competencia técnica ni menos una idea de cómo lograr esto, pues su mayor interés y capacidad estaba en asegurar el orden público. Solo contaban con su voluntad, decisión y tradicional sentido pragmático para enfrentar las nuevas tareas administrativas del Estado.

Fue en este marco de preocupaciones donde el General Pinochet, la Junta de Gobierno y los oficiales designados en las carteras de Economía (General de División Rolando González) y Hacienda (Contralmirante Lorenzo Gotuzzo) debieron empezar a enfrentar la situación del país, para lo cual no estaban preparados. Tal como quedó de manifiesto en los primeros días en el poder, uno

de estos oficiales del área económica pidió asesoría al Estado Mayor de la Defensa: “Tenís que ayudarme. Nunca he sido Ministro”. ‘¡Yo tampoco! Te las vai a tener que arreglar solo (sic)²².

La necesidad de contar con asesoría técnica para enfrentar los temas económicos más urgentes se volvió en un imperativo para estos improvisados ministros militares. Fue así como hicieron irrupción los asesores civiles y los economistas de Chicago. Ellos, a diferencia de la mayor parte de sus colegas demócratacristianos, no tenían problemas con las medidas represivas y autoritarias del régimen, pues lo importante era apoyar técnicamente en la restauración de la economía chilena. Se trató, al menos en un principio, de una colaboración puramente pragmática entre militares y tecnócratas neoliberales, dada la gravedad de la situación económica del país. Era necesario poner en marcha el aparato administrativo lo antes posible, y en esto los civiles contaban con la experiencia de la cual adolecían los militares.

Fue a través de la Marina, quien había encargado El Ladrillo en 1972 para una supuesta reconstrucción nacional, que los economistas próximos a la visión de Chicago entraron en el gobierno. El almirante José Toribio Merino fue el encargado del Comité Económico al interior de la Junta de Gobierno, y quien llamó a Sergio de Castro para que fuera asesor del Ministro de Economía (general Rolando González) el 14 de septiembre de 1973. Otro cercano a de Castro, Roberto Kelly, fue nombrado a cargo de ODEPLAN (Oficina de Planificación Nacional), lugar que posteriormente se convertiría en el centro neurálgico de las reformas neoliberales. Sin embargo, aún les tomaría algunos años y disputas con los militares desarrollistas el controlar el aparato económico del régimen militar y convencer a Pinochet de aplicar un programa radical de transformaciones económicas.

Uno de los principales escollos para el grupo de economistas neoliberales residió en el Comité Asesor de la Junta (COAJ) donde estaban excluidos. Esta era una instancia puramente militar creada por Pinochet como una suerte de Estado Mayor, y donde las diferentes posiciones de los oficiales se expresaban de manera directa (aunque no pública) a los miembros de la Junta. Este organismo permitió la existencia de cierto debate en torno a las políticas económicas, aunque siempre dentro del marco de la obediencia militar, especialmente respecto de Pinochet, quien actuaba como Comandante en Jefe del Ejército,

Presidente de la República (desde 1974) y el miembro con más poder dentro de la Junta de Gobierno.

Después de todo, las tendencias estatistas no marxistas y sí capitalistas, reivindicadas por los oficiales, eran una línea de continuidad con lo que había sido el pensamiento militar a lo largo del siglo (XX). Frente a un proyecto neoliberal avasallador y el respaldo que recibió del almirante Merino y el general Pinochet, los núcleos más reacios a él defendieron dentro de los márgenes que les ofrecían los valores militares del ‘cumplimiento del deber’ y de la ‘disciplina activa’ los espacios estatales considerados estratégicos, por el tiempo que fue posible²³.

En definitiva, entre 1973 y 1975, si bien se aplicaron algunas medidas económicas liberales, lo que primó fundamentalmente fue un programa de estabilización económica y de control gradual de la inflación, cuyos rasgos fueron eminentemente pragmáticos. Parte importante de los generales involucrados en el Golpe de Estado estaban de acuerdo con las medidas antiinflacionarias, así como en la devolución de las empresas estatizadas por CORFO durante la Unidad Popular (lo que se llamó la ‘normalización’)²⁴. Pero en ningún caso se pretendía privatizar aquellas industrias estratégicas para la Seguridad Nacional, y que habían siempre formado parte de CORFO, pues creían en una economía mixta con una importante presencia del Estado.

El triunfo de los neoliberales sobre los nacional-desarrollistas

Con una metralleta en la raja, todo Chile trabaja²⁵.

Sergio de Castro (Ministro de Hacienda del régimen militar, 1977-1982)

En lo económico, los primeros dos años del gobierno militar estuvieron marcados por políticas de ‘desestatización’²⁶ y control de la inflación, aunque, como bien se dijo anteriormente, dentro de un marco autoritario pero gradualista²⁷, y que no apuntaba terminar con las estructuras creadas desde la década de 1930²⁸. Sin embargo, la inestabilidad monetaria continuó agravándose a lo largo de 1974 sin producirse los efectos esperados en la reducción de la inflación. Ello facilitó que el discurso más extremo de los técnicos de Chicago, partidarios acérrimos de una reducción drástica del gasto público y el peso del Estado en la economía, hiciera eco en los miembros de la Junta de Gobierno, especialmente en el general Pinochet y en el almirante Merino. De este diagnóstico surgió la idea de nombrar al ingeniero demócratacristiano Jorge Cauas como Ministro de Coordinación Económica, un hombre cercano a los monetaristas y partidario de una política radical de liberalización de la economía.

Ubicados como asesores en diferentes ministerios económicos y atrincherados en ODEPLAN, durante el primer año del régimen los Chicago Boys batallaron por imponer su visión. En el gobierno no había claridad sobre la senda económica a seguir y convivían diversas visiones. Entre los más adversos a las reformas figuraba Raúl Sáez, ministro de Coordinación Económica, quien fue llamado al gobierno por el general Leigh, y según Kelly, era ‘ecléctico en materia económica (...) y muy difícil de trabajar con él’(sic). Con Fernando Léniz, ministro de Economía, a poco andar también ‘se enfriaron las relaciones’²⁹.

Las cifras económicas de 1975 no parecían para nada auspiciosas, pues se vislumbraba una aguda crisis internacional, sumada a la caída del precio del cobre y el aumento explosivo del valor del petróleo. Roberto Kelly, a cargo de ODEPLAN, presentó a la Junta de Gobierno un oscuro panorama para aquel año, mostrando cifras inflacionarias similares a las 1973, lo cual precipitó en los militares la decisión de un cambio de rumbo. El nuevo equipo monetarista defendía la idea de una política de shock para frenar la inflación, lo que se traducía en una reducción radical del gasto público y un cambio profundo en las relaciones laborales en favor del empresariado.

Tal como lo señalaba Fontaine, el Plan Cauas iba más allá de un programa de estabilización de corto plazo. Lo que pretende Cauas es revertir la tendencia de cincuenta años del Estado chileno que se atribuye el papel de asignador preferente y casi monopólico de los recursos de la comunidad, para situarlo en un rol subsidiario y entregar al sector privado y a sus libres iniciativas el rol protagónico en la asignación de recursos³⁰.

Los oficiales desarrollistas, representados en el Comité Asesor de la Junta y específicamente por el comandante de la Fuerza Aérea, general Gustavo Leigh Guzmán, se opusieron al programa de Cauas, optando por la postura gradualista del ingeniero Raúl Sáez. Sin embargo, Pinochet favoreció al nuevo Ministro (Cauas), con lo que al mismo tiempo dio un golpe de fuerza frente al grupo original de generales que estuvo detrás del Golpe de 1973.

La consolidación de Pinochet como gobernante al interior del régimen militar se apoyó, entre otras cosas, en este golpe de timón económico de 1975³¹. Es justamente en este período (1975-1982) cuando se produce la apertura radical de la economía chilena y la aplicación del liberalismo económico más dogmático. Fue la época de la llamada política de shock, destinada a terminar con lo que quedaba del modelo de desarrollo anterior y al mismo tiempo aislar a los militares que aún creían en una vía desarrollista o incluso en una cierta restauración del Estado de Compromiso. Alan Angell se ha referido a este asunto al preguntarse sobre la crisis del modelo de desarrollo vigente hasta 1973:

¿Hubo una verdadera crisis económica en Chile antes de 1973? Esta pregunta fue reformulada por los economistas de Chicago, que controlaban la política económica después del golpe. Ellos argumentaron que era de hecho una crisis, y que solo puede ser curada por un cambio drástico de la política económica, orientada hacia el Estado y aplicada desde 1930, en favor de una economía de libre mercado³².

Durante estos siete años, se aplicó en Chile una política económica ortodoxa, caracterizada por la apertura al comercio internacional unilateral, la reducción drástica del gasto público, la fijación de un tipo de cambio nominal, la liberalización financiera, y especialmente el control estricto de las relaciones laborales. Coincidente con ello fue el aumento de la represión selectiva y la influencia de la policía secreta del régimen, la DINA³³ (a partir de 1974), encargada no solo de combatir a los opositores reales o imaginarios del régimen, sino sobre todo generar temor en la población y así evitar cualquier tipo de contestación social a las medidas económicas³⁴. Un paquete de reformas tan radicales no podía llevarse a cabo sin un marco represivo acorde a la profundidad y rapidez de los cambios impuestos desde el poder central³⁵.

El discurso de los civiles pro-liberalización, en cuanto a la eficiencia de las nuevas medidas, fue convenciendo también a una parte importante de la oficialidad militar liderada por Pinochet y Merino. El denunciado estatismo del modelo anterior fue presentado como un lastre a la modernización del país y como una fuente constante de ineficiencias. A esto se sumó el hecho, no menor, de que la mayoría de la prensa (autorizada) de la época estaba de acuerdo con las nuevas medidas, lo que creaba un ambiente propicio para las mismas y limitando al máximo el espacio de debate para cualquier otro tipo de alternativa. Como bien lo ha planteado Verónica Valdivia:

El neoliberalismo no solo permitió responder a una demanda largamente formulada por el mundo militar, sino usó un lenguaje común: la importancia de la eficiencia para realizar una misión de manera competente. Por este motivo es que el rol de los técnicos, de los especialistas se vuelve tan preponderante; solo

aquellos preparados a cabalidad en ciertas áreas podrían ofrecer, desde la óptica militar, soluciones adecuadas a problemas específicos³⁶.

De esta manera, las propuestas gradualistas de Raúl Sáez, así como de la mayor parte de los técnicos demócratacristianos (excluyendo a Jorge Cauas), fueron definitivamente excluidas:

El fracaso de las medidas más gradualistas —la dupla Léniz-Sáez— y la reaparición de la inflación a comienzos de 1975 convencieron a Pinochet y Merino de su imperativo y de la necesidad ya no solo de destruir al marxismo — aunque ello no solo siguió estando en el centro del discurso, sino que se convirtió en el tema eje—, sino de todo aquello que pudiera eventualmente poner en peligro la estabilización de las variables macroeconómicas. En ese momento, y de modo casi imperceptible, el general Pinochet comenzó a apartarse de la noción de desarrollo económico y social simultáneo y a privilegiar el primero para más tarde alcanzar el segundo, comenzando a acercarse a las posturas neoliberales³⁷.

El antipoliticismo y antipartidismo de la oficialidad militar también ayudó a consolidar la posición de los economistas de Chicago, quienes se presentaron — desde el comienzo— como esencialmente ‘técnicos’ y absolutamente convencidos de alcanzar las metas de inflación a través de la aplicación integral de su tratamiento de shock³⁸. Estas políticas implicaron un costo social enorme y la casi completa desarticulación del movimiento sindical; este fue contenido principalmente gracias al contexto represivo-policial de la época. Sin embargo, las medidas terminaron por generar la ansiada estabilidad monetaria, la cual permitió al régimen acceder nuevamente a créditos internacionales. Este giro ideológico de los militares, desde el nacional-desarrollismo hacia el neoliberalismo, no se hubiera producido sin el retiro obligado de la mayor parte del cuerpo de altos oficiales existente en 1973. Fue así como entre 1974 y 1976 se rehizo prácticamente todo el cuerpo de generales, especialmente en el Ejército, dejando el camino libre para la implantación del nuevo modelo³⁹:

El discurso que enfatizaba la necesidad de ‘civilizar’ el régimen y convertirlo en cívico-militar, implicaba de suyo la eliminación de los antiguos oficiales en los ministerios que posibilitarían el proceso. La renovación ministerial de abril de 1975 que colocó a Cauas como ‘Superministro’ y favoreció con posterioridad la aplicación de las políticas de ‘shock’, provocó estos cambios⁴⁰.

A Pinochet le quedaba solo un último escollo: el comandante de la Fuerza Aérea, Gustavo Leigh Guzmán, quien había comenzado a hacer públicas sus discrepancias con Pinochet. El general Leigh, junto a los generales de Ejército Óscar Bonilla y Nicanor Díaz Estrada, entre otros, había preparado un proyecto social a lo largo de 1974, que representaba a la mayoría de la alta oficialidad que había estado detrás del Golpe de Estado. Se trataba del Estatuto Social de la Empresa⁴¹, el cual pretendía incorporar a los trabajadores en las decisiones empresariales, integrando ciertos márgenes de negociación colectiva y representación sindical⁴², aunque evitando al máximo su politización. Se trataba finalmente de otorgar ciertos derechos sociales y laborales reivindicativos, pero eliminando toda influencia ideológica, especialmente de tipo marxista⁴³. La idea principal era que la empresa, en tanto ente portador de una función social, debía convertirse en una comunidad donde patrones y trabajadores persiguieran los mismos objetivos de desarrollo.

El proyecto social de estos oficiales fue finalmente derrotado. De acuerdo con la hipótesis de Valdivia —la cual nos parece la más fundamentada entre todas las que revisamos— dicho plan fue rechazado primero por los empresarios, debido a su marcado estatismo, pero también por escasas organizaciones de trabajadores toleradas por el régimen, quienes lo consideraron un retroceso respecto al régimen anterior (obviamente sin saber lo que vendría posteriormente) y un mero reformismo en una época marcada por modelos revolucionarios. Para Pinochet, representaba el peligro de la rearticulación del movimiento social en el mundo popular, justo cuando estaba consolidando la máxima concentración de poder en sus manos y las nuevas reformas neoliberales necesitaban de una sociedad totalmente desmovilizada⁴⁴. En estricto rigor, se habría tratado de un proyecto estructuralmente extemporáneo, incluso anacrónico.

Finalmente, los militares que defendían este proyecto no opusieron mayor resistencia al régimen y la mayoría se fue retirando de las filas de manera voluntaria y en muchos casos forzada, como sucedió con el general Leigh⁴⁵.

Con la destitución de Gustavo Leigh de la junta, el principal opositor a la doctrina de Chicago fue descartado. Esto hace posible hacer referencia al modelo económico chileno, aquel de una economía de libre⁴⁶.

En términos generales, el proyecto social de los militares desarrollistas significó el último intento —tímido de hecho— por rescatar parte del Estado de Compromiso creado desde la década de 1930⁴⁷. Sin embargo, lo dicho anteriormente nos permite argumentar que la dictadura militar no aplicó de inmediato un modelo económico ultraliberal, fruto de una racionalidad calculada, sino que fue más bien el resultado de una pugna interna que duró al menos un año y medio (1973-1975) y que terminó por enterrar lo que quedaba del modelo anterior y del estatismo-desarrollista, incluso al interior de las filas castrenses. Verónica Montecinos ha resumido muy bien la causa de la resistencia del régimen militar a las crisis económicas de la década de 1970 y 1980.

La resiliencia del régimen de Pinochet se basó en parte en las profundas transformaciones estructurales que se habían iniciado en el curso de la década anterior (70). Las reformas neoliberales revolucionaron la economía política del país. El viejo modelo de la industrialización promovida por el Estado fue reemplazada por una abierta, orientada al mercado con un sector exportador en expansión. En la década de 1970, los tecnócratas más ideológicos del gobierno persuadieron a Pinochet y a muchos de sus más influyentes asesores civiles, que una reestructuración drástica de la economía del país era necesaria para eliminar la acumulación de ineficiencias burocráticas que sofocaba el crecimiento económico. La gestión de la economía, según este argumento, tuvo que ser despolitizada⁴⁸.

Siguiendo el razonamiento de Alan Angell, creemos que los militares que salieron vencedores de esta pugna se sintieron atraídos por la nueva ortodoxia económica, no tanto porque comprendieran su racionalidad interna, sino porque les ofrecía coherencia y disciplina dentro de un marco técnico-científico y, por lo tanto, ideológicamente neutral y alejado de toda negociación y arreglo político⁴⁹.

De esta manera, el proceso aparecía como irreversible y aplicable a cabalidad. Y es en este sentido que lo consideramos revolucionario.

El fin del modelo de Estado de Compromiso y la implantación del neoliberalismo ortodoxo (1975-1982)

Si bien entre los estudiosos del período existen diferencias respecto si el proyecto neoliberal se implantó inmediatamente producido el Golpe de Estado o a partir de 1975, creemos que al menos debe tomarse en cuenta la existencia de un proyecto económico-social heredero del desarrollismo militar y nacionalista explicado anteriormente. Ello nos lleva a preguntarnos por el momento en el cual los economistas monetaristas instalaron, finalmente en Chile, un conjunto de medidas de una ortodoxia liberal inédita en el mundo hasta ese momento. A partir de este instante, y no antes, se puede dar por liquidado el proyecto de Estado de Compromiso y economía protegida creado a fines de la década de 1930 con el apoyo técnico de otra tecnocracia, pero surgida mayoritariamente de la ingeniería y no del mundo de los economistas.

... después de la Segunda Guerra Mundial, el sector empresarial estaba en una posición relativamente débil, tanto económica como tecnológicamente. Dada su falta de experiencia empresarial el Estado tuvo que asumir el liderazgo, y los empresarios llegaron a depender en gran medida del Estado. Aníbal Pinto sostiene que el impulso de la modernización capitalista no proviene del sector empresarial, sino de lo que él denomina una “tecnoburocracia del Estado”, mayoritariamente ingenieros provenientes del sector público y privado⁵⁰.

El fin del modelo desarrollista se pudo llevar a cabo a partir de la salida de aquellos altos oficiales de la conspiración inicial que representaban una amenaza al poder del general Pinochet al interior de la Junta de Gobierno, y en el seno de las Fuerzas Armadas. Esta coyuntura política al interior del régimen y las malas cifras económicas de fines de 1974-75, abrió el camino a los técnicos ultraliberales que proponían un cambio radical en la economía chilena.

Pilar Vergara, quien ha escrito uno de los estudios más citados sobre el tema, extiende este período entre 1975, cuando se implanta el tratamiento de shock económico, y 1978, es decir, cuando el régimen decidió crear un marco institucional para una nueva democracia chilena⁵¹. Sin embargo, si bien compartimos la primera fecha como momento inicial de la instauración de un modelo ideológico inédito, seguimos la postura de Ricardo Ffrench-Davis, quien extiende esta fase ideológica hasta 1981-1982, momento en que se produjo una enorme crisis financiera que obligó al régimen a orientarse desde un monetarismo puro y duro hacia un modelo liberal con ciertas dosis de pragmatismo⁵².

Lo que sí es claro es que el equipo más extremo identificado con las posturas neoliberales terminó por prevalecer. En no poca medida, esto se debió a su coherencia doctrinaria interna; influyó también, el hecho de que representaba la visión de grupos económicos con enorme poder financiero, comunicacional y vínculos con el exterior, que con anterioridad al golpe ya venían promoviéndolo, y que, luego, prestarían su apoyo irrestricto una vez constituido el régimen militar con proyecciones de largo aliento⁵³.

La fase de implantación ideológica del modelo neoliberal, iniciada en 1975, fue denominada como el Plan de Recuperación Económica, aunque la mayor parte de la literatura sobre el tema se refiere a esta etapa como el plan o tratamiento de shock. Bárbara Stallings, por su parte, entiende este período como una fase de cambios estructurales mayores:

Su característica principal fue la aplicación rígida e ideológica de un conjunto de reformas estructurales y políticas macroeconómicas que derivaron en un desempeño altamente volátil, culminando en una grave crisis cambiaria y bancaria⁵⁴.

Después de casi dos décadas de espera tras el inicio del programa de intercambio académico con Estados Unidos, se había producido la oportunidad tan anhelada

por los economistas de Chicago, para no solo terminar con los resabios de las reformas de la Unidad Popular, sino que principalmente con el modelo de economía protegida vigente desde hacía cuarenta años. La ventaja lograda es que, a partir de aquel momento, lo hicieron gracias a un régimen dictatorial que les permitió instaurar medidas que difícilmente un sistema democrático con grupos sociales organizados y movilizados hubiese tolerado⁵⁵. El marco ideológico/autoritario y el ambiente represivo son lo que caracteriza la profundidad y el dogmatismo en la aplicación de las nuevas medidas. Es en esta conjunción de factores y menos en las características personales o técnicas de los economistas formados en Chicago (igualmente presentes en otros países del continente) que deben buscarse las explicaciones de la singularidad de la experiencia chilena en su transformación socioeconómica a partir de la década de 1970.

Pero, finalmente, sigue pendiente la pregunta: ¿qué fue aquello a lo que se intentó poner fin de manera radical a partir de 1975? En definitiva, se trataba del modelo de economía protegida que surgió tímidamente tras la crisis mundial de 1929-1930 y que tomó fuerza a partir de 1938. Su inspiración se hallaba en los principios keynesianos orientados a limitar el daño de nuevas crisis originadas en el sector externo de la economía por la vía de fortalecer la economía interna mediante la sustitución de importaciones y el apoyo del Estado. En otras palabras, no se trataba de una alternativa al capitalismo liberal, sino que de una versión nacionalizada y proteccionista, que no se oponía al capitalismo en cuanto tal, sino que a su desregulación y excesiva interdependencia de los mercados internacionales. Sin embargo, este modelo que incorporaba numerosos elementos de inclusión social, protección económica y regulación de capitales, inéditos hasta ese momento⁵⁶, había ya comenzado a mostrar signos de agotamiento desde fines de la década de 1950⁵⁷. Fue este proyecto el que finalmente deseaban liquidar los economistas de Chicago y no solo el experimento socialista de la Unidad Popular, pues —desde su punto de vista— esta había sido solo la fase extrema y final (pero necesaria incluso para algunos) de un largo camino de errores económicos y mala teoría aplicada desde los años 1930.

De Castro (Sergio) señala que la explicación de la crisis político-social de 1973 no está en los tres años de mal manejo económico del gobierno de la UP: “el caos sembrado por el gobierno marxista de Allende solamente aceleró los

cambios socializantes graduales que se fueron introduciendo en Chile ininterrumpidamente desde mediados de la década del 30". Desde esta perspectiva, una parte de estos 'cambios socializantes graduales' corresponde a las innumerables y erróneas medidas de tipo redistributivo adoptadas por el Estado a partir de la década del 30; desde ese entonces, el Estado creó la noción del 'cultura del reparto', en que se promete "el mejoramiento sustancial del nivel de vida de la inmensa mayoría de los chilenos, sin sacrificar sino a los más ricos", esto es, "la pobreza se resuelve quitándole a unos para darles a otros, lo que conduce a minar la armonía prevaleciente en la sociedad chilena"⁵⁸.

El significado ideológico del ajuste recesivo o tratamiento de shock

Tras meses de debate al interior del régimen militar en torno a la mejor política para controlar la espiral inflacionaria de fines de 1974, se produjo —en abril de 1975— el giro hacia las posiciones monetaristas más puras. La solución ortodoxa fue generar una abrupta reducción del déficit fiscal. La economía chilena mostraba señales recesivas preocupantes, especialmente influenciadas desde el exterior debido a la fuerte caída del precio del cobre y las repercusiones de la primera gran crisis internacional del petróleo en 1973. A esto se sumaban un alza internacional del costo del crédito y un déficit de cuenta corriente prácticamente inmanejable. La ventana de acción para el ingreso de las propuestas radicales de los economistas de Chicago, se había producido. La estrategia liberal gradualista llevada a cabo hasta el momento por el equipo económico, había fracasado, perdiendo principalmente el apoyo del general Pinochet.

Las decisiones económicas del nuevo equipo económico dirigido por Jorge Cauas⁵⁹ estuvieron apuntadas a crear un recorte brusco del gasto fiscal, agudizando con ello la recesión mediante un ajuste automático⁶⁰. Con ello se pretendió controlar la espiral del alza de los precios y superar el déficit de la balanza de pagos al reducir fuertemente las importaciones. A juicio de estos tecnócratas, solo la aplicación rápida y total de estas medidas permitiría continuar con la liberalización de la economía a pesar del enorme costo económico y social de las mismas. Las reformas sociales propuestas por los militares de tradición nacional-desarrollista fueron rápidamente descartadas y dejadas en el olvido. Sucedió esto, por ejemplo, con el Estatuto Social de la Empresa, el nuevo Código del Trabajo y un proyecto de reforma provisional que se mantenía dentro del modelo de repartición y solidaridad entre generaciones.

(...) en torno al general Leigh se consolidó una posición que era un injerto extraño para la liberalización de la economía que propiciábamos. En política laboral, por ejemplo, el general de la FACH, Nicanor Díaz Estrada, íntimo de Leigh, tenía una concepción francamente socialista de las relaciones laborales y una vez que lo nombraron ministro del Trabajo y Previsión Social se lanzó a la redacción de un Código del Trabajo cuyo criterio rector era incompatible con los

postulados que sosteníamos. Dio también fuerte apoyo al Estatuto Social de la Empresa, que había nacido en el directorio de CORFO, y al cual, los del equipo económico nos oponíamos⁶¹.

Cualquier posibilidad de un régimen militar corporativista, donde diversos actores tuviesen voz en las decisiones, fue eliminada por la férrea concentración de poderes en el equipo económico de Chicago.

No fue coincidencia que, a fines de marzo del mismo año, el premio Nobel de Economía y profesor de la Universidad de Chicago, Milton Friedman, acompañado de Arnold Harberger, visitara el país invitado por el Banco BHC y el régimen militar. En una carta dirigida a Pinochet, con fecha 21 de abril de 1975, Friedman entregó sus orientaciones económicas al régimen, justo en los momentos en que la represión de la DINA se hacía más brutal⁶²:

En la práctica, disminuir el gasto público es, por lejos, la manera más conveniente para reducir el déficit fiscal ya que, simultáneamente, contribuye al fortalecimiento del sector privado y, por ende, a sentar las bases de un saludable crecimiento económico (...). No existe ninguna manera de eliminar la inflación que no involucre un periodo temporal de transición de severa dificultad, incluyendo desempleo. Sin embargo, y desafortunadamente, Chile enfrenta una elección entre dos males, un breve periodo de alto desempleo o un largo periodo de alto desempleo, aunque sutilmente inferior al primero (...). Si este enfoque de shock fuera adoptado, creo que debiera ser anunciado pública, muy detalladamente y, además, entrar en vigor en una fecha muy cercana a dicho anuncio⁶³.

Creo que los Chicago Boys ya habían llegado a la conclusión de que un tratamiento de shock era necesario para poner fin a la inflación y establecer las bases de la recuperación económica y el crecimiento, y que la clave para poner fin a la inflación y alentar tal recuperación consistía en una drástica reducción del gasto público, ya que la inflación fue claramente impulsada por la necesidad de imprimir dinero para financiar un enorme déficit fiscal⁶⁴.

Si bien la estrategia de shock de 1975 seguía muchos de los lineamientos monetaristas de las medidas gradualistas del equipo anterior, el acento se puso en mayores recortes al gasto fiscal, pero en un presupuesto que ya había sido fuertemente restringido, lo que agudizó la recesión. No se trató de una simple continuación de receta monetarista con un énfasis mayor en la lucha contra la inflación, sino que —sobre todo— del triunfo político de un proyecto económico de largo plazo defendido por el grupo de civiles más radicales en términos de la política económica liberal. A partir de este momento, su influencia fue predominante en la conducción económica, lo cual quedó demostrado por la velocidad, extensión y profundidad de las reformas estructurales orientadas a consolidar una economía de libre mercado y plena apertura externa⁶⁵.

Fue el marco del Chile de Augusto Pinochet, en particular, donde Milton Friedman pudo experimentar con las supuestas recetas virtuosas de su “teoría de choque”, que luego se exportaron a Europa y los Estados Unidos (...). El desplazamiento del centro de gravedad del espacio del neoliberalismo en Europa (economía social de mercado) hacia los Estados Unidos condujo a una depreciación de lo que quedaba del “liberalismo social” en favor de otra forma de neoliberalismo, el de la Escuela de Chicago⁶⁶.

Para el nuevo equipo económico, la inflación constituía una enfermedad del cuerpo social, la cual solo se curaría mediante un tratamiento profundo y prolongado, aunque ello significara un enorme sacrificio por parte de la sociedad. La inflación, entendida principalmente como un fenómeno monetario, se combatiría solo gracias a una drástica restricción de los medios de pago, una reducción radical del déficit fiscal y la eliminación de la mayor parte de los subsidios. Todo ello implicaba poner en marcha cambios estructurales tendientes a reparar lo que se consideraba, según algunos economistas (Sergio de Castro en especial), como el resultado lógico de ‘medio siglo de errores económicos’⁶⁷.

Si hubiera dependido solo de mí, las habría vendido todas (las empresas del Estado); pero no se podía porque todavía existía al interior del gobierno la

creencia de que algunas de ellas como LAN, ENAMI, Ferrocarriles del Estado (FFCC), ENDESA⁶⁸, etc., eran estratégicas (...) ⁶⁹.

Ya no se trataba de introducir ajustes al modelo de sustitución de importaciones, como bien lo habían planteado algunos de los oficiales nacional-desarrollistas inmediatamente tras el Golpe de 1973, sino de provocar una ruptura radical que permitiera el repliegue definitivo del Estado en el plano económico, limitándolo solo a una labor definida únicamente como subsidiaria. Esto debía abrir paso a la plena integración de la economía chilena al comercio internacional y al libre flujo de capitales.

El Estado debía abstenerse de desempeñar cualquier tipo de actividad que pudieran realizar los agentes privados, para lo cual debía desprenderse de todas sus empresas, aparte de unas pocas consideradas ‘estratégicas’ para la seguridad nacional, y de los programas de erradicación de la extrema pobreza. Pero incluso en este último campo, debía actuar a través de mecanismos indirectos (subsidios, impuestos) que no distorsionaran el sistema de precios⁷⁰.

Como bien lo ha planteado Pilar Vergara, se daba por terminada así la industrialización sustitutiva, considerada como forzada y artificial, en tanto objetivo prioritario de la política económica. La industria fue desplazada como motor dinámico del proceso de acumulación en beneficio de aquellos sectores en los cuales el país podía competir en los mercados mundiales, es decir, la minería, la agricultura, la silvicultura y la pesca. En otras palabras, en aquellos rubros intensivos en el uso de recursos básicos. Fue así como se descartó cualquier ayuda o subsidio a ciertas industrias o áreas, pues esto alteraba el libre juego del mercado, aumentaba el gasto público y generaba inflación. Este repliegue del Estado en la actividad económica y la consecuente integración a la economía mundial, fueron las guías fundamentales de la política de shock.

Un claro ejemplo de la nueva política comercial fue el retiro de Chile del Pacto Andino a fines de 1976⁷¹. Las normas arancelarias, cuotas y restricciones al ingreso de capitales extranjeros estipuladas en el acuerdo, resultaban completamente contradictorias con la nueva estrategia neoliberal. Las nuevas

autoridades económicas establecieron una completa y unilateral apertura de los flujos comerciales, nivelando el arancel general hasta solo un 10%, en 1979, para todos los productos, sin ningún tipo de discriminación. A ello se sumó la eliminación del conjunto de barreras para-arancelarias (reglamentos, prohibiciones, cuotas de importación y licencias).

La política de shock generó una profunda recesión en la economía chilena, con caídas de la producción industrial de hasta un 28% en 1975 y una caída del PIB cercana al 13%. El desempleo se elevó a principios de 1976 a casi un 20%, mientras que los salarios reales habían caído cerca de un 40% respecto del nivel que tenían en 1970. La fuerte restricción monetaria generó un alza sustancial en el costo del crédito, con tasas de interés que subieron desde un 9,6% a un 20% durante 1975⁷². Sin embargo, al final del primer año, la inflación tampoco se había reducido en los términos esperados, siendo bastante cercana a la del año anterior (343% frente a 369%).

(...) la crítica de los curas (la Iglesia Católica) se acentuó en 1975 porque fue un año de crisis, de gran pobreza, caracterizado además por el alto desempleo y tasas de interés ridículamente elevadas. Sin embargo esta crítica solo era explicable por el desconocimiento que casi todos tenían de cómo funcionaban los mercados libres⁷³.

En términos del impacto social originado por la política de shock, fue clara la restricción en comparación con los sectores que se beneficiaron de ella. Los más afectados fueron los asalariados y obreros de los sectores medios. En general, el costo fue mayor para todos los medianos y pequeños industriales que se desarrollaron al amparo de las políticas proteccionistas del modelo de sustitución de importaciones y, por el contrario, en beneficio de los grupos que se podían adaptar más rápidamente a los vaivenes del mercado mundial. En este caso, se trató principalmente de aquellos sectores vinculados con las actividades financieras, comerciales y de exportación⁷⁴. Estas políticas requerían de un fuerte poder central autoritario, que contuviera y reprimiese cualquier atisbo de descontento social, incluso de la crítica de parte de sectores empresariales que resistieran algunas de las medidas gubernamentales. Es más, ellos fueron excluidos de cualquier instancia o comisión de que elaborara proposiciones

económicas, de las cuales habían participado activamente entre 1973 y 1975.

El régimen acentuó el control sobre las organizaciones intermedias (gremiales, estudiantiles y colegios profesionales), evitando así cualquier demanda de tipo corporativa. Al mismo tiempo, las organizaciones sindicales siguieron sometidas a las duras restricciones impuestas al momento del Golpe de Estado, principalmente la prohibición de negociación colectiva y el derecho a huelga⁷⁵. A esto se sumó la extensión de la declaración de ilegalidad de todos los partidos políticos⁷⁶, incluso de aquellos que habían apoyado el Golpe y habían permanecido en receso⁷⁷.

La extensión de las acciones represivas se vio acompañada de una mayor selectividad en su aplicación, que aumentaba su efectividad. Por otro lado, se amplió el espectro de sectores sociales que eran objeto de la coerción y del amedrentamiento, hasta cubrir todas las organizaciones políticas, gremiales e incluso religiosas que ponían en cuestión o realizaban críticas a la conducción económica⁷⁸.

La implantación del shock monetarista terminó por desplazar, al menos por algunos años, las otras visiones conservadoras que existían al interior del régimen. Una política económica férrea y excluyente eliminó toda posibilidad de un modelo corporativista que fortaleciera los grupos intermedios, como era el caso de los gremios y los colegios profesionales, limitando todo al poder a las instancias del Estado y el mercado; el primero obviamente al servicio del segundo. Por de pronto, esto volvió imposible cualquier política de incorporación o participación del mundo laboral dentro de un esquema más normalizado de relaciones laborales. Predominó entonces un esquema defensivo, basado en los conceptos vinculados con la Seguridad Nacional, para así justificar la severidad del plan económico y la represión selectiva con la cual hizo su debut en 1975.

El país, a juicio de los encargados del plan económico, estaba enfrentado a una disyuntiva maniquea entre ‘totalitarismo’, significando con ello todo tipo de intervencionismo estatal, y la ‘libertad’, encarnada específicamente en la economía de libre mercado. Con ello se excluían todos los caminos intermedios.

En términos estrictamente ideológicos, y siguiendo la clasificación de Pilar Vergara, pueden identificarse tres principios guía en la visión tecnocrática del régimen:

- La libertad económica, entendida como aquella que se realiza en el mercado, es la verdadera libertad, y su plena realización constituye una condición necesaria para la vigencia efectiva de la libertad política. Por lo tanto, el único orden justo es el que surge de las transacciones entre individuos que se relacionan libremente y fuera del ámbito gubernamental.
- Una concepción del mercado como expresión de la impersonalidad del mando, al cual deben someterse todas y cada una de las decisiones individuales, según reglas objetivas, impersonales y uniformes, lo cual asegura la igualdad para todos. Aquí, la libertad también es definida negativamente como ausencia de coacción externa, especialmente si se ejerce por parte del Estado. Las desigualdades que se generan en el mercado y su correspondiente jerarquización social son el resultado de un ordenamiento creado por un mecanismo ‘neutro’ y por lo tanto justo. El antiguo énfasis en lo social es reemplazado por una prioridad en lo individual. La democracia se vuelve instrumental en la medida que se asegura la ‘sociedad libre’ en la cual se respeta la igualdad económica y la igualdad formal de los individuos en el mercado. El autoritarismo entonces se encuentra justificado como un paso necesario para instaurar la nueva y verdadera democracia; aquella donde se asegura un régimen de plena libertad económica.
- La política económica del régimen se fundamenta en un saber de carácter científico, denominado como ‘ciencia económica moderna’. Ya no se trató solo de un imperativo ético, sino que de un saber científico inapelable: ‘A la racionalidad superior y supuesta neutralidad valorativa de los principios que emanan de la ciencia y de la técnica, se oponen las ‘ideologías’ que habrían regido las políticas económicas en el pasado’⁷⁹.

Nosotros pensamos que una de las deficiencias básicas de la antigua institucionalidad chilena es la no consideración de la economía como ciencia en las decisiones políticas. Caricaturizando un poco, podría decirse que la política aparecía como un saber revelado desde alguna parte, o estudiado en un lugar

poco conocido, ajeno a los conceptos económicos científicos⁸⁰.

En este modelo de sociedad, no son los gremios —que defienden intereses parciales— ni el poder político tradicional quienes guían los destinos de los gobernados, sino una tecnocracia que sacraliza el papel de los expertos, especialmente si estos poseen el saber de la ciencia económica. Solo ellos actúan por esa racionalidad superior, de la cual carecen las ideologías o los intereses sectoriales.

El experimento neoliberal como doctrina económica

La instauración de una ortodoxia monetarista en Chile durante la década de 1970 resulta de un diagnóstico consensuado entre la mayoría de los autores que han trabajado el tema. Sin embargo, como hicimos alusión anteriormente, las diferencias afloran al momento de elaborar una periodización. Autores como Pilar Vergara, Verónica Valdivia o Patricia Olave⁸¹ prefieren establecer una diferencia entre el momento de estabilización gradualista (1973-1975) y la fase de aplicación ortodoxa o del tratamiento de shock (1975-1982), con lo cual ponen el acento en la llegada y predominio de los tecnócratas liberales por sobre los militares nacional-desarrollistas⁸².

Por otra parte, otros autores, principalmente economistas, como Ricardo Ffrench-Davis, Patricio Meller, y en alguna medida Felipe Larraín y Rodrigo Vergara⁸³, han tendido a tratar el período como una unidad completa (1973-1982), en la cual se diferencian etapas más o menos agudas de aplicación de una misma doctrina económica.

Hemos preferido el primer enfoque para el análisis histórico, pues nos permite dar cuenta de las diferencias y complejidades existentes al interior del régimen, como así del proyecto social nacional-desarrollista que en algún momento se insinuó entre los oficiales que lideraron la conspiración del Golpe de Estado. No obstante lo anterior, creemos que para este subcapítulo la segunda mirada nos ayuda a comprender de mejor manera el modelo ortodoxo a la luz de la teoría económica y en la perspectiva de la evolución del pensamiento económico liberal en Chile.

Entre las estrategias económicas para países en desarrollo disponibles en la década de 1970, el régimen militar decidió aplicar aquella de mayor ortodoxia liberal propuesta por los economistastécnicos conocidos como los Chicago Boys. Esto, como dijimos anteriormente, solo se produjo con tal nivel de profundidad dentro de un marco político autoritario y represivo, donde los ejecutores del modelo económico dispusieron de una autonomía excepcional para poner en práctica sus preceptos e incluso corregirlos. Pero más importante que esto, y como bien lo señala Ffrench-Davis, es el hecho de que se trata de uno de los primeros y principales casos, a nivel mundial, de aplicación moderna de ortodoxia monetaria debido a su pureza, profundidad, extensión y cobertura.

Esto fue aprovechado no solo por la dictadura militar, sino que por diversas instituciones internacionales y medios financieros, quienes dentro de un contexto aún de Guerra Fría, “priorizaron la libertad económica a cualquier precio por sobre otras dimensiones de la actividad humana”⁸⁴. A lo anterior, se suma la dificultad mostrada por el modelo para funcionar correctamente en economías en desarrollo, más allá de la lógica y racionalidad extrema de sus postulados. En efecto, la supuesta neutralidad de las medidas no fue capaz de dar cuenta de la heterogeneidad de las estructuras productivas y de los agentes económicos, atribuyéndole mayor importancia a la concentración de la propiedad y a la especulación financiera en desmedro de la formación de capital y del desarrollo productivo.

Ffrench-Davis insiste también en el carácter ‘globalista’ del modelo monetarista aplicado en Chile durante estos años, especialmente respecto de su incapacidad para dar cuenta de los problemas sectoriales, la segmentación de los mercados y la dificultad en la transmisión de la información entre los diferentes agentes económicos, lo cual subestima los procesos de ajuste y desestabilización de la economía. Entre las políticas ortodoxas teóricamente neutras aplicadas por los tecnócratas del régimen, el mismo autor destaca tres, las cuales consideramos fundamentales para comprender el cambio de paradigma respecto del modelo de Estado de Compromiso, industrialización y sustitución de importaciones:

- a) La política antinflacionaria.
- b) La reforma al sistema financiero.
- c) La apertura comercial indiscriminada al exterior.

a) La política antinflacionaria

Respecto de la política inflacionaria, Ffrench-Davis identifica dos fases: la primera se refiere a una política antinflacionaria de monetarismo extremo en economía cerrada (1973-1976), y posteriormente de monetarismo extremo en economía abierta (1979-1982), incluyendo un lapso intermedio de ajuste mediante una fuerte recesión.

Hasta 1976, la política monetaria constituyó el único instrumento en que descansó la política antinflacionaria tras el Golpe de Estado, momento en que la

inflación había alcanzado un 400% anual. La inmediata liberalización de los precios tras la caída del gobierno socialista de la Unidad Popular, generó — como podía esperarse de las presiones inflacionarias reprimidas durante meses— un espectacular incremento de la inflación, alcanzando el 590% tras el primer año de aplicación de la nueva política. Los técnicos del gobierno militar, al restringir la oferta monetaria, esperaban que automáticamente los empresarios privados ajustaran sus precios a la baja, evitando así una caída en sus ventas. Sin embargo, el índice oficial de precios al consumidor (IPC), que tomaba en cuenta el conjunto de la información de precios de los meses anteriores y no la masa monetaria efectivamente circulante, siguió siendo el principal referente en cuanto a los precios. Ello provocó que tasas inflacionarias superiores al 300% se mantuvieran hasta 1975. La restricción monetaria operó principalmente sobre el nivel de actividad económica y mucho menos sobre los precios. El nivel de actividad económica cayó en un 28% en 1975, con una caída del PIB de 17% anual. De acuerdo con este análisis, el único precio que sí se ajustó a la baja fue el de los salarios, perdiendo cerca de un 40% de poder adquisitivo, debido principalmente a las restricciones impuestas al reajuste legal automático y también producto de la represión a los sindicatos.

(...) la receta monetarista no logró controlar la inflación de la manera prevista, sino que efectivamente amplificó los efectos de la recesión mundial en términos del costo social como también en cuanto a la actividad económica⁸⁵.

Solo a mediados de 1976, el equipo económico reconoció que el control monetario, por sí solo, no podía frenar la inflación, por lo que se agregó una segunda medida a la política antinflacionaria: la regulación del tipo de cambio (precio del dólar). Con ello se esperaba reducir el costo de los bienes importados e influenciar así negativamente las expectativas de inflación. A principios de 1977, la medida surgió efecto reduciendo la inflación a niveles cercanos al 100%, desmintiendo, de paso, el principio anterior que sostenía que la inflación era causada únicamente por un exceso de demanda y expansión monetaria. Sin embargo, el costo de esta segunda medida fue sacrificar el equilibrio externo. En 1979, los técnicos del equipo económico decidieron fijar la tasa cambiaria, con lo que definitivamente se pasaba de un extremo al otro: desde el enfoque monetarista ortodoxo de economía cerrada al de economía abierta, donde el

factor importante ya no era la masa monetaria interna sino los precios internacionales respecto del tipo de cambio. La teoría ortodoxa sostenía que, si este permanecía congelado, rápidamente se igualaría la inflación interna con la externa.

El régimen de libre importación, sumado a un tipo de cambio fijo, inundó el mercado interno de productos extranjeros a bajo precio, generando un desequilibrio en la balanza de pagos de 1981. Las autoridades esperaban que un ajuste automático del tipo de cambio, producto de la contracción monetaria y la pérdida de reservas internacionales, haría bajar los precios y los salarios de manera natural. Según French-Davis el ajuste funcionó, pero de manera limitada y tardía, lo cual generó una enorme caída en las ventas y en la producción. Al no operar el ajuste automático de la manera prevista, los técnicos del gobierno culparon a los salarios, por lo que intentaron imponer una rebaja general de remuneraciones en 1982. Como ello no fue aceptado por el poder ejecutivo, ya que los riesgos de explosión social eran enormes, entonces se optó por la devaluación cambiaria. Ello se produjo en medio de una crisis generalizada y una devaluación del tipo de cambio cercana al 70%.

El dogmatismo desempeñó un papel importante en este sentido. Según el marco teórico del enfoque monetario de la balanza de pagos, la economía chilena contaba con un mecanismo automático de ajuste, por lo que no era necesario aplicar medidas de política. Supuestamente la tasa de interés interna sería el instrumento que pondría en operación el mecanismo de ajuste automático. La devaluación, como forma de hacer frente al problema del desequilibrio externo, fue completamente descartada, por considerarse inútil para una pequeña economía abierta totalmente indexada; además, el tipo de cambio nominal fijo (que llevaba dos años sin variaciones) era el ancla nominal de todo el sistema, el símbolo del éxito, la confiabilidad y la continuidad del modelo económico⁸⁶.

b) La reforma al sistema financiero

Hacia fines de 1973, la mayoría de los bancos privados estaban en manos del Estado, producto de las estatizaciones del período de la Unidad Popular. Para 1975, la mayor parte de estos habían sido licitados y privatizados. Ya desde 1974

se había autorizado la existencia de sociedades financieras privadas (entidades crediticias), las cuales determinaban libremente sus tasas de interés, mientras que los bancos debieron seguir operando bajo el límite legal permitido, lo cual constituyó un régimen de competencia discriminatorio respecto de estos últimos y en claro beneficio de las primeras. Se eliminaron también todas las restricciones al establecimiento de bancos extranjeros en el país, así como las obligaciones de encajes (reservas), o de controles cuantitativos al crédito.

El equipo económico esperaba que la liberalización del mercado financiero interno, acompañada de la gradual apertura financiera al exterior, llevase a un incremento del ahorro nacional y de la calidad de la inversión, al suprimirse los subsidios existentes anteriormente y al quedar todos los usuarios del crédito sometidos a normas no discriminadas⁸⁷.

La reforma financiera se encuentra en el centro de las causas de la crisis recesiva de 1982. Las dos características más notorias del funcionamiento del mercado interno de capitales, fueron los plazos y las tasas de interés vigentes durante estos años (1975-1982). Hubo una merma no menor en los fondos de plazos largos, además de tasas internas mucho más elevadas respecto de quienes se endeudaban en el exterior, es decir, las grandes empresas conectadas a los bancos comerciales o bien los grupos económicos que se desarrollaron rápidamente durante el período. Solamente hubo una baja real e importante del costo financiero durante el año 1980, la cual se prolongó solo por nueve meses, pero acompañada de una baja sostenida del crédito externo, lo cual generó un nivel de dependencia del crédito exterior cercano al 40% del financiamiento total de la economía chilena.

La ortodoxia oficial esperaba que el libre mercado igualase las tasas de interés externa e interna dentro de un mercado financiero integrado. Sin embargo, la realidad fue muy distinta, pues se dieron diferencias de tasas (interna v/s externa) de hasta veinte puntos anuales, a la vez que se expandió el crédito de consumo para bienes mayoritariamente prescindibles e importados. De acuerdo con este análisis, el alto costo del crédito, su inestabilidad y el breve plazo de las operaciones, desalentaron la inversión productiva: “¿que inversiones no especulativas podían solventar tasas reales de interés con promedios anuales de

38%?”⁸⁸.

c) La apertura comercial indiscriminada al exterior

La lógica de la neutralidad de las medidas económicas, y la no diferenciación por sectores, rubros o industrias, hicieron que la liberalización de las importaciones suprimiera toda selectividad en la política comercial, teniendo en cuenta la excesiva regulación existente hasta 1973. Fue así como se estableció un arancel uniforme de 10% para prácticamente todas las importaciones a partir de junio de 1979. Pero finalmente no se produjo la revalorización del tipo de cambio como resultado de la reducción arancelaria, pues el valor de la divisa se utilizó principalmente para reducir las expectativas inflacionarias⁸⁹.

Las importaciones totales, medidas en valores de poder adquisitivo constante, se expandieron en montos significativos en relación con el nivel de actividad económica interna. La influencia de la política de liberalización se observó principalmente en la categoría de bienes de consumo, en particular de los alimenticios, donde se concentró la mayoría de las nuevas importaciones⁹⁰.

En lo que respecta a las exportaciones, la primera etapa del proceso de liquidación del modelo de sustitución de importaciones, permitió un aumento fácil de las exportaciones no tradicionales y de aquellos recursos naturales ricos en capacidad instalada aún subutilizada, especialmente tras un período recesivo como fue el de 1975-1976. Sin embargo, la brecha entre importaciones y exportaciones, en beneficio de las primeras, aumentó en forma constante a partir de 1977. El principio ortodoxo que estaba detrás de estas medidas adoptadas por el régimen militar, sostenía que “los recursos deben asignarse según las ventajas comparativas y que el juego del libre mercado, libre de toda interferencia estatal, logra aquel objetivo”⁹¹.

La intensidad de la recesión de 1975-1976 y la recuperación posterior de 1977-1981 dieron la impresión de un aumento significativo de la actividad económica, lo que más bien se explica, según French-Davis, por lo profundo de la caída anterior y el inevitable repunte tras una situación de demanda deprimida. El

aumento en la producción no compensó la invasión de productos a precios muy bajos. A esto se sumó un alto desempleo, tasas de interés poco atractivas y un nivel de inversión muy bajo, lo cual afectó a una buena parte de la producción nacional que, en una situación normal, competiría con los productos importados.

La escasa inversión interna resultante se concentró, principalmente, en rubros intensivos en recursos naturales, siendo menos significativa en las actividades intensivas en valor agregado sobre el componente natural y en ventajas comparativas adquiribles⁹².

El aumento descontrolado de las importaciones por sobre las exportaciones, sobre todo en bienes de consumo no productivos, debió cubrirse finalmente con crecientes ingresos de capital extranjero por la vía del crédito internacional. El acceso barato a capital financiero en los mercados internacionales privados permitió financiar el déficit, siendo el sector privado su principal destinatario.

El equipo económico del régimen militar llegó a sostener, incluso, que endeudarse era un ‘buen negocio’, y si esto lo hacían principalmente los privados, entonces los recursos serían invertidos eficientemente. Pero los propulsores del modelo no comprendieron que la mayor parte del crédito externo se destinó al consumo y no a la inversión, convirtiéndose todo el proceso en una suerte de ‘crecimiento económico promovido por la deuda’⁹³. El resultado fue un impacto negativo en la producción nacional como efecto de la inundación del mercado interno por importaciones baratas y el desaliento de las exportaciones.

El experimento en esta área culminó a mediados de 1982 con la devaluación abrupta del tipo de cambio, luego de pasar por algunos meses de costoso e ineficiente ajuste automático⁹⁴.

Una nueva tecnocracia autoritaria: el caso de ODEPLAN

Probablemente, una de las mayores paradojas de la dictadura militar fue el hecho de haber organizado la ‘desplanificación’ y liberalización de la economía chilena a partir de una oficina central de planificación, la cual estuvo cargo de una segunda generación de economistas formados en los mismos principios teóricos de la ortodoxia monetarista de la Universidad de Chicago. Esta aparente contradicción teórica de un principio básico del liberalismo económico (el repudio a la planificación)⁹⁵, pareció no generar problemas en los técnicos economistas del régimen. Hoy nos resulta evidente que un régimen autoritario, incluso cuando mantiene una retórica antiestatal, opera a partir del Estado, y justamente no puede desligarse del mismo en tanto elemento básico de su poder. La ‘desplanificación’ tuvo entonces que ser planificada y centralizada para lograr los objetivos de política económica que se autoimpuso el equipo económico del régimen militar. Esta aparente paradoja ha sido expuesta por el economista francés Robert Boyer:

Efectivamente, la competencia por el poder sobre el poder del Estado introduce otro poderoso factor de cambio. Una vez más este factor es primordial en el campo económico, aunque sólo sea porque incluso las estrategias liberales conocidas como de retorno al mercado, se apoyan en realidad en el poder del Estado⁹⁶.

Hemos analizado, hasta ahora, cómo una tecnocracia copa los centros de poder económico del régimen militar, desplazando a otros grupos que poseían proyectos distintos, principalmente vinculados con lo que había sido el anterior modelo de desarrollo basado en el papel central del Estado y fomento de la industria local. Este grupo de profesionales ha sido reconocido por la historiografía reciente chilena con el nombre de Chicago Boys, y aunque este apelativo tuvo un carácter peyorativo en sus inicios, fue utilizado principalmente

por los medios de prensa de la época. Sin embargo, sería extremadamente reduccionista no reconocer ciertas diferencias al interior de este grupo de profesionales civiles. Probablemente, la más importante de todas corresponde a la generación de pertenencia y a su socialización política⁹⁷.

Como vimos en el capítulo anterior, el primer grupo de estudiantes chilenos de economía becados en la Universidad de Chicago, partió a Estados Unidos durante la segunda mitad de la década de 1950, constituyendo la generación original de los Chicago Boys. Sin embargo, una segunda generación se forjó al alero de la primera, y correspondió al primer grupo de alumnos que siguieron los cursos de los nuevos profesores formados en el exterior. Esta segunda generación estuvo profundamente marcada por la Reforma Universitaria de 1967 y la polarización política que se dio al interior del país entre la segunda mitad de la década de 1960 y el fin del gobierno de la Unidad Popular (1973). Su cercanía con el Gremialismo y especialmente con la figura del líder integrista Jaime Guzmán Errázuriz, los hizo involucrarse por completo en el denominado proceso de ‘reconstrucción nacional’ que emprendió el régimen militar a partir de 1973. La principal diferencia respecto de la primera generación —más teórica, independiente e individualista—, fue su extraordinaria cohesión grupal y politización en torno al proyecto gremialista, al mismo tiempo que su mayor lealtad de cuerpo respecto de la figura del General Pinochet y su propuesta de modelo institucional⁹⁸.

La vinculación entre la segunda generación de Chicago y el gremialismo tuvo su expresión más clara en la conformación del equipo de ODEPLAN⁹⁹. Esto se produjo inmediatamente después del Golpe de Estado, y como un elemento de contrapoder respecto de los militares nacional-desarrollistas que se habían hecho cargo, a través de CORFO, de la gestión y reprivatización de las empresas que estaban en manos del Estado. El equipo de técnicos de ODEPLAN fue definido íntegramente por la Marina, quien tenía a su cargo la coordinación del llamado ‘frente económico’. Fue el exoficial de esta rama, Roberto Kelly, el designado por el Almirante José Toribio Merino para formar el grupo de técnicos, entre quienes incorporó a quien sería el futuro líder de esta segunda generación de Chicago Boys: el economista Miguel Kast Rist, considerado como el gran reclutador del régimen¹⁰⁰.

Tras reclutar a los economistas Sergio Undurraga, Juan Carlos Méndez, Arsenio

Molina, Miguel Kast y Ernesto Silva —quien tenía 22 o 23 años y a los pocos días intentó renunciar, porque no se sentía preparado para asumir tal responsabilidad— la primera tarea de Kelly fue realizar el presupuesto de 1974, el cual ‘prácticamente lo improvisamos (...). Ni siquiera conocíamos cuál era la deuda pública del país, ya que los datos de los tres organismos que manejaban la información no concordaban entre sí¹⁰¹.

ODEPLAN había sido creada en 1967 durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970) como una entidad de coordinación de las políticas económicas a nivel nacional y con directa llegada al Presidente de la República. Sin embargo, tras el Golpe de Estado, sirvió (1) como centro de operaciones para preparar las futuras reformas económicas del régimen, aunque en ese momento el equipo económico no perteneciera a la corriente monetarista. ODEPLAN fue también (2) un espacio de elaboración de políticas sociales destinado a mitigar, en parte, los efectos de la implantación de las políticas liberales, especialmente a partir de 1975. De este modo, constituyó un lugar privilegiado para la evaluación de proyectos de inversión. Por último (3) ODEPLAN se transformó en el principal centro de reclutamiento para los altos funcionarios y ejecutivos civiles del régimen militar. Uno de sus objetivos centrales fue la formación de un perfil determinado de profesional afín al modelo económico gracias al programa de becas al extranjero denominado Presidente de la República y a los diferentes programas de formación de recursos humanos.

El grupo de técnicos gremialistas tomó el control de ODEPLAN gracias al apoyo de su director, Roberto Kelly, quien nombró a Miguel Kast como su subdirector entre 1973 y 1978. Kast terminó haciéndose cargo de la institución en tanto que ministro entre 1978 y 1980. En ambos períodos destacó por su capacidad para contratar a decenas de jóvenes profesionales, en su mayoría ingenieros, administradores y economistas, para que trabajaran en las diferentes oficinas regionales de ODEPLAN y en otros puestos de gobierno. De acuerdo con Carlos Huneeus, el rasgo principal del gremialismo al interior de esta organización fue su visión de la actividad pública como una cruzada, en la cual no había cabida para el disenso o visiones críticas.

La preparación de las reformas económicas del régimen militar fue elaborada cuidadosamente por ODEPLAN¹⁰² en conjunto con la Universidad Católica de Chile, y especialmente mediante la firma de numerosos convenios con el

Instituto de Economía de dicha casa de estudios¹⁰³. Uno de los contratos más importantes firmados entre estas dos instituciones fue aquel destinado a efectuar un estudio sobre la extrema pobreza en Chile a partir de los datos del censo nacional de 1970. Este estudio sirvió como base para una línea de trabajo en torno a las políticas sociales para combatir la pobreza aplicado en Chile incluso con posterioridad al retorno a la democracia. Será el origen también de la encuesta CASEN, realizada en forma regular por los gobiernos chilenos desde 1985¹⁰⁴.

La postura ideológica de los Chicago Boys en contra del Estado no les impedía apreciar la importancia que tenía este en un contexto autoritario, especialmente en las políticas sociales y de infraestructura¹⁰⁵.

El total de recursos recibidos por la UC desde ODEPLAN entre 1974 y 1987 por esos contratos ascendió a casi 13 millones de dólares. ¡Cualquier instituto de economía sueña recibir esos recursos para poder desarrollarse!¹⁰⁶

Yo diría que ese organismo (ODEPLAN) fue el instrumento que permitió dar coherencia y proyección al cambio de sistema socioeconómico; era un laboratorio de ideas por cierto, pero en realidad fue mucho más que eso porque llevó a todas las regiones del país una nueva manera de hacer las cosas — evaluando los proyectos, haciendo el seguimiento de su cumplimiento, planificando la inversión, trayendo a Santiago la efectividad del país real, lo que hizo posible focalizar el gasto social, etc. (...) no creo que otro organismo del estado haya tenido más mística que ODEPLAN¹⁰⁷.

La formación de recursos humanos, especialmente en al área de evaluación de proyectos, fue otra de las políticas clave de ODEPLAN. Ella le permitió, gracias al financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), elaborar un programa de capacitación para profesionales chilenos y extranjeros, tanto a nivel nacional como regional¹⁰⁸. Este programa (CIAPEP/BIDODEPLAN), dirigido también desde el Instituto de Economía de la Universidad Católica, estuvo a cargo de Ernesto Fontaine, economista formado en Chicago y experto en microeconomía y evaluación de proyectos. Fue así como cientos de profesionales fueron formados en los conceptos del ideario de los economistas

de Chicago, incluso a escala latinoamericana, logrando con ello no solo influencia en el gobierno y en las universidades, sino que también en el espacio regional¹⁰⁹. Este convenio le reportó una enorme cantidad de recursos al Instituto y un importante prestigio internacional:

Alrededor de 1.100 profesionales se graduaron del programa BID-ODEPLAN y del CIAPEP. Ciento sesenta de ellos eran extranjeros; 790 lo hicieron completo, y solo 310 tomaron la fase teórica. Más de 2.200 profesionales se han graduado de los cursos regionales intensivos¹¹⁰.

El programa de becas Presidente de la República constituyó uno de los puntales de la política de formación de recursos humanos de ODEPLAN liderada por Miguel Kast. Esta iniciativa comenzó en 1981 con el objetivo de entregar perspectivas profesionales a los jóvenes egresados y profesionales principalmente gremialistas afines al régimen, además de ganar influencia en el sistema universitario chileno. El personal técnico y político cercano al gobierno militar tuvo la oportunidad de formarse en las mejores universidades extranjeras. Según Huneeus, su principal característica fue el sesgo político aplicado a la selección de los candidatos, más que su calidad o capacidad técnica. Entre 1981 y 1990, hubo 479 becarios que se beneficiaron del programa, dando prioridad a las disciplinas de economía e ingeniería (47%), respecto de las ciencias sociales (16%), las cuales fueron discriminadas por considerárseles históricamente ideologizadas, con lo cual se quería decir que podían ser influenciadas fácilmente por ideas de izquierda. El sesgo geográfico de destino fue aún mayor, pues el 54% de los becados realizó sus estudios en Estados Unidos, un 14% en Inglaterra y solo un 4% en Alemania y 3% en Francia, estos tres últimos considerados sospechosos por haber recibido un número importante de exiliados políticos¹¹¹.

De esta manera, se formó a toda una nueva generación de cuadros dirigentes para asumir las tareas de gobierno del régimen militar, incluso en la perspectiva de que este se extendería dentro del modelo de democracia protegida que se estaba gestando. Este punto es crucial para comprender el rol jugado por la segunda generación de Chicago Boys, quien finalmente sirvió de puente entre el equipo económico y el jurídico, encargado específicamente de la reforma

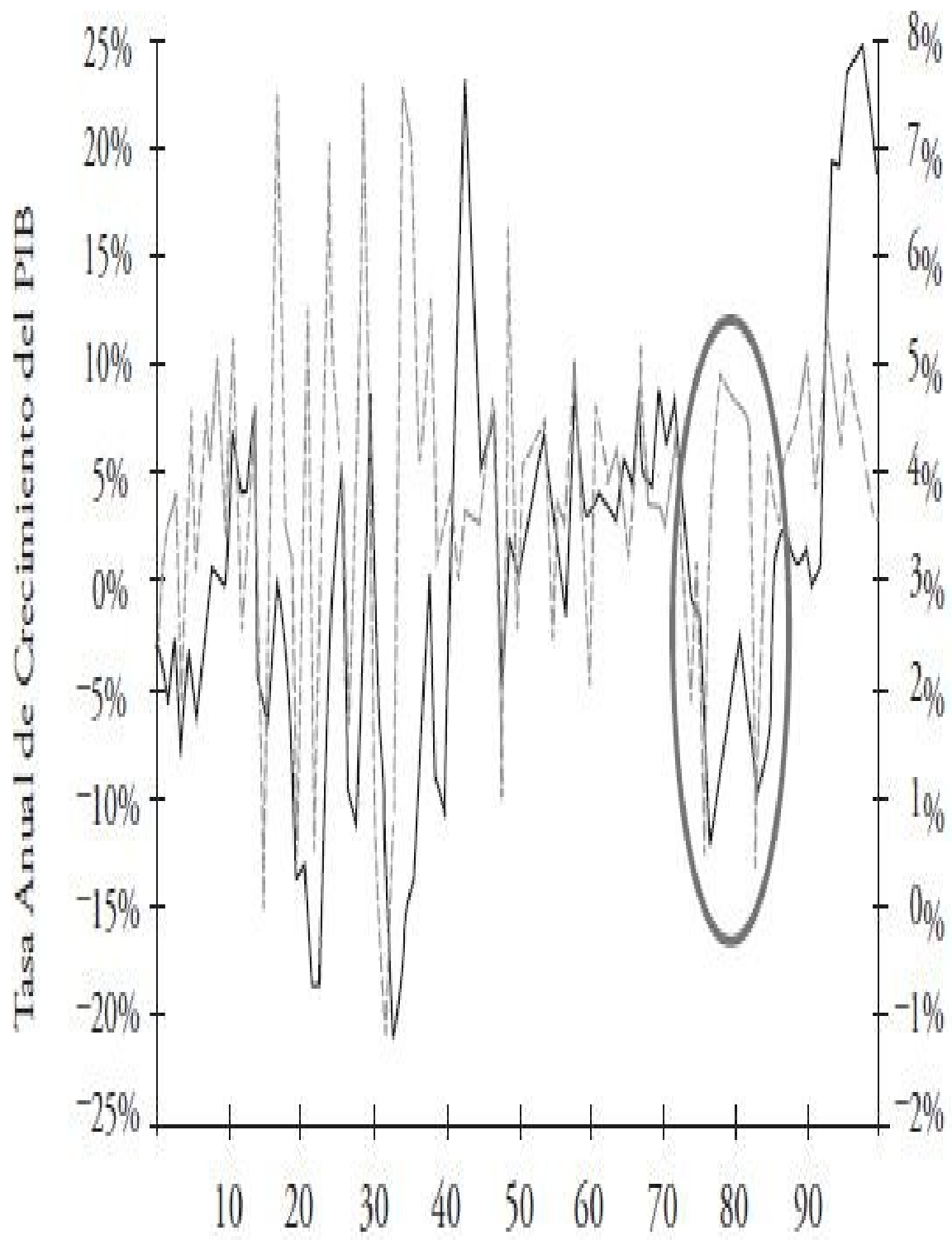
institucional, y liderado por Jaime Guzmán Errázuriz.

El grupo de ODEPLAN tenía un modelo conceptual, el modelo liberal en base a la libertad de las personas, el emprendimiento, las reglas del juego parejas, dejar que funcionen los mercados. Había un motor común que le daba sentido a todo lo demás y eso permitió avanzar en muchos planos (...). La dupla de Miguel Kast y Jaime Guzmán, el primero un motor y el segundo un ideólogo, le ha hecho mucha falta a la derecha (...)¹¹².

El denominado “milagro económico chileno” (1977-1981)

Una vez superada la parte más dura del ajuste de shock iniciado en 1975, solo en 1977 se observaron cifras que mostraron una importante recuperación económica, aunque únicamente respecto de lo agudo de la crisis precedente y no comparables con aquellos años previos al gobierno de la Unidad Popular (1970). Siguiendo el análisis del economista Ricardo Ffrench-Davis, de lo que se trató entonces fue de una reactivación de la capacidad económica disponible pero subutilizada que poseía el país, pero que no significó un real crecimiento económico en relación a las tasas históricas mostradas hasta fines de la década de 1960. Esto se ve en el siguiente gráfico, donde se destaca el período 1973-1985.

Un siglo de crecimiento económico chileno: tasas anuales de crecimiento (1900-2000)



Tasa Promedio de Crecimiento acumulado de últimos diez años

--- Tasa Anual de Crecimiento del PIB real

— Tasa Anual de Crecimiento del PIB real

Tasa Anual de Crecimiento del PIB real Tasa Anual de Crecimiento del PIB real

Fuente: Rolf Lüders (1998) y Banco central

Las autoridades económicas del régimen militar elaboraron sus estadísticas en base a las cifras del shock de 1975, con lo cual el crecimiento pareció mucho más impresionante de lo que efectivamente fue¹¹³. De este modo, y bajo un ambiente de euforia y de halagos de los inversionistas internacionales, se comenzó a hablar del ‘milagro’ o del boom económico chileno. En este sentido, French-Davis sostiene que medir la evolución económica a partir de un punto depresivo muestra un crecimiento que en realidad corresponde solo a una recuperación, y mientras más intensa la recesión, más espectacular resultan las cifras del repunte¹¹⁴.

El quiebre, a partir de 1976, de la hiperinflación y el salto en el crecimiento del PIB, a partir de 1977, aparecían con firmando la pretensión de cientificidad del discurso. Hacia los ‘80 ya se empezó a hablar de ‘milagro chileno’, después de 4 años de crecimiento por encima del 7%¹¹⁵.

Los indicadores económicos mostrados por el régimen militar parecieron en un primer momento notables. De acuerdo con Patricio Meller, estos fueron algunos de los más importantes¹¹⁶:

a) Una caída de la inflación anual de 600% a 1000%, en 1973, a menos de 10% en 1981.

b) Una tasa promedio anual de crecimiento de 8% entre 1976 y 1981.

c) Un aumento de tres a cuatro veces en el volumen de exportaciones respecto a 1973, especialmente de aquellas no tradicionales. Se alcanzó una cifra de exportaciones cercana a los US\$ 4.705 millones.

d) Las reservas internacionales del Banco Central aumentaron de US\$ 167 millones en 1973 a US\$ 4.074 millones en 1980.

e) El déficit público que había alcanzado el 21% del PIB en 1973, registró un superávit de 5,5% y 2,9% en 1980 y 1981, respectivamente.

f) Los salarios reales aumentaron en 9% por año durante la mayor parte de los años del ‘milagro’.

Hasta 1981, existió el convencimiento general, especialmente al interior del gobierno y de algunos círculos financieros y empresariales cercanos al régimen, de que el país estaba gozando de un repunte económico iniciado en 1977. El gobierno mostró cifras espectaculares, como una reducción de un 1.000% a solo un 30% de inflación entre 1973 y 1980¹¹⁷; y un aumento del PIB cercano al 8% anual, con una balanza de pagos que indicaba un superávit. A esto se sumaba un aumento de las exportaciones no tradicionales y una afluencia importante de créditos desde el exterior. El país pareció reintegrarse con éxito a la economía internacional tras casi cuarenta años de proteccionismo y planificación estatal. Las proyecciones futuras fueron extraordinariamente optimistas, al punto de prometer cifras jamás alcanzadas hasta ese momento por la economía chilena. El exceso de optimismo y las diatribas contra la crítica económica de oposición alcanzaron límites delirantes:

Lo que pasa es que los ricos [en referencia a la oposición] no valoran que la gente tenga televisor o radio a transistores porque ellos siempre los han tenido y les molesta que ‘la rotada’ ¹¹⁸ ahora se les haya acercado porque se viste mejor y tiene radio y televisor. Si seguimos así, en diez años más van a tener hasta auto. Eso va a ser tremendo. Imagínense, no habrá diferencia, los ‘rotos’ se verán igual que la gente¹¹⁹.

Sin embargo, técnicamente resultaba imposible proyectar tasas similares a las logradas tras una recesión tan profunda como la de 1975-1976. A ello se sumaba

la incapacidad de la economía chilena para generar tasas suficientes de ahorro e inversión como para sostener un crecimiento anual del 8%.

Los desequilibrios producidos por la política monetarista ortodoxa ya habían comenzado a mostrar signos preocupantes. La tasa de desempleo se había mantenido cercana al 15%, por un período superior a seis años, lo cual significaba entre 500 y 600 mil personas desempleadas, a lo cual se sumaba una caída de las remuneraciones reales superior al 60% respecto de los niveles de 1970. Pero, incluso, las buenas cifras de la balanza comercial y la importante acumulación de reservas internacionales, se explicarían por el fuerte ingreso de créditos externos baratos, especialmente aquellos provenientes de los llamados ‘petrodólares’, y que constituyeron finalmente una de las causas mayores de la crisis de la deuda latinoamericana de la década de 1980¹²⁰.

Una de las principales y más recordadas medidas tomadas durante el período del ‘milagro’ económico, fue la fijación del tipo de cambio nominal para así mantener controlada la inflación¹²¹. Como lo han remarcado diversos economistas (Ffrench-Davis, Cortázar, Arellano), la insistencia en la mantención ‘contra viento y marea’ de esta política, en desmedro de otros equilibrios económicos, estuvo en el origen de la crisis de 1982, incluso si se aíslan los efectos de la crisis internacional de la deuda externa. Los capitales extranjeros comenzaron a encarecerse y a llegar de manera menos regular a país, lo que aumentó el costo del crédito, elevando la tasa de interés real a cerca del 40%, lo cual hizo casi imposible el desarrollo de cualquier proyecto de inversión productiva. Las diversas instituciones financieras creadas desde 1975, prácticamente sin regulación alguna, hicieron crisis, arrastrando con ellas también a los bancos comerciales. A lo anterior, se agregó una baja en las exportaciones y un aumento indiscriminado de las importaciones, que repercutió negativamente en la actividad interna, generando un aumento del desempleo que ya era alto incluso con las cifras optimistas de 1979 y 1980.

Este ‘milagro económico’ estuvo asociado a un ‘boom de importaciones’ y a un ‘boom especulativo’ (...). El sector financiero tiene un papel primordial en el boom especulativo, por cuanto este se sostiene e incrementa solo si existe una oferta de crédito que lo sustente. En consecuencia, la relativamente abundante disponibilidad de crédito de fácil acceso explica cómo se sustenta y cómo se propaga un boom de estas características. Pero la existencia del ‘crédito fácil’ no

explica totalmente qué es lo que llevó a los agentes económicos a endeudarse y gastar al ritmo y a los montos a los cuales lo hicieron.

Son otros los factores que incidieron en el boom especulativo de 1976-1981. Por un lado, el elemento propagandístico, que continuamente enfatizó dos aspectos: el consumismo y el ‘milagro económico’. Por otro, el elemento visual, por el cual la avalancha de productos importados que llenan las vitrinas y las calles, así como el boom de la construcción de espectaculares centros comerciales y departamentos de lujo proporcionarían la evidencia empírica para el elemento propagandístico¹²².

El gobierno insistió en culpar a la situación externa, especialmente en lo relativo a la abrupta caída del precio del cobre (de 99 a 79 centavos de dólar la libra) producida en 1979, y al aumento de la tasa de interés internacional para los créditos. Además, las autoridades culparon al aumento de los salarios reales del alza de los costos y de la pérdida de competitividad tanto del sector externo como interno. El país estaba gastando más de lo que producía, y el desajuste parecía empeorar a medida que pasaban los días. El equipo económico demoró mucho en reconocer la pérdida de competitividad de la economía. Para ellos se trataba simplemente de la demostración natural del ajuste automático. En otras palabras, la pérdida de reservas internacionales y la baja consecuente en la emisión, aumentarían el costo del crédito, disminuyendo la actividad y retornando a las condiciones de equilibrio. Pero la mayor parte del dinero había sido creado por los bancos comerciales a través de sus operaciones financieras y no por las emisiones del Banco Central. La confianza en el ajuste automático como mecanismo natural de autorregulación pudo haber funcionado, pero bajo el supuesto que la economía debía permanecer deprimida por largo tiempo y con un costo social y económico enorme.

La fijación del tipo de cambio disminuyó la competitividad de las empresas nacionales que exportaban o sustituían importaciones, inundando el mercado nacional de productos importados a muy bajo precio. Lógicamente, esta caída de los precios ayudó a bajar la inflación de un 30% en 1979 a un 10% en 1981; y alinearla con las tasas internacionales, pero destruyó miles de puestos de trabajo, lo que aumentó peligrosamente los niveles de endeudamiento. De acuerdo con Cortázar y Arellano, la ansiada baja de la inflación estuvo en el origen del fuerte aumento de la tasa de interés real y el fin abrupto del llamado ‘milagro’

económico en 1982¹²³. En definitiva, se trató de un exceso de confianza en los mercados autorregulados, especialmente el financiero, como el mecanismo más eficiente de organización a todos los niveles. El equipo económico del régimen militar, dentro de la óptica del ajuste automático, estaba convencido de que una rebaja en las remuneraciones y en las utilidades de las empresas aumentaría la competitividad del país, pero esto implicaba un nuevo golpe deflacionario sobre una economía en vías de recesión. Una reducción de los salarios significaba una pérdida aun mayor del poder adquisitivo que aún no se recuperaba con respecto a las cifras de 1970¹²⁴.

La mayoría de los análisis sostienen que el mayor problema del período del ‘milagro’ fue lo insostenible de sus fundamentos. Las tasas de crecimiento correspondieron principalmente a una recuperación del shock inducido en 1975. Los niveles de inversión fueron absolutamente insuficientes como para mantener las tasas de crecimiento de los primeros años del boom y definitivamente menores a los de la década de 1960. El desempleo siguió siendo altísimo, incluso en el mejor momento de la recuperación, alcanzando cifras cercanas al 16%. A lo anterior, se debe agregar el componente de la mala distribución del ingreso y de la riqueza que generó un modelo como el descrito anteriormente. De acuerdo con la comparación de Meller, el boom económico del primer año del gobierno socialista de la Unidad Popular, se había financiado con emisión monetaria interna, mientras que el boom del ‘milagro económico’ del régimen militar se financió con endeudamiento externo¹²⁵. De ello se deriva que la drástica reducción de esta fuente de recursos en 1982, y en los años posteriores, acabó bruscamente con el auge económico de fines de la década de 1970. En ambos casos, se trató de políticas económicas riesgosas y con un alto componente demagógico.

La combinación ortodoxa de libertad económica y autoritarismo político fue justificada por el régimen militar, siguiendo la premisa de que la primera era una condición necesaria e irremplazable para la libertad política, pero esta última solo llegaría una vez que el bienestar económico hubiese alcanzado a la mayor parte de la población. De lo contrario, estimaban, la libertad política contribuía a la polarización, el extremismo y a la inseguridad.

(...) yo no tengo dudas de que a partir de 1973 y durante muchos años en Chile hacía falta un gobierno autoritario —absolutamente autoritario— que pudiera

hacer la reforma contra los intereses de cualquier grupo, por importante que fuera (...) [y] creo que en este país hace falta todavía un receso político fuerte¹²⁶.

De lo anterior se deduce que era necesario un régimen de fuerza durante todo el tiempo que fuese necesario para afianzar el modelo económico y extender sus beneficios a todos los sectores. Solo de esta manera generaría el consenso necesario que haría posible el futuro retorno de la libertad política¹²⁷.

La nueva institucionalidad y el fin de la antigua democracia. El papel clave de Jaime Guzmán

En esa perspectiva, advertimos nítidamente que nuestro deber es dar forma a una nueva democracia que sea autoritaria, protegida, integradora tecnificada y de auténtica participación social (...)¹²⁸.

General Augusto Pinochet (09-07-1977)

El fin del antiguo modelo de Estado de Compromiso y de una economía sustitutiva de importaciones, no se completaría sin un marco institucional que permitiera asegurar la proyección en el tiempo del nuevo modelo liberal de economía abierta y de democracia restringida. Si el régimen aspiraba a un verdadero cambio revolucionario que impidiera cualquier intento de retorno al modelo anterior, entonces debía planificar el futuro, sus instituciones y especialmente el funcionamiento de la democracia¹²⁹.

Según los principales ideólogos del régimen militar, entre quienes destacaba Jaime Guzmán Errázuriz, la institucionalidad democrática anterior a 1973 había llevado al país a un exceso de politización, la cual había sido aprovechada por todos los partidos políticos para su propio beneficio, dañando a la sociedad en su conjunto y abriendo las puertas a aquellos grupos, especialmente de izquierda, que promovían la revolución y la lucha de clases¹³⁰. La concepción de la democracia como fin y la política como medio de transformar la sociedad, habían sido, según esta mirada, el talón de Aquiles del viejo modelo inclusivo de democracia liberal. Para evitar que esto volviera a repetirse, era necesario idear un modelo constitucional que, manteniendo en teoría el valor del sufragio universal y el predominio de la mayoría sobre la minoría, permitiese convertir a la democracia en un mecanismo meramente instrumental al servicio de un poder altamente jerarquizado¹³¹. Con esto podía controlarse a la política y a los partidos, convirtiéndolos en simples corrientes de opinión. De esta manera, se evitaría toda tentativa de cambio radical a nivel político y especialmente del

sistema económico.

No es el objetivo de esta investigación adentrarnos en la historia del texto constitucional de 1980, pero sí en las concepciones que sobre el sistema económico, la democracia y la sociedad dieron forma a su redacción¹³². Nos interesa especialmente la importancia dada al orden económico y el papel de los expertos en esta nueva institucionalidad forjada en la segunda mitad de la década de 1970. En este sentido, la participación del abogado gremialista Jaime Guzmán Errázuriz¹³³ fue crucial al convertirse en uno de los articuladores principales de lo que terminaría siendo la Constitución Política de 1980¹³⁴. En el Capítulo II ya hemos destacado el papel jugado por Guzmán al interior de la Universidad Católica de Chile durante las luchas estudiantiles de la segunda mitad de la década de 1960. Aquella etapa fue vital para relacionarse con los economistas monetaristas y dar nacimiento posteriormente a una ideología que, siendo tradicionalista en sus orígenes, pudo integrar el ultraliberalismo económico en una suerte de sincretismo con las corrientes autoritarias propias del conservadurismo chileno de viejo cuño.

Jaime Guzmán comenzó a asesorar inmediatamente a la Junta Militar tras el Golpe de Estado del 11 septiembre de 1973. Fue el inspirador y redactor principal de la ‘Declaración de Principios de la Junta de Gobierno’, donde ya se esbozaban algunas ideas corporativistas y nacionalistas que Guzmán había defendido con vehemencia durante sus años como dirigente estudiantil¹³⁵. Posteriormente, fue invitado a participar de la Comisión Ortúzar¹³⁶, que estudió la creación de una nueva Constitución, donde finalmente, de acuerdo con lo analizado por Renato Cristi¹³⁷, impuso su visión de una democracia instrumental —heredera del pensamiento de F. Hayek— por sobre sus antiguas ideas corporativistas de origen católico tradicionalista.

Jaime Guzmán entendía la democracia solo como un método de generación de autoridades políticas, donde el sufragio universal no desaparece por completo, pero se agota en la misma elección. No hay más identidad ni reciprocidad entre representantes y representados una vez generada la autoridad. En esta concepción del Estado y de la Democracia, lo que interesa resguardar son los valores superiores del derecho natural y de la ‘tradicón nacional’, la cual se identifica con la combinación de libertad económica y autoritarismo político¹³⁸. Esta última idea está fuertemente inspirada en el ideal portaliano de una autoridad fuerte e imparcial, que asegura el orden social, reprime los excesos de la democracia y favorece el desarrollo económico¹³⁹.

Lo anterior justifica las restricciones al sufragio universal en términos de impedir la alteración de estos principios considerados ‘permanentes’ y sancionados por la tradición. Incluso, Guzmán llega a hablar del sufragio universal de los siglos, para referirse a la importancia y peso de la tradición¹⁴⁰. Es la idea de la soberanía nacional y no popular la que permite justificar la invención de senadores designados y de un Tribunal Constitucional con poderes amplios¹⁴¹. Ambas instituciones, incluidas en la Constitución de 1980, apuntan a controlar el poder legislativo democráticamente elegido y evitar que una mayoría altere los elementos fundamentales de la nueva institucionalidad. Para asegurar lo anterior, se estableció que los garantes de la nueva institucionalidad serían las Fuerzas Armadas, con lo cual estas quedaban amarradas a la deliberación política y a la defensa de los principios anteriormente expuestos.

La evolución del pensamiento de Guzmán desde el corporativismo católico hispanista, propio del primer gremialismo de la década de 1960, a la concepción de la democracia instrumental o protegida de fines de los años 1970, se produjo principalmente debido a la influencia de los economistas liberales y su posterior convencimiento en las virtudes de la economía de libre mercado, especialmente durante el período del ‘milagro’ económico (1977-1981). De acuerdo con Sofía Correa, el pragmatismo de Guzmán lo llevó a renunciar a sus antiguos ideales corporativistas, priorizando la sobrerrepresentación política de la derecha y asegurando el aislamiento de cualquier tipo de presión social¹⁴². En términos económicos, se instauró constitucionalmente una fuerte centralización de poderes en torno a la figura del Presidente de la República, al mismo tiempo que se le otorgó plena autonomía corporativa a una de las herramientas claves de todo gobierno en el manejo macroeconómico: el Banco Central¹⁴³. En este punto, Guzmán tuvo éxito al prolongar y proteger los intereses de su sector político más allá de una tutela militar que en algún momento debía terminarse y entregar el poder a los civiles. Como bien lo ha definido Sofía Correa:

Con la institucionalidad política amarrada a través de una nueva Constitución y con el orden neoliberal bien asegurado, Jaime Guzmán, quien también ha diseñado el itinerario político del régimen que debía culminar en una entrega del gobierno a los civiles, toma distancia de Pinochet como única manera de despersonalizar la institucionalidad recién creada, y organiza un partido político (la UDI)¹⁴⁴ para insertarse en la nueva democracia instrumental que estaba prevista en el itinerario institucional que él mismo había planificado¹⁴⁵.

La idea de institucionalizar el régimen militar apareció ya esbozada en 1974 con la promulgación de ‘La declaración de Principios de la Junta Militar’, aunque literalmente permaneció solo como una aspiración doctrinaria hasta 1977. Fue a partir de este momento cuando se conformó una nueva correlación de fuerzas al interior del régimen, la cual propiciaba una consolidación de las transformaciones iniciadas en 1975 en vista de una futura, aunque indeterminada, normalización democrática del país.

Los asesores civiles del régimen, especialmente los gremialistas liderados por Jaime Guzmán, defendieron la necesidad de superar esta primera fase militar de emergencia, sustentada principalmente en la Doctrina de la Seguridad Nacional y su énfasis en la política represiva, la cual definía la sociedad en términos maniqueos entre ‘buenos ciudadanos’ y ‘enemigos de la patria’¹⁴⁶. Hasta aquel momento, todas las libertades civiles podían ser conculcadas en vista del peligro de infiltración que representaban estos supuestos enemigos internos, identificados principalmente con los partidos marxistas que formaban parte de la Unidad Popular. A juicio de estos asesores, lo excepcional no podía convertirse en permanente sin arriesgar un endurecimiento cada vez mayor de la represión y corriendo el riesgo de no afianzar las transformaciones radicales que el régimen había puesto en marcha. La institucionalización apareció, entonces, como un imperativo para quienes estaban pensando en un futuro aunque lejano retorno a la democracia. Verónica Valdivia ha resumido muy bien la visión de Guzmán y el carácter pragmático de su proyecto:

(...) si bien [Guzmán] aceptó el sufragio universal y los partidos, ellos no tendrían ningún peso en la toma de decisiones reales. Los contrapoderes institucionales (Consejo de Seguridad Nacional, Tribunal Constitucional, sistema binominal, autonomía de las fuerzas armadas, partidos políticos sin poder alguno, sino meras corrientes de opinión, Parlamento debilitado, etc.) convertían la supuesta liberalización del sistema en una ficción. La institucionalidad creada por Guzmán, con ayuda de ex alessandristas (Ortúzar), rechazaba cualquier vínculo con el liberalismo filosófico, aunque claramente habían atisbos de él. En todo caso, se trataba a lo más de un liberalismo conservador, refractario al poder de las mayorías y a la verdadera democracia representativa¹⁴⁷.

El discurso del cerro Chacarillas del 9 de julio de 1977, fue la ocasión elegida por el general Pinochet para dar a conocer el plan de institucionalización del régimen, así como un itinerario de normalización política del país¹⁴⁸. Según Pilar Vergara, fue en este momento cuando se hizo público el proyecto de instaurar una democracia ‘protegida’, al mismo tiempo que se daba por superada la fase de predominio de las doctrinas castrenses de la seguridad nacional¹⁴⁹. El anuncio sirvió también para resolver una crisis al interior del gobierno y dar una vía de escape a las crecientes presiones internas y externas que demandaban mayor apertura al régimen y el fin de las políticas represivas más drásticas¹⁵⁰. Por otra parte, Pinochet necesitaba proyectar la idea de que el régimen iba a extenderse más allá de su persona y del gobierno militar, dejando una obra social, económica e institucional para Chile. El alto grado de simbolismo dado al evento (antorchas, estética heroica, marchas militares, mensajes a la juventud) da cuenta la idea de trascendencia que hubo detrás de esta mise en scène política.

El paso de la etapa militar a la institucionalizadora no significó el fin de la represión a los opositores, pero sí el término de su fase más aguda y extrema. El año 1976 había sido especialmente difícil para el régimen, pues se había constatado una erosión en sus apoyos iniciales, producto de la extrema dureza de los aparatos policiales de la dictadura (especialmente la DINA); los crecientes conflictos con la Iglesia Católica a causa de las violaciones a los derechos humanos¹⁵¹. A esto se sumó el aislamiento internacional del régimen producto de la política exterior del presidente norteamericano Jimmy Carter (1977-1981), influida indudablemente por el asesinato en Washington, en 1976, del ex-canciller del gobierno de la Unidad Popular, Orlando Letelier¹⁵². Estos eventos y el carácter crecientemente autoritario del régimen, pusieron en peligro las metas de largo plazo de quienes apoyaban un cambio estructural del modelo de desarrollo económico y de la sociedad chilena.

El grupo de civiles que estaba a favor de la institucionalización recibió el apoyo del influyente periódico El Mercurio¹⁵³ y de la revista Qué Pasa¹⁵⁴, a través de quienes pudieron vehicular sus ideas y hacer presión sobre Pinochet y la Junta de Gobierno. Todos ellos compartían un elemento clave que Pilar Vergara ha definido muy bien:

(...) su rasgo más fundamental y novedoso era la convicción de que si se deseaba impedir la vuelta atrás, no se podía continuar postergando una definición en materia de objetivos y plazos institucionales¹⁵⁵.

El anuncio presidencial de 1977 en Chacarillas estableció un calendario institucional gradual en tres etapas. En la primera, el control del gobierno permanecería íntegramente en manos de las Fuerzas Armadas con asesoría de los civiles hasta el año 1980. Posteriormente habría una transición de cinco años, donde las FF.AA. compartirían el poder con los civiles, y se establecería una división de poderes, aunque sin apelar al sufragio universal para su generación. Finalmente, habría una tercera etapa de consolidación o normalización, donde el nuevo Presidente de la República sería nombrado por la cámara legislativa, además de promulgarse una nueva y definitiva Constitución. Las FF.AA. mantendrían de manera indefinida el papel de garantes de la nueva institucionalidad. El discurso de Chacarillas marcó el inicio de una búsqueda al interior del régimen de un modelo institucional permanente que intentaba conjugar un modelo político formalmente democrático pero en esencia heredero del proyecto de autoridad fuerte inspirado en el ideal portaliano.

Esta visión institucionalizadora tenía un fuerte componente legalista, el cual le hacía confiar demasiado en los mecanismos constitucionales como herramienta de contención social. En este punto, diferían con los tecnócratas y economistas liberales, pues estos últimos estaban más preocupados de consolidar las transformaciones de la estructura económica del país que en el establecimiento de un calendario de normalización democrática. Su objetivo principal, como bien se insistió constantemente en la época: ‘eran las metas y no los plazos’¹⁵⁶. Es decir, lo que les interesaba era asegurar el fin del antiguo modelo de desarrollo y dejar sentadas las bases de una modernización capitalista sin posibilidad de retorno al pasado. Ello debía tomar el tiempo que fuese necesario, sin la premura de un calendario institucional. Para los tecnócratas economistas, los ‘institucionalizadores’ solo aseguraban la garantía legal de una economía de mercado mediante el refuerzo del derecho de propiedad y de la iniciativa privada, pero solo de manera nominal.

La posición del equipo económico y de los tecnócratas monetaristas fue que el país ‘necesitaba de una nueva institucionalidad diseñada por expertos’, y que ello no se llevaría a cabo sin antes consolidar las liberalizaciones pendientes,

entre las cuales destacaban la reforma provisional, el mercado del trabajo, la salud, el sistema educacional y la privatización de las grandes empresas que aún permanecían en manos del Estado¹⁵⁷. Pero todo ello, a su juicio, no se realizaría si el sistema político estaba expuesto a presiones políticas y sociales propias de un régimen democrático. Esta fue la justificación principal para oponerse a todo tipo de plazos de normalización política sin haber logrado primero las metas.

A juicio de los miembros del equipo económico, las vallas constitucionales no constituían un verdadero control sobre el sistema político y sus posibles desviaciones populistas. Solo la reducción del Estado a su expresión mínima aseguraría estabilidad a la nueva institucionalidad y evitaría la discriminación económica, rasgo que advertían como inherente a la antigua democracia de Estado fuerte. En su concepción de la democracia como juego económico entre individuos racionales que transan en un mercado político, la existencia de un Estado fuerte constituía un incentivo demasiado poderoso para la formación de facciones políticas, clientelistas y demagógicas. Estas últimas tendrían siempre el interés de conquistar el enorme botín del Estado para favorecer a su propia clientela en perjuicio del país. Este principio de maximización racional de los individuos estuvo en el centro de su argumentación en contra de la institucionalización legalista del régimen. En tal sentido, concordamos con el análisis de Pilar Vergara al referirse al nudo central de la argumentación de los tecnócratas monetaristas:

Solo mediante cambios de fondo en la estructura económica y social del país se lograría proteger efectivamente la democracia. Dichos cambios, al desarrollar en los individuos intereses solidarios con la estabilidad del sistema, hacen que esa ‘protección’ se encuentre ‘fundida en las estructuras mismas de la sociedad y presente en las mentes de los hombres informados y libres’¹⁵⁸.

La posición de estos tecnócratas no pudo, sin embargo, impedir que se estableciera un marco de definiciones institucionales a partir de 1977. Ello significó que debieron aceptar el discutir estas materias, pero sin nunca perder de vista la necesidad de imponer aquellos elementos básicos del modelo económico de libre mercado en el futuro ordenamiento jurídico del país.

Aparte de las tradicionales garantías constitucionales al derecho de propiedad y la libre iniciativa privada, insistieron en la inclusión del (1) principio de subsidiariedad como freno natural al avance del Estado. Igualmente abogaron por la impersonalidad de las normas o el (2) principio de no discriminación económica, que en otras palabras impide toda política destinada a favorecer a algún grupo de la sociedad según criterios sociales. Lo mismo sucedió con la propuesta de (3) tecnificación de las decisiones públicas¹⁵⁹, destinada a separar la política de la gestión del Estado, especialmente en lo referido a la economía¹⁶⁰. La defensa de los tres principios se basaba en la idea de proteger al máximo la racionalidad de las decisiones públicas, y con ello asegurar su eficacia y universalidad¹⁶¹. La política sometida al escrutinio público —la soberanía popular en última instancia— debía ser reemplazada por el criterio técnico profesional, teóricamente a salvo de toda injerencia y/o interés particular. Esto solo se produciría bajo la mirada de expertos neutros desde el punto de vista de la ciencia económica. Siguiendo el planteamiento de Norbert Lechner, el principio de reducción democrática no se refiere a quiénes y cuántos participen del sistema político, como ocurre en un modelo censitario, sino de aquellas materias que pueden ser decididas democráticamente, y específicamente aquellas relacionadas con la economía¹⁶².

Para que el mercado funcione como tal autoridad impersonal es indispensable que los valores intrínsecos sean aceptados como condiciones técnicamente necesarias. De ahí la reinterpretación fundamentalmente negativa de la política. A diferencia de los antiguos conservadores, los nuevos no buscan movilizar un apoyo popular para determinados valores materiales. Pretenden, al contrario, neutralizar toda confrontación política-ideológica a fin de ‘funcionalizar’ todas las relaciones sociales en un ‘sistema’ —el mercado— desvinculado de cualquier disputa sobre el sentido de la convivencia social¹⁶³.

Tanto los ‘institucionalizadores’ como los tecnócratas ultraliberales coincidieron en la necesidad de imponer los máximos límites posibles al principio de soberanía popular. Sin embargo, como bien dice Pilar Vergara, estos últimos fueron aún más lejos en su afán por restringir el principio de mayoría propio de la soberanía popular. La nueva democracia, concebida así, quedaría entonces reducida a un simple mecanismo de generación y alternancia de las

autoridades del Estado. Aún quedaba entonces la tarea de completar las modernizaciones que asegurarían el predominio del libre mercado por sobre cualquier regresión estatista. No había espacio para concesiones si de lo que se trataba era precisamente de establecer una revolución capitalista:

Como parte de la campaña de modernización de las estructuras institucionales y económicas de Chile, los grupos organizados perdieron la mayor parte de su influencia anterior (...). Para eliminar las rigideces en el mercado laboral, el poder de negociación de los trabajadores organizados fue eliminado. Para aumentar el ahorro y desarrollar el mercado de capitales, el sistema de seguridad social fue sustituido por los distintos fondos de pensiones administrados por empresas privadas. El Estado redujo sus fuertes poderes de regulación y funciones de gestión al privatizar las empresas estatales. Los servicios sociales fueron descentralizados y transferidos a los municipios¹⁶⁴.

Notas al Capítulo III

¹ Revista Ercilla, N° 2.165, 26/03/1977. Citado por: Vergara, Pilar, Auge y caída del Neoliberalismo en Chile, Santiago, FLACSO, 1985, p. 96.

² En 1975, cuando la inflación hacía estragos y una recesión mundial provocaba una depresión en Chile, el general Pinochet se dirigió a los “Chicago Boys”— como se conocería después a este grupo de economistas— y nombró a varios de ellos en posiciones de poder en el gobierno. Friedman, Milton & Friedman, Rose, Two Lucky People: Memoirs, Chicago, University of Chicago Press, 1999, p. 398.

³ Un trabajo como el de Carlos Huneeus, si bien es uno de los más completos y mejor documentados sobre la dictadura militar, tiende a subestimar las distintas visiones al interior del mundo castrense, priorizando la figura de Pinochet y de los civiles que lo asesoraron y acompañaron en la conformación del régimen. Huneeus Carlos, El Régimen de Pinochet, Santiago, Ed. Sudamericana, 2001.

⁴ Creemos que una visión retrospectiva permite justamente afirmar el peso de los civiles en la conformación y rumbo del régimen militar chileno (1973-1989). Sin embargo, al dirigir la mirada sobre las tensiones y debates de la época, el peso de los militares que formaron parte de la conspiración no debe ser dejado de lado, si bien finalmente fueron derrotados, pues en aquel momento no estaba clara qué posición sería la predominante.

⁵ Probablemente, uno de los mejores y más completos estudios sobre el tema sea

el de Verónica Valdivia Ortiz de Zárate sobre el pensamiento político-social de los militares. Véase: Valdivia Ortiz de Zárate, Verónica, El golpe después del golpe. Leigh vs. Pinochet. Chile 1960-1980, Santiago, LOM Ediciones, 2003.

⁶ El Ladrillo no representaba la visión unívoca de los economistas de Chicago, ni tampoco era un modelo. Se trataba más bien de un plan consensuado entre liberales y economistas demócratacristianos para sacar al país de la crisis económica. Si bien la marina solicitó la elaboración de este proyecto, ello no significaba que entre las filas militares dominara la idea de un liberalismo desregulado.

⁷ Probablemente, la mejor investigación periodística sobre el complot del Golpe de Estado de 1973, sea la de Mónica González, donde justamente queda bastante claro el papel de Pinochet como uno de los que se sumó a la conspiración a último momento. Según la autora, el plan se había venido desarrollando en sus diferentes facetas desde el momento mismo del resultado de la elección de 1970. Véase: González, Mónica, Chile, La Conjura. Los mil y un días del Golpe, Barcelona, Ediciones B, 2000.

⁸ Valdivia, Op.cit., p. 18.

⁹ En este sentido, la justificación del Golpe estaba en consonancia con los principios de la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN), a la cual un no despreciable número de militares chilenos adhería, especialmente respecto del punto del enemigo interno y la necesidad de combatirlo no solo militarmente, sino en todas las posiciones que ocupe: sociales, culturales, profesionales. Al respecto recomendamos la lectura de: Varas, Augusto, La política de las armas en América Latina, Santiago, FLACSO, 1988, y Leal Buitrago, Francisco, “La doctrina de Seguridad Nacional: materialización de la Guerra Fría en América del Sur”, Revista de estudios sociales, N° 15, 2003, pp. 74-87. Sobre la llamada ‘Escuela de la Américas’ y el entrenamiento recibido por militares latinoamericanos en esta doctrina, véase: Gill, Lesley, Escuela de las Américas.

Entrenamiento militar, violencia e impunidad en las Américas, Santiago, LOM Ediciones, 2005.

¹⁰ Sobre este episodio, recomendamos la lectura del trabajo de René Millar Carvacho, el cual explica con detalles las causas y el desenvolvimiento de la sublevación militar de 1924: Millar, René, “Significado y antecedentes del movimiento militar de 1924”, en Historia, N° 11, 1974.

¹¹ Los militares chilenos desde fines del siglo XIX, y producto de su formación prusiana, mantuvieron una firme postura antipartidos políticos, antimarxista y anticomunista, aunque no por ello menos sensible a los problemas sociales de la población. La conscripción obligatoria los mantuvo en contacto con los sectores más desfavorecidos de la sociedad chilena, por lo cual no puede afirmarse que hayan vivido siempre en una suerte de aislamiento constante, refugiados en sus cuarteles. Esta visión reduccionista sobre el mundo militar ha tendido a desconocer los debates internos en las propias instituciones castrenses, limitando su participación política únicamente a posiciones monolíticas que no permiten apreciar las diferentes visiones y elementos en disputa.

¹² Valdivia, Op.cit., p. 12.

¹³ Recientemente, se ha publicado una interesante tesis sobre la figura de Carlos Ibáñez del Campo en tanto líder populista entre los años 1937 y 1952. Con ello se rompe la idea extendida de un sistema político chileno que se habría mantenido ajeno a este fenómeno durante los años 1940-50, siendo una excepción continental. Por el contrario, el libro de Joaquín Fernández Abara da cuenta de cómo el ibañismo se constituyó en una corriente populista chilena que apelaba a la imagen del hombre común y a la idea de una nación unida y dirigida por un líder carismático. Véase: Fernández Abara, Joaquín, El Ibañismo (1937-1952): un caso de populismo en la política chilena, Santiago, Instituto de Historia Pontificia Universidad Católica, 2007.

¹⁴ Su definición en favor del sistema capitalista data de la prusianización del Ejército chileno a fines del siglo XIX (1885), lo que de por sí no los hace pro liberales, pues desde la década de 1920 fueron mayoritariamente partidarios de un modelo con mayor participación en Estado en la economía (ibañismo). Sobre el proceso de prusianización del ejército chileno, hallamos la obra de Enrique Brahm, especialmente en lo referido a la evolución de este pensamiento hacia 1930: Brahm, Enrique, *Preparados para la guerra. Pensamiento militar chileno bajo influencia alemana 1885-1930*, Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2003. Una visión más crítica sobre el tema y esencialmente sobre el supuesto fracaso de la prusianización en términos militares, puede encontrarse en: Sater, William & Herwig, Holger, *The Grand Illusion. The Prussianization of the Chilean Army*, Lincoln (Nebraska), University of Nebraska Press, 1999. Un interesante estudio, aunque ya algo antiguo, sobre las relaciones cívico militares en Chile entre 1810 y 1973, es el de: Nunn, Frederick M., *The military in Chilean history: essays on civil-military relations, 1810-1973*, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1976.

¹⁵ De acuerdo a los datos recopilados por Verónica Valdivia, entre 1950 y 1965, 2.064 militares chilenos fueron entrenados en Estados Unidos y 549 en la zona del Canal de Panamá, lo cual da un total de 2.613. Esta cantidad colocó a Chile en el segundo lugar luego de Brasil (3.632) y antes que Perú (2.306).

¹⁶ Valdivia, V., *Op.cit.*, p. 32.

¹⁷ Para una visión general sobre las causas ideológicas y electorales de la creación del Partido Nacional, véase: Cruz-Coke, Ricardo, *Historia electoral de Chile: 1925-1973*, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1984, 149 p. Un análisis, quizás excesivamente crítico, sobre la creación del Partido Nacional como entidad instrumental y su papel en la crisis de la democracia de 1973, puede encontrarse en: Gómez Leyton, Juan Carlos, *La frontera de la democracia. El derecho de propiedad en Chile. 1925-1973*, Santiago, LOM Ediciones, 2004,

Cap. 3: “La reconstrucción política de la Derecha. El Partido Nacional”, pp.299-336. A juicio de este autor, la creación del partido no solo se relaciona con la catástrofe electoral de la derecha en 1964-65, sino con el hecho de haber perdido el control del Estado de Compromiso, en manos de fuerzas más progresistas (la Democracia Cristiana). Este trabajo cuenta con interesante información estadística.

¹⁸ En este grupo de nacionalistas antidemocráticos y antiliberales, destacaban especialmente los llamados ‘Estanqueros’, cuyo líder era Jorge Prat.

¹⁹ El propio Jaime Guzmán se referirá posteriormente al papel de la Fuerzas Armadas: “ese elemento cohesionador está representado en Chile por las Fuerzas Armadas y de Orden. Ellas tienen la función que equivale a la corona de los países monárquicos”. Cita textual de las Actas oficiales de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, sesión N ° 379 del 31 de mayo de 1978. Sobre el asunto de los militares como garantes de la institucionalidad, véase también: Arriagada, Genaro, “Almirante Arancibia: ¿Profesional, Militante o ‘Garante ‘?”, Asuntos Públicos, informe N° 78, 2001, <http://www.asuntospublicos.org/informe.php?id=78>.

²⁰ El Mercurio, 17-09-1973. En Valdivia, Op.cit., p. 106.

²¹ En este sentido, Verónica Valdivia señala que si bien la “Declaración de Principios de la Junta de Gobierno” de 1974 ya planteaba una ruptura con los acuerdos sociales y políticos de los años 30, no representaba el sentir de todos los militares, pues había sido redactada por Jaime Guzmán, quien había plasmado ahí su ideario gremialista, de origen principalmente civil.

²² Valdivia. Op.cit., p. 111.

²³ [Ibíd., p. 125.](#)

²⁴ [Aquí se incluyen principalmente a los generales Sergio Nuño, Javier Palacios y Óscar Bonilla.](#)

²⁵ [Expresión de Sergio de Castro en una entrevista filmada en la Universidad Finis Terrae, video N° 26. Cita obtenida en: Boisard, Op.cit., p. 438. En francés, la expresión significa: ‘avec une mitrailleuse dans le cul, tout le Chili travaille’.](#)

²⁶ [Sobre la privatización de las empresas del estado, véase: Larraín, Felipe & Vergara, Rodrigo, La transformación económica de Chile, Santiago, CEP, 2000, 728 p. Citado por Valdivia. Op.cit., p. 134.](#)

²⁷ [La línea gradualista en la liberalización de la economía chilena estuvo representada principalmente por el ingeniero Raúl Sáez, fuertemente ligado a la historia de CORFO, y quien ejerció como Ministro de Coordinación Económica y Desarrollo del régimen militar hasta 1975.](#)

²⁸ [Una crítica histórica reciente al Estado de Compromiso y al modelo de desarrollo hacia adentro en Chile, puede encontrarse en: Ibáñez, Adolfo, Herido en el ala. Estado, oligarquías y subdesarrollo. Chile 1924-1960, Santiago, Editorial Biblioteca Americana, Universidad Andrés Bello, 2003.](#)

²⁹ [Entrevista a Roberto Kelly, “Las memorias del ‘padre’ de los Chicago Boys”, Qué Pasa, número del 31 de diciembre, 2005, p. 5.](#)

³⁰ Fontaine, Arturo, Los economistas y el presidente Pinochet, Santiago, Ed. Zig Zag, 1988, p. 94, 98. Citado por Valdivia V., Op.cit., p. 135.

³¹ Nos parece interesante la visión de Cristián Gazmuri sobre la consolidación institucional de Pinochet al interior de la Junta y posteriormente como poder sin contrapesos del régimen militar. En este caso, el historiador da prioridad a los factores de poder internos por sobre la cuestión del modelo económico: “El viraje que transformó el gobierno militar de ser una instancia transitoria a una de carácter fundacional en torno a la figura de Augusto Pinochet, tuvo su consagración jurídica el 4 de diciembre de 1974 cuando el Decreto-Ley N° 788 confirió a la Junta de Gobierno la potestad de modificar a su arbitrio y retroactivamente la carta fundamental de 1925. Pero ya antes Pinochet había logrado convertirse en el hombre fuerte alrededor del cual giraría la nueva institucionalidad. El 26 de junio de 1974 (Decreto-Ley N° 527), Pinochet pasaba a ser cabeza del Ejecutivo con el título de Jefe Supremo de la Nación. En diciembre del mismo año se cambiaría la denominación de su cargo por la tradicional de Presidente de la República. Por su parte, la Junta de Gobierno asumiría las funciones de Poder Legislativo y Constituyente. Pinochet gobernaría por casi una década sin oposición popular importante. Esto fue resultado de una combinación entre dura represión política, éxito económico, apoyo político de la derecha y su capacidad de mantener el control de las Fuerzas Armadas”. Ver: Gazmuri, Cristián, “El lugar de Pinochet en la historia. Una interpretación política de la experiencia autoritaria 1973-1990”, La Tercera, 12 de septiembre 1999.

³² Was there a real economic crisis in Chile before 1973? This question was reformulated by the Chicago economists who controlled economic policy after the coup. They argued there was indeed a crisis, and one that could only be cured by a drastic reversal of the state-oriented economic policy that had been implemented since the 1930s in favour of a free market economy. Angell Alan, “Some problems in the interpretation of Recent Chilean History”, Bulletin of Latin American Research, Vol. 7, N° 1, 1988, p. 100.

³³ La DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) fue creada por Pinochet en junio de 1974 por el Decreto N° 521. Sus objetivos fueron la recopilación de información y la realización de operaciones destinadas a neutralizar a los enemigos del régimen militar y proteger la seguridad nacional. A cargo de la nueva institución fue nombrado el Coronel de Ejército Manuel Contreras. Este organismo formó parte de la Operación Cóndor, que coordinó las acciones represivas de diferentes organismos de inteligencia en contra de la izquierda en los diferentes países del Cono Sur. La DINA fue definitivamente disuelta en 1977, principalmente debido a las presiones internacionales surgidas con posterioridad a sus acciones en el extranjero y las numerosas denuncias de violaciones de los Derechos Humanos. La DINA fue reemplazada posteriormente por la Central Nacional de Informaciones (CNI), la cual ya no dependió directamente del Presidente de la República (Pinochet), aunque siguió realizando labores represivas hasta el fin del régimen militar. Sobre el funcionamiento de los organismos de represión durante el régimen militar chileno, recomendamos la lectura de: Sánchez Della Chiara María Teresa, “La Represión. Una contribución histórica”, Encuentro XXI, N° 11, 1998, pp. 36-39. Véase también Huneus, Op.cit., Cap. III: Un recurso de poder sultanístico: la DINA, pp. 160-164. Para una interpretación más reciente sobre el papel de la DINA durante el régimen militar, véase: Amorós Mario, “El puño de Pinochet”, Historia 16, septiembre 2003, pp. 38-51. Un trabajo reciente sobre el modelo de inteligencia utilizado en Chile y el concepto de comunidad de inteligencia a nivel regional, puede encontrarse en: Antunes, Priscila, “O sistema de inteligência chileno no governo Pinochet”, Varia hist., Vol. 23, N° 38, 2007, pp. 399-417.

³⁴ Sobre el análisis del vínculo entre represión y políticas de libre mercado en América Latina, véase: Sheahan, John, “Market-Oriented Economic Policies and Political Repression in Latin America”, Economic Development and Cultural Change, Vol. 28, N° 2, 1980, pp. 267-291.

³⁵ Sobre la influencia del terror y el miedo en la consolidación del régimen militar chileno y sus consecuencias en el plano social y económico,

recomendamos el artículo de Verónica Valdivia. Valdivia Ortiz De Zárate, Verónica, “Terrorism and Political Violence during the Pinochet Years: Chile, 1973-1989”, Radical History Review, N° 85, invierno 2003, pp. 182-190.

³⁶ Valdivia V., Op.cit., p. 143.

³⁷ Valdivia V., Op.cit., p. 200.

³⁸ Ver también la versión original del artículo: Valdivia Ortiz De Zárate, Verónica, “Estatismo y Neoliberalismo: un contrapunto militar. Chile 1973-1979”, Historia (Santiago), Vol. 34, N° 2001, pp. 167-226.

³⁹ La nueva oficialidad era parte de la generación de fines de los años 1950 y 60, formada principalmente en la Academia de Guerra y bajo el paradigma de la Doctrina de la Seguridad Nacional. El neoliberalismo no les resultó entonces ajeno dentro de un contexto internacional de Guerra Fría y de renovada internacionalización económica, donde los antiguos principios del ibañismo desarrollista y del estatismo aparecían como extemporáneos. Esto contribuyó a una suerte de unificación ideológica, a lo que se sumaba el contexto autoritario de la época y la verticalidad y concentración del mando ejercida por Pinochet a partir de mediados de la década de 1970. Para la década siguiente, prácticamente había desaparecido todo vestigio del desarrollismo estatista tanto en el Ejército como en las otras tres ramas de las Fuerzas Armadas chilenas.

⁴⁰ Valdivia Ortiz De Zárate, Verónica, “Estatismo y Neoliberalismo: un contrapunto militar. Chile 1973-1979”, Historia (Santiago), Vol. 34, N° 2001, p. 225.

⁴¹ Un análisis pormenorizado y comparado desde el punto de vista de la legislación laboral del Estatuto Social de la Empresa (decreto ley N° 1006 de 1975), se encuentra en: Bezanilla Boloña, Mauricio, “El marco conceptual del estatuto social de la empresa chilena. Estatuto social de la empresa chilena”, Revista de derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, N° XVI, 1995, pp. 55-71.

⁴² De acuerdo con esta visión, el sindicalismo sería permitido siempre y cuando abandonara sus aspiraciones de transformación total de la sociedad y se centrara en las cuestiones reivindicativas. Para ello tendría que despolitizarse, dedicarse a lo estrictamente laboral y someterse a la tutela del Estado.

⁴³ Las aspiraciones sociales de la oficialidad desarrollista pueden verse en el siguiente documento de la Junta de gobierno publicado en 1974. (Chile), Honorable Junta De Gobierno, Líneas De Acción De La Junta De Gobierno De Chile, Gobierno de Chile, 1974.

⁴⁴ Pinochet necesitaba de un proyecto nuevo, de ideas frescas que le permitieran reforzar y legitimar su nueva posición de poder. Por el contrario, Leigh y la mayor parte de los generales de la conjura inicial poseían los fundamentos de un modelo propio, al menos en lo social. Fue por ello que los técnicos neoliberales se aliaron con Pinochet, dándole un plan definido y la posibilidad de presentar un plan frente a cualquier oposición al interior de la Junta de Gobierno. A partir de este momento fue necesario incorporar más civiles al régimen, desplazando así cualquier vestigio de la oficialidad desarrollista que había ocupado en un primer momento varios de los ministerios clave.

⁴⁵ La relación entre Gustavo Leigh y Augusto Pinochet nunca fue fácil. Leigh consideraba a Pinochet como un advenedizo en la conjura del Golpe de Estado de 1973 y tampoco estuvo de acuerdo en que este último se convirtiera en Presidente de la República en 1974. Sin embargo, el Comandante de la Fuerza Aérea continuó en su cargo como miembro de la Junta de Gobierno,

manteniendo una actitud crítica frente a Pinochet, especialmente en lo referido a la concentración de poderes, la falta de un modelo social para el régimen y el futuro itinerario de retorno a la normalidad institucional. Leigh fue finalmente destituido en julio de 1978 producto de una entrevista que dio al periódico italiano Corriere della Sera (18-07-1978), donde criticó la falta de un itinerario político del régimen y los problemas de imagen del país producto de las acciones internacionales de la DINA. La destitución de Leigh fue un golpe de autoridad de Pinochet frente a quien lo desafiaba públicamente y ante la prensa internacional. Con la salida de Leigh, Pinochet pudo deshacerse del último de los conjurados que podían hacerle oposición. Ver: (Internacional), “La Junta militar chilena destituye al comandante en jefe de la fuerza aérea”, El País, 25/07/1978, p. 4. El texto íntegro de la entrevista en español del General Leigh al diario italiano fue publicado por la revista chilena Hoy, N° 61, 26 de julio de 1978, pp. 8- 9. También: Gardeweg, Carmen, “El general Leigh: pensamiento y sentimiento 48 horas después de ser destituido en 1978”, La Segunda, 30/09/1999, p. 8. El relato de la reunión de la junta donde Leigh es destituido se halla en: Cavallo, Ascanio, Salazar, Manuel & Sepúlveda, Óscar, Historia oculta del régimen militar, Santiago, Grijalbo, 2001, pp. 314-315.

⁴⁶ Avec la destitution de Gustavo Leigh de la Junte, le principal opposant à la doctrine de Chicago est écarté. Il devient donc permis de faire allusion au modèle économique chilien, celui d’une économie libre. Boisard, Stéphane, “Le modèle économique chilien: du mythe à la réalité”, Pensamiento Crítico, N° 4, 2004, p. 15.

⁴⁷ De acuerdo con Boisard, las declaraciones del general Leigh coinciden con la primera ocasión en que se hace alusión directa a un ‘modelo económico chileno’, pero para criticarlo. Pocos días después, el diario El Mercurio contestará las declaraciones de Leigh, pero insistiendo sobre la idea de un nuevo ‘modelo de sociedad’ y proyecto político. En: Boisard, Stéphane, “Le modèle économique chilien: du mythe à la réalité”, Op.cit., p. 15.

⁴⁸ The resilience of the Pinochet regime was partly based on the profound

structural transformations that had been initiated in the course of the previous decade (70's). Neo-liberal reforms revolutionized the political economy of the country. The old model of state-promoted industrialization was replaced with an open, market-oriented economy with an expanding export sector. In the mid-1970s, the most ideological government technocrats persuaded Pinochet and many of his most influential civilian advisers that a drastic restructuring of the country's economy was necessary to eliminate the accumulation of bureaucratic inefficiencies that stifled economic growth. The management of the economy, they argued, had to be depoliticized. Montecinos, Verónica, Economists, Politics and the State: Chile 1958-1994, Amsterdam, Rozenberg Publishing Services, 1998, p. 103

⁴⁹ Angell, Alan, Chile de Alessandri a Pinochet: en busca de la utopía, Santiago, Editorial Andrés Bello, 1993, p. 99.

⁵⁰ (...) after de the Second World War, the entrepreneurial sector was in a relatively weak position, both financially and technologically. Given its lack of entrepreneurial experience the state had to take a lead, and entrepreneurs came to depend heavily upon the state. Aníbal Pinto argues that the thrust for capitalist modernization came not from the entrepreneurial sector but from what he calls a 'technoburocracia del estado'—mostly engineers from the public and private sector. Angell, Alan, "Some problems in the interpretation of Recent Chilean History", Op.cit., p. 104.

⁵¹ Vergara, Op.cit.

⁵² Ffrench-Davis, Ricardo, Entre el Neoliberalismo y el Crecimiento con Equidad: Tres Décadas de Política Económica en Chile, Santiago, Dolmen, 2003, 334 p. Existe un artículo del mismo autor donde explica de manera más sumaria y menos técnica las ideas planteadas en el libro. Ffrench-Davis, Ricardo, "Chile, entre neoliberalismo y el crecimiento con equidad", Nueva Sociedad, N° 183, 2003, pp. 70-90.

⁵³ Correa, Sofía; Figueroa, Consuelo; Jocelyn-Holt, Alfredo Rolle; Claudio & Vicuña, Manuel, Historia del siglo XX chileno. Balance paradójal, Santiago, Editorial Sudamericana, 2001, p. 298.

⁵⁴ Stallings, Bárbara, “Las reformas estructurales y el desempeño económico” en Ffrench-Davis, R. & Stallings, B. (Eds.), Reformas, crecimiento y políticas sociales en Chile desde 1973, Santiago, LOM Ediciones, 2001, p. 23.

⁵⁵ El propio Sergio de Castro reconoce la dureza de las medidas del tratamiento de shock al referirse a la disminución radical de la planta de empleados públicos en un 30%, lo cual es insostenible políticamente en cualquier régimen democrático. Ver: Arancibia Clavel, Patricia & Balart Páez, Francisco, Sergio de Castro. El arquitecto del modelo económico chileno, Santiago, Editorial Biblioteca Americana, 2007, p. 232.

⁵⁶ Para Bárbara Stallings, el caso chileno era un ejemplo extremo de este modelo: los aranceles eran muy elevados, las cuotas aplicadas al ingreso de bienes importados eran omnipresentes, los flujos de capital extranjero estaban restringidos y el estado controlaba, directa o indirectamente, una parte considerable de la actividad económica. Ver: Stallings, Op.cit., p. 25.

⁵⁷ De acuerdo con el análisis de Patricio Meller, quien es uno de los economistas que mejor ha estudiado el proceso económico chileno entre 1890 y 1990, la crítica de los monetaristas al modelo de Estado de Compromiso se centraba en los siguientes puntos: a) el surgimiento de una enorme e ineficiente burocracia que obtiene beneficios especiales del Estado y actúa como grupo de presión; b) un mal manejo de la inflación a través de controles de precios, tasas de interés y restricción de divisas, lo cual crea rentas y beneficios para ciertos grupos privilegiados; c) el Estado adquiere un enorme poder discrecional, lo que

aumenta la competencia política y social por controlarlo, incluso de parte del empresariado; d) la sociedad se vuelve rentista, perdiendo espíritu emprendedor, pues todo se logra a través del padrinazgo político, generando en su conjunto una estructura poco competitiva de la organización económica. El diagnóstico final es que: “Una economía con un Estado en expansión y grupos de presión que pugnan por su control total conduce al estancamiento; este impide la solución de los problemas económicos y sociales, generándose una crisis social y política. Las disputas por el control del Estado, el incremento sostenido de la actuación de este, la interacción persistente entre los intereses económicos y políticos y la incapacidad para resolver los problemas económicos reales terminan por minar y destruir la democracia”. Meller, Patricio, Un Siglo de Economía Política Chilena (1890-1990), Santiago, Editorial Andrés Bello, 1998, pp. 176-177.

⁵⁸ Ver “Exposición de la Hacienda Pública de 1977 y 1978” de Sergio de Castro. También, de Pablo Baraona, el uso del concepto ‘cultura del reparto’ en una conferencia (1993) dada en la Universidad Finis Terrae. Ambos textos citados de: Meller P., Op.cit., p. 174.

⁵⁹ Jorge Cauas fue nombrado por Pinochet el 10 de abril de 1975 como ‘Superministro’ de Coordinación Económica y Desarrollo, teniendo a su cargo diez áreas claves de la economía. Se le otorgaron facultades extraordinarias, generando una enorme concentración del mando en sus manos, lo que debilitó fuertemente a la Junta de Gobierno. Cauas incluso contó con la potestad de nombrar o remover a cualquier alto funcionario del Estado salvo aquellos que tuvieran la calidad de Ministro. Su equipo económico estuvo conformado por Roberto Kelly en ODEPLAN, Sergio de Castro en el Ministerio de Economía, Álvaro Bardón y Pablo Baraona en el Banco Central, Juan Carlos Méndez en el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto. Se trató, en definitiva, de un equipo de Chicago Boys de la línea más ortodoxa. Ver: Cavallo, Ascanio; Salazar, Manuel & Sepúlveda, Óscar, La historia oculta del régimen militar, Santiago, Ediciones La Época, 1988, Cap IX, pp. 63-86.

⁶⁰ Sergio de Castro estaba convencido de que la única forma de controlar la

inflación era por medio de un ajuste radical del gasto público: “Jorge Cauas tenía razón en cuanto efectivamente la inflación ya no estaba desbocada, pero seguía siendo inaceptablemente alta. Según nuestras propias proyecciones debía haber bajado mucho más, pero las cifras nos mostraban una realidad mucho más dura de lo esperado. Así, ya en los últimos meses de 1974 no había que ser demasiado perspicaz para darse cuenta que sería imperioso adoptar un conjunto de medidas draconianas para frenar el gasto público”. En: Arancibia Clavel, Patricia & Balart Páez, Francisco, Sergio de Castro. El arquitecto del modelo económico chileno, Santiago, Editorial Biblioteca Americana, 2007, p. 216.

⁶¹ Entrevista a Sergio de Castro. En: Arancibia & Balart, Op.cit., p. 220.

⁶² En un libro publicado en septiembre de 2007 y con un importante éxito de ventas, la escritora altermundialista Naomi Klein analiza la relación entre la puesta en marcha de políticas económicas monetaristas ortodoxas y la idea de shock (desde un punto de vista psicológico y físico). Para ello compara una serie de situaciones en las cuales el uso estratégico de la violencia permite neutralizar la protesta social, facilitando aquellos cambios estructurales que generan enormes costos en la población. La experiencia de Chile, a partir de 1973, constituye uno de los ejemplos citados en el libro. Si bien nos parecen rescatables algunos de los puntos planteados por la autora, creemos que desde el punto de vista del análisis histórico tiende a simplificar demasiado las condiciones de la puesta en marcha del modelo económico en Chile. Klein, Naomi, The Shock Doctrine. The rise of disaster capitalism, Metropolitan Books, 2007, Chapter 3: “States of Shock: The bloody birth of the counterrevolution”, pp. 75-97.

⁶³ Es posible leer la copia íntegra de la carta de Milton Friedman al general Pinochet en el siguiente documento electrónico: Piñera, José, “Milton Friedman y sus recomendaciones a Chile, CATO Institute, 2006. Disponible en: <http://www.elcato.org/node/2067>.

⁶⁴ I believe that the Chicago Boys had already reached the conclusion that a shock treatment was required to end the inflation and establish the basis for economic recovery and growth; and that the key to both ending inflation and economic recovery was a drastic cut in government spending, since the inflation was clearly being driven by the need to print money to finance a major government deficit Friedman & Friedman, Op.cit., pp. 399-400.

⁶⁵ Ver: Vergara P., Op.cit., p. 77.

⁶⁶ C'est dans le cadre du Chili d'Augusto Pinochet notamment, où Milton Friedman a pu expérimenter les recettes supposées vertueuses de sa 'théorie de choc', qui seront ensuite exportées vers l'Europe et les Etats-Unis (...). Le déplacement du centre de gravité de l'espace du néo-libéralisme de l'Europe(Économie sociale de marché) vers l'Amérique conduit à une dépréciation de ce qui pouvait subsister de 'libéralisme social' au profit d'une autre forme de néo-libéralisme, celui de l'École de Chicago.

⁶⁷ Vergara, Op.cit., p. 79.

⁶⁸ Línea Aérea Nacional (LAN), Empresa Nacional de Minería (ENAMI), Empresa Nacional de Electricidad Sociedad Anónima (ENDESA).

⁶⁹ Entrevista a Sergio de Castro. Ver: Arancibia & Balart, Op.cit., p. 236.

⁷⁰ *Ibíd.*, p. 81.

⁷¹ El Pacto Andino fue creado el 26 de mayo de 1969. Sus miembros iniciales fueron Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Venezuela se integró en 1973 y Chile se retiró en 1976 por la incompatibilidad de su política económica. Al Pacto Andino también se le conoce con el nombre de Acuerdo de Cartagena. El acuerdo nació con el objetivo de lograr un desarrollo equilibrado y armónico entre sus miembros, acelerar su crecimiento y formar un mercado común latinoamericano. Sobre la base de estas metas, se consideró la inclusión de un programa de reducción de tarifas o programa de liberalización y la creación de una tarifa externa común o arancel externo común, aunque dentro de un fuerte esquema de protección de las industrias locales. El Pacto Andino fue finalmente reemplazado por la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en 1996. Ver: Editorial, “Historia y datos básicos de la Comunidad Andina”, Los Tiempos, N° 08-06-2007, http://www.lostiempos.com/noticias/08-06-07/08_06_07_ultimas_eco6.php. Respecto al contexto en el cual Chile participó de esta instancia, recomendamos la lectura de: Ffrench-Davis, Ricardo, *El Pacto andino, un modelo original de integración*, Santiago, Universidad Católica de Chile, Centro de Estudios de Planificación Nacional (CEPLAN), 1974, 64 p. Para tener un balance general y más contemporáneo sobre los procesos de integración en América Latina desde fines de los años 1960, recomendamos la lectura de la primera parte de la siguiente obra: González Arana, Roberto & Crisorio, Beatriz Carolina (Eds.), *Integración en América Latina y el Caribe: Análisis sobre procesos de regionalización*, Barranquilla, Colombia, Ediciones Uninorte, 2001, 272 p. Probablemente, una de las mejores síntesis históricas desde el punto de vista económico sobre este período, se encuentra en: Bethell, Leslie (Ed.), *The Cambridge History of Latin America. “Vol. VI: Latin America since 1930. Economy, Society and Politics”*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, pp. 159-249. La visión oficial del régimen militar sobre la inconveniencia para Chile del Pacto Andino, se halla en el siguiente documento de gobierno: Pipino, Adelio, *El Pacto Andino y el modelo de desarrollo económico chileno*, Santiago, ODEPLAN, 1977.

⁷² Las cifras fueron obtenidas de: Vergara P., *Op.cit.*, p. 85.

⁷³ Álvaro Bardón refiriéndose a la incapacidad de gran parte de la población para entender los fundamentos del funcionamiento de los mercados en una economía

libre. Ver: Garzón, Laura & Sáez, Alejandro, “El juicio de la Iglesia sobre el modelo”, El Mercurio, 04 enero 2004.

⁷⁴ Ibíd., p. 86.

⁷⁵ Incluso, aquellas organizaciones de trabajadores que estaban dentro del proyecto del general Díaz Estrada fueron desarticuladas.

⁷⁶ Se endureció lo que había quedado estipulado en los Decretos Ley N° 77 y 78 de octubre de 1973, donde se establece en su Artículo 1°.- “Declárense en receso todos los partidos políticos y entidades, agrupaciones, facciones o movimientos de carácter político no comprendidos en el decreto ley N° 77 (de orientación marxista y afines), de 8 de Octubre de 1973”. El objetivo final de esta medida fue amedrentar a la Democracia Cristiana, la cual estaba haciendo públicas sus críticas al régimen, respecto del cual había colaborado desde septiembre de 1973.

⁷⁷ Sobre la desmovilización durante los primeros años del gobierno militar, existe un estudio de principios de los años 1980, que nos parece bastante interesante, pues compara los grados de movilización social existentes antes y después del Golpe de Estado. Ver: Remmer, Karen, “Political demobilization in Chile, 1973-1978”, Comparative Politics, Vol. 12, N° 3, 1980, pp. 275-301.

⁷⁸ Vergara P., Op.cit., p. 86. Ver también el siguiente texto citado por Vergara: Frühling, Hugo, “Limitando la acción coercitiva del Estado. La estrategia legal de defensa de los derechos humanos en Chile”, Contribuciones FLACSO, noviembre, N° 12, 1982.

⁷⁹ Vergara P., Op.cit., p. 99.

⁸⁰ Bardón, Álvaro, Informe Gemines primer trimestre, 1978, p. 87. Citado por: Vergara P., Op.cit., p. 99.

⁸¹ Ver: Olave-Castillo, Patricia, El proyecto neoliberal en Chile y la construcción de una nueva economía, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Ediciones El Caballito S.A., 1997.

⁸² Sergio de Castro se refiere de la siguiente manera a las razones que tuvo Pinochet para apoyar al grupo de tecnócratas liberales: "...lo que verdaderamente lo entusiasmó (a Pinochet) y lo llevó a 'comprar' el modelo liberal fue la posibilidad que le ofrecía para llevar a cabo una verdadera y audaz revolución en el ámbito económico-social, cuyo éxito catapultaría al país a un sitio único en su historia. Para él no se trataba, como sugerían los planes alternativos, de enmendar un orden de cosas que había mostrado con creces sus falencias; lo que había que implantar era un sistema distinto, capaz de modificar positiva y cuantitativamente la suerte de los chilenos". En: Arancibia & Balart, Op.cit., p. 262.

⁸³ En este trabajo de fines de la década de 1990, fruto de la colaboración de diversos economistas liberales, si bien se reconoce el gradualismo inicial de las medidas aplicadas por el régimen militar, el enfoque general tiende hacia la unidad del período. Larraín, Felipe & Vergara, Rodrigo (Eds.), La transformación económica de Chile, Santiago, CEP, 2000, 728 p.

⁸⁴ Ffrench-Davis, Op.cit., p. 58.

⁸⁵ Ibíd., p. 68.

⁸⁶ Meller, Op.cit., p. 213.

⁸⁷ Ffrench-Davis, Ricardo, “Una evaluación del modelo económico”, Estudios Públicos, N° 11, 1983, p. 18.

⁸⁸ Ffrench-Davis, Op.cit., p. 74.

⁸⁹ Ibíd., p. 75.

⁹⁰ Ibíd., p. 75.

⁹¹ Ibíd., p. 77.

⁹² Ibíd., pp. 78-79.

⁹³ Ibíd., p. 80.

⁹⁴ Ibíd., p. 80.

⁹⁵ El rechazo a la planificación, desde el punto de vista de la teoría neoclásica, se ve claramente en los trabajos de Friedrich Hayek, especialmente en los capítulos 4, 5 y 6 de Road to Serfdom. Ver: Hayek, F., The Road to Serfdom, Chicago, University of Chicago Press, 1994.

⁹⁶ En effet, la compétition pour le pouvoir sur le pouvoir de l'État introduit un autre puissant facteur de changement. À nouveau ce facteur est primordial dans le champ économique, ne serait-ce que parce que même les stratégies libérales dites de retour au marché s'appuient en réalité sur le pouvoir de l'État. Boyer, Robert, "L'anthropologie économique de Pierre Bourdieu", Actes de la recherche en sciences sociales, Vol. 150, N° 1, 2003, p. 72

⁹⁷ Carlos Huneeus es quien mejor ha estudiado el tema de la relación entre las dos generaciones de Chicago Boys y el régimen militar, especialmente en lo que respecta a su accionar desde la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN) en tanto asesores directos del equipo económico y del mismo General Pinochet. Ver: Huneeus, Carlos, "Tecnócratas y políticos en el autoritarismo. Los 'ODEPLAN boys' y los 'gremialistas' en el Chile de Pinochet", Revista de Ciencia Política, Vol. XIX, N° 2, 1998, pp. 125-158. Una versión actualizada del trabajo anterior y publicada en inglés se encuentra en: Huneeus, Carlos, "Technocrats and Politicians in an Authoritarian Regime. The 'ODEPLAN Boys' and the 'Gremialists' in Pinochet's Chile", Journal of Latin American Studies, Vol. 32, N° 2, 2000, p. 461-501. Ver también el capítulo especial dedicado al tema en su libro sobre el gobierno militar: Huneeus, Carlos, El Régimen de Pinochet, Santiago, Ed. Sudamericana, 2001.

⁹⁸ Respecto de la historiografía reciente que hace un balance positivo del régimen militar desde el punto de vista económico e institucional, puede revisarse el texto de Alejandro San Francisco y Ángel Soto: San Francisco, Alejandro & Soto, Ángel, "El gobierno del General Augusto Pinochet en Chile. 1973-1990", Aportes, N° 55, 2004, p. 98-123. Una mirada más partisana respecto de las virtudes del régimen se halla en la obra del historiador y periodista James Whelan. Ver: Whelan, James, Out of the Ashes: Life, Death,

and Transfiguration of Democracy in Chile, 1833-1988, Washington, Regnery Gateway, 1989.

⁹⁹ ODEPLAN: Oficina de Planificación Nacional.

¹⁰⁰ Una biografía de carácter hagiográfico sobre Miguel Kast, considerado por muchos como una especie de ‘santo laico’ para un sector de la derecha chilena, es la de Lavín, Joaquín, Miguel Kast: Pasión de vivir, Santiago, Editorial Zig-Zag, 1986, 174 p. Miguel Kast Rist estudió economía en la Universidad Católica de Chile. Tras obtener el Máster en Economía de la Universidad de Chicago con honores, regresó a Chile en 1973. Lo hizo para incorporarse al Departamento de Estudios de ODEPLAN, donde asumió el cargo de ministro en 1978; luego como Ministro del Trabajo (1980); y la Presidencia del Banco Central de Chile (1982); simultáneamente fue profesor e investigador del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica. Kast murió prematuramente en 1983, a los 34 años, a causa de un cáncer.

¹⁰¹ Entrevista a Roberto Kelly, Op.cit., p. 6.

¹⁰² Sobre la relación entre políticas sociales y reformas económicas ver: ODEPLAN, Eficiencia económica para el desarrollo social: plan nacional indicativo de desarrollo 1976-1981, Santiago, ODEPLAN, 1981.

¹⁰³ Huneus sostiene que estos acuerdos le permitieron a la Universidad Católica de Chile recibir recursos económicos en el momento del ajuste recesivo de shock, y cuando el presupuesto de las universidades públicas estaba siendo restringido de manera drástica. Entre 1973 y 1981, se firmaron catorce convenios entre ODEPLAN y la Universidad Católica, por un monto total de \$5.633.026.285, equivalente a US\$ 12.658.261, entregados por el Estado. En el mismo período, ODEPLAN no firmó ningún convenio con el Instituto de

Economía de la Universidad de Chile, donde justamente trabajaban destacados economistas opositores al régimen militar. Ver: Huneus, Carlos, El Régimen de Pinochet, Santiago, Ed. Sudamericana, 2001.

¹⁰⁴ CASEN es la ‘Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional’. Este instrumento entrega información acerca de las condiciones socioeconómicas de los diferentes sectores sociales del país, sus carencias más importantes, la incidencia, magnitud y características de la pobreza, así como la distribución y la composición del ingreso de los hogares (Fuente: sitio web del Ministerio de Planificación nacional, MIDEPLAN: www.mideplan.cl).

¹⁰⁵ Huneus, Op.cit., p. 422.

¹⁰⁶ Huneus, Carlos, Cartas al director, El Mercurio, 17/12/2007, p. 2.

¹⁰⁷ Entrevista a Sergio de Castro. Ver: Arancibia & Balart, Op.cit., p. 250.

¹⁰⁸ Una completa descripción del Curso Interamericano de Preparación y Evaluación de Proyectos (CIAPEP), y escrito por su principal impulsor, Ernesto Fontaine, se encuentra en: Fontaine, Ernesto, “The CIAPEP and its contributions to the profession”, Cuadernos de Economía PUC, Vol. 40, N° 121, 2003, pp. 599-606.

¹⁰⁹ ODEPLAN, Curso Interamericano de Adiestramiento en Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión, Santiago, ODEPLAN, 1982. Ver también: ODEPLAN, Preparación y presentación de proyectos de inversión, Santiago, Ed. Universitaria, 1978.

[110 About 1.100 professionals have graduated from the IDB-ODEPLAN and the CIAPEP. One hundred and sixty of them were foreigners; 790 took the whole, and 310 only took the Theoretical Phase. More than 2.200 professionals have graduated from the Intensive Regional Courses. Fontaine, Op.cit., p. 601.](#)

[111 Las cifras fueron obtenidas del texto de Carlos Huneeus. Ver: Huneeus, Op.cit., p. 426.](#)

[112 Entrevista a Sergio Melnick, ex ministro de ODEPLAN \(1987-1990\). Ver: Giner, Claudia, “Las confesiones de Melnick”, Qué Pasa, 07 octubre, 2006, p. 5.](#)

[113 Por su parte, los economistas afines al régimen y liderados por Sergio de Castro, no comprendían estas críticas de economistas a quienes consideraban técnicamente capaces. A su juicio, las mediciones debían tomar en cuenta el ‘desastre’ en que había caído la economía chilena desde 1970, y por ello el ‘milagro’ si constituía un crecimiento efectivo e incluso espectacular. Las opiniones de Sergio de Castro sobre este punto pueden encontrarse en: Arancibia Clavel, Patricia & Balart Páez, Francisco, Sergio de Castro. El arquitecto del modelo económico chileno, Santiago, Editorial Biblioteca Americana, 2007, Cap. VII “Los años del Boom”, pp. 315-341.](#)

[114 Ffrench-Davis, Op.cit., p. 81.](#)

[115 Moulán, Tomás, Chile actual. Anatomía de un mito, Santiago, LOM ediciones, 1997, p. 233.](#)

¹¹⁶ Ver Meller, Patricio, Op.cit., p. 195.

¹¹⁷ Las cifras fueron obtenidas del texto de Arellano y Cortázar. Arellano, José Pablo & Cortázar, René, “Del milagro a la crisis: algunas reflexiones sobre el momento económico”, Estudios CIEPLAN, N° 8, 1982, pp. 43-60.

¹¹⁸ Los conceptos ‘roto’ (individual) y ‘rotada’ (colectivo) tienen —en Chile— un carácter peyorativo y discriminador para referirse a quienes pertenecen a grupos sociales desposeídos económicamente.

¹¹⁹ Entrevista a Álvaro Bardón. Ver: Lagos, Andrea, “1979: el año del Cuesco Cabrera”, La Tercera, Reportajes, 29 agosto 1999, pp. 8-10. Citado en: Arancibia & Balart, Op.cit., p. 327.

¹²⁰ “El primer auge de petrodólares en la década de los 70 no fue afortunado para muchos países que inicialmente creyeron beneficiarse. En esa época, los Estados productores del crudo, muchos de ellos del Medio Oriente, utilizaron las ganancias para financiar un alto nivel de consumo que no pudo mantenerse indefinidamente. También depositaron grandes sumas producto de su bonanza petrolera en bancos de Estados Unidos y Europa. Dichas instituciones financieras reciclaron los fondos extendiendo grandes empréstitos a bajas tasas de interés a países latinoamericanos. Luego de recibir miles de millones de petrodólares en préstamos que luego no pudieron pagar, varias naciones latinoamericanas cayeron en 1982 en una recesión económica de la que tardaron años en recuperarse”. Cita obtenida de: Fajardo, Luis, “El regreso de los petrodólares”, BBC mundo, N° 10/02/2006.
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/2006/energia/newsid_4702000/4702968

¹²¹ El tipo de cambio nominal fijo es aquel que se establece por las autoridades financieras como una proporción fija entre el valor de la moneda nacional y el de

una mercancía (por ejemplo, el oro o la plata) o de una moneda extranjera.

¹²² Meller, Op.cit., p. 196.

¹²³ Arellano & Cortázar, Op.cit., p. 51.

¹²⁴ Ibíd., p. 58.

¹²⁵ Meller P., Op.cit., p. 197.

¹²⁶ Entrevista al economista Pablo Baraona. Citado en: Correa, Sofía; Figueroa, Consuelo; Jocelyn-Holt, Alfredo; Rolle, Claudio & Vicuña, Manuel, Historia del siglo XX chileno. Balance paradójico, Santiago, Editorial Sudamericana, 2001, p. 299.

¹²⁷ Arellano & Cortázar, Op.cit., p. 60.

¹²⁸ Palabras de Augusto Pinochet durante el Discurso de Chacarillas (09 de julio de 1977). Este discurso marcó el primer momento en que el gobierno militar decidió poner en marcha un itinerario de retorno a la democracia a través de una nueva Constitución. Documento completo disponible en: http://es.wikisource.org/wiki/Discurso_de_Chacarillas.

¹²⁹ Un completo análisis y descripción sobre el proyecto institucional de los

gremialistas, se encuentra en la siguiente obra colectiva: Valdivia Ortiz De Zárate, Verónica; Álvarez, Rolando & Pinto, Julio, Su revolución contra nuestra revolución. Izquierdas y derechas en el Chile de Pinochet (1973-1981), Santiago, LOM Ediciones, 2006, 228 p. (Cap. 2, pp. 49-99).

¹³⁰ Sobre la institucionalización de los regímenes autoritarios en América Latina y específicamente en Chile, existe un interesante análisis contemporáneo a los sucesos escrito por Manuel Antonio Garretón, y el cual está centrado en los aspectos ideológicos de estos regímenes. Garretón, Manuel A., “De la seguridad nacional a la nueva institucionalidad. Notas sobre la trayectoria ideológica del nuevo Estado autoritario”, Revista Mexicana de Sociología, Vol. 40, N° 4, 1978, pp. 1259-1282. También: Garretón, Manuel A., “Modelo y proyecto político del régimen militar chileno”, Revista Mexicana de Sociología, Vol. 44, N° 2, 1982, pp. 355-372.

¹³¹ Sobre este concepto, recomendamos revisar el libro de Sofía Correa sobre la derecha chilena, especialmente el capítulo VII. Ver: Correa, Sofía, Con las riendas del poder. La derecha chilena en el siglo XX, Santiago, Editorial Sudamericana, 2004, pp. 275-279.

¹³² Sobre la historia de la Constitución de 1980 y sus consecuencias en el posterior proceso de transición a la democracia en Chile, véase: Valenzuela, J. Samuel, La Constitución de 1980 y el inicio de la redemocratización en Chile, Working paper, Kellogg Institute, 1997.

¹³³ Un interesante pero breve análisis sobre la trascendencia y la personalidad de Jaime Guzmán se encuentra en: Otano, Rafael, “Jaime Guzmán, una ausencia tan presente”, El Mostrador, 31/03/2001, accesado el 27/05/2008, http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_suscriptores.asp?id_noticia=26531. Una versión en francés de este documento se halla en: Contreras, Rodrigo, La dictature de Pinochet en perspective. Sociologie d’une révolution capitaliste et néoconservatrice, París, L’Harmattan, 2007, p. 179.

¹³⁴ Respecto de la relación de Pinochet con los otros miembros de la Junta, Rober Barros ha insistido sobre el excesivo papel que se la ha dado al primero en desmedro de los segundos. A su juicio, la Constitución de 1980 buscaba prolongar en el tiempo los cambios instituidos en el régimen y no extender un gobierno personalista como tradicionalmente se lo ha interpretado. Barros, Robert, “Personalization and Institutional Constraints: Pinochet, the Military Junta, and the 1980 Constitution”, Latin American Politics and Society, Vol. 43, N° 1, 2001, pp. 5-28.

¹³⁵ Ver: República de Chile, Declaración de Principios del Gobierno de Chile, Santiago, 1974.

¹³⁶ La Comisión de Estudios de la Nueva Constitución Política de la República de Chile (CENC), más conocida como Comisión Ortúzar, fue un organismo establecido en 1973 por la Junta Militar de Gobierno tras el Golpe militar y cuya finalidad fue preparar el anteproyecto de la Constitución de 1980. El nombre de la comisión se debe a su Presidente, Enrique Ortúzar Escobar, quien había sido Ministro de Justicia del gobierno de Jorge Alessandri (1958-1964). La comisión no tuvo un carácter constituyente, sino que se limitó solo a redactar un anteproyecto, el cual fue corregido y aprobado por el Consejo de Estado y posteriormente por la Junta de Gobierno. Para un análisis detallado de los orígenes de la Constitución de 1980, véase: Silva Bascañán, Alejandro, Tratado de Derecho Constitucional. Tomo III: La Constitución de 1980. Antecedentes y génesis, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1997.

¹³⁷ Hasta ahora, uno de los mejores estudios sobre el pensamiento de Jaime Guzmán se puede encontrar en: Cristi, Renato, El pensamiento político de Jaime Guzmán. Autoridad y libertad, Santiago, LOM Ediciones, 2000, 223 p. Véase también del mismo autor: Cristi, Renato, “Jaime Guzmán, capitalismo y moralidad”, Revista de Derecho (Valdivia), Vol. 10, N° 1, diciembre 1999, pp. 87-102.

¹³⁸ Es por ello que el texto original de la Constitución de 1980 establece que la soberanía radica en la nación y no en el pueblo, con lo cual se pone el acento en la desconfianza en la soberanía popular que surge del sufragio universal. Artículo 5°.- “La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio”.

¹³⁹ La revista Portada define muy bien los valores que se suponen detrás de este ideal portaliano de orden y progreso, que se inspira en el primer decenio de gobierno conservador, dominado por la figura del Ministro Diego Portales (1830-1837): “(...) los valores de la pequeña y mediana propiedad; del respeto a la autoridad y a la jerarquía; del progreso inductivo y no revolucionario; del rechazo a la violencia y a la desintegración moral, de la moneda estable y de la preservación de las libertades públicas e individuales”. Ver: Vergara, Sergio, “El cambio social y la estructura política”, Portada, N° 12, 1970, p. 8.

¹⁴⁰ Correa, Op.cit., p. 276.

¹⁴¹ Sobre las características y atribuciones del Tribunal Constitucional, se puede consultar el artículo de Teodoro Ribera, quien evalúa positivamente la existencia de dicha institución. Ver: Ribera, Teodoro, “El Tribunal Constitucional y su aporte al desarrollo del derecho. Aspectos relevantes de sus primeros 59 fallos”, Estudios Públicos, N° 34, 1989, pp. 195-228. Siguiendo la misma línea de análisis, véase también: Bertelsen, Raúl; Barros, Enrique & Ribera, Teodoro, “Función del Tribunal Constitucional de 1980”, Estudios Públicos, N° 27, 1987, pp. 113-129.

¹⁴² Correa, Op.cit., p. 277.

¹⁴³ Desde el punto de vista de los economistas liberales, el estudio de Francisco Rosende de fiende la existencia de un Banco Central autónomo como uno de los pilares de una política monetaria responsable y antinflacionaria. Este tema actualmente aparece como de consenso general entre los economistas, pero no lo era en la época que fue propuesto a partir de la Constitución de 1980. Véase: Rosende, Francisco, “La Autonomía del Banco Central de Chile: Una Evaluación Preliminar”, Cuadernos de Economía PUC, Vol. 30, N° 91, 1993, pp. 293-326.

¹⁴⁴ La Unión Demócrata Independiente (UDI) fue creada en 1983, como un partido de vocación popular, en un contexto de fuerte protesta social en contra del régimen militar. Sus primeros miembros fueron gremialistas cercanos a Jaime Guzmán, mayoritariamente surgidos del semillero de la Universidad Católica de Chile.

¹⁴⁵ Correa, Op.cit., p. 278.

¹⁴⁶ Jorge Chateau realiza un análisis detallado sobre esta doctrina y su recepción en América Latina, en: Chateau, Jorge, “Seguridad Nacional y guerra antsubversiva”, Documento de Trabajo FLACSO, N° 185, 1983, 78 p. Véase también para el período estudiado: Tapia Valdés, Jorge, El terrorismo de Estado: la doctrina de la seguridad nacional en el Cono Sur, México, D.F., Nueva Imagen; Caracas : Revista Nueva Sociedad, 1980.

¹⁴⁷ Valdivia Ortiz De Zárate, Verónica, Alvarez, Rolando & Pinto, Julio, Su revolución contra nuestra revolución. Izquierdas y derechas en el Chile de Pinochet (1973-1981), Santiago, LOM Ediciones, 2006, p. 222. Para una visión más general sobre el origen de la nueva derecha chilena, véase el reciente texto de la autora: Valdivia Ortiz De Zárate, Verónica, Nacionales y gremialistas. El ‘parto’ de la nueva derecha política chilena, 1964-1973, Santiago, LOM

Ediciones, 2009.

¹⁴⁸ Stéphane Boisard ha descrito muy bien el ambiente de este evento: “Le 9 juillet 1977, jour (officiel) de la jeunesse, en commémoration de la Bataille de la Concepción où moururent 77 jeunes soldats chiliens, le général Pinochet prononce son discours au sommet de la colline Chacarillas. Il est entouré d’un millier de jeunes portant une torche et appartenant tous au Front juvenile d’unité nationale. Au premier rang, se trouvent les principaux dirigeants du gremialismo. Cette cérémonie, qui continue les années suivantes, est accompagnée de marches militaires et rappelle les rassemblements fascistes des années 1930”. Véase: Boisard, Op.cit., p. 459.

¹⁴⁹ Vergara, Op.cit., p. 106.

¹⁵⁰ Sobre el aislamiento político del régimen militar durante la década de 1970, consultar: Muñoz, Herald, “Las relaciones exteriores del gobierno militar chileno”, Revista Mexicana de Sociología, Vol. 44, N° 2, 1982, pp. 577-597. En una mirada de largo plazo, probablemente el análisis más interesante es el de Joaquín Fernandois, donde se muestran las paradojas y ambivalencias de la relación de Europa y Estados Unidos con la dictadura militar chilena, especialmente con los gobiernos de Nixon, Carter y Reagan. Fernandois, Joaquín, Mundo y fin de mundo. Chile en la política mundial 1900-2004, Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2005, Cap.XV, pp. 432-438.

¹⁵¹ Las relaciones entre la Iglesia Católica chilena y el régimen militar estuvieron marcadas por el tema de los derechos humanos, especialmente tras la creación de la Vicaría de la Solidaridad, creada en 1976 a petición del Cardenal Raúl Silva Henríquez y en reemplazo del Comité Pro Paz. Este último tuvo origen en las Iglesias protestantes que se organizaron inmediatamente ocurrido el Golpe de Estado para proteger los derechos de los detenidos y organizar la búsqueda de las personas desaparecidas. Véase: Drake, Paul & Cruz, María Angélica, Iglesia, represión y memoria. El caso chileno, Texas, Social Science Research Council,

2004.

[152 Orlando Letelier del Solar fue asesinado en Washington junto a su secretaria Ronni Moffitt el 21 de septiembre de 1976. Economista y diplomático chileno exiliado en Estados Unidos, contaba con numerosas redes de contactos en el extranjero y especialmente en Estados Unidos. El régimen militar temía que su influencia pudiese acrecentar el aislamiento del gobierno respecto de la comunidad internacional. Un comando de la DINA organizó su asesinato mediante la instalación de una bomba en su automóvil particular. Este crimen tensionó las relaciones entre Estados Unidos y el gobierno de Pinochet.](#)

Uno de los trabajos periodísticos más completos sobre este caso se encuentra en: Dinges, John & Landau, Saul, *Assassination on Embassy Row*, Pantheon Books, NY, 1980, 411 p. Del mismo autor, existe un trabajo reciente sobre la operación Cóndor, implementada a partir de 1975 para coordinar los servicios de inteligencia del Cono Sur en la represión de los opositores de izquierda a los regímenes militares de la región. Véase: Dinges, John, *The Condor Years: How Pinochet and His Allies Brought Terrorism to Three Continents*, New Press, 2004, 288 p. Alan Angell también ha tratado el tema de la relaciones entre Estados Unidos y Chile durante el régimen militar, poniendo el acento en lo ambivalente de su apoyo, dependiendo principalmente de la política interna norteamericana. Recomendamos especialmente la lectura del capítulo IX. Véase: Angell, Alan, *Chile de Alessandri a Pinochet: en busca de la utopía*, Santiago, Editorial Andrés Bello, 1993.

[153 Un estudio especialmente crítico de las posiciones de El Mercurio durante los primeros años del régimen militar puede encontrarse en: Sunkel, Guillermo, *El Mercurio: 10 años de educación político-ideológica, 1969-1979*, Santiago, Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales, 1983, 149 p. En una interpretación radicalmente distinta, que justamente valoriza los aportes de este periódico a la difusión del liberalismo económico, aunque en el período inmediatamente anterior, se halla la obra de Ángel Soto. Véase: Soto, Ángel, *El Mercurio y la difusión del pensamiento político económico liberal 1955-1970*, Santiago, Centro de Estudios Bicentenario, 2003.](#)

¹⁵⁴ Sobre la libertad de prensa durante el régimen militar, recomendamos la lectura del informe de Human Rights Watch, específicamente en su capítulo sobre los antecedentes históricos de la libertad de prensa en Chile. Human Rights Watch, Los límites de la tolerancia. Libertad de expresión y debate público en Chile, Santiago, LOM Ediciones, 1998, 268 p. Un análisis contemporáneo sobre la concentración de los medios de comunicación en Chile, que además incluye una interesante sección de antecedentes históricos recientes, buscar en: Sunkel, Guillermo & Geoffroy, Esteban, Concentración económica de los medios de comunicación, Santiago, LOM Ediciones, 2001.

¹⁵⁵ Vergara P., Op.cit., p. 109.

¹⁵⁶ Esta frase, que se transformó prácticamente en un eslogan del régimen militar, se le atribuye al general Pinochet, aunque no existe claridad al respecto. Lo claro es que fue utilizada en reiteradas ocasiones para manifestar la voluntad del régimen de terminar las transformaciones socioeconómicas antes de entregar el poder a los civiles.

¹⁵⁷ Declaraciones de Pablo Baraona a la Revista Ercilla del 20 de abril de 1977. Citado por Vergara P., Op.cit., p. 125.

¹⁵⁸ Vergara P., Op.cit., p. 127.

¹⁵⁹ Este es el principio que se encuentra detrás del establecimiento de un Banco Central autónomo en la Constitución de 1980. Lo que se buscaba era separar completamente la política fiscal respecto de la facultad de emitir dinero.

¹⁶⁰ Este principio es clave para comprender la autonomía del campo económico tras el retorno a la democracia en Chile a partir de 1990.

¹⁶¹ Vergara P., Op.cit., p. 129.

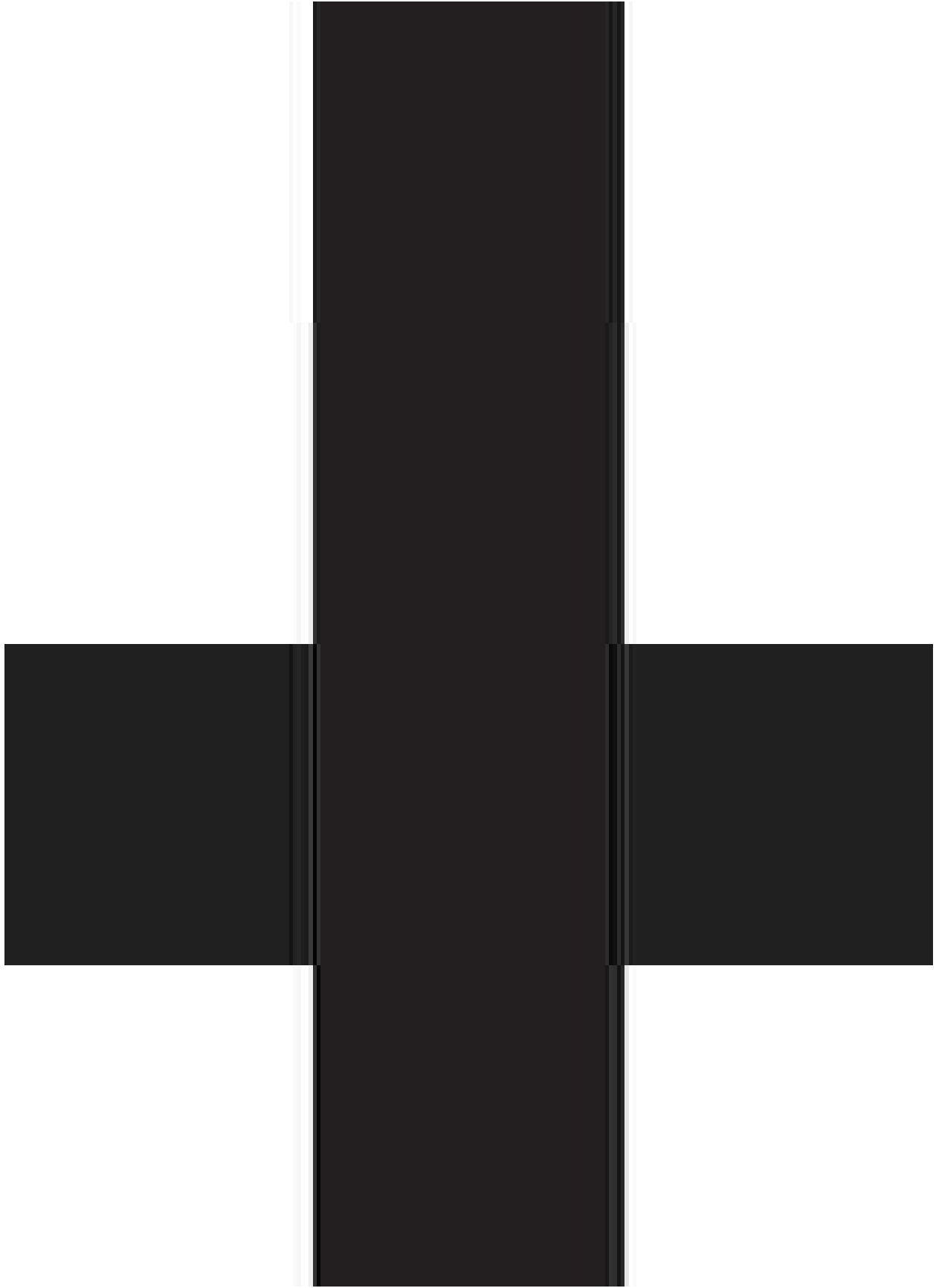
¹⁶² Véase: Lechner, Norbert, “El proyecto neo-conservador y la democracia”, Crítica y utopía, N° 6, 1982. Número digital disponible en la Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe de la Red CLACSO: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/critica/criticayutopia.htm>. Un análisis más contemporáneo del mismo autor y con una mirada retrospectiva, puede encontrarse en: Lechner, Norbert, “Modernización y Democratización: un dilema del desarrollo chileno”, Estudios Públicos, N° 70, 1998, pp. 231-242.

¹⁶³ Ibíd., p. 16.

¹⁶⁴ As part of the campaign to modernize Chile’s institutional and economic structures, organized groups lost most of their past influence (...). To eliminate rigidities in the labor market, the bargaining power of organized workers was removed. To increase savings and develop the capital market, the social security system was replaced by individual, privately administered pension funds. The state reduced its strong regulatory powers and managerial functions by privatizing state firms. Social services were decentralized and transferred to municipalities. Montecinos, Verónica, Economists, Politics and the State: Chile 1958-1994, Op.cit., p. 103.

CAPÍTULO IV

**DE LA CRISIS DEL MONETARISMO ORTODOXO A LA APLICACIÓN
DEL LIBERALISMO PRAGMÁTICO: LA CONSOLIDACIÓN DEL
MODELO SOCIOECONÓMICO CHILENO (1981-1990)**



Esa es la gracia del gobierno militar. Los militares tan disciplinados y jerarquizados ellos, nos obligaron a los civiles a ser libres¹ . Pablo Baraona (economista formado en Chicago y ex ministro de Economía del régimen militar)

Nuestro planteamiento fue que el Estado le diera a cada padre un subsidio directo para que este saliera a comprar la educación para su hijo con toda libertad.

Sergio de Castro² (economista formado en Chicago y ex Ministro de Hacienda del régimen militar)

Las modernizaciones clave

Las reformas económicas estructurales realizadas en Chile entre 1973 y 1989, si bien no resultan tan distintas de aquellas aplicadas en el resto del continente desde mediados de la década de 1980 y 1990, sí constituyen un ejemplo único por haber comenzado tempranamente, con un sesgo ortodoxo y en un contexto de marcado autoritarismo. Esto influyó notablemente en su profundidad y la rapidez con la cual fueron llevadas a cabo, especialmente durante los primeros años. Sin embargo, esto no implicó que se detuvieran con posterioridad. Por el contrario, las llamadas ‘modernizaciones’ continuaron siendo implementadas hasta los últimos días del régimen militar.

El proceso de implementación de estas reformas no ha sido lo suficientemente explorado ni estudiado por la historiografía chilena contemporánea, salvo algunas excepciones³, pues ha predominado una cierta distancia respecto de la historia reciente debido a las divisiones y fervores ideológicos que aún genera el período. Por el contrario, existe una interesante producción bibliográfica proveniente del campo de la economía y la sociología, aunque también —en menor grado— del periodismo y la ciencia política. Esto último, si bien nos provee de interesantes análisis especializados, presenta algunas desventajas para el análisis histórico. En primer lugar, resulta difícil encontrar en ellos una perspectiva temporal de largo plazo, pues tienden a concentrarse únicamente en las reformas y menos en la comparación con otros momentos de la economía chilena del último siglo⁴. En segundo lugar, los análisis de los economistas suelen ser demasiado técnicos tanto en sus explicaciones como en el lenguaje utilizado⁵. Esto nos obliga a reinterpretar buena parte de su trabajo para insertarlo en la lógica de un relato histórico que intenta no abusar del mismo argot técnico cientificista que hemos criticado anteriormente. Por último, y compartiendo el planteamiento de Carlos Huneeus, los análisis económicos suelen dejar de lado el componente político de las reformas impuestas por el régimen militar, cuyo objetivo era redefinir radicalmente las relaciones entre el Estado y la sociedad⁶.

Entre aquellos estudios que abordan el tema y que nos parecen más destacables

por su análisis y claridad, se encuentra el de Ricardo Ffrench-Davis y Bárbara Stallings⁷. Justamente en el capítulo dedicado a las reformas estructurales, Stallings ha identificado cuatro subperíodos que hemos retomado para explicar las modernizaciones. Sin embargo, solo incluiremos los tres primeros, pues se refieren específicamente al período dictatorial.

- El primero (1973-1981) se caracterizó por la aplicación rígida e ideológica de un conjunto de reformas estructurales y políticas macroeconómicas que derivaron en un desempeño altamente volátil, culminando en la crisis cambiaria y bancaria de 1982.
- El segundo (1982-1984) comprende la gestión propia de la crisis y sus repercusiones inmediatas, cuando se revirtieron las reformas previas para encarar la peor crisis económica de Chile desde 1930. Muchas de estas reformas implicaron la intervención del Estado en la economía y el recurso de políticas expansivas. Fue el período de mayor heterodoxia respecto a la doctrina monetarista del equipo económico de Chicago.
- El tercero (1985-1989) marca el retorno a la idea inicial de las reformas pero con una gestión más flexible y pragmática, especialmente respecto del corto plazo y los equilibrios macroeconómicos. Se produjo un repunte económico posterior a la crisis y se retomó el proceso de privatización de las empresas del Estado.

Es interesante destacar que las reformas estructurales del régimen militar suelen ser divididas en dos grupos: las propiamente económicas y aquellas definidas como sociales. Las primeras comenzaron a ser aplicadas poco después del Golpe de Estado de 1973 y fueron evolucionando desde un dogmatismo inicial (1975-1981) hacia un cierto pragmatismo (1985-1989) que se explica, sobre todo, por la grave crisis financiera de 1982. Por su parte, las reformas sociales, debido a su alcance e impacto a largo plazo en la población, solo comenzaron a ser implantadas una vez afianzado el poder del general Pinochet al interior de la Junta de Gobierno y cuando ya había pasado el peor momento de la represión sobre las organizaciones sociales y políticas opositoras. Cuando se habla de reformas sociales, nos referimos principalmente a (1) la reforma laboral, (2) la

reforma del sistema de pensiones y (3) la reforma de la salud. Adicionalmente, nosotros creemos que debe incorporarse también (4) la reforma de la educación.

En el capítulo anterior mencionamos algunos elementos centrales de las tres primeras modernizaciones económicas, pero dejamos explícitamente fuera el tema de las reformas sociales, las cuales trataremos con más detalle en esta sección.

Las reformas económicas

De acuerdo con Stallings, las reformas económicas fueron esencialmente cuatro: (1) la liberalización comercial, (2) la liberalización financiera interna, (3) la apertura de la cuenta de capitales y (4) la privatización de las empresas del Estado.

La reforma comercial

Una de las primeras reformas llevadas a cabo por el régimen militar fue aquella relacionada con el comercio internacional. La mayor crítica que hacían los tecnócratas del régimen era la excesiva protección a la industria nacional, lo cual perjudicaba a las mismas empresas y especialmente a los exportadores, además de fomentar un sistema de rentas cautivas por parte de ciertos grupos privilegiados⁸. Fue así como se eliminaron las barreras no arancelarias y se reformó completamente el sistema de tarifas aduaneras. Las tasas se redujeron dramáticamente hasta llegar a un 10% uniforme en 1979, eliminándose también las cuotas de productos importados. Sin embargo, la tasa de 10%, objetivo principal del equipo económico en esta área, solo se sostuvo hasta la crisis de 1982, oscilando posteriormente entre un 30% en 1985, y el 15% final fijada en 1988. De acuerdo con Stallings, la política cambiaria se utilizó para mantener esta reforma y compensar a los productores por la apertura unilateral al exterior. Sin embargo, lo que se produjo finalmente fue un abultado déficit comercial que estuvo entre las principales causas de la debacle financiera de 1982.

La liberalización financiera

La reforma financiera interna marcó un enorme cambio respecto del modelo ISI de Estado de Compromiso. Hasta antes del Golpe de Estado, el sistema financiero (bancario) era un instrumento utilizado por los diferentes gobiernos para regular la economía. Las tasas de interés eran establecidas por la autoridad y el Estado poseía una parte significativa de la propiedad de los bancos, además de decidir administrativamente sobre los destinos de los créditos. Entre 1973 y 1981, se puso término a las restricciones de intermediación, es decir, a la

capacidad de los bancos de traspasar recursos de sus ahorrantes a otras empresas o particulares mediante préstamos. También se autorizaron los préstamos externos y se levantaron las exigencias al crédito. Además, se permitió la operación de las llamadas ‘financieras’, que operaban como bancos pero prácticamente sin ningún tipo de regulación. A partir de 1975, se liberaron las tasas de interés, quedando los bancos en absoluta libertad para fijar sus tasas de préstamos y depósitos, y solo con la obligación de fijar un máximo convencional en el caso de los empréstitos. La banca fue completamente privatizada a excepción del Banco del Estado, lo cual ayudó al rápido surgimiento de poderosos grupos económicos con intereses cruzados entre empresas e instituciones de crédito⁹. Se abrió paso también, mediante el proceso de privatización, al ingreso y operación de bancos extranjeros sin mayores restricciones. Solo se estableció un sistema de garantía legal a los depósitos de los ahorrantes.

Entre los grupos económicos chilenos más poderosos de los años 1970, se encuentran el grupo Cruzat-Larraín, el grupo BHC (Banco Hipotecario de Chile) y el grupo Claro. Son grupos cuyo crecimiento está vinculado a la primera ronda de privatizaciones emprendida por CORFO a partir de 1974. Los dos primeros llegaron a ser los grupos principales en Chile hacia fines de los años setenta, para posteriormente casi desaparecer hacia mediados de los años ochenta a causa de la crisis financiera de 1982¹⁰.

La liberalización casi total del mercado financiero interno, a partir de 1975, generó un aumento explosivo del crédito, acompañado de un alza de las tasas de interés. Esto último repercutió, hacia fines de 1981, en la insolvencia de muchos bancos y la posterior re-estatización temporal de la banca durante la recesión de 1982. Esta coyuntura impactó de tal forma el sistema financiero que posteriormente se dictó la Ley General de Bancos, en 1986, la cual fortaleció la Superintendencia del rubro y reguló de manera más estricta el funcionamiento de las instituciones financieras y el manejo de sus reservas¹¹.

La apertura de la cuenta de capitales (liberalización financiera internacional)

Este punto se refiere específicamente a uno de los elementos centrales de la apertura unilateral de la economía chilena en un momento donde esta idea no era en absoluto una corriente mayoritaria en América Latina. Posteriormente, lo sería a partir de la segunda mitad de la década de 1980 y especialmente a partir de los años 1990 con el llamado Consenso de Washington¹². Nos referimos a la liberalización financiera internacional, la cual estuvo fuertemente ligada a la reforma financiera interna.

Stallings sostiene que los controles de capitales solían ser un complemento del proteccionismo comercial del período del Estado de Compromiso y del modelo ISI¹³. Estos permitían a los gobiernos regular el monto de divisas que se podían sacar del país, al mismo tiempo que exigía a los exportadores convertir en moneda local los dólares que ingresaban a la economía con tasas inferiores a las del mercado. La inversión extranjera también estaba fuertemente regulada, tanto respecto de los rubros donde estaba permitida así como respecto a la repatriación de capital y las remesas de utilidades. Esta reforma estuvo fuertemente ligada a todo el plan de liberalización económica de los tecnócratas liberales del régimen militar. Sin embargo, su implementación tomó más tiempo de lo previsto, debido al temor de una invasión de capitales foráneos y el riesgo de inflación que esto provocaría. No se debe olvidar que uno de los aspectos centrales de la visión monetarista de la economía es la lucha contra la inflación y el control restrictivo de la masa monetaria.

En una primera fase de la liberalización del mercado de capitales (a partir de 1974), los extranjeros fueron autorizados a ingresar dinero a Chile sin restricciones, otorgándoles un trato igualitario respecto de los chilenos. Se permitió también el ingreso formal de divisas y la repatriación de capital tras un período de tres años¹⁴. La cuenta de capitales quedó plenamente abierta para los extranjeros y los agentes nacionales no bancarios. Stallings agrega que el retiro de Chile del Pacto Andino, en 1976, permitió que los bancos extranjeros pudieran operar en el país. También se permitió a los bancos chilenos intermediar los créditos extranjeros, es decir, utilizarlos para hacer empréstitos locales. A ello se sumó, en 1980, la autorización para que ellos también realizaran préstamos en el exterior. Todas estas reformas intensificaron la entrada de capital extranjero, contribuyendo también a la crisis financiera y la insolvencia bancaria de 1982.

En un segundo momento, la crisis obligó a las autoridades económicas del régimen militar a restringir la circulación de capitales mediante controles

cambiaros, cuotas de compra de divisas y otras medidas destinadas a evitar la fuga masiva de dólares. Las restricciones fueron levantadas gradualmente a partir de 1984-85, hasta que finalmente se decretó la autonomía del Banco Central en 1989, en los últimos momentos del régimen militar y antes de entregar el poder a las nuevas autoridades democráticamente elegidas. Esto produjo un cambio significativo en la manera de concebir y operar la cuenta de capitales, pues de acuerdo con Stallings:

[En ese año \(1989\) se otorgó la autonomía al Banco Central de Chile, y la regulación de las operaciones cambiarias pasó de un sistema donde todas las operaciones estaban prohibidas, a menos que se autorizaran explícitamente, a otro en que todas estaban permitidas, salvo que fuesen prohibidas explícitamente¹⁵.](#)

La privatización de las empresas del Estado

En los últimos meses del gobierno de la Unidad Popular (1973), la mayor parte del aparato productivo chileno estaba concentrado en manos del Estado¹⁶. Esto constituía uno de los focos principales de conflicto al interior de la clase política chilena de la época, pero sobre todo estaba en el centro de la crítica de quienes apoyaron el golpe militar. Desde hacía por lo menos quince años, era uno de los principales argumentos los economistas neoliberales, especialmente de aquellos formados en Chicago, para sostener el desmantelamiento del modelo ISI y del Estado de Compromiso.

Una de las primeras medidas adoptadas por la Junta Militar tras el Golpe de Estado, fue la devolución de las empresas estatizadas a sus antiguos propietarios, especialmente aquellas que habían caído en la categoría de ‘intervenidas’ (cerca de 300) y cuya propiedad aún no se había transferido legalmente al Estado¹⁷. De acuerdo con Stallings, otro grupo de empresas (200 aproximadamente) fueron privatizadas antes de la crisis de 1982, las cuales pertenecían a los sectores industrial, financiero y comercial, y que además habían sido adquiridas por el Estado durante el gobierno de la Unidad Popular.

Muchas empresas fueron adquiridas con créditos —además subsidiados— de instituciones gubernamentales, utilizando como garantía los propios activos de aquéllas. El resultado fue acelerar la formación de conglomerados y aumentar considerablemente la concentración de la propiedad. En múltiples casos, también los bancos fueron adquiridos por los mismos grupos, creando así medios adicionales para incrementar sus haberes¹⁸.

La crisis financiera de 1982 generó un fenómeno de reestatización acelerada, especialmente de los bancos en situación de quiebra y de muchas empresas que estaban endeudadas con aquellos. La insolvencia masiva de la banca, que incluyó la quiebra de dos de las mayores instituciones financieras chilenas, provocó una masiva concentración de los medios de producción en manos del Estado hacia fines de 1983¹⁹.

Una vez terminada la peor fase de la crisis financiera, las autoridades económicas del gobierno militar decidieron —hacia 1984-85— reiniciar el proceso de privatizaciones mediante el mecanismo de subastas públicas. Sin embargo, en esta ocasión, se incluyeron empresas que pertenecían al patrimonio histórico y público de CORFO. Fue así como se vendieron, durante la segunda mitad de la década de 1980, veintisiete empresas de sectores que incluían las telecomunicaciones (CTC y ENTEL)²⁰, la energía (ENDESA), la producción de acero (CAP) y el transporte aéreo (LAN-Chile). Solo permanecieron en manos del Estado, y por presión de los propios militares, tres empresas consideradas, incluso hasta el día de hoy, como estratégicas: CODELCO, ENAP y el Banco del Estado²¹.

Las autoridades económicas del régimen militar decidieron, esta vez, que el proceso se llevara a cabo con mayor seguridad en la solvencia, por lo que no se permitieron ventas a crédito, como sí ocurrió en 1975, sino que solo a través de instrumentos en efectivo. Mantuvieron también la idea de dispersar la propiedad por medio del concepto del ‘capitalismo popular’²², donde se pretendía incluir como accionistas a los propios trabajadores de las empresas privatizadas²³ y a los cotizantes de las administradoras privadas de fondos de pensiones (AFP)²⁴.

El régimen impulsó una diversificación de la propiedad y adoptó controles para

evitar una reconcentración del patrimonio. Pero el llamado ‘capitalismo popular’ no tuvo efectos significativos, y aunque 25.000 trabajadores compraron acciones de sus empresas, excepto en un caso, el control de la propiedad quedó en manos de transnacionales o grupos locales²⁵.

Lo habitual fue que el peso de los trabajadores en la propiedad de estas empresas fuera mínimo, e incluso inexistente cuando sus paquetes accionarios fueron adquiridos por los grandes accionistas, muchos de ellos altos ejecutivos de las mismas empresas recién privatizadas. En términos generales, la propiedad de la mayor parte de estas empresas se concentró en pocas manos²⁶.

Analizaremos con más detalles este segundo proceso de privatizaciones de fines de la década de 1980 más adelante en este capítulo. Nos interesará especialmente centrarnos en la profundidad y rapidez del fenómeno, así como en la supuesta irreversibilidad del mismo y el definitivo desmantelamiento de lo que aún quedaba de la idea de un Estado empresario, cuyo origen y fundamento se encuentran en la crisis económica, social y política de la década de 1930.

Las reformas sociales

Cuando definimos cierto tipo de reformas como sociales, nos referimos a su influencia directa en aquellos ámbitos considerados como parte del concepto de seguridad social y que hasta 1973 eran vistos como derechos resguardados por el Estado²⁷, esto último por su impacto inmediato en la calidad de vida de la población. Principalmente se trata de tres áreas, aunque nosotros hemos decidido incluir también una cuarta. Se trata de (1) la legislación laboral, (2) el sistema de pensiones, (3) la salud y (4) la educación. En definitiva, las reformas llevadas a cabo en estos campos son también económicas, y en consonancia con las reformas descritas anteriormente. Sin embargo, se las ha tratado separadamente debido a su impacto de largo plazo en las personas y a la novedad que representaron, incluso a nivel internacional, en una época donde aún dominaba internacionalmente el paradigma del Estado de Bienestar. El cambio sociocultural mayor se produjo al sustituir la idea de ‘derecho social’ por el concepto de ‘servicio’, al cual se le asigna un precio de mercado y puede ser provisto tanto por agentes públicos como privados.

Al incluirse una orientación de mercado, el Estado fue obligado a retirarse de muchas funciones que le habían sido asignadas desde la década de 1930. Tanto las reformas económicas como las sociales estaban íntimamente ligadas, pues, como bien dice Stallings²⁸, la reforma laboral sirvió para aumentar la competitividad de las empresas, así como la reforma de pensiones estuvo estrechamente vinculada a los cambios realizados en el sistema financiero. A esto se suma el hecho de haber creado nuevos mercados para cada una de las áreas intervenidas, los cuales han tenido una profunda influencia en dar forma a lo que se ha denominado posteriormente como el ‘modelo económico chileno’.

La reforma laboral

Desde el momento del Golpe de Estado, el control sobre los sindicatos y la represión sobre muchos de sus dirigentes fueron una constante por parte de las nuevas autoridades, aunque sin haber alterado el fondo de la legislación laboral vigente hasta 1973. Esta protegía a los trabajadores imponiendo fuertes costos a los despidos, permitiendo las huelgas indefinidas y prohibiendo el reemplazo de

trabajadores durante su desarrollo. En los hechos, tras el derrocamiento de la Unidad Popular, los derechos de los trabajadores fueron reducidos al mínimo, especialmente respecto de la negociación colectiva y el derecho a huelga. Esta situación fue particularmente represiva durante el período del tratamiento de shock (1975-1977), cuando hubo aumentos masivos de despidos sin justificación, utilizando la fórmula legal de ‘necesidades de la empresa’, a lo cual se sumaron las dificultades prácticas e institucionales que encontraron los trabajadores para exigir indemnizaciones y entablar juicios en contra de sus empleadores. En la práctica, el mundo laboral y sindical se vio sometido a una política de la amenaza y de sumisión con respecto al sector patronal.

La verdadera reforma laboral²⁹ del régimen militar se llevó a cabo el año 1979, cuando el gobierno implementó el denominado Plan Laboral, cuyo objetivo era, en palabras de sus creadores, ‘flexibilizar’ el mercado del trabajo³⁰. Entre las medidas legislativas impuestas, destacó la facultad de los empleadores para despedir trabajadores sin ninguna expresión de causa, pero sujeta al pago de una indemnización vinculada a los años trabajados en la empresa.

Si bien la presión internacional, especialmente de los Estados Unidos y la AFL-CIO³¹, había obligado al régimen a implementar esta reforma supuestamente en favor de los trabajadores, finalmente, lo que se hizo fue debilitar sus instancias de asociación y negociación. Se restableció la negociación colectiva pero restringiendo al máximo el papel de los sindicatos. La afiliación a los mismos pasó a ser voluntaria, al mismo tiempo que se les prohibió negociar por rama o rubro, permitiéndoles solo hacerlo a nivel de cada empresa. Las huelgas se limitaron a sesenta días, a partir de los cuales el contrato de trabajo quedaba automáticamente anulado, perdiéndose con ello todo derecho a la indemnización por despido. También se autorizó el reemplazo de los trabajadores en huelga mediante la contratación de rompe-huelgas o strike-breakers. En la nueva óptica de los reformadores del régimen militar, la libertad sindical y la negociación colectiva centrada en la empresa y en el mercado, serían los pilares de la nueva legislación. De acuerdo con Patricia Olave, lo central para ellos era evitar que el sindicalismo rebasara lo político, amenazando el orden social y económico³².

La modernización laboral iba a ser una parte clave de un modelo económico y social fundado en la libertad de las personas. El Presidente Pinochet confió la construcción de este modelo a un grupo de profesionales, la mayoría de ellos

economistas, que compartían una misma confianza en el libre mercado. Muchos nos sentíamos unidos además por una experiencia común en la Escuela de Economía de la Universidad Católica. Fue la influencia de este equipo liberal la que hizo la diferencia entre lo que pudo haber sido un gobierno militar latinoamericano más, como tantos que entraron sin pena ni gloria a la historia, y un régimen autoritario que paradójicamente utilizó su inmensa concentración de poder político para producir la mayor desconcentración de poder económico y social jamás ocurrida en Chile (José Piñera)³³.

El papel del gobierno en los reajustes de salarios, una cuestión esencial del modelo de Estado de Compromiso, desapareció casi por completo con el nuevo esquema. El poder ejecutivo solo siguió participando en la negociación para las remuneraciones del sector público y en la fijación del salario mínimo. Las restricciones a la creación de sindicatos en empresas con menos de cincuenta trabajadores, disminuyeron radicalmente el número y la influencia de aquellos. A esto se sumó el hecho de que los acuerdos alcanzados en la negociación colectiva solo regían para los empleados que hubiesen suscrito el acuerdo, limitando fuertemente los beneficios y creando divisiones entre los trabajadores. Al permitirse la formación de varios sindicatos en una misma empresa, estos también perdieron poder de negociación frente a los patrones.

A pesar de los avances en el segundo quinquenio de los ochenta, los sindicatos al fin del régimen autoritario solamente representaron al 11% de la fuerza de trabajo, menos que la mitad del porcentaje bajo Allende. Además, los sindicatos llegaron a ser más pequeños, cayendo desde un promedio de miembros en cada sindicato de 140 en 1972 a 71 en 1989³⁴.

Finalmente, a partir de 1982 se eliminó la indexación de los salarios del sector privado y la igualación de los reajustes del sector público respecto de las empresas privadas. Con ello los salarios quedaron al libre juego de las fuerzas del mercado y de la decisión de las propias empresas. El Plan Laboral terminó también con el sistema de negociación tripartito (trabajadores, gobierno y empresarios) que existía desde el antiguo Código del Trabajo de 1931³⁵, donde el

Estado impulsó la existencia de inspectores fiscales que balanceaban el débil peso de los trabajadores a través de la protección del poder público. En su reemplazo, los nuevos decretos crearon un sistema en el que los inspectores estatales eran débiles y con poca capacidad de intervención³⁶, y donde además los tribunales del trabajo desaparecieron completamente de la legislación chilena³⁷.

En general, el plan laboral no fue un código unificado, sino un conjunto de decretos leyes proclamados a lo largo de cuatro años. Se trató de un esfuerzo sostenido por ajustar el mercado del trabajo y las relaciones laborales dentro del marco de un régimen de libre mercado flexibilizado. Fue también un proyecto destinado a subordinar a los trabajadores y sus organizaciones bajo el argumento del ajuste a las necesidades de una economía competitiva orientada hacia el exterior.

De acuerdo con Peter Winn, el plan laboral estaba destinado a favorecer a las empresas en la rebaja de los costos de la mano de obra y aumentar la flexibilidad mediante el despido y la fácil contratación de personas³⁸. Junto con esto, se debilitó el poder de las organizaciones sindicales, impidiéndoles defender correctamente los intereses de sus miembros. El objetivo principal de los tecnócratas del régimen militar fue crear un libre mercado del trabajo en consonancia con las reformas económicas que se estaban llevando a cabo en el país. En términos prácticos, esto dejó a los trabajadores absolutamente subordinados a las fuerzas del mercado y al control de sus empleadores.

La reforma del sistema de pensiones

Probablemente, este sea uno de los aspectos en los cuales la transformación económica de Chile ha generado más debates y publicaciones, a nivel mundial, en los últimos treinta años. El régimen militar aprovechó la coyuntura favorable de principios de la década de 1980 para instaurar un nuevo y revolucionario sistema de pensiones basado únicamente en la capitalización individual de los cotizantes³⁹. Si bien ya existían en Estados Unidos modelos similares, no constituían el sistema de base, como sí se estableció en Chile.

Este modelo de contribuciones definidas se consolida como sistema

complementario en diversos países desarrollados. De esta manera, a inicio del año 1980, cuando es promulgado el DL 3500 estableciendo las AFP⁴⁰, en el mundo ya existían fondos de pensión de cotizaciones definidas, por lo que el modelo chileno como tal no es original. Sin embargo, ningún país en el mundo lo había utilizado como régimen de base, y esta puede ser su única originalidad. Debemos considerar, a su vez, que la implantación de este nuevo régimen se logra gracias a un período histórico en que no existía un contrapeso político y donde, además, reestructuró nuestra economía con un modelo experimental⁴¹.

Con ello, se ponía fin a un principio vigente en la mayor parte de los modelos de pensiones existentes en el mundo, es decir, la idea de un sistema solidario por repartición, en el cual las generaciones de trabajadores activos financian el pago de las pensiones de las generaciones mayores ya retiradas. En este sentido, Chile fue pionero a nivel mundial en el cambio de este paradigma y en la privatización del sistema de pensiones. Sin embargo, resulta evidente que una transformación de esta envergadura necesitó de una desmovilización completa de los distintos actores sociales, la cual se dio en el contexto de una dictadura militar, donde la represión jugó un papel no menor en contener cualquier atisbo de oposición.

El nuevo sistema de pensiones, cuya concepción refleja los principios más puros del liberalismo económico, fue impuesto a partir de 1980, bajo el supuesto de que el antiguo era incapaz de sostenerse en el tiempo y de pagar las jubilaciones prometidas sin generar un enorme déficit fiscal⁴². Las reformas perseguían aumentar las jubilaciones en función de los retornos de mercado, eliminar las pensiones por antigüedad y para grupos especiales, además de establecer las cotizaciones según las remuneraciones reales percibidas por los trabajadores durante toda su vida laboral⁴³. Se pretendió también incorporar mecanismos de ajuste según los cambios demográficos de la población y disminuir las presiones políticas sobre el uso de los fondos mediante la privatización de su gestión. Pero lo central fue terminar con el sistema de reparto y reemplazarlo por uno de capitalización individual, en el cual cada trabajador cotiza en una cuenta obligatoria personal, la cual supuestamente financiará su pensión gracias a las inversiones realizadas por la empresa que administra sus fondos. A este núcleo central del modelo, se le agregó un componente fiscal para financiar las pensiones de los discapacitados, indigentes, y para aquellas personas que no alcanzan a completar la pensión mínima legal⁴⁴. Como bien lo definió Hernán Büchi, ex-Ministro de Hacienda del régimen militar, y gran defensor del nuevo

sistema:

El nuevo sistema de pensiones, cuyo valor básico es la libertad, está fundado en la responsabilidad individual de cada trabajador, reflejaba en su propio esfuerzo de ahorro y en su cuenta individual, y en la administración privada de los fondos por parte de entidades administradores debidamente reguladas, que son la AFP... Lo interesante de la reforma es que, aparte de introducir eficiencia, racionalidad y justicia en un área muy sensible al bienestar de una sociedad, también creaba un mercado privado de capitales de proporciones⁴⁵.

La gestión de las cuentas individuales de cada trabajador se dejó en manos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), de propiedad privada, y a quienes los nuevos trabajadores debieron entregar sus cotizaciones de manera obligatoria a partir del momento en que la reforma se puso en marcha. Solo los antiguos cotizantes pudieron elegir, a partir de 1981, entre permanecer en el antiguo sistema de reparto o cambiarse al nuevo⁴⁶. El gobierno se reservó un papel importante en la regulación del nuevo mercado previsional, así como en la cobertura global del sistema para aquellos grupos más desposeídos. El Estado asumió, y financia aún en la actualidad, las prestaciones de quienes permanecieron en el sistema antiguo, el cual está destinado a desaparecer, pues no se aceptaron nuevos cotizantes una vez iniciada la reforma. El costo total asumido por el Estado por este concepto, entre 1981 y 1997, ha sido estimado aproximadamente en un 126% del PIB chileno⁴⁷.

En teoría, la fortaleza del nuevo sistema radicaba en la competencia de mercado entre las distintas AFP para hacer rendir de mejor forma los fondos creados a partir de las cotizaciones obligatorias de los trabajadores. Estas constituyen, en general, un 10% del salario, que además incluyen un ítem que capta cada AFP como comisión de gestión de los fondos (2%) y un porcentaje adicional destinado a un seguro de invalidez (1%), aproximadamente un 13% de las remuneraciones de los asalariados chilenos. En teoría, el trabajador podría cambiarse de AFP sin restricción alguna, moviendo sus fondos a voluntad de una administradora a otra. El individuo se convertiría, en principio, en un pequeño inversionista de su propio capital, el cual se movería con libertad de acuerdo con los balances y rentabilidades publicadas por las diferentes administradoras de

fondos de pensiones⁴⁸. Para ello, cada trabajador debía estar informado de los resultados de los movimientos realizados por su AFP en los distintos instrumentos de inversión disponibles, y especialmente en el mercado accionario local. En definitiva, los creadores del sistema apostaron por crear una identificación de los asalariados con respecto al modelo de libre mercado a partir de la gestión de los fondos de pensiones. Fue así que se comenzó a hablar también de una nueva modalidad de ‘capitalismo popular’⁴⁹.

Desde su puesta en marcha, en 1981, el sistema ha necesitado diversas reformas, especialmente respecto de las posibilidades de gestión e inversión de los fondos por parte de las AFP. Sin embargo, los pilares del sistema continúan siendo los mismos que han sido descritos anteriormente. La principal crítica al sistema se refiere a su baja cobertura poblacional y a los costos de administración que obtienen las AFP a partir de las cotizaciones de los trabajadores. Ambos elementos constituyen el principal foco de problemas de un modelo que en su momento fue inédito en el mundo, y que actualmente ha sido exportado a diversos países de América Latina y Europa del Este, e incluso es estudiado en las diversas reformas de pensiones que intentan aplicar algunos países del primer mundo.

El principal problema del sistema AFP consiste en que alrededor de un 40% de los trabajadores chilenos están afiliados al sistema solo desde el punto de vista formal, puesto que, en la práctica, no cotizan en el mismo ni en ninguna otra parte. Puesto que esta situación se presenta con mayor frecuencia en los segmentos más pobres de la población, ello significa, ni más ni menos, que por lo menos uno de cada dos de los trabajadores chilenos de menores ingresos simplemente no participa de los beneficios, reales o supuestos, del tan aclamado sistema de AFP⁵⁰.

Un elemento importante a destacar es que esta reforma previsional chilena generó un inmenso y activo mercado de capitales, el cual fue aprovechado por los grupos económicos locales para tomar el control de las grandes empresas del Estado que fueron privatizadas a partir de la segunda mitad de la década de 1980⁵¹. La estructura de la propiedad en Chile se vio profundamente alterada por la irrupción de las AFP y los gigantescos fondos que comenzaron a gestionar en

este mismo período. A esto se ha sumado la fuerte integración entre la banca y las AFP, lo cual ha aumentado significativamente la brecha de desigualdad en Chile al generar grandes polos de concentración de la riqueza como pocas veces se había visto en el país⁵².

Por otra parte, el enorme ahorro previsional obligatorio generado por las AFP ha servido para elevar las tasas de ahorro nacional y mantener una enorme cantidad de capital de inversión tanto en el país como también crecientemente en proyectos en el extranjero. Como advierte José Pablo Arellano, si bien el modelo chileno de fondos de pensiones es bastante criticable, le asigna al menos una importante cualidad: su adecuación y constante adaptación a la situación económica del país, lo cual se ha ido demostrando en las constantes reformas que se han ido haciendo al sistema, aunque aún sin lograr superar el escollo de la cobertura y del costo para los usuarios y para el Estado, quien debe cubrir la enorme cantidad de pensiones mínimas, subvencionando indirectamente al sistema privado de AFP.

Más allá de los análisis macroeconómicos y de los beneficios provistos al mercado de capitales, el gran desafío del sistema de pensiones chilenos es probar su capacidad de hacer aquello para lo cual fue diseñado: es decir, pagar las pensiones prometidas. Esto se verá al momento en que la primera generación importante de trabajadores chilenos se jubile con el nuevo sistema, lo cual se ha estimado ocurrirá no antes del año 2020.

La reforma de la salud

La transformación del sistema de salud chileno, a partir de la década de 1980, no ha gozado de la publicidad ni tampoco de los supuestos éxitos del sistema de pensiones de capitalización individual⁵³. Sin embargo, esta reforma alteró de manera profunda la estructura de la atención médica en Chile⁵⁴. También nos encontramos aquí con un cambio ideológico proveniente de uno de los principios defendidos por los economistas ultraliberales: sustituir un derecho social adquirido por una prestación de servicios dentro del mercado⁵⁵. El nuevo sistema fue creado con un pilar solidario gestionado por el sistema público y otro privado provisto por empresas aseguradoras. Sin embargo, el primero, al no contar con barreras de exclusión, ha asumido los inmensos costos de atender a la población de menores ingresos y con mayores problemas de salud. Ello ha

permitido que los prestadores privados de servicios de salud, quienes sí pueden discriminar entre sus asegurados, hayan podido incorporar a los grupos sociales de más altos ingresos y con mejores índices de salud.

El modelo sanitario creado por el régimen militar permitió orientar las cotizaciones de los trabajadores hacia dos sistemas de seguros completamente distintos. Los trabajadores pueden elegir el seguro público o los seguros de las empresas privadas. Sin embargo, los indigentes y las personas de menores recursos, que no alcanzaban a pagar una cotización mensual, fueron inmediatamente cubiertos por el sistema estatal, recibiendo atención gratuita tanto en los centros de atención primaria municipales (policlínicos) como en los hospitales públicos, aunque en condiciones humanas y materiales muy precarias. Esto implica que el elemento solidario se da solo al interior del sistema público, entre quienes perciben menores salarios o ninguno, y no así respecto del privado, que posee sus propias instalaciones y redes de prestadores de servicios. En definitiva, el sistema público cubre aquella porción de la población que no representa un mercado interesante para el sistema privado, sin que este último asuma ningún costo por este subsidio indirecto. Los trabajadores que cotizan en el sistema público subvencionan a los indigentes, pero no así quienes cotizan en el sistema privado.

Antes de la reforma, el sector salud era administrado casi exclusivamente por el Estado, quien financiaba la atención médica para la gran mayoría de la población⁵⁶. Quedaban excluidos voluntariamente quienes tenían los medios económicos para atenderse privadamente. El sistema público contaba con una enorme red de hospitales y servicios de atención primaria coordinados a través del Servicio Nacional de Salud (SNS)⁵⁷, el cual dependía del Ministerio de Salud. El sector privado cubría principalmente a los sectores de más altos ingresos, principalmente particulares no adscritos a ningún sistema previsional. El sistema, en general, se financiaba mediante el Servicio Médico Nacional de Empleados (SERMENA), quien captaba los aportes provisionales de los empleados tanto del aparato público como de las distintas cajas de previsión privadas, además del porcentaje de pago en efectivo que cada afiliado realizaba al momento de recibir una atención de salud (copago). En este sentido, se trataba de un sistema complementario, que contaba con un elemento importante de solidaridad entre los diferentes grupos sociales.

Durante la segunda mitad de la década de 1970, el régimen militar ordenó separar administrativamente la atención primaria de salud del resto del sistema,

dejándola en manos de los municipios y aislándola del SNS. De acuerdo con Bárbara Stallings⁵⁸, esta llamada ‘municipalización’⁵⁹ de la salud primaria fue la primera etapa de una reforma cuya mayor transformación se produjo en 1981, cuando se autorizó la participación del sector privado tanto en el financiamiento como en la prestación de la atención médica⁶⁰. Fue así como se crearon las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE), las cuales entraron a competir con el recién creado Fondo Nacional de Salud (FONASA), de carácter solidario, el cual continuaría dependiendo del Estado. Fue así como se creó un sistema híbrido, con una rama privada y otra pública, las cuales deben competir entre sí por los afiliados y la captación de las cotizaciones mensuales de los trabajadores. El sistema también tendió a disminuir el aporte estatal en favor de los aportes directos de las cotizaciones de los trabajadores, por lo que estas se aumentaron de un 4% en el modelo antiguo, a un 7% en el nuevo.

Estas reformas estructurales de la salud fueron acompañadas de cambios importantes en las fuentes de financiamiento del sector que derivaron en una reducción del aporte fiscal y un incremento del financiamiento a través de cotizaciones y copagos. Lo anterior, sumado al ambiente económico recesivo que se vivió a inicios de dicha década (1980), y la menor disponibilidad de recursos humanos, físicos y de operación (insumos y medicamentos) en el sistema público de salud, deterioró el acceso de la población de ingresos medios y bajos a la atención de salud⁶¹.

En definitiva, dentro de la mentalidad prevaleciente entre los tecnócratas liberales del régimen militar, aquí también se creó un nuevo mercado con incentivos a la competencia, donde el concepto de ciudadano de derechos sociales fue alterado por la idea de usuarios y prestaciones. El sistema fue pensado para que las personas decidieran entregar su cotización mensual al sistema público (FONASA), o a las aseguradoras privadas (ISAPRES). Estas últimas operan según el criterio de solvencia y ‘siniestralidad’ individual de cada cotizante, lo cual significa que el monto a pagar y la cobertura de salud dependen de la edad de la persona y de los diversos riesgos asociados a su condición laboral e historial médico⁶². Con ello se logró separar a aquellos que les era posible pagar una buena atención médica, de quienes no son capaces de hacerlo, rompiendo así el pilar solidario básico del modelo anterior del Estado de

Compromiso.

Fuentes de financiamiento de la salud 1974-1989

Fuente de recursos	1974 %	1980 %	1989 %	Variación 1989-1974 %
Estado	68	55	35	-49
Contribuciones	16	32	45	180
Copagos	10	13	15	50
Otros	6	-	5	-17
Total	100	100	100	-

Fuente: Ministerio de Salud de Chile (1992).

La existencia de un seguro solidario como el FONASA, que actúa como prestamista de última instancia unido a la capacidad de la ISAPRE para discriminar riesgos, ha llevado a que en el modelo chileno el acceso a los servicios de salud esté determinado por los niveles de ingreso de la población y la probabilidad de enfermedad de las personas. En este contexto, el FONASA tiende a concentrar a las personas de menores ingresos y de mayores riesgos médicos, mientras las ISAPRES atraen a las personas de altos ingresos y bajos riesgos. Esta segmentación de la población, que se produce por el funcionamiento de la mezcla pública-privada vigente en Chile, impacta negativamente la equidad del sistema⁶³.

Uno de los problemas principales del sistema radica en la diferencia en la oferta de cobertura de los servicios de salud entre el sistema público y el privado, y el traspaso indirecto de fondos que hace el primero en beneficio del segundo⁶⁴. A esto se agrega el hecho que las ISAPRES pueden alterar unilateralmente los contratos de salud y su precio, pues estos tienen una vigencia limitada⁶⁵. Las diferencias de precio y de cobertura en los planes de salud resultan enormes, dependiendo de los riesgos médicos (preexistencias) asociados a cada persona, lo que incluso les permite rechazar a determinados individuos por su alta tasa de riesgo⁶⁶.

Resucitando la vieja idea conservadora de que solamente los pobres e indigentes debían recibir protección social del Estado, el acceso a la asistencia médica quedó así estratificado: (a) los segmentos con mayores rendimientos deben comprar planes de salud en el mercado según la opción individual; (b) los sectores medios pueden optar por el régimen de libre elección del FONASA, con copagos variables según el nivel del profesional; (c) los estratos de bajas rentas son atendidos en los servicios estatales de forma gratuita mediante comprobante de la condición de pobreza, pagando, en caso contrario, un porcentaje de acuerdo a los ingresos⁶⁷.

Al finalizar el régimen militar, el sistema ISAPRE no se consolidaba como una alternativa real de salud para la mayor parte de los chilenos, pues hacia el año 1990 las tasas de afiliación del sistema privado no alcanzaban a un 1/4 de la población, permaneciendo la mayor parte todavía en FONASA. Por el contrario, el sistema privado, que opera en términos de seguros de riesgo individual, contribuyó a acentuar la segmentación y discriminación del sistema de salud chileno, eliminando el componente solidario del antiguo modelo y creando, además, una enorme dicotomía y diferenciación en la calidad de la atención entre el sector público y el privado. De acuerdo con quienes han estudiado el tema en profundidad, la eliminación de la selección por riesgo solo podrá hacerse realidad en la medida en que se avance hacia sistemas de seguros universales e integrales, es decir, que cubran a todos los ciudadanos y a lo largo de todo su ciclo vital⁶⁸.

La reforma educacional

La política educacional implementada por el régimen militar estuvo inspirada en los mismos principios de las reformas recién analizadas. En otras palabras, su objetivo fue la instauración de mecanismos de mercado orientados a terminar con la concepción de derechos sociales adquiridos y reemplazarlos por servicios provistos principalmente por agentes privados.

Los cambios propuestos también tenían un segundo componente tan importante como el primero: desmovilizar a los sectores sociales que se habían visto beneficiados con las políticas del Estado Desarrollista, especialmente aquellos relacionados con la educación. En este caso, se trataba de las organizaciones estudiantiles y de profesores. Estas habían alcanzado un alto grado de movilización social y política a partir de la Reforma Educacional de 1965⁶⁹, puesta en marcha por el gobierno demócratacristiano de Eduardo Frei Montalva (1964-1970) y continuada por el gobierno socialista de Salvador Allende (1970-1973)⁷⁰. Esta última reforma había aumentado considerablemente los años de estudio obligatorio (de seis a ocho) y la cobertura a nivel de la población, aumentando de un 35% a un 48% entre los habitantes de entre uno y veinticuatro años durante el período 1964-1974. Un elemento crucial durante los años del gobierno de la Unidad Popular (1970-1973) fue el alto grado de movilización y

politización de los actores involucrados en la educación, sobre todo en la gestión de los establecimientos educacionales. Ello estaba enmarcado dentro de un contexto de reformas estructurales y un alto grado de participación política de las organizaciones estudiantiles, especialmente secundarias y universitarias⁷¹.

En un primer momento y hasta aproximadamente el año 1975, el régimen militar se orientó principalmente a controlar el sistema educativo y a reprimir a los grupos que estimaba políticamente peligrosos, teniendo como principio la idea de la seguridad interior. Dentro de esta perspectiva, los establecimientos educacionales quedaron bajo la tutela del Ministerio del Interior y de las autoridades militares, pues se consideró al espacio educativo como un posible foco de infiltración marxista; a su vez, los gremios y asociaciones de maestros, bajo el control de una organización gremial única: el Colegio de Profesores, organizado de manera corporativista y con autoridades designadas por el gobierno militar, al mismo tiempo que fueron prohibidas y disueltas las federaciones de estudiantes de la enseñanza secundaria y universitaria, con excepción de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), cuya federación estudiantil se encontraba en manos del movimiento conservador gremialista⁷².

Una vez finalizada la etapa de control y disolución de las organizaciones sociales ligadas a la educación, el régimen comenzó a poner en marcha el proceso de ‘desestatización’ y reorganización del sistema educativo, según una estricta lógica y racionalidad de mercado. De acuerdo con el análisis de Carlos Ruiz, dos fueron los objetivos principales buscados con estas reformas⁷³. En primer lugar, se trató de acelerar la desarticulación del Estado Social Desarrollista, mediante una disminución drástica del gasto social, especialmente en educación, el cual representaba hasta aquel momento cerca de un 20% del presupuesto fiscal. Esto estuvo en plena coincidencia con la aplicación del tratamiento de shock a la economía chilena (ver Capítulo III), así como el desmantelamiento del modelo ISI de sustitución de importaciones, el cual orientaba la educación hacia la formación de trabajadores calificados para la producción industrial interna. En segundo lugar, la reforma apuntó a la disciplina de los actores sociales participantes del proceso educativo, con un énfasis especial en las organizaciones de docentes y de estudiantes universitarios. Para ello fue necesario separar al profesorado de una función social y cívica propia de un Estado inclusivo, para reorientarla hacia la prestación de servicios dentro de la lógica mercantil.

La concepción de la educación como una inversión de capital humano que recae

principalmente en las familias y no en el Estado, marcó las distintas medidas adoptadas por el régimen militar a partir de 1979, y que culminaron con la Reforma Educacional de 1981. Las escuelas públicas comenzaron entonces a ser privatizadas o bien separadas de la tutela estatal directa al ser entregadas a los municipios. Con ello se logró que la dependencia laboral del profesorado dejara de estar en manos del Estado y pasara directamente a manos de administradores municipales o definitivamente privados. De esta manera se fortaleció la disciplina del profesorado en tanto factor económico únicamente prestador de servicios, perdiendo gran parte de su fuerza organizacional fruto de sus acciones colectivas y gremiales.

Otro elemento clave de la reforma fue el énfasis puesto en la obligatoriedad y gratuidad de la educación básica (primeros ocho años de estudio), entregando con ello solo un mínimo de conocimientos culturales y capacidades productivas a la población, pero dejando los estudios secundarios, sobre todo los superiores, como una responsabilidad económica propia de las familias. Ello significó que estos dos niveles educativos dejaron de estar al alcance de todos los ciudadanos, quedando así sujetos únicamente a la capacidad de pago de cada individuo.

Esto significa también una ruptura con la idea de la contribución de la educación a la formación para la ciudadanía, lo que ha sido tradicionalmente una función de la educación secundaria. Mas, en general, implica el abandono del principio de igualdad de oportunidades, cuyo rango de aplicación se agota en la educación básica. Este abandono del criterio de igualdad de oportunidades educativas, y del compromiso estatal en apoyarla, significa en realidad un refuerzo a la diferenciación y a la selección fundada en criterios económicos⁷⁴.

Nuevamente, como en el resto de las reformas antes analizadas, aparece el concepto de 'subsidiariedad' como un elemento central de la concepción filosófica de los ideólogos del régimen militar. Como bien lo menciona Ruiz, de lo que se trató fue de encargar al Estado solo aquellas tareas que las organizaciones intermedias autónomas (familias, gremios, iglesias, organizaciones comunitarias) no fueran capaces de proveer por sí mismas. En este caso, la familia fue designada como el órgano intermedio de mayor importancia, al cual le corresponde fundamentalmente la responsabilidad y el

costo de educar a los niños. El Estado quedó únicamente facultado para garantizar este derecho básico mediante el respeto de la libertad de cada familia para elegir la educación de sus hijos. De esta manera, son los particulares quienes deciden la provisión de educación, pero al mismo tiempo se creó un mercado para que estos mismos lo ofrezcan como servicio. El rol del Estado como ente formador de ciudadanos e igualador de oportunidades desapareció, siendo reemplazado por otro en el cual el Estado se convierte en un mero regulador del juego entre oferentes y demandantes de servicios educativos.

Lo que se observa es una curiosa mezcla de conceptos tomados de un catolicismo conservador inspirado en las luchas ideológicas por la libertad de enseñanza durante el siglo XIX chileno, con las ideas del economista neoclásico Milton Friedman⁷⁵. Este último defendió durante años la idea de instaurar un sistema de vouchers para que las familias eligiesen las escuelas con plena libertad dentro de un mercado absolutamente autorregulado⁷⁶.

Teniendo estas ideas como telón de fondo, el régimen militar inició —a partir de 1979— el desmantelamiento programado del modelo anterior de Estado Docente y de educación pública para la formación de ciudadanos⁷⁷. Uno de los objetivos clave fue desarticular la identidad laboral de los profesores, para lo cual las escuelas públicas fueron dejadas en manos de las municipalidades, terminando con el sistema de plantas de funcionarios dependientes del Estado central. De esta manera, se desmovilizó y despolitizó al gremio, pues sus miembros fueron atomizados y en la mayoría de los casos precarizados, limitando de paso sus futuras posibilidades de reorganización y coordinación.

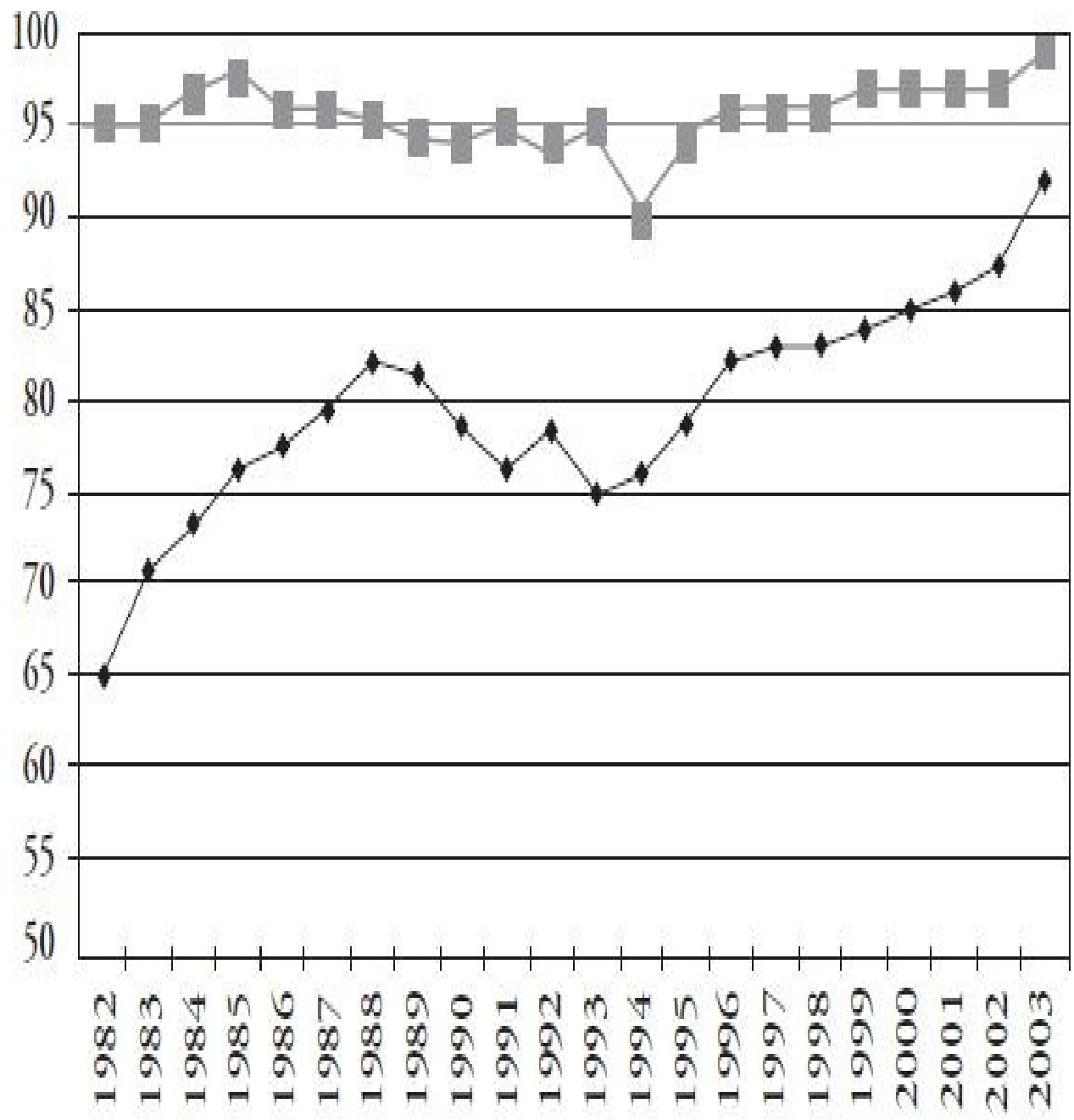
De acuerdo con Ruiz, la idea original de Milton Friedman fue parcialmente modificada con el objeto de crear un mercado educativo adaptado a la realidad económica de Chile. Para ello, se creó un mecanismo de subvenciones destinado a la educación básica y secundaria municipalizada, así como un sistema de créditos para el sector universitario y técnico profesional.

Las subvenciones se otorgan a los establecimientos primarios y secundarios en función de la demanda, es decir, del número de alumnos. Naturalmente, la contratación, el despido y el horario asignado a los profesores dependen integralmente también de la demanda, lo que significa que los directores de los establecimientos deben poder contar con facultades amplias para contrataciones

y despidos. En verdad las organizaciones de los profesores, la propiedad de los cargos y los reglamentos de carrera docente son percibidos en este modelo como los enemigos fundamentales del mercado libre en educación. La eficiencia económica es el objetivo central y se supone que la competencia entre los establecimientos subvencionados por los alumnos es la garantía de calidad⁷⁸.

De acuerdo con lo expresado por los tecnócratas del régimen militar, los objetivos manifiestos de la reforma educacional de 1979-1981 fueron cuatro. En primer lugar, se buscó la descentralización y el aumento de la cobertura del sistema a través de la transferencia de los establecimientos educacionales públicos desde el Ministerio de Educación a las municipalidades, lo cual concluyó solamente en 1987⁷⁹. En segundo lugar, se estableció un sistema de subvención estatal por alumno (tipo voucher), que fue acompañado por incentivos para el ingreso de proveedores privados al sistema. En tercer lugar, se puso en marcha un sistema de mediciones y clasificación estandarizadas para todos los establecimientos escolares del país, lo cual incluyó las pruebas PERT y SIMCE⁸⁰. Por último, se establecieron cambios sustanciales en la regulación y formación de los profesores, a lo que se sumaron las restricciones asociativas anteriormente descritas.

Cobertura en Educación Básica y Media 1982-2001 (en %)



■ Básica

◆ Media

Fuente: Mizala y Romaguera. Datos obtenidos del Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC) 2003.

La creación de este nuevo mercado o semimercado educativo buscó no solo la desarticulación del vínculo entre el Estado, el sistema educacional y la formación de ciudadanos en un plano de igualdad de oportunidades, sino que también intentó instalar la eficiencia económica a través de la competencia entre administradores públicos y privados de escuelas ('sostenedores'). De acuerdo con Alejandra Mizala, lo importante era que las fuerzas del mercado operaran por sí solas autorregulando el mercado, y mejorando al mismo tiempo la calidad de la educación, a lo que se sumaba el hecho de aumentar el control del proceso educativo por parte de los padres al acercar la administración a la unidad administrativa más cercana a la población: la municipalidad.

El golpe más duro de la reforma lo recibieron, sin duda, los profesores, quienes dejaron de ser empleados públicos y comenzaron a regirse por el Código del Trabajo, válido para el sector privado sin cláusulas especiales ni protección respecto de sus salarios⁸¹. Esto último afectó gravemente sus posibilidades de negociar colectivamente mejores condiciones laborales, además de anular su antiguo estatus como funcionarios públicos⁸². Se debe recordar que incluso nominalmente, hasta 1981, los maestros eran considerados como profesores de Estado. Según Mizala, la reforma de la educación superior —llevada a cabo en conjunto con la reforma escolar—, implicó además una pérdida del estatus universitario del profesor, lo que disminuyó la matrícula y la caída de los puntajes de ingreso a los estudios de pedagogía a nivel nacional⁸³.

La reforma de 1979-81, si bien aumentó la cobertura en el nivel básico de la educación, no logró una mejora significativa en la calidad, la que incluso se ha estancado y, según algunos, definitivamente empeorado⁸⁴. Los cambios fueron impuestos a partir de visiones ideológicas que confiaban en el mercado como único agente automático de la mejora en la calidad educativa, sin tomar en cuenta las asimetrías de información y la falta de control respecto del servicio prestado. La lógica puramente mercantil permitió también la entrada de 'sostenedores' sin ninguna o muy poca responsabilidad respecto del proceso educativo, lo cual ha aumentado las diferencias entre quienes pueden pagar una

educación de calidad y quienes solo tienen acceso a lo que su mínima capacidad de pago les permite.

En suma, para que un sistema de subsidio a la demanda con provisión privada de educación funcione adecuadamente, no basta con crear un cuasi-mercado, sino que es necesario establecer normas, regulaciones e incentivos que faciliten su funcionamiento. Todos estos elementos estuvieron ausentes durante los años 80, probablemente debido a la visión de que las fuerzas del mercado lograrían por sí solas un equilibrio óptimo. Consecuente con esta visión, durante la década de los 80 hay un escaso énfasis en la regulación del sistema educativo⁸⁵.

La descentralización también se logró a medias, pues los jefes municipales (alcaldes) durante el período del régimen militar eran designados por la autoridad central y no elegidos, por lo que el control de los ciudadanos sobre estos últimos fue prácticamente nulo. Además, la estructura misma de la reforma generó una situación donde no quedó clara la responsabilidad sobre la calidad de la educación impartida. Por un lado, los municipios y los sostenedores privados son quienes gestionan y administran autónomamente las escuelas; sin embargo, le corresponde al Ministerio de Educación velar por los aspectos técnicos-pedagógicos, pero sin contar con ninguna tuición sobre los profesores y los establecimientos educacionales. Por lo tanto, no existe una responsabilidad definida y clara sobre los resultados del sistema en su conjunto.

La crisis de 1982: el fin del monetarismo ortodoxo

Los orígenes de la crisis financiera que azotó a Chile desde fines de 1981 hasta 1984, son aún tema de discusión económica entre los especialistas de la disciplina. Las causas externas e internas se combinaron de tal modo que provocaron un escenario extremadamente delicado para el gobierno militar. Desde el punto de vista ideológico, la crisis marcó el fin del monetarismo más extremo, dando paso a un liberalismo económico de carácter más pragmático. Los años de control total de la política económica por parte del grupo de los economistas de Chicago, habían llegado a su fin, especialmente bajo el alero de su líder indiscutido, Sergio de Castro, y su equipo de asesores instalados en las dependencias de ODEPLAN.

Los cambios radicales que había sufrido la economía chilena entre 1975, año del tratamiento de shock, y 1981, momento en que desata la crisis financiera, fueron de una enorme envergadura, abarcando desde lo estrictamente económico hasta reformas sociales con enormes implicancias incluso en el ámbito cultural. En términos generales, la crisis de 1982-83 no se tradujo en una vuelta atrás respecto de las reformas estructurales aplicadas por el régimen, pero sí implicó un cambio de rumbo respecto de la ortodoxia económica y su relación con el contexto político y social del país. A partir de este momento, el régimen militar se vio obligado matizar sus decisiones económicas producto de una correlación de fuerzas políticas que parecía ya no estar enteramente a su favor. La oposición había comenzado a reagruparse y la represión ya no podía aplicarse de la misma forma que en los primeros años del régimen. A esto se sumaban una comunidad internacional que había condenado explícitamente las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país, sobre todo entre 1973 y 1978⁸⁶, y la ola de protestas sociales iniciadas en mayo de 1983⁸⁷. Esta última agregó aún más presión sobre las autoridades del régimen, obligándolas a adoptar una política económica más pragmática y realista.

Origen y desarrollo de la crisis

Las explicaciones estrictamente económicas de la crisis la hemos expuesto en el Capítulo III, aunque en este caso nos interesa contextualizarlas dentro de la coyuntura histórica que vivía el país a comienzos de la década de 1980. El llamado ‘milagro económico’ iniciado en 1979 había tenido como corolario un verdadero boom de las importaciones, producto de un tipo de cambio fijo y un flujo enorme de créditos externos a tasas muy bajas. El país mostraba cifras económicas y excedentes importantes, pero buena parte de estos ingresos y créditos no fueron invertidos en la infraestructura productiva y exportadora del país⁸⁸. Por el contrario, la mayor parte de ellos habían sido destinados a favorecer el consumo, la importación de bienes y el crecimiento totalmente desregulado de los llamados Grupos Económicos, quienes controlaban diversas empresas, las cuales a su vez se endeudaban con bancos que formaban parte de los mismos conglomerados⁸⁹.

Hacia 1979 sobran indicadores para hablar de un ‘milagro económico’. La inflación, que había llegado a 1.000% en 1973, no superaba el 30%; la producción crecía persistentemente desde 1977 a tasas cercanas al 8% anual; el déficit fiscal, que llegó a cifras descomunales en 1973, había desaparecido en 1980; las exportaciones no tradicionales crecían espectacularmente, doblando en 1978 el volumen de 1974; la balanza de pagos, después de años con un déficit que parecía crónico, mostraba un superávit a partir de 1978; las reservas internacionales aumentaban su nivel gracias al abundante crédito externo, que a su vez parecía ratificar la confianza de la banca internacional en la experiencia chilena; el acceso a bienes de consumo importados experimentaba una masificación sin precedentes⁹⁰.

Uno de los estudios económicos más recientes sobre el tema ha establecido cuatro factores que favorecieron que se desatara la crisis con la profundidad y consecuencias sociopolíticas que tuvo para el país entre 1982 y 1986⁹¹. Sin bien este análisis deja de lado los elementos político-ideológicos involucrados en las decisiones económicas, nos permite, por otra parte, comprender mejor la

relación entre los factores económicos externos y los componentes locales.

En primer lugar, la recesión de 1982-83 estuvo fuertemente influenciada por las circunstancias y el escenario económico internacional de la época. En solo dos años y hasta mediados de 1981, el consumo interno privado y la inversión en capital habían aumentado rápidamente hasta niveles récord. Esto también ayudó al aumento de las exportaciones. Sin embargo, la espectacular expansión de la demanda interna fue posible solo gracias al acceso al crédito local e internacional muy barato (gracias a la afluencia masiva de petrodólares) y gestionado mediante la intermediación de los bancos nacionales.

En segundo lugar, la cartera de préstamos bancarios reflejaba la adopción de riesgos excesivos por parte de estas instituciones, pues sus depositantes (y también sus acreedores) no habían tomado explícitamente los resguardos necesarios frente a los riesgos de crédito que estaban adoptando. La magnitud de este problema no se conocía al momento de la crisis, y nunca ha sido posible evaluar exactamente su importancia y la consecuente falta de regulación. Si bien dos grandes bancos fueron intervenidos en noviembre de 1981 a causa de la denuncia sobre la excesiva toma de riesgos, cuando la crisis se acentuó, en 1982, el deterioro de las carteras de préstamos se debió principalmente a las nuevas condiciones macroeconómicas.

En tercer lugar, el auge de 1980-81 había dado lugar a cambios en los precios relativos, en particular, un aumento de los salarios reales. El último fue resultado de la bonanza económica, la indexación de los salarios nominales a la inflación pasada y de reducciones sustanciales en el costo de la mano de obra para las empresas (debido a los recortes en los impuestos sobre el salario). No obstante las reformas en las leyes laborales, los salarios nominales siguieron siendo rígidos y las presiones políticas aumentaron rápidamente en favor de la devaluación del peso chileno.

En cuarto lugar, pero no menos importante, a pesar de las nuevas disposiciones jurídicas y las instituciones gubernamentales de la Constitución de 1980, estas aún no operaban de manera efectiva en favor del régimen militar. Así pues, dada la pérdida de ingresos previstos por los principales grupos dirigentes del gobierno militar, las presiones para su intervención aumentaron rápidamente. Tomó algún tiempo para que el gobierno abandonara sus compromisos con un tipo de cambio fijo y su política ortodoxa de no rescate de ninguna de las partes afectadas por la crisis.

Resulta importante insistir en que el sector financiero contaba apenas con mínimos controles, lo cual formaba parte de la ortodoxia del equipo económico, por lo que la entrega de créditos a las empresas y personas se masificó rápidamente, incluso a tasas de interés no siempre convenientes⁹². La propaganda del régimen ayudó también a dar la imagen de una bonanza sustentada principalmente en el crédito y el endeudamiento, tanto así que públicamente las autoridades económicas pregonaban que el mejor negocio era contraer préstamos.

La liberalización del crédito ayudó a un incremento explosivo de las colocaciones, lo que hizo que el crédito de la banca se expandiera muy rápidamente entre 1975 y 1981. En 1981 las colocaciones fueron equivalentes al 50% del PIB nominal, y en 1982 alcanzaron casi un 70% del PIB nominal, lo que creó un serio problema de sobreendeudamiento⁹³.

Las tiendas estaban abarrotadas de mercadería importada. Bienes casi desconocidos o considerados de lujo sibarita hasta 1973 —ropa extranjera, whisky, chocolates suizos, automóviles y electrodomésticos de todas las marcas, etc.— se exhibían ahora como cosa común, y sus líneas más baratas estaban al alcance de cualquier bolsillo. Y si no lo estuvieran, existían mil formas de crédito de consumo para adquirirlas⁹⁴.

El endeudamiento de los bancos chilenos había aumentado significativamente a

partir de 1979, cuando el régimen militar flexibilizó la regulación sobre los pasivos de las entidades financieras, lo cual les permitió contraer fácilmente préstamos en el extranjero. Los bancos nacionales se financiaron principalmente a través de esta vía entre 1979 y 1981. Fue así como, según Held y Jiménez, la participación de los fondos externos en el financiamiento de los activos bancarios pasó de un 9,3% en 1977 a un 28% en 1981, lo que triplicó la exposición de los créditos de la banca al riesgo cambiario, lo cual se materializó con la devaluación de 1982⁹⁵.

Los desequilibrios de la economía chilena eran significativos ya en 1980, pero la crisis solo se hizo presente una vez que el financiamiento externo comenzó a encarecerse. Es en este punto donde la coyuntura externa también perjudicó al modelo puesto en marcha por el equipo económico del régimen militar. Desde 1979 y especialmente durante el año 1981, se produjo un recalentamiento de la economía norteamericana, frente a lo cual Estados Unidos decidió incrementar fuertemente las tasas de interés (hasta un 19%) con el objeto de detener un peligroso brote inflacionario. Esto produjo una importante fuga de capitales desde Chile, a lo que se sumó una caída del precio del cobre y un aumento del precio internacional del petróleo, el cual ya había sufrido importantes alzas desde los inicios de la revolución iraní de 1979. Este conjunto de factores externos originó fuertes presiones de devaluación en el tipo de cambio y aumento del costo del crédito, acelerando el proceso de degradación de la situación económica chilena hacia comienzos de 1981⁹⁶.

El aumento de tasas de interés en Estados Unidos afectó a la mayoría de los países de América Latina, en lo que se llamó más tarde ‘La Crisis de la Deuda’⁹⁷. Fue así como Argentina, Brasil y especialmente México, entre otros, sufrieron problemas similares a causa de esta recesión internacional⁹⁸. Aunque el gobierno militar culpó a la situación externa de lo que sucedía en Chile, el país se vio particularmente afectado por la recesión internacional, producto también de sus desajustes internos. De acuerdo con Alan Angell⁹⁹, en 1981, el déficit de la cuenta corriente era un 20% mayor que las exportaciones y alcanzaba a casi el 15% del PIB¹⁰⁰. Los bancos internacionales dejaron entonces de prestar dinero a Chile en las condiciones favorables de los años previos, por lo que subieron bruscamente las tasas de interés. Esto provocó una inmediata restricción del crédito interno, lo cual sumado a un tipo de cambio fijo (dólar a 39 pesos)¹⁰¹, contribuyó a la morosidad y quiebra de numerosas empresas.

... además, como es sabido, la cantidad de reservas internacionales en poder del Banco Central, más que duplica la cantidad de dinero, de manera que nada podría obligar a una devaluación. En consecuencia, bajo el actual sistema monetario y cambiario no hay ni habrá ningún motivo o fuerza de presión capaces de alterar el actual tipo de cambio de 39 pesos por dólar, el cual está en condiciones de ser mantenido por muchos años¹⁰².

La primera señal de la gravedad de la crisis se produjo con la bancarrota de la otrora poderosa refinería de azúcar de la ciudad de Viña del Mar, CRAV¹⁰³, en julio de 1981¹⁰⁴. En noviembre del mismo año, el gobierno se vio obligado a intervenir cuatro bancos y cuatro financieras, lo cual dejó en evidencia la incapacidad de las autoridades gubernamentales para regular el sector bancario. A esto se sumaba la señal dada en 1977 al salvar de la quiebra al Banco Osorno, lo cual habría dado una falsa confianza a los ahorrantes en la fiabilidad del sistema bancario chileno producto del rescate estatal¹⁰⁵. Ello, además de la recesión internacional, contribuyó al peligroso aumento de los préstamos incobrables de los bancos chilenos (cartera vencida), el cual creció de un 11% del capital y reservas en 1982, a un 47% durante el mismo año en incluso hasta un 113% en 1983.

Hasta aquel momento, el equipo económico del régimen había decidido ‘dejar caer’ a los bancos, convencido de que la crisis del sistema financiero era de responsabilidad privada y que, por lo tanto, solo ellos debían responder por sus malas decisiones financieras¹⁰⁶. La confianza excesiva en las reservas internacionales del país y en la lógica monetarista del ajuste automático, los llevaron a postergar la intervención de los bancos hasta que la situación se hizo insostenible política y económicamente¹⁰⁷. Ante la declaración de bancarrotas masivas y la insolvencia de los bancos, el gobierno se vio obligado —en enero de 1983— a tomar el control de la mayor parte del sistema financiero privado, adquiriendo, de manera indirecta, una gran cantidad de empresas cuyos activos habían sido absorbidos por los bancos¹⁰⁸. Se produjo, paradójicamente, una gigantesca estatización de empresas a través de la intervención bancaria gubernamental, creando lo que después sería reconocido en el lenguaje de los economistas como el ‘área rara’, es decir que no pertenecía a los privados, pero tampoco completamente al Estado, pues su propiedad sería transitoria¹⁰⁹.

Nombre de la institución	Año	Tipo de intervención
Banco de Linares	1981	Liquidada
Banco de Fomento de Valparaíso		Liquidada
Banco de Talca		Vendida a intereses extranjeros
Banco Español-Chile		Vendida a intereses extranjeros
Compañía General Financiera		Liquidada
Financiera CASH S.A.		Liquidada
Financiera de Capitales S.A.		Liquidada
Sociedad Financiera del Sur S.A.		Liquidada
Banco de Fomento del Bío-Bío	1982	Liquidada
Banco Austral de Chile		Liquidada
Adelantos y Créditos S.A.F.		Liquidada
Financiera CIGA S.A.		Liquidada
Banco Unido de Fomento	1983	Liquidada
Banco Hipotecario de Chile		Liquidada
Banco Colocadora Nacional de Valores		Fusionada
Banco Internacional		Rehabilitada y privatizada
Banco de Chile		Rehabilitada y privatizada
Banco Santiago		Rehabilitada y privatizada
Banco Concepción		Rehabilitada y privatizada
Financiera Davens S.A.		1986
Financiera Mediterráneo	Liquidada	

Fuente: Barandiarán, E. & Hernández, L., Op.cit., p.46.

Hasta el último momento antes de su destitución (22 de abril de 1982), el Ministro de Hacienda, Sergio de Castro, se negó a creer en la posibilidad de una crisis cambiaria, pues confiaba en el respaldo del superávit fiscal, al mismo tiempo que consideraba la deuda financiera como un asunto que no era de responsabilidad estatal. Las principales críticas a la gestión económica se centraban en el excesivo endeudamiento del sector privado, concentrado en algunos grupos económicos y la insistencia en la paridad cambiaria. La tozudez de Sergio de Castro en no devaluar se basaba en su creencia de que el ajuste no era todo lo automático que debiera producto de la indexación de los salarios¹¹⁰, regla que —a su juicio— atentaba contra la necesaria recuperación económica¹¹¹. Sin embargo, la eliminación de la indexación, sobre todo en un momento de efervescencia política y social, era extremadamente impopular. Así también lo consideró el general Pinochet, quien finalmente nunca dio luz verde a la rebaja salarial, sellando con esto la salida de Sergio de Castro del gabinete y cerrando el capítulo más ortodoxo de la política económica del régimen militar¹¹².

Yo insistía en que lo que teníamos que hacer era rebajar las remuneraciones, disminuyendo las del sector público mediante decreto, lo que arrastraría que bajaran también las del sector privado. Si lográbamos reducir las remuneraciones en un 12 o 13%, subía el tipo de cambio real sin devaluación, con lo que podíamos capear el temporal¹¹³.

La crisis económica, por otro lado, había debilitado la confianza que el general Pinochet había depositado en los Chicago Boys, ya que el equipo económico no mostraba capacidad para encararla, permaneciendo indiferente ante su agravamiento, sin considerar sus consecuencias políticas¹¹⁴.

Tras la salida de Sergio de Castro del Ministerio de Hacienda, la cohesión del

grupo del equipo económico de Chicago se vio fuertemente disminuida ante las presiones de diversos sectores por devaluar y apoyar enérgicamente al sector bancario¹¹⁵. Los sucesores inmediatos de Sergio de Castro en Hacienda, Sergio de la Cuadra y posteriormente Rolf Lüders, no fueron capaces de resistir tales presiones, por lo que el 14 de junio de 1982 se decretó la devaluación. Curiosamente, en aquel mismo instante, el Presidente del Banco Central, Miguel Kast, aseguraba a los acreedores alemanes que el gobierno chileno seguía absolutamente comprometido con un cambio fijo de 39 pesos por dólar. De esta forma, uno de los pilares básicos de la ortodoxia del equipo económico de Chicago había caído. La fe en la ciencia económica parecía adoptar la forma de una desesperada plegaria religiosa para evitar lo peor. Esto quedó reflejado en un interesante episodio relatado por uno de los hombres más cercanos al grupo de economistas, Arturo Fontaine Aldunate, entonces director del diario El Mercurio:

El viernes 11 de junio de 1982, el Presidente (Pinochet) llama a su despacho al Ministro de Hacienda de la Cuadra y, en voz baja y tranquila, le dice: ‘He tomado la decisión de devaluar’. Y sin más, saca del bolsillo una estampa con la imagen de la Virgen del Carmen, Patrona de Chile y de sus Ejércitos, y la exhibe en silencio al Ministro. Este, confundido por el gesto, no atina a otra cosa que a sacarse por el cuello de la camisa la medalla del Escapulario del Carmen que siempre lleva consigo colgando de una cadena. Luego de esta callada y emocionada exhibición de imágenes, vienen los detalles acerca de la resuelta devaluación¹¹⁶.

En términos generales, de acuerdo con cifras de Alan Angell, en 1982 el PIB cayó en 14,1% y la inversión en más de un 30%. La devaluación del peso respecto al dólar había caído en un nivel similar así como las reservas internacionales, las cuales eran de un 40% respecto del año anterior¹¹⁷. El desempleo había alcanzado la cifra oficial de un 19% en 1982 e incluso un 26% el año siguiente, sin incluir a todos quienes participaban de los programas asistenciales de empleo de emergencia del gobierno PEM y POJH¹¹⁸. El mismo autor insiste que, en 1983 y tras diez años de régimen autoritario, Chile no constituía ningún ejemplo de monetarismo a imitar. El ingreso real per cápita era un 3,5% inferior al de 1970 y el nivel de desigualdad había aumentado. La

producción industrial era inferior a la de 1970 y la deuda externa de Chile equivalía al 80% del PIB, a lo cual Angell agrega, irónicamente, que el Estado figuraba como dueño de la mayor parte del sector financiero, pero esta vez como resultado de la deuda bancaria que los privados habían contraído febrilmente durante los años del ‘milagro económico’¹¹⁹.

Elementos ideológicos implícitos en el origen y desarrollo de la crisis de 1982

La crisis económica de 1982-83 fue la más grave que vivió el país desde 1930 e implicó un ajuste brutal de la economía con un costo social enorme, el cual puso en jaque al régimen militar sobre todo durante el ciclo de paros y protestas del año 1983. Los elementos internos y externos de la crisis ya han sido expuestos con detalles. Sin embargo, la mayor parte de los autores que han trabajado el período concuerdan en que la amplitud y gravedad de la misma no se explica sin el alto grado de ideologización de quienes dirigían la política económica en aquella época. Así lo planteaba Pablo Baraona, ministro del gobierno militar:

Yo diría que quedó en claro que no hay nada más práctico que una buena teoría. Luego que esa teoría debe aplicarse desde el poder político mirando el bien común general, no los intereses de determinadas personas o grupos. Tercero, que la economía, así entendida, es la mejor herramienta para sostener una sociedad libre¹²⁰.

En otras palabras, no se desconoce la enorme influencia del contexto recesivo mundial de fines de la década de 1970, pero ello no explica los enormes desequilibrios internos que había acumulado la economía chilena desde el período del tratamiento de shock, en 1975. Ello incluso a pesar de los numerosos índices positivos que las autoridades insistían en mostrar como efectos del ‘milagro económico’, especialmente entre 1978 y 1981.

Principales índices económicos 1978-1981

Año	PIB%	Desempleo (% de la E. de T.)*	Inflación (% anual)	Exporta- ciones (US\$ MM)	Importa- ciones (US\$ MM)	D. Externa (US\$ MM)
1978	8,2%	17,9	37,2	2.460	2.886	11.251
1979	8,3%	17,7	38,0	3.834	4.190	12.353
1980	7,8%	15,7	31,2	4.705	5.469	13.999
1981	5,5%	15,6	9,5	3.836	6.513	17.856

* F. de T.: Fuerza de trabajo.

Fuente: Ledesma De Lapeyra, V., Op.cit., p. 289.

Datos obtenidos del Banco Central de Chile y CIEPLAN.

Dentro de la perspectiva que nos interesa de la evolución del pensamiento económico liberal en Chile, la experiencia de 1975-1983 resulta particularmente original debido a los componentes ortodoxos del modelo de apertura de la economía, hasta aquel momento inédito en el mundo, especialmente por la combinación de (a) desregulación, (b) libre mercado y (c) apertura indiscriminada al comercio exterior¹²¹. La insistencia en la neutralidad de la política económica y la confianza puesta en los mecanismos de ajuste automático, revelan la influencia que tuvo el equipo económico de Chicago para diseñar una estrategia de desarrollo completamente ajena a lo que había experimentado económicamente el país hasta ese momento y, sobre todo, tras la experiencia fallida de socialismo en democracia aplicada entre 1970 y 1973. El modelo monetarista resultó ser un salto hacia lo desconocido, el cual terminó con un país en una profunda crisis recesiva, que solo pudo ser resistida por la dictadura gracias a la represión y a una hábil maniobra de pseudoapertura política, que finalmente desactivó las movilizaciones sociales iniciadas el año 1983¹²².

Patricio Meller ha resumido con extrema claridad los principios básicos del modelo aplicado en Chile durante el período del ‘monetarismo duro’, y que terminaron abruptamente con la crisis. Muchos de ellos parecen hoy en día lugares comunes de una economía globalizada, pero en aquellos años eran simplemente revolucionarios y definitivamente heterodoxos respecto de las tendencias que dominaban la disciplina económica en los años 1970. Los principios a los cuales nos referimos son los siguientes:

El establecimiento de la siguiente tríada: vigencia del mercado, apertura al comercio exterior y aplicación de políticas generales; es decir, un modelo descentralizado en el que los agentes económicos toman decisiones

independientemente de la autoridad central. Existe una especie de 'piloto automático' de la economía, el cual se activa simplemente con reglas claras y neutras respecto de los agentes económicos.

El papel de los incentivos económicos es fundamental para estimular una alta productividad en el trabajo, y para provocar elevados niveles de ahorro e inversión. Para que estos incentivos económicos operen, es necesaria la eliminación de todo tipo de controles.

El mercado es el mecanismo óptimo para la asignación de recursos y es preferible que el sector privado sea quien canalice esos recursos. El Estado debiera abocarse a corregir o eliminar las distorsiones que ocurran en el funcionamiento del mercado, sin tratar de sustituirlo.

El gasto público debiera expandirse a una tasa inferior a la del PIB; esto congelaría la estructura relativa actual entre sector privado y sector público. Para ello se requiere, por razones más bien prácticas que teóricas, un déficit público igual a cero.

La insistencia en estos principios, los cuales al comienzo parecieron mostrar índices bastante exitosos, llevaron al equipo económico a no aceptar correcciones ni modificaciones al modelo sino hasta que ya fue demasiado tarde, y en algunos casos incluso contraproducente. El costo social para el país fue enorme y después, si bien la influencia de los economistas de Chicago nunca dejó de ser importante al interior del gobierno militar, se impuso una versión del modelo bastante más pragmática sin por ello dejar de ser, en lo esencial, claramente liberal.

Las lecciones de la crisis y el liberalismo pragmático

De acuerdo con el análisis del economista Orlando Caputo, según estudios de la CEPAL, Chile fue el país de América Latina más afectado durante la crisis de inicios de los años 1980¹²³. El PIB cayó en un 14%, la producción industrial en 23% y la desocupación, según CIEPLAN¹²⁴, alcanzó el 30%. Esta situación económica catastrófica, prácticamente imposible de resistir para cualquier gobierno democrático, debió ser enfrentada por el régimen militar en un contexto de protesta social y resurgimiento de los partidos políticos tras diez años de receso y prohibición¹²⁵. La ortodoxia del equipo económico de Chicago había agudizado una crisis recesiva que ya era grave debido a sus causas iniciales externas¹²⁶, llevando al país a una situación de quiebra generalizada del sistema financiero y de numerosas empresas. El costo del ajuste automático había dejado a la economía chilena en una situación de casi bancarrota en menos de dos años¹²⁷.

Al margen de sus enormes costos económicos, la crisis introdujo una seria fractura en la conciencia neoliberal de los equipos de profesionales y economistas en los cuales el gobierno se había apoyado en sus planes de transformación económica. El clima de gran unidad y colaboración de los años anteriores fue reemplazado por una atmósfera de pugnas, conflictos y rencores¹²⁸.

Un breve periodo de heterodoxia y medidas expansivas

La respuesta inicial del general Pinochet fue buscar soluciones dentro del mismo modelo y con la misma gente que le había dado buenos resultados apenas unos años antes, aunque con la plena conciencia de que la figura de su Ministro de Hacienda estrella, Sergio de Castro, había caído en desgracia frente a la mayoría de los empresarios que apoyaban al régimen.

No cabe duda que el Estado tiene el deber de velar por el buen funcionamiento del sistema financiero. Lo he sostenido siempre y por eso me trataron de gáster porque, en medio de su ignorancia y su soberbia, los monetaristas de Chicago — que encabezaba el infalible señor de Castro— sostenían como dogma que el mercado lo corregía todo¹²⁹.

Por esta razón, se sucedieron varios cambios ministeriales en busca de un liderazgo sólido que tranquilizase a los agentes económicos en medio de escalabro financiero. No obstante, esto obligó a Pinochet a aceptar que debía salirse de la rígida ortodoxia inicial impuesta por el equipo económico de Chicago, aunque fuese temporalmente.

Sergio de la Cuadra (sucesor de de Castro en el Ministerio de Hacienda), era un académico sin imaginación y, en general, quiso mantener la continuidad de la política neoliberal, flexibilizando solo el mercado de divisas, lo que aceleró la fuga de dólares. Sin la personalidad de su antecesor, tuvo que aceptar que Pinochet y sus asesores militares decidieran la devaluación del dólar a comienzos de junio (1982). Para salvar la imagen de los Chicago Boys ante el abandono de uno de los símbolos del modelo neoliberal, el dólar fijo, Pinochet encargó al general Danús dar a conocer la devaluación¹³⁰.

Sergio de la Cuadra también fue reemplazado, en agosto de 1982, por otro

economista formado en Chicago, Rolf Lüders, quien debió asumir los ministerios de Hacienda y Economía en forma simultánea y urgente. Este último tampoco logró controlar la situación, viéndose obligado, en enero de 1983, a ordenar la intervención estatal de cinco bancos e instituciones financieras que estaban al borde de la bancarrota. El economista liberal Carlos Cáceres, uno de pocos chilenos miembros de la Sociedad Mont Pèlerin, reemplazó a Lüders en el Ministerio Hacienda a partir de agosto de 1983, justo en el momento en que las protestas sociales habían alcanzado su más alta convocatoria¹³¹. Sin embargo, Cáceres duró pocos meses en el puesto, pues fue sucedido, en abril de 1984, por el primer economista —en casi una década— que no era próximo al grupo de Chicago: Luis Escobar Cerda, contador e ingeniero comercial de la Universidad de Chile¹³².

El ministro de Hacienda, Luis Escobar Cerda, subió los aranceles hasta el 35% en sus diez meses y diez días de gestión. La crítica de la ortodoxia económica fue inmediata. Dominique Hachette, otro hombre de Chicago y profesor en la Universidad Católica, acusaba en esa época a las autoridades de sucumbir a ‘presiones de ciertos gremios partidarios de una estrategia basada en la sustitución de importaciones’¹³³.

Escobar Cerda, un economista formado en el pragmatismo, si bien era considerado como un liberal, no era en absoluto un ortodoxo en materia monetaria; además, contaba con el prestigio y buenas conexiones con los principales organismos internacionales de crédito, especialmente con el Fondo Monetario Internacional¹³⁴. Esto era de suma importancia para el régimen, pues en aquel momento la banca privada internacional había prácticamente cerrado el crédito a Chile, en lo fundamental, debido a las políticas erráticas del equipo económico, sobre todo en lo relacionado con la devaluación del tipo de cambio¹³⁵. Desde 1982, los antiguos acreedores internacionales se habían transformado decididamente en cobradores, sobretodo tras la cesación de pagos de la deuda externa decretada por México en agosto del mismo año¹³⁶.

La rígida ortodoxia teórica de los años 1975-1982 fue reemplazada por un liberalismo pragmático y más flexible a la situación social del país, esencialmente respecto de las necesidades políticas del régimen militar y de gran

parte del empresariado, quien reclamaba todo tipo de medidas de alivio por parte del Estado. Para las nuevas autoridades económicas, resultó menos complicado renegociar las deudas de los empresarios con la banca, pues esta había sido virtualmente estatizada, producto de la intervención gubernamental de comienzos de 1983¹³⁷.

Desde la llegada de Escobar Cerda al Ministerio de Hacienda e incluso después, cuando lo reemplazó Hernán Büchi, la política económica fue de tendencia liberal, pero incorporando una serie de cambios que la alejaron del modelo rígido del primer equipo de los Chicago Boys¹³⁸. En primer lugar, se resguardó a la industria nacional mediante un aumento significativo de los aranceles (35%) para después dejarlos en un 15% general, aunque estableciendo una batería de medidas para proteger a ciertos sectores de la economía como la agricultura. Se establecieron bandas de precios y sobretasas arancelarias en beneficio de determinados productos considerados como sensibles (azúcar, trigo y aceite vegetal)¹³⁹. En segundo lugar, se abandonó la política monetaria pasiva basada únicamente en las oscilaciones automáticas de la tasa de interés, siendo reemplazada por una activa intervención del mercado. A esto se agregó una fuerte regulación del sistema financiero que terminó en la creación de una nueva y estricta legislación bancaria en 1986¹⁴⁰.

En síntesis, no se planteó un cambio del modelo económico, sino una suerte de corrección de aquellos aspectos en los que se habían constatado debilidades. De ahí que el sistema económico resultante no sea tanto el producto del liderazgo de Sergio de Castro, sino más bien de las decisiones de los Ministros de Hacienda de los años '80, especialmente Hernán Büchi, quien estuvo a cargo de esa cartera entre 1985 y 1986¹⁴¹.

Una de las primeras medidas pragmáticas fue el establecimiento del control cambiario tras el caos de la convertibilidad vivido durante 1982. Se creó también un dólar denominado 'preferencial' para aquellos grandes deudores en dólares que habían adquirido compromisos en esta moneda antes de la primera devaluación de 1982. Esta medida atentaba directamente contra el principio de neutralidad y no intervención propiciado por el antiguo equipo económico de Chicago, pues beneficiaba principalmente a los grandes deudores en moneda

extranjera en desmedro de aquellos que tenían deudas en moneda local.

Patricia Olave ha recopilado las distintas acciones que se implementaron a partir de febrero de 1983, destinadas a recuperar la economía por medio de la intervención del Estado. Fue así como se puso en práctica una nueva política de precios agropecuarios, donde se establecieron beneficios crediticios para los agricultores, así como otras medidas proteccionistas en beneficio del sector. Se bonificó, también, a los funcionarios estatales, suspendiendo además los despidos en el sector público. El Banco Central decidió adoptar una política activa de emisión de dinero para así bajar la tasa de interés y proveer de mayor crédito a productores y consumidores. Se pusieron en funcionamiento planes de obras públicas realizadas por privados, pero apoyadas por el Estado, con el objeto de crear a lo menos 80 mil nuevos puestos de trabajo. En términos comerciales, los aranceles fueron aumentados de un 10% a un 20% parejo, permitiendo que el tipo de cambio se reajustara de acuerdo con la inflación. A esto se agregaron otras medidas tendientes a mejorar el crédito para los exportadores y así reducir el déficit de la balanza comercial. De acuerdo con Olave, estas medidas no solo reflejaron una mayor regulación estatal del mercado, sino que también un retorno transitorio de la política de subsidios, un verdadero anatema para los monetaristas¹⁴².

Desde la salida de de Castro en abril de 1982 hasta febrero de 1985, fecha en que asume Hernán Büchi, el modelo de desarrollo basado en el libre mercado estuvo en serio riesgo de sufrir una profunda involución. Fueron los momentos más difíciles para el gobierno militar...¹⁴³.

Durante 1983 y 1984, el gobierno concedió su aval para los pagos y reprogramación de las deudas de los privados en el exterior, lo que marcó una ruptura con la política de los años del tratamiento de shock y del boom (1975-1981), donde los créditos del sector privado habían sido contratados sin la garantía del Estado. El aumento de déficit fiscal fue el costo asumido de esta política de recuperación económica, pero que significó haber logrado más flexibilidad de parte del FMI para el tratamiento de la deuda externa chilena¹⁴⁴. Olave estima que esta renegociación ‘flexible’, unida a un nuevo cambio en el Ministerio de Hacienda (abril 1984), reforzaron la tendencia hacia una mayor

participación del Estado en la resolución de la crisis. Sin embargo, prontamente se volvería a una mayor restricción presupuestaria producto de la necesidad, por parte del gobierno chileno, de ganar mayor credibilidad y nuevos acceso a créditos por parte del FMI y el Banco Mundial.

El regreso del rigor económico, pero con regulación pragmática

Con el arribo en 1985 de Hernán Büchi Buc al Ministerio de Hacienda (ingeniero y Máster en economía de Columbia, y además parte del equipo de Chicago), se marcó el retorno parcial a la ortodoxia económica en un ambiente de desconfianza generalizada respecto del modelo económico de libre mercado.

Me tocó llegar en un momento en que parecía que el camino se había interrumpido. Del optimismo de haber hecho una serie de cambios que iban a generar una situación nueva de crecimiento económico y estabilidad a futuro, de repente nos encontramos frente a un abismo¹⁴⁵.

Esta vez, sin embargo, hubo una mayor presencia reguladora del Estado. El marco macroeconómico quedó definido por el regreso de la austeridad y la búsqueda de equilibrios económicos, especialmente respecto de las cuentas fiscales. Nuevamente, la inflación se convirtió en una prioridad del equipo económico. Una vez más se vieron afectados los salarios al decretarse su congelamiento en 1985, buscándose así ganar mayor competitividad en el sector exportador y de los bienes transables¹⁴⁶. A fines del mismo año, el PIB de la economía chilena había crecido un magro 2,4%, pero ya era claro que lo peor de la crisis había pasado. Esto se vio acompañado por una mejora en los términos de intercambio externo: una caída sostenida del precio del petróleo, una lenta recuperación del precio del cobre y una disminución de las tasas de interés internacionales.

Un elemento central de este período es el segundo proceso de privatización de empresas del Estado. Lo paradójico de esta política fue que el régimen militar decidió vender entidades que no eran deficitarias y que en algún momento, durante la década de 1970, habían sido consideradas como estratégicas desde el punto de vista de la seguridad nacional. Muchas de ellas generaban buenos resultados y superávit operacional, pero estratégicamente la señal que deseaba dar el nuevo equipo económico era que el modelo de libre mercado seguía absolutamente vigente, y que incluso sería profundizado. En tal sentido, como recalca Olave, el mensaje dado a la ciudadanía fue muy claro: se trataba de ‘la

importancia de la propiedad privada como fundamento de la sociedad libre y la economía de mercado’¹⁴⁷. En otras palabras, no habría retorno alguno al estatismo, a pesar de la experiencia fallida del monetarismo extremo previo a la crisis de 1982-83 y al intervencionismo de emergencia que se tuvo que poner en práctica para salir del atolladero.

La estrategia de desarrollo de corto y mediano plazo seguida por el régimen militar chileno entre 1984 y 1990, estuvo enmarcada por las recomendaciones del FMI, seguidas al pie de la letra por las autoridades económicas dirigidas por Hernán Büchi. En palabras de Patricio Meller, este equipo fue definido como ‘más fondista que el Fondo’, haciendo alusión a la rigidez con la cual se siguieron las pautas del organismo internacional¹⁴⁸. Los fundamentos de esta política fueron definidos por el propio Ministro Büchi en la Exposición de la Hacienda Pública del año 1985:

La política macroeconómica es necesaria para orientar correctamente el esfuerzo de ahorro en inversión. Su función es vigilar que la balanza de pagos y el presupuesto fiscal marchen ordenadamente, que la inflación sea moderada y declinante y que los precios fundamentales —el tipo de cambio, la tasa de interés y los salarios reales— no se distancien de su curso de equilibrio. La experiencia nos ha enseñado la importancia de una adecuada regulación de las variables macroeconómicas, ya que sin ella el mercado se desorienta y los ahorros se malgastan o fluyen al exterior, en tanto que la inversión se canaliza hacia operaciones improductivas o especulativas¹⁴⁹.

Tácitamente, se admitía que el mercado puede desorientarse y que, por lo tanto, es necesario un nivel mínimo de regulación e intervención de la autoridad económica. Se reconocía también la necesidad de una activa política macroeconómica. Definida así, la estrategia estuvo fundada en un crecimiento basado en las exportaciones, cuyo objetivo último fue servir el pago de la deuda externa, aunque sin dejar las variables esenciales reguladas por los automatismos y neutralidades que tanto defendían los Chicago Boys del grupo original liderado por Sergio de Castro¹⁵⁰. Para alcanzar estos objetivos, fue necesario practicar una fuerte restricción del gasto fiscal y controlar el endeudamiento tanto público como privado¹⁵¹. Tanto el FMI como el Banco Mundial apoyaron la estrategia

del gobierno chileno, sirviendo también como intermediarios ante los acreedores de la banca privada internacional, lo cual permitió renegociar en mejores términos la deuda externa del país¹⁵².

El mismo autor destaca los dos principios que gobernaron la política económica del régimen militar respecto de este punto: En primer lugar, el Estado avaló las deudas contraídas por la banca privada nacional (estimadas en US\$3.500 millones) y se comprometió al pago regular de los intereses de la deuda externa. En segundo término, el gobierno aseguró la aplicación rigurosa de las políticas macroeconómicas de ajuste con el objetivo de atraer nuevas inversiones y créditos al país.

Las organizaciones multilaterales (FMI, Banco Mundial y BID) proporcionan un monto anual promedio de US\$760 millones (en el período 1983-1987), lo que equivale al 40% del servicio de la deuda externa. La inversión en reputación solo tuvo, por tanto, efecto sobre las organizaciones bilaterales. La banca privada internacional dedicó numerosos elogios al proceso de ajuste chileno, pero no le facilitó el acceso al mercado de crédito voluntario (de mediano y largo plazo) hasta el año 1989¹⁵³.

La estrategia de no confrontación con los organismos de crédito internacional le rindió frutos al país y le permitió acceder a créditos durante cinco años por un monto relativo de 2,5% a 3% del PIB nacional.

El costo social del retorno a la ortodoxia económica

El costo social del ajuste fue enorme y solo se explica, una vez más, por el control que ejerció el régimen militar sobre los distintos actores sociales. Es aquí donde la pregunta de Patricio Meller toma mayor relevancia: ‘¿Puede un gobierno democrático adoptar un programa de ajuste interno en el que la tasa de desempleo se mantiene sobre el 24% durante cuatro años, los salarios reales se reducen en 20% y mantienen deprimidos durante cinco años, y el gasto social per cápita se reduce en 10% durante seis años?’¹⁵⁴. Nuevamente, las condiciones técnicamente ideales para la aplicación de un conjunto de medidas económicas radicales se dieron gracias a la situación política del país y el centralismo autoritario de la dictadura militar¹⁵⁵. Así como en 1975 se había implantado un tratamiento de shock y una acelerada liberalización de la economía, en esta ocasión se pagaron los costos del ajuste, aprovechando el mismo contexto dictatorial para reforzar el camino que, se suponía, debía seguir el modelo económico chileno. Los niveles de represión no fueron los mismos de la década de 1970, puesto que el contexto sociopolítico había cambiado tras las protestas de los años 1983 y 1984. Ello, sin embargo, no impidió que los resultados fueran regresivos para los asalariados y la mayor parte de los trabajadores del país. En términos cuantitativos, el país volvió a crecer económicamente, dejando atrás los peores momentos de la crisis financiera, aunque debiendo pagar un precio enorme en términos de desigualdad social.

Principales índices económicos 1984-1990

Año	PIB (% crecimiento anual)	Inflación (% anual)	Desempleo (% F. de trabajo)
1984	6,3	23	24
1985	2,4	26	21
1986	5,7	17	16
1987	5,7	22	12
1988	7,4	12	9
1990	10,0	21	6

Fuente: Ledesma De Lapeyra, V., Op.cit., p. 289.

Datos obtenidos del Banco Central de Chile y CIEPLAN (1990).

El efecto más perverso del ajuste estructural de la segunda mitad de la década de 1980, fue el costo desproporcionado que tuvo para los diferentes grupos sociales, evidenciando claramente un sesgo en perjuicio de los sectores económicamente más vulnerables del país. El principal elemento regresivo estuvo marcado por la discriminación que se ejerció a favor de los deudores en moneda extranjera y en perjuicio de los casi 600.000 desocupados, quienes recibieron como subsidio menos del 1,5% del PIB. En cambio, como sostiene Meller, una minoría de aproximadamente 10.000 deudores en dólares recibió apoyos equivalentes a un 3% del PIB, mientras que 400.000 desempleados no recibieron ningún tipo de ayuda. En síntesis:

Los dueños de activos reales y financieros recibieron ‘protección’ durante el proceso de ajuste; los depositantes recibieron un seguro público por sus depósitos, y estos fueron indexados con respecto a la inflación, mientras que los trabajadores experimentaban grandes pérdidas a través de la desindexación salarial y del desempleo¹⁵⁶.

De esta manera, si bien las cifras macroeconómicas del país mejoraron sustancialmente entre 1985 y 1989, el costo del ajuste en una economía con un mercado laboral flexible, y donde no hay protección contra el desempleo, fue extremo. La inseguridad económica y la caída del estándar de vida de los trabajadores se transformaron en las consecuencias evidentes del modelo. A falta de una red social de protección, surgió toda una economía informal donde la subsistencia y la mayor parte de los costos sociales fueron absorbidos por las propias familias de menores recursos.

El siguiente cuadro muestra la evolución del consumo entre los principales grupos sociales del país de acuerdo con niveles de ingreso. Se aprecia la

degradación de los hogares más pobres de Santiago a pesar de la mejora general en los índices de crecimiento económico¹⁵⁷.

Distribución relativa del consumo por hogares en Santiago

Estrato de Ingreso	Porcentaje del Ingreso		
	1969	1978	1988
40% más pobre	19,4%	14,5%	12,6%
40% ingreso medio	36,2%	34,6%	32,6%
20% más rico	44,5%	51,0%	54,9%

Fuente: Ledesma De Lapeyra, V., Op.cit., p. 289.

Datos obtenidos del Departamento de Economía de la Universidad de Chile.

La segunda ola de privatizaciones y el ocaso del ‘Estado Empresario’ (1985-1989)

Desde un punto de vista teórico y siguiendo el argumento de Carlos Huneeus, las condiciones en que se realizan las privatizaciones dependen, en gran medida, del tipo de régimen político en el cual se implementen. El resultado es distinto si ocurre en un régimen autoritario o democrático, pues el sistema de toma de decisiones, sobre todo en el segundo caso, es más complejo, incluyendo la participación de distintos actores y la mayor disponibilidad de información¹⁵⁸. Esto último tiene claras consecuencias en la transparencia del proceso y permite diferenciar los intereses públicos de los privados.

Al comienzo de este capítulo, dejamos esbozado brevemente lo que la segunda ola de privatizaciones significó en términos de poner fin al ‘Estado Empresario’, que se había comenzado a construir en Chile desde finales de la década de 1930¹⁵⁹. A continuación, analizaremos los aspectos centrales de este proceso, el cual no debe solo ser examinado por sus efectos económicos, sino que también políticos e ideológicos. Sus consecuencias fueron y continúan siendo, hasta el día de hoy, de enorme importancia para comprender el surgimiento de la idea de un modelo económico chileno. El concepto de un patrón de desarrollo implementado en Chile, se ha expandido internacionalmente producto de esta segunda ola de modernizaciones, donde la privatización de empresas, en estrecha relación con el nuevo sistema previsional, ha jugado un papel central.

El contexto de la segunda ola privatizadora

La crisis de 1982-83 pareció, por algún tiempo, poner en peligro el programa modernizador de los economistas neoclásicos instalados al interior del régimen militar desde 1975. Sin embargo, a partir de 1985, se aprecia un nuevo y acelerado impulso en favor de las reformas neoliberales, esta vez de la mano de una nueva generación de economistas formados bajo la influencia de Sergio de Castro y el primer equipo económico de Chicago, pero que, sin embargo, habían aprendido las lecciones del excesivo dogmatismo de sus antecesores. En febrero de 1985, el general Pinochet confió la conducción económica del país a un joven ingeniero con un máster en economía, Hernán Büchi Buc, y considerado por muchos como ‘brillante’. Büchi había participado junto al equipo económico de Chicago en diversos cargos de responsabilidad a partir de 1975, llegando a ser Ministro Director de ODEPLAN, Subsecretario de Salud y Superintendente de Bancos e Instituciones financieras, entre otras funciones.

Para Pinochet, la sola posibilidad de volver al modelo económico anterior no era una alternativa, pues si bien el liberalismo de los monetaristas pareció sucumbir hacia 1983, el retorno a un proyecto económico con predominio del Estado constituía un anatema para quien justamente se presentaba ante el mundo como el defensor de la economía libre, vencedor del marxismo y principal enemigo de la ‘politiquería’¹⁶⁰. Para el régimen militar, la tecnocracia del equipo de Chicago constituyó un seguro táctico contra el posible retorno de la política y los políticos. La difundida asepsia de los técnicos económicos monetaristas seguía siendo la mejor fórmula para un gobierno que aspiraba a instaurar una revolución económica y social en un país con una fuerte tradición estatal.

El retorno a fórmulas económicas con predominio de lo público significaba renunciar a este espíritu refundador del régimen militar. Pinochet y la Junta de Gobierno lo entendieron así, a pesar de las dudas de no pocos militares y de muchos de sus seguidores civiles¹⁶¹. Un imperativo para retomar el camino modernizador era recuperar la confianza de un empresariado que había sufrido los embates de la crisis de 1982-83, que mayoritariamente se encontraba endeudado y que además comenzaba a dudar de la estrategia de desarrollo basada solo en la apertura comercial y la iniciativa privada. A esto se sumaban las presiones del FMI¹⁶², que condicionaba sus paquetes de ayuda financiera a la puesta en marcha de ajustes estructurales que incluían la privatización de

empresas públicas. La mejor respuesta de Büchi fue asegurar el apoyo del empresariado y del FMI mediante la venta de los activos del Estado que aún formaban parte del núcleo de la antigua estrategia desarrollista. Se trataba de los servicios básicos y específicamente lo referido con la producción y distribución de la energía eléctrica. De este modo se cumpliría, por fin, el anhelo de las autoridades del régimen, que consistía en generar una poderosa clase empresarial capaz de conducir la economía chilena sin la participación del Estado.

En una primera fase (1984-85), se privatizaron las empresas de la llamada ‘área rara’, principalmente los grandes bancos intervenidos durante la crisis¹⁶³, para después hacerlo con el núcleo central de las empresas Corfo, para lo cual era necesario contar con un enorme poder de compra que el sector privado chileno no poseía en aquel momento. Para llevar a cabo la gigantesca venta de las empresas más importantes del Estado chileno, era necesario que los futuros compradores contaran con los recursos necesarios, los cuales escaseaban en un contexto de un país que recién venía saliendo de una aguda recesión. Fue así como se recurrió a los enormes fondos provenientes del nuevo sistema de pensiones, autorizando —en 1986— a las AFP a adquirir acciones de dichas empresas, y convirtiéndose estas finalmente en sus mayores accionistas. Se estima que hasta un 25% de la propiedad de las empresas públicas se adquirió con dineros provenientes de las AFP¹⁶⁴. La explicación oficial fue que los trabajadores de Chile serían, a fin de cuentas, los dueños indirectos de las empresas a través de sus fondos de pensiones, sin mencionar el beneficio que recibirían los verdaderos controladores de las acciones¹⁶⁵.

Las inversiones de las AFP en acciones de empresas vendidas por el Estado y en empresas públicas estratégicas desempeñaron un muy importante papel en el proceso de acumulación de esta segunda fase privatizadora. La venta de las empresas requería un enorme volumen de recursos, que estaban a disposición de las AFP, pudiendo además con su participación respaldar la intervención de inversionistas extranjeros en la compra de empresas¹⁶⁶.

El mecanismo del capitalismo popular consistió en la venta directa y preferencial de acciones, a su valor libro, a pequeños inversionistas nacionales, funcionarios del sector público y miembros de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la falta de

difusión del mecanismo y de un claro y transparente marco institucional para guiar este proceso, permitió a las autoridades cercanas al régimen y a ciertos altos ejecutivos de las mismas empresas públicas utilizar información preferencial¹⁶⁷. Estos últimos aprovecharon su condición de trabajadores de las empresas para acceder a los beneficios de la nueva legislación, sin tomar en cuenta la información sensible que manejaban. Esta misma se usó para comprar paquetes accionarios mayoritarios y posteriormente hacerse con el control de las empresas una vez privatizadas¹⁶⁸. El principio detrás de esta política era, en palabras de sus propios promotores, ‘hacer de Chile un país de propietarios’, siguiendo así el modelo privatizador inglés impuesto por Margaret Thatcher¹⁶⁹.

Los logros del ‘capitalismo popular’ fueron pobres en cuanto al número de adquirientes de acciones. La mayor parte de los ‘capitalistas populares’ se concentró en los bancos intervenidos por la autoridad en 1982-1983... Una de sus principales consecuencias fue beneficiar a los altos ejecutivos de las empresas públicas¹⁷⁰.

Carlos Huneeus, uno de los autores más críticos del proceso de privatizaciones, sostiene que el elemento más cuestionable de las reformas económicas del régimen militar se dio justamente respecto de este punto y durante el período 1985-1989:

El componente político es muy visible en la escasa transparencia con que fueron efectuadas (las privatizaciones), posibilitando que se beneficiaran de ellas los altos ejecutivos de las principales empresas públicas, que pudieron convertirse en sus propios socios controladores cuando pasaron al sector privado. Por estos rasgos, las privatizaciones autoritarias constituyen una parte oscura que empaña las reformas económicas neoliberales impulsadas por los Chicago Boys. El dinamismo económico de fines de los años ‘80 y de los ‘90 ha ‘corrido un tupido velo’ sobre esta debilidad, otorgándole una cierta legitimación post factum a este proceso de privatización, producido en un contexto no democrático.

Resultados del proceso de privatizaciones

Nos parece importante insistir en el objetivo político de las privatizaciones, el cual consistió en lograr tanto el apoyo de los empresarios con el objeto de afianzar el modelo económico como el respaldo necesario para ganar el referéndum (plebiscito) de 1988¹⁷¹. El segundo aspecto se refiere al desmantelamiento del ‘Estado Empresario’, con el objeto de disminuir la influencia de cualquier futuro gobierno o coalición política sobre la marcha de la economía, dejando esta responsabilidad únicamente en manos del empresariado¹⁷².

Las empresas CORFO privatizadas durante este período (históricamente de propiedad pública) fueron aquellas pertenecientes a sectores estratégicos de la economía del país, principalmente en el área de telecomunicaciones (ENTEL), telefonía (CTC), transporte aéreo (LAN-Chile), producción y distribución de electricidad (ENDESA y Chilectra), siderurgia (CAP), petroquímica, y minería no metálica (SOQUIMICH), producción azucarera (IANSÁ). A continuación, presentamos un cuadro resumen sobre el destino de las empresas privatizadas durante este período:

Destino de venta de las empresas públicas 1985-1988 (% de valor de venta, diciembre 1988)						
Empresa	Actividad	AFP	Bolsa	Trabajadores	Licitación	Otros
CAP	Siderurgia	-	58,5	41,5	-	-
CHILMETRO	Distribución eléctrica	24	45	31	-	-
CHILGENER	Generadora eléctrica	14	80	6	-	-
CHILQUINTA	Distribución eléctrica	17	74	9	-	-
EMEC	Distribución eléctrica	-	-	-	100	-
EMELSA	-	-	-	100	-	-
EMELAT	Distribución eléctrica	-	-	-	100	-
ENDESA	Generación y distribución eléctrica	36,4	44,6	10,7	-	8,4
PILMAIQUEN	Generadora eléctrica	-	-	-	100	-
PULLINQUE	Generadora eléctrica	-	-	-	100	-
ECOM	Computación	-	-	100	-	-
SCHWAGER	Carbón	13,2	68,1	7,2	-	11,6
ENAEX	Explosivos	-	-	-	100	-
ENTEL	Telecomunicaciones	29	48,2	20,2	-	2,6
CTC	Teléfonos	9,6	19,5	8,3	62,6	-
TELEX-CHILE	Télex	-	-	-	100	-
IANSÁ	Refinadora de azúcar	-	51,2	29,4	-	19,4
LAB. CHILE	Laboratorios	13,9	61	25,1	-	-
SOQUIMICH	Salitre	23	59	18	-	-
Total		17,6	49,7	20,4	9	3,3

(*) Estos porcentajes corresponden a la primera venta de acciones y no incorporan el efecto de posteriores transacciones sobre la composición de la propiedad de las empresas. Fuente: Huneeus, Carlos, *El Régimen de Pinochet*, Santiago, Ed. Sudamericana, 2001, p. 450. Los datos fueron obtenidos de: Marcel, Mario, 'Privatización y finanzas públicas: el caso de Chile, 1985-88', *Colección Estudios CIEPLAN*, n° 26, junio 1989, pp. 5-60.

En definitiva, se privatizaron por completo dieciocho empresas entre septiembre de 1985 y marzo de 1989, y solo nueve lo fueron parcialmente. La mayor parte de ellas eran superavitarias; prestaban un buen servicio y se autofinanciaban, pues eran administradas dentro de un marco institucional y regularorio estricto, sobre todo en lo referente a los monopolios naturales, además de exigírseles eficiencia en su gestión¹⁷³.

En síntesis, al momento de iniciarse el actual programa de privatizaciones, las empresas públicas —con contadas excepciones— se encontraban en buen pie, tanto desde el punto de vista de su rentabilidad como de sus niveles de endeudamiento¹⁷⁴.

Esto refuerza aun más la idea de una privatización con intereses políticos e ideológicos, por sobre los criterios técnicos de eficiencia. Incluso, los mayores defensores del proceso reconocen que efectivamente hubo un perjuicio patrimonial para el Estado¹⁷⁵, si bien lo minimizan en base a la valorización de mercado obtenida posteriormente por dichas empresas. A juicio de estos autores, la pérdida habría sido más bien una percepción de la época que un fenómeno real¹⁷⁶.

Solo el contexto político y social del país ayuda a explicar el bajo precio al que se vendieron las empresas, y por la urgencia del régimen en encontrar compradores, pues si no se entiende la baja cantidad de recursos que recibió el Estado por la venta de estos activos, y la forma en que fueron utilizados¹⁷⁷. Muchos de ellos fueron reconvertidos en préstamos para financiar nuevas privatizaciones. En otras palabras, fueron derivados como crédito para los nuevos posibles compradores.

Este segundo proceso privatizador estuvo marcado por el ingreso de capitales foráneos a través de la modalidad de swaps, es decir, canjes de deuda externa por paquetes accionarios de empresas. Esto aumentó enormemente los niveles de inversión extranjera en el país, apoyando la estrategia general del modelo exportador. Aquello obligó a los grupos económicos locales a competir, teniendo que mejorar sus estándares de gestión y productividad. En contrapartida, esto ha

significado una concentración importante del capital en Chile, más allá de las intenciones iniciales de la autoridad económica de la época por dispersar la propiedad y evitar lo ocurrido con el primer proceso de privatizaciones de la década de 1970. De acuerdo con Olave, en 1987 solo siete grupos económicos controlaban tres cuartas partes de las 300 principales sociedades anónimas, que además concentraban el grueso de la fuerza exportadora del país. En este sentido, concordamos con la opinión de la autora, quien afirma que la originalidad de la experiencia chilena debe buscarse en la incidencia que han logrado estos conglomerados en la configuración del actual modelo económico chileno.

En Chile, de manera temprana, se logra el consenso en torno al nuevo patrón de acumulación y a las reformas institucionales que deberían acompañarlo. La situación de excepcionalidad que confiere el régimen militar va a generar un campo propicio de ‘disciplinamiento’ social, no solo de las clases trabajadoras, sino incluso de los distintos sectores industriales, y una parte de las Fuerzas Armadas que no estaba completamente de acuerdo con las formas que asumía el proceso de transformación económica y social... Esta es una situación que no se observa en Argentina con posterioridad al Golpe militar de 1976, pues ahí existieron distintos grupos de poder y diferentes proyectos económicos y políticos. Quizás tampoco en Brasil, pues aunque se presentan características similares, en este caso las diferencias se dieron incluso en el bloque exportador¹⁷⁸.

Agregamos a esta visión la idea de que la recuperación económica vivida por el país, desde 1986, reafirmó el esquema de desarrollo, a pesar de los cuestionamientos surgidos tras la crisis de 1982. De manera retrospectiva, la intervención estatal y las restricciones iniciales a los movimientos de capital entregaron una mayor racionalidad y regulación al modelo, convirtiéndolo en una suerte de ejemplo exitoso para la región, a pesar del enorme costo social de la transformación. Probablemente este fue un efecto no esperado por los técnicos economistas del régimen militar, quienes, sin embargo, convencieron a las autoridades castrenses de continuar el camino trazado en 1975. La herencia material e ideológica del modelo económico autoritario quedaría marcada por este segundo momento de éxito y menos por sus inicios ortodoxos de la década

de 1970. Sin embargo, es allí donde deben buscarse sus fundamentos y sus más importantes defensores e ideólogos.

Las privatizaciones de la segunda ola han sido mostradas como el sello exitoso de la estrategia de desarrollo chilena, especialmente por organismos como el FMI, que lo ha utilizado como ejemplo a seguir en términos de procesos de ajuste estructural a nivel internacional. Dentro de esta óptica, el subempleo, el empleo precario y los bajos salarios no constituyen anomalías del sistema, sino el “resultado ‘natural’ de una forma más eficaz de asignar los recursos”¹⁷⁹. Visto de este modo, el patrón de acumulación capitalista chileno se ha adaptado con bastante facilidad a los requerimientos desregulatorios de la economía internacional, especialmente al momento de acelerarse los procesos de globalización, producto del hundimiento del bloque socialista a partir de 1989.

La herencia del régimen militar y el ‘amarre’ económico

La evolución política del régimen militar está ligada al propio itinerario institucional que se autoimpuso una vez que entró en vigor la nueva Constitución de 1980. En ella se establecía un cronograma de transición democrática hacia un régimen que ha sido denominado como ‘democracia protegida’¹⁸⁰. Dentro de este esquema, una vez terminado el régimen transicional comandado por el general Pinochet y la Junta de Gobierno, habría un período de ocho años en el cual gobernaría un Presidente de la República, pero incorporando un poder legislativo elegido, el cual tendría poderes claramente disminuidos. Sin embargo, quedaba un pequeño escollo electoral que debía sortear el régimen antes de prolongar su obra hasta 1997.

El inesperado inicio de la transición política a la democracia

La propia Constitución de 1980¹⁸¹ establecía un llamado a referéndum (plebiscito) para 1988, mediante el cual la ciudadanía debía aprobar o rechazar la propuesta de un ‘candidato único’ para seguir gobernando por otros ocho años¹⁸². El plebiscito incluía las opciones SÍ y NO. El SÍ implicaba aceptar la propuesta del gobierno militar y extender su mandato hasta 1997 a partir de marzo de 1989. En caso de que ganase la opción NO, el régimen extendería su mandato por un año más; llamaría a elecciones abiertas para diciembre de 1989 y entregaría el poder a las nuevas autoridades democráticamente elegidas en marzo de 1990.

El plebiscito era considerado como un trámite menor por las autoridades del gobierno militar, quienes mostraban una seguridad absoluta de ganar esta consulta ciudadana. Las razones para ello eran de diversa índole. En primer lugar, la economía del país mostraba claros signos de crecimiento desde 1986, sumado a esto un apoyo generalizado del mundo empresarial, que había recuperado la fe en el modelo económico de libre mercado. En segundo lugar, el régimen había superado la crisis económica y política de 1983-1984, que había desembocado en un amplio movimiento ciudadano de protesta, el cual se dividió producto de la decisión de un sector importante de sus líderes políticos de negociar con el régimen una transición pactada a la democracia. Lo anterior aisló a aquellos grupos que buscaban el derrocamiento de la dictadura. A lo anterior se agregaba el antecedente de haber ganado dos consultas ciudadanas previas, las cuales no habían contado ni con registros electorales ni tampoco con observadores internacionales¹⁸³. En caso de cualquier imprevisto, las autoridades contaban con todas las herramientas para manipular los resultados del plebiscito. Esto, además, le aseguraba que una parte importante del electorado de centroizquierda se marginaría de una consulta que, de antemano, no daba las condiciones mínimas de un proceso electoral limpio e informado¹⁸⁴. El régimen había ordenado a sus autoridades económicas, específicamente a su Ministro de Hacienda, Hernán Büchi, poner en marcha una política económica expansiva a partir de 1987, la cual tenía por objetivo dar una sensación de bonanza económica en la población¹⁸⁵. Por último, el régimen podía aplicar la censura a voluntad y además controlaba los principales medios de comunicación masiva (radio y televisión), a lo que se sumaba el apoyo explícito de los dos grandes consorcios de prensa chilenos: El Mercurio y COPESA¹⁸⁶.

Todos los factores anteriormente mencionados jugaban a favor del régimen, quien no temía al desgaste político tras casi diecisiete años de gobierno autoritario, los cuales incluían, entre otros muchos haberes negativos, una fuerte crisis económica, la restricción de libertades públicas, la falta de democracia, la destrucción del Estado de Compromiso y especialmente la condena de la comunidad internacional por las recurrentes violaciones a los derechos humanos. Probablemente, el régimen minimizó el hecho de haber negociado con parte de la oposición la creación de registros electorales, de un Tribunal Calificador de Elecciones, la inscripción de los partidos políticos, la autorización de propaganda política y la participación de observadores internacionales¹⁸⁷.

En efecto, una sentencia decisiva del Tribunal Constitucional (24 de septiembre de 1985), que se adoptó con cuatro votos a favor y tres en contra, estableció que el Plebiscito de Sucesión Presidencial debía quedar regulado por un Tribunal Calificador de Elecciones, contrariando, en este crucial punto, las disposiciones transitorias de la Constitución, que postergaban la actuación de este organismo hasta la primera elección parlamentaria. La gran consecuencia de este fallo es que obligaba a la realización del Plebiscito en los marcos de un sistema electoral público: registros electorales, vocales de mesa, apoderados, escrutinios informados, propaganda legal, etc.¹⁸⁸.

El gobierno siempre mantuvo la incertidumbre sobre cuándo se desarrollaría el proceso electoral, y no informó públicamente de la fecha del referéndum sino hasta un mes y cinco días antes de llevarse a cabo¹⁸⁹. Sin embargo, para gran sorpresa del régimen, el 5 de octubre de 1988 la decisión popular era contundente en contra de la extensión del gobierno militar con Pinochet a la cabeza del Estado. El resultado fue inesperado, especialmente para el propio general, quien había sido convencido por sus asesores de una victoria segura¹⁹⁰. El retraso en la entrega de los resultados es, hasta el día de hoy, una de las razones esgrimidas por quienes sostienen que hubo una intención manifiesta por parte de Pinochet y de algunos de sus colaboradores civiles y militares por desconocer el resultado de las urnas¹⁹¹.

Esa noche, el vicecomandante en jefe, general Santiago Sinclair, se presentó a ofrecer la fuerza del Ejército sin condiciones —sin importar los resultados del plebiscito— ‘para lo que usted quiera, mi general’¹⁹².

El general Pinochet decidió, finalmente, respetar el cronograma político impuesto por el régimen militar, a pesar del resultado adverso e inesperado del plebiscito, y de las sospechas de un desconocimiento de la derrota durante las primeras horas posteriores al acto electoral. A esto último contribuyó el reconocimiento del triunfo opositor por parte de una facción de sus partidarios, y especialmente de la intención de la Fuerza Aérea y de la Marina de no embarcarse en una nueva aventura putchista¹⁹³.

Una vez asumida la derrota, el régimen debía convocar a elecciones abiertas y contaba solo con un año para acelerar las reformas antes de entregar el poder a una nueva administración¹⁹⁴. Era casi un hecho que el próximo gobierno sería de la oposición de centro-izquierda, por lo cual el gobierno consideró urgente asegurar la llamada ‘obra’ del régimen, pues la intención manifiesta de la oposición era realizar cambios mayores en lo institucional y económico¹⁹⁵. No deja de ser significativo que para las elecciones de diciembre de 1989 un sector del oficialismo y el empresariado proclamaron al Ministro de Hacienda, Hernán Büchi, como candidato a la Presidencia de la República¹⁹⁶. El modelo económico e institucional era el principal legado que el régimen militar pretendía dejar al país, y para ello utilizó todos los medios disponibles. Büchi representaba aquel aspecto aparentemente más exitoso del período autoritario: la transformación de Chile en una sociedad de libre mercado, la cual se apreciaba sobre todo en la imagen de prosperidad material alcanzada entre 1985 y 1989¹⁹⁷.

Las medidas de amarre institucional y económico

Ante la posibilidad casi segura de una derrota en las elecciones de 1989, el régimen militar aceleró un conjunto de medidas destinadas a asegurar la permanencia del modelo económico e institucional establecido por la Constitución de 1980 y por su equipo económico. La intención manifiesta era evitar el supuesto populismo irresponsable de una nueva administración, mediante un conjunto de amarres institucionales destinados a restringir el margen de maniobra de las futuras autoridades. En tal sentido, compartimos la tesis de Carlos Huneeus, quien sostiene que el último momento del régimen militar (entre el 5 de octubre de 1988 y el 11 de marzo de 1990) no debe entenderse como un período de transición a la democracia, sino como el último tramo donde el régimen buscó completar sus objetivos. No se buscó facilitar el tránsito hacia un nuevo régimen, sino que —por el contrario— obstaculizar la gestión gubernativa de la coalición opositora.

Tras la derrota del plebiscito del 5 de octubre de 1988, el general Pinochet nombró, a fines del mismo mes, un nuevo gabinete de ministros con un marcado acento en los temas económicos. Hernán Büchi permaneció como jefe del equipo económico; Sergio Melnick fue nombrado en ODEPLAN y Juan Antonio Guzmán, en Educación. Otros hombres cercanos al primer equipo de Chicago fueron nombrados en puestos clave. Fue el caso de Carlos Cáceres en el Ministerio de Interior, Pablo Baraona en Economía y Hernán Felipe Errázuriz en Relaciones Exteriores¹⁹⁸. La permanencia del general Pinochet como Comandante en jefe del Ejército por otros ocho años, constituyó el mejor seguro del régimen para mantener su dispositivo institucional de ‘democracia protegida’. Esto le permitió además evitar cualquier tipo de investigación y condena judicial respecto de su persona y de sus subalternos en relación al tema de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante sus diecisiete años de mandato. La Constitución le aseguraba también el puesto de senador vitalicio a partir de 1998, una vez que hubiese dejado la jefatura del Ejército. Dicha calidad le permitiría gozar de la protección e inmunidad legal que otorga el fuero parlamentario¹⁹⁹.

Huneeus considera que fueron tres los objetivos principales del gobierno militar para enfrentar el cambio de régimen y de coalición política²⁰⁰:

Consolidar las reformas económicas para asegurar la arquitectura institucional neoliberal. Para ello se buscó acelerar y finalizar la segunda ola de privatizaciones, de modo que las nuevas autoridades se encontraran con una situación irreversible y de hechos consumados.

Establecer un conjunto de ‘amarres’ al futuro gobierno, con el objeto de dificultar su gestión y obligarlo a negociar en todo aquello que fuera esencial para la mantención del modelo económico. El posible retorno de lo que Pinochet denominaba como los ‘viejos políticos’, acentuó esta desconfianza.

Impulsar la candidatura presidencial y las listas parlamentarias de su coalición política con el fin de asegurar un número suficiente de parlamentarios y así conseguir la necesaria influencia legislativa frente al futuro gobierno de oposición.

Las numerosas trabas impuestas por la Constitución de 1980 al pleno ejercicio de las libertades democráticas, especialmente en lo referido al pluralismo político y a la tutela militar, explican que la coalición opositora (la Concertación) haya negociado un paquete de reformas con el gobierno militar a mediados de 1989²⁰¹. Esto fue visto como una excelente oportunidad por las autoridades del régimen militar, pues permitía legitimar la Constitución con la propia firma de sus opositores y bloquear así posibles futuras reformas.

Entre los amarres de última hora, hubo algunos que restringieron notablemente el margen de acción del poder ejecutivo. Uno de ellos fue la prerrogativa de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas para proponer las listas de ascensos y retiros de oficiales al Presidente de la República, lo que en la práctica limitaba a la máxima autoridad del país para castigar los actos de indisciplina de los uniformados. Este cambio fue realizado pocos días antes de la entrega del poder al nuevo gobierno mediante una Ley Orgánica Constitucional²⁰².

Pinochet, en su calidad de Jefe de Estado, también aprovechó de nombrar al nuevo Comandante en Jefe de la Marina, el Almirante Jorge Martínez Busch, un incondicional del régimen militar, debido a que el almirante José Toribio Merino había decidido retirarse tras diecisiete años al interior de la Junta de Gobierno. Respecto del poder judicial, el gobierno militar renovó a más de un tercio de los jueces de la Corte Suprema mediante el retiro anticipado de los más veteranos. Para ello les ofreció indemnizaciones millonarias que incluso alcanzaron los veintiocho salarios²⁰³. De esta manera, obtuvo una mayoría que le permitía bloquear cualquier querrela que apuntara al tema de los derechos humanos y a toda investigación de lo realizado durante el régimen militar. Para el año 1990, la Corte Suprema estaba conformada íntegramente por jueces nombrados durante el régimen militar, por lo cual no estaba en duda su lealtad con el mismo.

El objetivo de conseguir el control del más alto tribunal se explica no solo por los derechos humanos. También era muy importante porque la Corte Suprema tenía un destacado rol político en la democracia: nombraba tres de los nueve senadores institucionales y su presidente integraba el Consejo de Seguridad Nacional²⁰⁴.

La necesidad de completar las reformas económicas llevó al régimen a acelerar la promulgación de una serie de leyes en un plazo extremadamente corto. En total, se dictaron no menos de 226 leyes entre el 6 de octubre de 1988 y el 11 de marzo de 1990, cuando se entregó el poder a la coalición opositora.

La labor legislativa del régimen militar después del plebiscito de 1988

	Disolver democracia protegida	Amarre	Administración	Total
Regulatorias económicas	22	24	7	53-23%
Regulatorias políticas	51	33	24	108-48%
Regulatorias FEAA.	10	9	4	23-10%
Distributivas	15	2	7	24-11%
Otras	12	1	5	18-8%
Total	110-49%	69-30%	47-21%	226-100%

Fuente: Huneeus, Carlos, El Régimen de Pinochet, Op.cit., p.611.

Una de las modificaciones más importantes en el ámbito económico fue la dictación de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central, la cual entregó total autonomía a esta institución respecto del poder ejecutivo, y cuyo objetivo fue impedir cualquier atisbo de política expansiva por parte de un futuro gobierno²⁰⁵. La independencia del Banco Central se encontraba definida en la Constitución de 1980, pero no había sido implementada por el régimen militar, el cual justamente había aplicado una política monetaria laxista justo antes del plebiscito de 1988. Lo que se buscaba era crear una suerte de nuevo poder del Estado, esta vez económico e independiente de los otros tres poderes.

(la autonomía del Banco Central) pretende, además de preservar su carácter técnico, darle el nivel necesario para cautelar ciertos valores económicos fundamentales...²⁰⁶.

El objetivo principal del Banco Central autónomo respecto del poder ejecutivo era, a juicio de sus promotores, evitar cualquier manipulación de la política monetaria para dedicarse en esencia al control de la inflación y así evitar lo sucedido entre 1970 y 1973²⁰⁷. El gobierno militar aprovechó la coyuntura para nombrar a los consejeros del organismo (cinco en total), de los cuales negoció solo dos con la oposición democrática²⁰⁸.

Otra de las medidas significativas en el ámbito económico fue la disminución notoria de las facultades y la influencia de CORFO. Se limitó su capacidad de crear nuevas empresas públicas o participar de la propiedad de las mismas. A partir de aquel momento, sería necesario crear una ley especial para ello, contraviniendo el espíritu original de la corporación. Esta había sido creada en 1939 como la gran agencia del desarrollo económico del país, y paradójicamente había tenido una participación importante en las políticas de desarrollo implementadas durante el régimen militar.

La CORFO tuvo un papel central en el segundo proceso de privatizaciones, el cual se vio acelerado durante este período, especialmente en lo relacionado con ciertas empresas estratégicas del área de telecomunicaciones (CTC y ENTEL), electricidad (ENDESA) y transporte aéreo (LAN-CHILE)²⁰⁹. Aquellas empresas de servicios básicos que no alcanzaron a ser privatizadas, fueron rápidamente convertidas, por ley, en sociedades anónimas con el objeto de independizarlas administrativamente del Estado. Este fue el caso de las grandes empresas sanitarias EMOS y ESVAL²¹⁰.

Las medidas anteriormente descritas fueron acompañadas con una rigidez del aparato público, cuyo objetivo fue imponer a la siguiente administración una planta de funcionarios designada por el régimen militar. Se estableció la inamovilidad laboral a través de un nuevo Estatuto Administrativo²¹¹. Este reglamento se aplicó en 72 entidades del Estado, lo cual nunca se había hecho en los diecisiete años anteriores de gobierno autoritario, que paradójicamente había defendido el principio de la flexibilidad laboral como un dogma económico inalterable.

Finalmente, el régimen militar entregó a la siguiente administración un presupuesto que limitó fuertemente las capacidades de financiamiento de sus políticas públicas. Las estimaciones demasiado optimistas del precio del cobre para 1990, sumado a la política expansiva del régimen militar en los años 1988 y 1989, terminaron con un déficit de US\$300 millones como legado para el primer gobierno democrático en diecisiete años, el cual prometía hacer importantes cambios económicos y sociales²¹².

La década de los 90s debutaría con un nuevo gobierno democrático tras un largo período dictatorial. El régimen militar había sido derrotado en su proyecto político. Sin embargo, su modelo económico-institucional estaba lo suficientemente afianzado como para resistir toda reforma fundamental. Un cambio histórico e inesperado a nivel global ayudaría indirectamente al régimen. Se trataba de la caída de los llamados socialismos reales y el descrédito general al que fueron sometidos los diferentes modelos de economía planificada a partir de 1989. Las reformas económicas que fueron pioneras en Chile desde 1975, se convirtieron en un conjunto de recomendaciones comunes del FMI y el Banco Mundial a través del llamado Consenso de Washington, junto con la idea generalizada de que el mercado y la democracia iban inexorablemente de la mano²¹³. En este último punto, la continuación del modelo de libre mercado a través del autoritarismo militar, estaba desfasada con los nuevos tiempos.

Notas al Capítulo IV

¹ Entrevista a Pablo Baraona. En: Arancibia Clavel, Patricia, Cita con la Historia, Santiago, Editorial Biblioteca Americana, 2006, p. 137.

² Arancibia Clavel, Patricia & Balart Páez, Francisco, Sergio de Castro. El arquitecto del modelo económico chileno, Santiago, Editorial Biblioteca Americana, 2007, p. 339.

³ El tomo N° III de la Historia Contemporánea de Chile de Gabriel Salazar y Julio Pinto corresponde a una de estas excepciones. Centrado en los sujetos que han vivido estas transformaciones económicas durante los últimos cien años, el texto, no obstante, analiza brevemente las modernizaciones del régimen militar, privilegiando una interpretación más general sobre el período.

⁴ Una excepción lo constituye la interesante obra de Patricio Meller sobre la evolución económica de Chile: Meller, Patricio, Un Siglo de Economía Política Chilena (1890-1990), Santiago, Editorial Andrés Bello, 1998.

⁵ Véase: Larraín, Felipe & Vergara, Rodrigo (Eds.), La transformación económica de Chile, Santiago, CEP, 2000.

⁶ Huneus, Carlos, Op.cit., p. 437.

⁷ Ffrench-Davis, Ricardo. & Stallings, Bárbara (Eds.), Reformas, crecimiento y políticas sociales en Chile desde 1973, Santiago, LOM Ediciones, 2001.

⁸ Bárbara Stallings utiliza el concepto económico de ‘rent-seeking behavior’ para referirse a este fenómeno. Este se refiere al gasto de recursos con el fin de lograr una transferencia sin indemnización de bienes o servicios de otra persona o personas a uno mismo como el resultado de la decisión favorable producto de políticas públicas. El término parece haber sido acuñado (o al menos popularizado en economía política contemporánea) por el economista Gordon Tullock. Ejemplos de captación de rentas incluyen todas las diversas formas en que personas o grupos de lobby presionan al gobierno para obtener beneficios financieros u otras ventajas especiales a expensas de los contribuyentes o de los consumidores o de otros grupos o personas con las que los beneficiarios puedan estar en competencia económica. Un análisis técnico del concepto y sus implicancias económicas, puede encontrarse en la siguiente obra colectiva: Tullock, Gordon & Lockard, Alan (Eds.), Efficient Rent Seeking: Chronicle of an Intellectual Quagmire, Springer, 2000.

⁹ Sobre los grupos económicos, véase: Leff, Nathaniel, “Industrial Organization and Entrepreneurship in Developing Countries: The Economic Groups”, Economic Development and Cultural Change, Vol. 26, N° 4, 1978, pp. 661-675.

¹⁰ Paredes, Ricardo & Sánchez, José Miguel, Organización industrial y grupos económicos: el caso de Chile, Departamento de Economía Universidad de Chile, 1994, p. 11 (trabajo no publicado pero disponible como pdf en: <http://www.ricardoparedes.cl/paperweb/grupos.pdf>).

¹¹ El texto de la ley y sus posteriores modificaciones puede descargarse directamente desde la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile: http://www.bcn.cl/leyes_temas/leyes_por_tema.2007-07-11.7260257738.

¹² Véase: [Williamson, John, “The Washington Consensus revisited” en Emmerij, Louis \(Ed.\), Economic and Social Development Into the XXI Century, Inter-American Development Bank, 1997, p. 48-80. También del mismo autor: Williamson, John, “The Washington Consensus as Policy Prescription for Development”. Practitioners of Development. World Bank, 2004. y Williamson, John, “A short History of the Washington Consensus”, From Washington Consensus towards a new Global Governance, Barcelona, 2004. Para una visión crítica, véase también el completo análisis de: Dezalay, Yves & Garth, Bryant, “Le ‘Washington consensus’”, Actes de la recherche en sciences sociales, Vol. 121, N° 1, 1998, pp. 3-22.](#)

¹³ [Stallings, B., Op.cit., pp. 32-33.](#)

¹⁴ [Para una visión de largo plazo sobre la inversión extranjera directa, consúltese: Ffrench-Davis, Ricardo, “La inversión extranjera directa en Chile” en Muñoz, Ó. \(Ed.\), Hacia un Chile competitivo: Instituciones y políticas, Santiago, Editorial Universitaria, 2003, pp. 287-324.](#)

¹⁵ [Stallings, B., Op.cit., p. 34.](#)

¹⁶ [En 1973, el número de empresas controladas por el Estado era de 596, de las cuales 526 habían caído bajo su control entre 1970 y 1973 y que no pertenecían al patrimonio histórico de CORFO. Para 1976, la tarea de normalización de la propiedad implicó que 251 empresas intervenidas habían sido devueltas a sus antiguos dueños, y de las 235 empresas y bancos que eran propiedad de CORFO en 1973, 118 fueron adjudicadas y negociadas. Dejando de lado aquellas que se licitaron o liquidaron, el Estado quedaba solo en control de veinte empresas, principalmente aquellas que pertenecían a su patrimonio histórico. Consultar: Larraín, Felipe & Vergara, Rodrigo, La transformación económica de Chile, Santiago, CEP, 2000.](#)

¹⁷ Las normas que operaron como base del proceso de devolución de empresas fueron los de cretos leyes N° 88 (1973), N° 333 (1974) y N° 1.068 (1975). Véase: Cámara de Diputados de Chile, *Evolución de las normas que regularon el proceso de privatización en Chile desde 1970 a 1990*, Secretaría de la Comisión de Privatizaciones, 2005.

¹⁸ Stallings, B., *Op.cit.*, p. 36.

¹⁹ Dos importantes bancos (de Talca y Español Chile) habían sido intervenidos en noviembre de 1981, acusados de haber tomado un riesgo excesivo. También fueron intervenidas otras cuatro sociedades financieras (Compañía General, Cash, de Capitales y del Sur) y dos bancos más pequeños (de Linares y Fomento de Valparaíso). Datos obtenidos de: Castañeda, Lina & Ramírez, Claudia, “A 25 años de la intervención bancaria en Chile”, *Economía y Negocios*, El Mercurio, 12-01-2008.

²⁰ Compañía de Teléfonos de Chile (CTC), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), Empresa Nacional de Electricidad Sociedad Anónima (ENDESA), Compañía de Acero del Pacífico (CAP).

²¹ Corporación del Cobre (CODELCO), Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).

²² Una interpretación excesivamente optimista y demasiado contemporánea del llamado ‘capitalismo popular’, aunque posee interesantes cifras para el análisis, puede encontrarse en: Valenzuela, Mario, “Reprivatización y capitalismo popular en Chile”, *Estudios Públicos*, N° 33, 1989, pp. 175-217.

²³ Esta variación del ‘capitalismo popular’ fue definida irónicamente por las

autoridades del régimen militar como ‘capitalismo laboral’, en lo que constituye un concepto paradójal en sí mismo, que porta significados contrapuestos; lo que en literatura se conoce como oximorón.

²⁴ Con posterioridad al año 1985, las principales disposiciones destinadas a regular la privatización de las instituciones financieras y las empresas, mediante el llamado ‘capitalismo popular’, fueron las leyes N° 18.401 y N° 18.398, las cuales conformaron el fundamento primario del sistema de privatizaciones.

²⁵ Délano, Manuel, “Chile en venta. El régimen militar de Pinochet acelera las privatizaciones en favor de transnacionales”, El País, 06-11-1988, pp. 10-11.

²⁶ Quien mejor ha analizado y descrito esta relación entre los grupos económicos, los ejecutivos de las empresas privatizadas y su papel en la futura propiedad de las mismas, es María Olivia Mönckeberg. Véase especialmente el capítulo I: Mönckeberg, María Olivia, El Saqueo de los Grupos Económicos al Estado Chileno, Santiago, Ediciones B, 2001.

²⁷ Esta concepción de derechos sociales está definida en los artículos 22 y 25 de la Declaración de Derechos Humanos de la ONU del 10 de diciembre de 1948. Art. 25: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.

²⁸ Stallings, B., Op.cit., p. 38.

²⁹ Sobre la reforma laboral y su continuidad y cambio durante la transición a la democracia, véase: Cortázar, René, Política laboral en el Chile Democrático: Avances y Desafíos en los Noventa, Santiago, Dolmen Ediciones, 1993, 171 p. También: Mizala, Alejandra & Romaguera, Pilar, “La legislación laboral y el mercado del trabajo: 1975-2000” en Ffrench-Davis, Ricardo & Sta llings, Bárbara (Eds.), Reformas, crecimiento y políticas sociales en Chile desde 1973, Santiago, LOM Ediciones, 2001, pp. 201-230.

³⁰ En palabras del propio gestor de la reforma, el Ministro del Trabajo de la época, José Piñera, la verdadera razón de su puesta en marcha fue la necesidad de evitar el boicot internacional al comercio chileno, por parte de la central sindical estadounidense AFL-CIO, debido a la represión de los sindicatos. El régimen militar debió demostrar que estaba dispuesto a mejorar su relación con los trabajadores y a reconocerles ciertos derechos, dejando de lado las medidas represivas de emergencia utilizadas hasta ese momento. Una misión de la AFL-CIO había visitado el país en marzo de 1978, donde constató la represión a los sindicatos, la confiscación de sus locales y el despido injustificado de cientos de trabajadores. Fue así como amenazó al gobierno de Pinochet con un boicot y otras sanciones a nivel internacional. Esto constituía un golpe mortal a la estrategia exportadora seguida por los tecnócratas liberales del régimen.

³¹ Federación Americana del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales. En inglés, la sigla AFL-CIO quiere decir: American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations. Creada en 1955, esta institución es reconocida como la mayor confederación de organizaciones sindicales de Estados Unidos y Canadá, agrupando a más de diez millones de trabajadores.

³² Olave-Castillo, Patricia, El proyecto neoliberal en Chile y la construcción de una nueva economía, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Ediciones El Caballito S.A., 1997.

³³ Piñera, José, La revolución laboral en Chile, Zig-Zag, 1991, p. 6.

³⁴ Drake, Paul, “El movimiento obrero en Chile: De la Unidad Popular a la Concertación”, Revista de Ciencia Política, Vol. 23, N° 2, 2003, p. 151.

³⁵ En 1927, comenzó la aplicación de la nueva legislación laboral. La gran diversidad de leyes laborales, reglamentos y decretos relacionados con su aplicación, hizo necesaria la dictación de un solo cuerpo legal para facilitar su estudio, divulgación y aplicación. El 6 de febrero de 1931, fue aprobado en el Congreso Nacional el Código del Trabajo, refundiendo en un solo texto catorce leyes y decretos leyes relacionados con el mundo del trabajo (véase Memoria Chilena: www.memoriachilena.cl). Sobre el Código del Trabajo de 1931 y el contexto social y político en el cual fue promulgado, véase: Rojas Flores, Jorge, La dictadura de Ibáñez y los sindicatos: (1927-1931), Santiago, DIBAM, 1993.

³⁶ A esto se agrega el hecho de que la Dirección del Trabajo, la oficina pública encargada de la fiscalización del Código del Trabajo, fue reducida de manera importante en su personal y en su presupuesto durante el régimen militar.

³⁷ Winn, Peter, Victims of the chilean miracle. Workers and Neoliberalism in the Pinochet Era, 1973-2002, London, Duke University Press, 2004, p. 35.

³⁸ *Ibíd.*, p. 35.

³⁹ La reforma se llevó a cabo mediante el Decreto Ley 3500 del año 1981.

⁴⁰ Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

[41 Arellano Ortiz, Pablo, “Las AFP’s no son un producto de exportación verdaderamente chile- no”, Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del lavoro e sulle Relazioni Industriali, Working Paper N° 45, 2007, p. 3.](#)

[42 Uno de los libros más reconocido por su apología a la reforma previsional fue escrito por José Piñera, quien fuera Ministro del Trabajo durante el régimen militar \(1978-1980\) e impulsor principal de la iniciativa. En el texto, pueden encontrarse detallados los principales argumentos a favor del nuevo sistema y una crítica despiadada a los sistemas de pensiones por repartición. Piñera se ha convertido, especialmente a partir de la década de 1990, en uno de los activistas más reconocidos a nivel mundial a favor del modelo de capitalización individual. Piñera, José, El cascabel al gato: la batalla por la reforma previsional, Zig-Zag, 1991.](#)

[43 Stallings, Bárbara, Op.cit., p. 41.](#)

[44 Ibíd., p. 41.](#)

[45 Büchi, Hernán, La transformación económica de Chile. Del estatismo a la libertad económica, Bogotá, Editorial Norma, 1993, p. 112, 114.](#)

[46 El Decreto Ley 3500 estableció la afiliación obligatoria a contar del 1 de enero de 1983 para aquellos que se incorporaran por primera vez al mercado de trabajo a partir de esta fecha. Para lo que ya estaban afiliados a los antiguos sistemas \(la gran mayoría de reparto\) antes de la entrada en vigor de la reforma, existió la opción de elegir por el nuevo o el viejo sistema.](#)

⁴⁷ Riesco, Manuel & Fazio, Hugo, “Las Asociaciones de Fondos de Pensiones (AFP) Chilenas”, New Left Review, N° 223, 1997, pp. 90-100.

⁴⁸ Aquí se encuentra uno de los pilares ideológicos centrales de los economistas neoclásicos formados en la teoría de la acción racional (Rational Choice). En términos generales, esta teoría plantea que los individuos siempre toman mejores decisiones y más racionales cuando lo hacen en cuanto tales y no como colectivo. La aplicación práctica de esta idea en economía plantea que es el individuo quien racionalmente busca su mayor beneficio entre las opciones que le ofrece el mercado. Si esto no es posible por falta de información o deficiencias culturales, siempre será mejor que decida por él un ente privado y no el Estado. Ver: Arnsperger, Christian & Varoufakis, Yanis, “What Is Neoclassical Economics?”, Post-autistic economics review, N° 38, Julio 2006, pp. 2-12. Para una mirada más contemporánea sobre el concepto, recomendamos la lectura de: Boylan, Thomas & Gekker, Ruvin, Economics, Rational Choice and Normative Philosophy, Routledge, 2008.

⁴⁹ De acuerdo con Hugo Fazio, durante el período 1984-1989, se efectuaron privatizaciones ascendentes a 1.507 millones de dólares, monto equivalente a un 5% del PIB de 1990; además, se usó profusamente el mecanismo del capitalismo popular. Se habló de expandir la propiedad; democratizarla. Los hechos, en cambio, demostraron que por esa vía se condujo, finalmente, a acentuar la centralización de capitales, su control por pocas manos, ya que los títulos en poder de ‘capitales populares’ fueron rápidamente adquiridos por grandes actores económicos. Fazio, Hugo, Mapa actual de la extrema riqueza en Chile, Santiago, LOM Ediciones, 1997, 462 p. También: Fazio, Hugo, Mapa de la extrema riqueza al año 2005, Santiago, LOM Ediciones, 2005.

⁵⁰ *Ibíd.*, p. 7.

⁵¹ Los llamados ‘Grupos Económicos’ eran conglomerados que se destacaban por el control que tenía un accionista (o grupo de accionistas) de varias sociedades de inversión o ‘sociedades de papel’ que, a su vez, eran los accionistas de bancos e instituciones financieras no bancarias, así como de empresas que participan en la producción de bienes y servicios denominadas ‘empresas con chimenea’. Ver: Barandiarán, Edgardo & Hernández, Leonardo, “Origins and resolution of a banking crisis: Chile 1982-86”, Central Bank of Chile Working Papers, N° 57, 1999, p. 5. También: Paredes, Ricardo & Sánchez, José Miguel, “Organización industrial y grupos económicos: el caso de Chile” (trabajo no publicado), 1994, pp. 1-35. Para una visión crítica de los grupos económicos en Chile, recomendamos: Fazio, Hugo, Mapa actual de la extrema riqueza en Chile, Santiago, LOM Ediciones, 1997, 462 p. y desde un punto de vista periodístico: Mönckeberg, María Olivia, El Saqueo de los Grupos Económicos al Estado Chileno, Santiago, Ediciones B, 2001.

⁵² Un interesante análisis de largo plazo sobre la distribución del ingreso en Chile entre 1973 y 2005, puede encontrarse en: Ffrench-Davis, Ricardo, “La distribución del ingreso en Chile: deuda pendiente”, Quórum. Revista de Pensamiento Iberoamericano, N° 14, 2006, pp. 153-160. Véase también: Larrañaga, Osvaldo, “Distribución de ingresos: 1958-2001” en Ffrench-Davis, Ricardo & Stallings, Bárbara (Eds.), Op.cit., pp. 295-329.

⁵³ Las reformas llevadas a cabo durante el régimen de militar (1973-1990) apuntaron principalmente a la descentralización del sistema y al desarrollo de un sector privado. Esta descentralización comprendió un proceso de disminución de la concentración y la transferencia del sistema de atención primaria desde el poder central hacia las municipalidades.

⁵⁴ En 1974, el Estado chileno contribuía con el 61% del gasto en salud pública; los cotizantes aportaban un 19%. En 1989, el estado bajó su aporte a 17%, mientras los cotizantes subieron a un 81%. El aporte patronal, por su parte, se redujo de un 19% en 1974 a solo 1,6% voluntario en 1989. Cifras obtenidas de: Salazar, Gabriel & Pinto, Julio, Historia Contemporánea de Chile I. Estado,

legitimidad, ciudadanía, Santiago, LOM, 1999, p. 112.

⁵⁵ “Entre 1932 y 1973, la existencia de regímenes liberales democráticos, la expansión de los derechos políticos y la creciente movilización y participación social, favorecieron un mayor acceso a la asistencia médico sanitaria y la expansión de las políticas públicas. La profesión médica sufrió cambios importantes, ya que la primera reforma amplió el mercado de trabajo médico. Hacia 1930, el sector médico se organizó profesionalmente. A mediados del siglo XX, se crea el Servicio Nacional de Salud (SNS) con sus beneficios y sus exclusiones, y se funda el Colegio Médico que contribuye a fortalecer la capacidad de la profesión médica para ejercer presión política. A mediados de los años sesenta, el SNS presentaba un aceptable grado de eficiencia, de capacidad técnica y de cobertura. El 90% de los médicos tenían vínculos contractuales con el sistema público, aunque con jornadas parciales de trabajo y concentración de médicos en la capital de Chile (Santiago). Los problemas de financiamiento y funcionamiento del SNS dividieron a los médicos entre quienes propugnaban una medicina más socializada y aquellos que privilegiaban la práctica privada”. Véase: Labra, María Eliana, “El sistema de salud de Chile: reformas del pasado, dilemas del presente”, Salud y Cambio, Vol. 6, N° 23, 1997, pp. 7-22.

⁵⁶ Alrededor del 90% de las atenciones hospitalarias y sobre el 85% de las ambulatorias eran efectuadas en la infraestructura estatal. Véase: Titelman, Daniel, “Las reformas al sistema de salud: desafíos pendientes” en Ffrench-Davis, R. & Stallings, B. (Eds.), Op.cit., p. 264.

⁵⁷ El Servicio Nacional de Salud (SNS) fue creado en 1952, unificando a diversos organismos públicos que prestaban servicios de salud. El SNS se transformó prácticamente en una empresa nacional con alrededor de 120.000 funcionarios, cuya red asistencial alcanzó una importante cobertura geográfica y poblacional. Entre 1952 y 1973, la gestión política, económica y organizacional aplicada al sector salud tuvo una orientación predominante de planificación central. (Fuente: Documento UNEDI- Colegio Médico de Chile).

⁵⁸ Stallings, Bárbara, Op.cit., p. 43.

⁵⁹ Hacia 1980, se acentuó este proceso de traspaso de la atención primaria hacia las municipalidades, el cual terminó solo en 1987. Si bien los establecimientos siguieron formando parte del Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNS), el control, la gestión, el equipamiento y personal quedaron bajo la tutela y responsabilidad de los municipios.

⁶⁰ De acuerdo con Daniel Titelman, y siguiendo la coherencia de los tecnócratas del régimen militar respecto de la reforma previsional, en febrero de 1981 se dictó el Decreto Ley N° 3.626, que permitió la participación del sector privado en la administración del financiamiento y en el desarrollo de sistemas privados de atención médica.

⁶¹ Lenz, Rony, “Proceso político de la reforma AUGE de salud en Chile: algunas lecciones para América Latina. Una mirada desde la economía política”, Serie Estudios socio/económicos CIEPLAN, N° 38, 2007, p. 6.

⁶² De acuerdo con al análisis de Rony Lenz, a la falta intrínseca de equidad, se sumó el hecho de que el arreglo institucional permitía que el alto riesgo, que no era rentable de cubrir por las ISAPRES, fuera absorbido por FONASA, en una suerte de reaseguro implícito, principalmente la población mayor de 65 años, enfermos crónicos y catastróficos. Lenz, Rony, Op.cit., p. 6.

⁶³ Titelman, Daniel, Op.cit., p. 6.

⁶⁴ Sobre las reformas liberales de los sistemas de salud en el continente, véase: Ugalde, Antonio & Homedes, Nuria, “Why neoliberal reforms have failed in Latin America”, Health Policy, Vol. 71, N° 1, 2005, p. 83-96. También: Ugalde, Antonio & Homedes, Nuria, “Las reformas neoliberales del sector de la salud: déficit gerencial y alienación del recurso humano en América Latina”, Revista Panamericana de Salud Pública, Vol. 17, N° 3, 2005, pp. 202-209.

⁶⁵ Aún en la actualidad (2008), los planes de salud de las ISAPRES tienen la duración de un año, siendo alterados unilateralmente por la empresa tanto en su precio como en la cobertura de las prestaciones. Solo la Superintendencia de ISAPRE (organismo del Estado) puede actuar como árbitro en casos de abusos.

⁶⁶ A esto se suman las críticas constantes a las ISAPRES por el alza injustificada de planes, los costos de administración y el aumento de los copagos de los usuarios. A ello se agrega el hecho de que los planes de salud privados aumentan su precio también dependiendo de la edad del cotizante, haciéndose en muchos casos insostenibles para las personas de la tercera edad, quienes terminan siendo expulsados hacia el sistema público, justamente en el momento en que sus gastos médicos aumentan. Algunas críticas recientes al sistema aparecen en: Zambra, Darío, “Prueba de blancura”, La Nación, 01-04-2007, pp. 4-5. Disponible en: http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20070331/pags/200703311814

⁶⁷ Labra, María Eliana, “La reinención neoliberal de la inequidad en Chile: el caso de la salud”, Cad. Saúde Pública, Vol. 18, N° 4, 2002, p. 1046.

⁶⁸ Titelman, Daniel, Op.cit., p. 291.

⁶⁹ Núñez, Iván, La Descentralización y las Reformas Educativas, Santiago, PIIE Serie Histórica, 1990, Cap. IV.

⁷⁰ Ver: Rubilar Solís, Luis, “La Escuela Nacional Unificada (ENU, febrero 1973)”, Extramuros, N° 3, 2004, pp. 56-65. Una visión crítica sobre el proyecto de la Escuela Nacional Unificada del gobierno de la Unidad Popular, puede encontrarse en: Salinas, Augusto, “El proyecto de una Escuela Nacional Unificada (ENU) de 1973 como antecedente del proyecto actual de una nueva LOCE”, Centro de Políticas Públicas, Universidad del Desarrollo, Informe N° 7, 2007, pp. 1-7.

⁷¹ Ver: Reyes Del Villar, Soledad, La revolución cultural de los años 60, vista a través del mayo francés y del movimiento estudiantil chileno, Santiago, Tesis de Licenciatura en Historia - Pontificia Universidad Católica de Chile, 1999.

⁷² Sobre las ideas que hay tras el proceso de privatización de la educación chilena, recomendamos especialmente: Ruiz, Carlos, “Educación, Mercado y Privatización”, Santiago, Universidad de Chile, 2003, <http://www.uchile.cl/facultades/filosofia/Editorial/documenta/reflexunive/08.htm>

⁷³ *Ibíd.*, p. 2.

⁷⁴ *Ibíd.*, p. 3.

⁷⁵ Sobre las disputas entre liberales y conservadores chilenos durante la segunda mitad del siglo XIX respecto a la concepción y atribuciones de un Estado laico, recomendamos: Serrano, Sol, “La definición de lo público en un estado católico”, Estudios Públicos, N° 76, 1999, pp. 211 232. Además: Krebs, Ricardo, Catolicismo y laicismo: Las bases doctrinarias del conflicto entre la Iglesia y el Estado en Chile, 1875-1885: seis estudios, Santiago, Ediciones Nueva Universidad, Vicerrectoría de Comunicaciones, Pontificia Universidad Católica

de Chile, 1981.

⁷⁶ Ver especialmente: Enlow, Robert & Ealy, Leonore (Eds.), Liberty & Learning: Milton Friedman's Voucher Idea at Fifty, Cato Institute, 2006, 140 p. Consultar también el clásico texto de Friedman que inició este debate en 1955: Friedman, Milton, "The Role of Government in Education" en Solo, R. (Ed.), Economics and the Public Interest, New Jersey, Rutgers University Press, 1955.

⁷⁷ Sobre la evolución del Estado Docente en Chile y Latinoamérica, revisar: Álvarez Gallego, Alejandro, "Del Estado docente a la sociedad educadora: ¿un cambio de época?" Revista Iberoamericana de Educación, N° 26, 2001, pp. 35-58. Recomendamos también la visión de conjunto de Bernardo Subercaseaux sobre el debate de ideas y de la cultura en Chile: Subercaseaux, Bernardo, Historia de las ideas y de la cultura en Chile, Santiago, Editorial Universitaria, 1997, Vol. II, 241 p. Una visión totalmente crítica respecto al Estado Docente y en perfecta armonía con el modelo de privatización de la educación, se halla en: Piñera, José, "Propuesta de reforma educacional para Chile", Washington D.C., elcato.org, octubre 2003, <http://www.elcato.org/node/125>.

⁷⁸ Jofré, Gerardo, "El sistema de subvenciones en educación: la experiencia chilena", Estudios Públicos, N° 32, 1988, pp. 193-237. Citado por Ruiz, Op.cit., p. 5.

⁷⁹ Ver: Mizala, Alejandra, "La economía política de la reforma educacional en Chile", Serie Estudios socio/económicos CIEPLAN, N° 36, 2007, pp. 1-45.

⁸⁰ (PERT) Program Evaluation and Review Technique. (SIMCE) Sistema de Medición de la Calidad de la Enseñanza.

⁸¹ Mizala, Op.cit., p. 5.

⁸² El impacto negativo en los salarios de los profesores se vio aumentado por la pérdida de una serie de derechos y bonos correspondientes a sus años de antigüedad en el sistema. Esto es lo que se ha llamado la deuda histórica del Estado de Chile con sus maestros del sistema público. Esta deuda se arrastra desde 1981, cuando se estipuló una indemnización especial a los profesores que fueron trasladados a la administración municipal, de acuerdo con el Decreto Ley 3.551.

⁸³ En Chile, todos los estudiantes que terminan la educación secundaria rinden una prueba nacional de ingreso a la universidad, según la cual se distribuyen los puntajes de acuerdo con la oferta de cupos, la calidad de la universidad y el nivel de demanda de determinadas carreras. Generalmente, el prestigio de un diploma está dado por su puntaje de ingreso. Mientras más alto es el puntaje, más prestigioso es considerado el diploma universitario.

⁸⁴ Ruiz, Op.cit., pp. 7-8.

⁸⁵ Mizala, Op.cit., p. 8.

⁸⁶ Ver: Vargas, M. C., “El caso chileno en la Asamblea General y la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas”, Revista Chilena de Derechos Humanos, Academia de Humanismo Cristiano, N° 12, 1990, pp. 1-44. Un buen listado de referencias sobre las condenas internacionales al régimen militar chileno por tema de los derechos humanos, puede encontrarse en: Lira, Elizabeth & Loveman, Brian, Políticas de reparación: Chile 1990-2004, Santiago, LOM Ediciones, 2005.

⁸⁷ El movimiento de paros y protestas se inició el 11 de mayo de 1983 con el primer llamado de la Confederación de Trabajadores del Cobre producto de la deteriorada situación económica del país. En total, se realizaron veintidós jornadas de manifestación entre 1983 y 1987, las cuales tuvieron un importante costo en vidas humanas producto de los enfrentamientos con las fuerzas policiales y la represión que, en muchos casos, hizo uso directo de la fuerza militar. El movimiento tuvo un enorme arraigo en los sectores urbanos marginados (poblaciones), de donde espontáneamente se formaron organizaciones de resistencia, la mayor parte de las veces no vinculadas con los partidos políticos que formaban la oposición al régimen militar. Este movimiento de protesta y desobediencia civil obligó a las autoridades del régimen a iniciar conversaciones con grupos opositores y, por primera vez, mencionar la posibilidad de un retorno pactado a la democracia. Para un análisis en detalle del período y las formas adoptadas por este movimiento, recomendamos la lectura de las siguientes obras: De La Maza, Gonzalo & Garcés, Mario, *La explosión de las mayorías: protesta nacional 1983-1984*, Santiago, Educación y Comunicación-Gráfica Andes, 1985, 134 p., Weinstein, José, *Los jóvenes pobladores en las protestas nacionales (1983-1984): una visión socio-política*, Santiago, CIDE, 1989, 169 p., Schkolnik, Mariana & Teitelboim, Berta, *Pobreza y desempleo en poblaciones : la otra cara del modelo neoliberal*, Santiago, PET impresión, 1988, 347 p., Tironi, E., *Autoritarismo, modernización y marginalidad: el caso de Chile 1973-1989*, Santiago, SUR, 1990, 280 p. y la obra general de: Salazar, Gabriel & Pinto, Julio, *Historia Contemporánea de Chile IV. Hombría y Feminidad*, Santiago, LOM, 2002, 277 p. Una reciente y muy recomendable crónica de los eventos del ciclo de paros y protestas iniciadas en 1983, se encuentra en: Moscoso, Pablo, “1983. Historia de un año de protesta”, en *Historias del siglo XX chileno*, Santiago, Vergara Eds., 2008, pp. 401-464.

⁸⁸ Los principales logros económicos del régimen militar durante los años del ‘milagro’, han sido bien resumidos por Patricio Meller: a) La tasa de inflación, que ascendía a más de 600% al año durante 1973 bajó a menos del 10% en 1981, b) La tasa promedio anual de crecimiento económico llegó casi a 8% durante el período 1976-81, c) La exportación total aumentó entre tres a cuatro veces (en dólares corrientes) durante 1973 y 1980/1981, alcanzando la cifra récord de US\$ 4.705 millones en 1980. Sin embargo, el aumento de las exportaciones no tradicionales fue más impresionante, porque en 1973 estas solo alcanzaban los US\$ 100 millones, y en 1980 habían subido a más de US\$ 1.800 millones, d) Las

reservas internacionales del Banco Central aumentaron de US\$ 167 millones en 1973 a US\$ 4.074 millones en 1980, e) El déficit público (excluyendo la APS), que había alcanzado la impresionante cifra de 21,0% del PIB en 1973, registró superávit de 5,5% y 2,9% en 1980 y 1981, respectivamente, f) Los salarios reales aumentaron en 9% por año durante la mayor parte de los años del ‘milagro’. Meller, Patricio, Op.cit., p. 195.

⁸⁹ Según el estudio de Fernando Dahse, a fines de 1978, cinco grupos económicos controlaban el 53% de los bienes de las 250 mayores empresas privadas del país; y junto a otros cuatro manejaban el 82% de los activos y el 60% de los créditos del sistema bancario, además del 64% de los préstamos otorgados por instituciones financieras. Los grupos económicos más importantes, en 1980, en términos patrimoniales eran (U\$ millones): (1) Cruzat-Larraín (1.000 U\$M), (2) BHC (520 U\$M), (3) Matte (360 U\$M), (4) Angelini (140 U\$M), (5) Edwards (74 U\$M), (6) Luksic (150 U\$M), (7) Yarur Banna (100 U\$M) y (8) Parir Lolas (20 U\$M). Dahse, Fernando, El mapa de la extrema riqueza: los grupos económicos y el proceso de concentración de capitales, Santiago, Editorial Aconcagua, 1979, 209 p. También: Ledesma De Lapeyra, Viviana, “La junta militar y su modelo económico”, Tebeto: Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura, N° 11, 1998, pp. 267-294.

⁹⁰ Tironi, Eugenio, Autoritarismo, modernización y marginalidad: el caso de Chile 1973-1989, Santiago, SUR, 1990, p. 141.

⁹¹ Recomendamos especialmente la lectura de: Barandiarán, Edgardo & Hernández, Leonardo, Op.cit., pp. 1-4.

⁹² De acuerdo con Held y Jiménez, se dieron fallas en la regulación y supervisión de las entidades financieras, lo cual ocasionó que se otorgaran o renovaran créditos de alto riesgo y no se constituyeran suficientes provisiones o reservas para enfrentarlos. Una buena parte de estas colocaciones resultaron incobrables o de dudosa recuperabilidad, y muchas de ellas fueron asumidas por el Estado al

ser traspasadas al Banco Central con motivo de las medidas de saneamiento que se pusieron en marcha a partir de 1982. Held, Gunther & Jiménez, Luis Felipe, *Liberalización, crisis y reforma del sistema bancario chileno 1974-1999*, Santiago, CEPAL, 1999, pp. 17-19.

⁹³ Acosta, Welky, Matamoros, Ronel & Suárez, Víctor, “Análisis de la crisis económica chilena a principios de los años 80”, Aula de Economía, San José (Costa Rica), 2006. Disponible en: <http://www.auladeeconomia.com/articulosot-10.htm>.

⁹⁴ Vial, Gonzalo, “Pinochet. Decisiones Claves, La crisis económica de 1982”, Cap. VII, La Segunda, abril 1998.

⁹⁵ Held, Gunther & Jiménez, Luis Felipe, Op.cit., pp. 20-21.

⁹⁶ En 1981, el déficit de la balanza comercial fue de casi U\$2.700 millones, que en gran parte se explica por el bajo precio del cobre y la necesidad de financiar la importación de petróleo. Ver: Arancibia Clavel, Patricia & Balart Páez, Francisco, Op.cit., p. 354.

⁹⁷ Consultar: Damill, Mario & Fanelli, José María, “La macroeconomía de América Latina: de la crisis de la deuda a las reformas estructurales”, Economía (CEDES), N° 100, 1994, pp. 1-64. También: Romero Pérez, Jorge, *La crisis y la deuda externa en América Latina*, San José, Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1993, 231 p. Una excelente síntesis sobre la crisis de la deuda se halla en: Roxborough, Ian, “La clase trabajadora urbana y el movimiento obrero en América Latina desde 1930” en Leslie, Bethell (Ed.), *Historia de América Latina. Economía y sociedad desde 1930* (Vol. 12), Cambridge, Cambridge University Press, 1997, pp. 183-192. Uno de los mejores análisis a nivel continental se encuentra en: French-Davis, Ricardo, Muñoz, Óscar & Palma,

José Gabriel, “Las economías latinoamericanas 1950-1990” en Leslie, Bethell (Ed.), Historia de América Latina. Economía y sociedad desde 1930 (Vol. 11), Cambridge, Cambridge University Press, 1997, pp. 149-158.

⁹⁸ De acuerdo con Ian Roxborough, “los efectos de la crisis de la deuda en Chile fueron algo diferentes de lo ocurrido en muchos países. En primer lugar, la crisis se desató sobre un país que ya había puesto en práctica medidas ortodoxas de estabilización y reestructuración bajo el gobierno militar del general Pinochet (1973-1990). Gran parte del coste del ajuste ya lo había soportado la clase trabajadora y, además, los inversionistas internacionales seguían teniendo confianza en la economía chilena debido al carácter sumamente ortodoxo de las medidas económicas que se aplicaban en este país”. Roxborough, Ian, Op.cit., p. 188.

⁹⁹ Angell, Alan, Op.cit., p. 117.

¹⁰⁰ El saldo en cuenta corriente mide el saldo neto (positivo o negativo) de las exportaciones de bienes y servicios de un país al resto del mundo menos sus importaciones de bienes y servicios desde el resto del mundo en un período determinado. La diferencia con la balanza comercial es que incluye las donaciones o transferencias unilaterales y la prestación y contratación de servicios al y con el exterior como, por ejemplo, transporte, seguros o intereses. Ver: Sachs, Jeffrey & Larraín, Felipe, Macroeconomía en la economía global, México, Prentice Hall Hispanoamericana, 1994.

¹⁰¹ En 1979, las autoridades económicas del régimen militar estaban convencidas que una fijación del peso en relación al dólar aceleraría la convergencia entre la inflación en Estados Unidos y la inflación local, aumentando de paso el nivel de reservas de divisas, lo cual permitiría afrontar cualquier shock externo. Esto, si bien no era parte de la ortodoxia neoclásica (la libre flotación del precio del dólar según las leyes de oferta y demanda), se había convertido en un pilar fundamental de la política económica del régimen. Ver: Barandiarán, Edgardo &

Hernández, Leonardo, Op.cit., p. 12.

¹⁰² Palabras del Ministro de Hacienda, de Sergio de Castro, el 24 de julio 1981 durante la exposición sobre el estado de la Hacienda Pública. En: Arancibia Clavel, Patricia & Balart Páez, Francisco, Op.cit., p. 357.

¹⁰³ Compañía de Refinería de Azúcar de Viña del Mar (CRAV). Los inicios de CRAV S.A. se remontan a 1887, siendo una de las primeras compañías privadas de Chile en abastecer y satisfacer las necesidades de azúcar del país, para lo cual importaba azúcar de caña, la refinaba y la vendía posteriormente. Habiendo superado diversas crisis económicas a lo largo del siglo XX, la empresa no pudo sortear, en 1981, los problemas surgidos de los bajos precios del azúcar (no resultó su último negocio especulativo) y su alto nivel de endeudamiento, cayendo en cesación de pagos a principios del mismo año. Un estudio financiero en detalle sobre la quiebra de esta empresa se encuentra en: Bravo Herrera, Fernando, “Caso de Análisis Financiero. Caso Crav S.A.”, Documento de Trabajo - Material Docente, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile, 2002, pp. 1-29. Por su parte, Sergio de Castro niega que la importancia de la quiebra de CRAV haya sido un indicador de una crisis futura, a pesar del prestigio e importancia que había tenido dicha empresa: “Supe en esos momentos que la causa del problema había sido la especulación, y esa es una decisión riesgosa y quien la toma conoce las consecuencias que le puede traer. Por lo demás, CRAV ya era por entonces una empresa menor porque la competencia de IANSA (Industria Azucarera Nacional Sociedad Anónima) le había restado importancia”. Consultar: Arancibia Clavel, Patricia & Balart Páez, Francisco, Op.cit., p. 350.

¹⁰⁴ Durante ese mismo año otras 431 firmas quebraron, siendo la mayor parte de ellas liquidadas: Ver: Angell, Alan, Op.cit., p. 117.

¹⁰⁵ Sergio de Castro solía referirse a este episodio como el ‘pecado original’, pues había roto uno de los principios de hierro de su política económica, el cual

se oponía a cualquier tipo de salvavidas destinado a las instituciones financieras. En: Arancibia Clavel, Patricia & Balart Páez, Francisco, Op.cit., p. 368.

¹⁰⁶ Según Patricio Meller, la escuela de ‘banca libre’ (principalmente para Chile los textos de Arnold Harberger) ha cuestionado este rescate del Banco Central al sistema financiero chileno. Esta corriente de pensamiento señala que el comportamiento altamente riesgoso de la banca chilena en el período 1977-82 se origina en la decisión gubernamental de evitar la quiebra del Banco Osorno en 1977, lo que estimuló a los directivos bancarios a adoptar un comportamiento de ‘riesgo moral’. Sin embargo, una banca libre en un país como Chile es una proposición de alto riesgo, con una probabilidad no despreciable de consecuencias desastrosas: ¿qué habría pasado en 1982 si el Banco Central hubiera dejado quebrar al Banco de Chile, al Banco Santiago y a todos los bancos insolventes? Meller, Patricio, Op.cit., p. 292.

¹⁰⁷ Para Arturo Fontaine, “la magia del ajuste automático se produce porque las ventas de divisas efectuadas por el Banco Central reducen la masa monetaria, lo que aumenta la tasa de interés, restringe la demanda interna y fuerza a la exportación; en tanto que las compras de divisas, por retorno de exportaciones o ingresos de capital, aumentan el circulante, bajan el interés y promueven las importaciones. Todo esto sin que las autoridades financieras muevan un solo dedo”. Fontaine, Arturo, Los economistas y el presidente Pinochet, Santiago, Ed. Zig Zag, 1988, p. 142. De acuerdo con las propias palabras de Sergio de Castro: “Nuestro actual sistema económico contiene los mecanismos de ajuste necesarios para superar esta situación en mejor forma que cualquier otro sistema alternativo. En efecto, como explicara anteriormente, el mecanismo de corrección opera a través de una alza en las tasas de interés lo que adecua el nivel de gasto a las reales disponibilidades de recursos de la economía, incluyendo el menor flujo de crédito externo que dicha alza incentiva”. Consultar: Arancibia Clavel, Patricia & Balart Páez, Francisco, Op.cit., p. 357.

¹⁰⁸ Una primera intervención bancaria se produjo el 02 de noviembre de 1981, decretándose la insolvencia de cuatro bancos (de Talca, Español, de Linares y de

Fomento de Valparaíso) y cuatro financieras (Finansur, Casco, de Capitales y Compañía General Financiera). Ver: Arancibia Clavel, Patricia & Balart Páez, Francisco, Op.cit., p. 367.

¹⁰⁹ Fazio, Hugo, La transnacionalización de la economía chilena. Mapa de la extrema riqueza al año 2000, Santiago, LOM Ediciones, 2000, p. 80.

¹¹⁰ La indexación de los salarios corresponde a un reajuste automático de las remuneraciones que se realiza de manera periódica (generalmente anual) de acuerdo al nivel de inflación acumulado en un lapso de tiempo determinado. Esta medida, generalmente asociada a los modelos keynesianos de manejo económico, suele ser designada como una de las principales culpables de la persistencia de la inflación.

¹¹¹ Viviana Ledesma considera que, para los economistas de Chicago, el desempleo es un fenómeno microeconómico, producto de remuneraciones demasiado altas y/o distorsionadas en la estructura salarial. El ajuste automático se expresaba de dos maneras distintas: o los trabajadores aceptaban una rebaja de los salarios, o una mayor cesantía. Como se comprobó más tarde, las dos cosas se produjeron de forma brutal en 1982-1983. Ledesma De Lapeyra, Viviana, p. 284.

¹¹² Hasta la fecha (2008), Sergio de Castro ha insistido en que la solución de la crisis de 1982-83 pasaba por una rebaja salarial, la cual le habría ahorrado al país una dolorosa crisis bancaria, producto de la devaluación del peso.

¹¹³ Entrevista a Sergio de Castro. En: Arancibia Clavel, Patricia & Balart Páez, Francisco, Op.cit., p. 380.

¹¹⁴ Huneus, Carlos, Op.cit., p. 507.

¹¹⁵ La unidad del grupo ya se había visto mermada a causa de la devaluación, marcando las diferencias quienes participaban en el gobierno (Sergio de Castro, Miguel Kast, Álvaro Bardón, Pablo Baraona) y aquellos que estaban ligados directa o indirectamente con el sector privado (Manuel Cruzat y Juan Braun). Ver: Fontaine, Arturo, Op.cit., p. 154.

¹¹⁶ Ibíd., p. 160.

¹¹⁷ Las reservas internacionales de Chile habían caído en US\$800 millones solo en los primeros cinco meses del año 1982. En: Ledesma De Lapeyra, V., p. 281.

¹¹⁸ Durante el gobierno militar, fue creado un subempleo institucionalizado, mediante programas especiales de absorción de mano de obra: el Programa de Empleo Mínimo (PEM, 1974) y el Programa Ocupacional de Jefes de Hogar (POJH, 1982). Establecidos oficialmente con carácter provisional, con remuneraciones que rodearon un tercio del salario mínimo, se mantuvieron prácticamente durante todo el régimen militar, desde 1974 hasta 1988, bajo la dirección del Ministerio del Interior. Ver: Teitelboim, Berta, Indicadores económicos y sociales, PET, Santiago, 1985.

¹¹⁹ Angell, Alan, Op.cit., pp. 118-119.

¹²⁰ Entrevista a Pablo Baraona, miembro del grupo conocido como los 'Chicago Boys'. Fue, además, Presidente del Banco Central y también Ministro de Economía durante el régimen militar. En: Arancibia Clavel, Patricia, Op.cit., p. 140.

¹²¹ Meller, Patricio, Op.cit., p. 211.

¹²² Ver: Moscoso, Pablo, Op.cit., pp. 401-466.

¹²³ Caputo, O., “Chile, de nuevo uno de los países más afectado por las crisis”, *Rebelión*, 14/11/2008, <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=75798>. Arancibia y Balart, desde una óptica diferente, sostienen la misma idea sobre el daño comparativamente mayor que sufrió la economía chilena en sus términos de intercambio entre 1981 y 1983. Ver: Arancibia, Patricia & Balart, Francisco, Op.cit., p. 398.

¹²⁴ CIEPLAN: Corporación de Estudios para Latinoamérica. Todas las publicaciones de este centro de estudios se encuentran disponibles en: <http://www.cieplan.cl>.

¹²⁵ En este punto, como en muchos otros, no existe consenso entre los economistas. Hernán Büchi, por su parte, Ministro de Hacienda del régimen militar entre 1985 y 1989, considera que si bien la crisis golpeó con extraordinaria dureza a Chile, el país fue el que mejor la resolvió a partir de 1984, por lo que no estima que haya sido una década pérdida. Büchi, Hernán, *La transformación económica de Chile. Del estatismo a la libertad económica*, Bogotá, Editorial Norma, 1993, p. 176.

¹²⁶ Entre los factores externos de la crisis, deben destacarse la menor demanda por exportaciones chilenas, así como la caída de los precios internacionales, sobre todo del cobre, que pese a la diversificación exportadora continúa siendo la principal fuente de divisas del país. Consultar: Olave, Patricia, Op.cit., p. 107.

¹²⁷ De acuerdo con las cifras manejadas por Patricia Olave, las quiebras de empresas llegaron a 1.554 en abril de 1982, acumulando pérdidas estimadas en US\$ 8.500 millones. A esto se sumó una tasa de desempleo que alcanzó al 24,6% el mismo año, mientras que el déficit de cuenta corriente fue de un 19% del PIB. Es interesante destacar que esta investigadora, a diferencia de la mayor parte de los autores, pone el acento en la capacidad de adaptación de la política económica en un plazo muy corto (1981-1985), pues en dicho período se habrían experimentado políticas tan extremas como la del ‘ajuste automático’, hasta otras altamente reguladoras e intervencionistas. A su juicio, esto le habría conferido un enorme pragmatismo a la acción estatal, a pesar del dogmatismo del equipo económico de Chicago. *Ibíd.*, pp. 107-109.

¹²⁸ Büchi, Hernán, *Op.cit.*, p. 170.

¹²⁹ Declaraciones del empresario Ricardo Claro en un artículo censurado del año 1983. Ver: Editorial, “El día que La Tercera censuró a Ricardo Claro”, *La Nación*, Temas del Domingo, 16/11/2008. Disponible en: http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/edic/2008_11_16_1/portimpresa

¹³⁰ Huneus, Carlos, *Op.cit.*, p. 509.

¹³¹ La exclusiva Sociedad Mont Pèlerin fue creada en 1947 por Friedrich Von Hayek y otros 36 economistas e intelectuales, quienes estaban preocupados por el destino del liberalismo tanto a nivel teórico como práctico. La sociedad lleva el nombre del pueblo donde se realizó la primera reunión, en las cercanías de la ciudad de Montreux, Suiza. El grupo ha sido tradicionalmente relacionado con la defensa de la propiedad privada y la economía de mercado, especialmente al asociarse a la figura del economista y premio Nobel Milton Friedman. La sociedad realiza reuniones periódicas en distintas partes del mundo, y centra sus esfuerzos en el combate de todas las formas de intervención del Estado en la

economía.

¹³² Luis Escobar Cerda había sido decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Chile entre 1955 y 1964, reconocida, junto a la CEPAL, por sus posturas ‘estructuralistas’ y antineoliberales. Habiendo pertenecido al Partido Radical, fue también Ministro de Economía entre 1961 y 1963, durante el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez. Ver: Huneus, Carlos, Op.cit., p. 542.

¹³³ El ministro Escobar Cerda enfrentó prontamente acusaciones de querer desvirtuar el modelo de libre mercado con medidas propias de lo que se consideraba como un pasado absolutamente superado. La cita anterior fue obtenida de: López, Javier, “Con nuevos acuerdos comerciales arancel de Chile se acercará a cero”, La Tercera, Negocios, 29/11/2004.

¹³⁴ Para Carlos Huneus, las malas relaciones de Luis Escobar con el gremialismo afectaron su imagen con Pinochet, por lo que debió dejar poco tiempo después el Ministerio de Hacienda al ingeniero Hernán Büchi, quien sí había sido un colaborador estrecho de Sergio de Castro y también un miembro destacado del equipo económico de Chicago, a pesar de haberse formado académicamente en la Universidad de Columbia.

¹³⁵ Según Ricardo Ffrench-Davis, Chile fue el país más beneficiado con el financiamiento del FMI, el Banco Mundial y el BID. Las transferencias netas positivas de estos organismos fueron equivalentes al 2% del PIB en 1985-1988, y las de Chile a los bancos privados alcanzaron a un 6%. La financiación multilateral desempeñó un papel esencial en la capacidad de los países deudores para pagar intereses a los bancos privados, y este apoyo fue notoriamente más significativo para Chile. Ffrench-Davis, Muñoz y Palma, Op.cit., p. 153.

¹³⁶ Fontaine, Arturo, Op.cit., p. 162.

¹³⁷ “El 13 de enero de 1983 se produce la mayor intervención bancaria de la historia de Chile. El Gobierno militar decide intervenir a cinco bancos (Banco Unido de Fomento y Banco Hipotecario de Chile, BHC, entre ellos) y liquida otros tres, por problemas de liquidez a insolvencia, incluyendo a una sociedad financiera. Fue así como entre 1982 y 1986 la Superintendencia de Bancos intervino y cerró 16 instituciones financieras por transgredir las leyes y regulaciones que les eran aplicables y que estaban en situación de completa insolvencia debido a pérdidas que excedían su capital y reservas”. Ver: Castañeda, Lina & Ramírez, Claudia, “A 25 años de la intervención bancaria en Chile”, El Mercurio, Reportajes del Sábado, 12/01/2008.

¹³⁸ Arturo Fontaine se refiere al grupo de asesores de Büchi como la ‘Segunda Generación’ de Chicago Boys. Estos habrían aprendido las lecciones de sus antecesores y tendrían posiciones menos dogmáticas. Entre ellos, tenemos a Fernando Alvear (secretario de Inversiones extranjeras), Juan Andrés Fontaine (Director de estudios del Banco Central), Gerardo Jofré (Asesor del Ministerio de Hacienda), Luis Larraín (Subdirector de ODEPLAN), Cristián Larroulet (Jefe de gabinete del Ministerio de Hacienda), Pablo Innen (Asesor del Ministerio de Hacienda), Guillermo Ramírez (Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras), Jorge Selume (Director de Presupuestos), Hernán Somerville (Director de coordinación de deuda externa) y Álvaro Vial (Director del Instituto Nacional de Estadísticas). Fontaine, Arturo, Op.cit., p. 185.

¹³⁹ Entre 1983 y 1989, aproximadamente cincuenta productos como promedio debían pagar sobretasas arancelarias que oscilaban entre un 20% y un 5%. Meller, Patricio, Op.cit., p. 247.

¹⁴⁰ Las políticas correctoras comprendieron una nueva ley bancaria (1986) y la autonomía del Banco Central (1989). La ley bancaria reforzó la supervisión y la reglamentación del sistema financiero chileno, estableció requisitos de capitalización y de reservas, separó las actividades de los bancos de las de sus

subsidiarias, y creó un sistema explícito pero limitado de garantía estatal a los depósitos. Fuente: Marchini, Geneviève, “Chile: un precursor de las reformas financieras”, México y la cuenca del Pacífico, Vol. 5, N° 15, abril 2002, pp. 17-26.

¹⁴¹ Huneus, Carlos, Op.cit., p. 518.

¹⁴² Olave, Patricia, Op.cit., pp. 112-113.

¹⁴³ Arancibia, Patricia & Balart, Francisco, Op.cit., p. 401.

¹⁴⁴ De acuerdo con Patricio Meller, la negociación con el FMI permitió a Chile recuperar la credibilidad ante los organismos de crédito externo, en claro contraste con la mayor parte de sus vecinos de la región. Sin embargo, el costo social y económico interno fue importante, pues implicó posteriormente una fuerte restricción de la política fiscal y monetaria. En sus propias palabras, la política del nuevo equipo económico priorizó la credibilidad externa en perjuicio del crecimiento económico inmediato. Meller, Patricio, Op.cit., pp. 237-238.

¹⁴⁵ Entrevista a Hernán Büchi Buc. Ver: Castañeda, Lina & Lüders, Marily, “Büchi: las claves del ‘milagro económico’ y su visión del Chile de hoy”, El Mercurio, Economía, 30/03/2008.

¹⁴⁶ Los bienes transables son aquellos con los cuales se puede comerciar o hacer intercambios a nivel nacional e internacional. Sus precios se determinan de acuerdo al mercado mundial.

¹⁴⁷ Olave, Patricia, Op.cit., p. 117.

¹⁴⁸ Meller, Patricio, Op.cit., p. 238.

¹⁴⁹ Fontaine, Arturo, Op.cit., p. 190.

¹⁵⁰ En este sentido, Arturo Fontaine estima que hay dos diferencias fundamentales entre la conducción económica de Sergio de Castro y aquella de Hernán Büchi. En primer lugar, Büchi le dio gran importancia a la aplicación de una política macroeconómica de ajuste, crecimiento y ahorro. En segundo lugar, decidió potenciar y apoyar directamente a los exportadores, para lo cual condonó deudas, promovió la capitalización de las empresas y fortaleció el mercado de capitales. En otras palabras, no estaba dispuesto a dejarlos caer según ‘la ley del mercado’, como había sido el principio defendido por Sergio de Castro al momento de la crisis de 1982. Fontaine, Arturo, Op.cit., p. 193.

¹⁵¹ Uno de los episodios más recordados de la nueva política de restricción presupuestaria, fue el 10,5% de reajuste que Hernán Büchi negó a los pensionados en 1985.

¹⁵² Un rasgo común de la renegociación de la deuda en este período fue la arbitraria obligación de los gobiernos latinoamericanos de garantizar ex-post el pago de la deuda no garantizada de la banca local con los bancos extranjeros privados. Esta imposición de los organismos multilaterales de crédito no tomaba en cuenta los riesgos tomados por los bancos internacionales al haber entregado crédito sin las necesarias garantías gubernamentales. Ver: Ffrench-Davis, Muñoz y Palma, Op.cit., p. 152.

¹⁵³ Ibíd., p. 241.

¹⁵⁴ Ibíd., p. 264.

¹⁵⁵ Un estudio clásico sobre el modelo decisional de las dictaduras latinoamericanas de la década de 1970, aunque centrado en el caso argentino, puede encontrarse en: O'Donnell, Guillermo, 1966-1973, el Estado burocrático autoritario: Triunfos, derrotas y crisis, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1982, 499 p.

¹⁵⁶ French-Davis, Muñoz y Palma, Op.cit., p. 264.

¹⁵⁷ Ver evolución del PIB en el cuadro anterior.

¹⁵⁸ Hemos adoptado la definición de Mario Marcel sobre lo que entendemos como privatización. Esta se refiere a la desestatización o desnacionalización, que corresponde a la acepción más restrictiva del concepto de privatización, esto es, la venta de activos públicos, en especial empresas, al sector privado. Marcel, Mario, "Privatización y finanzas públicas: el caso de Chile, 1985-88", Colección Estudios CIEPLAN, N° 26, junio 1989, p. 9.

¹⁵⁹ Desde 1945, los sucesivos gobiernos chilenos habían acumulado activos productivos en manos del Estado, los cuales alcanzaron a producir, en 1973, un 39% del PIB. Estos estaban repartidos en 596 empresas. Para 1989, el aporte al PIB de las empresas del Estado se había reducido a 12,7%. Consultar: Hachette, Dominique, "Privatizaciones: reforma estructural pero inconclusa" La transformación económica de Chile, Santiago, Centro de Estudios Públicos, 2000, p. 112.

¹⁶⁰ Con este concepto, el general Pinochet se refería a todos aquellos que practicaban la política con el solo afán de mantener clientelas electorales, obtener favores y prebendas del poder. Sin embargo, su encono contra la política incluía a todos los partidos políticos chilenos (de izquierda, derecha y centro) que, a su juicio, habían llevado al país a la crisis de 1973. En este sentido, compartía el criterio tecnocrático y antipolítico del discurso de los economistas monetaristas formados en Chicago, cuya vertiente principal de pensamiento puede rastrearse en la desconfianza expresa de F. Hayek respecto del régimen democrático y el Estado. Sobre el concepto de politiquería utilizado en Chile, ver: Pinochet, Augusto, Política, Politiquería, Demagogia, Santiago, Editorial Renacimiento, 1983.

¹⁶¹ Entre estos últimos, destacaba el ex-Presidente de la República, Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964), quien además dirigía una de las empresas más influyentes del país, la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), además de haber sido Presidente del Consejo de Estado durante los primeros años del régimen militar.

¹⁶² Sobre el papel del FMI en las privatizaciones chilenas mediante las políticas de ajuste estructural, véase: Marcel, Mario, Op.cit., pp. 5-60.

¹⁶³ Las 43 empresas del ‘área rara’ fueron rápidamente reprivatizadas entre 1984 y 1985. La prioridad fue dada al sistema financiero intervenido durante la crisis de 1982-83. Aquí se incluían los dos mayores bancos del país (el Banco de Chile y el Banco de Santiago), las AFP Provida y Santa María; y las empresas relacionadas con los bancos como la Compañía de Petróleos de Chile (COPEC), Forestal Arauco y la Industria Forestal S.A. (INFORSA). Las compañías productivas fueron licitadas a interesados nacionales y extranjeros. En el caso de las instituciones financieras, se utilizó la modalidad del ‘capitalismo popular’. El supuesto objetivo de esta medida fue el de diluir la propiedad y evitar la concentración en determinados grupos económicos, como ya había ocurrido con

las privatizaciones de los años '70. Fuente: Hachette, Dominique, Op.cit., p. 120. El listado completo de las empresas incluidas en el 'área rara' se encuentra en el Informe Oficial de la Comisión Privatizaciones de Cámara de Diputados de Chile del año 2004 (p. 63). Disponible en www.congreso.cl.

¹⁶⁴ Ver: Hachette, Dominique & Lüders, Rolf, La privatización en Chile, Santiago, CINDE, 1994, p. 86. Citado por Huneus, Carlos, Op.cit., p. 439.

¹⁶⁵ Posterior al año 1985, las principales disposiciones destinadas a regular la privatización de las instituciones financieras y las empresas, mediante el llamado 'capitalismo popular', fueron las leyes N° 18.401 y N° 18.398, las cuales conformaron el fundamento primario del sistema de privatizaciones. Fuente: Cámara de Diputados, Evolución de las normas que regularon el proceso de privatización en Chile desde 1970 a 1990, Secretaría de la Comisión de Privatizaciones, 2005.

¹⁶⁶ Moguillansky, Graciela, Op.cit., p. 181.

¹⁶⁷ El doble papel de privatizador y comprador, ejercido por varios ejecutivos de las empresas públicas, es objeto de crítica hasta el día de hoy. Existió una combinación de uso de información privilegiada y acceso a subsidios para la compra de grandes paquetes accionarios. Tras el fin del régimen militar y hasta al menos el año 2008, ninguna administración gubernamental, ni menos el poder judicial han investigado a fondo el proceso de privatizaciones de la segunda ola. La explicación para ello solo puede buscarse en los acuerdos políticos no explícitos de la transición a la democracia chilena.

¹⁶⁸ Consultar: Moguillansky, Graciela, "Privatizaciones y su impacto en la inversión" en French-Davis, R. & Stallings, B. (Eds.), Op.cit., pp. 179-180.

¹⁶⁹ El capitalismo popular también pretendía vencer la resistencia de los trabajadores a la privatización de las empresas, que suele implicar despidos y mayor flexibilización laboral. Al invitarlos a ser propietarios (capitalismo laboral), se los quería hacer parte integrante del proceso. Ver: Huneus, Carlos, Op.cit., p. 447.

¹⁷⁰ Huneus, Carlos, Op.cit., pp. 450-451.

¹⁷¹ Huneus sostiene que esta segunda ola de privatizaciones debe ser considerada como ‘táctica’, debido a sus objetivos políticos e ideológicos, a diferencia de la primera ola de privatizaciones de la década de 1970, donde primó un criterio ‘pragmático’, el cual buscaba, al menos en principio, restituir a sus antiguos dueños las empresas estatizadas durante el gobierno de la Unidad Popular. Huneus, Carlos, “El comportamiento político de los empresarios en Chile”, Revista Perspectivas, Vol. 4, N° 2, 2001, pp. 315-337.

¹⁷² La oposición al régimen militar había anunciado que, en caso de llegar al gobierno y re tornar a un régimen democrático, se revisarían las privatizaciones. Ver: Huneus, Carlos, Op.cit., p. 445.

¹⁷³ De acuerdo con Marcel, la mayor parte de estas empresas sufrió importantes procesos de reorganización durante los primeros años del régimen militar. Estos apuntaron a mejorar su rentabilidad económica y a racionalizar su gestión, al tiempo que se sometía a estas empresas a condiciones de operación similares a las del sector privado, privándolas de la posibilidad de hacer inversiones estratégicas o contribuir a la redistribución de ingresos. Muchas de ellas sufrieron fuertes reducciones de personal y fueron convertidas en Sociedades Anónimas. Marcel, Mario, Op.cit., p. 24.

¹⁷⁴ Ibíd., p. 29.

¹⁷⁵ Las cifras en este sentido son solo estimaciones debido a las dificultades del cálculo. Manuel Riesco ha calculado que las pérdidas del patrimonio estatal por las privatizaciones fueron del orden de los US\$ 1.000 millones, cifra a la que se llega comparando los valores de venta de las empresas con sus valores de libro. El autor entrega al menos dos ejemplos: CAP se privatizó en US\$ 99,5 millones siendo una empresa con un valor de libro de US\$ 373,9 millones e IANSA en US\$ 6 millones con un valor de libro de US\$ 40,9 millones. Riesco, M., “Presuntas irregularidades en la privatizaciones de empresas estatales ocurridas con anterioridad a 1990”, Documento CENDA, 2005, pp. 1-10. Para otro autor como James Petras, las pérdidas patrimoniales fueron muchos mayores, alcanzando los US \$2.800 millones solo entre 1985 y 1988, entregándose subsidios por cerca de US\$600 millones. Petras, James, “El ‘milagro económico’ chileno: crítica empírica”, Nueva Sociedad, N° 113, mayo-junio 1991, pp. 146-158. Ver también: Equipo Editorial, “El saqueo de Chile”, El Periodista, Santiago, 22/07/2005, disponible en: http://www.elperiodista.cl/newtenberg/1790/article-69669.html#h2_3. El informe oficial de la Cámara de Diputados de Chile de 2004 estimó en US\$2.223 millones las pérdidas patrimoniales del Estado chileno producto de las privatizaciones realizadas entre 1978 y 1990.

¹⁷⁶ Esta opinión es sostenida principalmente por los economistas Lüders y Hachette. Fuente: Hachette, Dominique & Lüders, Rolf, La privatización en Chile, Santiago, CINDE, 1994.

¹⁷⁷ Marcel estima la pérdida mínima de patrimonio para el Estado chileno en un 27% con respecto al valor real de las empresas privatizadas, y esto utilizando el método de cálculo más conservador. “Solo entre un 25% y un 47% de los ingresos por venta de empresas retenidos por CORFO habrían sido destinados a aumentar los préstamos de fomento en 1986 y 1987, respectivamente, lo que representa menos de la cuarta parte del total de ingresos por privatizaciones. La mayor parte de los recursos retenidos por CORFO habrían sido destinados así a

otros fines, préstamos para privatizaciones, variaciones en el capital de trabajo, reducciones de deuda interna y otros, de los que solo una fracción incidiría sobre la cuenta de capital de la corporación”. Fuente: Marcel, Mario, Op.cit., p. 41, 48.

¹⁷⁸ Olave, Patricia, Op.cit., p. 130.

¹⁷⁹ Ibíd., p. 131.

¹⁸⁰ Sobre el concepto de ‘democracia protegida’ en Chile, recomendamos el siguiente artículo: Godoy, Óscar, “Parlamento, presidencialismo y democracia protegida”, Revista de Ciencia Política, Vol. 23, N° 2, 2003, pp. 7-42.

¹⁸¹ Artículo N° 27 transitorio.

¹⁸² En este caso, no cabía otra posibilidad que fuese el mismo general Augusto Pinochet, si bien algunos sectores de derecha no lo consideraban la mejor alternativa tras diecisiete años de gobierno autoritario.

¹⁸³ Nos referimos a la consulta de 1978 sobre la condena en Naciones Unidas al régimen militar y la consulta de 1979 sobre la propuesta de una nueva Constitución política.

¹⁸⁴ Finalmente, el 6 de mayo de 1988 se promulgó la ley N° 18.700, Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, la cual tuvo por objeto regular los aspectos técnicos de la realización del plebiscito.

¹⁸⁵ Para el año 1989, el gobierno militar había llevado una política expansiva que dio como resultado un insostenible crecimiento del PIB en un 10,9%. La inflación se había elevado de un 12,7% a fines de 1988 a un 21,4% en 1989. La expansión monetaria fue de un 45%, aumentando la cantidad de dinero privado en un 108% durante el bienio 1988-1989. Este sobrecalentamiento de la economía se observó mediante dos síntomas clásicos: un aumento de las importaciones y un recrudecimiento de la inflación. Fuente: Boeninger, Edgardo, Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad, Santiago, Editorial Andrés Bello, 1998, p. 467.

¹⁸⁶ La oposición había denunciado ya en 1987 que el general Pinochet hacía campaña indirecta en los medios para presentarse como candidato único del oficialismo en el plebiscito de 1988.

¹⁸⁷ “La Ley sobre el Tribunal Calificador de Elecciones se publicó, oficialmente, en noviembre de 1985. Un año después se promulgó la Ley sobre Sistemas de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral. Esta última ley creó las Juntas Electorales y las Juntas Inscriptoras, quedando abierto el proceso de inscripción en el verano de 1987. A continuación, se dictó la Ley de los Partidos Políticos, que les señaló el número de firmas a reunir para quedar legalmente constituidos”. Testimonio de Francisco Estévez, organizador de los grupos de apoderados de la campaña del NO. Estévez, Francisco, “Plebiscito del 5 de octubre de 1988: El comienzo de un largo camino hacia la participación ciudadana”, Gobierno de Chile, M. S. G. D., División de Organizaciones Sociales (DOS), 2008. Disponible en: http://www.participemos.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=971&Itemid=70.

¹⁸⁸ *Ibíd.*

¹⁸⁹ El anuncio se realizó el 30 de agosto de 1988 y el plebiscito se llevó a cabo el

5 de octubre del mismo año. Como era de esperarse, el candidato único designado por el régimen fue el propio general Pinochet.

¹⁹⁰ La opción SÍ obtuvo un 43% de los votos y la opción ganó con un 54,70%. El universo electoral alcanzó a los 7.236.241 electores. Fuente: Cavallo, Ascanio, La historia oculta del régimen militar, Op.cit., p. 441. En general, las cifras defieren muy poco entre los diferentes autores. Las cifras finales del Tribunal Calificador de Elecciones dieron un 44,01% para el SÍ y un 55,99% para el NO. Después de diecisiete años de gobierno autoritario, no deja de sorprender el alto apoyo obtenido por el general Pinochet, superando largamente la suma de votos de los partidos que lo apoyaban.

¹⁹¹ Entre quienes sostienen esta idea, se encuentra el periodista y cronista Ascanio Cavallo. Cavallo, Ascanio, “La noche más tensa del siglo”, La Tercera, Reportajes, 05/10/2008, pp. 20 21. Por el contrario, Carlos Huneeus está entre quienes defienden la tesis de que Pinochet no estaba dispuesto a correr el riesgo de no respetar el resultado del plebiscito. Huneeus, Carlos, El régimen de Pinochet, Op.cit., pp. 599-600

¹⁹² Cavallo, Ascanio, Op.cit., p. 20.

¹⁹³ La misma noche del plebiscito, el líder del partido de derecha Renovación Nacional, Sergio Onofre Jarpa, reconocía frente a las cámaras de televisión y ante el representante de la Concertación, Patricio Aylwin, la derrota del SÍ. En aquellos momentos, las autoridades del régimen retrasaban inexplicablemente la entrega de los resultados oficiales.

¹⁹⁴ La oposición que había logrado el triunfo en el plebiscito de 1988 se había agrupado en un conglomerado denominado ‘Concertación de Partidos por el NO’, que incluía a diecisiete partidos políticos, entre los que destacaban: las

diferentes variantes del Partido Socialista, la Democracia Cristiana, el Partido Radical, el Partido por la Democracia (PPD, instrumental), la Izquierda Cristiana y el MAPU, entre otros.

¹⁹⁵ Una parte de la oposición, especialmente la izquierda liderada por el Partido Comunista, defendió la tesis de no participar del plebiscito para no ‘jugar el juego’ del régimen y continuar con su estrategia de sublevación de masas y de la derrota del régimen. Finalmente, el PC chileno nunca integró la Concertación, aunque sí terminó inscribiéndose y votando por el NO y después por el candidato de la Concertación, el demócratacristiano Patricio Aylwin Azócar.

¹⁹⁶ Ver: Beyer, Harald, “Büchi y Bachelet”, El Mercurio, Opinión, 05/09/2004. Sobre las características de la campaña de 1989, consultar: Cañas, Enrique, Proceso político en Chile: 1973-1990, Santiago, Editorial Andrés Bello, 1997, pp. 279-290. Un interesante y documentado análisis sobre los procesos electorarios posdictadura, revisar en: Angell, Alan, Elecciones presidenciales, democracia y partidos políticos en el Chile post Pinochet, Santiago, Ediciones Centro de Estudios Bicentenario / Instituto de Historia Pontificia Universidad Católica de Chile, 2005, 182 p. También, del mismo autor: Angell, Alan & Pollack, Benny, “The Chilean Elections of 1989 and the Politics of the Transition to Democracy”, Bulletin of Latin American Research, Vol. 9, N° 1, 1990, pp. 1-23.

¹⁹⁷ Hernán Büchi renunció al Ministerio de Hacienda el 3 de abril de 1989, para comenzar un largo proceso de reflexión que terminaría con su candidatura a la Presidencia de la República para las elecciones del 14 de diciembre del mismo año.

¹⁹⁸ Mönckeberg, María Olivia, Op.cit., p. 61.

¹⁹⁹ De acuerdo con la legislación chilena, “El Fuero Parlamentario es el privilegio de que gozan los Diputados y Senadores desde el día de su elección, designación o incorporación, según sea el caso, en virtud del cual no pueden ser procesados o afectados en su libertad personal, sin que la Corte de Apelaciones respectiva haya declarado con anterioridad haber lugar a la formación de causa. Se debe considerar también dentro del Fuero Parlamentario el hecho de que los Diputados y Senadores son inviolables por las opiniones y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos en Sesiones de Sala o de Comisión”. Fuente: Cámara de Diputados de Chile. Disponible en: www.camara.cl.

²⁰⁰ Huneeus, Carlos, El régimen de Pinochet, Op.cit., p. 604.

²⁰¹ A cambio del paquete de reformas, la Concertación se comprometió a reducir de ocho a cuatro años el primer gobierno del nuevo régimen. Las reformas constitucionales fueron introducidas por la Ley N° 18.825 de 17 de agosto de 1989. Un estudio detallado de las reformas constitucionales de 1989, desde un punto de vista jurídico, puede encontrarse en: Andrade, Carlos, Reforma de la Constitución Política de la República de Chile de 1980, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2002, 436 p. Ver también: Boeninger, Edgardo, Op.cit., pp. 362-366.

²⁰² Se trató de la Ley Orgánica Constitucional de la Fuerzas Armadas N° 18.948, del 22 de febrero de 1990.

²⁰³ Huneeus, Carlos, El régimen de Pinochet, Op.cit., p. 609.

²⁰⁴ Ibíd., p. 610.

²⁰⁵ Corresponde a la ley N° 18.840, publicada en el Diario Oficial del 10 de octubre de 1989. Una defensa de la tesis del Banco Central autónomo para el caso de Chile, aparece en: Rosende, Francisco, “La Autonomía del Banco Central de Chile: Una Evaluación Preliminar”, Cuadernos de Economía PUC, Vol. 30, N° 91, 1993, pp. 293-326. En la misma línea: Fontaine, Juan Andrés, “Banco Central autónomo: en pos de la estabilidad” en Larraín, Felipe & Vergara, Rodrigo (Eds.), Op.cit., pp. 393-427. En un trabajo de 1989, Carlos Massad entrega una visión más crítica y que integra el factor político en la labor del Banco Central. Massad, Carlos, “La función técnica y la función política del Banco Central: anatomía prenatal”, Cuadernos de Economía, N° 77, abril 1989, pp. 75-90.

²⁰⁶ Extracto del texto del Proyecto de Ley Orgánica Constitucional del Banco Central, citado por: Massad, Carlos, Op.cit., p. 75.

²⁰⁷ Un interesante estudio sobre la relación entre el Banco Central independiente y el control de la inflación en Chile, se encuentra en: De Gregorio, José, “Inflación, crecimiento y bancos centrales: teoría y evidencia empírica”, Estudios Públicos, N° 62, 1996, pp. 29-76.

²⁰⁸ De acuerdo con Carlos Huneeus, el quinto consejero restante debía ser neutro para ambas partes, por lo que se escogió al economista Andrés Bianchi, quien habiendo votado por el NO en 1988, daba confianza al régimen militar por sus opiniones contrarias a un aumento del gasto público.

²⁰⁹ Un completo estudio económico que evalúa el proceso de privatizaciones en tres diferentes áreas de los servicios públicos básicos, se halla en: Fischer, Ronald & Serra, Pablo, “Efectos de la privatización de servicios públicos en Chile: Casos sanitario, electricidad y telecomunicaciones”, Documentos de trabajo CEA, N° 186, junio 2003, pp. 1-102.

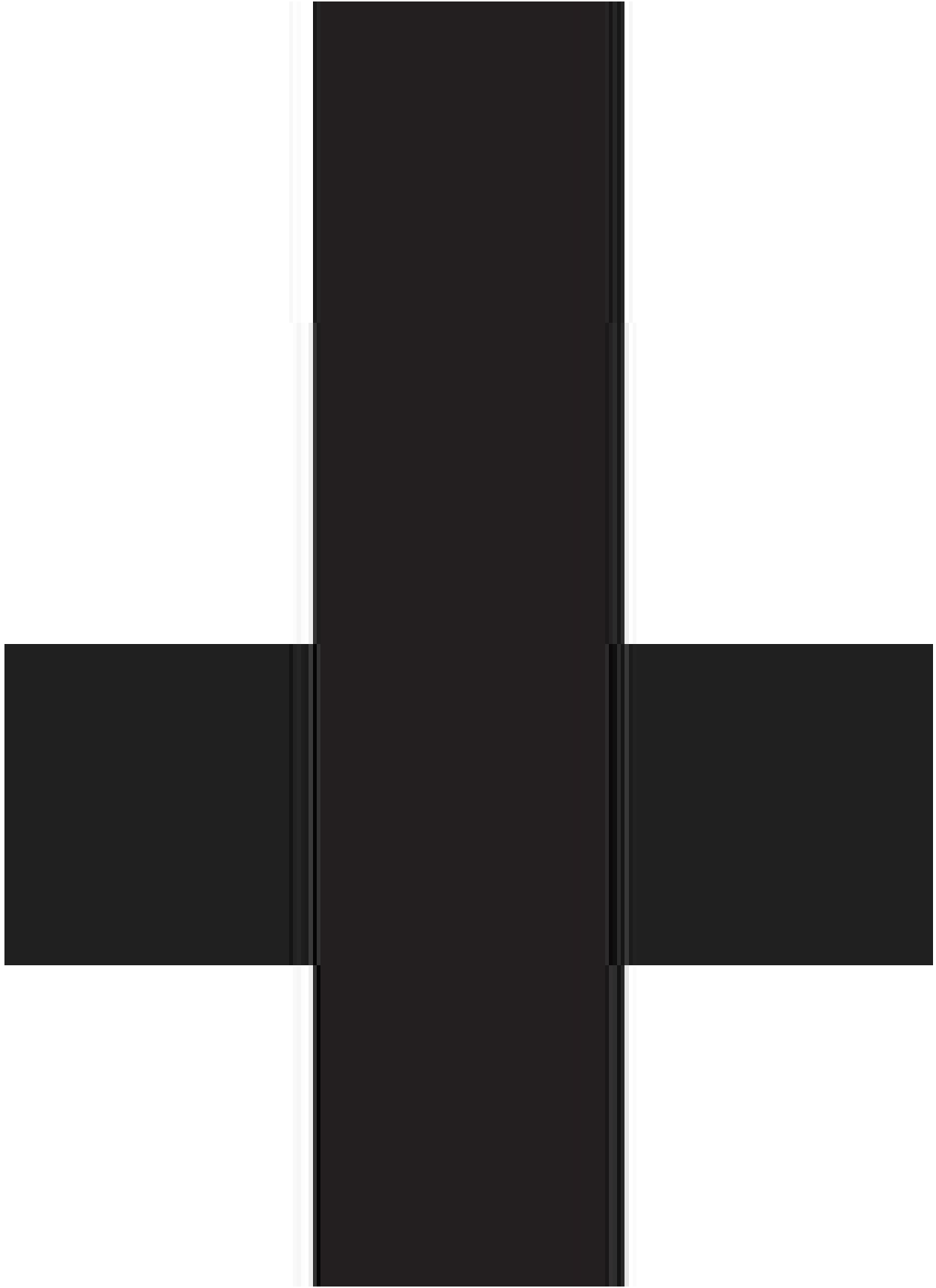
²¹⁰ Compañía de Teléfonos de Chile (CTC), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), Empresa Nacional de Electricidad Sociedad Anónima (ENDESA), Línea Aérea Nacional (LAN-Chile), Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias (EMOS) y Empresa Sanitaria de Valparaíso (ESVAL). El listado completo de las empresas privatizadas entre 1988 y 1990 aparece en el Informe Oficial de la Comisión Privatizaciones de Cámara de Diputados de Chile del año 2004 (p. 80). Disponible en: www.congreso.cl.

²¹¹ Se trató de las Leyes denominadas de ‘amarre’ N° 18.827, 18.830 y 18.831. Ver: Huneus, Carlos, El régimen de Pinochet, Op.cit., p. 622.

²¹² Ibíd., p. 615.

²¹³ En la obra ampliamente difundida de Francis Fukuyama sobre el fin de la historia, se plantea el triunfo histórico del liberalismo económico y la democracia como los modelos a seguir por las sociedades contemporáneas tras la crisis de los grandes relatos de la modernidad. Fukuyama, Francis, La fin de L’histoire et le dernier homme, París, Flammarion, 1992.

TERCERA PARTE



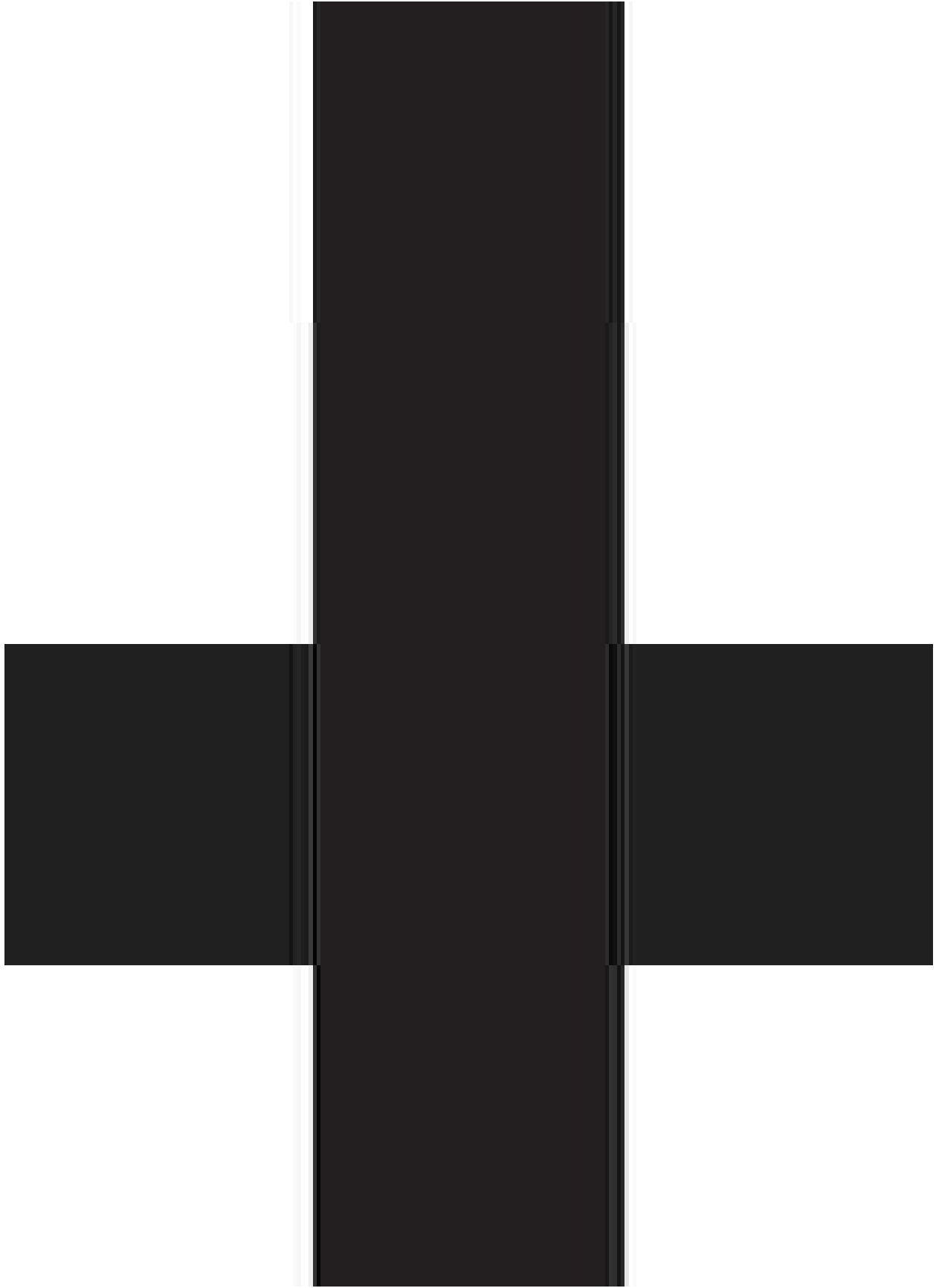
LA CONTINUIDAD DEL MODELO ECONÓMICO EN DEMOCRACIA
(1990-2003)



Hugo Ramos. Mall Plaza Vespucio.

CAPÍTULO V

**LA EVOLUCIÓN DEL DISCURSO Y LA PRAXIS ECONÓMICA EN EL
NUEVO ESCENARIO DE TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA (1990-2000)**



Hay quienes nos dicen ‘ustedes han tenido la sabiduría de mantener lo que se había sembrado en el gobierno anterior’... Pero creo que nadie podría afirmar de buena fe que nuestra política económica es la política económica de Pinochet¹.

Alejandro Foxley (Ministro de Hacienda 1990-1994)

Mire, por 30 años todos los ideólogos dijeron que todo iba a estar bien: el libre mercado es lógico y produce crecimiento máximo. Sí, decían, produce un poco de desigualdad aquí y allá, pero no importa porque también los pobres eran un poco más prósperos.

Eric Hobsbawm (Historiador inglés. Entrevista dada a la BBC en septiembre 2008)

Una nueva élite tecnocrática: los economistas de CIEPLAN

El análisis del debate económico del período posterior al régimen militar no puede eludir el papel jugado por determinados centros de estudio en la conformación de la élite tecnocrática que participó activamente en la dirección del país a partir de 1990. Esto resulta aún más evidente cuando nos referimos al campo económico, probablemente uno de los que más se ha tecnificado y especializado desde fines de la década de 1960, tanto en Chile como en el resto del mundo². Para el caso que nos interesa, resulta interesante constatar la evolución de las decisiones económicas en Chile desde un grupo tecnocrático a otro y, sobre todo, dentro de un contexto de transición hacia un régimen democrático. En definitiva, la conducción de la política económica chilena fue traspasada desde la segunda generación del grupo de Chicago a otro equipo de economistas pertenecientes, en su gran mayoría, al centro de estudios CIEPLAN, y quienes justamente habían elaborado, en la oposición y desde mediados de 1970, una serie de estudios sistemáticos, donde se evaluaron y criticaron las políticas económicas implementadas por la dictadura militar³.

Este equipo, si bien tuvo su origen como un centro académico destinado al estudio de las políticas públicas en el espacio latinoamericano, se preparó para asumir las labores más altas en la gestión del Estado, especialmente en el área económica y de las políticas sociales. Por ello, no resulta extraño que su producción académica estuviera destinada específicamente a buscar fórmulas para una transición pacífica a la democracia, las cuales estuvieron centradas en el consenso de los distintos actores políticos y económicos, y en la continuidad de aquellos elementos heredados del régimen militar que sirvieran de freno al conflicto y a un nuevo quiebre democrático.

Al igual que los Chicago Boys, Foxley trató de superar el pasado ideológico y populista. A diferencia de ellos, creía que Chile debía resolver su ‘problema’ de ‘gobernabilidad’ no mediante la represión de los políticos, sino mediante la creación de una clase pragmática y responsable de líderes con un espíritu de

cooperación(...) Tanto los Chicago Boys y Foxley creían que la continuidad política sería asegurada en última instancia por un consenso nacional sobre el modelo de desarrollo que trascendiera el capricho de cualquier gobierno⁴.

Si bien hemos constatado que la crítica a la política económica del régimen militar fue una constante en el trabajo científico de CIEPLAN, no implica sostener que su proyecto económico estuviera en directa oposición al modelo heredado de la dictadura. Por el contrario, sostenemos que si bien la crítica estuvo siempre presente e incluso de manera explícita y pública a propósito de la crisis de 1982-83, esto no se tradujo en la gestación de un modelo alternativo de desarrollo económico, ni menos en una versión actualizada del estructuralismo de la CEPAL.

La globalización cambió las condiciones de competitividad internacional del país, lo que hizo más difícil restaurar algunas de las garantías que existían hasta 1973, como la seguridad en los empleos⁵.

No desconocemos el hecho que el programa de gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia de 1989, planteó una revisión profunda de muchos de los pilares del modelo económico autoritario. Sin embargo, esto constituyó más bien una medida de cohesión interna de una coalición política heterogénea y una estrategia electoral, que un verdadero programa de acción. El grupo de economistas de CIEPLAN, si bien se había opuesto a diversas políticas del gobierno militar, había apostado, desde mucho antes del plebiscito de 1988, por una línea de consenso y de no confrontación con los grandes empresarios, mayoritariamente favorables al general Pinochet.

Habíamos definido algunas líneas fundamentales que para nosotros eran muy importantes porque daban seguridad y confianza, sobre todo a los que estaban fuera, al sector privado, a la gente que iba a tener que hacer las decisiones de inversión⁶.

Si se sostiene que la votación masivamente mayoritaria de la Concertación en 1988 y 1989 implicó un apoyo directo a un cambio estructural del modelo económico, la concepción de su élite tecnocrática, especialmente en CIEPLAN, no iba por ese camino. Los posteriores debates en torno al abandono del programa de gobierno original de la Concertación, han surgido de esta dicotomía fundamental entre lo que constituye una alianza política, su promesa electoral por el cambio y, por otra parte, el desarrollo de una élite tecnocrática empeñada en buscar una solución de continuidad y compromiso con los equilibrios macroeconómicos y los organismos internacionales de crédito⁷.

Los orígenes de CIEPLAN

La influencia de los profesionales técnicos en la política chilena, si bien es identificable desde fines de la década de 1920⁸, fue en aumento a partir de los años 1960 como resultado de un fenómeno mundial de profesionalización de la política⁹. Como bien ha establecido Patricio Silva para el caso de Chile, se trató de un proceso que se aceleró con el Golpe de Estado de 1973, pues muchos de los cuadros técnico-políticos opositores al gobierno militar, y que vivían de los recursos provenientes de los partidos políticos, debieron incorporarse a círculos académicos independientes. Incluso, aquellos que permanecieron en el país debieron, por primera vez, buscar financiamiento fuera de su fuente tradicional que era el Estado. En la mayoría de los casos, estos intelectuales fueron simplemente expulsados de las universidades y espacios académicos, por lo cual se vieron obligado a recurrir al apoyo de organizaciones internacionales y crear sus propios centros de estudio. Estos constituyeron, por casi dos décadas, la única alternativa de sobrevivencia de una intelligentsia opositora al régimen militar¹⁰.

La crítica al régimen elaborada en estos centros solo fue aceptada en la medida de que eliminara toda retórica y contenido político. Así, el lenguaje altamente tecnificado y abstracto de la economía resultó un excelente medio de canalización para la crítica de oposición en desmedro de otras disciplinas como la sociología, la ciencia política o la historia. Los primeros centros de estudio tolerados por el régimen militar estuvieron relacionados con la Iglesia Católica y con la Democracia Cristiana¹¹. Este partido había apoyado inicialmente al régimen militar e incluso aportado con técnicos a la gestión del Estado¹². Sin embargo, hacia 1975 sus diferencias con la política represiva del régimen la llevaron a adoptar una línea opositora, especialmente tras el atentado en Roma al dirigente demócratacristiano Bernardo Leighton¹³.

Cualquier crítica al gobierno militar tenía que ser cuidadosamente formulada en términos académicos y presentada de un modo abstracto. Esto condujo a una casi desaparición completa de los eslóganes y la retórica que habían caracterizado a los partidos políticos antes del golpe¹⁴.

La gente que estaba en política no podía hacer crítica. Además uno tenía cosas emocionales acumuladas, escuchaba cuentos todos los días de gente que lo estaba pasando muy mal. Éramos un vehículo legítimo, porque éramos economistas, teníamos doctorados, teníamos un reconocimiento internacional. Podíamos hablar cosas que otros no hablaban y cargábamos con las críticas¹⁵.

El centro de estudios CIEPLAN tuvo sus orígenes en la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), justamente al interior de la misma Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas donde había surgido el grupo de economistas de Chicago. No es coincidencia que el mismo plantel superior haya dado cabida a ambos grupos, quienes estaban influenciados por la formación económica norteamericana y el fuerte impulso modernizador que había vivido la universidad desde el proceso de reforma iniciado en 1967¹⁶.

Concordamos con Patricio Silva cuando sostiene que el grado de cohesión y espíritu de cuerpo de estos economistas cercanos a la Democracia Cristiana, era similar al de los Chicago Boys¹⁷. En sus inicios, el grupo formaba parte del antiguo CEPLAN¹⁸, creado en 1971 dentro del marco de la reforma universitaria, y cuyo primer director fue Alejandro Foxley¹⁹.

El Centro de Estudios de la Planificación Nacional (CEPLAN), al igual que los otros Centros, debía tener un carácter interdisciplinario. Tenía por función estudiar los contenidos y efectos de las políticas públicas en el proceso de desarrollo, las técnicas de planificación más adecuadas para la acción eficiente del Estado, y los sistemas de planificación y su ajustamiento a las estructuras institucionales²⁰.

Rápidamente, la unidad había destacado por la calidad académica de sus publicaciones y sus contactos a nivel continental. Sin embargo, sus críticas a la política económica del régimen militar le valieron un hostigamiento constante por parte de las autoridades de la universidad y especialmente del grupo de Chicago, quien controlaba la Facultad de Economía. En CEPLAN, se buscaban

alternativas a la dicotomía entre la completa industrialización interna, por una parte, y al libre mercado desregulado que promovían la mayor parte de los economistas formados en Chicago.

Entonces y ahora, Foxley creía en un papel del Estado en que la eficiencia descentralizada y la participación equilibrada con la necesaria autoridad centralizada iban a guiar el desarrollo de la nación. Oponiéndose a la excesiva confianza de la izquierda en el Estado, Foxley abogó por restricciones a la acción del Estado en una variedad de áreas. Estaba preocupado por la capacidad de las empresas estatales para operar de manera eficiente y flexible y creía que el Estado necesitaba una modernización en su gestión macroeconómica y ser más enfocado y selectivo en sus actividades industriales y de redistribución²¹.

En esas circunstancias (cancelación de contratos), el personal de CEPLAN aceleró los esfuerzos que venían preparando cuidadosamente desde los primeros días del régimen militar para abandonar la universidad y establecerse como un centro de estudios autónomo²².

Para junio de 1976, el grupo completo había renunciado a la Pontificia Universidad Católica y se había establecido como una entidad privada: la Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica (CIEPLAN), cuyo presidente continuó siendo Alejandro Foxley. El carácter altamente técnico de su producción académica, la autonomía financiera y la formación de sus profesionales, la mayoría doctorados en economía en los Estados Unidos, le permitieron sortear, en parte, el ambiente de represión existente en la época.

La experticia técnica y la alta reputación regional de sus trabajos evitaron que a estos profesionales se les acusara por el régimen militar de llevar a cabo una oposición puramente política²³. CIEPLAN cimentó una posición relativamente segura al enfrentar al grupo de Chicago en la única área donde ellos decían tolerar la crítica: la técnica especializada en economía. Justamente, esta crítica fue la única permitida por el régimen, la que abrió el camino para que otros intelectuales y profesionales de distintas corrientes políticas pudieran, por primera vez, comenzar a planificar una estrategia conjunta de oposición al

gobierno militar. El liderazgo intelectual de este grupo se consolidó también en lo político, donde cada vez ganaron mayor credibilidad.

Si bien la mayor parte de los integrantes de CIEPLAN estaban vinculados a la Democracia Cristiana, mantuvieron siempre un importante grado de independencia con respecto al partido. En este sentido, el mismo Foxley era un convencido de romper con la estrategia partidaria tradicional del camino propio, y buscar el consenso dentro de las fuerzas progresistas y opositoras a la dictadura²⁴. Esto, incluso, lo llevó a contactarse con algunos de los grupos menos radicales que sustentaban al régimen militar, sobre todo mediante la discusión económica.

La gente de CIEPLAN, tras asegurar la viabilidad de su hábitat, paulatinamente, al avanzar los años 80, tomó contacto con investigadores que operaban en torno a FLACSO (Lechner, Brunner, Moulian, Garretón), ILADES (Rodríguez Grossi, Andrés Sanfuentes), SUR (Javier Martínez, Eugenio Tironi), CED (Ernesto Edwards, Augusto Aninat, Ernesto Tironi), CLEPI (Carlos Ominami, Sergio Bitar), ILET (Juan Gabriel Valdés, Juan Somavía) y con todo el circuito de centros de estudio y oenegés²⁵.

El centro de estudios operaba entonces tanto a nivel técnicoacadémico como político, orientando y convenciendo a la oposición de adoptar el mensaje técnico como principal medio de contrapeso a la dictadura²⁶.

De la crítica al grupo de Chicago a la búsqueda de consensos

Desde su creación, en 1976, hasta la crisis económica de 1982-83, el grupo de economistas de CIEPLAN generó una importante producción de papers y estudios dirigidos principalmente a criticar la política económica implementada por los técnicos monetaristas del grupo de Chicago, sobre todo durante los años del llamado tratamiento de shock y el ‘milagro económico’ (1975-1981). Durante este período, destacaron numerosos trabajos elaborados por CIEPLAN, pero especialmente aquellos que cuestionaban la radicalidad de las medidas implementadas, así como el uso de las cifras y el manejo poco transparente de las estadísticas por parte del régimen autoritario²⁷.

...la política económica de Chile en el período 1974-1979 ha sido objeto de profunda controversia. Los resultados económicos del período son interpretados como un rotundo éxito por algunos y como fuertemente negativos por otros. Como veremos a continuación, dos ‘historias’ enteramente diferentes pueden ser contadas según los indicadores escogidos para hacer la evaluación²⁸.

Es por esto que parece justificado definir el carácter de la política económica chilena, a diferencia del monetarismo de los años ‘50, como una nueva forma de estructuralismo cuyo contenido, por cierto, tanto en cuanto objetivos como en el instrumental usado, difiere fundamentalmente del estructuralismo latinoamericano asociado al pensamiento de Prebisch y la CEPAL. Se trata de una ortodoxia monetarista globalizada que, llevada a sus últimas consecuencias, propone nada menos que una transformación revolucionaria de la estructura económica. En cuanto a su alcance, ella no es menos ambiciosa que los más radicales intentos revolucionarios que desde la izquierda intentaron llevarse a cabo en Chile durante el gobierno de Allende²⁹.

El trabajo crítico de CIEPLAN respecto de la política económica del régimen militar se mantuvo constante durante toda la década de 1980. Sin embargo, el tono de la misma y sus objetivos cambiaron tras la crisis de 1982-83 y el ciclo de paros y protestas que le siguieron³⁰. Por primera vez, los profesionales de esta institución se vieron en la disyuntiva de aprovechar la coyuntura y aumentar la

crítica para acelerar la caída del régimen autoritario, o bien buscar consensos y poner en marcha una transición negociada a la democracia. Este grupo de profesionales estaba ligado a un sector de la clase política tradicional, especialmente dentro de la Democracia Cristiana, que vio con temor cómo las protestas tomaban un cauce que se les escapaba de las manos, especialmente por la autonomía del movimiento y el carácter de rebelión popular que estaba adquiriendo³¹. En estas condiciones, los profesionales de CIEPLAN decidieron pasar desde la crítica abierta al gobierno militar a la proposición de políticas económicas alternativas en vista de un eventual cambio de régimen. Fue así como CIEPLAN organizó una serie de diálogos entre trabajadores, élites empresariales y otros grupos de la sociedad, los cuales se orientaron a la búsqueda de acercamientos entre el mundo laboral y patronal. La idea era evitar lo que históricamente se había percibido como una debilidad del sistema democrático chileno: la confrontación permanente entre estos dos mundos³².

La crisis del consenso, a pesar de que tuvo importantes consecuencias económicas, requirió de una solución política más que económica, -un sistema político y social capaz de asegurar la estabilidad y la generación de consensos. Para Foxley, la “ineficiencia” no es solo, ni principalmente, un problema económico. La ineficiencia es el resultado de la inexistencia de instituciones políticas y sociales capaces de procesar las demandas o estructurar la sociedad³³.

Hacia 1987, un año antes del plebiscito sobre la continuidad del mandato de Pinochet, se advierte un segundo cambio en la mirada de los economistas de CIEPLAN. Por primera vez, comenzaron a expresar opiniones más conciliatorias con las reformas de los tecnócratas monetaristas del régimen militar, no solo por una cuestión de conveniencia política, sino que también, como bien lo resalta Jeffrey Puryear, debido a un cambio intelectual. A ello se sumaron las cifras macroeconómicas positivas que comenzaba a mostrar el gobierno con la gestión del Ministro de Hacienda Hernán Büchi.

Quizás habíamos estado muy convencidos de ciertos enfoques y habíamos desarrollado mucho los argumentos para defenderlos. Cuando vimos que de

hecho las cosas funcionaban bajo enfoques diferentes, comenzamos a ponerle más atención a esos argumentos para verlos de manera más desapasionada y balancear mejor los diferentes tipos de razonamientos y descubrir finalmente que no existía una sola verdad³⁴.

Este cambio de posición no se produjo sin contradicciones ni dudas por parte de quienes habían sido críticos acérrimos y a ultranza de las políticas implementadas por los técnicos del grupo de Chicago. El reconocimiento de que las reformas económicas del régimen funcionarían en cuanto a modernizar algunos sectores productivos y además generar crecimiento, no resultó sencillo, pero estratégicamente sirvió para abrir canales de diálogo con las fuerzas oficialistas al momento de iniciarse la transición democrática. Incluso, comenzó a rondar la idea, pocas veces explicitada y menos reconocida, de que al régimen militar le había tocado implementar la parte más dura de las reformas estructurales exigidas por el FMI y el Banco Mundial, con lo cual un futuro gobierno de una coalición distinta gozaría de los beneficios de una economía abierta, pero en un contexto de democracia e integración a la comunidad internacional³⁵.

La economía había de hecho mejorado (segunda mitad de la década de 1980), con la mayor parte de los costos de las reformas ya saldados y con los beneficios comenzando a sentirse: ‘Usted tendría que ser muy cabeza dura para no aceptar los hechos como eran’, observó (Foxley)... estábamos convencidos racionalmente que este país tenía que aprender a vivir con sí mismo, y nosotros habíamos estudiado la teoría de juegos, y la teoría de la cooperación. Entonces deliberadamente iniciamos un juego de cooperación en el cual reconocimos más puntos positivos de los que pensamos previamente, y de los que incluso creímos que eran realmente positivos... Lo definimos en tales términos que la otra parte podría decir: ‘estos tipos han reconocido nuestros puntos positivos. Ahora estamos obligados a buscar un mayor entendimiento con ellos’³⁶.

En otras palabras, las transformaciones mayores realizadas a la estructura productiva del país no serían revertidas en un futuro inmediato, sino que

atemperadas con políticas sociales compensatorias. Los mayores costos sociales del control de la inflación, la liberalización del sector financiero y del pago de la deuda, ya habían sido consolidados. Por ello, lo que más se le criticaba al grupo de Chicago era su total incapacidad para establecer políticas sociales que permitieran aminorar los efectos de liberalización y apertura indiscriminada de la economía chilena. En este punto, había un consenso unánime entre los economistas de oposición, y especialmente de CIEPLAN respecto a la necesidad de implementar políticas sociales destinadas a legitimar la economía de libre mercado en los sectores mayoritarios de la población del país.

Hacia mediados de los 80, el plan ideado por los 'Chicago Boys' comienza a dar sus frutos. Al costo de una desigualdad social galopante, la economía se internacionaliza y desarrolla, la sociedad se estabiliza y el ingreso y el consumo comienzan a crecer sostenidamente. Hacia fines de los 80 los contornos de una nueva sociedad ya estaban definidos: una sociedad que ya no descansa en la capacidad integradora del Estado, sino en la autonomía de los individuos; con un sistema institucional que no promueve la igualdad, sino la protección de la propiedad privada³⁷.

El discurso económico que se elaboró en CIEPLAN, a partir de 1987, fue mucho más de continuidad que de cambio, así como en el nivel político opositor comenzó a imponerse la idea del consenso con las fuerzas que apoyaban al régimen militar. Esto último a pesar de que las necesidades de las campañas políticas de 1988 y 1989 siguieron insistiendo en la necesidad del cambio de modelo o, al menos, de una reforma profunda del mismo. En CIEPLAN, como en otros círculos opositores (especialmente dentro de la Democracia Cristiana y algunos sectores renovados del socialismo), surgió la idea de que las condiciones habían cambiado y que progresos importantes se habían realizado durante el régimen militar. Por lo tanto, se impuso el reemplazo de los enfoques críticos anteriores. Aplicando un criterio de realpolitik, se desechó la crítica como una suerte de derivado ideológico extremadamente útil en tiempos de lucha, pero ineficaz al momento de asumir las responsabilidades del poder.

A partir de 1985, un nuevo ministro de Hacienda (Büchi) reorientó la política económica hacia la recuperación de la solvencia financiera y el crecimiento económico. El esfuerzo dio frutos. Las exportaciones crecieron aceleradamente y se redujo el desempleo. Sin embargo, en materia de lucha contra la pobreza, los resultados no fueron tan positivos³⁸.

Para 1989, y en un contexto de crisis de las economías latinoamericanas, especialmente de algunas que habían iniciado su transición a la democracia algunos años antes (sobre todo Argentina en 1983), la sola idea de parecer irresponsables o populistas ante los organismos internacionales de crédito, o de alterar los buenos índices macroeconómicos de la economía chilena, surgió como el principal temor entre quienes, se suponía, tendrían que hacerse cargo del manejo económico en caso de un cambio de régimen y de coalición gobernante³⁹. Fue así como el concepto de populismo, entendido como irresponsabilidad fiscal, descontrol de la inflación y políticas expansivas clientelistas, se convirtió en un verdadero anatema para este grupo de economistas, especialmente en un contexto de demandas sociales postergadas por casi dos décadas. Para evitar aquello, los pilares del modelo económico debían mantenerse inalterados⁴⁰.

Muchos, en verdad, esperaban que siguiéramos el camino fácil del populismo. Pero, desde el primer día dijimos que íbamos romper el ciclo del populismo de América Latina; se lo dijimos todos, con mucha franqueza y claridad: aquí vamos a hacer lo que hay que hacer para que esta economía funcione ordenadamente y para crear las condiciones de un crecimiento estable de largo plazo. Entonces hicimos y apoyamos un ajuste, cuestión bastante ingrata para un gobierno que recién llega⁴¹.

La consolidación del proceso político democrático exigía a las nuevas autoridades demostrar que la economía chilena podía crecer vigorosamente en el nuevo contexto político que se inauguraba en 1990, y que se reduciría la inflación y se mantendría en orden la finanzas públicas... El gobierno del Presidente Aylwin y de la Concertación tenía que avanzar significativamente en la proyección internacional de la economía chilena. Había que normalizar las relaciones financieras con el resto del mundo, renegociando la deuda externa.

Era preciso abrir más la economía, reduciendo el riesgo país y negociando acuerdos comerciales. Había que dar nuevos pasos en la proyección de las empresas chilenas en el exterior⁴².

La llegada al poder y los primeros dilemas de la transición

En marzo de 1990, las nuevas autoridades democráticamente elegidas asumieron el poder tras diecisiete años de un régimen militar conocido internacionalmente por su dureza y la profundidad de las reformas económicas, políticas y sociales llevadas a cabo durante su administración. Como bien lo ha descrito Gonzalo Martner en un reciente trabajo:

La radical y socialmente costosa apertura unilateral a los mercados que realizó la dictadura en Chile en los años 1970 y parte de los años 1980, generó un cambio en la estructura económica del país y trajo consigo una acentuación de la especialización productiva tradicional. Chile consolidó su carácter de país fuertemente exportador, especialmente de bienes basados en recursos naturales, y abandonó la industria nacional sustitutiva de importaciones a su suerte, como los textiles y el sector automotor⁴³.

El nuevo equipo económico designado por el recién asumido Presidente de la República, Patricio Aylwin Azócar, contaba con una amplia mayoría de economistas vinculados a CIEPLAN, encabezados por Alejandro Foxley, nuevo Ministro de Hacienda⁴⁴. Quizás la única excepción importante dentro del equipo era Carlos Ominami, Ministro de Economía, quien pertenecía al Partido Socialista y había tenido, hasta 1973, posiciones cercanas al ala más izquierdista de la Unidad Popular. El Ministerio de Economía quedó encabezado principalmente por tecnócratas ligados al PS, aunque claramente en una posición secundaria respecto de la influencia de Hacienda en el manejo de las cuentas fiscales.

El primero (Foxley) estaba influido por la escuela americana —había realizado un doctorado en la Universidad de Wisconsin— y marcaba sin contrapesos la línea económica de la DC desde el Centro de Investigaciones Económicas para Latinoamérica (CIEPLAN). A fines de los '80, ya era un liberal declarado. El segundo (Ominami), ex MIR⁴⁵ y entonces militante del PS, adscribía a la escuela

europea —es doctor en Economía de la Universidad de Paris X—, había regresado del exilio a fines del '84 y trabajaba en el programa de Relaciones Internacionales de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL)⁴⁶.

“Chile tiene una oportunidad única de realizar algo que en América Latina no ha sido posible”, declaró el economista del PPD-PS, Carlos Ominami, al referirse a lo que llamó el desafío del próximo gobierno de mantener un desarrollo económico sostenido y lograr la transición a la democracia (...). Como condición básica para alcanzar estas metas Ominami destacó la existencia de un acuerdo político-económico al interior de la Concertación⁴⁷.

Desde un año antes de asumir el cargo, Foxley había debido resistir los embates de un empresariado que dudaba de las reales convicciones de la nueva coalición respecto de las bondades del modelo económico heredado del régimen anterior. Las cúpulas empresariales estaban convencidas de que un equipo económico formado por demócratas cristianos y socialistas solo podía retrotraer la situación económica a lo que, a su juicio, había vivido el país entre 1960 y 1973, es decir, movilizaciones sociales, déficit fiscal, reivindicaciones masivas y, por último, el fin del proceso de privatización de las empresas fiscales⁴⁸.

De acuerdo a la normas constitucionales aceptadas por la Concertación en los pactos de la transición, Pinochet ha asumido la comandancia en jefe del Ejército, el empresariado sospecha de la participación socialista en el nuevo gobierno y el poder de los militares y empresarios exige y consigue de la Concertación que las tan objetadas privatizaciones de la época de la dictadura no sean examinadas por las nuevas instancias democráticas⁴⁹.

El periodista Rafael Otano, uno de los cronistas más citados de la transición política chilena, ha graficado esto muy bien cuando se refiere al Encuentro Nacional de la Empresa de 1989 (ENADE), principal reunión anual de las organizaciones empresariales del país, titulado ¿Quo vadis, Chile?⁵⁰, y donde se

emplazó duramente al futuro ministro Foxley ante una asistencia de más de mil empresarios, entre quienes se encontraba lo más selecto de la dirigencia de los principales grupos económicos locales⁵¹. Lo menos que se dijo, ante esta hostil audiencia, fue que ‘no creían ni una palabra de lo que les había planteado Foxley’⁵². Este era el ambiente en el cual fueron recibidas, por parte del mundo empresarial, las nuevas autoridades económicas del primer gobierno democrático. El contraste estuvo dado, en aquella ocasión, por los vítores y aplausos con que fue recibido Hernán Büchi, ex Ministro de Hacienda del régimen militar, candidato presidencial de la derecha en 1989, y considerado, por la mayoría de los empresarios locales, como el cerebro de la recuperación económica tras la crisis de 1982-1983.

Durante todo el año 1989, Foxley había mantenido reuniones con distintos dirigentes y gremios patronales para intentar persuadirlos de que un gobierno de oposición no cambiaría lo esencial de las reglas del juego, manteniendo una economía de libre mercado, aunque con un nuevo énfasis en la acción reguladora y social del Estado.

Las críticas desaforadas al modelo se fueron atenuando progresivamente. Los llamados a la moderación en las peticiones, y a frenar demandas insatisfechas marcaron la óptica de los que ahora asumirán el gobierno. Estabilizar las expectativas será un punto crítico. (En Chile) hay buenas condiciones para compatibilizar democracia y desarrollo económico con justicia social (Alejandro Foxley, coordinador económico de la Concertación)⁵³.

Sin embargo, Foxley no los convenció, pues una de las pruebas de fuego que debía sortear el equipo económico era el complejo tema de la revisión de las privatizaciones realizadas después del plebiscito de 1988, una promesa no menor del programa de gobierno de la Concertación elaborado para las elecciones de 1989. Esto último estaba directamente vinculado al tema de la existencia de las AFP, pues aquellas poseían una buena parte de la propiedad de las empresas privatizadas a partir de 1986⁵⁴.

Hoy todos somos capitalistas —ha declarado en 1995 el directivo de la Cámara

Chileno-Norteamericana de comercio AG, Antonio Castilla—, porque los ahorros están depositados en administradoras de fondos de pensiones (AFP) que son dueñas de las empresas y los gerentes y presidentes deben rendir cuenta a la gente. El esquema chileno ha ido mucho más allá de lo que la gente se ha dado cuenta. Si la empresa chilena cae, caen todos los que han ahorrado durante años⁵⁵.

“Proponer una meta de crecimiento de 4 o 5% para este año resulta totalmente insuficiente y debemos aspirar por lo menos a una tasa del 6 o 7 %”, afirmó hoy el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), Fernando Agüero, al término de una entrevista con el ministro de Hacienda (del régimen militar), Martín Costabal. Añadió que los planteamientos de los economistas de la Concertación en cuanto a que el país debe retornar a tasa de crecimiento inferiores a las actuales no son correctos. Según Agüero, el país debe acostumbrarse a mantener tasas más altas ya que ello es posible debido al aumento registrado en la inversión. Asimismo, destacó la necesidad de que se apliquen nuevas medidas de ajuste, específicamente que se apliquen en la devaluación⁵⁶.

El verdadero poder sobre la política económica y las finanzas del Estado quedó radicado en Hacienda, pues el Ministerio de Economía se había convertido, justamente durante el régimen militar, en un organismo fundamentalmente asesor y dedicado a producir estudios y análisis de coyuntura, además de diseñar políticas públicas en algunos sectores relacionados con la modernización estatal⁵⁷. Fue entonces Foxley, el antiguo director de CIEPLAN, quien obtuvo el control sobre la nueva política económica del país, logrando del presidente Aylwin amplios poderes discrecionales en esta materia.

No hay que olvidar que este programa de desarrollo se instaló sin que los partidos lo hubieran avalado expresamente, ya que el compromiso inicial con el gobierno fue que cualquier controversia sería dirimida por el Presidente de la República, y los partidos, probablemente más los de la izquierda que la DC, por el temor a la regresión autoritaria, nunca chistaron. No fue una imposición, pero

dadas las difíciles circunstancias políticas que se vivían al inicio del gobierno de Aylwin, se concordó en que era necesario que el Presidente tuviera mucha autoridad, y por eso los partidos acataron mantenerse detrás de él⁵⁸.

sEl nuevo Ministro de Hacienda sabía que una cuestión clave para su éxito era moderar las demandas sociales acumuladas durante diecisiete años de régimen militar y exacerbadas por las promesas electorales y las expectativas creadas en las campañas del plebiscito de 1988 y presidenciales de 1989⁵⁹. El cambio del modelo económico o una reforma radical del mismo estaban entre los temas que se habían discutido y evaluado antes y después de la derrota de Pinochet en 1988. Sin embargo, en CIEPLAN, ya tenían muy claro que su estrategia sería más de continuidad que de cambio, justificando tal decisión en la necesidad de evitar un nuevo trauma a una sociedad chilena que, según su evaluación, ya había vivido tres procesos de cambios revolucionarios y excluyentes entre 1964 y 1989⁶⁰.

Pero no todas las dificultades provienen de los escollos antes descritos (institucionales), algunas limitantes surgirán de la propia opción por no alejarse del actual modelo económico, que, basado en la iniciativa privada, la apertura a mercado externo y el equilibrio del presupuesto fiscal, configura la base económica con la cual se intentará enfrentar los déficits sociales y mejor distribución de la riqueza'... En el período de transición el gobierno democrático enfrentará dificultades que podrán en peligro todo el proceso. Estas dificultades provienen de la propia dictadura, la cual ha preparado una institucionalidad antidemocrática, inserto en la lógica de dejar atado y bien atado todo. A esto hay que sumar tres aspectos de suma importancia:

–Alta dependencia de la derecha gobiernista para modificar la institucionalidad.

–Alta dependencia de los grupos económicos, la empresa privada y las transnacionales.

–La escasez de recursos y el eminente pago de la deuda externa⁶¹.

El equipo económico se encontraba en la disyuntiva de continuar con lo esencial del modelo económico, pero sin caer en el dogmatismo de sus antecesores, especialmente Sergio de Castro y, en menor medida, Hernán Büchi. En palabras del primero:

Siempre he dicho y seguiré diciendo que el gran mérito del gobierno de Aylwin fue precisamente validar el modelo, porque al leer todo lo que publicaba CIEPLAN, eran incendios contra la política económica⁶².

La solución propuesta para romper con la ortodoxia monetarista del gobierno anterior, surgió de la idea de compensar los equilibrios macroeconómicos con un mayor gasto social y avances relativos en el tema de los derechos humanos. Así lo expresó Edgardo Boeninger, quien fuera Secretario General de la Presidencia durante el primer gobierno de la Concertación y uno de los principales asesores y estrategias del presidente Patricio Aylwin:

Desde la perspectiva de la Concertación, el éxito económico postrero del régimen militar le permitió presentar un programa cuyo acento principal se colocó en lo social, punto débil del gobierno de Pinochet, sugiriendo implícitamente la continuidad de las políticas económicas en curso, lo que debilitó extraordinariamente el eventual apoyo civil a algún intento de sectores duros del régimen de impedir por la fuerza el retorno a la democracia⁶³.

En este período, se acuñó además el concepto de crecimiento con equidad⁶⁴, rescatando una idea surgida en la CEPAL y que se inspiraba también en el modelo de capitalismo alemán de posguerra, aunque bajo el nombre de otro concepto también utilizado en forma recurrente en Chile a partir de 1990: Economía Social de Mercado⁶⁵.

Crecimiento con equidad significaba, en primer lugar, crecimiento y las políticas

económica y social debían estar diseñadas para favorecerlo, en ningún caso arriesgarlo... Este documento señala la importancia de la política fiscal y del crecimiento económico en la sostenibilidad y continuidad de la política social durante todos estos años⁶⁶.

Foxley señaló que así a comienzos del próximo gobierno, podría hacerse lo mismo que en España: un pacto económico y social que logre las expectativas empresariales y regular los aumentos salariales, para que no sean excesivos, y avanzar al mismo tiempo en las reformas laborales que, con razón, reclaman los trabajadores⁶⁷.

Durante 1990, el primer desafío de la deuda social del nuevo gobierno democrático, fue lograr la aprobación de una reforma tributaria (fiscal). Para ello necesitó buscar los votos de la nueva oposición política de derecha, formada fundamentalmente por los partidos Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI), ambos defensores acérrimos del legado político-institucional y económico del régimen militar⁶⁸. Esta reforma era esencial para financiar el paquete básico de políticas sociales del gobierno, y para minimizar, en parte, las escuálidas cuentas fiscales que había legado el equipo económico anterior como resultado de una política expansiva de orientación electoralista llevada a cabo entre 1988 y diciembre de 1989⁶⁹.

El acuerdo se gestó con RN, pues la UDI se había negado a participar de una negociación con las nuevas autoridades. El gasto social estaba condicionado a la obtención de nuevos recursos a través de la reforma tributaria, dado que el nuevo equipo económico había priorizado la mantención de los equilibrios macroeconómicos⁷⁰. Rápidamente, las autoridades hicieron pública la necesidad de que la población comprendiera que las mejoras sociales serían solo de carácter gradual. De acuerdo con el análisis de Hugo Fazio, las necesidades del programa social bordeaban los US\$ 1.000 millones, siendo que lo que se obtuvo con la reforma fiscal fueron entre US\$ 550 y US\$ 600 millones, de los cuales una tercera parte correspondió al aumento del IVA, o impuesto indirecto al consumo, es decir, un tributo que pagan todas las personas, no importando su nivel de ingresos⁷¹. Los efectos de redistributivos y progresivos del proyecto original, como el impuesto a la renta, fueron dejados de lado en beneficio de un

aumento general en la recaudación.

Parte de la oposición (RN) aprobó la reforma bajo el argumento de que era una manera de pagar un precio mínimo por la legitimación del modelo económico. Ello le permitiría al gobierno entrante aplacar, en parte, las demandas sociales sin alterar mayormente la marcha de la economía, además de posicionar a RN como un partido con vocación negociadora y aspiraciones a disputar el centro político. La reforma tributaria se aprobó finalmente en junio de 1990, aunque con un plazo de vigencia de solo cuatro años, pues sería revisada en 1993.

Un segundo tema resultaba crucial para el ministro Foxley y su equipo económico: era necesario llegar a un acuerdo con los sindicatos y trabajadores, quienes habían tenido un papel crucial en la lucha por el retorno a la democracia y pagado con dureza la pérdida de derechos sociales durante la dictadura militar⁷². La deuda con este sector no podía ser dejada de lado, pero esto claramente generó nuevos roces con las cúpulas empresariales.

En contraste con la redemocratización en Brasil, Argentina y Uruguay, el primer gobierno después de la transición en Chile representó a los sindicatos y a sus aspiraciones. Y prometió, no solamente la democratización, sino también las reformas sociales y laborales. Encuestas realizadas en 1990 y después, revelaron que la gran mayoría de los chilenos estaban en favor de reformar la legislación laboral para elevar la posición de los sindicatos⁷³.

Recuerdo que a nosotros nos dijeron que íbamos a tener un nuevo código del trabajo, que reformaríamos la seguridad social, que se revisaría todo el sistema de privatizaciones que había ocurrido en la dictadura, que íbamos a buscar mecanismos de participación ciudadana en el nuevo gobierno, que tendríamos un desarrollo social⁷⁴.

La dirigencia sindical chilena y la mayor parte de los trabajadores sabían que en el nuevo escenario de retorno a la democracia era prácticamente imposible que volvieran a su situación y estatus anterior a septiembre de 1973⁷⁵. En otras palabras, el nuevo Estado democrático surgido en 1990 no favorecería a los

trabajadores por sobre el capital. Sin embargo, aspiraban a que en democracia las élites políticas y económicas estuvieran dispuestas a negociar un sistema de relaciones laborales que facilitara un mejor ‘balance de poder’ en un contexto más equitativo.

Un puente de diálogo ya había sido creado en la década de 1980 entre uno de los más reconocidos economistas de CIEPLAN, René Cortázar, y dos de los dirigentes más importantes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)⁷⁶, la principal organización sindical chilena. Cortázar, ahora Ministro del Trabajo, había participado en numerosos seminarios e instancias de formación económica y gremial para los líderes sindicales, destinadas principalmente a orientarlos en la lucha por sus reivindicaciones sociales y el retorno a la democracia. Estas jornadas habían creado un vínculo directo con la dirigencia sindical, que sería de gran ayuda al gobierno para obtener diversos acuerdos durante la administración del presidente Aylwin.

Sentíamos que quienes habían sido marginados y perseguidos por 17 años (los trabajadores), requerían de gestos reales de incorporación a la mesa de decisiones. Que la democracia necesitaba de una clase dirigente que aprendiera a cooperar entre sí, a construir acuerdos y lazos de confianza⁷⁷.

El 27 de abril de 1990 se consiguió un rápido acuerdo entre trabajadores y empresarios que permitió un modesto aumento del salario mínimo, pero que implicó la firma de una declaración de principios, tema crucial para la dirigencia patronal, en la cual los trabajadores se comprometieron a restringir sus demandas e, indirectamente, a no poner en peligro las bases del modelo económico⁷⁸. Los trabajadores querían cambiar el código laboral impuesto durante el régimen militar, pues lo consideraban ilegítimo. Su exigencia inicial era volver a aquel que estuvo vigente hasta septiembre de 1973. Por su parte, el empresariado no estaba dispuesto a ceder nada en este punto, porque estimaba la legislación laboral de 1987 como un pilar fundamental del modelo⁷⁹. Finalmente, prevaleció la posición de estos últimos.

...el empresariado y sus organizaciones gremiales, que en buena parte habían

apoyado el régimen militar saliente, veían con preocupación la posibilidad que se abriera una etapa de reivindicaciones que desbordaran al gobierno e, incluso, llegase a manifestarse como un cobro de cuentas en contra de ellos (El Mercurio, 13 de diciembre 1989; 25 de marzo 1990; 10 de abril, 1990)⁸⁰.

Como bien lo ha destacado Ascanio Cavallo, en menos de cinco meses las nuevas autoridades económicas habían consolidado una reforma fiscal para financiar parte de su programa social, y un acuerdo laboral que les permitió llevar adelante el ajuste económico sin verse desbordados por los sindicatos, a pesar de que posteriormente hubo aumento sostenido de la conflictividad laboral a partir de 1990⁸¹. En definitiva, el empresariado había pagado un costo muy menor por la legitimación del modelo económico del régimen anterior, y las nuevas autoridades lograron un margen de maniobra importante para conducir la política económica y asegurar lo que, en esos momentos, se definió como la necesaria gobernabilidad del país⁸². Los sindicatos aceptaron plegarse inicialmente a la nueva política de acuerdos, aunque sin evaluar el costo que esto tendría para sus propias organizaciones, galvanizadas durante la lucha por la recuperación de la democracia. La política de acuerdo social entre gobierno, sindicatos y empresarios no tuvo los resultados esperados por los trabajadores en términos de un reparto más igualitario de los beneficios del crecimiento.

En el fondo la estrategia de la CUT suponía que la transición sería un proceso de reconstrucción social y política, del cual esta organización era un factor fundamental, y no una transformación socioeconómica cuya dinámica había sido previamente definida y cuyos resultados perjudicaban a las categorías asalariadas que ella representaba. En la situación planteada, los actores principales eran los grandes empresarios capaces de dinamizar el modelo exportador, y que compartían los objetivos fundamentales de crecimiento económico con las nuevas autoridades económicas y políticas⁸³.

Hay sectores de trabajadores que se quejan de que en materia económica el gobierno no ha realizado todos los cambios que hubiesen deseado; se quejan de un supuesto 'continuismo' respecto de las políticas del gobierno anterior⁸⁴.

Bajo el autoritarismo, los dirigentes podían hablar y convocar en nombre del movimiento y de los trabajadores. Tuvieron una importante resonancia. Las condiciones eran otras. El enemigo y los objetivos de las movilizaciones eran claros. Con el advenimiento de la democracia, el enemigo se diluyó. El nuevo gobierno era sentido como algo propio. Se iniciaba una nueva fase histórica: la de la negociación y las reformas. Pero la correlación de fuerzas cambió rápidamente y el sindicalismo no tenía las fuerzas suficientes como para imponer reformas a su favor. Los bloqueos e impasses con el sistema político no se dejaron esperar. A estas alturas, puede decirse que ni el mercado ni el sistema político son capaces de frenar el proceso de disgregación y exclusión social. En el marco político institucional actual, el sindicalismo ‘de sindicatos’ difícilmente puede desarrollarse como actor colectivo⁸⁵.

No obstante lo anterior, la estrategia de acuerdos entre la dirigencia sindical y el gobierno durante los primeros años de la transición, permitió a los trabajadores algunas mejoras importantes en términos de aumentos del salario mínimo, encarecimiento de los despidos para las empresas y mantención de las indemnizaciones por años de servicio. Entre 1990 y 1991, se establecieron beneficios respecto a la libertad sindical, remoción de las normas antisindicales de la legislación laboral y protección jurídica de sus dirigentes. Sin embargo, como apunta Gonzalo de la Maza, la no obtención de sus objetivos principales mediante la estrategia de concertación y diálogo, generó una fuerte tensión al interior del movimiento sindical, pues se encontró frente a los ‘límites estructurales’ que el esquema económico y la negociación política habían impuesto a la transición democrática chilena⁸⁶. Un autor como Volker Frank sostiene que en realidad el consenso, o pacto de gobernabilidad, se dio entre las cúpulas empresariales y la élite política del país, incluyendo a las autoridades de gobierno y dejando fuera a los trabajadores:

¿Cuánta participación, especialmente en un sentido social y económico, están las élites dispuestas a conceder a las clases trabajadoras? En un contexto de democratización, las élites políticas y económicas chilenas estaban más preocupados por las amenazas a la acumulación de capital y a la gobernabilidad

de lo que lo estaban de la participación de los trabajadores⁸⁷.

Si bien muchos trabajadores se beneficiaron del contexto económico general en esa década, no recibieron tratamiento especial de la Concertación. Tampoco recibieron muchas mejoras en la legislación laboral. No obstante algunas modificaciones útiles, la lógica férrea del sistema de relaciones laborales no se rompió desde 1979 hasta el 2003. Dado el plan de la economía, la debilidad del sindicalismo, la intransigencia de la derecha y la cautela de la Concertación, no pasaron reformas rotundas... la Concertación exigió a los sindicalistas suprimir sus demandas para evitar la inestabilidad. Así, su relación con los sindicatos ayudó al gobierno a mantener el crecimiento económico sin inflación y sin grandes conflictos sociales⁸⁸.

La economía política de la transición y el discurso del Consenso de Washington

El debate sobre si el esquema económico del régimen militar, denominado neoliberal por la mayor parte de sus críticos, es el mismo o no respecto del aplicado por la Concertación a partir de 1990, no tiene mucho sentido en la medida que el contexto político y social es radicalmente diferente. Por el contrario, creemos que resulta más interesante analizar los cambios y evoluciones en el discurso de los economistas, así como aquellos elementos centrales que han dado forma a lo que se ha llamado el ‘modelo chileno’ de desarrollo, y que, por supuesto, es el resultado de las reformas realizadas durante el régimen autoritario y también de aquellas puestas en práctica a partir del inicio del retorno a la democracia. En palabras del propio Ministro de Hacienda del primer gobierno concertacionista, Alejandro Foxley:

La estrategia pro-crecimiento incluía una drástica apertura de la economía al comercio internacional, una política fiscal conservadora, que apuntaba simultáneamente a conseguir un superávit presupuestario y a reducir la deuda pública, una profundización del mercado nacional de capitales, y una reforma laboral y tributaria. El alza impositiva decretada por el gobierno le permitió aumentar el gasto social en más de 200% en la década (1990-2000)⁸⁹.

La experiencia económica chilena, vista en la perspectiva que entregan los treinta años transcurridos entre 1973 y 2003, tiene un carácter híbrido, que se refleja en el hecho de que posee numerosos elementos de continuidad y otros de cambio. Desde la mirada del historiador que analiza la evolución del liberalismo económico en Chile, nos interesa saber primero cuánto de continuidad y de cambio es posible de identificar durante el período y, segundo, si es posible determinar la existencia de dos discursos antagónicos al interior de una idea general de modelo liberal de desarrollo, o más bien se trata de una adecuación de

los economistas de la Concertación, en principio pragmática y después ideológica, producto de las condiciones de la economía internacional y la supuesta irreversibilidad de las transformaciones realizadas durante el período dictatorial. En este sentido, la influencia del denominado Consenso de Washington en la aplicación de un decálogo de sugerencias sobre política económica, nos ha parecido un elemento a tener en consideración.

Elementos principales de la política económica de la nueva democracia

Las tensiones y problemas del primer equipo económico democrático tras diecisiete años de régimen autoritario, estuvieron marcadas por el temor a caer en políticas populistas y el ejemplo de las experiencias fallidas de manejo económico de los gobiernos de Raúl Alfonsín en Argentina (1983-1989) y la primera administración de Alan García en Perú (1985-1990)⁹⁰. A esto se sumaron las presiones del empresariado local y el efecto de las cifras macroeconómicas positivas del último trienio del régimen militar, a pesar de su evidente deuda en materia social. Las promesas del programa de gobierno concertacionista fueron readecuadas en la medida que las nuevas autoridades económicas no quisieron entrar en conflicto con la coalición de facto que existía entre empresarios, la derecha política, los militares y parte importante del poder judicial.

Para el primer año del gobierno de la Concertación, ya resultaba evidente la estrategia de crecimiento que seguiría el país, la cual parecía no desviarse demasiado de las políticas heredadas del régimen anterior, pero con un nuevo énfasis en lo social. El equipo económico dirigido por Alejandro Foxley y Carlos Ominami había superado el peligro inflacionario de la crisis petrolera producida por la invasión de Irak a Kuwait en agosto de 1990, y alcanzado una meta de inflación más baja que la pronosticada por la mayor parte de los agentes del mercado, principalmente vinculados a las cúpulas empresariales⁹¹. De acuerdo con Rafael Otano, la defensa de los pilares del 'modelo económico' contó con el apoyo irrestricto de la alianza entre militares y la élite empresarial, quienes evitaron cualquier disenso o crítica pública en cuanto a la participación de sus respectivos estamentos durante el régimen anterior.

(la entente empresarios-militares) se convirtió en un verdadero pacto de sangre. Ningún representante de los empresarios diría una sola palabra respecto a los militares que no fuese de elogio e incluso de adulación. Si algún uniformado incurriera en alguna conducta inadecuada, la culpa se le atribuiría inexorablemente al gobierno o a los partidos de la Concertación⁹².

La derecha parlamentaria, sobrerrepresentada por efecto del sistema electoral binominal y por nueve senadores ‘designados’ obligará al gobierno a negociar si es que desea aprobar sus leyes. En el marco de la política de los consensos, la Concertación deja de lado sus reparos a los procesos privatizadores realizados por la dictadura y nunca emprende una revisión a fondo⁹³.

Lo que dominó, entonces, al interior del equipo económico concertacionista fue la cautela y el evitar conflictos mayores con ambos estamentos. La decisión de mantener los equilibrios macroeconómicos, lo que en sí mismo no constituye un dogma monetarista, condicionó el tipo de política social que se podía llevar a cabo, así como la estrategia de crecimiento a seguir. Recordemos que las nuevas autoridades económicas se encontraron, además, con un Banco Central autónomo, cuya tarea principal estuvo orientada fundamentalmente al control de la inflación y menos al apuntalamiento de la estrategia de desarrollo. En este sentido, la puesta en marcha de nuevas políticas sociales quedó determinada, sobre todo, por los niveles de crecimiento de la economía y menos por políticas redistributivas, tal como se había anunciado hasta antes de 1990.

La inflación es el peor enemigo del crecimiento económico y del progreso social. En los países con inflación alta, los trabajadores pierden todos los días; en países con hiperinflación no son raras las caídas de hasta un 40% en el poder adquisitivo de los salarios⁹⁴.

La mantención de la inflación a un bajo nivel es la primera decisión de política económica que tomó el gobierno del presidente Aylwin. La segunda es la de mantener un presupuesto fiscal equilibrado. La tercera, consecuencia de lo anterior, es la gradualidad del esfuerzo social. La velocidad e intensidad de este —añadió— estará supeditada a la mantención del equilibrio macroeconómico y al financiamiento —por vía tributaria— del nuevo gasto social⁹⁵.

La cautela del gobierno quedó de manifiesto al evitar roces con las élites socioeconómicas, impidiendo una mejor política de distribución del ingreso por

medio de nuevas reformas impositivas y laborales, o bien postergando otras relacionadas con los sistemas privados de salud, educación y pensiones⁹⁶. La contención de las demandas sociales estuvo en el centro de la estrategia del primer equipo económico concertacionista, por lo que los cambios de política social solo pudieron realizarse dentro de las reglas del modelo, es decir, mediante un enfoque gradualista, focalizado y no redistributivo. Los temas controvertidos debieron o bien postergarse o definitivamente negociarse en todos sus detalles con la oposición y el empresariado en lo que se llamó la ‘política de los consensos’ y más tarde ‘la democracia de los acuerdos’⁹⁷.

Lo que se produjo en Chile, en suma, fue una negociación que culminó en un acuerdo tácito. El NO, triunfante electoralmente pero institucionalmente débil, acepta la Constitución de 1980 reformada —esa Constitución de Pinochet que la oposición había cuestionado vehementemente en el pasado—. Pinochet, las Fuerzas Armadas, sus partidarios civiles y la comunidad empresarial, por su lado, aceptan la transferencia del poder a sus viejos enemigos: la coalición de centro-izquierda unida en la Concertación⁹⁸.

En la transición pactada el único factor favorable que se heredó fue que la economía estaba funcionando. Y en los primeros tiempos de la Concertación buscamos no alterar el funcionamiento económico. Existía un trauma con lo que había pasado en la economía durante el gobierno del presidente Salvador Allende... La economía continuó funcionando, incluso con un crecimiento mayor al que registró durante la dictadura. Lo que no se percibió fueron las limitaciones del modelo⁹⁹.

El recurso a la movilización social como herramienta de presión ante la coalición opositora fue excluido explícitamente por las autoridades políticas en aras de la gobernabilidad y la estabilidad del nuevo gobierno. El fantasma de la crisis de la democracia en 1973 y el temor a los militares y al desborde de las demandas sociales explican, en parte, esta actitud. Carlos Huneeus ha defendido esta tesis de la realpolitik al comparar la situación chilena en 1990 con la que vivió Argentina en la misma época:

Si hubiéramos tenido un presidente como el argentino Raúl Alfonsín, en vez de ‘ejercicios de enlace’ o ‘boinazos’ (alzamientos militares) habríamos sufrido incidentes mucho peores. El general Pinochet tenía, en 1990, toda la legitimidad. Un 40% de la opinión pública lo respaldaba. La derecha y los empresarios estaban detrás de él. En ese momento, ser más duro habría sido una falta de responsabilidad tremenda, que podría haber llevado al país a una situación similar a la Argentina, con asonadas militares recurrentes. Como la transición terminó bien, pueden hacerse críticas a Aylwin después de la batalla¹⁰⁰.

El control de la inflación así como la disciplina fiscal de las autoridades económicas del primer gobierno de la Concertación, comenzaron a dar sus frutos durante el año 1991¹⁰¹. El modelo de mercado había sido adoptado por la nueva coalición gobernante, a pesar de la resistencia de algunos de los sectores demócratacristianos, tradicionalmente más reacios al esquema que la mayoría de los líderes del llamado ‘socialismo renovado’¹⁰². La política monetaria restrictiva de los primeros meses había sido apoyada completamente por el presidente Aylwin, con lo que se había eliminado el riesgo político y social al cual tanto temían los agentes del mercado. A partir de 1991, el país se convirtió en un objetivo para los inversionistas extranjeros debido a las nuevas condiciones de estabilidad en las reglas establecidas tanto por el Ministerio de Hacienda como por el Banco Central. Sin embargo, el flujo masivo de capitales era una amenaza para el equilibrio económico y el desarrollo exportador del país, pues el riesgo de la llamada ‘enfermedad holandesa’ o Dutch Disease no era menor¹⁰³.

La necesidad de controlar el flujo de capitales fue otro de los elementos que diferenció la política económica de la Concertación respecto del régimen militar. En 1991, se estableció un encaje (20%) sobre todos los ingresos de capitales, exceptuando la inversión extranjera directa, el cual solo fue eliminado en 1998¹⁰⁴. Este funcionó como una suerte de impuesto para evitar la invasión de los llamados capitales ‘golondrinas’ de corto plazo, asociados normalmente a la especulación. Se trató con ello de evitar lo sucedido con la crisis financiera de 1982-83, que prácticamente barrió con la banca nacional. De acuerdo con Kurt Weyland, esta medida ayudó a proteger al país de los efectos más adversos de la globalización financiera, al menos durante los primeros años de la transición a la democracia:

Estas restricciones divergentes del precepto neoliberal de libre movilidad de capitales adoptado por el régimen pinochetista, elevaron el costo de las inversiones de corto plazo a niveles prohibitivos y así desincentivaron a especulación e inmunizaron al país contra los ciclos de expansión y crisis causados por la alta volatilidad de movimiento internacional de capitales¹⁰⁵.

Por su parte, los economistas Agosin y Ffrench-Davis también han argumentado a favor de la medida, pues —a su juicio— representó un cambio pragmático a un asunto que había sido tratado por largo tiempo, y de manera ideológica, entre proteccionismo y apertura total.

Hasta mediados de los años 1970, Chile tenía una larga tradición de controles de capital. Desde entonces, los responsables políticos han mantenido una cuenta de capital bastante abierta, y las políticas recientes, en lugar de revertirlas, han representado un paso significativo hacia un mayor pragmatismo. En pocas palabras, la política durante el actual aumento de la oferta de capital extranjero puede ser descrita como un intento de desalentar las entradas de corto plazo, mientras se mantienen las políticas liberales respecto de las entradas de largo plazo¹⁰⁶.

Un segundo elemento donde el cambio de política económica fue mayor respecto del régimen militar, se aprecia en el gasto social por la vía de las nuevas asignaciones del presupuesto nacional. Esto se hizo teniendo en cuenta la primera prioridad, la cual era la mantención de los equilibrios macroeconómicos dentro de un ambiente propicio a la iniciativa privada. La dictadura había recortado significativamente el gasto público, sobre todo en los programas sociales, con el fin de debilitar el peso del Estado en la economía y darle mayor libertad al sector privado¹⁰⁷. De lo que se trató, a partir de 1990, fue de aplicar un programa de mitigación de la deuda social heredada del régimen anterior, pero sin salirse del criterio de responsabilidad fiscal. El 2% del PIB que otorgó la reforma fiscal de 1990 se destinó enteramente a este propósito, si bien su carácter redistributivo fue prácticamente anulado al darle prioridad a los

impuestos indirectos por sobre la tributación a la renta.

Adicionalmente, las altas tasas de crecimiento de la economía entre 1990 y 1997 permitieron a los gobiernos de la Concertación aumentar significativamente la recaudación fiscal, llegando al superávit presupuestario, sin elevar la tasa impositiva ni menos insistir en el tema de la redistribución del ingreso¹⁰⁸. Esto permitió aumentar significativamente el número y la cobertura de los programas sociales, pero sin alterar la enorme desigualdad que aún persiste en la sociedad chilena, y que incluso subió levemente durante el mismo período. Producto de la crisis asiática que afectó al país a partir de 1998, la discusión sobre la carga impositiva retomó fuerza, e incluso el Ministro Secretario General de la Presidencia, Juan Villarzú, planteó aumentarla progresivamente del 18% al 25% del PIB, lo cual fue rechazado inmediatamente por el Ministro de Hacienda de la época (Eduardo Aninat) y también por el primer mandatario (Eduardo Frei Ruiz-Tagle). En este punto, concordamos con Weyland en el hecho de que los gobiernos de la Concertación priorizaron nuevamente los requerimientos del modelo de mercado, sin las presiones del empresariado, obstaculizando los esfuerzos adicionales por combatir la desigualdad social en Chile¹⁰⁹.

Más allá de los incentivos económicos creados por el modelo de mercado — incluyendo la privatización de la seguridad social impuesta por el régimen de Pinochet— y el rendimiento estelar de la economía chilena, otros dos factores contribuyeron a estos logros: ahorrantes e inversionistas se sintieron seguros gracias a las políticas macroeconómicas cautas y responsables de la nueva democracia, y por el hecho de que la Concertación aceptó y así legitimó los contornos básicos del sistema de mercado¹¹⁰.

La consolidación de una estrategia de desarrollo basada en las exportaciones de bienes primarios, siguió la línea trazada por el régimen militar. Lo que se produjo fue una mayor diversificación de los productos exportados, disminuyendo la importancia del cobre en el total del valor exportado desde un 75% en 1970 a un 46% en 1990. Fue así como la silvicultura, la pesca y los productos agropecuarios han adquirido mayor relevancia desde principios de la década de 1980.

Evolución del Comercio Exterior de Chile 1970-1989

Año	Exportaciones (Millones US\$)	Importaciones (Millones US\$)	PIB (Crecimiento %)
1970	1.112	956	2,1
1973	1.309	1.288	-5,6
1974	2.151	1.794	1,0
1975	1.590	1.520	-12,9
1976	2.116	1.479	3,5
1977	2.185	2.151	9,9
1978	2.460	2.886	8,2
1979	3.835	4.190	8,3
1980	4.705	5.469	7,8
1981	3.836	6.513	5,5
1982	3.706	3.643	-14,1
1983	3.831	2.845	-0,7
1984	3.651	3.288	6,3
1985	3.804	2.955	2,4
1986	4.199	3.099	5,7
1987	5.233	3.994	5,7
1988	7.052	4.833	7,4
1989	8.080	6.502	10,0

Fuente: Banco Central de Chile, Balanza de pagos y cuentas nacionales.

Los gobiernos de la Concertación buscaron la manera de incorporar activamente al sector público en la estrategia exportadora al no poder implementar una política industrial directa. La reforma liberal de los años 80 había limitado severamente los instrumentos del Estado para intervenir en la producción, y aun menos para subvencionar o manejar directamente empresas. Durante la década de 1990, las nuevas autoridades económicas decidieron potenciar el mercado externo de materias primas mediante la adición de nuevas tecnologías y mayor valor agregado a las exportaciones. Fue, entonces, cuando se comenzó a hablar de una segunda fase exportadora del modelo económico chileno¹¹¹. Sin embargo, el esquema de mercado exigía que la política del Estado fuera neutral respecto de las tarifas aduaneras, los productos exportables y de los sectores ‘ganadores’ o ‘perdedores’ involucrados en la estrategia. Para esto se adoptó la vía de los países nórdicos en el sentido de seguir exportando materias primas, pero con mayor valor y más procesos industriales incluidos. Dadas estas condiciones, resultaba imposible implantar el ‘modelo coreano’ de industrialización debido al reducido tamaño de la economía chilena y a las limitaciones del propio modelo chileno en cuanto a la participación del Estado¹¹². Las autoridades económicas de la Concertación optaron entonces por este esquema intermedio, en el cual el sector público promovería el desarrollo exportador resolviendo las fallas del mercado y fomentando la incorporación de capital físico, tecnología y formación de capital humano¹¹³.

Los nuevos gobiernos democráticos entendieron que el sostenimiento exitoso de una economía altamente orientada a las exportaciones operando en mercados mundiales competitivos dependería de la acción deliberada del Estado, no simplemente de las fuerzas del mercado. El Estado debería también utilizar su capacidad de negociación en las tratativas comerciales internacionales para abrir nuevos mercados¹¹⁴.

La crisis asiática de 1998 puso a prueba la lealtad del equipo económico de la

Concertación con el modelo exportador. En aquel momento, las presiones de un sector de la derecha por proteger al sector agrícola fueron resistidas por el gobierno, siendo que la coalición conservadora era quien, en teoría, debía defender la neutralidad de las políticas neoliberales. En términos macroeconómicos, la defensa del modelo exportador rindió frutos a la coalición gobernante, lo cual claramente se reflejó en sus continuos triunfos electorales desde 1998 hasta 2006.

La década de 1990 fue particularmente exitosa en términos de las cifras macroeconómicas, aunque opacadas por la persistente inequidad y diferencias en la distribución del ingreso, sin dejar de mencionar el debate, cada vez más presente, sobre la sustentabilidad ambiental del modelo de desarrollo chileno¹¹⁵. Entre 1990 y 1997, las ventas del país al extranjero crecieron en un 102%, pasando de US\$ 8.370 millones a US\$ 16.920 millones. El comercio exterior también se diversificó en términos de la cantidad y variedad de productos exportados, los cuales también se vieron beneficiados en sus precios de venta por una mayor inclusión de valor agregado.

Chile: Resultados macroeconómicos 1990-2000 (%)

	1990-2000
Tasa de crecimiento anual	6,1
Ahorro interno, como porcentaje del PIB	22,0
Inversión como porcentaje del PIB	25,0
Aumento anual de la producción	4,4
Incremento anual de los salarios reales	3,3
Crecimiento anual del empleo	1,7
Ahorro fiscal, como porcentaje del PIB	4,5
Superávit presupuestario, como porcentaje de PIB	1,3

Fuente: Banco Central de Chile (2001). Véase: Foxley, Alejandro, Logros y fracasos en la erradicación de la pobreza. El caso de Chile, Op.cit., p. 9.

Chile, Indicadores económicos 1990-2000 (%)

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Tasa de crecimiento anual	3,7	8,0	12,3	7,0	5,7	10,6	7,4	6,6	3,2	-1,1	4,2
Inflación	27,3	18,7	12,7	12,2	8,9	8,2	6,6	6,0	4,7	2,3	4,5
Desempleo	7,8	8,2	6,7	6,5	7,8	7,4	6,5	6,1	6,2	9,7	9,2
Superávit presupuestario	0,8	1,6	2,3	2,0	1,7	2,6	2,3	2,0	0,4	-1,5	0,1
Deuda pública sobre el PIB	43,0	37,0	30,6	28,4	23,1	17,7	15,1	13,2	12,5	13,8	13,7

Fuente: Banco Central de Chile, Indicadores económicos y sociales 1960-2000, 2000.

La estrategia cautelosa de la Concertación en términos de políticas económicas redistributivas, se vio compensada por la expansión de la economía, sobre todo, entre 1990 y 1997. Los beneficios del crecimiento permitieron la puesta en marcha de diversos programas asistenciales y de un aumento sostenido del gasto social, aunque sin cambiar mayormente ni el estatus ni la situación de precariedad laboral de la mayor parte de los trabajadores asalariados del país, actores fundamentales de la recuperación democrática y de la gobernabilidad durante los primeros años de la transición política¹¹⁶. Siguió primando el principio de la flexibilidad laboral, a pesar de los intentos por cambiar la legislación, los cuales siempre se encontraron con la enconada oposición del empresariado y de los partidos de derecha. Los equipos económicos de la Concertación no insistieron mayormente en el punto debido a las buenas cifras económicas y el cúmulo de elogios que el modelo chileno recibía desde el exterior, especialmente de las instituciones de crédito internacional y de las agencias calificadoras de riesgo¹¹⁷. La vía chilena al desarrollo parecía haber fortalecido su política social sin romper las reglas básicas del modelo liberal¹¹⁸.

Participación del ingreso por quintil de población en Chile (%)

Quartil	1987	1994	1998
1	3,7	4,0	3,1
2	7,1	7,5	6,7
3	10,9	11,5	10,8
4	17,9	18,5	18,3
5	60,2	58,5	61,1

Fuente: Banco Mundial, Chile's High Growth Economy, Poverty and Income Distribution, 1987-1988, 2002. Citado por: Foxley, Alejandro, Logros y fracasos en la erradicación de la pobreza, Op.cit., p. 18.

Concordamos con Kurt Weyland en que la prosperidad de Chile durante la década de 1990 se 'derramó' hacia los distintos grupos de la sociedad, debido principalmente a las políticas sociales activas de los gobiernos de la Concertación y al aumento sostenido del gasto social y del ingreso familiar producto del crecimiento económico¹¹⁹. Sin embargo, aquello no se aprecia en una mejora sustancial de las condiciones laborales ni de los derechos sociales adquiridos durante el período del Estado de Compromiso¹²⁰. Efectivamente, desde 1990 se ha producido una reducción sustancial de los índices de pobreza, y especialmente de la indigencia a tasas significativamente más rápidas que durante el régimen militar¹²¹. En términos totales, la pobreza se redujo en Chile de un 45% de la población en 1987 a un 19% en 2003.

Población en condiciones de indigencia y pobreza en Chile (%) 1987-1998

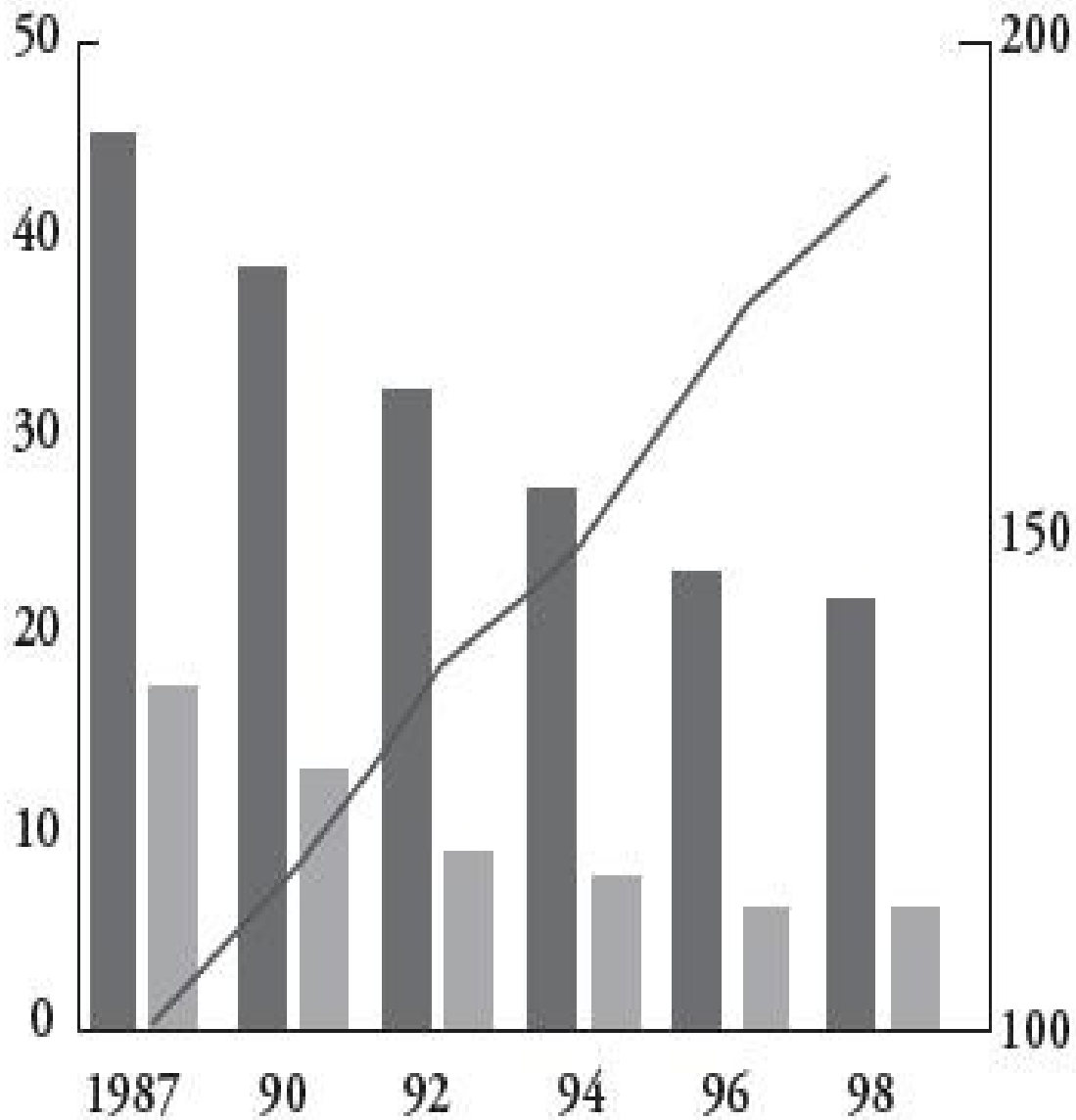
	1987	1990	1992	1994	1996	1998
Indigentes	17,4	12,9	8,8	7,6	5,8	5,6
Pobres no indigentes	27,7	25,7	23,8	19,9	17,4	16,1
Total de pobres	45,1	38,6	32,6	27,5	23,3	21,7

Fuente: MIDEPLAN, datos nacionales de la encuesta CASEN. Véase: Ffrench-Davis, Ricardo, Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad, Op.cit., p. 266.

Población en condiciones de indigencia y pobreza en Chile (%) 1987-1998

Tendencias en la pobreza 1987-1998

(1987=100)



■ Pobreza (escala izquierda) ■ Extrema pobreza (escala izquierda) — PIB real per cápita (escala derecha)

Fuente: MIDEPLAN, Banco Central de Chile, INE. Gráfico obtenido de: Aninat, Eduardo, 'Chile in the 1990s: Embracing Development Opportunities', Finance & Development, Vol. 37, n° 1, march 2000, p. 21.

El combate contra la pobreza y la indigencia ha sido uno de los éxitos más destacables de los dos primeros gobiernos de la Concertación. No obstante el esfuerzo por su reducción, este no se tradujo en mejores índices de distribución del ingreso¹²². A ello contribuyeron significativamente las políticas cautelosas de la coalición gobernante frente a los denominados 'poderes fácticos', pero también de la política monetaria implementada por las autoridades económicas¹²³. La concentración de la riqueza se vio favorecida, además, por las altas tasas de interés orientadas a la contención de la inflación, que beneficiaron especialmente a los grandes inversionistas. Estos últimos pudieron, además, contraer créditos en el exterior a tasas mucho más convenientes que las disponibles para el resto de la población chilena.

La reducción de la pobreza es evidente en los noventa. ¿Qué pasa con la distribución del ingreso? El resultado es más difuso y con ciertas contradicciones: algunos antecedentes muestran mejoras y otros, constancia; hay predominio de cierto cambio positivo en los primeros años e inflexión posterior según algunas fuentes. Sin embargo, aunque en general los antecedentes indican una mejoría con respecto a los ochenta, es evidente que la distribución continúa siendo muy regresiva¹²⁴.

De acuerdo con Weyland, los esfuerzos por reducir la pobreza se mantuvieron durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), pero se evitaron los riesgos políticos asociados a una mejor política redistributiva que alterara, en lo más mínimo, los equilibrios macroeconómicos del país; no obstante, existía el apoyo electoral para llevarla a cabo. Pero fue durante el período del presidente Aylwin (1990-1994) cuando las condiciones electorales fueron las mejores para realizar estos cambios, pues el empresariado necesitaba negociar con el nuevo gobierno la mantención de los pilares básicos del modelo económico, y la

legitimidad democrática de la Concertación era innegable. Para mediados de los años 1990, las cúpulas empresariales y los partidos de derecha consideraron que ya habían realizado suficientes concesiones al gobierno y que, por lo tanto, era hora de asumir una posición más intransigente en cuanto a la defensa del modelo. De alguna manera, los pobres resultados de la Concertación en las elecciones parlamentarias de diciembre de 1997, se debieron a la alta tasa de abstención, la cual, según Weyland, pudo haberse compensado con reformas más profundas a favor de una menor concentración de la riqueza¹²⁵.

Uno de los grandes desafíos para la estrategia de desarrollo chilena proviene justamente de su éxito en materia de crecimiento económico. Diversos países latinoamericanos han seguido la misma línea al implementar reformas de mercado y orientarse a la exportación de productos que compiten directamente con las exportaciones chilenas, como es el caso del vino, las frutas frescas y la madera, lo cual ha comenzado a tener impactos no menores en el nivel de ganancia y salarios del sector externo. Desde el punto de vista de la sustentabilidad ambiental, la economía chilena ha comenzado a enfrentar el riesgo de la sobreexplotación de recursos primarios, como ya ha sucedido en el caso de la pesca y la silvicultura¹²⁶.

En definitiva, el modelo económico chileno aplicado durante la década de 1990 por los gobiernos de la Concertación, no corresponde al mismo aplicado por régimen militar, aunque ha mantenido sus pilares básicos. Este se define en: (1) una centralidad de los equilibrios macroeconómicos, (2) la reducción del papel del Estado en la economía, (3) la primacía del sector privado en la producción de bienes y servicios, (4) el desequilibrio entre capital y trabajo, y (5) el apoyo irrestricto a la estrategia exportadora como motor del crecimiento. La disminución importante de la deuda social del régimen militar ha sido un elemento central y diferenciador en las políticas implementadas por las autoridades económicas desde el año 1990, aunque focalizadas en la reasignación de los recursos provenientes de los excedentes del crecimiento y no, como ya se dijo, producto de una mejor redistribución del ingreso.

Principales políticas económicas bajo los dos primeros gobiernos de la Concertación (1990-2000)

Presidente Ministro de Finanzas	Políticas
Patricio Aylwin (1990-1994) Alejandro Foxley (1990-1994)	<ul style="list-style-type: none"> -1990: reforma fiscal para aumentar el gasto en programas sociales -1990-94: aumento del gasto social especialmente en salud y educación -1991: reducción de las tarifas aduaneras del 15 al 11%, reforma laboral -1991: privatización del 40% restante de Lan Chile (aerolínea) -1992: Liberalización de las normas de inversión extranjera, ley que permite a CODELCO (cobre) asociarse con capitales privados -1993: anuncio de la privatización de 39 empresas pertenecientes al Estado (minería, electricidad, y otras) -1994: partición de la estatal CODELCO en cuatro divisiones; las divisiones no minerales serán privatizadas -1990-94: tratado de libre comercio con México; anuncio del un TLC con Estados Unidos
Eduardo Frei (1994-2000) Eduardo Aninat (1994-2000)	<ul style="list-style-type: none"> -1995: ajuste del gasto fiscal, austeridad y control del crédito; gasto social continúa como prioridad, alcanzando 70% del presupuesto (budget) en 1995, desde un 63% en 1994 y 40% en 1996 -1995: privatización de las empresas sanitarias, concesión privada de los puertos, de las nuevas autopistas; se anuncia la concesión del servicio de transporte ferroviario -1997: anuncio de la privatización parcial de ENAP (petróleo) y ENAMI (minería) -1997: reducción de las tarifas aduaneras del 11% al 6% dentro de un plazo de cinco años -1996-98: tratado de libre comercio con Canadá, se anuncian TLC con Perú y la Unión Europea -1998: ajuste de las tasas de interés y recortes en el gasto público y programas sociales debido a la Crisis Asiática

Fuente: Teichman, Judith, *The Politics of Freeing Markets in Latin America: Chile, Argentina, and Mexico*, UNC Press, 2001, p. 85.

A fines de la década de 1990, en la mayoría de los países de América Latina la distribución del ingreso seguía estando caracterizada por su alta concentración. Destaca a este respecto la abultada fracción de los ingresos totales percibida por el 10% más rico de los hogares. En todos los países de la región, el decil más rico se apropiaba de más de 30% de los ingresos totales, y en la mayoría de ellos, con excepción de El Salvador y Venezuela, este porcentaje era de más de 35% (en Brasil llegaba a 45%). El ingreso promedio de este decil superaba en 19 veces al que recibía, en promedio, el 40% de los hogares de menores ingresos¹²⁷.

Lo efectivamente realizado por los equipos económicos formados en CIEPLAN a partir de 1990, no fue tan distinto de lo que habían propuesto desde 1987. Sin embargo, las cifras positivas han ocultado un malestar creciente de importantes sectores que apoyaron a la Concertación desde el plebiscito de 1988, incluyendo a la izquierda extraparlamentaria que nunca ha formado parte de la coalición. Esta crítica se relaciona con la mínima participación de los actores sociales (sindicatos de trabajadores, gremios profesionales, pobladores) en la discusión de las políticas de gobierno. Por el contrario, su fuerza y apoyo social se han visto minados por el constante discurso elitista que los identifica como simples grupos de poder enfocados solo en sus intereses sectoriales. Arturo Martínez, dirigente sindical histórico de la CUT, ha resumido claramente esta posición:

La misma CUT que se había conformado en año '88, estuvo a punto de quebrarse entre los que querían salir a la calle presionando al gobierno de la Concertación y los otros que decían que había que ayudar a fortalecer esta democracia que era muy débil porque los 'milicos' (sic), los empresarios y la derecha presionaban. Es aquí donde el movimiento social vuelve a realizar un gran gesto a la Concertación política, puesto que se la juega para que la democracia se afirmara y no crearle problemas. Y otra vez este gesto no es bien entendido por la Concertación política y pasaron los cuatro años del gobierno de Patricio Aylwin y no logramos resolver adecuadamente ninguno de los temas postergados de los trabajadores. Y vino el gobierno de Eduardo Frei y a esa altura el movimiento social se había debilitado mucho (...) los partidos de la Concertación cooptaron a los dirigentes sociales para que no se metieran en el

campo de la movilización social¹²⁸.

A esto se suma la centralidad del sector privado en la construcción de una imagen del país donde el resto de los actores sociales parecieran no participar de los frutos del crecimiento económico ni menos ser recompensados proporcionalmente por su esfuerzo. Las críticas al modelo híbrido de los años 90s incluyen la demanda por un plan integral de seguridad social que cubra las deficiencias del modelo privado de pensiones, salud y educación, altamente sensibles para la mayor parte de la población del país, especialmente en los momentos de baja del ciclo económico.

El manejo tecnocrático de la economía, distanciado de toda discusión política y menos ciudadana, también le ha dado un carácter autónomo y en algunos casos autoritario a la implementación de la estrategia de desarrollo. La misma complejidad del discurso de los economistas y la excesiva tecnificación de su práctica, ha restringido solo a un grupo de expertos, tanto opositores como oficialistas, las decisiones centrales de la política económica chilena, alejándola progresivamente de sus componentes políticos y democráticos, fuente original de su legitimidad. En esto se ha mantenido la tendencia hacia la especialización y la autonomización de la disciplina que se acentuó desde la llegada del grupo de Chicago a la conducción económica del país durante la década de 1970.

Todos estos elementos forman parte de la paradoja del llamado ‘éxito’ del modelo chileno, el cual sigue siendo fundamentalmente excluyente en la medida que la integración se relaciona con la mejora de los índices de crecimiento y de ingreso económico, pero que limita la inclusión de los distintos actores y movimientos sociales en una democracia que prometió, de forma explícita, una mayor participación y distribución de los beneficios del crecimiento.

Chile y las recomendaciones del Consenso de Washington

La evolución de la política económica chilena durante la transición democrática, y de sus discursos asociados, no se desligan del contexto internacional y regional¹²⁹. En este sentido, Chile se convirtió en un ejemplo de modernización económica para los organismos internacionales de crédito, especialmente aquellos relacionados con las instituciones surgidas de los acuerdos de Bretton Woods de julio de 1944 (FMI y Banco Mundial). Si bien los procesos de transición política a la democracia en el Cono Sur habían comenzado a inicios de la década de 1980 y antes que en Chile, el país apareció como pionero en la implementación de una modernización económica neoclásica en línea con las recomendaciones del FMI, y el nuevo discurso de la ‘revolución conservadora’ pregonado por los gobiernos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. De este modo, el retraso político del proceso chileno parecía equilibrarse con sus avances en materia de desarticulación del Estado de Compromiso cepaliano, que había influido el discurso económico latinoamericano durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX.

El comienzo de la transición política se dio en el contexto de la caída de los socialismos reales en Europa del Este y la pérdida de credibilidad de los modelos de planificación central de la economía. La transformación económica chilena pareció ir a la par con el discurso que proclamaba el triunfo indiscutible del liberalismo desregulado y de la acelerada globalización iniciada a fines de la década de 1980.

Hoy todos aceptan que los mercados son la mejor manera de asignar los recursos productivos y que estos deben, en general, estar en manos de los particulares que los emplean con mayor eficiencia que el Estado. Al apoderarse de los medios de producción, y tras 72 años de experimentación, los socialistas de antaño se percataron de que sin propiedad privada se termina con los incentivos para el esfuerzo y con la creatividad indispensables para lograr eficiencia productiva¹³⁰.

Chile fue el ejemplo perfecto de la posibilidad de conjugar democracia y libre mercado, más aún en el contexto de un pequeño país del tercer mundo que venía

saliendo de una experiencia traumática de una dictadura militar que había durado largos diecisiete años. Fue en esta época que se comenzó a forjar la idea de un ‘modelo chileno’ de desarrollo, el cual podía ser imitado en la región, e incluso por diversos países del Tercer Mundo, o ‘emergentes’, como se los comenzó a denominar a inicios de los 90s. Incluso, se hablaba de la Rusia poscomunista como un terreno fértil para la implementación de un conjunto de reformas liberales de estilo chileno. Hacia finales de la década, un recordado artículo del economista ligado al grupo de Chicago, José Piñera, en *Foreign Affairs*, aconsejaba a las autoridades rusas seguir el ejemplo de Chile¹³¹.

Rusia no necesita un Pinochet, pero necesita el modelo económico chileno. Rusia para crecer a tasas anuales autosostenibles de siete a diez por ciento durante una década o dos -la única manera para salir de la pobreza- necesita mucha más liberalización económica. Cuatro reformas inspiradas en cambio dramático de Chile pueden ayudar a Rusia a salir de su estancamiento: privatización de las pensiones, una reforma fiscal, la desregulación radical de las industrias protegidas, y la sustitución del rublo por el euro. El elemento indispensable no es un fuerte general de cuatro estrellas, sino que un equipo determinado de políticos que sepa como funciona la libertad¹³².

Entonces, más que hablar de la influencia del llamado Consenso de Washington (CW) sobre la economía chilena, corresponde situar a Chile como uno de los casos más exitosos en la implementación de estos cambios, citado continuamente para ejemplificar los ajustes estructurales recomendados por el FMI a los países latinoamericanos y las naciones del antiguo bloque socialista. En este sentido, Chile más que convertirse en un seguidor de las recomendaciones del CW, fue uno de sus modelos, pues ya había realizado la mayor parte de las transformaciones durante la década de 1970 y 1980¹³³. Un historiador como Joaquín Fernandois confirma la vocación de Chile y de sus élites políticas por la continuación de las líneas centrales de la política económica heredada del régimen militar y rearticulada por las autoridades económicas de la Concertación:

Aunque en las filas de la Concertación es común escuchar referencias irónicas al ‘Consenso de Washington’, es decir, a la política norteamericana de promover la privatización, apertura y colaboración con el FMI, en los hechos, se asume que estas instancias y orientaciones deben ser el horizonte de las relaciones económicas internacionales de Chile¹³⁴.

Es importante explicar a qué nos referimos cuando utilizamos la denominación Consenso de Washington. El concepto es confuso y ha sido utilizado últimamente como sinónimo de políticas neoliberales por parte de quienes se oponen a la globalización en tanto que fenómeno de liberalización de los mercados y de pérdida de competencias y de soberanía de los estados nacionales¹³⁵. En nuestro caso, más que el uso partisano de la noción, nos interesa rescatar su origen y la relación que ha tenido con la llamada política de ajustes estructurales en América Latina, y específicamente en lo relacionado con el caso de Chile. El concepto fue acuñado en 1989 por el economista estadounidense John Williamson para resumir las que, a su juicio, eran las diez recomendaciones de política económica consensuadas por los organismos internacionales de crédito para asegurar el crecimiento de las economías latinoamericanas¹³⁶. Las diez medidas entregadas por Williamson pueden ser resumidas de la siguiente manera¹³⁷:

Disciplina fiscal

Reordenamiento de las prioridades del gasto público

Reforma impositiva (fiscal)

Liberalización de las tasas de interés

Una tasa de cambio competitiva

Liberalización del comercio internacional

Liberalización de la entrada de inversiones extranjeras directas

Privatización de empresas del Estado

Desregulación de los mercados (especialmente financieros)

Derechos de propiedad asegurados y expandidos a toda la población (especialmente del sector informal).

Al revisar las medidas, resulta evidente que gran parte de estas reformas ya habían sido llevadas a cabo por las autoridades económicas chilenas desde la segunda mitad de la década de 1970, y especialmente a partir de 1984, cuando el país se vio en la obligación de renegociar el pago de su deuda externa tras la crisis financiera de 1982-83. Las recomendaciones del Consenso de Washington se ajustaban al ascenso de la economía neoclásica desde fines de los años 60s, con su crítica al papel del Estado y su enfoque pro mercado.

Chile ya avanzó extraordinariamente en todos estos planos: el arancel promedio es extraordinariamente bajo; la autonomía del Banco Central se transformó en un 'principio considerado indiscutido', llevándose a su dirección, por el gobierno de Lagos, incluso, a uno de los más acérrimos defensores de las ideas del Consenso

de Washington como es Vittorio Corbo; y se insiste en la ‘flexibilidad laboral’, a pesar de que las limitaciones al capital para actuar en el mercado del trabajo son cada vez menores¹³⁸.

Williamson ha negado en reiteradas ocasiones que las recomendaciones fueran un plan concertado para transformar las economías latinoamericanas según los patrones del Departamento del Tesoro estadounidense, sino que más bien se buscaba rescatar aquellos elementos que habían sido parte de las renegociaciones de la deuda externa con los países de la región desde la segunda mitad de la década de 1980, y que incluso no daban cuenta de una completa unanimidad por parte de los economistas más renombrados de los organismos multilaterales asentados en Washington. A su juicio, no se trataba ni de un programa ni de un conjunto de exigencias de política económica, sino que de una recopilación de las principales medidas que debían implementar estos países para modernizar sus economías de acuerdo con las exigencias de la globalización. Sin embargo, para Paul Krugman¹³⁹, las políticas promercado fueron más bien una apertura a los mercados, especialmente financieros, además de constituir un corsé demasiado rígido para economías con contextos muy diferentes¹⁴⁰.

Para sus críticos, las medidas propuestas por el llamado Consenso de Washington no esconden sino una búsqueda de equilibrios macroeconómicos que aseguren la expansión del capital financiero al interior de las economías de los países en desarrollo, creando un entorno inestable y propicio a las burbujas especulativas y a los posteriores períodos recesivos¹⁴¹. En definitiva, aquello que comenzó como un simple conjunto de recomendaciones, tomó la forma de un decálogo de exigencias para las economías de la región y los países emergentes, que pasaron de una alta regulación a una casi completa desregulación de sus mercados, al mismo tiempo que intentaban consolidar sus sistemas democráticos. Ello se efectuó sin tomar en cuenta los contextos particulares de cada uno de los países, ni menos la fuerte influencia de los ciclos económicos sobre economías altamente dependiente de la exportación de materias primas. De esta manera, el FMI dejó de ser, desde mediados de la década de 1980, un agente estabilizador de los mercados financieros, para convertirse en un prestamista de última instancia y en un vigilante ortodoxo para los gobiernos en materia de restricción monetaria y gasto fiscal.

En esta nueva dinámica, el FMI no es más que un observador de los mercados, un prestamista internacional de última instancia, y asesor de los gobiernos para restringir la política monetaria, fiscal y financiera de acuerdo con el nuevo orden internacional¹⁴².

Los resultados de las políticas asociadas al Consenso de Washington fueron bastante desalentadores durante la década de 1990, sobre todo en Europa Central, Rusia y África. En América Latina, se produjo crecimiento, pero a tasas bastante menores de las esperadas. En algunos casos fueron espectaculares, como en Argentina hasta 1995, pero finalmente tuvieron enormes caídas que neutralizaron e incluso anularon muchos de estos resultados positivos iniciales al término de la década¹⁴³. El caso de Chile es particularmente interesante, pues entre 1984 y 1997-98 (cuando se desató la crisis asiática) el país tuvo tasas de crecimiento cercanas al 7% del PIB anual como promedio, lo cual fue interpretado como un éxito inequívoco de las recomendaciones del Consenso de Washington. Lo que suele obviarse es que las transformaciones ya habían sido llevadas a cabo con una década de anterioridad y en un contexto autoritario, donde estaban excluidos los conflictos inherentes a una democracia, lugar donde deben conciliarse múltiples intereses en disputa. Esto no impidió, sin embargo, que en muchos de estos países se realizaran terapias de shock y ajustes estabilizadores recesivos como los realizados en Chile en 1975 y 1983. La diferencia es que la mayor parte de las veces se encontraron con el rechazo social, la protesta e incluso la rebelión popular, como sucedió en Argentina durante diciembre del año 2001¹⁴⁴. Sobre lo ocurrido en Argentina, Pierre Salama sostiene:

El “milagro” de la economía que mostraba el entonces presidente Menem y que acogió con beneplácito el Fondo Monetario Internacional, se convirtió en pocos años en un espejismo y luego en una pesadilla. La liberalización de la economía sin la búsqueda de efectos compensatorios y el posterior abandono de la idea de un Estado regulador, provocaron el establecimiento de una verdadera trampa. Por un lado el mantenimiento de este plan empeoraba las cosas, y por otro su abandono implicaba un costo social y económico más alto que el mantenimiento del mismo. El corto plazo predominaba sobre el mediano plazo, y siendo la huida hacia adelante la política principal, la única salida de este plan era con el

pánico, lo que ocurrió a finales de 2001¹⁴⁵.

En Chile, las explicaciones que dieron la mayor parte de los economistas a la crisis de Argentina no apuntaron al tipo de medidas propuestas ni a su profundidad, sino que al mal manejo económico y la corrupción del sistema político.

El gobierno de de la Rúa mostró una gran incapacidad para reducir el déficit público y la alta corrupción asociada al sistema político (...). En resumen, la crisis de Argentina no se debe al neoliberalismo económico como han sugerido algunos, ni solo al rígido sistema cambiario como han sugerido otros, sino a que no se crearon las bases esenciales para que una economía de mercado funcione bien, esto es: cuentas fiscales ordenadas que respalden la estabilidad macroeconómica, mercados competitivos y flexibles, e instituciones fuertes (...) los países emergentes y Chile en particular, han sacado las lecciones adecuadas al adoptar en forma masiva sistemas cambiarios flexibles acompañados de esquemas de política monetaria comprometidos con el logro de una inflación baja y estable¹⁴⁶.

En términos generales, si bien las recomendaciones del Consenso de Washington crearon condiciones para mayores equilibrios macroeconómicos en la región, estos fueron de corto alcance debido al aumento general de la desigualdad económica, de la cual el modelo chileno tampoco escapó, a pesar de sus espectaculares tasas de crecimiento. De acuerdo con Alicia Girón, los jugadores principales del juego económico mundial tras la crisis de las instituciones de Bretton Woods, a inicios de la década de 1970, fueron las grandes corporaciones internacionales y las instituciones de crédito privadas. Estas se han fusionado e incluso generado megafusiones, adquiriendo innumerables empresas en la mayor parte de los países que han liberalizado sus mercados financieros. Este también ha sido el caso de América Latina, donde Chile ha constituido un ejemplo prematuro de integración a los mercados mundiales en comparación con sus vecinos. Sin embargo, el costo de estas transformaciones ha sido una mayor inestabilidad financiera y una menor capacidad reguladora del Estado para

enfrentar los numerosos desafíos sociales que aún enfrenta la región¹⁴⁷. No obstante lo anterior, la economía chilena parece resistir mejor los shocks externos, o bien sus élites políticas y empresariales, dentro de un contexto de una democracia con baja participación ciudadana, han logrado un consenso sobre el modelo de desarrollo donde las críticas y los cuestionamientos suelen ser vistos como marginales¹⁴⁸.

Como lo ha dicho el Presidente del Banco Central, Vittorio Corbo, la prueba de solidez de la nueva institucionalidad económica chilena, es que a pesar de ‘cinco años de shock externo’, la estrategia económica se ha mantenido invariable (...). La misma existencia de la ‘crisis latinoamericana’ ha ayudado como disuasión al cambio de políticas; ha demostrado que la fórmula de largo plazo que se abrió Chile en 1975, ha sido en general beneficiosa o, para los menos entusiastas, la única posible uniando en cuenta las tendencias mundiales¹⁴⁹.

Esto también ha tenido una consecuencia importante en cuanto a la baja participación electoral de los ciudadanos, la cual ha ido de la mano con un aumento creciente de la importancia e influencia de los cuadros político-tecnocráticos (technopols)¹⁵⁰, a nivel de la función pública, fenómeno por lo demás generalizado a nivel mundial, pero que en Chile ha alcanzado grados extremos cuando se trata del manejo económico y los cargos más importantes de la administración del Estado¹⁵¹.

Los economistas en Chile, especialmente los que han pasado por el complejo y difícil rito de iniciación de un programa de doctorado, son percibidos y se ven a sí mismos como una élite cosmopolita, un club exclusivo, en que se celebran los logros académicos y la capacidad de pensar con categorías analíticas rigurosas (...). Los que poseen un doctorado de universidades de prestigio vuelven al país porque saben que tendrán acceso a cargos altos en el sector público y privado, recibiendo salarios competitivos y disfrutando de una alta visibilidad en la prensa especializada, en los debates técnicos y en las universidades¹⁵².

Concordamos con Judith Teichman en que esto también ha sido un legado indirecto del régimen militar, donde los cuadros intelectuales opositores a la dictadura se agruparon en centros de estudio y think tanks especializados, reforzando la crítica académica y altamente tecnificada como único medio de oposición tolerada por las autoridades de la época¹⁵³. Una vez recobrada la democracia, la élite tecnocrática de la Concertación decidió continuar jugando dentro de las reglas económicas del régimen militar, poniendo un acento especial en el pago de la deuda social, aunque fuese a expensas de la participación prometida luego del triunfo en el plebiscito de 1988. El reemplazo de una élite política por otra técnica implicó la postergación indefinida de aquellos elementos más inclusivos de un nuevo proyecto democrático que no coincidía con aquel de la década de 1960, y que parecía dominado por los requerimientos de una praxis donde lo económico adoptó una centralidad solo comparable a la que había tenido durante el régimen militar.

La coincidencia entre las recomendaciones del Consenso de Washington y las transformaciones económicas (llamadas de ‘primera generación’)¹⁵⁴, implementadas en Chile desde la segunda mitad de la década de 1970, hicieron que justamente estas tuvieran un efecto menor en la conducción económica del país durante la década de 1990. En otras palabras, en Chile, el Consenso de Washington no ha sido un tema central de debate, ya que el país había avanzado más allá en muchas de las reformas propuestas por los organismos internacionales de crédito; incluso, se permitió aplicar algunas políticas pragmáticas y heterodoxas en ámbitos como la reforma laboral de 1990 y el encaje. No obstante, Chile fue parte de un debate mucho más amplio sobre el éxito de las medidas propuestas por el Consenso de Washington y la posibilidad de su puesta en práctica en otras economías.

En resumen, la posición fiscal neta de Chile, el tamaño limitado de su gobierno y la composición favorable del gasto público total han estimulado el crecimiento económico; también pueden ayudar a explicar por qué el despegue ocurrió a mediados de los 80 y no antes¹⁵⁵.

La muestra más evidente de la buena conducta de las autoridades económicas del país respecto de los organismos internacionales de crédito, es que nada menos

que dos ex Ministros de Hacienda de la Concertación fueron llamados para ocupar puestos de alta responsabilidad en Washington, específicamente en el FMI¹⁵⁶. Resulta difícil encontrar una muestra de mayor reconocimiento internacional para un país pequeño, relativamente marginal, pero que ha seguido al pie de la letra e incluso avant la lettre, las propuestas de ajuste estructural fomentadas por las instituciones de Bretton Woods.

¿Gobernando con las ideas del otro?: la discusión sobre neoliberalismo y pragmatismo

El tema sobre el carácter ortodoxo neoliberal o, por el contrario, pragmático de la conducción económica de la Concertación, desde 1990 hasta la actualidad, permanece como un debate abierto, pues constituye uno de los principales temas de disputa política en el Chile posdictatorial. Sin embargo, nos gustaría al menos centrar la atención en las dos visiones que nos parecen más relevantes en este debate: aquella que define la estrategia de desarrollo de la Concertación como liberal-pragmática (incremental) y la segunda, que la califica como ortodoxa o definitivamente neoliberal. Evidentemente, existen más de dos posiciones al respecto, y es posible encontrar diversos matices. Sin embargo, creemos que pueden agruparse en estos dos grandes enfoques que tienen un carácter eminentemente heurístico. Desde un primer momento, hemos tratado, al menos, de fijar un punto de partida. Nos parece simplista reducir la estrategia económica de los gobiernos de la Concertación a una simple copia del modelo económico del régimen militar. Incluso, los críticos más acérrimos del llamado modelo chileno reconocen que existen diferencias importantes entre ambos períodos.

Sin duda que entre uno y otro gobierno —el de Aylwin y el de Pinochet— las diferencias son marcadas. En el gobierno de Aylwin se produjeron cambios relevantes de tipo político. Es muy distinto vivir en dictadura que en democracia, aunque sea restringida. Sin embargo la pertinacia en la aplicación del modelo económico le otorga al mismo tiempo, al gobierno de Aylwin muchos contenidos de continuismo¹⁵⁷.

En primer lugar, no es posible equiparar el contexto autoritario del régimen militar con uno democrático, aunque este último estuviera claramente limitado por las singularidades de la transición chilena y la idea de una democracia tutelada o protegida¹⁵⁸. La relación de fuerzas era diferente y los actores se

vieron obligados a negociar las nuevas condiciones, aunque algunos contaban con el tácito apoyo del estamento militar. Es por ello que hemos preferido concentrarnos en la evolución del modelo económico surgido de la dictadura, y en qué medida ha permeado el discurso de la mayoría de los economistas chilenos, al punto de hablarse de una suerte de consenso general en torno a una ciencia económica común, en la cual las diferencias serían más bien marginales y no de carácter ideológico¹⁵⁹.

La tesis del pragmatismo ‘incremental’

Esta visión que hemos denominado como pragmática-incremental, se sitúa dentro de la línea de aquellos que defienden el rescate de los elementos considerados positivos del modelo económico heredado del régimen militar, manteniendo sus pilares básicos y optando por darle una mayor orientación hacia lo social vía sucesivas reformas incrementales. En lo esencial, es un relato optimista que forma parte del discurso de la mayoría de los economistas de la Concertación, especialmente de quienes han tenido altos puestos de responsabilidad en la gestión del Estado¹⁶⁰. Destacan en este ámbito especialmente aquellos vinculados a CIEPLAN, aunque tiende a generar un amplio consenso transversal entre los tecnócratas de la coalición¹⁶¹.

Chile se ubica en el tramo alto de los países de ingreso medio, lo que nos sitúa en una posición privilegiada para alcanzar el desarrollo en el horizonte de una generación. El producto interno creció, en promedio, un 5,9% entre 1986 y 2006, mientras el producto per cápita lo hizo en un 4,3% (...). En los últimos 20 años el país avanzó sólidamente en reducir la inflación y en la estabilidad de la actividad económica¹⁶².

La Concertación, ahora a la cabeza del Estado, no podía sino ser arrastrada hacia la complacencia con el modelo y sus logros. Ministros y autoridades del flamante gobierno de centro-izquierda lucían gustosos en la foto inaugurando obras y nuevas empresas, firmando acuerdos, recibiendo visitas ilustres. El mensaje era claro y no admitía crítica alguna: crecer con democracia¹⁶³.

Esta posición rechaza la definición del modelo económico chileno posdictatorial como neoliberal. Para ello se apoya en las sucesivas reformas y en la orientación social que se le ha dado al gasto público desde 1990 en adelante. Por el contrario, niega la caricatura de Chile como ejemplo de un liberalismo económico extremo (neoliberal), ciego a las deficiencias del mercado y a los necesarios ajustes que una economía pequeña necesita llevar a cabo para

insertarse internacionalmente. Lo que se plantea es el paulatino alejamiento del país de los paradigmas puros del monetarismo y del estructuralismo, para situarse en un horizonte de pragmatismo, orientado hacia un tipo de crecimiento con mejores estándares de equidad social. Las críticas y el malestar de la población, a juicio de estos autores, estaría originado en un aumento explosivo de las expectativas creadas justamente producto del crecimiento, y no por un fracaso de la estrategia de desarrollo¹⁶⁴.

Siguiendo el análisis expuesto por Alejandro Foxley desde inicios de la década de 1980, Javier Santiso retoma un argumento clave del enfoque incremental o gradualista. Así como el grupo de Chicago tuvo su propio diagnóstico sobre la historia política y económica de Chile, basado en la decadencia del país producto del aumento del poder del Estado y su injerencia creciente en la economía desde la década de 1930, aquí también se percibe una cierta interpretación histórica del pasado.

Yo siempre dije que nosotros no íbamos a partir de cero. Nosotros vamos a aprender la lección. Si en América Latina no estamos donde debíamos estar es porque siempre estamos negando lo que hizo el que estuvo antes. Yo siempre estuve en desacuerdo con el gobierno del general Pinochet. Hice una oposición dura, pero yo tengo que reconocer que ellos hicieron una obra en lo económico que vamos a respetar (Alejandro Foxley)¹⁶⁵.

Santiso recupera la idea de una sociedad herida por la idea de instalar modelos puros de desarrollo, originados en paradigmas foráneos sin mayor anclaje en la realidad socioeconómica chilena. Este mesianismo político de las élites llevó a una suerte de experimentación constante desde la década de 1960, la cual habría comenzado con el modelo de ‘Revolución en Libertad’ de Eduardo Frei Montalva (1964-1970), seguido por la ‘Vía Chilena al Socialismo’ de la Unidad Popular (1970-1973), y finalizada con el experimento de la modernización neoliberal autoritaria instaurada por el régimen militar (1973-1990)¹⁶⁶.

De Alessandri a Pinochet, es el conjunto de la escena política chilena que fue tomada por la pasión del futuro y las políticas económicas de lo imposible. Del

socialismo mesiánico de Allende a la utopía tecnocrática de los Chicago Boys, el discurso y la práctica económica permanecieron imbuidos del mismo deseo de querer delimitar, a través de las palabras y las cifras, proyectos y programas económicos fijados en el horizonte de una “revolución inminente”¹⁶⁷.

De acuerdo con esta mirada, el punto de inflexión a esta política de los cambios a gran escala no se provocó en 1973 con el Golpe de Estado, sino que a inicios de la década de 1980, producto de la crisis financiera que afectó al país entre los años 1982 y 1983. Fue aquí donde la última de las utopías revolucionarias, la neoliberal, habría fracasado al intentar imponer un modelo puro de desarrollo socioeconómico. A partir de este momento, se produjo la ruptura ideológica, y las nuevas autoridades económicas del gobierno militar adoptaron una serie de medidas heterodoxas que, siempre dentro de un marco liberal, Santiso describe como ‘políticas de lo posible’. La mayor prueba de lo anterior sería la nacionalización de la banca que realizaron los economistas liberales tras el colapso del sistema financiero chileno, lo cual está en completa oposición a los postulados neoclásicos defendidos tradicionalmente por el grupo de Chicago. Esta paradoja del neoliberalismo chileno puso en evidencia un aprendizaje transversal de la clase política chilena y de sus cuadros tecnocráticos.

Chile, un país guiado por los economistas dedicados al *laissezfaire*, mostrará al mundo otra vía nacionalizando de hecho su sistema bancario. En la oposición, mientras que los líderes de los últimos gobiernos de la época de Pinochet muestran sin complejos los arcanos de reformas, combinando suturas intervencionistas y soldaduras liberales, numerosos actores se embarcan en profundas autocríticas tanto en materias de pensamiento económico como de acción política¹⁶⁸.

La gran transformación chilena se produjo, entonces, con el retorno a la democracia, a partir de 1990, cuando el nuevo equipo económico de la Concertación decidió mantener los pilares del modelo económico heredado del régimen militar y dar una línea de continuidad a la estrategia de desarrollo del país sin provocar un cambio revolucionario, tal como había sido lo habitual

desde la década de 1960. La dirigencia política y económica opositora al general Pinochet decidió asumir parte importante de la herencia económica del régimen anterior con el fin de generar un gran consenso en torno a la necesidad de paz social, gobernabilidad y desarrollo económico con un mayor énfasis en lo social. En palabras del sociólogo Eugenio Tironi:

Es probable que la nueva democracia no hubiera resistido una crisis económica a comienzos de los 90, y que una situación semejante hubiese terminado en el retorno de Pinochet en gloria y majestad. La ‘manija’ para sostener el crecimiento y los equilibrios económicos estaba entonces en manos de la comunidad empresarial, la cual tenía un cordón umbilical con el régimen autoritario que en ese momento colapsaba. Por ende, era indispensable, para asegurar el éxito de la nueva democracia, crear confianza en la comunidad empresarial¹⁶⁹.

Solo así se explica que, durante la década de los 90s, se siguieran favoreciendo las privatizaciones, el rol central de la empresa privada en la economía, el fomento del modelo exportador, la entrada de capitales privados en diversas empresas del Estado, la continuación del sistema de seguridad social esencialmente en manos de empresas particulares, y otras tantas políticas asociadas originalmente con la modernización autoritaria.

Por ejemplo, en la política de apertura, que fue una acción que empezó durante el régimen militar, de bajar drásticamente los aranceles en forma unilateral. Hubiera sido un grave error revertir esa política. Y se dijo muy expresamente que no solo le íbamos a dar continuidad, sino que la íbamos a profundizar (...). Y dijimos expresamente que íbamos a mantener el sistema de AFP, de previsión privada, porque creemos que ese sistema es un activo para el país, y por lo tanto hay que perfeccionarlo y no revertirlo¹⁷⁰.

Bajo el nuevo régimen democrático, la ortodoxia monetaria y fiscal siguió siendo una regla invariable, mientras que el Banco Central mostraba su celo en

el control de la inflación al aprovechar su condición de ente autónomo que obtuvo a partir de 1990. El rigor fiscal de las autoridades económicas de la Concertación las ha llevado, incluso, a alcanzar superávits fiscales, los cuales terminaron convirtiéndose en regla permanente con el objetivo de reducir, de manera regular, la deuda pública¹⁷¹.

El presupuesto del sector público ha sido superavitario de manera casi ininterrumpida. Entre 1987 y 2004 el superávit global fue en promedio de 1% del PIB. Excepcionalmente se registró déficit de desaceleración del crecimiento y fuerte caída del precio del cobre en los años 1999-2003. Medido en condiciones de tendencia, estos últimos años también exhiben un superávit. Concordante con lo anterior, el riesgo país se ubica en los lugares más bajos entre las economías emergentes y en los rankings de competitividad internacional. Chile se sitúa entre los mejor evaluados del mundo en relación con la calidad de su política fiscal¹⁷².

Se aprecia entonces un reconocimiento implícito al régimen militar al haber centralizado, en el Ministerio de Hacienda, el control del presupuesto nacional, dándole —de paso— más poder al Presidente de la República. Esto fue confirmado por la Constitución de 1980 que, siguiendo una matriz esencialmente autoritaria, concentró en el poder ejecutivo todas las atribuciones para la administración financiera del Estado¹⁷³.

El gobierno militar que tomó el poder en medio de una seria crisis fiscal introdujo una serie de cambios para centralizar todo el poder en las autoridades del Ministerio de Hacienda y controlar ingresos y gastos públicos¹⁷⁴.

Chile en términos fiscales, es uno de los países más responsables del mundo. Pero la política fiscal en Chile también ha tenido otro impacto más estructural en el crecimiento económico, al mantener el tamaño del gobierno relativamente acotado y con una composición del gasto gubernamental que favorece el crecimiento¹⁷⁵.

Dentro de esta perspectiva, la valoración del consenso, ciertamente al interior de una élite que reúne a los principales actores económicos y políticos del país, es considerada como el gran logro de la transición chilena en términos de estabilidad económica y gobernabilidad política. Si este acuerdo general implicó en un principio el aceptar situaciones de facto heredadas del régimen militar, especialmente en los inicios de la transición, posteriormente se habría transformado en una especie de norma implícita cuyo objetivo era controlar la incertidumbre de los diferentes agentes económicos y la histórica inestabilidad de las cuentas públicas nacionales¹⁷⁶. Para los defensores de esta tesis, lo realmente importante de la transformación económica de Chile no debe buscarse en las definiciones del modelo, ni en la adecuación a determinados paradigmas rígidos. Por el contrario, lo que se rescata es el aprendizaje y la adaptación pragmática de la conducción económica concertacionista a las condiciones cambiantes de los mercados internacionales y a la situación sociopolítica del país. Para ello, consideran de vital importancia el rol de las instituciones, especialmente económicas, las cuales confirmarían la seriedad de los compromisos del Estado chileno.

Detrás de ese consenso político está el reconocimiento de la importancia de la solidez fiscal y el reconocimiento de los altos costos que el país pagó en el pasado en los episodios de desequilibrios fiscales y crisis macroeconómicas. Con el retorno a la democracia en 1990 el factor de consenso principal en la coalición gobernante era evitar los riesgos de un desborde fiscal y desequilibrios macroeconómicos. La crisis política de 1973 y la grave crisis económica de 1982 estuvieron asociadas a desequilibrios macro cuyos altísimos costos estaban muy presentes en la memoria de todos los actores¹⁷⁷.

La prueba de los logros de la economía chilena posdictatorial se encontraría en su reconocimiento internacional y en el hecho de que constituye una referencia en términos de liberalización comercial y financiera, pero con altos estándares de regulación. En tal sentido, la candidatura del país para ser miembro de la OCDE¹⁷⁸, oficialmente aceptada en mayo de 2007, sería una prueba más del éxito de la conducción económica de los diferentes equipos de la Concertación,

y una suerte de certificación para las políticas económicas incrementales y gradualistas aplicadas en Chile desde 1990.

La clave de este éxito, al igual que el de los pares de Chile en el seno OCDE, se debe principalmente a la calidad de las instituciones y de los hombres que han estado a la cabeza de sus organismos económicos. Como Noruega, Chile se ha dotado de instrumentos e instituciones presupuestarias ejemplares. Los dos países tienen fondos soberanos, o equivalentes que operan de manera transparente y con reglas claras (...). El caso chileno es excepcional. Prueba de esta trayectoria ejemplar; el país está a punto de ingresar a la OCDE. Este país emergente podría actuar como un factor de emulación para otros, contribuyendo a desmitificar la maldición de las materias primas para los países en desarrollo¹⁷⁹.

Evidentemente, el éxito de las instituciones se relaciona directamente con quienes las conducen y, desde este punto de vista, no es extraño que esta tesis sea justamente defendida principalmente por aquellos que han sido los guías de tal estrategia. La sociedad chilena habría pasado de una etapa de excesiva disposición al riesgo y al cambio social en la década de los 60', a una suerte de aversión al mismo, propia de la dura experiencia del Golpe de Estado de 1973 y de los diecisiete años de dictadura que le siguieron. La oposición al régimen militar, de acuerdo con esa línea de pensamiento, terminó por adaptarse al timing del cronograma autoritario, aceptando progresivamente los tiempos y plazos establecidos en la Constitución de 1980. En este mismo proceso, habría elaborado un discurso gradualista donde la única salida posible al autoritarismo implicaba aceptar e incorporar en la propia estrategia elementos centrales de la modernización capitalista del grupo de Chicago, los cuales además parecían en consonancia con los cambios políticos e ideológicos que vivía el planeta a fines de la década de 1980. En definitiva, estos autores consideran que el gran mérito de la dictadura militar fue reincorporar al país a la economía de mercado.

Los Chicago Boys, con una formación académica enriquecida por su paso por la gestión pública, y la mayoría con redes históricas en el sector privado, volcaron

desde entonces su pasión utópica a la expansión de las empresas de las que se hicieron cargo. Esto tuvo positivos efectos para estas y la economía chilena en su conjunto, como se vio en buena parte de los años noventa¹⁸⁰.

Los legados principales (del régimen militar), a nuestro juicio, son haber reimplantado el sistema de mercado y de la competencia como principios ordenadores de la economía y, junto con ellos, la alta prioridad política dada al equilibrio macroeconómico, en particular del sector público, y los criterios de eficiencia para gestionar as empresas públicas y los proyectos de inversión¹⁸¹.

El giro de la nueva coalición, por tanto, debía darse en el fin de la represión política, en un nuevo enfoque centrado en las políticas sociales, pero no necesariamente en un giro radical del modelo económico, pues tampoco vieron ninguna alternativa cuando todos los experimentos históricos de economía centralizada parecían derrumbarse ante sus ojos. El cambio de postura, por lo tanto, no es respecto a una idea de sociedad, sino que de un proyecto absoluto; de una democracia supuestamente imposible, donde se deja de lado el ideal de la perfección por el de perfectibilidad, y que tiende hacia un horizonte de lo posible¹⁸².

Posibilistas en su retorno a la democracia, los chilenos también lo son actualmente en su vida democrática, hecha de debates (a veces álgidos) de conflictos, de consensos y de argumentos y contra argumentos, una vida política banalisada, que se escribe no en la poesía lírica del gran fervor revolucionario, sino en que en la prosa política más contenida de lo posible¹⁸³.

En esta mirada, se da por sentado que existe un apoyo de la mayoría de los ciudadanos chilenos a esta estrategia, tomando como referencia principal el apoyo electoral constante que ha recibido la Concertación desde 1988 en adelante. No obstante lo anterior, el talón de Aquiles del modelo chileno de desarrollo estaría justamente en su necesidad imperiosa de mantener altas tasas de crecimiento económico, dada la baja cobertura de protección del Estado y la

dependencia de las personas respecto del empleo provisto principalmente por el sector privado.

En este país real, una caída drástica y constante del crecimiento afecta la viabilidad del orden social y político actual en su conjunto, pues este depende críticamente de una economía en constante expansión (...) la estabilidad global de la sociedad chilena se desplomaría si no mantiene una cierta aceleración de su economía¹⁸⁴.

La sociedad del crecimiento de los 90 se transformó en los 2000 en la sociedad del post-crecimiento. El país del 7% se convirtió en el país del 3%. Para una sociedad que se había hecho adicta al crecimiento, este ha sido un golpe feroz. Aquel no era solo la utopía de gran parte de la clase dirigente; era también el mecanismo con que los chilenos y chilenas contaban para obtener los recursos con los cuales responder al infortunio o ascender en la escala social¹⁸⁵.

La tesis del continuismo y la renuncia

La tesis que hemos propuesto como del continuismo y la renuncia parece, a primera vista, una paradoja en su definición. Ella incorpora dos visiones que vienen de polos opuestos del espectro ideológico chileno, pero que finalmente confluyen en un punto esencial: el modelo económico aplicado en los tres gobiernos de la Concertación entre 1990 y 2006 no sería diferente, en lo esencial, de aquel impuesto por el régimen militar. Para unos sería fundamentalmente neoliberal y fruto de una renuncia (crítica desde la izquierda) y para los otros, simplemente liberal o de libre mercado, continuando la tarea del régimen militar, pero en un progresivo desgaste y falta de modernización (crítica desde la derecha).

La crítica desde la izquierda extraconcertacionista

Desde el punto de vista de la crítica de la izquierda¹⁸⁶, la Concertación renunció a su proyecto original en favor de mantener la gobernabilidad y evitar el conflicto con el empresariado, la derecha política, y especialmente con los militares, liderados por el general Pinochet y sostenidos por la institucionalidad impuesta en la Constitución de 1980¹⁸⁷. De este modo, la Concertación habría abandonado la búsqueda de un modelo alternativo de economía mixta, donde el Estado y los distintos actores sociales jugaron un papel activo frente al capital privado. Por otra parte, los trabajadores recuperarían muchos de los derechos perdidos con la reforma laboral de 1979, al mismo tiempo que serían examinados los sistemas de salud, educación y pensiones privados. Incluso, las privatizaciones realizadas en los últimos años del régimen militar tendrían que haber sido revisadas de manera exhaustiva. Una reforma fiscal mayor compensaría las desigualdades en materia de distribución del ingreso. Sin embargo, de acuerdo con esta tesis, dicho proyecto fue abandonado a las pocas semanas de que el primer gobierno de la Concertación asumiera el poder el 11 de marzo de 1990. Según Hugo Fazio:

La administración Aylwin hizo suyo el modelo económico de la dictadura. Los objetivos programáticos en un alto porcentaje no se cumplieron o se adoptaron

medidas en contradicción con ellos. Los propósitos de justicia social, participación ciudadana y autonomía nacional entraron en contradicción absoluta con un modelo económico profundamente concentrador, antinacional y antidemocrático¹⁸⁸.

Por su parte, Jorge Arrate sostiene:

La gran falla nuestra fue que estábamos con la mirada tan puesta en la dictadura, en el eje democracia-dictadura, que no vimos a nuestro lado a Reagan, la reaganomics, la ofensiva neoliberal que se asomaba y hacía cargo de todo. No le dedicamos el mismo esfuerzo reflexivo a los cambios de la economía. De ahí que se impusieran la ultra renovación en el PS y el liberalismo-progresista en la Concertación¹⁸⁹.

Esta crítica tomó fuerza a partir de la segunda mitad de la década de 1990, especialmente tras la aparición del libro del sociólogo Tomás Moulian: Chile actual, anatomía de un mito, publicado en julio de 1997. En este ensayo, convertido rápidamente en superventas, el autor cuestiona los fundamentos del modelo económico chileno, el cual considera como un simple mito de una transición que oculta la derrota y sumisión de las fuerzas democráticas frente a la herencia del régimen militar¹⁹⁰.

Su mayor crítica está dirigida justamente al consenso políticoeconómico impuesto a los chilenos como moneda de pago para salir del autoritarismo. Este no sería un acuerdo mayoritario ni tampoco el reflejo de la soberanía popular, la cual habría apoyado no solo el fin de la dictadura política, sino que también del modelo económico. Esta sería la razón principal que explicaría el desencanto actual de la población con la actividad política y los proyectos sociales colectivos.

Consenso es la enunciación de la supuesta, de la imaginaria armonía. Los desacuerdos respecto de las características del desarrollo económico impuesto

por la dictadura militar aparecen desvaneciéndose, desde el momento mismo que la banda presidencial pasó de las manos de Pinochet a las de Aylwin. Es la enunciación de que el problema del capitalismo pinochetista era Pinochet en el gobierno¹⁹¹.

El ciudadano que habita este supuesto ‘páramo’ neoliberal no tendría otro repliegue que el consumo, la anomia y el encierro en tanto individuo, sin otro horizonte que la privatización de su vida y el acceso al crédito como única fórmula de acceder a los bienes que el mercado le ofrece a través de una publicidad omnipresente¹⁹². El consenso sería un acto fundador del Chile contemporáneo, construido sobre el olvido impuesto por unas élites más preocupadas de asegurar la gobernabilidad que de asumir sus responsabilidades ante el dictado de las urnas y las promesas de cambio social. El argumento a favor de la Concertación, basado en sus triunfos electorales, no se sostendría debido principalmente a un sistema electoral binominal que impide el surgimiento de otras corrientes políticas alternativas. Ante tales posibilidades limitadas, el ciudadano simplemente vota por el recuerdo de las promesas democratizadoras de la Concertación, o el rechazo visceral a la derecha como recuerdo del autoritarismo, pero sin ninguna convicción o esperanza de cambio. La otra respuesta sería simplemente aquella que utiliza un número creciente de ciudadanos, especialmente los jóvenes¹⁹³ a través de la abstención o la no inscripción en los registros electorales¹⁹⁴, como lo muestran las siguientes tablas, donde hay una clara baja en la participación electoral, especialmente a partir de 1997:

Abstención electoral, votos blancos y nulos. Chile 1988-2001 (%)

Elecciones	Abstención	Blancos	Nulos	Sumatoria
Plebiscito 1988	2,69	0,90	1,30	4,89
Presidencial 1989	5,26	1,10	1,40	7,76
Municipal 1992	10,20	5,86	3,06	19,12
Presidencial 1993	8,71	1,85	3,68	14,24
Municipal 1996	12,14	3,02	7,95	23,11
Parlamentaria 1997	13,70	4,37	13,54	31,61
Presidencial 1999	10,11	0,70	1,97	12,78
Presidencial 1999	9,42	0,55	1,28	11,25
Municipal 2000	13,23	5,50	2,56	21,29
Parlamentaria 2001	13,42	2,92	8,02	24,36

Fuente: Registro Electoral y Ministerio del Interior de Chile. Obtenido de:
Parker, Cristián, 'Abstencionismo, juventud y política en Chile actual', Estudios
Avanzados Interactivos. Revista Idea, Vol. 2, n° 4, 2001, p. 3.

Participación de jóvenes en el padrón electoral chileno 1988-2001 (%)

Procesos electorarios	Tramos de edad			Jóvenes de:
	18-19	20-24	25-29	18-29
Plebiscito 1988	5,50	15,66	14,83	36,00
Presidencial y parlamentarias de 1989	2,96	15,31	15,17	33,44
Concejales 1992	2,69	12,19	15,06	29,95
Presidencial y parlamentarias de 1993	3,02	10,99	14,57	28,58
Concejales 1996	1,23	7,91	13,13	22,27
Parlamentarias 1997	1,06	6,75	12,08	18,89
Presidencial 1999	0,96	4,84	10,25	16,05
Concejales 2000	0,89	4,18	9,50	14,56
Parlamentarias 2001	0,69	3,93	8,40	13,02

Fuente: Registro Electoral y Ministerio del Interior de Chile. Obtenido de:
Parker, Cristián, Op.cit., p. 5.

Desde la mirada de los historiadores que suscriben la tesis de la renuncia, se aprecia una fuerte crítica a la Concertación, la que no se relaciona tanto con su desempeño macroeconómico o su lucha contra la extrema pobreza, sino con el hecho de haber abandonado su crítica original al modelo económico del régimen militar y, a su vez, adorar aquellos ‘dioses que antes quemaba’¹⁹⁵. El Chile de principios del siglo XXI no sería tan distinto de aquel de fines del siglo XIX, al cual denominan como República Salitrera. Como en aquellos años, Chile sería todavía un país dependiente económicamente (90% de sus exportaciones) de la explotación de recursos naturales básicos (esta vez sí más diversificados) y del interés extranjero por invertir capitales y transferir tecnologías hacia nuestras remotas latitudes¹⁹⁶.

(...) la recuperación que efectivamente se experimentó durante los últimos años de la dictadura, más la tendencia mundial hacia la apertura comercial y el fortalecimiento de las economías de mercado, condujo a una legitimación final del modelo incluso ante muchos de sus detractores. Así, al iniciarse la transición a la democracia en 1990, el país asistió a la paradoja de que muchos de estos, instalados ahora en los principales puestos de formulación y conducción de la política económica, optaran por preservar algunos de los rasgos esenciales de la ortodoxia neoliberal¹⁹⁷.

La crítica desde la derecha conservadora

Desde el lado opuesto del espectro político, es decir, desde la derecha conservadora, ha existido una crítica constante a la gestión económica de la Concertación, pero no al modelo en sí, sino sobre todo a su conducción, especialmente a partir de la crisis asiática de 1998. Esta crítica surge principalmente desde aquellos centros de estudio o think tanks¹⁹⁸, que acogieron

a no pocos de los antiguos funcionarios del régimen militar, entre los que destacan algunos que tuvieron altas responsabilidades en su administración económica. Estos economistas defienden a ultranza el modelo económico, pero en su versión ‘original’, es decir, sin todas las regulaciones que habrían introducido los gobiernos concertacionistas desde 1990 en adelante. Abogan por menos regulación y más mercado, pues —a su juicio— este es el único capaz de generar la necesaria flexibilidad que impone la competencia global.

Esta tesis se basa en la idea de que los economistas de la Concertación simplemente continuaron la estrategia económica que el régimen autoritario desarrolló durante diecisiete años de gobierno, renunciando de paso a las ideas estatistas y estructuralistas que habían defendido especialmente durante de década de 1980, pero —sobre todo— habrían dejado de lado la crítica acérrima a las reformas de libre mercado y a las privatizaciones, las cuales simplemente hicieron suyas dando muestra de un enorme pragmatismo y realismo político. Sin embargo, una vez transcurrido ocho años del cambio de régimen, la crisis asiática volvió a hacer resurgir las críticas socialistas al modelo económico y las recetas intervencionistas supuestamente abandonadas. En el intertanto, también se habría perdido el dinamismo inicial de las reformas microeconómicas de mercado de la década de 1980, dejando áreas pendientes como la modernización de la educación, la salud pública, las privatizaciones y el mercado del trabajo. De acuerdo con Hernán Büchi:

Chile se diferencia de Latinoamérica en que no tiene una crisis inminente, sin embargo, vamos a cumplir un quinquenio con resultados muy inferiores a los que acostumbrábamos, a los que nos creíamos con derecho, y a lo que probablemente necesitemos para mantener los delicados equilibrios sociales y políticos propios de países en desarrollo (...). El deterioro de esas reformas (microeconómicas), la falta de nuevas iniciativas o ambos factores a la vez explican nuestro estancamiento actual¹⁹⁹.

Por su parte, Carlos Cáceres sostiene:

¿Qué pasó? Para que una economía le dé oportunidad a toda la gente, ¿se

requiere tener una alta tasa de crecimiento! Es una condición necesaria, esencial, sin la cual no se puede aspirar a la equidad. Y como vamos, no se consigue ni crecimiento ni equidad²⁰⁰.

De acuerdo con esta visión, la Concertación habría perdido rápidamente su impulso modernizador, cediendo a las presiones de diferentes grupos de interés y limitando el libre juego de las fuerzas del mercado. El exceso de regulación, la corrupción y el intervencionismo electoral, entre otras múltiples causas esgrimidas, socavaron lentamente los fundamentos de las reformas estructurales de los años 70 y 80, limitando las posibilidades de crecimiento de la economía chilena. Esta sería la causa de que las cifras de expansión de la economía apenas superaran el 4% a partir de 1998, siendo que desde 1986 hasta 1997, durante el llamado ‘período dorado’, mantuvo una cifra espectacular cercana al 7,2% anual como promedio. Dentro de esta perspectiva, Chile dejó de ser un líder regional, para estancarse y ‘dormirse en sus laureles’, perdiendo la posibilidad de alcanzar las tasas de crecimiento similares a las economías asiáticas emergentes y el nivel de ingreso per cápita de un país como Portugal²⁰¹.

Desgraciadamente ese sueño (el desarrollo para el 2010) no se va a concretar durante la celebración de Bicentenario de la Independencia, ya que la tasa de crecimiento promedio anual desde que se prometió esa meta ha sido solo la mitad de la que logramos en el período de oro de nuestra economía. Resulta irónico que lo que ha ocurrido durante las últimas décadas se parezca mucho a lo sucedido en el Chile ad portas de la celebración del centenario²⁰².

(sobre Carlos Cáceres, ex-Ministro del régimen militar) Gran partidario del modelo económico impuesto en el gobierno militar, le concede a la Concertación solo el mérito de ‘haber mantenido el sistema’. Califica bien a Foxley, en el gobierno de Aylwin, pero está en desacuerdo profundo con el manejo de la crisis asiática en el período de Aninat, con Frei. ‘Es impresionante cómo se disparó entonces el gasto público’, dice y agrega que el mundo ha superado esa crisis, pero Chile, ‘aunque mejor que sus vecinos’, sigue pagando costos, agravados porque el país se había acostumbrado a crecer²⁰³.

Esta crítica denota un cierto pesimismo en cuanto a la capacidad de la Concertación de ceder a lo que llaman la ‘tentación populista’, la cual habría retornado con fuerza en América Latina con los gobiernos de Hugo Chávez, Evo Morales y Néstor Kirchner²⁰⁴. En tal sentido, manifiestan de manera indirecta su deseo de retomar las riendas de la conducción económica del país, para lo cual se han preparado desde 1990 a través de sus centros de estudio o think tanks especializados, han logrado un nivel de influencia importante en los medios de prensa, y también dentro del gobierno, al formar parte de prácticamente todas las comisiones de estudio sobre políticas públicas. De alguna manera, se consideran los creadores del modelo y argumentan que son los mejores preparados para conducirlo una vez que ya dan por finalizada la transición a la democracia. Reclaman la paternidad del mismo y consideran que ha llegado el momento de volver a administrarlo. La justificación estaría dada por la necesaria alternancia en el poder y el desgaste de la Concertación tras casi veinte años en el poder.

No nos hemos adecuados a las exigencias de flexibilidad y adaptabilidad que el mercado del trabajo moderno exige, ni tampoco a los requerimientos de calidad en la educación que el mundo del conocimiento requiere. Ello explica que el país pasara de una tasa de crecimiento del 7% anual, que permitía tener el sueño de ser un país desarrollado el Bicentenario, a tener solo un 4% promedio anual de crecimiento, que hemos tenido durante los últimos 7 años²⁰⁵. (la economía chilena) Hace una década que muestra evidentes señales de agotamiento: crecimos al 7,6% anual entre 1986 y 1997 y luego bajamos a menos del 4% entre 1998 y 2008. Luego de la crisis asiática, Chile ha crecido la mitad de lo que lograba antes, y desaprovechó así un período extraordinario de la economía mundial²⁰⁶.

La necesidad de incorporar más mercado, y no menos, es uno de los argumentos más fuertes utilizados para contrarrestar la crítica que cuestiona las bases del modelo económico. Si este ha comenzado a mostrar fisuras, es justamente por falta de flexibilidad y no por fallas en sus fundamentos. El mayor peligro no son, como en la década de 1960 y 1970, los regímenes socialistas, de los cuales solo Cuba y Corea del Norte serían ‘reliquias’, sino que el populismo

latinoamericano, el cual solo aplicaría su receta que consiste en aumentar el gasto social, elevar los impuestos, combatir la iniciativa privada y, finalmente, generar hiperinflación, conflicto social y más pobreza.

El modelo de economía de mercado ha sido el que ha logrado generar mayor crecimiento y de hecho, no existe ningún país que haya dejado atrás el subdesarrollo sin haber permitido que las personas decidan libremente los bienes y servicios que deben ser producidos. Las soluciones centralizadas o populistas solo llevan finalmente a la perpetuación de la pobreza, como lo han demostrado tantos países que han transitado por esa senda²⁰⁷.

En definitiva, estos autores sostienen que la única forma de perseverar en la senda de crecimiento y mejorar la vida de las personas, es introduciendo más mercado al modelo económico y haciéndolo más eficiente al disminuir el tamaño del Estado y dar más libertad a los agentes económicos, incluso cuando se trata de mejorar la equidad. Por lo tanto —argumentan— debiera descartarse cualquier retroceso hacia otros sistemas a los cuales se les considera solo generadores de desempleo, pobreza e inflación. En este sentido, la Concertación representa un peligro en el mediano y largo plazo, pues estiman que en ella habitan fuerzas estatistas que tienden hacia el populismo y el socialismo, dado que su discurso sobre las bondades de la economía de libre mercado no sería real, sino solo circunstancial.

La transición y el modelo económico: la disputa entre autocomplacientes y autoflagelantes al interior de la Concertación

Uno de los debates más interesantes sobre el modelo económico de la transición chilena, se inició durante el año 2008, justo en el momento en que se hacían sentir en el país las consecuencias de la crisis financiera de los mercados asiáticos. El período coincidió, además, con un cambio político no menor. El 10 de marzo del mismo año, el general Pinochet dejó la jefatura del ejército para asumir como senador vitalicio, cumpliendo con lo estipulado en la Constitución de 1980²⁰⁸. La llegada del exdictador a la cámara alta iniciaba supuestamente todo un ciclo de normalización política, legitimando al anciano general como un elemento clave de una transición democrática, la cual se mostraba ejemplar ante el mundo, y donde la combinación de paz social y crecimiento económico aparecían como un elemento diferenciador respecto de otros procesos regionales.

Cuando se la compara con las diversas transiciones a la democracia que ha habido en el mundo contemporáneo, la de Chile se cuenta, con justicia y en opinión de muchos, entre las de mayor éxito. Sus dos primeros gobiernos de centroizquierda con la Concertación (Patricio Aylwin, 1990-1994; Eduardo Frei Ruiz-Tagle, 1994-2000) mantuvieron la estabilidad política dentro de un marco constitucional, sostuvieron el crecimiento económico con un promedio superior a 6% anual durante ocho años e hicieron uso de políticas públicas para enfrentar el grave déficit social que se acumuló durante el régimen militar²⁰⁹.

Sin embargo, a mediados del mismo año, se inició un acalorado debate público al interior de la Concertación sobre el modelo de desarrollo y los avances en la democratización del país. El arresto de Pinochet en Londres no hizo sino acelerar este proceso y abrir la discusión a temas que, hasta aquel momento, habían permanecido ocultos o bien marginados de la discusión pública.

Son claramente estos retornos al objeto de transicional que deben ser analizados, sobre todo a partir de 1998, a raíz del caso Pinochet en el Reino Unido, ya que es

a partir de este año que se hace posible la ampliación progresiva del alcance de lo decible, lo pensable y lo publicable. El año 1998 marca el surgimiento de muchos momentos de esclarecimiento político, que ofrecen la oportunidad de formular nuevos enfoques a los problemas de ese objeto problemático, pero también es fundamental para elaborar nuevos enfoques críticos o al menos nuevos intentos²¹⁰.

El origen del debate puede rastrearse hasta fines de 1997, cuando la Concertación obtuvo resultados electorales menores a los esperados y considerados, por muchos, como una derrota²¹¹. A esto se sumó la publicación del Informe de Desarrollo Humano del PNUD de 1998, el cual reveló una serie de críticas respecto del balance social de los gobiernos de la Concertación, constatando además una suerte de malestar social e incertidumbre creciente en la población chilena²¹².

Las dudas que albergan los chilenos acerca del progreso efectivo del país tienen asidero. No parece ‘normal’ que tres lustros de crecimiento económico ininterrumpido no hayan modificado la distribución desigual del ingreso (...). La imagen claroscuro de la sociedad insinúa una evaluación matizada de la modernización. Los chilenos parecen incorporarse decididamente al proceso a la vez que resienten sus efectos²¹³.

Como mencionamos anteriormente, la publicación del libro de Tomás Moulian, Chile actual, anatomía de un mito, en 1997, contribuyó también a dar un sustento teórico a la posición crítica al interior de la Concertación, la cual no solo se enfocaba en lo económico, sino que también en lo político, social y cultural. Pero este enfoque solo se hizo público una vez que surgió un primer documento firmado por algunos reconocidos miembros de la Concertación que, en su mayoría, ocupaban —o habían ocupado— altos cargos de responsabilidad en los gobiernos concertacionistas, y que además cumplían el doble rol de hombres políticos e intelectuales²¹⁴. Este documento nació como una reacción a los primeros cuestionamientos públicos que se hicieron a la transición chilena y que tenían como fuente principal el informe del PNUD sobre las paradojas del

desarrollo chileno²¹⁵. A partir de este momento, la prensa escrita comenzó a tratarlos, no sin una cierta ironía caricatural, como el grupo de los ‘autocomplacientes’ por oposición a sus críticos, denominados, en contraposición, como los ‘autoflagelantes’.

El argumento principal de los firmantes del primer documento (autocomplacientes) era que el supuesto malestar de la sociedad chilena con la transición y con algunos aspectos del modelo económico, se debía principalmente a las inseguridades propias del sistema de libremercado y los procesos de modernización en general pero que, en definitiva, sus resultados son positivos al haber entregado niveles de bienestar económico nunca antes alcanzados por los habitantes de Chile. Siendo así, el supuesto descontento no sería tal, y estaría refutado por las bajas tasas de conflictividad social mostrada por la sociedad chilena desde 1990. Por lo tanto, el malestar sería más bien propio de algunas élites políticas concertacionistas y de la izquierda extraparlamentaria (tildadas de neoconservadoras) e insatisfechas con la transición, y en ningún caso de la población en general, a quien se la malinterpretaba mediante instrumentos estadísticos poco fiables. De acuerdo con José Joaquín Brunner:

Lo que sí existe, en cambio, pero seguramente no al punto de provocar específicos malestares, es un generalizado desinterés por los temas que la dirigencia política debate en los medios de comunicación y un bajo grado de identificación de la gente con el sector político (...). Es una antigua tesis conservadora (hoy neoconservadora) que las contradicciones del capitalismo moderno son la fuente de variados malestares en la cultura. El reciente Informe sobre Desarrollo Humano en Chile, titulado Las paradojas de la modernización, acoge parcialmente esa tesis²¹⁶.

La respuesta al manifiesto de los firmantes del primer documento no se hizo esperar, y a las pocas semanas fue publicado en los periódicos un segundo texto firmado por otro grupo transversal al interior de la Concertación, formado principalmente por parlamentarios, algunos intelectuales y dirigentes sindicales (autoflagelantes)²¹⁷. En este texto, se reconocen una serie de éxitos de los dos primeros gobiernos concertacionistas, sobre todo respecto de la lucha contra la

extrema pobreza y el logro de crecimiento económico con paz social. Sin embargo, se pone el acento en las tareas pendientes y en el sentido que debe guiar la modernización chilena más allá de lo que se denomina como ‘integrismo conservador’²¹⁸. Rechazan el exitismo y la complacencia del primer documento, e insisten en que no puede afirmarse que una sociedad como la chilena sea realmente democrática. Esto no ocurrirá mientras no se corrijan sus enormes desigualdades económicas y se supere el pasado autoritario anclado en muchas de las instituciones heredadas de la Constitución de 1980. Es justamente en lo institucional donde se sitúa lo fundamental de esta crítica, aunque el tema económico no está ausente:

El documento recoge en este balance la persistencia de importantes desigualdades y privilegios, señalando que ‘el país presenta altas tasas de concentración de patrimonio y del ingreso, mientras que por otro lado se percibe un estancamiento en las posibilidades de movilidad social de numerosos sectores de la población’ (...). Se debe enfrentar la pretensión hegemónica del integrismo conservador que admite la libertad solo en el terreno de la economía, para dar paso a una cultura de libertades y derechos²¹⁹.

Un elemento interesante de este debate es la ausencia casi total de los economistas, especialmente de aquellos que tuvieron responsabilidades en las políticas implementadas desde 1990. Por el contrario, los protagonistas fueron sobre todo profesionales de las ciencias sociales, los cuales en su mayoría habían formado parte de los centros de estudio y think tanks de oposición al régimen militar, ya analizados en la primera parte de este capítulo. Nuestra hipótesis es que, tratándose de una discusión que traspasó el área propiamente técnica de los economistas, estos prefirieron marginarse en favor de quienes Alfredo Joignant ha denominado como los ‘transitólogos’²²⁰.

La discusión entre autocomplacientes y autoflagelantes se llevó a cabo durante varios meses y con una profusión de artículos y entrevistas en los diferentes medios de prensa chilenos. El arresto de Pinochet en Londres agudizó aún más la polémica, pues se rompía con esto uno de los temas tabú de la transición chilena, es decir, la inconfesable imposibilidad de procesar judicialmente al exdictador, al menos dentro de los límites de una transición democrática pactada²²¹. Hasta

aquel momento, la figura de Pinochet, sus privilegios y el hecho de que siguiera ocupando espacio de poder político, eran difícilmente entendidos fuera de Chile. La excepción de la transición chilena era justamente el estatuto especial de quien había gobernado con mano de hierro el país por diecisiete años, y que internacionalmente se había convertido en el arquetipo de la represión política en América Latina²²². En palabras de Alexander Wilde:

La detención de Pinochet y los acontecimientos que la siguieron catalizan este humor nacional. Improbables, sin precedentes, asombrosos de por sí, estos hechos ponen a prueba el elemento que aparecía como inamovible en la ‘transición pactada’ de Chile y rodean de vulnerabilidad a una figura que lleva un gran peso simbólico por haber estado durante una generación en el centro de la vida nacional, vilipendiada o celebrada por distintos sectores de la población, soportada con cierto fatalismo, tal vez, por la mayoría²²³.

La captura del general rompió el frágil equilibrio de quienes, dentro de la Concertación, habían tejido la compleja trama de negociaciones que habían dado forma al modelo chileno desde 1990 hasta 1998. La irrupción del pasado, la memoria y las ansias de justicia por las violaciones a los derechos humanos, se hicieron incontenibles y más aún justificadas por el apoyo internacional y el repudio generalizado a la figura del exgobernante. Chile no era un país reconciliado, ni consensuado en cuanto a sus instituciones políticas ni tampoco respecto de su modelo de desarrollo²²⁴. Un autor como Alexander Wilde ha puesto el acento en estas ‘irrupciones’ de la memoria, las cuales —a su juicio— escaparon a los acuerdos o consensos elitistas, incluso antes de la detención de Pinochet en Londres²²⁵.

El quiebre de este pacto que la élite política había negociado desde 1989, permitió cuestionar públicamente los demás acuerdos de la transición, incluso aquellos relacionados con el modelo económico, especialmente en un momento donde la crisis financiera asiática había puesto en evidencia la falta de protección social ante las fluctuaciones del empleo, el endeudamiento y la pérdida de poder adquisitivo. Pero la crítica cayó también sobre los negociadores de la transición, en especial aquellos que pertenecían a una coalición que había luchado por el pleno retorno a la democracia. Surgió entonces la duda de si las reformas

políticas y económicas, pendientes desde 1989, no se hicieron a causa de los enclaves autoritarios y la presión de la oposición de derecha, o simplemente por falta de convicción de la propia Concertación.

Lo que es muy grave para Chile es que el principio de mayoría no haya podido operar, estableciendo un equívoco entre la Concertación y la sociedad respecto a lo que esta se propone hacer y sin embargo no logra hacer, lo que desmotiva, desmoviliza y a la larga confunde: empieza a no quedar claro si las cosas no se pueden hacer por falta de operatoria del principio de mayoría o por (...) falta de convicción²²⁶.

La discusión entre autocomplacientes y autoflagelantes fue uno de los primeros espacios de apertura y crítica a la historia reciente de Chile y a los pactos de la transición surgidos a partir de una serie de eventos que se aceleraron con la detención de Pinochet en Inglaterra. El debate sobre el modelo económico surgió, en gran medida, producto de la crisis asiática, pero también a partir del desafío a las miradas 'transitológicas' que ponían el acento principalmente en los éxitos de la transición democrática chilena y no en sus debilidades, las que fueron puestas en evidencia tras la crisis política y diplomática desatada por el arresto y el posterior juicio de extradición al exdictador. A partir de 1998, los cuestionamientos al modelo económico se hicieron más habituales, generando un polo crítico tanto dentro como fuera de la Concertación, donde las referencias al individualismo y a la pérdida de valores colectivos son habituales y donde se plantea la idea de una transición que se extiende indefinidamente en el tiempo:

Los partidos (de la Concertación) no han estado a la altura de reconstruir una cultura humanista suficientemente poderosa para el país. No hemos estado a la altura de combatir el individualismo extremo ni de crear la reconstrucción de la nación chilena, que fue tan vulnerada por la dictadura²²⁷.

Resulta evidente que, más allá de las posiciones a favor o en contra de la estrategia de desarrollo chilena, el país ha sufrido enormes transformaciones

desde que, en 1975, el régimen militar aplicó un programa orientado a terminar con el modelo de Estado de Compromiso y desarrollo hacia adentro²²⁸. Algunas de las principales consecuencias de esta transformación en la sociedad chilena, probablemente la más arraigada que se heredó del régimen militar, nos interesa analizar en el siguiente capítulo.

Notas al Capítulo V

¹ [Foxley, Alejandro, La economía política de la transición: el camino del diálogo, Santiago, Dol men, 1993, p. 19.](#)

² [Sobre el ascenso de los economistas en las altas esferas de decisión gubernamental, consultar: Dezalay, Yves & Garth, Bryant, The Internationalization of Palace Wars: Lawyers, Economists, and the Contest to Transform Latin American States, Chicago, University of Chicago Press, 2002, 331 p. Existe una traducción al español de esta obra editada por ILSA, UNAM y la Universidad Bolivariana de Chile: Dezalay, Yves & Garth, Bryant G., La internacionalización de las luchas por el poder. La competencia entre abogados y economistas por transformar los Estados Latinoamericanos, Santiago, ILSA/Universidad Bolivariana, 2002, 389 p. Sobre el rol político de la tecnocracia y la liberalización económica en América Latina durante la década de 1990, véase: Domínguez, Jorge I., Technopols: freeing politics and markets in Latin America in the 1990s, University Park, Pennsylvania State University Press, 1997, 287 p. Para el caso chileno, revisar especialmente el siguiente trabajo sobre al ascenso de los economistas a las más altas esferas de la administración del Estado: Montecinos, Verónica, “El valor simbólico de los economistas”, Nueva Sociedad, N° 152, 1997, pp. 108-126.](#)

³ [El papel de los científicos económicos y sociales chilenos o radicados en Chile durante de la década de los ‘50 y ‘60, alcanzó una repercusión internacional, especialmente en lo referido a la creación de un pensamiento social y político independiente y alternativo al de los centros tradicionales del saber \(universidades\). Véase: Devés, Eduardo, “Los científicos económico sociales chilenos en los largos 60 y su inserción en las redes internacionales: la reunión del foro tercer mundo en Santiago en abril de 1973”, Revista Universum, Vol. 21, N° 1, 2006, pp. 138-167. También, del mismo autor: Devés, Eduardo, El](#)

pensamiento latinoamericano en el siglo XX, Buenos Aires, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana / Ed. Biblos, 2003, 323 p. y Devés, Eduardo, “La circulación de las ideas y la inserción de los científicos económicos chilenos en las redes conosureñas durante los largos 1960”, Historia, Vol. 37, N° 2, 2004, pp. 1-24.

⁴ Al Like the Chicago Boys, Foxley sought to overcome the ideological and populist past. Unlike them, he believed that Chile should solve its ‘problem’ of ‘governability’ not by repressing politicians but by creating a pragmatic and responsible ‘leadership class’ animated by a spirit of cooperation (...). Both the Chicago Boys and Foxley believed that policy continuity would ultimately be ensured by a national consensus on the model of development that transcended the whim of any government. Kinney Giraldo, Jeanne, “Development and Democracy in Chile: Finance Minister Alejandro Foxley and the Concertación’s Project for the 1990s”, en Domínguez, J. (Ed.), Op.cit., p. 240.

⁵ Muñoz, Óscar, El modelo económico de la Concertación 1990-2005 ¿Reformas o cambio?, San tiago, Ed. Catalonia, FLACSO, p. 222.

⁶ Entrevista a Alejandro Foxley, en: Arancibia Clavel, Patricia, Cita con la Historia, Santiago, Editorial Biblioteca Americana, 2006, p. 622.

⁷ Lo que hemos denominado como la tesis del ‘abandono’ o la ‘renuncia’ es sostenida principalmente desde la izquierda política que está fuera de la Concertación. Ver especialmente: Fazio, Hugo, El programa abandonado: Balance económico social del gobierno de Aylwin, Santiago, LOM Ediciones, 1996.

⁸ La influencia de una tecnocracia no política de ingenieros (civiles, eléctricos y de minas) en Chile desde mediados de la década de 1920, ha sido estudiada por

Adolfo Ibáñez en un ya clásico artículo de 1983 sobre la conformación de la idea de 'Estado Moderno'. Este grupo de técnicos tuvo posteriormente un papel en la puesta en marcha de la Corporación de Fomento (CORFO), la cual estuvo en el centro de la estrategia chilena de industrialización y sustitución de importaciones (ISI, ver capítulo II de este estudio). Consultar: Ibáñez, Adolfo, "Los ingenieros, el Estado y la política en Chile: del Ministerio de Fomento a la Corporación de Fomento: 1927-1939", Historia. Instituto de Historia. Pontificia Universidad Católica de Chile, N° 18, 1983, pp. 45-102. También: Villalobos, Sergio & Méndez, Luz María, Historia de la ingeniería en Chile, Santiago, Instituto de Ingenieros de Chile & Hachette, 1990, 409 p. y Muñoz, Óscar & Arriagada, Ana María, "Orígenes políticos y económicos del Estado empresarial en Chile", Estudios CIEPLAN, N° 16, septiembre, 1977.

⁹ Véase: Silva, Patricio, "State, Public Technocracy and Politics in Chile, 1927-1941", Bulletin of Latin American Research, Vol. 13, N° 3, sep. 1994, p. 281-297. Véase también del mismo autor: Silva, Patricio, "Technocrats and Politics in Chile: From the Chicago Boys to the CIEPLAN Monks", Journal of Latin American Studies, Vol. 23, N° 2, 1991, pp. 385-410. Un interesante estudio sobre la profesionalización de la política en Chile a partir de 1990, se encuentra en: Romero, María Teresa, Profesionalización de la elite política administrativa en Chile: 1990-2004. El proceso de mantenimiento: permanencia y circulación, Santiago, Tesis de Magíster en Ciencia Política, Universidad de Chile, 2005.

¹⁰ Entre los centros de estudio más importantes de oposición al régimen militar, destacan: CIEPLAN (Corporación de Estudios para Latinoamérica), AHC (Academia de Humanismo Cristiano), ILADES (Instituto Latinoamericano de Doctrinas y Estudios Sociales), CED (Centro de Estudios del Desarrollo), SUR (Centro de Estudios Sociales y Educación), CES (Centro de Estudios Sociales), ILET (Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales), CLEPI (Centro Latinoamericano de Economía y Política Internacional), PET (Programa de Economía del Trabajo), ICHEH (Instituto Chileno de Estudios Humanísticos), VECTOR (Centro de Estudios Económicos y Sociales), FLACSO (Facultad latinoamericana de Ciencias Sociales), y más tardíamente CERC (Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea). Consultar: Puryear, Jeffrey, Op.cit., y también: Lladser, María Teresa & Díaz, Harry, Centros privados de investigación

en Ciencias sociales en Chile, Santiago, Academia de Humanismo Cristiano, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), 1986, 296 p. Además: Brunner, José Joaquín, “La participación de los centros académicos privados”, Estudios Públicos, N° 19, invierno 1985, pp. 1-12.

¹¹ Fue el caso de la Academia de Humanismo Cristiano (AHC), creada en 1975, y CIEPLAN en 1976.

¹² Véase: Boeninger, Edgardo, Op.cit., pp. 284-285. La Democracia Cristiana fue disuelta oficialmente por el régimen militar mediante el Decreto Ley del 11 de marzo de 1977.

¹³ Recomendamos la lectura de la exhaustiva investigación de Patricia Mayorga sobre el atentado a Bernardo Leighton en Italia. Mayorga, Patricia, El Cóndor Negro. El atentado a Bernardo Leighton, Santiago, El Mercurio Aguilar, 2003, 241 p. En la prensa de la época: Anónimo, “Bernardo Leighton resulta gravemente herido tras atentado”, La Tercera, portada, 05 de octubre 1975.

¹⁴ Silva, Patricio, “Technocrats and...”, Op.cit., p. 402.

¹⁵ Entrevista a Alejandro Foxley, en: Arancibia Clavel, Patricia, Cita con la Historia, Op.cit., p. 620.

¹⁶ Fue justamente a partir de este momento cuando la Universidad de Chile comenzó a perder su peso histórico en la formación de las élites dirigenciales del país, especialmente en el campo de la economía. Posteriormente, el régimen militar haría aún más evidente este proceso al reestructurar la Universidad de Chile, reducir su tamaño y presupuesto. Sobre la historia de la Universidad de

Chile, consultar: Mellafe, Rolando, Rebolledo, Antonia & Cárdenas, Mario, Historia de la Universidad de Chile, Santiago, Ediciones de la Universidad de Chile, 1992.

¹⁷ Silva, Patricio, “Technocrats and Politics...”, Op.cit., p. 406.

¹⁸ CEPLAN (Centro de Estudios de la Planificación Nacional). El centro de estudios fue creado para realizar actividades de investigación y docencia.

¹⁹ Entre sus economistas más destacados, estaban Ricardo Ffrench-Davis, Juan Pablo Arellano y René Cortázar.

²⁰ Krebs, Ricardo, Valdivieso, Patricio & Muñoz, María Angélica, Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile: 1888 - 1988, Santiago, Eds. Universidad Católica de Chile, 1994, Vol. 2, pp. 1145-1146.

²¹ Then and now, Foxley believed in a role for the state that balanced decentralized efficiency and participation with the centralized authority necessary to guide the nation’s development. Objecting to the left’s excessive confidence in the state, Foxley argued for restrictions on state action on a variety of grounds. He was concerned with the ability of state enterprises to operate efficiently and flexibly and believed that the state needed to be modernized in its macroeconomic management and more targeted and selective in its industrial and redistributive activities. Kinney Giraldo, Jeanne, Op.cit., p. 235.

²² Huneus, Carlos, El Régimen de Pinochet, Op.cit., p. 409.

²³ Puryear, Jeffrey, Op.cit., p. 113.

²⁴ La tesis del ‘camino propio’ implicó que desde su fundación, en 1957, hasta 1983, la Democracia Cristiana chilena siguió una estrategia electoral sin alianzas con otros partidos. Un interesante artículo sobre la evolución de la Democracia Cristiana desde la tesis del ‘camino propio’ hasta el consenso y la creación de la Concertación de Partidos por el NO, puede encontrarse en: Walker, Ignacio & Jouannet, Andrés, “Democracia Cristiana y Concertación: Los casos de Chile, Italia y Alemania”, Revista de Ciencia Política, Vol. 26, N° 2, 2006, pp. 77-96. Sobre ese punto también recomendamos: Huneus, Carlos, “A highly institutionalized political party: Christian Democracy in Chile” en Mainwaring, S. & Scully, T. (Eds.), Christian Democracy in Latin America: Electoral Competition and Regime Conflicts, Stanford University Press, 2003, 404 p. Ver también: Gazmuri, Cristián, Arancibia, Patricia & Góngora, Álvaro, Eduardo Frei Montalva (1911-1982), Santiago, Fondo de Cultura Económica, 1996.

²⁵ Otano, Rafael, Nueva Crónica de la Transición, Santiago, Lom Ediciones, p. 158.

²⁶ Puryear, Jeffrey, Op.cit., p. 114.

²⁷ Probablemente, el texto de crítica al monetarismo de mayor repercusión a nivel local y continental durante este período y elaborado en CIEPLAN, fue: Foxley, Alejandro, “Experimentos neoliberales en América Latina”, Colección Estudios CIEPLAN, N° 59, marzo 1982, pp. 5-149. En relación a la crítica de las estadísticas oficiales elaboradas por el régimen militar, recomendamos: Cortázar, René & Meller, Patricio, “Los dos Chiles o la importancia de revisar las estadísticas oficiales”, Colección Estudios Cieplan, N° 21, junio 1987, pp. 5-21. Ver también: Marcel, Mario & Meller, Patricio, “Empalme de las cuentas nacionales de Chile 1960-1985. Métodos alternativos y resultados”, Colección Estudios CIEPLAN, N° 20, diciembre 1986, pp. 121-146.

²⁸ Foxley, Alejandro, “Hacia una economía de libremercado: Chile 1974 -1979”, Colección Estudios Cieplan, N° 4, noviembre 1980, p. 7.

²⁹ Ibíd., p. 13.

³⁰ De alguna manera, el ciclo de protestas permitió que otros actores sociales y políticos tomaran la bandera de la crítica al régimen, por lo cual los economistas perdieron el monopolio de la misma, pero al mismo tiempo ganaron mayor libertad para desarrollar su trabajo técnico.

³¹ La Democracia Cristiana temía que el fenómeno de las protestas contra la dictadura escapara a su control, pues el Partido Comunista había elaborado una estrategia de Rebelión Popular de Masas establecida desde 1980, y que promovía ‘todas las formas de lucha’. La estrategia del diálogo entonces tuvo la doble función de mantener a la DC como un actor fundamental en la futura transición a la democracia y al mismo tiempo aislar al PC. Probablemente, quien mejor ha trabajado el tema de la política del PC chileno en la década de 1980, es el historiador Rolando Álvarez Vallejos. Álvarez, Rolando, “¿La noche del exilio? Los orígenes de la rebelión popular en el Partido Comunista de Chile”, en Valdivia Ortiz De Zárate, V., Álvarez, R. & Pinto, J. (Eds.), Su revolución contra nuestra revolución. Izquierdas y derechas en el Chile de Pinochet (1973-1981), Santiago, LOM Ediciones, 2006, pp. 101-152.

³² Puryear, Jeffrey, Op.cit., p. 114. Uno de los principales estudios elaborados por CIEPLAN en relación con este tema, fue: Campero, Guillermo & Cortázar, René, “Lógicas de acción sindical en Chile”, Colección Estudios Cieplan, N° 18, diciembre 1985, pp. 5-37.

³³ The crisis of consensus, though it had important economic implications, required a political, more than economic, solution —a political and social system capable of ensuring stability and generating consensus. For Foxley, ‘inefficiency’ is not only, not even mainly, an economic problem. Inefficiency is the result of the inexistence of political and social institutions capable of processing demands or structuring society. Kinney Giraldo, Jeanne, Op.cit., p. 239.

³⁴ Palabras del economista de CIEPLAN, Óscar Muñoz Goma. Véase: Puryear, Jeffrey, Op.cit., p. 115.

³⁵ Sobre las relaciones entre el Banco Mundial y el gobierno de Chile, desde la década de 1980, en relación a la modernización del Estado y las condicionantes para acceder a nuevos créditos, recomendamos la lectura de: Lardone, Martín, “¿Quién aprende de quién? El Banco Mundial en la reforma del Estado chileno”, en De Cea, Maite, Díaz, Paola & Kerneur, Geraldine (Eds.), ¿De país modelado a país modelo? Una mirada sobre la política, lo social y la economía, Santiago, GRESCH, ICSO-UDP, Universidad Bolivariana, 2008, pp. 209-230.

³⁶ *Ibíd.*, p. 116.

³⁷ Tironi, Eugenio, “Cohesión social en Chile: el retorno de un viejo tema”, *Quórum: Revista de pensamiento iberoamericano*, N° 18, 2007, p. 47.

³⁸ Palabras de Alejandro Foxley en relación a las transformaciones económicas de la segunda mitad de la década de 1980. Foxley, Alejandro, *Logros y fracasos en la erradicación de la pobreza. El caso de Chile*, Santiago, Universidad de Chile, 2003, p. 6.

³⁹ Un interesante estudio sobre las políticas económicas aplicadas durante las transiciones a la democracia en la década de 1980 en Argentina, Bolivia, Uruguay y Chile, puede encontrarse en: Morales, Juan Antonio, McMahon, Gary & Celedón, Carmen, La política económica en la transición a la democracia: Lecciones de Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay, Santiago, CIEPLAN, 1993, 179 p. En este caso, nos interesó especialmente la introducción y el capítulo donde se analiza la implementación y consecuencias del ‘Plan Austral’ en Argentina. Para comprender las dificultades del caso argentino para establecer políticas de mercado ortodoxas similares a las aplicadas en Chile, consultar: Teichman, Judith, The Politics of Freeing Markets in Latin America: Chile, Argentina, and Mexico, UNC Press, 2001, Cap. 5, pp. 97-128.

⁴⁰ El sociólogo Ángel Flifisch, quien ejerció como subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia durante el gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994), confirma el tema del temor al populismo como uno de los principales riesgos de la transición dadas las enormes demandas sociales acumuladas durante el régimen militar: “(...) esta tentación (populista) fue rechazada una y otra vez a partir de la premisa de que la explosión de las demandas socioeconómicas era el riesgo principal para la gobernabilidad desde 1990 en adelante y que, por consiguiente, el control y disciplinamiento de las expectativas del electorado ‘natural’ de los partidos integrantes de la coalición debía ser la primera prioridad de la conducción política”. Flifisch, Ángel, “La gestión estratégica de un proceso de transición y consolidación: el caso chileno”, Propositiones, Vol. 25, N° 1994, p. 18.

⁴¹ Foxley, Alejandro, La economía política de la transición: el camino del diálogo, Santiago, Dolmen, 1993, p. 108.

⁴² Ibíd., p. 7.

⁴³ Martner, Gonzalo, Remodelar el modelo. Reflexiones para el Bicentenario, Santiago, LOM Ediciones, p. 57.

[44 Entre los principales nombres del equipo económico vinculados a CIEPLAN, estaban: Pablo Piñera, José Pablo Arellano, Manuel Marfán, y Mario Marcel. En el Ministerio del Trabajo, destacaba la figura de René Cortázar.](#)

[45 Movimiento de Izquierda Revolucionario \(MIR\). Sobre la formación del MIR, recomendamos el reciente artículo de Eugenia Palieraki, el cual forma parte de su tesis de doctorado. Palieraki, Eugenia, “La opción por las armas. Nueva izquierda revolucionaria y violencia política en Chile \(1965 - 1970\)”, Polis: Revista de la Universidad Bolivariana, N° 19, 2008, 13 p. Sobre la política del MIR durante la dictadura, recomendamos la lectura de: Pinto, Julio, “¿Y la historia les dio la razón? El MIR en dictadura, 1973-1981”, en Valdivia Ortiz De Zárate, V., Álvarez, R. & Pinto, J. \(Eds.\), Su revolución contra nuestra revolución. Izquierdas y derechas en el Chile de Pinochet \(1973-1981\), Santiago, LOM Ediciones, 2006, pp. 153-205.](#)

[46 “Al igual que cuando encabezaron el equipo económico de Aylwin, dejaron de lado sus diferencias debido al sombrío diagnóstico económico”, La Tercera, Reportajes, 15/09/2002, pp. 4-5.](#)

[47 Economía, “Foxley: La clave es realizar cambios económicos con crecimiento económico del 5%”, La Época, 12/12/1989, p. 9.](#)

[48 De acuerdo con Ascanio Cavallo, la desconfianza no era solo de los empresarios respecto del nuevo equipo económico, sino que también de los centros financieros internacionales, que sospechaban una conducción económica de centroizquierda. Cavallo, Ascanio, Historia oculta de la Transición, Santiago, Editorial Grijalbo, p. 57.](#)

⁴⁹ Arrate, Jorge & Rojas, Eduardo, Memoria de la izquierda chilena. Tomo II (1970-2000), Santiago, Javier Vergara Editor, 2003, p. 457.

⁵⁰ Icare, Quo Vadis, Chile: Versión completa del 11° encuentro nacional de la empresa, Enade '89, Santiago, ICARE, 1990.

⁵¹ Otano, Rafael, Op.cit., p. 157.

⁵² Tres grandes e influyentes empresarios, muy cercanos al General Pinochet, destacaban entre los más duros opositores al nuevo equipo económico: Eugenio Heiremans (Asociación Chilena de Seguridad, ACHS), Hernán Briones (Cementos Bío-Bío, Indura) y Ernesto Ayala (Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, CMPC). Hernán Briones fue, además, presidente de la Fundación Augusto Pinochet, creada en 1995 para proyectar la obra del régimen militar. Este grupo de dirigentes empresariales 'duros' se los conocía como 'los papeleros'.

⁵³ Anónimo, "Nuevo gobierno: urgencias del primer año", Qué Pasa, N° 975, 16/12/1989, p. 14.

⁵⁴ Un completo e interesante estudio sobre el papel de los empresarios y la transición democrática chilena, puede encontrarse en: Silva, Patricio, "Empresarios, neoliberalismo y transición democrática en Chile", Revista Mexicana de Sociología, Vol. 57, N° 4, 1995, pp. 3-25.

⁵⁵ Fazio, Hugo, El programa abandonado: Balance económico social del gobierno de Aylwin, Santiago, LOM Ediciones, p. 30.

[56 Anónimo, Agüero: “Crecimiento económico del 4 o 5% es insuficiente”, La Segunda, 03/01/1990, p. 3.](#)

[57 Al respecto, Judith Teichman confirma el caso monopolio del Ministerio de Hacienda en la generación y puesta en marcha de la política económica: “The most important policy network is based in the Finance Ministry, monopolizing several policy areas and dominating the networks in others. It is characterized by most of the Standard features of Latin American technocratic policy networks: personal friendship, trust loyalty, common sources of recruitment, and common policy objectives”. Teichman, Judith, The Politics of Freeing Markets in Latin America: Chile, Argentina, and Mexico, UNC Press, 2001, p. 95.](#)

[58 Zegers, María Angélica, “Entrevista a Edgardo Boeninger”, Capital, N° 236, 2008, pp. 1-10.](#)

[59 Un interesante análisis sobre las demandas sociales acumuladas al final del régimen militar, puede encontrarse en: Sur, “La Transición Democrática y las Demandas Sociales”, Hechos Urbanos, boletín de información y análisis, Vol 91, N° noviembre-diciembre 1989, pp. 1-16. Disponible en línea en: \[www.sitiosur.cl\]\(http://www.sitiosur.cl\)](#)

[60 Con esto se referían a la ‘Revolución en Libertad’ del gobierno demócratacristiano de Eduardo Frei Montalba \(1964-1970\), a la ‘Vía Chilena al Socialismo’ del gobierno de la Unidad Popular conducido por Salvador Allende \(1970-1973\), y a la ‘Revolución Neoliberal’ impuesta por el régimen militar a la cabeza del general Augusto Pinochet y la Junta de Gobierno \(1973-1990\).](#)

[61 La Transición Democrática y las Demandas Sociales”, Op. cit., p.1,2.](#)

[62 Palabras de Sergio de Castro en entrevista al diario La Tercera, 23/10/2005.](#)

[63 Boeninger, Edgardo, Op.cit., p. 375.](#)

[64 En los discursos presidenciales del período 1990-1994, puede encontrarse el concepto citado en innumerables ocasiones. Véase: Aylwin, Patricio, Crecimiento con equidad: Discursos escogidos, 1992-1994, Santiago, Editorial Andrés Bello, 494 p. También: Arellano, José Pablo, “Políticas sociales para el crecimiento con equidad Chile 1990-2002”, Serie Estudios socio/económicos CIEPLAN, N° 26, 2004, pp. 1-46.](#)

[65 Sobre la historia del concepto de Economía Social de Mercado, ver especialmente en la obra de Ludwig los capítulos IV y VI: Erhard, Ludwig, Economía social de mercado: su valor permanente, Madrid, Ediciones Rialp, 169 p. Para una visión crítica, desde el punto de vista conservador, del uso de este concepto en Chile desde 1990, consultar: Yáñez Rojas, Eugenio, Economía social de mercado en Chile: ¿Mito o realidad?, Munich, Hanns Seidel Stiftung, 2005, 259 p.](#)

[66 Arellano, José Pablo, “Políticas sociales para el crecimiento con equidad Chile 1990-2002”, Serie Estudios socio/económicos CIEPLAN, Vol, N° 26, pp. 2-3.](#)

[67 Economía, “Foxley: La próxima semana, Concertación inicia contactos con el gobierno para ‘traspaso económico’, La Segunda, 15/12/1989, p. 26.](#)

[68 Para un análisis técnico y en detalle de la reforma fiscal, recomendamos la](#)

lectura de: Marcel, Mario, “Políticas públicas en democracia: el caso de la Reforma Tributaria de 1990 en Chile”, Colección Estudios CIEPLAN, N° 45, junio 1997, pp. 33-83. También: Pizarro, Crisóstomo, “La primera reforma tributaria durante el gobierno de transición: concertación y debate”, en Pizarro, Crisóstomo, Raczynski, Dagmar & Vial Ruiz Tagle, Joaquín (Eds.), Políticas económicas y sociales en el Chile democrático, Santiago, CIEPLAN/UNICEF, 1995, pp. 93-128.

⁶⁹ Óscar Muñoz Goma se ha referido a este período como la fase neo-populista del régimen militar, haciendo alusión al sobrecalentamiento artificial de la economía durante 1989, con tasas expansivas de crecimiento de un 10% y de inflación cercanas al 21%. Muñoz, Óscar, El modelo económico de la Concertación 1990-2005 ¿Reformas o cambio?, Op.cit., p. 90. De acuerdo con las cifras que maneja Patricia Olave, durante el bienio 1988-1989, el PIB aumentó 18% cuando lo programado era entre 9 y 10% en los dos años. La demanda agregada, por su parte, creció 22% del PIB, lo que finalmente se tradujo en un crecimiento importante de la inflación, que alcanzó un 27,3% en 1990, más de dos veces la tasa de 1988, que fue de 12,7%. Véase: Olave, Patricia, Op.cit., p. 159.

⁷⁰ Hasta aquel momento, la principal reforma fiscal se había realizado en 1975, en pleno régimen militar y tratamiento de shock, la que tuvo un carácter netamente regresivo en términos de concentración de la riqueza. Se eliminaron los gravámenes sobre la riqueza y las ganancias de capital, además de una reducción sustancial de la carga tributaria sobre las utilidades (revenues). Se instauró un impuesto al valor agregado, IVA (TVA), suprimiéndose las exenciones para los bienes de consumo básico. Se buscaba con esto instaurar impuestos neutrales, dejando de lado el criterio de progresividad. Consultar: Ffrench-Davis, Ricardo, Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad, Op.cit., p. 272.

⁷¹ Para los empresarios fue un triunfo la incorporación del aumento del IVA en la reforma fiscal, pues, —según su punto de vista, con eso no se castigaba ni la

producción ni la riqueza, y el esfuerzo social se hacía colectivo. Revisar: Cavallo, Ascanio, La historia culta de la transición, Op.cit., p. 59.

⁷² Un completo análisis sobre la evolución de la legislación laboral en Chile en relación al modelo económico entre 1975 y 2000, puede encontrarse en: Mizala, Alejandra & Romaguera, Pilar, “La legislación laboral y el mercado del trabajo en Chile: 1975-2000”, Documento de Trabajo CEA, N° 116, 2002, pp. 1-26.

⁷³ Drake, Paul, “El movimiento obrero en Chile: De la Unidad Popular a la Concertación”, Revista de Ciencia Política, Vol. 23, N° 2, 2003, pp. 152, 153.

⁷⁴ Declaraciones de Arturo Martínez, dirigente de la CUT. Véase: Arrate, Jorge & Rojas, Op.cit., p. 444.

⁷⁵ Un completo análisis sobre la situación de los sindicatos durante la década de 1990, se halla en: Rojas Hernández, Jorge, “El movimiento sindical chileno en la transición a la democracia”, Propositiones, N° 22, agosto 1993, pp. 54-79.

⁷⁶ Se trató de los dirigentes Manuel Bustos de la Democracia Cristiana y Arturo Martínez del Partido Socialista, quienes sufrieron la relegación durante la década de 1980.

⁷⁷ Palabras de Alejandro Foxley en el prólogo del libro sobre Manuel Bustos. Foxley, Alejandro, Bustos, Manuel & Sandoval, Guillermo, Conversaciones con Manuel Bustos, Santiago, Editorial Andrés Bello, p. 20.

[78 Acuerdo Nacional CPC-CUT-Gobierno. 27 abril 1991. Documento publicado en la prensa chilena el 28 de abril de 1991.](#)

[79 José Piñera, ex Ministro del Trabajo del régimen militar, expresó respecto de las reformas en 1991: “\(las reformas\) es como darle un revolver a los sindicatos para destruir el sistema laboral y económico vigente”. Revista Qué Pasa, mayo de 1991. Citado por: Campero, Guillermo, “La economía política de las relaciones laborales 1990-2006”, Serie Estudios Socio/Económicos, N° 37, mayo 2007, p. 16.](#)

[80 Campero, Guillermo, Op.cit., p. 7.](#)

[81 César Guzmán ha contabilizado el nivel de conflicto laboral en los primeros años de la recuperación de la democracia de acuerdo a las cifras oficiales de la Dirección del Trabajo \(<http://www.dt.gob.cl>\): “En 1990 se registraron 176 huelgas, las que aumentaron hasta llegar a 247 en 1992. Es un momento de alza en la conflictividad, que coincide con el crecimiento de la población sindicalizada hasta su peak histórico de 1992 de 724 mil personas. A partir de 1993, el número de huelgas comienza a bajar: 224 en 1993, 196 en 1994, 187 en 1995, 183 en 1996, 179 en 1997, 121 en 1998 y 108 en 1999. Esta fase es coincidente con el descenso sostenido de la población sindicalizada hasta 1999: salvo 1996, en todos los años de este período el total de personas sindicalizadas en el país cae, para llegar en 1999 a 580 mil”. Guzmán, César, “Sobre huelga y conflicto laboral en Chile”, Alternativa, ICAL, N° 21, 2004, p. 1.](#)

[82 En este sentido, compartimos el análisis de Cecilia Baeza-Rodríguez sobre la importación y el uso del concepto de ‘governabilidad’ en Chile: “Frente a las disonancias de la joven democracia chilena, la noción de ‘governabilidad’ nos parece, en efecto, desempeñar un papel de discurso ordenador: al articular un relato aceptable de democracia ‘moderna’ donde la capacidad de gobernar no puede sino provenir de un poder tecnocrático y estable, el término aparenta resolver las contradicciones de la transición democrática”. Baeza-Rodríguez,](#)

Cecilia, “Los discursos públicos sobre la gobernabilidad en Chile como relatos de acción pública: un enfoque cognitivista sobre la importación de las ideas”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Coloquios, 2008, disponible en: <http://nuevomundo.revues.org/index11042.html>.

⁸³ De La Maza, Gonzalo, “Los movimientos sociales en la democratización de Chile”, en Drake, Paul & Jaksic, Iván (Eds.), *El modelo chileno. Democracia y desarrollo en los noventa*, Santiago, LOM Ediciones, 2002, p. 388.

⁸⁴ Foxley, Alejandro, *La economía política de la transición: el camino del diálogo*, Op.cit., p. 143.

⁸⁵ Rojas Hernández, Jorge, Op.cit., p. 63.

⁸⁶ Sobre la crisis del sindicalismo chileno, ver especialmente: Drake, Paul, “El movimiento obrero en Chile: De la Unidad Popular a la Concertación”, *Revista de Ciencia Política*, Vol. 23, N° 2, 2003, pp. 148-158.

⁸⁷ How much participation —especially in a social and economic sense— are elites willing to concede the working classes? In a context of democratization, the Chilean political and economic elites were worried about threats to capital accumulation and governability than they were interested in labor’s participation. Frank, Volker, “Politics without policy: the failure of social concertation in democratic Chile, 1990-2000”, en Winn, Peter (Ed.), *Victims of the chilean miracle. Workers and Neoliberalism in the Pinochet Era, 1973-2002*, London, Duke University Press, 2004, p. 72.

⁸⁸ Drake, Paul, “El movimiento obrero en Chile: De la Unidad Popular a la

Concertación”, Op.cit., p. 154.

⁸⁹ Foxley, Alejandro, Logros y fracasos en la erradicación de la pobreza. El caso de Chile, Op.cit., p. 3.

⁹⁰ El temor al ‘ciclo populista’ surgía de la creencia en que un gobierno con altas promesas podía hacer concesiones sociales que crearían un boom económico de corto plazo, pero que finalmente crearían un déficit explosivo en la balanza comercial y de pagos, generando a su vez inflación y teniendo un efecto perjudicial sobre los más pobres. Véase: Weyland, Kurt, “La política económica en la nueva democracia chilena” en Drake, P. & Jaksic, I. (Eds.), El modelo chileno. Democracia y desarrollo en los noventa, Santiago, LOM Ediciones, 2002, p. 67.

⁹¹ La tasa de crecimiento del PIB en 1990 alcanzó al 3,0%, la inflación fue de un 27% y las exportaciones aumentaron un 2,89% por sobre el año 1989.

⁹² Otano, Rafael, Op.cit., p. 172.

⁹³ Arrate, Jorge & Rojas, Op.cit., p. 472.

⁹⁴ Foxley, Alejandro, La economía política de la transición: el camino del diálogo, Santiago, Dolmen, 1993, p. 61.

⁹⁵ El Mercurio, 08/04/1990. Citado por: Fazio, Hugo, El programa abandonado, Op.cit., p. 41.

⁹⁶ Weyland, Kurt, Op.cit., p. 67.

⁹⁷ Un interesante análisis crítico sobre la política de los consensos y la transición democrática chilena, puede encontrarse en: Salinas Figueredo, Darío, “La democracia en Chile. Los límites de la política en la transición”, Estudios Sociológicos, Vol. XXI, N° 002, 2003, pp. 309-330.

⁹⁸ Tironi, Eugenio, “La Concertación por la democracia chilena”, Revista Encuentro, N° 40, primavera 2006, p. 86.

⁹⁹ Declaraciones de Jorge Arrate, dirigente del Partido Socialista y ex-ministro de los gobiernos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Véase: Bravo, Patricia, “Jorge Arrate: El mercado se tragó a la renovación”, Punto Final, N° 646, agosto 2007.

¹⁰⁰ Entrevista al cientista político Carlos Huneeus. Véase: Frey, Rodrigo, “El autor del ‘Régimen de Pinochet’ disecta ahora la era Aylwin”, La Tercera, Reportajes, 24/07/2003. Por su parte, Óscar Godoy habla de un pacto tácito de democracia restringida.

¹⁰¹ Un estudio bastante completo sobre la política monetaria y cambiaria en Chile de los primeros gobiernos de la Concertación y con un Banco Central Autónomo orientado principalmente al control de la inflación, puede encontrarse en: Rojas, Patricio, “Políticas monetaria y cambiaria en Chile durante los noventa”, Estudios Públicos, N° 78, 2000, pp. 101-135.

¹⁰² En relación al proceso de la renovación socialista chilena, recomendamos el siguiente trabajo: Silva, Patricio, “Social Democracy, Neoliberalism and Ideological Change in the Chilean Socialist Movement, 1973-1992”, trabajo presentado en el XVII International Congress of the Latin American Studies Association, Los Ángeles, California. Septiembre 24-27, 1992. También: Lagos, Ricardo, “Dos conceptos clave de la renovación socialista en Chile”, Nueva Sociedad, N° 101, mayo-junio 1989, pp. 114-124. Sobre el tema, existe una tesis reciente disponible en formato digital: Sotomayor, Hugo, La Renovación Socialista y la contingencia en la década de los ochenta: ¿La construcción de ‘un nuevo’ imaginario político?, Santiago, Tesis de Licenciatura en Historia Universidad de Chile, 2006. Disponible en: <http://captura.uchile.cl/dspace/handle/2250/4383>.

¹⁰³ Este concepto se refiere a la relación económica que existe entre la explotación intensiva de recursos naturales y el declive de la producción de manufacturas debido al encarecimiento de los costos de producción internos. El tipo de cambio aumenta su valor con lo cual los productos industriales locales se hacen menos competitivos respecto de los importados. La causa principal de este fenómeno se halla en el flujo masivo de divisas y capitales en una economía. El concepto fue acuñado en 1977 por la revista The Economist al referirse a lo sucedido con la industria holandesa, en 1959, cuando se descubrieron yacimientos de hidrocarburos en el país. Véase: “The Dutch Disease”, The Economist, 26 noviembre 1977, pp. 82-83. Para un completo estudio sobre las características del comercio internacional, aunque con un enfoque bastante técnico, consultar: Krugman, Paul, Rethinking International Trade, MIT Press, 1994, Capítulo II, pp. 91-136.

¹⁰⁴ El encaje (unremunerated reserve requirement) se define como el sistema de depósito obligatorio para los fondos de inversión extranjeros. Es un requisito de reserva limitado a las entradas de fondos de inversión en Chile y destinado a reducir al mínimo las corrientes de carácter especulativo. El tratado de libre comercio entre Chile y Estados Unidos, firmado en 2003, ha restringido ostensiblemente la posibilidad de las autoridades económicas chilenas para utilizar esta herramienta y limitar la entrada de capitales ‘golondrina’ provenientes de Estados Unidos. Véase: P. Ojeda, “Encaje toma fuerza por caída

del dólar”, La Nación, Economía, 18/01/2008. Disponible en: http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20080117/pags/200801172: Un análisis sobre la forma de operar del encaje y sus resultados en la década de 1990, se halla en: Le Fort, Guillermo & Lehmann, Sergio, “El encaje y la entrada neta de capitales: Chile en el decenio de 1990”, Revista de la CEPAL, N° 81, diciembre 2003, pp. 33-64. Recomendamos ver también el informe del Fondo Monetario Internacional de 1998: Laurens, Bernard & Cardoso, Jaime, “Managing Capital Flows: Lessons from the Experience of Chile”, IMF working paper, N° 168, december 1998, pp. 1-53. Una defensa de la medida desde un punto de vista de la praxis económica, puede encontrarse en: Agosin, Manuel & Ffrench-Davis, Ricardo, “Managing capital inflows in Chile, Estudios de Economía, Vol. 24, N° 2, diciembre 1997, pp. 297-326.

¹⁰⁵ Weyland, Kurt, Op.cit., p. 71.

¹⁰⁶ Up to the mid-1970s, Chile had a tradition of capital controls. Since then policy makers have maintained a fairly open capital account, and recent policies, rather than a reversal, represent a significant move toward greater pragmatism. In a nutshell, the policy response during the current surge in the supply of foreign capital can be described as an attempt to discourage short-term inflows while maintaining liberal policies toward long-term inflows. Agosin, Manuel & Ffrench-Davis, Ricardo, Op.cit., p. 299.

¹⁰⁷ Weyland, Kurt, Op.cit., p. 71.

¹⁰⁸ El promedio de crecimiento de la economía chilena entre 1990 y 1996 fue de 6,6%, lo cual llevó el desempleo a un 5,3% durante el primer trimestre de 1998.

¹⁰⁹ Weyland, Kurt, Op.cit., p. 72.

¹¹⁰ Ibíd., p. 73.

¹¹¹ Un completo análisis sobre las transformaciones del modelo exportador chileno, se encuentra en la siguiente obra colectiva: Muñoz, Óscar (Ed.), Más allá del bosque: transformar el modelo exportador, Santiago, FLACSO-LOM ediciones, 2001.

¹¹² Lau, Lawrence J., Models of development: a comparative study of economic growth in South Korea and Taiwan, San Francisco, Calif., ICS Press, Institute for Contemporary Studies, 1986.

¹¹³ Weyland, Kurt, Op.cit., p. 75.

¹¹⁴ Ibíd., p. 75. Desde 1993 hasta fines del año 2008, Chile había suscrito 19 acuerdos comerciales con 55 países. Estos incluyen tratados de libre comercio, acuerdos de asociación y acuerdos de complementación económica. Fuente: DIRECON (Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales).

¹¹⁵ Uno de los autores que más ha insistido sobre la inviabilidad y poca sustentabilidad del modelo de desarrollo chileno ha sido Marcel Claude, economista y ex miembro del departamento de estudios del Banco Central de Chile. Claude, Marcel, “Las miserias del desarrollo chileno”, en Drake, P. & Jaksic, I. (Eds.), El modelo chileno. Democracia y desarrollo en los noventa, Santiago, LOM Ediciones, 2002, pp. 155-165.

¹¹⁶ Óscar Muñoz dedica un extenso capítulo de su obra a explicar las

características de la gobernabilidad entendida como la conformación de una gran coalición multipartidista de centro-izquierda abocada a consolidar una institucionalidad económica inserta en la globalización, pero con una preocupación importante por la equidad social. Muñoz, Óscar, El modelo económico de la Concertación 1990-2005 ¿Reformas o cambio?, Op.cit., pp. 88-89.

¹¹⁷ Manuel Castells al referirse al modelo económico aplicado por la Concertación lo define como ‘democrático liberal incluyente’ para diferenciarlo de aquel del régimen militar, caracterizado como: ‘liberal autoritario excluyente’. Castells, Manuel, Globalización, desarrollo y democracia: Chile en el contexto mundial, Santiago, Fondo de Cultura Económica Chile, 2005, pp. 57-58.

¹¹⁸ Hemos realizado un análisis sobre el modelo económico chileno en democracia, centrado especialmente en sus desafíos futuros. Gárate, Manuel, “El modelo económico chileno en democracia”, Revista Encuentro, N° 40, primavera 2006, pp. 71-81. Disponible en: <http://www.cubaencuentro.com/revista/content/download/32658/278750/version/3/file/40mg>. Del mismo autor: Gárate, Manuel, “Chili na de dictatuur (1990-2008): een vrije markteconomie zonder oog voor het sociale”, Vrede, N° 390, marzo-abril 2008, pp. 31-33.

¹¹⁹ Durante la década de 1980, las autoridades económicas de la dictadura hablaban de la ‘teoría del chorreo’, para referirse a la mejora en la equidad producto únicamente del crecimiento económico. De lo que se trataba era de justificar un ‘rebalse’ de riqueza de los sectores económicos más favorecidos por el modelo, el cual terminaría por beneficiar a toda la población. Ricardo Ffrench-Davis ha estimado como mediocres las cifras de crecimiento promedio de la economía chilena durante el régimen militar, entre 1974 y 1989, las que no superan el 2,9%. Ffrench-Davis, Ricardo, “La distribución del ingreso en Chile: deuda pendiente”, Quórum: Revista de pensamiento iberoamericano, N° 14, 2006, pp. 153-160.

¹²⁰ De acuerdo con Ricardo Ffrench-Davis, al inicio de los años setenta, Chile se situaba entre los países de América Latina con mayor desarrollo social. El nivel educacional, el sistema nacional de salud, la organización para la construcción de viviendas populares y un programa masivo de alimentación para escolares eran los más adelantados de la región. Asimismo, se había desarrollado un amplio segmento de clase media, aunque concentrado inicialmente en áreas urbanas. Las mejoras se extendieron también a los obreros organizados sindicalmente al sector rural, fenómeno asociado a la reforma agraria realizada entre 1965 y 1973. Véase: Ffrench-Davis, Ricardo, Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad, Op.cit., p. 259.

¹²¹ En 1990, el 38,6% de los chilenos recibía un ingreso por debajo de la línea de pobreza. Esta cifra disminuyó al 23,2% en 1996. La extrema pobreza (indigencia) bajó de un 12,9% en 1990 a un 5,8% en 1996. Cifras obtenidas de: Weyland, Kurt, Op.cit., p. 81 (fuente: Evolución de la pobreza e indigencia en Chile, 1987-1996. Ministerio de Planificación y Cooperación, MIDEPLAN). Autores más críticos como Jacobo Schatan han cuestionado fuertemente estas cifras oficiales, insistiendo en que las cifras de pobreza al menos doblan lo que las estadísticas oficiales muestran. Revisar: Schatan, Jacobo, “Distribución del ingreso y pobreza en Chile”, Revista Polis, Vol. 4, N° 11, 2005, pp. 429-457.

¹²² Una posición completamente distinta es la sostenida por los especialistas del Instituto Libertad y Desarrollo, quienes argumentan que la distribución del ingreso incluso mejoró con la política de privatizaciones de la década de 1980. Este think tank, ligado a las corrientes libertarias norteamericanas, fue creado por el ex-Ministro de Hacienda del régimen militar, Hernán Büchi. Véase: Editorial, “Cómo las privatizaciones mejoraron la distribución del ingreso”, Temas Públicos de Libertad y Desarrollo, N° 735, 12/08/2005, pp. 1-4.

¹²³ Este concepto fue popularizado en los medios de prensa por Andrés Allamand, uno de los dirigentes más importantes de la derecha chilena y del

partido político Renovación Nacional. Con él quiso identificar, en 1999, a aquellos poderes no institucionalizados que operan e influyen en la política chilena, refiriéndose especialmente a ciertos grupos económicos, al diario El Mercurio y a las fuerzas armadas. Consultar: Otano, Rafael, Op.cit., p. 356. También: “Andrés Allamand, el nuevo halcón de la Alianza”, Qué Pasa, 28/04/2007.

¹²⁴ Ffrench-Davis, Ricardo, Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad, Op.cit., p. 267.

¹²⁵ Weyland, Kurt, Op.cit., p. 83.

¹²⁶ Un análisis crítico de la sustentabilidad del modelo económico exportador chileno se encuentra en: Quiroga, Rayén (Ed.), El tigre sin selva. Consecuencias ambientales de la transformación económica de Chile: 1974-1993, Santiago, Instituto de Ecología Política, 1994, 490 p. En la misma línea de pensamiento, pero desde un punto de vista del análisis económico, Marcel Claude critica las políticas de los gobiernos de la Concertación, especialmente respecto de sus efectos sobre el medio ambiente. En: Claude, Marcel, Una vez más la miseria: ¿Es Chile un país sustentable?, Santiago, LOM Ediciones, 1997.

¹²⁷ Informe CEPAL, Una década de desarrollo social en América Latina, 1990-1999, Santiago, CEPAL, 2004, p. 83.

¹²⁸ Arrate & Rojas, Op.cit., p. 520.

¹²⁹ Sobre las dificultades y contradicciones de la transición política chilena, recomendamos la siguiente obra colectiva: Menéndez-Carrión, Amparo,

Joignant, Afredo & Garretón, Manuel Antonio, La caja de Pandora: El retorno de la transición chilena, Santiago, Planeta/Ariel, 1999.

¹³⁰ Conferencia del ex Ministro de Hacienda del régimen militar, Sergio de Castro (1994). De Castro, Sergio, “Un camino de crecimiento para Chile”, Estudios Públicos, N° 53, verano 1994, pp. 13-35.

¹³¹ José Piñera fue Ministro del Trabajo y Previsión Social (1978-1980) durante el régimen militar y propulsor de la reforma laboral y del sistema privado de pensiones chileno.

¹³² Russia does not need a Pinochet, but it does need the Chilean economic model. For Russia to grow at self-sustaining annual rates of seven to ten percent for a decade or two —the only way it can pull itself out of poverty— it needs much more economic liberalization. Four reforms inspired by Chile’s dramatic turnaround can help Russia out of its doldrums: pension privatization, tax reform, radical deregulation of coddled industries, and the replacement of the ruble with the euro. The indispensable element is not a strong four-star general but a team of determined economic policymakers who know that freedom works. Piñera, José, “A Chilean Model for Russia”, Foreign Affairs, september/october 2000, disponible en: <http://www.foreignaffairs.org/20000901faessay76/jose-pinera/a-chileanmodel-for-russia.html>.

¹³³ De acuerdo con David Llistar, los dos países más citados como ejemplos de ‘buena política económica’ en la región a comienzos de la década de 1990, fueron Costa Rica y Chile. Llistar, David, “El qué, el quién, el cómo y el por qué del Consenso de Washington”, Observatori del Deute e la Globalització, noviembre 2002, 11 p., disponible en: <http://www.odg.cat/documents/publicacions/CW-David-NOV02.pdf>.

[134](#) [Fernandois, Joaquín, Mundo y fin de mundo. Chile en la política mundial 1900-2004, Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2005, p. 524.](#)

[135](#) [Existe, sin embargo, otra crítica surgida desde la CEPAL a las recomendaciones del Consenso de Washington, y que se origina en su incapacidad de incorporar el componente social en las reformas. En: Ocampo, José Antonio, “Más allá del Consenso de Washington: Una agenda de desarrollo para América Latina”, Estudios y Perspectivas \(CEPAL\), N° 26, 2005, pp. 1-28.](#)

[136](#) [Williamson, John \(Ed.\), Latin American adjustment: How much has happened?, Washington, D.C., Institute for International Economics 1990, 445 p. Ver también del mismo autor: Williamson, John, “The Washington Consensus revisited”, en Emmerij, L. \(Ed.\), Economic and Social Development Into the XXI Century, Inter-American Development Bank, 1997, pp. 48-80.](#)

[137](#) [Efectivamente, John Williamson \(1990\) enunció el decálogo del Consenso, enumerando los requisitos indispensables para el desarrollo económico que, a finales de los años ochenta, eran defendidos por la inmensa mayoría de los economistas del Fondo Monetario Internacional \(FMI\), del Banco Mundial y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Véase: Bustelo, Francisco, Desarrollo económico: del consenso al Post-Consenso de Washington y más allá, documento del Departamento de Economía Aplicada, Universidad Complutense de Madrid, 2003, 12 p.; también: Santiso, Carlos, “The contentious Washington Consensus: reforming the reforms in emerging markets”, Review of International Political Economy, Vol. 11, N° 4, Octubre 2004, pp. 828-844.](#)

[138](#) [Fazio, Hugo, Mapa actual de la extrema riqueza al año 2005, Santiago, LOM Ediciones, 2005, p. 37.](#)

[139](#) [Paul Krugman es economista del MIT y experto en finanzas y comercio](#)

internacional. Recibió el Premio Nobel de Economía al año 2008.

¹⁴⁰ Krugman, Paul, “Dutch Tulips and Emerging Markets”, Foreign Affairs, Vol. 14, N° 4, 1995, pp. 28-44.

¹⁴¹ Véase: Girón, Alicia, “International Monetary Fund: From Stability to Instability The Washington Consensus and structural reforms in Latin America”, en Lechini, G. (Ed.), Globalization and the Washington Consensus: its influence on democracy and development in the south, Buenos Aires, CLACSO, junio 2008, pp. 43-56.

¹⁴² In this new dynamic, The IMF is merely an observer of markets, an international lender of last resort, and adviser of governments in order to restrict monetary, fiscal and financial policy in accordance with the new international order. *Ibíd.*, p. 48.

¹⁴³ Una interesante revisión crítica sobre los efectos del Consenso de Washington en las economías latinoamericanas, así como de la evolución del papel del Estado en los paradigmas económicos desde la década de 1940, puede encontrarse en el artículo de Enrique Iglesias, Secretario Ejecutivo de la CEPAL y ex Presidente del BID. Iglesias, Enrique, “El papel del Estado y los paradigmas económicos en América Latina”, Revista de la CEPAL, N° 90, diciembre 2006, pp. 7-15.

¹⁴⁴ Uno de los estudios más completos sobre la crisis argentina de 2001 puede encontrarse en: Quattrocchi-Woisson, Diana (Ed.), Argentine. Enjeux et racines d’une société en crise, París, Editions-Le Félin, 2003, 293 p. Desde la mirada cinematográfica, y con una propuesta de denuncia de las élites políticas argentinas, nos parece igualmente interesante el trabajo documental del realizador Fernando Solanas, Memoria del Saqueo (2003). Véase:

http://www.pinosolanas.com/memoria_info.htm. Para una explicación estrictamente económica de la crisis, recomendamos el siguiente artículo: Cortés Conde, Roberto, “La crisis argentina de 2001-2002”, Cuadernos de Economía, Vol. 40, N° 121, 2003, pp. 762-767.

¹⁴⁵ Le ‘miracle’ économique dont se vantait à l’époque le Président Menem et dont se félicitait le Fonds Monétaire International a viré au mirage au bout de quelques années, puis au cauchemar. La libéralisation de l’économie sans recherche d’effets compensatoires et l’abandon consécutif de l’idée même d’un Etat régulateur ont provoqué la mise en place d’un véritable piège. D’un côté le maintien de ce plan aggravait la situation, de l’autre son abandon impliquait un coût social et économique immédiat plus élevé que la poursuite du maintien de ce plan. Le court terme l’emportant sur le moyen terme, la fuite en avant tenant lieu de politique, la sortie de ce plan ne pouvait avoir lieu que dans la panique, c’est qui s’est passé à la fin de l’année 2001. Salama, Pierre, “L’économie argentine et l’endettement: chronique d’une crise annoncée”, en Quattrocchi-Woison, D. (Ed.), Op.cit., p. 287.

¹⁴⁶ Corbo, Vittorio, “Argentina: su crisis y sus lecciones”, El Mercurio, enero 2002. Vittorio Corbo fue también Presidente del Banco Central de Chile (2003-2007).

¹⁴⁷ Un interesante análisis contrastado sobre la situación económica de los países de América Latina durante de la década de 1990, y sus dificultades para equilibrar desarrollo democrático y económico, se encuentra en: Ocampo, José Antonio & Martín, Juan (Eds.), Une décennie d’ombres et de lumières. L’Amérique latine et les Caraïbes dans les années 90, CEPAL, agosto 2003.

¹⁴⁸ Son decidoras las palabras de Sergio Micco, dirigente de la Democracia Cristiana, abogado, filósofo y cientista político, quien ha sido crítico de la política económica de la Concertación: “...si te atreves a cuestionar el modelo neoliberal, tus ideas, por razonadas y documentadas que estén, son

estigmatizadas como cavernarias, estatistas, populistas, románticas, nostálgicas, todo un amable silabario que nos dedica gente incluso de la Concertación”. Véase: Arrate y Rojas, Op.cit., p. 443.

¹⁴⁹ Fernandois, Joaquín, Mundo y fin de mundo. Chile en la política mundial 1900-2004, Op.cit., p. 523.

¹⁵⁰ De acuerdo con la definición del cientista político Alfredo Joignant, “El ideal de un gobierno tecnocrático es el de una administración racional, apegada a la lógica del cálculo costo-beneficio, de la eficacia y eficiencia de las políticas públicas, en aras de alcanzar metas objetivas y evaluables: tal es la definición formal del bien público así perseguido. Un gobierno de estas características no requiere necesariamente de la política, ni menos de los partidos, sino de un simple uso vertical de la razón”. En: Joignant, Alfredo, “Los doctores de la República”, La Tercera, N° 21 de noviembre, 2008, p. 4. Sobre la influencia de los tecnócratas en la administración del Estado, véase: Toenig, Jean-Claude, L'ère des technocrates: le cas des ponts et chaussées, París, L'Harmattan, 1987.

¹⁵¹ La noción de ‘technopols’, para referirse a los técnicos-políticos liberales que han participado de los diferentes gobiernos latinoamericanos especialmente durante la década de 1990, fue desarrollada por Jorge Domínguez en la siguiente obra colectiva: Domínguez, Jorge I., Technopols: freeing politics and markets in Latin America in the 1990s, University Park, Pennsylvania State University Press, 1997.

¹⁵² Montecinos, Verónica, “Notas sobre la evolución e influencia de la tecnocracia económica en Chile”, en Estrada Avarez, Jairo (Ed.), Intelectuales, tecnócratas y reformas neoliberales en América Latina, Unibiblos - U. Nacional de Colombia, 2005, p. 167.

¹⁵³ Teichman, Judith, Op.cit., p. 87. Sobre la trayectoria y el papel de los Think Tanks y los centros de estudio en Chile, consultar: Gárate, Manuel, “Think Tanks y Centros de Estudio. Los nuevos mecanismos de influencia en el Chile post-autoritario”, en De Cea, Maite, Díaz, Paola & Kerneur, Geraldine (Eds.), ¿De país modelado a país modelo? Una mirada sobre la política, lo social y la economía, Santiago, GRESCH, ICSO-UDP, INAP Universidad de Chile, Universidad Bolivariana, 2008, pp. 209-230.

¹⁵⁴ Las llamadas reformas de primera generación son aquellas propuestas principalmente por el FMI, y enfocadas en los cambios necesarios para lograr estabilidad macroeconómica, como es el caso de la liberalización del tipo de cambio y las tasas de interés. Fuente: The Bretton Woods Project: <http://www.brettonwoodsproject.org/glossary/item.shtml?x=344981>.

¹⁵⁵ De Gregorio, José, “Crecimiento económico en Chile: evidencia, fuentes y perspectivas”, Estudios Públicos, N° 98, 2005, p. 44.

¹⁵⁶ Eduardo Aninat, Ministro de Hacienda durante el gobierno de Eduardo Frei-Ruiz-Tagle (1994-2000), fue nombrado subdirector gerente del FMI en diciembre de 1999, desempeñándose hasta junio de 2003. Aninat también había ocupado anteriormente importantes cargos en el Banco Mundial y en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Por su parte, Nicolás Eyzaguirre, Ministro de Hacienda del gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), fue nombrado en diciembre de 2008 como director del Departamento de Hemisferio Occidental del FMI, cargo que ejerce hasta el momento de redactarse este capítulo (febrero 2009).

¹⁵⁷ Fazio, Hugo, El programa abandonado: Balance económico social del gobierno de Aylwin, Op.cit., p. 26.

¹⁵⁸ Sobre la idea de democracia protegida, ver el Capítulo IV, específicamente el punto 4.5.

¹⁵⁹ Sobre la evolución de los conceptos en economía y su relación con el discurso de las políticas públicas, consultar: De La Garza, Enrique (Ed.), *Ciencia económica: Transformación de conceptos*, Ciudad de México, Siglo XXI, 1998, 141 p. Desde una mirada crítica, consúltese también: Bihr, Alain, *La Novlangue néolibérale. La rhétorique du fétichisme capitaliste*, París, Éditions Page deux, 2007.

¹⁶⁰ Algunos autores y economistas como Ricardo Ffrench-Davis hablan incluso de neoestructuralismo para referirse a esta corriente.

¹⁶¹ Un ejemplo claro de esta posición se encuentra en la formación del think yank concertacionista Corporación Expansiva, el cual reúne a un selecto grupo de técnicos formados en el extranjero y con experiencia en gestión pública durante los gobiernos de la Concertación. En esta agrupación, encontramos profesionales de diversos partidos políticos de la coalición, pero que comparten una misma visión sobre la conducción económica y la gestión del Estado, especialmente en lo relacionado al estudio y diseño de políticas públicas.

¹⁶² Documento-Expansiva, “Somos más, queremos más, podemos más”, Expansiva, septiembre 2006, p. 10, disponible en: <http://www.expansiva.cl/media/archivos/20070816114412.pdf>.

¹⁶³ Montero, Cecilia, “Empresarios: ¿Demisión o Triunfo?”, *Asuntos Públicos (Informes)*, N° 79, 24/06/2001, p. 2.

¹⁶⁴ Véase: Manzi, Jorge & Catalán, Jorge (1998), “Los cambios en la opinión pública”, en: Chile en los noventa, Cristian Toloza y Eugenio Lahera (comps.), Santiago, Dolmen, 1998.

¹⁶⁵ Entrevista con Alejandro Foxley. En: Arancibia Clavel, Patricia, Cita con la Historia, Op.cit., pp. 628-629.

¹⁶⁶ Esta es la tesis sostenida por el historiador y ensayista conservador chileno Mario Góngora en su ya clásica obra sobre el Estado chileno. Góngora, Mario, Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX, Santiago, Ed. La Ciudad, 1981.

¹⁶⁷ D’Alessandri à Pinochet, c’est l’ensemble de l’échiquier politique chilien qui est happé par a passion du futur et des politiques économiques de l’impossible. Du socialisme messianique d’Allende à l’utopie technocratique des Chicago Boys, le discours et la pratique économique demeurent empreints de la même volonté consistant à vouloir délimiter, à travers les mots et les chiffres, des projets et des programmes économiques rivés sur l’horizon d’une ‘révolution imminente’. Santiso, Javier, Amérique Latine. Révolutionnaire, libérale, pragmatique, Paris, Éditions Autrement, 2005, p. 73.

¹⁶⁸ Le Chili, un pays guidé par des économistes dévoués au laisser-faire, montrera au monde une autre voie en nationalisant de fait tout son système bancaire. Dans l’opposition, alors qu le dirigeants des derniers gouvernements de l’époque de Pinochet arpentent sans complexe les arcanes de réformes, combinant sutures libérales et soudures interventionnistes, nombre d’acteurs engagé de profondes autocritiques en matière aussi bien de pensée économique que d’action politique. Ibid., p. 74.

¹⁶⁹ Tironi, Eugenio, “La Concertación por la democracia chilena”, Op.cit., p. 85.

[170 Entrevista a René Cortázar, ex Ministro del Trabajo del gobierno de Patricio Aylwin y economista ligado a CIEPLAN. En: Arancibia Clavel, Patricia, Cita con la Historia, Op.cit., p. 534.](#)

[171 Véase: Arellano, José Pablo, “Del déficit al superávit fiscal: razones para una transformación estructural en Chile”, Estudios Públicos, N° 101, 2006, pp. 165-186. La regla de política fiscal que se introdujo \(en 2001\) en base al 1% del PIB de superávit estructural amplió la base de ingresos que se estabiliza, y además fijó un marco a la política contracíclica. Lo que se hace es reforzar la disciplina fiscal a través de reglas que impiden sobrepasar los límites de gasto impuestos por la regla. La supuesta ‘automaticidad’ de la regla permite, según sus creadores, superar las situaciones coyunturales derivadas de los cambios en las mayorías políticas. Se aprecia aquí claramente una crítica a la actividad política \(discrecional\), la cual debiera quedar supeditada a los criterios técnicos de largo plazo, emanados de las autoridades económicas. La norma de superávit fiscal se convirtió en ley de responsabilidad fiscal en el año 2006. Una crítica bien fundamentada a la regla del superávit fiscal, desde el punto de vista del abandono de los objetivos sociales del Estado, se encuentra en: Fazio, Hugo, TLC: El amarre del modelo, Santiago, LOM Ediciones, 2004.](#)

[172 Ibíd., p. 166.](#)

[173 La Constitución de 1980 confirmó las modificaciones del Decreto Ley N° 1263 de 1975 sobre las finanzas del Estado que, a su vez, modificaron las normativas del antiguo Decreto con Fuerza de Ley N° 47, que regía desde 1959. Véase: Arellano, Op.cit., p. 171.](#)

[174 Ibíd., p. 171.](#)

¹⁷⁵ De Gregorio, José, “Crecimiento económico en Chile: evidencia, fuentes y perspectivas”, Op.cit., p. 42. José de Gregorio, economista vinculado a CIEPLAN, fue Ministro de Economía (2000-2001) y es Presidente del Banco Central desde diciembre de 2007.

¹⁷⁶ Se reconoce también el aporte del Fondo del Cobre, creado en 1987, para evitar la influencia de las oscilaciones del precio de este metal en el presupuesto público. La idea básica era ahorrar los ingresos provenientes de su venta en los tiempos de precios altos y ponerlos en instrumentos internacionales de inversión, para posteriormente ser utilizados en los períodos de baja de precio. El Fondo del Cobre evita expandir los gastos más allá de lo sustentable en el mediano plazo y proporciona financiamiento para darles continuidad cuando los precios bajan.

¹⁷⁷ Arellano, Op.cit., p. 178.

¹⁷⁸ Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Se trata de una institución internacional intergubernamental que reúne a los países más industrializados de economía de mercado. En la OCDE, los representantes de los 30 países miembros se reúnen anualmente para intercambiar información y armonizar políticas con el objetivo de maximizar su crecimiento. La entidad tiene sus raíces en 1948 en la Organización para la Cooperación Económica Europea que tuvo el objetivo de administrar el Plan Marshall para la reconstrucción europea tras la Segunda Guerra Mundial. En 1960, cuando el Plan Marshall había cumplido su cometido, los países miembros acordaron invitar a Estados Unidos y Canadá a la creación de una organización que coordinara las políticas entre los países occidentales. La nueva organización recibió el nombre que lleva actualmente y se determinó que tuviera sede en París. Véase: Archivo de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Disponible en: http://www.bcn.cl/carpeta_temas_profundidad/temas_profundidad.2007-07-25.4772415999.

¹⁷⁹ La clef d'une telle réussite, tout comme celle des pairs du Chili au sein de l'OCDE, tient avant tout à la qualité des institutions et des hommes qui se sont succédés aux commandes des instances économiques. Comme la Norvège, le Chili s'est doté d'instruments et d'institutions budgétaires exemplaires. Les deux pays disposent ainsi de fonds souverains, ou d'équivalents, qui fonctionnent en toute transparence, avec des règles claires (...). Le cas du Chili reste exceptionnel. Preuve de cette trajectoire exemplaire, le pays est en voie d'admission à l'OCDE. Ce pays émergent pourrait agir comme un facteur d'émulation pour d'autres, tout en contribuant à démythifier la malédiction des matières premières pour les pays en développement. Havro, Gøril & Santiso, Javier, "La malédiction des matières premières?" Rèperes. Centres de développement de l'OCDE, N° 75, septembre 2008, p. 2.

¹⁸⁰ Tironi, Eugenio, "La voluntad utópica", El Mercurio, 04/10/2002. Disponible en: http://www.eugeniotironi.cl/inicio/columnas_detalle.php?id_columna=182.

¹⁸¹ Muñoz, Óscar, El modelo económico de la Concertación 1990-2005 ¿Reformas o cambio?, Op.cit., p. 81.

¹⁸² Santiso, Javier, Amérique Latine. Révolutionnaire, libérale, pragmatique, Op.cit., p. 82.

¹⁸³ Possibilistes dans leur retour vers la démocratie, les chiliens le sont aujourd'hui également dans leur vie démocratique, faite de débats (parfois vifs), de conflits, de consensus, d'arguments et de contre arguments, une vie politique banalisée qui s'écrit non pas dans la poésie lyrique des grands élans révolutionnaires, mais dans une prose politique plus contenue du possible. Ibid., p. 82.

¹⁸⁴ Tironi, Eugenio, El cambio está aquí, Santiago, La Tercera Mondadori, 2002,

p. 90.

¹⁸⁵ Tironi, Eugenio, “El Chile que viene ya llegó”, Revista Rocinante, 16/04/2002. Disponible en: http://www.eugeniotironi.cl/inicio/columnas_detalle.php?id_columna=210.

¹⁸⁶ En este caso, nos referimos a la izquierda extraconcertacionista, es decir, aquella que no participa de la coalición gobernante (como el Partido Comunista y la Izquierda Cristiana) o que alguna vez fue parte de ella (Partido Humanista). También han defendido esta tesis algunos sectores al interior de la Concertación, especialmente del Partido Socialista e incluso de la Democracia Cristiana, pero que han permanecido al interior del conglomerado de gobierno.

¹⁸⁷ Es necesario recordar que el general Pinochet continuó en el cargo de Comandante en Jefe del Ejército desde marzo de 1990 hasta marzo de 1998, cuando asumió como senador vitalicio hasta el momento de su arresto en Londres el 16 de octubre del mismo año.

¹⁸⁸ Fazio, Hugo, El programa abandonado: Balance económico social del gobierno de Aylwin, Op.cit., p. 175.

¹⁸⁹ Entrevista a Jorge Arrate, ex-Ministro de Educación (1992-1994) y del Trabajo (1994-1998). En: Jorge Arrate: “Sin pacto no hay por qué votar por el mal menor en segunda vuelta”, El Clarín de Chile, 15/02/2009. Disponible en: http://www.elclarin.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=15140&Itemid=2729#.

¹⁹⁰ El libro vendió más de 30.000 ejemplares durante el primer año, lo cual

[constituye todo un récord para el pequeño mercado editorial chileno.](#)

¹⁹¹ [Moulian, Tomás, Chile actual. Anatomía de un mito, Santiago, LOM ediciones, 1997, p. 37.](#)

¹⁹² [Este tema ha sido tratado también con profundidad por Tomás Moulian en otra obra publicada en 1998. Moulian, Tomás, El consumo me consume, Santiago, LOM ediciones, 1998.](#)

¹⁹³ [Sobre la desafección de los jóvenes chilenos y latinoamericanos, en general, con respecto de sus sistemas políticos, recomendamos el siguiente trabajo: Hopenhayn, Martín, “Inclusión y exclusión social en la juventud latinoamericana”, Pensamiento Iberoamericano, N° 3, 2a época, 2008, pp. 49-71.](#)

¹⁹⁴ [Es necesario recordar, como bien lo ha establecido Cristián Parker que, en Chile, la abstención electoral, no concurrencia a las urnas, es penada por la ley para los que está inscritos en el registro. Sin embargo, la inscripción en los Registros Electorales es voluntaria, de tal manera que la obligación punitiva de votar puede ser eludida por la no inscripción de los Registros Electorales. Parker, Cristián, “Abstencionismo, juventud y política en Chile actual”, Estudios Avanzados Interactivos. Revista Idea, Vol. 2, N° 4, 2001, pp. 1-23. Disponible en: \[http://web.usach.cl/revistaidea/html/revista%204/pdf/C_Parker.pdf\]\(http://web.usach.cl/revistaidea/html/revista%204/pdf/C_Parker.pdf\). Otros autores como Patricio Navia sostienen que la abstención electoral en Chile no ha sufrido mayores cambios en una mirada de largo plazo, pues la alta participación en 1988 y 1989 habría sido una situación excepcional producto de 17 años de dictadura y falta de participación social. Navia, Patricio, “Participación electoral en Chile, 1988-2001”, Revista de Ciencia Política, Vol. 24, N° 1, 2004, pp. 81-103.](#)

¹⁹⁵ [Desde la otra trinchera, el sociólogo, ensayista y ex Director de la Secretaría](#)

de Comunicaciones del gobierno de Patricio Aylwin, Eugenio Tironi, ha criticado fuertemente esta tesis al considerarla propiamente conservadora, incluso viniendo desde la izquierda: “A partir de lo anterior toma cuerpo, incluso en círculos izquierdistas y progresistas, un discurso clásicamente conservador. Este se caracteriza por mirar con una sospecha cada vez más inocultable el nivel y el ritmo del progreso económico alcanzado por Chile en la década de 1990, así como el grado de libertad que han conquistado los chilenos y chilenas”. Tironi, Eugenio, La irrupción de las masas y el malestar de las elites, Santiago, Editorial Grijalbo, 1999, p. 51.

¹⁹⁶ Véase: Salazar, Gabriel & Pinto, Julio, Historia Contemporánea de Chile III. La economía: mercados, empresarios y trabajadores., Santiago, LOM, 2002, p. 61. En esta misma línea crítica, se encuentra el trabajo de Guillaudat y Mouterde. Véase: Guillaudat, Patrick & Mouterde, Pierre, Los movimientos sociales en Chile 1973-1993, Santiago, LOM ediciones, 1998 (ver especialmente Cap. IV).

¹⁹⁷ *Ibíd.*, p. 60.

¹⁹⁸ Nos referimos principalmente al Instituto Libertad y Desarrollo (www.lyd.cl) y al Centro de Estudios Públicos (www.cepchile.cl), ambos muy cercanos a los círculos empresariales y políticos conservadores chilenos. En el capítulo VI de este trabajo, tratamos con profundidad el tema de los think tanks en Chile.

¹⁹⁹ Büchi, Hernán, “¿Fracaso del Modelo?”, El Mercurio, Economía y Negocios, 01 octubre 2002, p. 2.

²⁰⁰ Entrevista a Carlos Cáceres, ex-Ministro del Hacienda y de Interior del régimen militar. En: Correa, Raquel, “Si fuera Ministro de Hacienda...”, El Mercurio, Reportajes, 14/04/2002.

[201](#) Nos hemos referido a Portugal (US\$ 22.000 per cápita en 2008), porque regularmente en el debate económico chileno, este país ha sido mencionado como una meta a la cual Chile puede aspirar en el corto plazo (año 2020), siempre y cuando mantenga tasas de crecimiento de su economía no menores al 6% anual. Véase: Engel, Eduardo, “Chile vs. Estonia: mito y realidad”, La Tercera, Reportajes, 16/12/2007. También: Rivera, Raúl, “Portugal en la mira. ¿Es posible alcanzar el desarrollo el 2015?”, La Nación, sección Economía, 01/09/2008.

[202](#) Larroulet, Cristián, “Chile más allá del bicentenario: hacer realidad el sueño del desarrollo”, documento LyD, 2005, p. 2.

[203](#) Correa, Raquel, Op.cit., p. 1.

[204](#) Larroulet, Cristián, “La lucha contra el populismo: el caso de Chile”, Serie Informe Económico LyD, N° 172, 2006, pp. 1-22.

[205](#) Larroulet, Cristián, “Chile más allá del bicentenario: hacer realidad el sueño del desarrollo”, Op.cit., p. 8.

[206](#) Larraín, Felipe, “Más allá de la crisis”, El Mercurio, 10/03/2009, p. 2.

[207](#) Entrevista a Hernán Büchi. En: “Hernán Büchi responde a las críticas al modelo económico”, Revista Libertad y Desarrollo, N° 158, octubre 2005, p. 15.

²⁰⁸ Los detalles de la transmisión del mando de la Comandancia en Jefe del Ejército fueron profusamente tratados por la prensa chilena. Como ejemplo, consúltese: “Pinochet deja la comandancia del Ejército”, La Tercera, sección política, 10/03/2008.

²⁰⁹ Wilde, Alexander, “Irruptions of Memory: Expressive Politics in Chile’s Transition to Democracy”, Journal of Latin American Studies, Vol. 31, N° 2, 1999, pp. 473-500.

²¹⁰ Ce sont bien ces retours sur l’objet transitionnel qu’il convient d’analyser, notamment à partir de 1998, dans le sillage de l’affaire Pinochet au Royaume-Uni, puisque c’est à partir de cette année que devient possible une expansion graduelle du champ du dicible, du pensable et du publiable. L’année 1998 marque bien l’émergence de moments politiques d’élucidation, lesquels sont autant d’occasions de formuler de nouvelles approches sur cet objet problématique, mais aussi pour mener des entreprises critiques au moyen de nouveaux essais. Joignant, Alfredo, “La politique des ‘transitologues’: Lutttes politiques, enjeux théoriques et disputes intellectuelles au cours de la transition chilienne à la démocratie”, Politique et Sociétés, Vol. 24, N° 2-3, 2005, p. 38.

²¹¹ Por primera vez, la Concertación alcanzó apenas el 50% de las preferencias electorales, siendo que había superado en facilidad esta cifra en todas las anteriores elecciones presidenciales, legislativas y municipales llevadas a cabo desde 1989.

²¹² Arrate, Jorge & Rojas, Eduardo, Op.cit., p. 494. El informe completo del año 1998: Desarrollo Humano en Chile-1998. Las paradojas de la modernización, se encuentra disponible en la siguiente dirección: <http://www.desarrollohumano.cl/eleccion1998.htm>.

²¹³ PNUD, Informe Desarrollo Humano en Chile - Año 1998, Santiago, PNUD, 1998, p. 49, 51.

²¹⁴ Alfredo Joignant se refiere a estos individuos como ‘transitólogos’, quienes pasan del mundo de las ciencias sociales a la política y viceversa, y que además teorizan sobre la materia siendo que no queda clara la frontera entre su interés científico y político performativo. Dentro de este grupo incluye a políticos como José Joaquín Brunner (sociólogo), Genaro Arriagada (cientista político), Eugenio Tironi (sociólogo), Edgardo Boeninger (ingeniero), Enrique Correa (filósofo), Eugenio Lahera (abogado y doctor en asuntos públicos), Ernesto Ottone (sociólogo), Ángel Flisfisch (sociólogo) e Ignacio Pérez Walter (cientista político). Todos ellos han ocupado cargos de responsabilidad política en los gobiernos de Patricio Aylwin, Eduardo Frei o Ricardo Lagos. Véase: Joignant, Alfredo, Op.cit., p. 36, 41.

²¹⁵ El documento, que aglutinó sesenta firmantes, tomó el carácter de un manifiesto colectivo entre quienes estaban a favor de la transición, tal como se había llevado a cabo desde 1990. Véase: Renovar la Concertación. La fuerza de nuestras ideas, Santiago, mayo de 1998.

²¹⁶ Brunner, José Joaquín, “Malestar en la sociedad chilena: ¿de qué, exactamente, estamos hablando?” Estudios Públicos, N° 72, primavera 1998, p. 191, 192.

²¹⁷ Este segundo documento firmado por 140 personalidades de la Concertación se tituló: La gente tiene razón. Reflexiones sobre las responsabilidades de la Concertación en los tiempos presentes. Un resumen y análisis del mismo puede encontrarse en la edición del diario La Época del 14/06/1998.

²¹⁸ Arrate, Jorge & Rojas, Eduardo, Op.cit., p. 503.

[219 La Época, 14/06/1998.](#)

[220 Joignant, Alfredo, “La politique des ‘transitologues’..., Op.cit.](#)

[221 Un completo análisis sobre las implicancias nacionales e internacionales del arresto de Pinochet en Londres se encuentra en: Davis, Madeleine, The Pinochet case: origins, progress and implications, London, Institute of Latin American Studies, 2003, 266 p. Recomendamos especialmente la lectura del Capítulo IV sobre las consecuencias del caso en la política chilena. En términos del impacto internacional del acontecimiento, aconsejamos la lectura de: Winter, Jay, Dreams of peace and freedom: utopian moments in the twentieth century, Yale University Press, 2006, 261 p., Cap. 6. Dentro del registro audiovisual, ver el documental de Patricio Guzmán, Le Cas Pinochet, 110 min, Éditions Montparnasse, 2001.](#)

[222 Sobre el papel de Pinochet en la transición democrática chilena y su rol como garante de la institucionalidad del régimen militar y del sistema económico, recomendamos la lectura de: Barton, Jonathan, “State Continuismo and Pinochetismo: The Keys to the Chilean Transition”, Bulletin of Latin American Research, Vol. 21, N° 3, 2002, pp. 358-374.](#)

[223 Wilde, Alexander, Op.cit., p. 1.](#)

[224 Sobre la imposibilidad de la reconciliación dentro del marco de la transición política chilena, consúltense: Lira, Elizabeth & Loveman, Brian, El espejismo de la reconciliación política: Chile 1990-2002, Santiago, LOM Ediciones, 2002.](#)

²²⁵ [Wilde, Alexander, Op.cit., p. 2. Respecto de los temas de la memoria durante el regimen militar, véase también: Stern, Steve J., Battling for hearts and minds: memory struggles in Pinochet's Chile, 1973-1988, Durham, Duke University Press, 2006.](#)

²²⁶ [Declaraciones de Gonzalo Martner, economista y expresidente del Partido Socialista. Véase: Arrate, Jorge & Rojas, Eduardo, Op.cit., p. 526.](#)

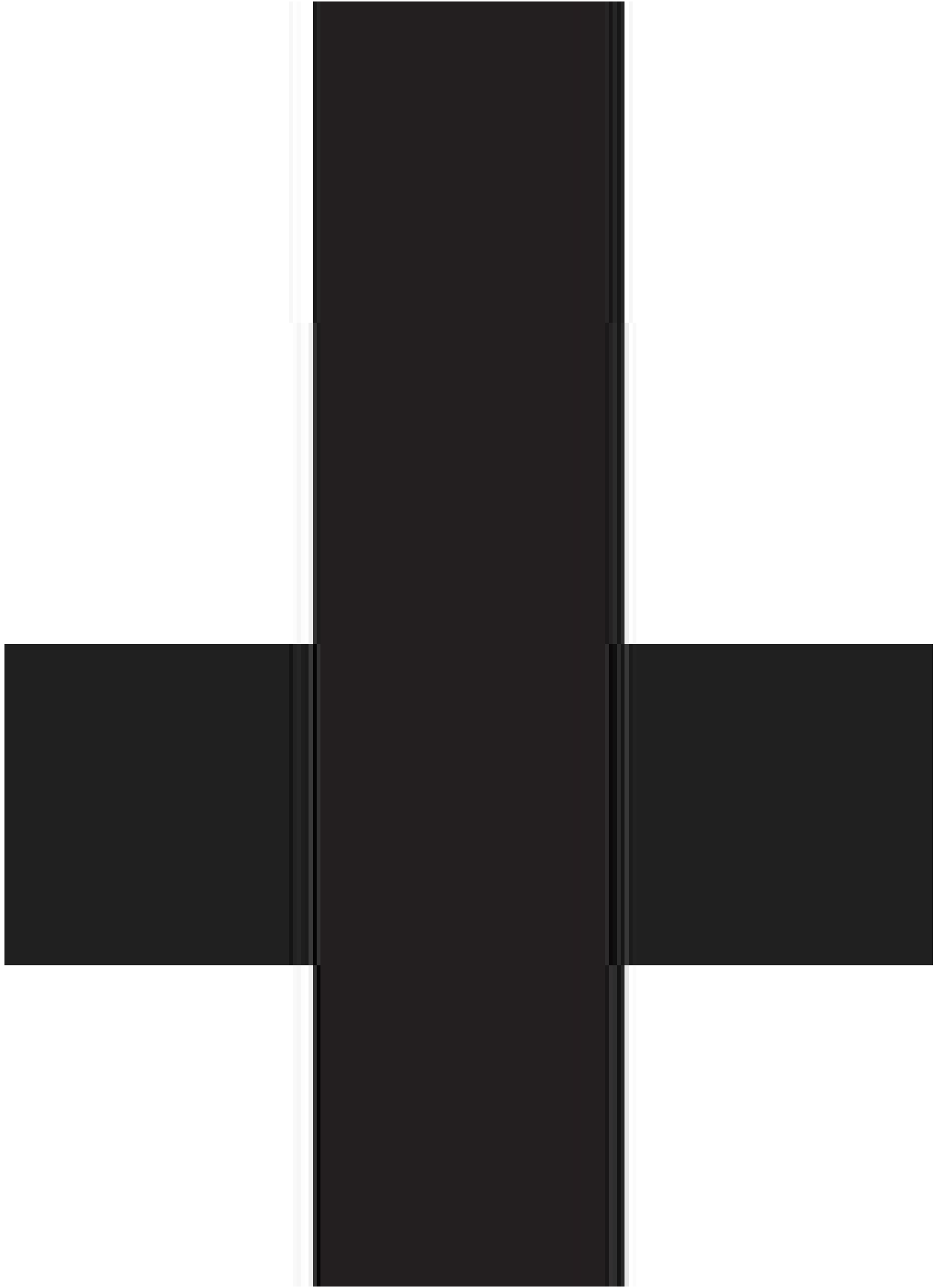
²²⁷ [Entrevista a Ricardo Núñez, expresidente y senador del Partido Socialista: "La transición no está culminando bien", El Mercurio, Reportajes, 15/03/2009.](#)

²²⁸ [Probablemente, uno de los libros que más ha celebrado el conjunto de cambios impuestos a la economía del país desde 1975, sea la obra colectiva dirigida por los economistas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Felipe Larraín y Rodrigo Vergara en el año 2001, y con el apoyo del think tank conservador CEP \(Centro de Estudios Públicos\). Larraín, Felipe & Vergara, Rodrigo \(Eds.\), La transformación económica de Chile, Op.cit.](#)

CAPÍTULO VI

¿CUÁNDO TRIUNFA UNA REVOLUCIÓN?

LAS NUEVAS FORMAS DEL DISCURSO ECONÓMICO LIBERAL EN EL CHILE POSDICTATORIAL Y SUS NUEVAS ÉLITES



Los consumidores protagonizan una revolución que no es solo económica, sino también política y cultural. De una sociedad donde el protagonismo estaba hasta los 70 centrado en el Estado, se pasó en los 80 a otra centrada en la empresa, para pasar en los 90 a un tipo de sociedad donde el protagonista es el consumidor'¹.

Eugenio Tironi (sociólogo y ex-Director de Comunicaciones del Gobierno de Patricio Aylwin 1990-1994).

En la actualidad, la economía es una de las profesiones más importantes y con mayor autoridad en el país. La experticia técnica de los economistas, el lenguaje sofisticado y la homogeneidad de puntos de vista, se han vuelto simbólicamente relevantes en la reducción de la ansiedad relacionada con la gestión económica²

Verónica Montecinos (socióloga y experta en el estudio de los economistas en América Latina).

El Chile de los economistas

Cuando se mira con atención el cuadro general de las ciencias sociales en Chile, no es de extrañar el espacio que hoy ocupan los economistas dentro de la esfera pública y privada. Es un fenómeno generalizado³. Sin embargo, este proceso — el cual se acelera en la década de los noventa, especialmente tras la vorágine conservadora de los años de Ronald Reagan y Margaret Thatcher—, ya venía desarrollándose fuertemente en Chile desde mediados de la década de 1960. Podría decirse que incluso, a fuerza de costumbre, el profesional de la economía parece haber escapado al mundo de las ciencias sociales ‘blandas’, posicionándose como el articulador de un saber científico-técnico complejo, provisto de leyes universales y de un lenguaje que toma bastante prestado de los desarrollos matemático-estadísticos posteriores a la segunda posguerra⁴.

¿Cómo fue posible que el estatus del economista creciera al punto de convertirse en el asesor técnico más valorado de cualquier gobierno que se precie de serio, incluso reemplazando el espacio del hombre político tradicional: el ‘Hombre de Estado’⁵?

La invención del economista como asesor experto

Tras la Gran Depresión de los 30 en Estados Unidos y Europa, se comenzó a desarrollar una disciplina económica ligada fuertemente al Estado, involucrando a las instituciones públicas en una materia que, hasta aquel momento, se consideraba como propia del mundo privado. La economía dejó de depender únicamente a las ideas del libre comercio, posicionándose una nueva concepción económica, que privilegiaba la planificación y la puesta en marcha de dispositivos contracíclicos y regulatorios del comercio mundial. La figura de Keynes y la escuela económica que surge de su pensamiento, dominaron la esfera pública y académica desde la década de 1930 hasta mediados de los 60. Este período marcó la aparición del economista como un actor central en las redes del poder político, así como de la gestión de políticas públicas. En América Latina fue durante la década de 1940 que un grupo de economistas de la región, principalmente vinculados a la CEPAL, comenzaron a institucionalizar un proyecto profesional destinado a reformular la ciencia económica y reducir la influencia externa en la administración de la Hacienda pública. En la visión de estos primeros profesionales de la economía, las aparentemente científicas premisas del paradigma neoclásico escondían objetivos ideológicos, y ayudaban a justificar las asimetrías estructurales entre los países industriales y periféricos, cuyo origen había que buscarlo en las raíces históricas y sociales del subdesarrollo⁶.

La economía dejó de ser una disciplina auxiliar de la política y de la administración, para ganar un estatus propio de ciencia social con sus temas y jerarquías propias. Según la noción de Pierre Bourdieu sobre las estructuras sociales, se constituyó en un campo autónomo de lo social⁷. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, las necesidades de reconstrucción y de presentar un modelo alternativo al impuesto tras la cortina de hierro, Estados Unidos y los países de Europa occidental dieron origen a un sistema económico mundial basado en las instituciones de Bretton Woods. Fue justamente este marco el que terminó de consolidar el estatus del economista formado en las universidades, especialmente norteamericanas. Este profesional participó activamente en el diseño y puesta en marcha de políticas públicas con un fuerte acento desarrollista y de intervención del Estado en la economía. Política y economía no se consideraban como esferas diferenciadas, siendo el Estado el principal agente del desarrollo y el crecimiento económico. La labor de los grandes economistas

keynesianos estuvo, durante las dos primeras décadas de posguerra, ligado estrechamente a las administraciones del gobierno norteamericano y a las instituciones multilaterales de crédito (FMI y Banco Mundial).

Al mismo tiempo que se producía este fenómeno de consolidación institucional de los economistas que denominaremos desarrollistas o ‘keynesianos’, en una escala mucho menor se producía un proceso de posicionamiento de un nuevo tipo de profesional de la economía que reivindicaba las teorías del libre mercado y de los supuestos efectos nefastos de la planificación económica. Muy marginal en sus inicios, esta escuela comenzó a ocupar los espacios académicos de las universidades del medio-oeste norteamericano, tradicionalmente menos prestigiosas que sus pares del Este (Harvard, Yale o Columbia). La Universidad de Chicago, a fines de los 40, se transformó en el centro de recepción por excelencia de estos economistas, la mayor parte de ellos europeos (especialmente austriacos), quienes destacaban por su sólida formación matemática y estaban, de alguna manera, ligados al Círculo de Viena⁸ y su programa neopositivista de unificación de las ciencias. En este sentido, destaca la figura de Friedrich von Hayek, uno de los padres del pensamiento filosófico-económico neoclásico. Dicho perfil matemático-científico les fue de suma utilidad para legitimarse al interior de sus propias unidades académicas, pues carecían de los contactos sociales y políticos de sus colegas del noreste (Ivy League), sumándose además su condición de extranjeros. El lenguaje de las llamadas ciencias duras se transformó en una estrategia de valorización simbólica, según Yves Dezalay⁹.

Los inicios de la década de los sesenta marcan la explosión en la formación de economistas en los Estados Unidos, produciéndose un alto nivel de especialización y selección sobre la base de las aptitudes matemáticas y de modelamiento de los estudiantes, agregando una variable meritocrática en un campo —hasta ese momento— dominado por las redes sociales de la élite WASP¹⁰. La competencia generada entre las universidades adscritas a este programa se vio reflejado en la conformación de todo un escalafón y ranking alimentado por diversos premios y cátedras. Prontamente, la administración norteamericana se vio en la necesidad de recurrir a los nuevos y prestigiosos economistas surgidos de estas escuelas, quienes contaban con una batería de herramientas matemáticas y estadísticas muy superiores a las de sus colegas de la escuela desarrollista, quienes veían como sus ideas perdían fuerza ante la arremetida de los nuevos expertos. Estos prometían soluciones a los límites de la regulación keynesiana, fuertemente cuestionada a causa de los déficit públicos,

la inflación y los altos costos de la guerra de Vietnam. Sus respuestas simples y directas a problemas supuestamente concretos les otorgó una puerta de entrada —cada vez mayor— en el espacio decisional de las políticas públicas, lo cual empieza a apreciarse durante la administración de Richard Nixon. Ello no fue impedimento para que su expansión universitaria continuase ya no solo en el área de la formación de economistas norteamericanos, sino que —desde fines de los 50— orientada a la captación de las élites del resto del mundo, donde Latinoamérica y Chile, especialmente, tendrían un papel no menor.

Sin embargo, desde la década de 1960, los grupos rivales de los economistas ortodoxos habían lanzado una masiva campaña para desacreditar los sesgos populistas y estatistas del estructuralismo y para traer de vuelta la enseñanza de la economía a la corriente principal de la profesión. En unos pocos años, y en el contexto de un debate doctrinal en crecimiento, el número de economistas y de las escuelas de economía se han multiplicado dramáticamente...¹¹.

Por último, dos elementos esenciales —aparte del manejo matemático— contribuyeron a legitimar la figura del economista-científico. En primer lugar, la creación de una disciplina de estudio de los mercados financieros, que al mismo tiempo promulgaba su apertura internacional bajo el alero de las políticas del FMI y el Banco Mundial. En segundo lugar, el desarrollo de una estrategia comunicacional y difusión de ideas que alcanzó su cenit con la emisión por televisión pública de la serie *Free to choose* a inicios del gobierno de Ronald Reagan¹². La producción televisiva fue concebida por uno de los llamados ‘evangelistas’ del pensamiento económico neoclásico, Milton Friedman, quien comprendió muy bien la necesidad de legitimar la nueva doctrina no solo mediante la obtención del reconocimiento internacional y académico (Premios Nobel), sino que también a través de la simplificación del mensaje y el acceso a un público mucho más amplio. A esta altura, los economistas neoclásicos ya no eran minoría, sino la corriente hegemónica de pensamiento económico, la cual se vería beneficiada por la corriente conservadora de los ochenta y el derrumbe del bloque socialista del este. En Chile, el grupo de economistas de Chicago aprovechó el control de los medios de comunicación durante el régimen militar para hacer una pedagogía intensiva en la población sobre la forma de comportarse como consumidor racional en un mercado competitivo¹³. Los

noventa les abrirían las puertas a la construcción de un pensamiento económico sin alternativas ni rivales. Su economía sería —a partir de entonces— la única economía viable; y sus practicantes, los más autorizados para decidir las políticas públicas.

El economista académico-empresario

Una característica original de este nuevo núcleo de profesionales de la economía, fue el surgimiento de la figura del académico-empresario. El caso del desarrollo del banco Citibank (Citigroup)¹⁴ durante la década de 1970 y su futura influencia en la crisis de la deuda latinoamericana, es un caso paradigmático del ingreso de los economistas en el mundo financiero al mismo tiempo que seguían ejerciendo sus labores docentes¹⁵. La alianza entre el mundo académico y financiero era absolutamente inédita y en contraposición a la doctrina keynesiana, la cual justamente culpaba a los mercados financieros de las dramáticas oscilaciones de los ciclos económicos.

En Chile, el ingreso de los economistas formados en la nueva doctrina al mundo de los negocios se realizó desde fines de los años 70, consolidándose en los 80 y 90. Las inversiones prioritarias de estos académicos-empresarios fueron destinadas a empresas financieras y a los nuevos y jugosos mercados recién creados de la educación superior privada, sistema de pensiones (AFP) y de salud (ISAPRES), todas reformas llevadas a cabo durante la dictadura militar (1973-1989) y a instancias de estos mismos profesionales a través de la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN)¹⁶. No pocos se beneficiaron directa o indirectamente de la privatización de las empresas públicas del Estado chileno¹⁷.

El economista al servicio del Estado. El caso chileno

Yo creo que va a ser muy difícil volver a una gestión menos técnica de la economía. Los Chicago Boys han establecido un estándar¹⁸.

Tradicionalmente, la principal fuente de reclutamiento de la clase política chilena durante sus primeros ciento cincuenta años de vida independiente, fue el ámbito del derecho, es decir, principalmente juristas y abogados. Basta con revisar las actas del Congreso Nacional de Chile y cotejar los nombres con alguno de los diccionarios biográficos disponibles para comprobar lo anterior¹⁹. En un lugar bastante más secundario, se encuentran ingenieros, médicos y hombres de negocios. Es más, la economía —como disciplina— se organizó al interior de las facultades de derecho de las dos principales universidades chilenas. Fueron en un comienzo pequeños departamentos que agrupaban a profesores de derecho interesados en las ciencias sociales, especialmente la economía y la sociología. Su espacio era marginal con respecto a la importancia de las ciencias jurídicas e incluso las propias humanidades. Los textos clásicos de la época abordaban la economía a partir del análisis histórico y de sus relaciones con la política (Economía Política). En general, la economía era vista como una ciencia social auxiliar al servicio de las tareas de gobierno, y subordinada a las necesidades del poder. La cualidad técnica de quienes se dedicaban a su estudio radicaba justamente en su carácter de disciplina auxiliar y no en el sofisticado aparataje conceptual y matemático que hoy ostenta.

A lo anterior, debe agregarse la visión nacional del paradigma económico en boga desde mediados de los años 30 hasta aproximadamente 1970. El modelo de desarrollo occidental aplicado en la mayoría de los países fuera de la órbita socialista, otorgaba al Estado un rol crucial en la regulación y planificación de la economía dentro de un sistema general que favorecía el desarrollo hacia adentro y la sustitución de importaciones (ISI). El Estado ejercía un papel regulador de la economía por medio de la indexación de los salarios con respecto a la inflación, pero también asegurando al empresariado local una demanda creciente y un mercado protegido a la competencia internacional tanto a nivel productivo como

financiero. En definitiva, se buscaba lograr el crecimiento por medio del consumo y la estabilidad de las políticas de pleno empleo en desmedro del control de la inflación y el comercio internacional. Este modelo requería de un Estado fuerte, que controlara la emisión de dinero, pero que al mismo tiempo tuviera los resortes necesarios para impulsar el consumo y el crecimiento. En el caso chileno, el Estado concentró buena parte de la base productiva y laboral del país, convirtiéndose en el principal empleador y generador de demanda.

Es importante destacar que este modelo de desarrollo, surgido como respuesta a la crisis mundial de 1929, también definía las tareas del economista como asesor del poder político. Al interior de este paradigma del crecimiento existía un esquema de reglas conocidas a aplicar, las cuales no escapaban, a grosso modo, al conocimiento general de las autoridades políticas. El economista era finalmente un consejero y un ejecutor, siempre dependiente de otros niveles de decisión. En definitiva, los conocimientos técnicos de su disciplina estaban al servicio de una serie de intereses diversos, don-de su opinión era un factor más dentro de un sistema de toma de decisiones de múltiples entradas. La política monetaria y la política fiscal constituían resortes dependientes del poder político, lejos de la autonomía que hoy exige el ejercicio de una política económica responsable y técnica.

En ese momento (antes de 1970) los economistas, como grupo profesional, aún no hacían exigencias respecto del desempeño de las funciones políticas. Fue más tarde que los economistas fueron nombrados en puestos ministeriales, ya no sólo como asesores técnicos, sino que como ejecutivos políticos²⁰.

La autonomía del discurso (del asesor al generador de políticas)

Es justamente el desgaste del anterior paradigma y la nueva internacionalización financiera-económica de inicios de los años 70, lo que rompe el esquema descrito anteriormente y genera un cuadro de incertidumbre ante un sistema de regulación que exige herramientas y conceptos propios de una economía mundial liberalizada, que comienza a erosionar los equilibrios nacionales del modelo anterior. Los desarrollistas vieron con estupor cómo la teoría neoclásica ganaba terreno, proponiendo la nueva imagen del experto economista, quien conoce las leyes del crecimiento económico y las vicisitudes de los mercados financieros internacionales. Su artillería conceptual y teórica impresionaba tanto como la seguridad de sus convicciones. Su mayor fortaleza radicaba justamente en la simpleza y claridad de sus diagnósticos, como así también respecto de las medidas a adoptar. Su mensaje se basaba en un principio básico aplicable en todo tiempo y lugar: ‘no existe una economía colectiva diferente de aquella que practican racionalmente los individuos’. El economista Robert Boyer ha sintetizado muy bien esta mirada de la economía neoclásica:

El rol del Estado y de la política no están exentos de plantear problemas para la mayoría de las teorías económicas. De hecho, en un análisis que formaliza las interacciones entre los agentes económicos racionales únicamente a través de los mercados, incluso por definición cualquier intervención del gobierno es perjudicial. Si se toman literalmente las enseñanzas de la teoría neoclásica estándar, el economista no puede ser sino el defensor y propagandista del mercado²¹.

La macroeconomía no es más que una proyección de las leyes de la microeconomía y, por lo tanto, el papel del Estado no es otro que asegurar el libre juego de las fuerzas del mercado. De acuerdo a sus postulados, las crisis y distorsiones se producen a causa de la injerencia del Estado en la economía, lo que Hayek denomina como la “falacia de la planificación central”. Su enorme interés por todo lo relacionado con el control de la masa monetaria y su constante alusión a los clásicos de la economía ilustrada liberal, los hicieron

conocidos desde fines de los años 50 como ‘neoclásicos’, ‘monetaristas’ o economistas de la oferta.

En un medioambiente inestable, donde las políticas desarrollistas se ven erosionadas desde la izquierda de orientación marxista, pero también desde una derecha que desconfía de la democracia representativa, la ‘economía-ciencia’ comienza a ganar terreno, especialmente a través de su corriente monetarista. Tras la crisis petrolera de 1973 y la posterior recesión mundial, son los neoclásicos quienes aparecen como los detentores del mejor diagnóstico y también de las soluciones más radicales. Desde su óptica, la salida de la crisis no puede ser más de lo mismo, sino una revolución liberal, que destrabe todas las anteriores restricciones al movimiento de capitales y mercancías y que, al mismo tiempo, controle la inflación a través del manejo de las cuentas públicas. Para ellos, el Estado empresario es una traba al crecimiento y el político tradicional se transforma en un peligroso personaje siempre al borde del populismo.

La irrupción del nuevo economista en el ámbito público se vio favorecida gracias a la implantación de regímenes de fuerza en América Latina desde fines de los 60, donde claramente existe un ambiente receptivo a las políticas económicas liberales como contrapartida a las teorías económicas de izquierda (marxismo clásico y teoría de la dependencia) y al modelo desarrollista de la CEPAL. Chile fue uno de los primeros países en entregar el manejo de su economía a un grupo de economistas jóvenes formados en universidades norteamericanas. Sus radicales terapias de shock se aplicaron gracias al férreo control del poder que ejerció la junta militar encabezada por Augusto Pinochet, especialmente entre los años 1973 y 1978.

Los Chicago Boys ocuparon casi todas las posiciones en el gobierno por temor a que los demás no hicieran las reformas. Ellos usaron a su propia gente. Fue un grupo homogéneo que, sin tener preguntar a otros, sabía perfectamente cómo reaccionar²².

La transformación al nivel político se transmitió también —al menos en el caso de Chile— al ámbito universitario. La Pontificia Universidad Católica fue el epicentro de una revolución de la renovada ciencia económica, la cual ya había

comenzado desde fines de 1950. El nuevo estatus logrado por la disciplina le otorgó un poder e independencia nunca antes visto dentro del ámbito de la educación superior chilena. Desde el punto de vista administrativo, se constituyó una facultad autónoma con planes y programas propios, destinados tanto al estudio de la disciplina como también de las técnicas de gestión de empresas. Incluso, la misma Universidad Católica entregó las decisiones claves de su administración interna a un equipo de economistas e ingenieros formados en la misma casa de estudios. A nivel micro, la universidad funcionaba como un verdadero laboratorio de pruebas. Sin embargo, más importante aún, resultó la legitimación del discurso y lenguaje del experto económico a nivel del espacio público nacional.

La trayectoria ascendente seguida por los economistas chilenos durante las últimas décadas, transformó con éxito a este grupo profesional, que era pequeño y marginal en la década de 1950, en un segmento poderoso y ubicuo de la élite política durante los '90. El ascenso político de los economistas chilenos es parte de una tendencia mundial, en la que los economistas se han convertido en los exponentes más destacados de las visiones tecnocráticas de gobierno²³.

Poder, consolidación y hegemonía

Durante la segunda mitad de la década de los 70 y los 80, el estatus del economista en Chile sufrió una transformación radical. Es cierto que existían otras corrientes de pensamiento dentro del ámbito económico; sin embargo, difícilmente se competía con la teoría neoclásica dominante, obviamente beneficiada por el clima de represión que vivía el país y la falta de debate público. Pocas veces en la historia de Chile, un grupo de jóvenes técnicos tuvo en sus manos un poder de tal envergadura para transformar la estructura económica de un país con una tradición centralista y estatista en buena parte heredada de su pasado colonial y de las crisis económico-sociales de fines del siglo XIX y especialmente de la de 1929/30. De acuerdo con Verónica Montecinos, la tendencia hacia la tecnocratización se aceleró en la década de los 60, y comenzó a hacerse evidente en los 80, cuando América Latina fue forzada a abandonar el modelo desarrollista del Estado de Compromiso, para ingresar al modelo competitivo del comercio internacional globalizado²⁴.

En un comienzo, el grupo de economistas que asesoraba al gobierno militar encontró una fuerte oposición dentro del grupo de oficiales pertenecientes a una corriente nacionalista y proclive a la mantención de un Estado fuerte. Sin embargo, los técnicos que más tarde serían conocidos como los Chicago Boys insistían constantemente en la necesidad de aplicar el plan de reformas estructurales de manera profunda y evitando al máximo cualquier tipo de concesión. La coherencia del equipo en términos del discurso, la seguridad en el éxito de las medidas a adoptar y la simpleza al explicar sus argumentos —donde destaca hasta el día de hoy el gusto por las metáforas, los eufemismos y los ejemplos claros para la ‘dueña de casa’—, permitieron la legitimación de los economistas neoclásicos dentro del complejo aparato administrativo de la dictadura militar. Nada de esto habría sido suficiente sino es por las cifras positivas que comienza a mostrar la economía chilena desde 1978, es decir, una vez superada la primera etapa del tratamiento de shock.

La década de los 80 se inició con un ambiente de optimismo general respecto del crecimiento del país. El propio gobierno militar contaba con un apoyo importante de la población, que empezaba a olvidar las penurias económicas y políticas de la década anterior. Los años más duros de la represión habían quedado atrás gracias a la presión internacional. Chile vivía un pequeño boom

económico conocido como los años de la ‘plata dulce’. Posteriormente, se pagarían los costos sociales de una política de apertura total a las importaciones a base de un dólar artificialmente bajo, que además llevó a la quiebra de gran parte de la industria productiva nacional. América Latina conoció la crisis de la deuda, y Chile no fue ajeno a este proceso, aunque las causas más bien tenían un origen interno y se remontaban al período del tratamiento de shock. Para estos economistas, la crisis fue una desagradable sorpresa, pero jamás dudaron de que todo se justificaba en aras de una modernización acelerada y una apertura unilateral al mercado internacional. Prácticamente, ningún país del mundo durante este período abrió su economía como lo hizo Chile. El país era un laboratorio —o más bien un ‘conejiillo de Indias’— de la ortodoxia teórica de la escuela económica de Chicago, que en aquellos años contaba con figuras claves como Milton Friedman (premio Nobel de economía 1976), Michael Novak y Friedrich Von Hayek (premio Nobel de economía 1974).

Los años 80 vieron caer en desgracia a los economistas neoclásicos chilenos tras la crisis de 1982-1983, pero pronto volvieron a resurgir, incluso con más fuerza. Las transformaciones llevadas a cabo durante la década anterior eran de tal envergadura en el plano económico e intelectual, que difícilmente pudieron ser desplazadas a pesar de la aguda crisis social que se vivió en aquel momento. En las universidades chilenas, se enseñaba solo economía “clásica”, y no había grupo empresarial que no hubiese incorporado a técnicos y economistas de esta corriente entre sus asesores más cercanos. Es más, debido a las privatizaciones de los 80 y 90, muchos de estos técnicos abandonaron los cargos políticos y académicos para convertirse en empresarios, no sin haber dejado sospechas sobre el proceso de venta de los activos del Estado, gracias al manejo de información privilegiada que ellos mismos controlaban²⁵.

Los años 90 no hacen sino consolidar la tendencia anterior. Los gobiernos y los países son evaluados casi exclusivamente a base de sus cifras económicas y estabilidad financiera. Los grandes organismos mundiales como el FMI y el Banco Mundial se han encargado de recordar a los gobiernos sus tareas y reformas pendientes, siempre orientadas hacia la liberalización de los mercados y de los capitales. En la vorágine del denominado ‘fin de la historia’, fueron cayendo una a una las antiguas barreras nacionales construidas para aminorar los efectos cíclicos de las crisis internacionales como la de 1930. En un entorno de desprestigio creciente de la función pública y de la política en general, el economista, por el contrario, fue ganando un poder cada vez mayor, por encima incluso del control democrático.

Al mismo tiempo, se fue desarrollando toda una concepción destinada a otorgar independencia al poder económico dentro del esquema de la democracia. Es así como se ha difundido globalmente el concepto de los ‘bancos centrales autónomos’. En definitiva, la idea apunta a considerar la gestión económica como independiente de las ‘mayorías circunstanciales’ propias de la democracia y del juego político. Se estima que la economía debe ser dejada a los expertos, y solo ellos le entregarán estabilidad. Chile es nuevamente un ejemplo de tecnificación de la gestión monetaria sobre la base de la autonomía de los miembros del Banco Central, quienes se eligen por medio de cuotas, equilibrios y designaciones propias de unos pocos expertos en la materia. La calidad técnica, los posgrados en el extranjero y la ortodoxia teórica de los candidatos, valen más que cualquier otro tipo de argumento político o democrático. El principio siempre es el mismo: contrarrestar cualquier mayoría política por medio de poderes autónomos legitimados técnicamente. Actualmente, los principales think tanks conservadores proponen, sin tapujos, aplicar el mismo criterio de autonomía a los ministerios de hacienda y a todo el sistema de recaudación de impuestos y asignación de recursos públicos.

Nunca ningún otro cientista social ha alcanzado un grado tal de poder e influencia tanto a nivel público como privado. El economista es el gran administrador de la política pública por medio de la acción directa o bien a través del control de los presupuestos.

El estatus privilegiado del economista-técnico

La corriente económica neoclásica es perfectamente coherente con la idea de que la modernidad entrega un estatus superior a aquellos discursos que adoptan un lenguaje y una conceptualización científica. Si ella además utiliza métodos y herramientas provenientes de ciencias duras como la física y las matemáticas, se beneficia de un aura de objetividad que le permite posicionarse en una condición de autoridad por sobre el resto de las ciencias sociales, e incluso diferenciarse y apartarse de ellas. El nuevo argot económico jamás cuestiona las bases de su discurso ni el origen de sus postulados, pues construye todo un lenguaje y un aparataje teórico a base de una concepción de la naturaleza humana centrada en el individuo y en su racionalidad maximizadora, que a nivel colectivo tiende siempre al equilibrio. En este sentido, no es menos ideológico que otros discursos. Incluso, desarrolla una visión de la sociedad que combina ideas de un darwinismo social decimonónico, un tradicionalismo autoritario y una visión hiperoptimista del progreso de la humanidad.

Resulta interesante constatar el nuevo papel del economista en la sociedad contemporánea, especialmente tras la caída de los llamados socialismos reales. Las presiones de la globalización y la apertura a los mercados internacionales, han posicionado al economista como el único profesional capaz de actuar frente a los fenómenos de la interacción económica a escala global que, hay que decirlo también, él mismo ha contribuido a crear.

Un contexto de mayor interdependencia económica, creciente complejidad de la gestión económica y un aumento de la incertidumbre causada por las grandes crisis económicas, motiva a las élites políticas a reclutar a expertos que comparten marcos interpretativos comunes y que pueden comunicarse unos con otros en el mismo lenguaje²⁶.

El economista ya no es hoy un asesor más del poder político, sino el asesor por definición, y hacedor principal de política pública. Si no lo es nominalmente, posee el control a través de la asignación de presupuestos y la definición de indicadores de gestión. No es extraño que los políticos e incluso jefes de Estado

sean actualmente economistas o técnicos formados en economía o administración.

En Chile, entre 1958 y 1973, sólo uno de los once ministros de Hacienda había recibido una formación profesional en economía. La expectativa con respecto a la capacitación formal de estos funcionarios cambió durante el gobierno militar, cuando 8 de cada 10 ministros de Hacienda poseía credenciales académicas en economía²⁷.

Quien no maneja los rudimentos del discurso económico queda fuera del ámbito de las decisiones políticas. Las cumbres internacionales sobre comercio internacional o política económica tienen una cobertura e importancia superior a aquellas lideradas por jefes de Estado. En el mundo privado, el empresario actual debe ser un hombre formado en la materia, o al menos estar al tanto de las mecánicas discursivas de la economía actual. Sin embargo, no se trata de manejar cualquier economía, sino de la única que es considerada como seria y científica. Se puede discutir sobre el papel de las diferentes corrientes de la disciplina y la supuesta heterodoxia que reina en sus aulas. Monetaristas, neokeynesianos, desarrollistas, regulacionistas o neomarxistas reivindicarán sus diferencias, pero es claro que el nuevo estatus de la economía contemporánea se debe mucho más a los teóricos neoclásicos que a otras corrientes más cercanas al mundo académico, a las ciencias sociales e incluso a la disciplina histórica. La formalización matemática, el discurso normativo y la operatividad técnica son rasgos eminentemente heredados de esta corriente, aunque hoy en día diferentes escuelas utilicen e incluso reivindiquen la mayoría de estos aspectos. Ningún economista osaría hoy escribir un tratado de economía sin gráficos, fórmulas matemáticas, tablas y flujos. El mismo John Maynard Keynes sería catalogado como un ensayista, un ideólogo, bastante poco científico; muy lejos de la economía 'seria'.

A diferencia de lo que ocurre en el resto de las ciencias sociales, el economista contemporáneo no sufre el dilema que Max Weber había dilucidado a comienzos del siglo XX, es decir, la problemática entre el político y el científico, o como se diría actualmente, entre el intelectual y el ejecutor de políticas públicas (y por qué no privadas)²⁸.

La mayoría de las escuelas de economía en todo el mundo preparan profesionales de la administración destinados a actuar en el mundo de la empresa privada y de la gestión pública. Solo un número muy pequeño se dedica a la reflexión económica. Ello no significa que no estén preparados para asumir altas responsabilidades en el ámbito público. Al contrario, fuera de los premios académicos, el mayor honor para un economista es dirigir una cartera pública, un Ministerio de Hacienda o un cargo de responsabilidad en un Banco Central. Para eso han sido preparados durante años. No existe, por lo tanto, una contradicción entre el conocimiento y su aplicación en política. Al contrario, la aplicabilidad de las técnicas en el ámbito público y privado es justamente lo que legitima al discurso y al profesional de la economía. Desaparece la división entre el intelectual independiente y el funcionario. En economía, ambos mundos se combinan y conviven sin mayores conflictos de intereses. Se puede circular del ámbito académico al profesional sin problemas ni contradicciones. Como bien se ha visto en Chile, es posible ser político, economista, académico, dueño de una universidad privada y candidato a la presidencia de la República, y todo de manera simultánea.

La política de los think tanks. Las nuevas formas de difusión de la economía política y económica en Chile posautoritario

El principal efecto de 1989 es que el capitalismo y la riqueza han dejado, por el momento, de tener miedo.

Eric Hobsbawn: El día después del fin del siglo.

Resulta evidente que la experticia política y económica en Chile se ha profesionalizado de manera acelerada durante los últimos treinta años²⁹. Hoy en día, tanto las autoridades públicas como los partidos políticos elaboran sus programas y toman sus decisiones a través de la mediación de expertos en distintas materias, la mayor parte de las veces ajenos al aparato público tradicional. Si bien esto no constituye una novedad en sí —siendo por lo demás un fenómeno bastante acorde con la complejidad de las sociedades contemporáneas—, su amplitud y desarrollo han dado lugar a nuevos asuntos que no quedan ajenos al interés de las ciencias sociales. El Chile de la transición democrática ha sido un espacio propicio para el desarrollo de formas de circulación y difusión del conocimiento económico desligadas de los canales tradicionales.

En primer lugar, se ha producido un paulatino desplazamiento ideológico³⁰ desde el Estado, los partidos políticos y las universidades, hacia nuevos espacios de reflexión y generación de ideas, los cuales reciben el nombre de Centros de Estudio, Fundaciones o simplemente think tanks³¹. En segundo lugar, estas organizaciones mediadoras han surgido como lugares de pensamiento privados, ajenos a la calidad científica que se atribuye generalmente a los centros académicos tradicionales. En tercer lugar, tanto su financiamiento como organización suelen depender de mecenazgos, donaciones privadas o internacionales, lo cual impide dimensionar con exactitud qué tipo de conocimiento se intenta desarrollar y, sobre todo, para qué fines. Por último, el enfoque dirigido hacia la generación de ‘conocimiento práctico’ muy ligado a la

lógica económica, provisto de una carga valórica (moral) no siempre explícita, o bien ajena a toda neutralidad axiológica, plantea numerosos aspectos de fondo respecto de la legitimidad técnico-científica de tales organizaciones, sobre todo cuando sus opiniones adquieren la forma de un insumo esencial para la toma de decisiones en el ámbito de las políticas públicas.

A partir de los años 1980, aparece en la mayor parte de los países occidentales un nuevo tipo de organización creada a imagen de los modelos norteamericano e inglés. Estas agrupaciones, que se dicen surgidas en el seno de la sociedad civil, elaboran un cierto conocimiento práctico, orientado y enfocado a definir o influir sobre las políticas públicas del Estado. No se trata de un conocimiento teórico propio de la academia y de las universidades, sino de un tipo de ‘subproducto experto’ dirigido a quienes toman las decisiones y cuyo objetivo es su aplicabilidad en el terreno práctico. Las temáticas de trabajo de estas agrupaciones son variadas, pero siempre relacionadas con asuntos públicos de alta repercusión social y/o mediática, como por ejemplo: educación, salud, pensiones, vivienda, delincuencia, energía, privatizaciones, planificación urbana, defensa, cultura. En Chile, estas organizaciones también han asumido la discusión y, en algunos casos, la protección de los denominados temas valóricos o morales: divorcio, eutanasia, derechos sexuales, contracepción, interrupción del embarazo, prevención del Sida, entre otros³². A lo anterior, se suma el desarrollo y aplicación de una herramienta clave de influencia política para algunas de estas organizaciones; se trata de los estudios de opinión pública (encuestas) que regularmente evacuan hacia los poderes públicos y los medios de comunicación.

Asociadas a la idea de un ‘mercado competitivo de ideas’, estas instituciones están fuertemente arraigadas en la tradición de lobby e influencia política de los sistemas democráticos anglosajones, especialmente el de Estados Unidos³³. Producto de la difusión masiva de la democracia y el mercado, como las dos ‘cabezas de playa’ de la globalización, este modelo organizacional se ha expandido con enorme éxito a partir de los años 1980 y sobre todo tras la caída del Muro de Berlín. Es justamente en los países de Europa del Este, a partir de 1990, donde se ha visto una mayor proliferación de think tanks, especialmente de aquellos financiados por sus pares norteamericanos de influencia conservadora o libertaria³⁴ (neoliberal).

Un gran número de miembros de la Sociedad Mont Pelerin han participado o son ellos mismos responsables de la creación de think tanks, verdaderas ‘cajas de ideas’ que han inundado a políticos y medios de comunicación con notas, análisis y proyectos de ley tipo ‘llave en mano’ (...). El más famoso de estos centros es probablemente, el Instituto de Asuntos Económicos, nacido en 1955 en Gran Bretaña, que jugó un papel importante en la llegada Margaret Thatcher al poder, y la Heritage Foundation, creada en 1973 en los Estados Unidos, muy cercana a los grupos más radicales del Partido Republicano³⁵.

El caso chileno presenta algunas particularidades respecto de la evolución global de este fenómeno. En primer lugar, las primeras instituciones que podrían calificarse como centros de estudio o think tanks se desarrollaron en el contexto político autoritario de la dictadura militar³⁶. En tal sentido, la necesidad de contar con centros de reflexión y crítica política se transformó en un imperativo no tanto para los sectores conservadores (que mantuvieron y acentuaron su influencia y control sobre las universidades), sino para los académicos que fueron desplazados de los espacios tradicionales de investigación en ciencias sociales. La mayor parte de los centros de estudio, surgidos a fines de la década de 1970 y durante los años 1980, pertenecieron a grupos o sectores opuestos al régimen, y su enfoque fue, por lo tanto, de corte democrático-progresista. Esto marca una diferencia fundamental con lo ocurrido en Estados Unidos y, en menor medida, en Europa, donde las universidades han mantenido una importante presencia cultural de la izquierda, lo cual llevó a los sectores más conservadores a crear sus propios centros de pensamiento fuera de la academia y orientarlos fuertemente al lobby político y los medios de comunicación.

En Chile, por el contrario, se crearon diversas instituciones (la mayor parte financiadas por fundaciones extranjeras) dedicadas a los estudios sociales, y especialmente orientadas a la crítica del modelo autoritario y a los mecanismos de recuperación y transición a la democracia. Un número importante de los profesionales que trabajaron en estos centros formaron parte de los primeros gobiernos concertacionistas tras el retorno de la democracia en 1990. Sin embargo, desde inicios de los años 1980, se aprecia también la lenta pero persistente aparición de fundaciones y think tanks conservadores y/o libertarios³⁷, cuya influencia ha ido en constante aumento, dada su cercanía y dependencia respecto de algunos de los grandes grupos económicos y empresariales del país³⁸.

La problemática en torno al concepto de think tank

Stephen Boucher y Martin Royo³⁹ citan el irónico artículo del periódico inglés *The Guardian*, donde Steve Waters⁴⁰ se pregunta con suspicacia cuáles son los métodos actuales para intentar ‘cambiar el mundo’. Su respuesta es la siguiente: ‘tomarse el poder, ser inmensamente rico o bien seguir la larga y a veces penosa vía electoral’. Sin embargo, y ahí está lo interesante, Waters agrega dos vías o atajos: ‘el terrorismo y la creación de think tanks’. El ejemplo de la política norteamericana de los últimos treinta años, y especialmente de los think tanks neoconservadores, demuestra hasta qué punto influirán las ideas de individuos determinados y comprometidos a difundirlas al interior de los círculos de poder, aunque inicialmente estas resulten impopulares. Probablemente esta estrategia, que implica una profunda convicción, acción incesante y de larga duración, es una de las claves del éxito de estas agrupaciones en el seno de la sociedad estadounidense y de su difusión a nivel mundial. Estas ‘cajas de pensamiento’ se han convertido en una suerte de arma política de largo plazo⁴¹. Aquello que la izquierda liberal norteamericana consiguió ganar en el ámbito de la cultura y del mundo académico durante los años 60 y 70, no se traspasó a la política, donde los conservadores sí comprendieron el papel de la llamada ‘guerra cultural’, creando —como respuesta— estos laboratorios de difusión de ideas. Según Stefancic y Delgado, el éxito de la contrarrevolución cultural conservadora de los años 1980 se habría debido a los siguientes factores⁴²:

La concentración en un pequeño número de ideas centrales con objetivos claros, unidas las unas a las otras de manera progresiva y encadenada (a diferencia de la dispersión de los temas de la izquierda).

La coherencia ideológica de las temáticas abordadas y planificación estratégica basada en una serie de pequeñas victorias, pero progresivas en el largo plazo. Más que confiar en la fuerza propia y lógica de las ideas, prefieren el trabajo de persuasión.

El acceso fluido a financiamiento y fuerte determinación por obtenerlo (afinidad ideológica con sectores empresariales conservadores).

Una mejor llegada y un uso intensivo de los medios de comunicación (radio, televisión, periódicos, Internet).

Una mejor gestión de ‘cerebros’, financiándolos desde sus primeros estudios hasta su instalación en estas entidades o en puestos de responsabilidad política (tutelaje). Ellos generalmente despliegan un enorme esfuerzo en el reclutamiento de jóvenes talentos.

Si bien en Estados Unidos e Inglaterra este tipo de organizaciones existen desde comienzos del siglo XX, no es sino hasta los años 1980, que adoptan un carácter global e ideológico más marcado. En 2007, se habla de un número cercano a los 4.500 think tanks repartidos por el mundo. Pero cabe hacerse primero una pregunta esencial: ¿Qué es un think tank?, ¿cómo se diferencia este de un Centro de Estudio o de una ONG? ¿Es que hablamos esencialmente de lo mismo?

De acuerdo con James McGann, uno de los académicos que más ha estudiado el tema en Norteamérica⁴³:

Los think tanks son parte integrante de la sociedad civil y sirven de catalizadores de las ideas y de la acción, tanto en las democracias nacientes como en las consolidadas... se trata de organismos independientes de investigación dedicados a cuestiones de interés público y a su análisis, para obtener de aquello proposiciones operacionales⁴⁴.

Un elemento clave de su acción es la diseminación de sus ideas de la manera más amplia posible, con la intención de influir el proceso de formación de

políticas públicas. En tal sentido, su existencia es permanente, a diferencia de las comisiones gubernamentales, así como teóricamente independiente. Tampoco cumplen funciones de gobierno, sino que más bien apuntan a orientar las políticas públicas hacia una cierta dirección mediante el lobby político o bien formando directamente a los futuros ‘tomadores de decisiones’⁴⁵.

Habitando una zona gris entre reflexión y acción, el think tank nace así de la voluntad de influenciar el proceso político según una cierta concepción del interés público, apoyándose en la investigación aplicada a los temas de interés público, y a la difusión de soluciones adecuadas respecto de quienes toman las decisiones⁴⁶.

Estas organizaciones se legitiman internacionalmente gracias al modelo de “democracia-libre comercio” que ha incitado la globalización acelerada tras el fin de los llamados socialismos reales. Ello implica que estas agrupaciones participan de un contexto en el que predomina el modelo del ‘mercado de ideas’, donde la legitimidad ideológica depende mucho menos de los partidos políticos que de la acción constante sobre los ‘tomadores de decisiones’.

Más que la conquista masiva de un electorado a partir del juego democrático clásico, lo que interesa aquí es la influencia sobre las élites políticas y empresariales, además de una acción constante sobre la opinión pública a través de los medios de comunicación.

En general, la literatura sobre los think tanks insiste en la dificultad de diferenciar estas agrupaciones de otras como las ONGs o incluso las empresas de consultoría. Si bien una frontera exacta resulta prácticamente imposible de establecer, hay que señalar —a grosso modo— que la principal diferencia con las ONGs es que estas últimas prefieren la acción directa respecto de determinadas problemáticas sociales, mientras que los think tanks suelen priorizar los estudios destinados a influir en la creación de políticas públicas. Raramente actúan en el terreno, pues su objetivo es orientar el debate público y hacer que sus ideas prevalezcan al nivel de la decisión política. Ello no excluye que ciertas ONGs también elaboren estudios cuyo objetivo sea la creación o la modificación de determinadas políticas públicas, pero esta característica no

constituye una condición necesaria para su existencia, como sí ocurre con los think tanks. Respecto de las empresas consultoras, la diferenciación resulta más obvia, pues estas buscan beneficios lucrativos directos y generalmente trabajan sobre la base de contratos. Su objetivo primordial no es el bien público, sino la eficacia y la rentabilidad económica. En cambio, para los think tanks se trata sobre todo:

(...) de contribuir a una cierta visión (la suya) del interés general, tanto si está fundada en la importancia de beneficiar a los tomadores de decisión de los progresos de las ciencias sociales; en un análisis riguroso para proponer soluciones innovadoras (supuestamente imparciales), o bien centrada en los fundamentos de una visión particular del mundo⁴⁷.

En definitiva, los think tanks no son las únicas agrupaciones orientadas a pensar la política, pero lo que los distingue es la combinación entre fundamentos teóricos y su orientación pragmática respecto de temas de alto impacto social. Lejos de la reflexión teórica esencialmente propia de las universidades, estos utilizan metodologías de las ciencias sociales con objetivos políticos claros y encuadrados en nociones valóricas (morales) previamente definidas. Su mayor o menor grado de neutralidad está dado por este último elemento y no tanto por la eficiencia técnica de sus métodos de análisis, que suelen ser los mismos que se utilizan en la academia, e incluso más sofisticados. La real diferencia se encuentra en las definiciones conceptuales que guían la investigación y en el uso que se hace de los resultados.

En la lógica de estas organizaciones, el conocimiento no posee un valor como tal, sino en tanto instrumento al servicio de ciertas políticas y de una concepción determinada de la realidad social. La defensa de tales valores define los temas, orientaciones y resultados de la investigación. Teniendo en cuenta estos factores, es posible comprender mejor el accionar de estas agrupaciones en lo que se definió como un ‘mercado de ideas’ o aquello que autores como Serge Halimi llaman ‘guerra ideológica’, para referirse a las disputas valóricas y políticas que tuvieron lugar en Estados Unidos durante las décadas de 1980 y 1990⁴⁸. Dicha confrontación se produjo en un contexto de descenso de la inversión pública en investigación durante la administración Reagan, aspecto que propició la

aparición de múltiples centros de estudio privados que adoptaron un carácter netamente militante, especialmente en el ala conservadora del Partido Republicano. No es posible alcanzar una comprensión cabal del concepto de think tank si no abordamos la tipología y la diferenciación al interior de estas organizaciones. Para ello, decidimos adoptar la clasificación propuesta por Kent Weaver, quien reconoce cuatro variedades principales de think tanks, que representan la evolución de estas organizaciones al interior de la sociedad estadounidense⁴⁹. Para entender de mejor manera el caso chileno, nos hemos permitido explicar esta tipología con mayor detalle.

Clasificación de los think tanks según Weaver:

Universidades sin estudiantes: ellas corresponden a instituciones que ponen el acento en la calidad de la investigación y en el trabajo de sus académicos. Suelen poseer estándares de objetividad rigurosos y fomentar un tipo de investigación no partidista. Su principal diferencia con los centros universitarios en su enfoque práctico, lejano de los debates teóricos de las distintas disciplinas.

Institutos de investigación bajo contrato: si bien se asemejan a los think tanks universitarios en sus métodos, se diferencian principalmente por sus fuentes de financiamiento, las cuales provienen de contratos con agencias gubernamentales o empresas privadas. Un caso ejemplar es el de la RAND Corporation en los Estados Unidos.

Centros militantes (advocacies): son los más recientes en cuanto a su aparición en el ámbito público. Estas organizaciones combinan una fuerte carga ideológica y partidista, con un poderoso aparato publicitario destinado a influir en el debate público. Más que generar investigación original, estas instituciones adoptan ciertos temas anclas y aprovechan resultados de investigaciones existentes. Su interés es hacer accesible tales resultados a los tomadores de decisiones políticas a través de documentos breves y de fácil lectura. También se interesan mucho en los medios de comunicación y en instalar temas definidos

como de interés público. Su mayor riesgo es justamente ser percibidos como rígidos y predecibles en cuanto a su producción. Más que buscar las mejores políticas para determinados problemas, centran su atención en la denominada 'guerra de ideas'⁵⁰.

Los think tanks de partidos políticos: organizados en torno a los partidos políticos, pero intelectualmente autónomos. Su trabajo es directamente útil a estos últimos (proveedores de discurso). Una pequeña parte de su financiamiento está dedicada a su labor de think tank, aunque generalmente constituyen poderosos laboratorios de ideas, pues trabajan directamente con las élites partidarias, los gabinetes ministeriales y los representantes elegidos.

Otro punto que nos parece esencial en la búsqueda de una definición operacional de think tank, es la cuestión de su función o rol al interior de una sociedad democrática. Ya dijimos que su influencia es mayor en la medida de que los partidos políticos tengan un menor anclaje ideológico y se encuentren en un espacio de competencia de ideas. En otras palabras, mientras más fuerte sea la lógica de mercado en el ámbito del debate sobre lo público, mayor influencia tendrán estas organizaciones. El caso de la sociedad norteamericana es paradigmático en este sentido, representando, al mismo tiempo, el ejemplo más antiguo de esta tendencia. En una menor escala, el Chile de la transición democrática representa un caso acelerado de evolución hacia este tipo de configuración.

En cuanto a las funciones de estas agrupaciones, autores como Weaver, Boucher y Royo identifican claramente cinco:

Fuente de ideas sobre políticas públicas: generalmente, se trata de explorar y popularizar ideas que pueden no ser políticamente realizables en el corto plazo, pero que gradualmente lograrán aceptación entre los tomadores de decisiones.

Fuente de evaluación de propuestas de política pública: en este caso se trata menos de la difusión de ideas, que de la evaluación de propuestas dirigidas a las autoridades políticas. Generalmente, toman la forma de libros o guías de política pública que suelen entregarse a las nuevas administraciones.

Evaluación de programas gubernamentales: una vez que los programas gubernamentales han sido puestos en marcha, diversos think tanks los evalúan para conocer su grado de eficiencia operativa y el logro de sus objetivos iniciales.

Formación de expertos: una de las labores tradicionalmente asociadas de los think tanks, corresponde a la formación de personal calificado para las tareas de gobierno. Estas agrupaciones proveen de expertos con alto conocimiento respecto de las mismas propuestas que fomentan. También suelen estar en el origen de los denominados 'gobiernos paralelos', donde quienes han perdido las elecciones pueden refugiarse, mantener un empleo, generar crítica y prepararse para el regreso al poder premunidos de nuevas ideas.

Fuente de autoridad técnica: los investigadores de los think tanks suelen ser consultados por los medios de comunicación en tanto fuentes autorizadas de información y opinión. Al mismo tiempo, las demandas de los medios son apoyadas por los gerentes de estas instituciones de pensamiento, convencidos de que un alto perfil público mejorará la imagen de la organización y aumentar las opciones de financiamiento.

Según Weaver, el aumento vertiginoso de estas agrupaciones en los últimos veinte años, a nivel global, ha producido una especialización y competencia creciente. Es así como han surgido una serie de temas que se relacionan con la administración y sobrevivencia de los think tanks. Estos issues son compartidos por la mayoría de estas instituciones y tienden a definirlos.

El tema de la (1) imagen es clave, pues lo que se intenta es cultivar un modelo de

imparcialidad y de neutralidad investigativa, a pesar de la fuerte presión que existe por parte de los financistas por evacuar conclusiones favorables a sus intereses particulares. Sin embargo, la predominancia de los think tanks militantes ha alterado este escenario, dando mayor preponderancia a las actividades de lobby y publicidad. Un segundo punto es la (2) producción intelectual, la cual se ha diversificado enormemente: desde los libros e informes técnicos, hasta los reportes y análisis resumidos de lectura rápida. Estos últimos han tomado gran relevancia debido a la escasez de tiempo de los tomadores de decisiones y la necesidad de producir informes en un lenguaje más simplificado y apto para un público más amplio. El asunto del (3) staff de trabajo y la disyuntiva entre tener un equipo permanente de investigadores o por contrato, se ha transformado en un asunto vital para estas agrupaciones. Ello se ha agudizado con la necesidad de contar con expertos contratados a tiempo completo, quienes deben responder regularmente a las demandas de los medios de comunicación. En tal sentido, los think tanks militantes suelen preferir equipos profesionales menos académicos, debido al descrédito científico que conlleva el trabajo de lobby. Por otra parte, los profesionales con un fuerte perfil universitario suelen utilizar un lenguaje poco adecuado para el público general. El (4) financiamiento es probablemente uno de los puntos más sensibles de estas organizaciones autodenominadas sin fines de lucro. La mayor parte de los fondos provienen del sector privado: empresas, fundaciones, donaciones personales. Sin embargo, resulta extremadamente complicado para el investigador conocer los montos y el origen del financiamiento de estas agrupaciones. En el caso de Chile, es aún más engorroso, pues no existe una cuenta ni registro público que permita saber —con mediana exactitud— esta información, ni se ha aplicado cabalmente la Ley de Transparencia y Acceso a la Información⁵¹. Por último, el tema de la (5) agenda de trabajo define en buena parte el carácter y alcance de la organización. De lo que se trata es de establecer en qué medida la agrupación se dedicará a un tema en específico o bien cubrirá un amplio espectro de cuestiones de interés público. De ello dependerá también su grado de especialización y la influencia que logrará en la orientación de las políticas públicas.

Una investigación detallada de los think tanks chilenos implica revisar estas categorías y definiciones, para evaluar cuáles se adecuan a la realidad local. No es posible trasladarlas directamente a un contexto que difiere enormemente del contexto histórico y sociológico propio de los Estados Unidos. Sin embargo, haciendo esta salvedad, es posible rescatar varios elementos que nos permiten estudiar el papel de estas organizaciones en el debate público chileno, especialmente desde el retorno a la democracia en 1990.

La experiencia chilena: ¿quiénes son los actores?

Desde los inicios de la década de 1990, una serie de nuevas organizaciones han aparecido en el espacio público chileno, cuyo objetivo ha sido la difusión de ideas orientadas hacia las políticas estatales. En la mayoría de los casos, se trata de agrupaciones vinculadas directa o indirectamente al mundo político, a sectores empresariales o bien a una combinación de ambos. Se diferencian sobre todo de las ONGs en que su objetivo principal no es la acción directa sobre la realidad social, sino que operan esencialmente como proveedores de ideas y discurso para la toma de decisiones en el ámbito público. Tampoco son organizaciones ligadas a los movimientos sociales que funcionan en los márgenes o simplemente por fuera del sistema político.

Por el contrario, estas agrupaciones son funcionales a él y a la idea de una democracia de mercado, aunque operan con métodos tomados del mundo académico, los cuales combinan con tácticas propias de la comunicación publicitaria. Si bien se definen como organizaciones sin fines de lucro, no trabajan sobre la base de un voluntariado, como sí ocurre con muchas de aquellas surgidas a partir de movimientos sociales⁵². Aquí se trata casi exclusivamente de profesionales contratados para pensar las políticas públicas e influir en el proceso de toma de decisiones, lo cual implica un costo económico no menor. Insistimos que el mayor problema al que se debe enfrentar el investigador que estudia los think tanks, es justamente conocer los montos y las formas de financiamiento de estas estructuras. En Chile, poseen el estatus de instituciones privadas sin fines de lucro, por lo que no están obligadas a hacer públicos sus balances y, por lo tanto, se dispone únicamente de la información que entregan voluntariamente⁵³.

Solo a partir del año 2000 hemos visto el surgimiento de varias de estas organizaciones, las cuales, muchas veces, sirven de plataformas políticas personales que escapan al tradicional control partidario. Algunas de corte socialdemócrata como Proyect América y Democracia y Desarrollo (ambas vinculadas al expresidente Ricardo Lagos), o bien Chile Justo, cercana a la UDI⁵⁴, forman parte de los nuevos integrantes que se suman a los think tanks tradicionales.

Como ya se dijo anteriormente, la mayor parte de estas agrupaciones, si bien se

proclaman independientes respecto de toda postura partidista, representan intereses y tendencias que se ubican dentro de un eje político/ideológico que hemos decidido separar en tres categorías: (1) los conservadores, que incluyera quienes se definen como conservadores valóricos, siendo liberales en lo económico; (2) los liberales socialcristianos, probablemente la categoría menos diferenciada, donde incluimos a instituciones cercanas a la Democracia Cristiana y a técnicos liberales de la Concertación⁵⁵, y (3) los liberales progresistas (en este último caso haciendo la diferenciación entre socialdemócratas más proclives a una mayor intervención del Estado y liberales laicos de amplio espectro). Expresamente no incluimos a aquellas organizaciones ligadas a lo que se denomina en Chile como la izquierda extraparlamentaria, pues más que influir en la toma de decisiones o intentar guiar el debate público, sus propuestas apuntan hacia un reemplazo del modelo de democracia-mercado⁵⁶. En este sentido, difícilmente se las definirá como funcionales al mismo, sobre todo cuando no participan de lo que hemos conceptualizado como un mercado de ideas.

Entre las agrupaciones que hemos catalogado como conservadoras, y que comunmente se asocian en Chile con la derecha política, el liberalismo económico desregulado, el conservadurismo valórico (moral) y los intereses de los grandes grupos económicos, encontramos varias organizaciones como:

- Centro de Estudios Públicos (CEP)
- Instituto Libertad y Desarrollo (ILD)
- Instituto Libertad
- Fundación Jaime Guzmán
- Fundación Paz Ciudadana
- Fundación Futuro

Los think tanks que definimos como liberales socialcristianos incluyen a aquellas agrupaciones cercanas de la Democracia Cristiana y al social

cristianismo corporatista, como también a las organizaciones que, reconociéndose liberales, no comparten —por completo— el legado económico del régimen militar. En general, participan de un cierto tradicionalismo en los temas valóricos y, en algunos casos, en la defensa de un mayor papel del Estado en la sociedad.

- CIEPLAN
- Fundación Justicia y Democracia
- Centro de Estudios del Desarrollo (CED)
- Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC)
- Corporación Tiempo 2000
- Fundación Frei
- Instituto Jorge Ahumada

Los think tanks que definimos como socialdemócratas o liberales progresistas tienden a defender el modelo de mercado sin excluir el Estado como un componente esencial de la regulación económica. Su principal diferencia con el grupo anterior es su liberalismo valórico y su carácter laico. Originalmente orientados hacia la centro-izquierda política (socialismo renovado), poseen importantes diferencias en cuanto a sus propuestas económicas. Como ejemplo, los liberales de Expansiva son definitivamente menos reguladores que los progresistas de Chile 21:

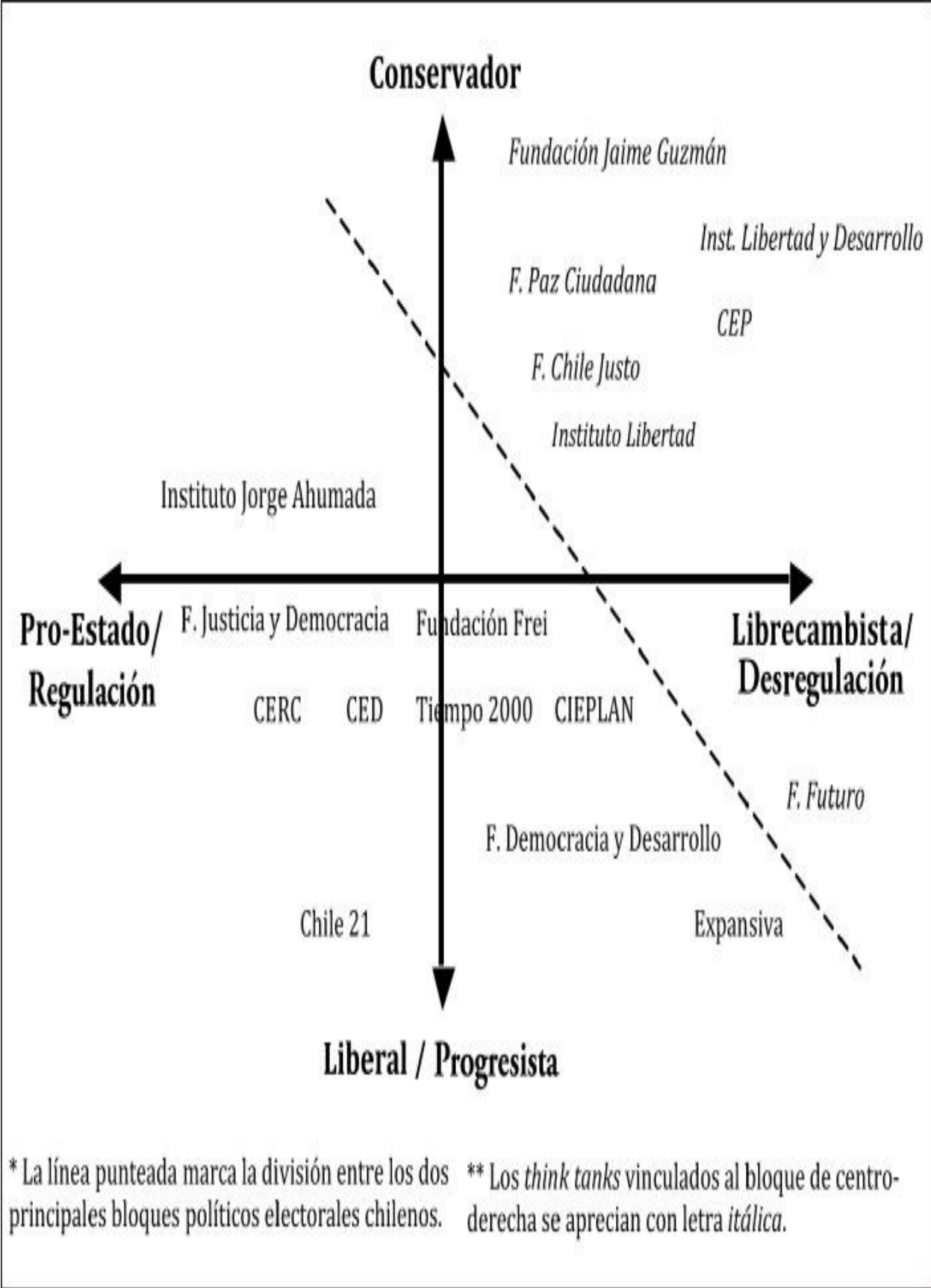
- Chile 21
- Corporación Expansiva
- Project América

- Democracia y Desarrollo

Con el fin de observar con mayor claridad la posición ideológica relativa de estas agrupaciones, hemos elaborado un sencillo diagrama. Este representa la distribución de los think tanks chilenos en la línea de la clasificación anteriormente propuesta, pero posicionados respecto de dos ejes que dan cuenta de la díada Conservador/Liberal-Progresista, asociada principalmente a los temas valóricos, de participación y de la institucionalidad democrática; y la díada Pro-Estado/Librecambista, que refleja las diferencias ideológicas respecto de la conducción económica, tema central de nuestra investigación.

La dispersión es mucho mayor en el bloque de los think tanks vinculados a la coalición de centro izquierda (Concertación), don-de nos encontramos con posiciones que van desde el conservadurismo valórico de corte estatista, hasta el librecambismo progresista en lo valórico e institucional. Es claro que no existe una coincidencia absoluta entre los criterios de la primera clasificación y el diagrama. Ello se produce especialmente cuando se trata de organizaciones como el Instituto Jorge Ahumada o la Fundación Justicia y Democracia, las cuales combinan elementos progresistas y conservadores, propios del social-cristianismo, pero además suman elementos propios de la experiencia pragmática como élites gobernantes al interior de una coalición pluripartidista⁵⁷.

Distribución ideológica de los principales think tanks chilenos



Fuente: elaboración propia a partir de la información disponible en las declaraciones de principios y los documentos programáticos de las respectivas organizaciones estudiadas.

Otro elemento interesante es la homogeneidad del bloque conservador, donde la única excepción sería la Fundación Futuro, cuyo mayor liberalismo valórico se contrapone con el tradicionalismo del resto de los think tanks de este sector. Por el contrario, las agrupaciones cercanas a la Concertación se distribuyen en los otros tres cuadrantes a la izquierda de la línea punteada, dando cuenta de una heterogeneidad mucho mayor y de los clivajes ideológicos que la tensionan. En definitiva, tanto la clasificación como el diagrama nos permiten observar la inexistencia de think tanks propiamente académicos al estilo de las ‘universidades sin estudiantes’ estadounidenses, sino que, por el contrario, la preponderancia de instituciones de tipo militante (advocacies), o ligadas directamente a partidos políticos⁵⁸.

En Chile, los centros de estudio progresistas y socialcristianos nacieron en un contexto de lucha por la democracia e inicialmente como ONGs opositoras a la dictadura. El inicio de la transición orientó su accionar hacia los temas de la gobernabilidad y la estabilidad económica⁵⁹. También perdieron influencia al ceder a muchos de sus profesionales para que asumieran puestos de responsabilidad política⁶⁰. Las agrupaciones conservadoras, por su parte, se consolidaron durante los años 1990, primero como refugio intelectual e ideológico para los herederos del régimen militar, y posteriormente como espacios de influencia política (lobby) y plataforma para un futuro retorno al poder.

¿Juego democrático o mercado de ideas?

Este tema ha sido aún poco estudiado en Chile. La instauración de una sociedad de mercado ha dado forma a un espacio donde la lucha por el poder y la transformación de la sociedad pasa por el juego de fuerzas que se relacionan de una manera distinta e incluso con otro lenguaje. El asunto de los think tanks es solo uno de los fenómenos que da cuenta de los profundos cambios que vivió la sociedad chilena a partir de mediados de los 70.

El fenómeno e importancia de estas organizaciones (think tanks) ha ido en aumento desde mediados de la década de 1980. Hoy en día ningún partido, tendencia o agrupación política que tenga ambiciones en el plano de las políticas públicas en Chile, puede prescindir de un centro de estudios o bien asesorarse por alguno de ellos. Esto es aún más evidente para aquellos sectores que, sin definirse como políticos, corresponden a grupos de la sociedad civil con fuertes intereses en la orientación de las políticas públicas. Ello queda muy claro cuando vemos el accionar de instituciones como la Fundación Paz Ciudadana o el Centro de Estudios Públicos (CEP), ligados a empresarios del mundo conservador.

En los dos casos anteriormente citados, se trata de think tanks oficialmente ‘no partidistas’, pero que representan claramente intereses de grupos específicos de la sociedad chilena. En el caso de Paz Ciudadana, se trata de una organización que busca influir sobre las políticas de seguridad pública del gobierno de turno, transformándose, de paso, en el principal referente en la materia, incluso como contraparte de los organismos oficiales del Estado. Algo similar ocurre con el CEP, que, aunque posee diversas áreas de estudio y se le reconocen méritos técnicos en cuanto a la calidad de sus informes y publicaciones, representa una corriente de pensamiento político y económico que no puede —en ningún caso— definirse como neutral en tanto se inspira en pensadores ultraliberales como Friedrich Hayek, Ludwig Von Mises o Michael Novak. Tampoco lo es cuando se presenta como la instancia de aprobación, por parte del gran empresariado, de los programas económicos de los últimos candidatos a la Presidencia de la República. Esto se hace aún más evidente con los estudios de opinión pública, donde regularmente se publica el nivel de popularidad de los principales actores de la política chilena, alimentando una suerte de carrera presidencial constante, que resulta de enorme atractivo para los medios de comunicación, sin jamás

preguntarse cuál es el interés que hay en ello.

Si el sistema político es considerado como un espacio restringido donde opera un mercado de ideas, y donde cada grupo hace lobby por imponer sus propias visiones, entonces la importancia de los think tanks irá en aumento, y no solo como instancias consultoras o creadoras de ideas, sino que como entidades decidoras, cuya independencia y neutralidad técnica e ideológica son, y pueden ser, seriamente puestas en duda.

Chile representa un caso interesante de intervención creciente de estas organizaciones en la generación de políticas públicas, respecto de las cuales persiste una opacidad sobre los intereses que defienden, sus mecanismos de financiamiento y el nivel efectivo de influencia que han tenido en los últimos treinta años⁶¹.

Una sociedad de mercado y competitiva. La nueva élite del capitalismo chileno

Se trata finalmente de asegurar la propiedad del rico, la existencia del pobre, el disfrute del hombre industrial, la libertad y la seguridad de todos⁶².

François-Antoine de Boissy d'Anglas (1795)

La historiografía socialista y marxista chilena ha puesto tradicionalmente el acento en el carácter dependiente y alienado de la oligarquía chilena, denunciándola por su alianza permanente con intereses externos⁶³. De acuerdo con esta mirada, la élite dirigente del siglo XIX no habría sido más que un conjunto de 'mercaderes-especuladores', quienes crearon un Estado a la medida de sus intereses vinculados al comercio internacional⁶⁴. El triunfo del ejército chileno en la Guerra del Pacífico (1879-1884) profundizó aún más esta tendencia al poner de manifiesto la dependencia económica del país con la incorporación de los ricos territorios salitreros del norte. La coalición de banqueros, terratenientes, mineros e industriales habría luchado contra la injerencia del Estado a fines del siglo XIX y sus intentos de limitar el librecambismo y el poder de la élite dirigente⁶⁵. Lo ocurrido con el Golpe Militar de 1973 sería, según esta mirada, una reedición de un fenómeno recurrente en la historia de Chile. En palabras de los historiadores Gabriel Salazar y Julio Pinto:

(...) para el caso chileno ha sido una voluntad deliberada, gatillada por la profunda crisis experimentada por el capitalismo criollo hacia fines de los sesenta, y por la sensación de amenaza terminal que afectó a sus grupos dirigentes durante el experimento de la Unidad Popular. Puesto en marcha bajo el férreo auspicio de la dictadura militar, el proyecto de refundación neoliberal se inspiró y desplegó gracias a la iniciativa y la conducción directa de sectores de la elite, que venían preparándolo desde fines de la década de 1950⁶⁶.

La tradición de vincular a la élite económica y política chilena con los intereses del capital internacional, ha permanecido vigente en la historiografía local, al punto de servir de explicación para las grandes crisis políticas vividas por el país desde 1891⁶⁷. Si bien esta tesis posee fundamentos sólidos, no es suficiente para dar cuenta de los cambios que se han producido en la propia élite, especialmente en el ámbito de las ideas y de las representaciones⁶⁸. Nos interesa ahondar más profundamente en estos últimos cambios y su relación con la concepción de un proyecto nacional impulsado por la clase dirigente chilena a partir de 1973.

La nueva élite político-empresarial

El historiador Ricardo Nazer⁶⁹ escribió hace algunos años que la novela de Alberto Blest Gana, *Martín Rivas*, representaba con agudeza los cambios en la sociedad chilena de mediados del siglo XIX, especialmente en lo referente al surgimiento de un nuevo tipo empresarial y al recambio de la élite aristocrática criolla, la cual había comenzado a fusionarse con los nuevos emprendedores de la industria minera⁷⁰.

[*Martín Rivas* de Alberto Blest Gana y *Agricultura Chilena* de Claudio Gay] Ambas obras daban cuenta de un nuevo tipo empresarial que constituyó una elite emergente que, en un rápido ascenso, tomó el control de las principales áreas de la economía chilena y, aunque dependiente del capitalismo inglés, constituyó un grupo dinámico y progresista durante el siglo XIX⁷¹.

Esta evolución coincidió con el establecimiento de una República relativamente estable y eficaz para el desarrollo de ciertas industrias de exportación. Esto fue de la mano con la organización de un Estado autoritario y centralizador, producto del triunfo conservador y la entrada en vigencia del texto constitucional de 1833⁷². El nuevo orden constitucional no habría sido tan efectivo si no hubiera contado con una buena base económica, la cual se explica por el escaso daño sufrido en la capacidad productiva del país durante las Guerras de Independencia⁷³. La élite dirigente del siglo XIX abrazó la causa del liberalismo económico —y solo en parte político— de inspiración europea a partir de la década de 1860, cuando las bases del orden social se encontraban aseguradas, a diferencia de lo que ocurría en otras repúblicas latinoamericanas⁷⁴.

A partir de las décadas que van de 1820-30 en adelante, las transformaciones de esa ‘aristocracia’ terrateniente adquieren más velocidad (...). Por una parte están las transformaciones económicas, que serán tratadas en detalle en otro volumen de esta historia, pero de las que nos interesa profundizar en lo que significaron para el cambio de ritmo de las elites. La tensión entre los elementos ‘patronales’

y ‘mercantiles’ de las elites cobraría mayor fuerza, influyendo sobre los proyectos políticos y económicos que defendían. La riqueza minera de la plata, el aumento de las exportaciones de cobre, el auge triguero de las exportaciones a California y el crecimiento de la actividad mercantil-exportadora (con auge del puerto de Valparaíso) cambiaron la faz de esa elite⁷⁵.

Más de cien años después, un fenómeno similar benefició a otra élite producto de un nuevo cambio político y jurídico, que le permitió establecer su predominancia. Lo anterior nos permite hacer el paralelo con lo sucedido en Chile a partir de 1973, es decir, el surgimiento de una nueva élite socioeconómica, que se fusiona y —en parte— reemplaza a la anterior, y que además se sustenta en una nueva estructura productiva, también ligada con la instauración de un modelo económico de libre comercio institucionalizado con la Constitución de 1980. De acuerdo con Sofía Correa:

Los Chicago Boys del régimen militar tuvieron, a diferencia del empresariado alessandrino, la totalidad del poder en sus manos y, por lo tanto, tiempo indefinido para transformar la estructura económica. Al mismo tiempo contaron con un contexto internacional que los favoreció plenamente, apoyándolos con un discurso legitimador, a la vez que con mercados abiertos y una amplia disponibilidad de divisas provenientes de los petrodólares, las que esta vez sí fluyeron hacia países en desarrollo⁷⁶.

El recambio de la élite empresarial chilena se vio reafirmado durante la década de 1990 gracias a la democratización de las instituciones políticas, la permanencia del modelo económico y la creciente apertura comercial de Chile. La vinculación directa entre la élite económica y la derecha política chilena se mantuvo y —en algunos casos— se consolidó durante el período tratado. No obstante, es necesario matizar la caricatura política que normalmente las considera como un único grupo sin intereses diferenciados, lo cual dista bastante de lo que hemos revisado a lo largo de esta investigación⁷⁷.

De acuerdo con el historiador argentino Luis Alberto Romero, la discusión actual sobre las élites se ha abierto hacia un horizonte que ha superado la simple

definición de clase que tradicionalmente se le había dado a los conceptos de burguesía y oligarquía en América Latina, especialmente durante los convulsionados años 1960.

Respecto de la oligarquía latinoamericana, los estudios influidos por el marxismo, por la CEPAL, y por la corriente de la dependencia después, pusieron el acento en su comportamiento parasitario, despilfarrador y 'feudal'; respecto del Estado, se admitía que existían subtipos: en el caso de Chile, había acuerdo para subrayar su importancia excluyente como organizador de la sociedad civil⁷⁸.

En realidad, cuando se decide asumir el punto de vista de los sujetos que se estudia y concentrar la atención sobre las consideraciones que estos tienen acerca de su grupo de pertenencia y sobre las imágenes que conforman su identidad, lo cierto es que las cosas se complican bastante⁷⁹.

Esta evolución también da cuenta de los cambios que se dan en el plano simbólico al interior de la élite, especialmente respecto de la relación que existe entre las manifestaciones de lo religioso (en aumento) y su traducción en un conjunto de valores que influyen directamente en la conducción política y económica del país.

(...) hay que tener en cuenta que la tesis que describe a la religión como una respuesta a carencias de tipo económico tiene sus limitaciones. El caso más relevante en este contexto es de la elite económica chilena [a partir de 1968]. La religión en este grupo no se da en un contexto de privación si no de extrema abundancia y oportunidades⁸⁰.

Origen de la nueva élite

En estudiviosa descripción de Cristián Gazmuri sobre las élites en Chile en el siglo XX, queda de manifiesto la transformación que se produce a fines de la década de 1960, especialmente con posterioridad al Golpe de Estado de septiembre de 1973. Compartimos la posición del autor, que al mismo tiempo también es sostenida por Verónica Valdivia, respecto de que los militares que derrocaron al presidente Allende no poseían un proyecto económico definido ni tampoco una idea del país a la que aspiraban⁸¹. Por el contrario, tenían bastante claro aquello a lo que se oponían (la revolución marxista), pero no contaban, en cambio, con un modelo alternativo ni tampoco con los conocimientos necesarios para implantarlo y conducirlo. Fue este vacío de proyecto el que permitió que poco a poco los dirigentes conservadores gremialistas y un grupo de economistas selectos, implementaran un plan radical de transformaciones socioeconómicas. Este también dio como resultado el surgimiento de una élite empresarial renovada. Sin embargo, como planteamos en el Capítulo III, ello solo ocurrió tras superar un período de disputas al interior del régimen militar, que se saldó finalmente con el desplazamiento del poder de los militares nacional-desarrollistas, y con el triunfo del proyecto autoritario/neoliberal.

Un cambio sustancial en el origen de la élite chilena está dado por el reemplazo de las instituciones clásicas que marcaron su formación educacional durante la mayor parte de la historia republicana del país, al menos hasta la primera mitad del siglo XX⁸². En este caso, nos referimos a la Universidad de Chile (1842) y al Instituto Nacional (1813), ambas inspiradas por las ideas de la educación laica y pública.

Por el contrario, durante el siglo XX, la Universidad de Chile solo formó a un grupo de la élite con el suficiente poder y la cohesión como para influir —de cierta manera— en la historia del país mediante la implantación de un modelo de desarrollo. Se trató de los ingenieros civiles que dieron origen a la CORFO⁸³, pero que venían participando en política desde el primer gobierno del general Carlos Ibáñez del Campo (1927-1931)⁸⁴.

El proyecto concreto de la CORFO, según Raúl Sáez, fue de Desiderio García,

en la época que integraba el equipo de Pablo Ramírez durante el primer gobierno de Ibáñez. Dejado de lado como consecuencia de la crisis de 1929, el proyecto fue retomado por la candidatura presidencial de Gustavo Ross. Derrotado este, fue finalmente el Frente Popular quien concretizó la idea en 1939, con miras, inicialmente, a la reconstrucción de la zona de Chillán, pero después como un plan de desarrollo económico general para el país, enfatizando la industria pesada y de manufacturas y fundado en el empuje del Estado⁸⁵.

A partir de la década de 1930, otras instituciones vinieron a desafiar el predominio de la Universidad de Chile en la formación de la élite local, poniendo de relieve el desplazamiento de los sectores oligárquicos de la sociedad chilena hacia otras instituciones como la Pontificia Universidad Católica de Chile. Este fenómeno estuvo directamente relacionado con el ascenso social de las clases medias a partir de la década de 1930, y su acceso a la educación pública, con su creciente influencia en la Universidad de Chile.

Formación educacional de los Ministros de Estado (1925-1999)

Institución	Cifra	Porcentaje
Universidad de Chile	199	40,82
Pontificia Universidad Católica de Chile	57	11,55
Escuela Naval	35	7,22
Escuela Militar	66	13,61
Escuela de Carabineros	10	2,06
Escuela de Aviación	13	2,68
Educación Secundaria	16	3,30
Educación Básica	2	0,41
Otras instituciones	6	1,54
Sin datos	69	13,81
Total Ministros de Estado	489	100%

Fuente: Gazmuri, Cristián, Notas sobre las elites chilenas 1930-1999, Santiago, Documento de trabajo n° 3, Instituto de Historia Pontificia Universidad Católica de Chile, 2001, p. 12.

Las razones para este cambio son múltiples, pero el lento ascenso de la Universidad Católica (PUC) estuvo directamente relacionado con las transformaciones que vivió la sociedad chilena durante los años 30, especialmente en lo relacionado con la estrecha dependencia de la élite nacional respecto del panorama intelectual europeo. Las corrientes de pensamiento que tradicionalmente fueron parte de la formación laica de la Universidad de Chile —principalmente el racionalismo y el positivismo—, se vieron debilitadas durante este período, al mismo tiempo que se produjo una renovación esencial de la intelectualidad católica respecto del mundo moderno. En este sentido, fue particularmente importante la influencia del pensamiento católico francés a través de autores como León Bloy, Charles Péguy, Paul Claudel, Georges Bernanos, François Mauriac y, sobre todo, Jacques Maritain⁸⁶.

La aceptación doctrinaria de varios elementos de la modernidad por parte de este grupo de pensadores católicos, influyó notablemente en toda una generación de jóvenes universitarios chilenos, incitándolos a participar activamente de la vida política y a cristianizar el mundo a través de ella. Siendo una minoría dentro del mundo católico chileno, este grupo alcanzó un nivel de influencia no menor, y que poco tenía que ver con su escaso número. A esto se sumaba la incorporación creciente de nuevos miembros de la clase media urbana⁸⁷ a la Universidad Católica, lo que también favoreció la formación de una intelectualidad joven y renovadora en el país⁸⁸. La PUC también amplió su horizonte de carreras y disciplinas, abriéndose a las ciencias y a la técnica.

Pero la realidad es que, desde 1920, todos los presidentes de Chile han pertenecido a ella o han sido hijos de presidentes que han sido de clase media (con la relativa excepción de Salvador Allende, quien era de la oligarquía de Valparaíso por parte de padre, pero no de madre)⁸⁹.

Fue así que la ampliación de la Universidad, las nuevas carreras que comenzaron a ofrecerse, el enriquecimiento de la discusión intelectual y académica, atrajeron hacia la UC a los mejores elementos de la juventud católica de Chile. En esta época (a partir de 1930, aproximadamente) se educó en la UC y en especial en la Escuela de Derecho, una generación particularmente brillante, de la cual saldrían intelectuales y políticos del más alto relieve nacional y de los más diversos signos doctrinarios: Eduardo Frei, Julio Philippi, Jaime Eyzaguirre, Mario Góngora, Bernardo Leighton, Bernardino Piñera y otros⁹⁰.

Los jóvenes falangistas, escindidos del Partido Conservador, así como los neoconservadores hispanistas, se cuentan entre los grupos que animaron la vida intelectual y política de la Universidad Católica durante las décadas de 1940 y 1950⁹¹. Fue así como el debate sobre los asuntos públicos fue tomando mayor importancia al interior de esta universidad, desplazando —a veces de manera casi imperceptible— al dominio absoluto que, por más de un siglo, había tenido la Universidad de Chile. Finalmente, de estos grupos saldrían muchos de los líderes políticos e intelectuales más importantes del país durante la segunda mitad del siglo XX. La década de 1960 vería el surgimiento de una nueva generación de líderes conservadores al interior de la Universidad Católica, aunque esta vez ligados principalmente al mundo de la economía y los negocios, pero también la aparición de una juventud de izquierda de origen cristiano y con una profunda voluntad de poder y de ruptura con las formas tradicionales de organización de los partidos políticos marxistas⁹².

Para los fines y objetivos de nuestra investigación, nos interesa principalmente el primer grupo de jóvenes ligados al gremialismo y a los estudios en economía. En ningún caso, pretendemos decir que ellos conforman únicamente la élite, pero sí deseamos destacar que entre ellos se encuentra mayoritariamente a los nuevos líderes que darán forma a la élite político empresarial que irá configurándose en Chile desde mediados de la década de 1970.

El triunfo de Salvador Allende en 1970, así como el ahondamiento del proceso de Reforma Agraria iniciado por la Democracia Cristiana y profundizado por el gobierno de la Unidad Popular, marcaron el fin de la vieja élite del siglo XIX, ligada a la posesión de grandes extensiones de tierra (latifundio) y a las actividades relacionadas con la minería⁹³.

Buena parte de la elite chilena —agricultora por herencia ancestral, empresaria y muy conservadora en lo valórico— se sintió abandonada, juzgada y expropiada por los mismos [la Iglesia post concilio Vaticano II] que antes habían sido sus aliados de batallas memorables: a favor de la Iglesia en las leyes laicas; a favor de los empresarios en su lucha contra los movimientos sociales⁹⁴.

Este grupo social ya mostraba algunos signos de decadencia desde fines de la década de 1950. El nuevo grupo conservador que vino a reemplazarlo ya no sentía la antigua vinculación con el Estado, que la vieja oligarquía había creado a su propia imagen. Los jóvenes conservadores de fines de la década de 1960 no pretendían continuar una política defensiva de contención respecto de la izquierda y de los movimientos populares. Al contrario, decidieron pasar a la ofensiva cuando la oportunidad histórica estuvo a su favor. Ello ocurrió con el golpe militar de septiembre de 1973.

Para llevar a cabo su proyecto, contaron también con la ayuda de algunos grupos económicos, quienes apoyaron monetaria y comunicacionalmente con la elaboración de una estrategia de transformación económica que hemos definido como de liberalismo extremo. Fue así como estrecharon contactos con algunos empresarios jóvenes (muchos de ellos formados en la Universidad Católica), caracterizados por su audacia, y que habían tomado fuerza durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970). Posteriormente, serían célebremente conocido como los ‘Pirañas’⁹⁵.

(...) El grupo BHC (Banco Hipotecario de Chile), más conocido en el ambiente como los ‘Pirañas’, encabezado por Javier Vial y en el cual participó el ahora dueño de Megavisión [canal de televisión chilena], Ricardo Claro. Este era uno de los dos conglomerados económicos más importantes de la década del 70, cuyo crecimiento está vinculado a la primera ronda de privatizaciones de empresas públicas que comenzó en 1974, y es uno de los principales responsables de la crisis financiera de 1982⁹⁶.

El equipo de economistas surgidos en la Universidad Católica asumió las tareas de la dirección económica del país a partir de 1974, iniciando un proceso de enormes transformaciones a partir del año siguiente, inaugurado con lo que denominamos la política de tratamiento de shock. Fue justamente entre los años 1975 y 1983 cuando el tradicional mundo patronal asumió —no sin grandes reticencias— el costo del paso de una economía cerrada y resguardada a un sistema de libre comercio, donde los empresarios ya no contaban con la protección del Estado ni menos con un mercado seguro y previsible para sus productos. Una nueva generación de empresarios, muchos de ellos con estudios en administración y economía, comenzó a tomar forma en Chile, orientados principalmente hacia las actividades extractivas y de exportación de recursos naturales y agropecuarios. Todo ello fue en desmedro del grupo de industriales que había crecido, desde fines de la década de 1930, gracias al modelo de industrialización y sustitución de importaciones (ISI)⁹⁷.

El hecho de haber conducido la política económica del país no evitó que el grupo de economistas liberales (Grupo de Chicago) descuidara espacio de control al interior de la Universidad Católica de Chile, especialmente en la Facultad de Economía y Administración. Por el contrario, de acuerdo con nuestra investigación y siguiendo la fórmula utilizada por Gazmuri, dicha facultad se ha convertido es una suerte de sancta-santium de la economía neoclásica en Chile, extendiendo su influencia a prácticamente todas las escuelas de economía del ámbito universitario local.

Es así que hay motivos para pensar que el conjunto de economistas neoliberales a que nos hemos referido es una elite de las más poderosas que han actuado en la historia de Chile reciente⁹⁸.

Nuestras investigaciones coinciden con la afirmación de este autor, para quien resulta evidente que no existen otros grupos homogéneos o élites posteriores a la década de 1930 que hayan surgido de la Universidad de Chile con la misma resonancia en la historia del país que aquellos aparecidos en la Universidad Católica. Sin embargo, consideramos esta afirmación incompleta, pues desde la década de los 90 otros centros de educación privada han ido adquiriendo un predominio creciente en la formación de la élite económico-empresarial del país,

perdiendo la Universidad Católica el cuasi-monopolio que tuvo desde los años 30. En este sentido, la vinculación de estas instituciones educativas con determinados grupos religiosos católicos conservadores (principalmente el Opus Dei y los Legionarios de Cristo), aparece como un rasgo nuevo de la élite chilena a partir de la década de 1980.

Los colegios [del Opus Dei] Tabancura, Cordillera, Los Andes y Huelén, se encuentran constantemente entre los ‘top ten’ en los resultados Simce y PSU. Su universidad (de los Andes) es una de las top entre las privadas, con una Escuela de Medicina reconocida. Fuera de Chile, su escuela de negocios de la Universidad de Navarra es de las punteras a nivel global. De modo que no es extraño que por su calidad, tal como en los 50 y 60 ocurrió con el Saint George’s, San Ignacio y Verbo Divino, las elites chilenas comenzaran a llevar a sus hijos a educarse con ellos y, décadas más tarde, como constató un estudio especializado reciente sobre los ejecutivos chilenos, sus ex alumnos atestaran las gerencias y los directorios del empresariado nacional⁹⁹.

(...) Y justo entonces aparece un movimiento religioso que le ofrece a la elite empresarial todo lo que la nueva Iglesia le quitaba: educación de primerísima calidad, conservadora en lo valórico y neutra respecto a las luchas sociales. Admirador del trabajo bien hecho (entre ello —por supuesto— el trabajo empresarial) y centrado en la vida sacramental y personal, más que en los ‘pecados sociales’ y las culpas colectivas del sistema capitalista opresor¹⁰⁰.

Fisonomía de los nuevos grupos dirigentes

Como hemos mencionado anteriormente, los cambios sufridos por la élite chilena desde fines de la década de 1960 han sido de una enorme magnitud. Los viejos clivajes que definieron a los grupos dirigentes desde mediados del siglo XIX han ido desapareciendo¹⁰¹, para ser reemplazados por otros bastante más permeables y relacionados directamente con los negocios y las redes educativas más que con la posesión de la tierra¹⁰². En este sentido, la élite actual se acerca mucho más a la idea tradicional de burguesía¹⁰³, aunque haciendo la salvedad de que hemos utilizado este concepto a falta de uno que refleje mejor la transformación vivida por este grupo.

El proceso que vivió Chile en el resto del siglo XIX hace presumir que para alcanzar la meta los grupos dirigentes identificaron tres tareas específicas, de cuyo logro dependía el futuro: en primer lugar, establecer una estructura de poder que les permitiera reemplazar al viejo sistema colonial; en segundo lugar, insertar a la economía nacional en el concierto de la economía mundial; y, por último, identificar un modelo de país y nación al cual adherir¹⁰⁴.

Entre los elementos que resaltan al analizar los cambios vividos por la élite dirigente chilena, destaca su estrecha vinculación con la transformación económica impuesta al país a partir de 1975, especialmente en lo que se refiere a una mayor permeabilidad a la entrada de nuevos integrantes. Estos provienen principalmente de grupos inmigrantes, pero también de sectores de clase media que han surgido socialmente por medio de los negocios y la educación privada. Poco a poco, el mérito ha suplantado a los apellidos y a la propiedad de grandes extensiones de tierra como símbolos de estatus en la sociedad chilena. Sin embargo, la meritocracia —en términos de acceso a la élite dirigenal— continúa estando restringida a no más del 20% de la población del país.

La crisis de la vieja élite a fines de la década de 1960 coincidió con la crisis del Estado de Compromiso, el cual definimos en los capítulos II y III. Los pilares de la antigua aristocracia terrateniente chilena, principalmente ligados al comercio y a la posesión de la tierra, fueron sacudidos por el proceso de la reforma agraria y

la movilización social y política previa al Golpe de Estado de 1973. Pero es en el ámbito cultural y simbólico, donde el acercamiento de la Iglesia Católica hacia los sectores populares alienó a la élite tradicional de la jerarquía eclesiástica. Sin embargo, ello también eliminó las trabas morales que existían al desarrollo de un capitalismo sin complejos de justicia social¹⁰⁵.

La élite tradicional chilena rechazó el nuevo lenguaje de la Iglesia y su denominada ‘opción preferencial por los pobres’, la cual dejaba de lado las luchas tradicionales de la Iglesia chilena por los intereses del mundo conservador en las áreas de la educación, la movilidad social, los valores morales y la oposición a las ideologías de izquierda, especialmente el marxismo¹⁰⁶. Quedó entonces la vía abierta para que una nueva concepción sobre la riqueza y el poder se impusiera en una élite que buscaba desesperadamente un discurso y un ethos que la Iglesia Católica posconciliar ya no era capaz de entregarle. En tal sentido, la relación sin complejos de la teoría económica neoclásica (fomentada por el grupo de Chicago) en torno a la riqueza material, sumada a la visión religiosa elitista de movimientos religiosos como el Opus Dei¹⁰⁷ y los Legionarios de Cristo, han jugado un papel clave en la conformación de una nueva élite capitalista impermeable a cualquier discurso igualitario.

Precisamente, según historiadores y empresarios, fue esta línea de pensamiento [la crítica a los ghettos elitistas de la sociedad chilena] la que produjo la fuga, en los años 70, del sector empresarial tradicional a otros referentes religiosos, como el Opus Dei, los Legionarios de Cristo o Schoenstatt. ‘Los jesuitas perdieron su público objetivo en la elite porque optaron por criticarla. Y con eso se alejaron, dejándole paso al Opus y Legionarios’, argumenta un empresario¹⁰⁸.

Hasta el momento, existen poco trabajos históricos y sociológicos sobre la élite dirigente chilena que cubran el período abordado en este estudio. Sin embargo, durante el año 2000, un grupo de investigadores de la Universidad Adolfo Ibáñez elaboró un estudio sobre los cambios sufridos por la élite dirigenal chilena durante el período comprendido entre 1950 y 2000¹⁰⁹. Si bien esta investigación comprende un diseño muestral reducido (no más de 550 sujetos), y surge de una de las universidades que mejor representa al restringido mundo de la élite chilena, no deja de resultar interesante analizar sus resultados. Algunos

de estos nos han servido para elaborar algunas de nuestras conclusiones.

En síntesis, los resultados de este trabajo evidencian que la élite chilena sigue siendo bastante homogénea. No obstante lo anterior, en los últimos treinta años, ha vivido cambios mayores, abriéndose a nuevos grupos sociales y teniendo un mayor grado de permeabilidad producto de una creciente valoración del mérito personal. En este sentido, planteamos la existencia de una nueva élite emergente que —en forma creciente— se posiciona en los más altos puestos del poder económico y político del país.

Hasta 1950, efectivamente la élite tendió a perpetuarse de manera endogámica, y aunque si bien existía una mínima movilidad social anterior a 1970, esta se dio de manera acotada y muy relacionada con el Estado y la política. Mucho menos importante fue —durante esos años— la actividad empresarial como motor del ascenso social. De acuerdo a lo sostenido por Lucía Santa Cruz, se trataba de una permeabilidad restringida y controlada, donde la élite original impuso su ética y su estética.

De acuerdo con la interpretación de estos resultados, los nuevos criterios de mercado introducidos durante la dictadura militar, habrían alterado —de manera radical— las fuentes de diferenciación a interior de la élite. El resultado sería una mayor fluidez meritocrática entre los grupos dirigentes y la clase media (aunque no haciéndola extensiva al resto de la sociedad). Para el equipo de investigación dirigido por Lucía Santa Cruz y Eugenio Guzmán, el tradicional rol nivelador del Estado de Compromiso (1938-1970) no habría sido tal, al menos en lo referido a la élite dirigente chilena. Por el contrario, estos autores plantean que su desaparición aumentó los niveles de competencia y, en consecuencia, la movilidad social.

A comienzos del siglo XXI, la élite dirigente aún se concentra en Santiago. Ella se educa en no más de diez colegios privados. Sin embargo, un 29% ya no proviene de este tipo de instituciones escolares, lo cual muestra un aumento de aquellos miembros de las capas medias formados fuera de las redes tradicionales elitistas¹¹⁰. En otras palabras, una de cada tres personas que pertenecen a la denominada élite emergente no se formó en escuelas o colegios exclusivos y casi la mitad de ella corresponde a estudiantes universitarios de primera generación¹¹¹. Solo un 27% de los más reconocidos líderes empresariales y profesionales de la sociedad chilena pertenece a las familias tradicionales de la oligarquía del siglo XIX. De acuerdo con la interpretación de Lucía Santa Cruz,

esta apertura de la élite a nuevos grupos ha sido el fruto de un aumento significativo de las alternativas educativas en el país a partir de la segunda mitad de la década de 1970, pero —sobre todo— de la implantación de una economía liberal. A juicio de esta autora, este tipo de modelo económico favorece el mérito personal por sobre las consideraciones aristocráticas de tipo familiar, clientelista o relacionadas con la posesión de la tierra (latifundio).

Desde fines de la década de 1960, los miembros de la nueva élite emergente han preferido otras disciplinas (economía, ingeniería, administración de empresas) y carreras profesionales, dejando de lado los tradicionales estudios de derecho o arquitectura. Este nuevo grupo ahora elige carreras como ingeniería civil o medicina, las que —al menos en Chile— requieren de los más altos puntajes de ingreso en las pruebas de selección universitaria y también de las mejores notas obtenidas en la educación secundaria. A esto se agrega que sus miembros poseen más años de estudio en el extranjero y valorizan más los posgrados, en lo cual superan largamente a la élite tradicional.

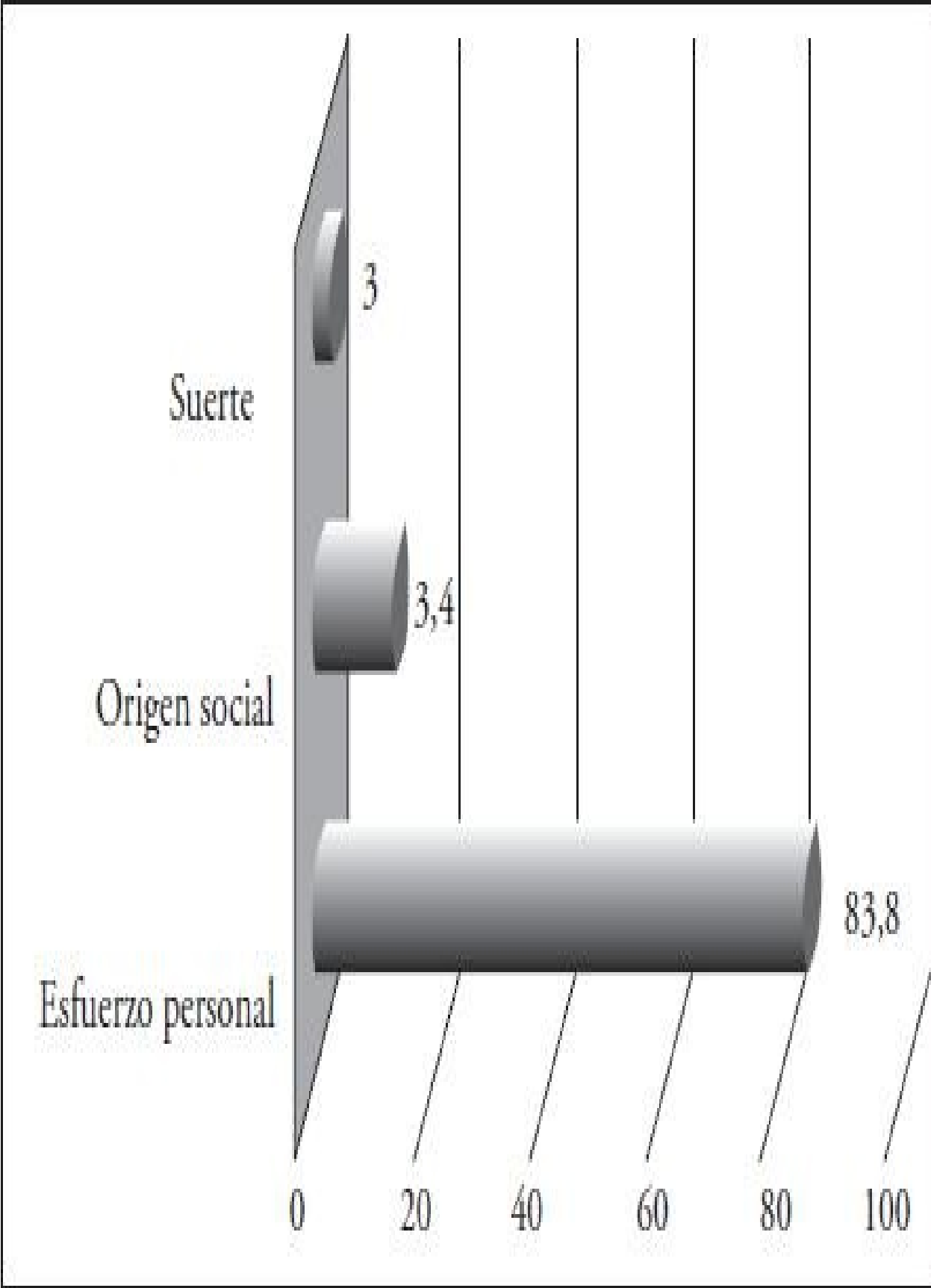
La preocupación por el trabajo, también, contrasta con los ideales clásicos de la élite chilena, para quien el comercio y las profesiones liberales no estaban a la altura de aquellas tareas relacionadas con la política, la administración del Estado y el manejo de las grandes propiedades agrícolas.

...[así se entiende] la idea que la realidad rural es esencialmente aquella de la hacienda; que esta representa una clave interpretativa fundamental para explicar el funcionamiento de todo el país y que los señores y patronos de la tierra, magnánimos y crueles al mismo tiempo, representan los modelos originarios en los cuales se inspiran, tal vez inconscientemente, los gobernantes de turno¹¹².

En definitiva, la tendencia muestra que el núcleo tradicional de la élite se achica y crece la élite nueva. A esta última, se integran personas que ganan poder a través de sus méritos profesionales y sus éxitos en el mundo de la empresa y los negocios. En su mayor parte, no son herederos de grandes fortunas, sino más bien del esfuerzo de sus padres por brindarles una educación de calidad. Hoy no es posible encontrar miembros destacados de la élite que no tengan estudios universitarios, como sí ocurría hasta los años 1950. Las cifras del estudio

muestran que en el año 2004 el 97% de la élite poseía educación universitaria. El 58% se educó en la Pontificia Universidad Católica (PUC); el 38%, en la Universidad de Chile, y el resto lo hizo en otras universidades chilenas o extranjeras. Hoy en día, resulta más importante el poseer conocimientos y buenos contactos (redes de pares).

Factores relevantes para la élite a la hora de lograr oportunidades (%)



Fuente: Santa Cruz, Lucía & Aguilar, Marcela, “Una sociedad que se mueve. Las claves de la elite de hoy”, El Sábado, 13/04/2004, p. 27.

Los espacios de sociabilidad de la élite también han cambiado. Tradicionalmente, sus miembros se reunían en sus respectivos hogares, lo cual limitaba las posibilidades de que personas desconocidas o ajenas al círculo se integraran, incluso si poseían la riqueza suficiente para hacerlo¹¹³. Esto fue lo que sucedió con diversos grupos de inmigrantes, quienes alcanzaron un importante éxito económico, pero no fueron aceptados por la élite tradicional sino hasta fines de la década de 1960.

La limitación de las oportunidades y la exclusión de ciertos espacios y círculos sociales fue el costo de la discriminación que los inmigrantes vivieron en Chile, pero la violencia ni la agresión física. Por lo menos no generalizada, porque sí hubo excepciones. Es necesario señalar, sin embargo, que la ‘turcofobia’ no fue un fenómeno exclusivo de Chile, sino que también hubo manifestaciones en ese sentido en otros lugares de América¹¹⁴.

La élite emergente, por el contrario, establece sus relaciones en sitios semipúblicos. Este es el caso de los clubes, a los cuales se accede mediante el pago de una membresía y —cada vez menos— por invitación. Para los miembros de este nuevo grupo, resulta más importante destacar en los ámbitos laborales, políticos o empresariales que ser aceptados por el núcleo tradicional o casar a sus hijos con alguno de sus miembros, como sí ocurría hasta la década de 1960.

El estudio de Santa Cruz, Guzmán y Martinovic muestra que un 90% de los miembros de la élite profesa una creencia religiosa, y de ellos un 92% se declara católico. La investigación no profundiza sobre las razones ni los niveles de la convicción religiosa, pero sí muestra que los eventos sociales católicos y las misas (dominicales y diarias) constituyen espacios de sociabilidad para quienes se consideran parte de un mismo círculo exclusivo. La religión de la clase

dirigencial es un espacio de redes y contactos que fortalecen la identidad del grupo y su sentido de pertenencia. Este panorama de la capital contrasta con el resto del país, donde un porcentaje menor del 70% de los chilenos mayores de quince años se declara católico, y donde el culto evangélico/protestante (15%) ha ido ganando seguidores de manera importante desde la década de 1960¹¹⁵.

Élite, religión y mercado

En esta parte final de nuestra investigación, abordamos los cambios que ha tenido la élite chilena respecto a la relación entre los valores de la religión católica y las necesidades de una economía capitalista moderna. El mercado tiene hoy en día un lugar central en la definición de la sociedad chilena. La revolución económica iniciada en Chile a mediados de la década de 1970 por el grupo de Chicago y su alianza con los gremialistas, no solo transformó al país como nunca antes en su historia. No obstante, sabemos menos de cómo la élite cambió, dejando atrás los valores aristocráticos del origen y la tenencia de la tierra, suplantándolos por aquellos del éxito profesional y económico (lo que hoy se denomina espíritu emprendedor). Esta transformación no se llevó a cabo sin una fuerte tensión y ruptura con el pasado, la cual queda demostrada con la distancia que tomó la élite de la jerarquía de la Iglesia Católica desde los inicios de la década de 1960. Aquí comenzó el período de mayor influencia del mensaje del Concilio Vaticano II y de la Teología de la Liberación en América Latina (1962-1980)¹¹⁶. En palabras de César Barros, miembro de una de las familias tradicionales chilenas:

La Iglesia Católica chilena había sido siempre muy conservadora: de las últimas en consentir la separación de la Iglesia del Estado, sin ley de divorcio y aliada con buena parte de la élite dirigente, en un partido (el Conservador) que la defendía con bravura (...). Pero de repente, en un corto período de no más de 15 años —entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y el Concilio Vaticano II— ocurrió un verdadero desastre ideológico. Nuestra conservadourísima Iglesia Católica chilena dio un paso a la izquierda y dejó de ser confiable (...). La profascista Falange se hizo social cristiana. El Cardenal Silva [Raúl Silva Henríquez] apoyó la reforma agraria. Los pasos siguientes fueron tenebrosos. La juventud Demócrata Cristiana arrancó hacia la izquierda formando primero el MAPU y luego la Izquierda Cristiana. Los curas jóvenes se tomaron la catedral. El Cardenal Silva apoyó la toma de la UC [Universidad Católica] y su posterior reforma¹¹⁷.

Pero a pesar de que los estudios recientes demuestran que los nuevos valores de la élite dan preponderancia al mérito y al éxito individual, ello no la ha hecho más liberal en cuanto a sus posiciones respecto de la política y especialmente de la moral (en Chile estos asuntos suelen ser denominados como ‘temas valóricos’). En este sentido, la religión de la élite continúa siendo mayoritariamente católica, pero con un fuerte sesgo hacia el conservadurismo, lo cual la alejó —por al menos tres décadas— de la Iglesia Católica oficial. Esta aparente paradoja entre un liberalismo económico exacerbado y un conservadurismo religioso y moral, constituye una de las singularidades de la transformación económica de Chile, y un elemento de diferenciación de la élite económica local en relación a sus pares sudamericanos (quizás con la sola excepción de Colombia).

Un empresario extranjero, muy observador, me comentaba hace poco [2005] el sesgo ultramontano¹¹⁸ en materias valóricas de los empresarios chilenos. ‘No es así en Argentina, ni en Brasil, ni en México. El empresariado chileno realmente opina en forma mucho más militante [catolicismo conservador] que en cualquier parte de América Latina’¹¹⁹.

Las prácticas religiosas de la élite empresarial chilena han variado dentro de un contexto de rápida modernización de la economía y de las estructuras sociales del país. Pero esto no ha ido a la par de la visión tradicional de la sociología que vincula la modernización con una disminución de la práctica y de la influencia religiosa. La teoría de la secularización, inspirada y elaborada en Europa, no coincide con lo sucedido en Chile y tampoco con otras experiencias históricas como la estadounidense¹²⁰. El proceso chileno demuestra que un aumento de la racionalidad económica capitalista puede ir de la mano con mayores índices de práctica religiosa, sobre todo a nivel institucional.

Compartimos la tesis de María Angélica Thumala¹²¹, quien sostiene que en Chile el catolicismo del grupo dirigente inunda el campo de representaciones de la élite en su conjunto (incluso de aquellos que se definen como agnósticos o que profesan otra religión), expandiendo sus concepciones sobre la familia y la educación al resto de la sociedad¹²². A esto se agrega un segundo punto, tanto o más importante que el primero: la práctica religiosa es una fuente de distinción

social, que se ejemplifica en la demanda por ciertas formas de religiosidad piadosa y en la defensa a ultranza de ciertos valores católicos (evidentemente no todos). Sin embargo, como bien lo menciona Thumala, el éxito que han tenido entre la élite chilena agrupaciones religiosas como el Opus Dei y los Legionarios de Cristo, no reside solo en la distinción social y la defensa de una cierta moral. El punto central lo constituye la necesidad de la élite de renovar su ethos frente a las orientaciones progresistas de la Iglesia oficial sostenidas durante las décadas de 1960 y 1970¹²³.

Fueron los movimientos religiosos conservadores quienes vinieron a llenar un vacío de la élite empresarial y a consolidar la estructura social surgida de la radical transformación económica que ha vivido Chile desde 1975. Asimismo, estos le han otorgado un nuevo sentido a la concepción de ‘vocación de servicio público’ que siempre han manifestado los miembros de la élite dirigente chilena. Esta supuesta vocación no es sino la expresión del deber que se asignan para conducir los destinos del país supuestamente sin otro interés que el del propio país y que constituye una herencia de la vieja clase dirigenal terrateniente¹²⁴.

Más que nunca antes en la historia de Chile, los logros macroeconómicos de la década de 1990 han generado un nuevo discurso de éxito en la élite chilena, acostumbrada desde la Independencia (1810-1818) a los relatos que justificaban la inferioridad económica del país y la supuesta austeridad de su clase dirigente¹²⁵. Solo en estos últimos treinta años ha surgido un nuevo discurso, que pone el acento en el orgullo de la conducción económica del país por parte de la élite, incluso más allá de las diferencias políticas que existan en su interior. Si bien la derecha no ha estado en el gobierno entre 1990 y 2010, y su apoyo a la dictadura de Pinochet le significó un descrédito importante dentro y fuera del país, esta ha defendido invariablemente su papel central en la modernización de Chile. Ello, incluso, cuando esto significó —para muchos de sus partidarios— la pérdida de la protección estatal y la quiebra de sus industrias.

El nuevo discurso es también el resultado de una respuesta de la élite ante el peligro que sintieron, desde fines de la década de 1950, frente a la amenaza de la izquierda. El proyecto socialista de Allende permanece —hasta el día de hoy— como el más crudo recuerdo de una agresión a su estilo de vida y a temas esenciales como la propiedad privada, el latifundio, además del valor sagrado atribuido a la familia y al trabajo.

Varios miembros de la elite contribuyeron a la transformación de la economía chilena en un sistema de libre mercado, diseñando e implementando las políticas necesarias que llevarían la sociedad chilena ‘desde el caos hacia el camino del orden y el progreso’¹²⁶.

Para proteger el proyecto económico surgido a partir de Golpe de Estado de 1973, este grupo consideró esencial ‘limpiar’ a la doctrina católica de sus influencias revolucionarias e izquierdistas.

Para ello fue necesario preservar las viejas prácticas del catolicismo previo al Concilio Vaticano II, tanto en la liturgia como en la educación impartida a los niños y jóvenes de la élite¹²⁷. Fue justamente en este punto donde el apoyo de movimientos religiosos como el Opus Dei y los Legionarios de Cristo ha sido importante para lo que se consideró como la defensa de la correcta doctrina y de la protección de la familia.

(...) dichos movimientos [Opus Dei y Legionarios de Cristo] no fueron antimercado ni antidictadura militar. No molestaban en la lucha antisubversiva, ni en las modernas estrategias privatizadoras. Y ponían, en cambio, el énfasis en la vida religiosa personal, en los sacramentos y la obediencia al Papa Juan Pablo II¹²⁸.

Una parte de la élite buscó entonces aislarse del resto de la sociedad, creando un medioambiente rodeado de gentes conocidas y confiables, donde se transmitiera, sin distorsiones, un particular estilo de vida¹²⁹. Se buscaba la separación de aquella parte del país que se consideraba como peligrosa y agresiva (la izquierda), para así crear un espacio que garantizara la buena educación, el orden, la paz y la excelencia profesional¹³⁰. El Opus Dei y los Legionarios de Cristo han sido movimientos capaces de proveer a la élite empresarial de un discurso simple, con eslóganes sencillos, los cuales no era necesario discutir, ni tampoco generaban problemas en la vida cotidiana. El debate político fue visto como destructivo y generador de divisiones en la familia y al interior del país. Por esta razón, las discusiones académicas y filosóficas fueron evitadas a favor de los temas técnicos. Los aspectos espirituales fueron dejados al absoluto

arbitrio de los teólogos y autoridades de la Iglesia. Sin embargo, salvo en los temas morales, la Iglesia fue desautorizada por completo para opinar sobre los asuntos terrenales, en los cuales la economía y la política tienen un rol central¹³¹.

Para los miembros de esta élite, fueron los intelectuales de izquierda quienes contribuyeron con su radicalismo a la enorme polarización de los sesenta y setenta, destruyendo la convivencia pacífica al interior del país.

(...) nada era menos aceptado [dentro de este grupo] que la imagen del intelectual 'barbudo' con pipa de los años '60, o el sociólogo convertido en activista político¹³².

La élite empresarial chilena se ha construido a base de un conjunto de principios formales que dan seguridad a sus miembros respecto de las incertidumbres que han rodeado su historia, especialmente en un país donde hasta 1990 el 50% de la población vivía bajo la línea de pobreza. La autoformación de su identidad ha pasado primero por los modelos de la élite francesa, inglesa (sobre todo durante el siglo XIX y la primera mitad del XX) y actualmente estadounidense. Sin embargo, este último modelo genera algunos problemas centrales, como la llamada 'crisis de la familia', supuestamente amenazada por las ideas de la modernidad y del mismo capitalismo que la élite tanto dice proteger. Los miembros de la nueva élite son fervientes defensores del concepto de economía liberal, y promueven con vehemencia sus supuestos beneficios para toda la sociedad. Sin embargo, afirman con igual fuerza que tanto sus modelos estadounidenses como europeos se encuentran devastados por el individualismo, el materialismo y el hedonismo¹³³. Para este grupo dirigente chileno, estas consecuencias no deseadas del desarrollo económico deben ser combatidas con la mayor fuerza, pues han comenzado a germinar en Chile. La forma de erradicarlas —en su particular visión— es por medio de la educación en principios y carácter, que otorga la doctrina religiosa a través de la educación católica y la formación familiar¹³⁴. Quienes no comparten este estilo de vida son considerados como menos felices.

El Opus Dei y los Legionarios de Cristo se encuentran hoy entre los más

populares educadores del ‘carácter’, y su influencia se aprecia en las constantes referencias a la ley natural que emergen en las narrativas vinculadas con el autocontrol y la ‘fuerza de voluntad’¹³⁵.

El éxito de las ideas del Opus Dei entre la élite empresarial se explica por la discreta pero continua tarea de proselitismo de sus integrantes. La defensa constante de rasgos como el autocontrol y la fuerza de voluntad para alcanzar el éxito en los negocios, ha ganado un enorme prestigio entre sus miembros. La idea de consistencia en el pensamiento es también elemento singular de este grupo, especialmente cuando se refiere a la defensa de un conjunto de valores permanentes provistos por la Iglesia Católica. Ello significa mantener opiniones predecibles y perdurables en relación a la moral y al orden social.

El valor de la austeridad es otro asunto característico del discurso de la nueva élite empresarial chilena. Aunque este rasgo siempre fue reivindicado por la clase terrateniente tradicional¹³⁶ (especialmente aquella ligada al Partido Conservador), hoy es parte de los hombres de negocios. Sin embargo, no se trata de una austeridad ligada a la cantidad de riqueza, sino que al uso que se hace de ella, y especialmente a cómo se la exhibe. Para este grupo, la riqueza no constituye un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar el bien común de toda la nación. El ‘buen gusto’ es definido como la capacidad de mostrar la riqueza sin dar la impresión de exceso; el control de gasto en la vestimenta, el transporte y la decoración del hogar. Todas estas virtudes conforman un sello de distinción social para la nueva élite. No obstante, la tensión entre el discurso y la realidad resulta evidente, pues los niveles de riqueza alcanzado por sus miembros, en los últimos treinta años, son incomparablemente mayores que en el pasado.

Un aspecto clave que diferencia la nueva élite con respecto a la antigua, es la pérdida de descrédito de las actividades productivas y comerciales, antes desvalorizadas respecto de la propiedad de la tierra y la actividad política. El alto prestigio alcanzado por la educación técnica-económica durante la década de 1980, explica esta nueva situación. El ejemplo dado por los economistas que participaron del régimen militar, cimentó la idea de que los estudios en management y economía eran esenciales para realizar cualquier actividad empresarial. Hay que recordar que el grupo de economistas de Chicago fue reclutado entre miembros de la clase dirigente, pero cuando ya se habían

distanciado de la vieja élite conservadora. El discurso racional de la economía neoclásica (neoliberal) fue percibido por la élite como la explicación lógica de su prosperidad. Por esta razón, los estudios en economía se han transformado en la elección más solicitada por los jóvenes estudiantes de la clase dirigente desde 1980.

El modelo de la nueva élite empresarial está encarnado por el sujeto emprendedor, quien posee la creatividad, la habilidad y la determinación de enfrentar todos los riesgos necesarios para concretar su proyecto, y así colaborar al crecimiento de la economía del país. La tradicional crítica cristiana a la actividad comercial ha sido reemplazada por un nuevo ethos que pone en el pináculo del hombre nuevo chileno al empresario exitoso. Dentro de esta mirada, es justamente esta figura quien contribuye más al bien común, pues es fuente de creatividad, riqueza, caridad y, sobre todo, da empleo. Visto así, el capitalismo es el único sistema que permite asegurar mejor el crecimiento de la economía y desarrollar al máximo las virtudes humanas.

El hecho de no promover este modelo de desarrollo al resto de la población y defender, por el contrario, sistemas redistributivos o socialistas, es visto como algo inmoral e incluso como una falta de solidaridad¹³⁷. A diferencia de lo que ocurría hasta la década de 1960, en Chile hoy predomina —al interior de la élite— un discurso que postula que el capitalismo ‘está del lado de los pobres’, pues es el sistema más eficiente para crear riqueza y eliminar la pobreza¹³⁸. El discurso de la caridad y de la asistencia al pobre ha reemplazado a las ideas de la solidaridad y la justicia social, al menos en lo que se refiere al espacio público en Chile.

La noción de caridad, duramente criticada durante la década de 1960 como la ‘perpetuación del status quo’ y como un alivio de la conciencia para las mujeres ricas que hacían voluntariado, ha sido reemplazada, entre los católicos conservadores, por la idea de entregar al pobre las herramientas para salir de la pobreza¹³⁹.

En definitiva, la visión de la élite empresarial respecto de la economía coincide con la ética profesada por el Opus Dei, que propone la santificación en la vida

profesional. Siguiendo el argumento de Thumala, dicha ética conlleva que todas las acciones del hombre de empresa (businessman) en el ámbito del trabajo, la familia y la sociedad, son interpretadas como una glorificación de Dios, y el ideal al cual debiera aspirar el resto de las personas¹⁴⁰. Pero claramente el ideal de la perfección buscada a través del trabajo de cada uno (no importando su clase social o tipo de trabajo) implica también la renuncia de toda movilidad social, pues el cambio es visto como peligroso y lo que se promueve es más bien la resignación.

Nos interesa destacar que la revolución económica llevada a cabo en Chile a partir de 1975 necesitaba de una élite dirigente renovada. Para ello, hacía falta terminar con las viejas estructuras que la vinculaban a la propiedad extensiva de la tierra y al rechazo de la actividad comercial e industrial. Pero también se hizo evidente un cambio de ethos, el cual sin dejar de ser católico, incorporó nuevos valores que la sociología tradicional ha vinculado con la ética protestante. Esta particularidad de la transformación económica chilena explica la aparente paradoja entre liberalismo económico y conservadurismo moral y político que tanto defiende la élite dirigente chilena hoy en día.

El caso chileno es una demostración más de que las vías tradicionales de la modernización capitalista no son necesariamente las mismas que conoció Europa desde fines del siglo XVIII, y que incluso las revoluciones también pueden ser conservadoras (más allá de la crítica que las cataloga como simple restauración o reacción). Fue así como Chile se constituyó en un espacio de experimentación de ideas económicas radicales casi una década antes de que se pusieran en marcha por Margaret Thatcher en Gran Bretaña o por Ronald Reagan en Estados Unidos.

Notas al Capítulo VI

¹ [Tironi, Eugenio, La irrupción de las masas y el malestar de las elites, Op. cit., p. 227.](#)

² [Currently, economics is one of the country's most prominent and authoritative professions. The economists' technical expertise, sophisticated language and homogeneity of views have become symbolically relevant in the reduction of the anxieties related to economic management. Montecinos, Verónica, Economists, Politics and the State: Chile 1958-1994, Amsterdam, Rozenberg Publishing Services, 1998, p. 131.](#)

³ [Este apartado se basa en el artículo de nuestra autoría publicado en 2006 y que forma parte de este proyecto de investigación de doctorado. Gárate, Manuel, "El economista como profesional de las ciencias sociales. Reflexiones en torno a la experiencia chilena", en De Cea, M. & Gárate, M. \(Eds.\), ¿Qué tipo de nexos para qué tipo de políticas? Estudio comparado en diversos campos de intervención pública en Chile, Santiago, Editorial Universidad Bolivariana, 2006, pp. 85-99.](#)

⁴ [Sobre la influencia de la modelización matemática en la disciplina económica, véase: Lordon, Frédéric, "Le désir de "faire science", Actes de la recherche en sciences sociales, N° 119, septembre 1997, pp. 27-35.](#)

⁵ [Respecto a la crítica a la tecnocracia en América Latina, recomendamos la lectura de: Mayol, Alberto, La tecnocracia: el falso profeta de la modernidad.](#)

Una crítica desde la teoría política a las propuestas tecnocráticas, Santiago, Documento de trabajo N° 81, Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Chile, 2006. Disponible en: <http://www.inap.uchile.cl/cienciapolitica/doc-trabajo/doc81.pdf>. Visitado el 20/06/2009.

⁶ Véase: Ocampo, José Antonio (Ed.), La CEPAL en sus 50 años. Notas de un seminario conmemorativo, Op.cit. También: Halperin, Tulio, “La CEPAL en su contexto histórico”, Revista de la CEPAL, N° 94, abril 2008, pp. 7-27; Devés, Eduardo, El pensamiento latinoamericano en el siglo XX. De la CEPAL al neoliberalismo (1950-1990), Op. cit., pp. 21-68.

⁷ Bourdieu, Pierre, “Le champ économique”, Actes de la recherche en sciences sociales, Vol. 119, N° 1, 1997, pp. 48-66; consultar también: Boyer, Robert, “L’anthropologie économique de Pierre Bourdieu”, Actes de la recherche en sciences sociales, Vol. 150, N° 1, 2003, pp. 65-78. El economista Robert Boyer explica esta noción de campo : “Par champ il faut entendre une délimitation du monde social que est régie par des lois et des codes propres, qu’il s’agisse de l’université, du journalisme, du monde littéraire, artistique ou politique qui forment autant d’univers de connivence et de jeux de rôle”, en: Boyer, Robert, “L’anthropologie économique de Pierre Bourdieu”, Actes de la recherche en sciences sociales, Op. cit., p. 66.

⁸ Sobre el desarrollo contemporáneo del Círculo de Viena, consultar: <http://www.univie.ac.at/ivc/>.

⁹ Yves Dezalay y Bryant G. Garth, La internacionalización de las luchas por el poder. La competencia entre abogados y economistas por transformar los Estados Latinoamericanos, Op. cit.

¹⁰ La sigla en inglés significa White Anglo-Saxon Protestant y se refiere a las influentes élites socioeconómicas y culturales del noreste estadounidense (establishment). El término fue popularizado por el sociólogo de la Universidad de Pennsylvania E. Digby Baltzell en un libro publicado en 1964: The Protestant Establishment: Aristocracy & Caste in America.

¹¹ However, by the 1960s, rival groups of orthodox economists had launched a massive campaign to discredit the statist and populist biases of structuralism and bring economics education back to mainstream of the profession. In just a few years, in the context of growing doctrinal debate, the number of economists and economic schools multiplied dramatically. Montecinos, Verónica, Economists, Politics and the State: Chile 1958-1994, Op. cit., p. 4.

¹² Esta serie de programas fueron emitidos por primera vez en 1980 por la cadena de televisión pública norteamericana PBS, y nuevamente reeditados y difundidos en 1990 con la presentación del actor de Hollywood y futuro gobernador de California, Arnold Schwarzenegger. Ver: <http://www.freetochoosemedia.org/freetochoose/>.

¹³ Montecinos, Verónica, Op. cit.

¹⁴ Phillip L. Zweig, Wriston : Walter Wriston, Citibank, and the Rise and Fall of American Financial Supremacy, Crown, Estados Unidos, 1996.

¹⁵ La figura de Walter Wriston, director ejecutivo de Citibank, junto a Milton Friedman y George Schultz, dieron origen al programa económico de la administración Reagan.

¹⁶ Ver: María Olivia Mönckeberg, El Saqueo de los Grupos Económicos al Estado Chileno, Ediciones B, Chile, 2001.

¹⁷ Consultar el Capítulo IV de este estudio.

¹⁸ I believe it is going to be very difficult to go back to a less technical management of the economy. The Chicago Boys have set a standard'. Declaraciones de un exministro y abogado del gobierno de Eduardo Frei Montalva. Citado en Montecinos, Verónica, Op. cit., p. 66.

¹⁹ Véase: Figueroa, Pedro Pablo, Diccionario biográfico de Chile, Santiago, Imprenta, litografía y encuadernación Barcelona, 1897-1901, 583 p.; Fuentes, Jordi & Cortés, Ilía, Diccionario político de Chile: 1810-1966, Santiago, Ediciones Orbe, 1967.; De Ramón, Armando, Biografías de chilenos. Miembros de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 1876-1973, Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 1999-2003, Vol. IV.

²⁰ En ese momento (antes de 1970) los economistas, como grupo profesional, aún no hacían exigencias respecto del desempeño de las funciones políticas. Fue más tarde que los economistas fueron nombrados en puestos ministeriales, ya no solo como asesores técnicos, sino que como ejecutivos políticos. Montecinos, Verónica, Economists, Politics and the State: Chile 1958-1994, Op. cit., p. 78.

²¹ El rol del Estado y de la política no están exentos de plantear problemas para la mayoría de las teorías económicas. De hecho, en un análisis que formaliza las interacciones entre los agentes económicos racionales únicamente a través de los mercados, incluso por definición cualquier intervención del gobierno es perjudicial. Si se toman literalmente las enseñanzas de la teoría neoclásica estándar, el economista no puede ser sino el defensor y propagandista del mercado. Boyer, Robert, "L'anthropologie économique de Pierre Bourdieu",

Actes de la recherche en sciences sociales, Vol. 150, N° 1, 2003, pp. 67-68.

²² Montecinos, Verónica, Economists, Politics and the State: Chile 1958-1994, Op. cit., p. 67.

²³ La trayectoria ascendente seguida por los economistas chilenos durante las últimas décadas, transformó con éxito a este grupo profesional, que era pequeño y marginal en la década de 1950, en un segmento poderoso y ubicuo de la élite política durante los '90. El ascenso político de los economistas chilenos es parte de una tendencia mundial, en la que los economistas se han convertido en los exponentes más destacados de las visiones tecnocráticas de gobierno. *Ibíd.*, p. 1.

²⁴ *Ibíd.*, p. 3.

²⁵ Sobre el proceso de privatizaciones durante el régimen militar, véase el Capítulo IV.

²⁶ Un contexto de mayor interdependencia económica, creciente complejidad de la gestión económica y un aumento de la incertidumbre causada por las grandes crisis económicas, motiva a las élites políticas a reclutar a expertos que comparten marcos interpretativos comunes y que pueden comunicarse unos con otros en el mismo lenguaje. Montecinos, Verónica, *Economists, Politics and the State: Chile 1958-1994*, Op. cit., p. 1.

²⁷ En Chile, entre 1958 y 1973, solo uno de los once ministros de Hacienda había recibido una formación profesional en economía. La expectativa con respecto a la capacitación formal de estos funcionarios cambió durante el gobierno militar, cuando 8 de cada 10 ministros de Hacienda poseía credenciales académicas en

economía. Montecinos, Verónica, *Ibíd.*, p. 71.

²⁸ Weber, Max, *El político y el científico*, Prometeo Libros, 2003.

²⁹ Esta parte está basada en un anterior trabajo nuestro publicado en 2008, y que fue financiado como parte de esta investigación de doctorado por la EHESS de París. Véase: Gárate, Manuel, “Think tanks y Centros de Estudio. Los nuevos mecanismos de influencia en el Chile post-autoritario”, en De Cea, M., Díaz, P. & Kerneur, G. (Eds.), *¿De país modelado a país modelo? Una mirada sobre la política, lo social y la economía*, Santiago, GRESCH, ICSO-UDP, Universidad Bolivariana, 2008, pp. 209-230.

³⁰ Cuando utilizamos el concepto de desplazamiento ideológico, nos referimos al espacio donde se originan y discuten las ideas sobre lo que se define como de ‘interés público’ y cuya supuesta neutralidad valórica o científica forma parte justamente de su discurso respecto de lo político.

³¹ Usamos este concepto anglosajón think tank, pues no existe en el español un término que corresponda exactamente a la definición de este tipo de organizaciones. Por otra parte, la mayor parte de la literatura sobre el tema hace uso de esta acepción.

³² En Chile, estos temas tienen una repercusión pública y política importante, y forman parte del debate en los medios de comunicación.

³³ Existe toda una discusión académica respecto de si se trata realmente de un ‘mercado de ideas’ o un ‘mercado de intereses’, donde cada grupo utiliza diversos recursos científicos, políticos y económicos para defender posiciones

particulares en el ámbito público.

³⁴ Para evitar confusiones, preferimos usar el adjetivo ‘libertario’ en vez de ‘liberal’, pues en Estados Unidos los liberales suelen ser catalogados como progresistas de izquierda, en tanto que los libertarios corresponden a lo que en Europa se entiende como liberal, y en algunos casos como neoliberal.

³⁵ (...) un grand nombre de membres de la Société Mont Pèlerin ont participé, ou sont eux-mêmes à l’origine de la fondation de think tanks, véritables ‘boîtes à idées’ qui abreuvent hommes politiques et medias de notes, d’analyses, de projets de loi fournis en quelque sorte ‘clefs en mains’ (...). Les plus célèbres de ces think tanks sont sans doute l’Institut of Economic Affairs, né en 1955 en Grande-Bretagne, qui a joué un rôle non négligeable dans l’arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher et l’Heritage Foundation, créée en 1973 aux Etats-Unis, très proche des fractions les plus radicales du Parti républicain. Denord, François, “Le prophète, le pèlerin et le missionnaire”, Op. cit., p. 16.

³⁶ CIEPLAN, uno de los think tanks más influyentes del país, se formó en 1976, como un espacio de pensamiento económico no marxista, pero independiente y opositor a la dictadura militar de la época. Véase el capítulo V de este estudio y también: Puryear, Jeffrey, Op. cit., p. 113.

³⁷ Hay autores como Serge Halimi que funden ambos conceptos en la idea de ‘neoconservador’, con lo cual pone el acento en el carácter valórico conservador, pero al mismo tiempo en una concepción ultraliberal de la economía.

³⁸ Solo para mencionar las más importantes, aunque no todas ellas tienen un perfil académico: Centro de Estudios Públicos (CEP), Instituto Libertad, Instituto Libertad y Desarrollo, Fundación Jaime Guzmán, Fundación Paz Ciudadana, Fundación Futuro. Sobre los grupos económicos en Chile, ver

Capítulo IV de este trabajo. Véase además: Paredes, Ricardo & Sánchez, José Miguel, “Organización industrial y grupos económicos: el caso de Chile”, Departamento de Economía de la Universidad de Chile, 1994.

³⁹ Boucher, S., Royo, M., & Lamy, P. 2006. Les think tanks : Cerveaux de la guerre des idées. París, Éditions du Félin, p. 13.

⁴⁰ Waters, S., “Dangerous minds”, The Guardian, 10/11/2004.

⁴¹ Hemos traducido directamente el concepto del francés ‘boîtes à penser’.

⁴² Stefancic, J., Delgado, R., No merci: How conservative Think Tanks and foundations changed the American social agenda, Philadelphia, Temple University Press, 1996.

⁴³ McGann, J. G., Think tanks and policy advice in the US: academics, advisors and advocates, London; New York, NY, Routledge, 2007.

⁴⁴ Ibíd., p. 25.

⁴⁵ Del inglés decision maker.

⁴⁶ Boucher, S., Royo, M., & Lamy, P., Op. cit., p. 30.

⁴⁷ Ibíd., p. 33.

⁴⁸ Halimi, S., “Essor de la pensée mercenaire”, Le Monde diplomatique, janvier 2007, p. 25.

⁴⁹ Weaver, K., “The Changing World of Think Tanks”, Political Science and Politics, Vol. 22, N° 3, 1989, pp. 563-578.

⁵⁰ Como ejemplos de estas últimas, se mencionan la Heritage Foundation y el Cato Institute (ambos con sede en Washington D.C.), el Adam Smith Institute (Londres), el Lisbon Council (Bruxelles), el Institut Montaigne (París), o el Transnational Institute (Amsterdam).

⁵¹ Al menos hasta el momento de la redacción de este capítulo (marzo 2009). La ley fue promulgada el 11 de agosto de 2008.

⁵² Sobre las organizaciones surgidas de movimientos sociales en Chile desde principios de la década de 1970, véase: Guillaudat, Patrick & Mousterde, Pierre, Los movimientos sociales en Chile 1973-1993, Op. cit.

⁵³ De acuerdo a una investigación periodística del diario El Mercurio de abril de 2006, solo el CEP y Chile 21 estuvieron dispuestos a revelar los montos involucrados en su financiamiento. Consultar: Aguirre, B., & Gaete, P., “Finanzas Centros de Estudio: los think tanks peso a peso”, El Mercurio, 22/04/2006.

[54 Unión Demócrata Independiente. Desde fines de la década de 1990, es el principal partido de la derecha chilena.](#)

[55 En términos teóricos, liberalismo económico y social cristianismo constituyen doctrinas opuestas en diversos sentidos. Sin embargo, en Chile se ha desarrollado en los últimos treinta años un tipo de liberalismo pragmático transversal que nos permite pensar en la existencia de una categoría de este tipo.](#)

[56 Estamos pensando especialmente en organizaciones como el Instituto de Ecología Política o el CENDA, que si bien tienen una estructura similar a los think tanks, operacionalmente no funcionan dentro del esquema de mercado de ideas ni tampoco suelen ser aceptados como interlocutores válidos por estos últimos.](#)

[57 Las organizaciones relacionadas con la Democracia Cristiana, si bien mantienen diferencias importantes, tienden a ubicarse en la zona central del diagrama, donde se cruzan ambos ejes ideológicos, aunque preferentemente más hacia el lado liberal.](#)

[58 En el caso chileno, las instituciones ligadas a partidos o decididamente militantes también tienen acceso a financiamiento por medio de proyectos para el Estado, organizaciones o incluso empresas privadas.](#)

[59 Un interesante sumario sobre las complicaciones de la transición chilena hacia 1998, con Augusto Pinochet aún como actor político, se encuentra en: Jouineau, Sophie, “Le présent ne parvient pas à effacer le passé. Au Chili, une transition qui n’en finit pas”, Le Monde Diplomatique, N° avril, 1998, pp. 8-9.](#)

⁶⁰ Véase: Puryear, Jeffrey, Op. cit.

⁶¹ Un ejemplo que llama la atención es el peso que han tenido los think tanks neoconservadores en Estados Unidos en todo lo relacionado con la política exterior norteamericana durante el gobierno de George W. Bush y específicamente con el origen y desarrollo de la guerra en Irak. Véase: Schifferes, Steve, “Battle of the Washington think tanks”, BBC News Channel, 03/04/2003. Disponible en: <http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/2914969.stm>. También: Rutherford, Paul, *Weapons of mass persuasion: marketing the war against Iraq*, Toronto, University of Toronto Press, 2004.

⁶² Il s’agit de garantir enfin la propriété du riche, l’existence du pauvre, la jouissance de l’homme industriel, la liberté et la sûreté de tous. Frase de François-Antoine de Boissy d’Anglas en su discurso preliminar sobre el proyecto de Constitución del 5 mesidor del año III (23 de junio de 1795) Citado en: Soboul, Albert, *La Révolution française*, París, Quadrige / PUF, 2006, p. 90.

⁶³ Sobre la historiografía marxista y socialista en Chile, recomendamos la lectura de las obras clásicas: Jobet, Julio César, *Ensayo crítico del desarrollo económico-social de Chile*, Santiago, Editorial Universitaria, 1951; Segal, Marcelo, *Desarrollo del capitalismo en Chile: cinco ensayos dialécticos*, Santiago, Editorial del Pacífico, 1953; Ramírez Necochea, Hernán, *La guerra civil de 1891: antecedentes económicos*, Santiago, Austral Impresión, 1951.

⁶⁴ Salazar, Gabriel & Pinto, Julio, *Historia Contemporánea de Chile II. Actores, identidad y movimiento*, Santiago, LOM, 1999, p. 50.

[65 Ramírez Necochea, Hernán, Op. cit.](#)

[66 Salazar, Gabriel & Pinto, Julio, Op. cit., p. 57.](#)

[67 En buena parte, las explicaciones causales de historiadores como Julio Pinto y Gabriel Salazar, giran en torno a esta visión de una élite ‘alienada’. Salazar, Gabriel & Pinto, Julio, Op. cit.](#)

[68 Sobre las visiones del mundo conservador, el tercer volumen de la obra de Jean-François Sirinelli sobre la derecha francesa nos resultó de gran utilidad: Sirinelli, Jean-François, Histoire des droites en France: Tome 3, Sensibilités, París, Gallimard, 2006.](#)

[69 Nazer Ahumada, Ricardo, “El surgimiento de una nueva élite empresarial en Chile: 1830-1880”, en Stabili, M. R. & Bonelli, F. \(Eds.\), Minoranze e Culture Imprenditoriali \(Cap. 2\), Roma, Quaderni / Università degli studi di Roma Tre, 2000, pp. 59-84.](#)

[70 Un ejemplar completo \(dos volúmenes\) de la novela Martín Rivas, de Alberto Blest Gana \(1830-1920\), puede descargarse directamente en formato PDF desde el sitio de Memoria Chilena:
\[http://www.memoriachilena.cl//temas/documento_detalle.asp?id=MC0005020\]\(http://www.memoriachilena.cl//temas/documento_detalle.asp?id=MC0005020\).](#)

[71 Nazer Ahumada, Ricardo, Op. cit., p. 60.](#)

[72 Un completo trabajo sobre las ideas de la élite chilena en el siglo XIX y sus](#)

proyectos para Chile como país independiente, se encuentra en: Pinto Rodríguez, Jorge, “Proyectos de la elite chilena del siglo XIX”, ALPHA. Revista de artes, letras y filosofía, N° 26, julio 2008, pp. 167-189. Recomendamos también: Stuvan, Ana María, La seducción de un orden. Las elites y la construcción de Chile en las polémicas culturales y políticas del siglo XIX, Santiago, Ediciones de la Universidad Católica de Chile, 2000.

⁷³ Sobre el tema de las guerras de Independencia, y específicamente respecto del caso chileno, ver: Lynch, John, Las revoluciones hispanoamericanas 1808-1826, Barcelona, Ariel Historia, 1997, pp. 129-157.

⁷⁴ El historiador Alfredo Jocelyn-Holt ha insistido sobre el carácter liberal de buena parte de la élite chilena, en contraposición de una minoría ultraconservadora que durante el siglo XX abrazaría el hispanismo, el franquismo y el antimarxismo al ultranza: “[en relación al historiador conservador Gonzalo Vial] La vieja elite, del cual es muy despreciativo [G. Vial], ha sido siempre más liberal y cosmopolita que conservadora franquista, y la jerarquía eclesial, tanto más a la izquierda y ‘progresista’ que la derecha (...)”. Jocelyn-Holt, Alfredo, “El oficio del taxidermista”, The Clinic, N° 309, 03/09/2009, pp. 22-23.

⁷⁵ Salazar, Gabriel & Pinto, Julio, Op. cit., p. 34.

⁷⁶ Correa, Sofía, Con las riendas del poder. La derecha chilena en el siglo XX, Santiago, Editorial Sudamericana, 2004, p. 274.

⁷⁷ Sobre los distintos aspectos de la élite chilena, ver especialmente: Valdivieso, Patricio, Estrategias políticas de acercamiento a las nuevas elites chilenas, Santiago, Fundación Konrad Adenauer, 2006.

⁷⁸ Romero, Luis Alberto, “María Rosaria Stabili: El sentimiento aristocrático. Elites chilenas frente al espejo (1860-1960). Traducción de Paula Zaldívar H. Santiago, Editorial Andrés Bello y Centro de Investigaciones Barros Arana, 2003”, en Historia, N° 37, 2004, pp. 262-267.

⁷⁹ Stabili, María Rosaria, El sentimiento aristocrático. Elites chilenas frente al espejo (1860-1960), Santiago, Editorial Andrés Bello & Centro de Investigaciones Barros Arana, 1996, p. 98.

⁸⁰ Entrevista a la socióloga María Angélica Thumala, quien se ha dedicado a los temas de élite y religiosidad en Chile. En: <http://www.elperiodista.cl/newtenberg/1913/article-78956.html>. Visitado el 17-05-2009. De la misma autora: Thumala, María Angélica, Riqueza y piedad. El catolicismo de la elite económica chilena, Santiago, Debate-Random House Mondadori, 2007.

⁸¹ Valdivia Ortiz De Zárate, Verónica, “Estatismo y Neoliberalismo: un contrapunto militar. Chile 1973-1979”, Historia (Santiago), Vol. 34, N° 2001, pp. 167-226; Valdivia Ortiz De Zárate, Verónica, El golpe después del golpe. Leigh vs. Pinochet. Chile 1960-1980, Santiago, LOM Ediciones, 2003.

⁸² Los historiadores Gabriel Salazar y Julio Pinto han criticado la idea del origen mítico de la élite chilena como una antigua nobleza, de origen castellano-vasca, la que habría sido difundida por la historiografía conservadora a través de autores como Alberto Edwards, Francisco Antonio Encina y Jaime Eyzaguirre: “En Chile había existido una suerte de ‘antigua nobleza’ colonial. Una aristocracia rural, formada sobre la base de la gesta guerrera de la conquista y la propiedad de la tierra. Luego, con el aporte de los vascos del norte de la península ibérica, trabajadores y honestos, se habría formado la llamada ‘aristocracia castellano-vasca’ (...) el elemento de continuidad en ellos es fuerte,

especialmente en el contexto de predominio rural del Chile Colonial y el siglo XIX; esto habría favorecido la visión aristocratizante, que puede asirse en la relativa continuidad de las elites provincianas, donde generaciones de una misma familia se suceden en los cargos de autoridad y en la propiedad de los bienes”. Salazar, Gabriel & Pinto, Julio, Op. cit., pp. 33-60.

⁸³ Corporación de Fomento y Reconstrucción. Ver Capítulo II.

⁸⁴ Sobre la generación de ingenieros civiles que dieron origen a la CORFO, consultar: Ibáñez, Adolfo, “Los ingenieros, el Estado y la política en Chile: del Ministerio de Fomento a la Corporación de Fomento: 1927-1939”, Historia, Instituto de Historia. Pontificia Universidad Católica de Chile, N° 18, 1983, pp. 45-102.

⁸⁵ Gazmuri, Cristián, Notas sobre las elites chilenas 1930-1999, Santiago, Documento de trabajo N° 3, Instituto de Historia Pontificia Universidad Católica de Chile, 2001, p. 7.

⁸⁶ Ibíd., p. 1.

⁸⁷ Este grupo, hasta aquel momento, se identificaba casi exclusivamente con el Partido Radical.

⁸⁸ Sobre el origen y concepto de clase media en el Chile del siglo XX, ver: Gazmuri, Cristián, “La clase media en el Chile del siglo XX”, La Tercera, 03/09/2002. Disponible en: <http://www.hist.puc.cl/cinfo/Articulos/gazmuri28.html>. Revisado el 20/07/2009.

⁸⁹ Ibíd., p. 1.

⁹⁰ Gazmuri, Cristián, Notas sobre las elites chilenas 1930-1999, Op. cit., p. 2.

⁹¹ Sobre los orígenes de la falange y la Democracia Cristiana chilena, ver: Díaz Nieva, José, Chile; De la Falange Nacional a La Democracia Cristiana, Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned), 2001; Gazmuri, Cristián, Arancibia, Patricia & Góngora, Álvaro, Eduardo Frei Montalva (1911-1982), Santiago, Fondo de Cultura Económica, 1996. Una visión crítica desde la derecha al papel de La Falange en la vida política de Chile, se encuentra en: Bravo Lira, Bernardino, Régimen de gobierno y partidos políticos en Chile, 1924-1973, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1986.

⁹² Recomendamos especialmente el reciente libro de Cristina Moyano sobre el MAPU (Movimiento de Acción Popular Unitaria), un pequeño partido de izquierda escindido de la Democracia Cristiana, y cuyos miembros tendrán una importante influencia en la renovación socialista durante la dictadura y la posterior transición democrática. Este grupo también estuvo marcado por sus orígenes al interior de la Universidad Católica a partir de la AUC (Asociación de Universitarios Católicos) durante los años 1962-1963. Los líderes de este grupo se acercaron al marxismo en París a través de la influencia de Marta Harnecker, que a su vez era discípula del filósofo Louis Althusser. Ver: Moyano, Cristina, Mapu o la seducción del poder y la juventud, Santiago, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2009.

⁹³ Respecto a este punto, y al impacto que causó la Reforma Agraria sobre el imaginario y las representaciones de la élite tradicional chilena, ver: Stabili, María Rosaria, Op. cit., Cap. III, La Tierra, pp. 259-368.

⁹⁴ Barros, César, “Por qué el Opus Dei tiene tanta influencia en la elite chilena”, Qué Pasa, 20/05/2006, p. 4.

⁹⁵ Sobre el papel del grupo económico los ‘Pirañas’ durante el régimen militar, consultar: Mönckeberg, Maria Olivia, El Saqueo de los Grupos Económicos al Estado Chileno, Santiago, Ediciones B, 2001. Sobre uno de los principales empresarios chilenos que estuvieron ligados a este grupo, ver: Economía, “Ricardo Claro: sus inicios en la Bolsa, el salto de los 60 y la consolidación tras crisis del 82”, La Tercera, Economía, 29/10/2008. Disponible en: http://www.tercera.cl/contenido/26_67815_9.shtml, visitado el 21/08/2009. También: Fazio, Hugo, La transnacionalización de la economía chilena. Mapa de la extrema riqueza al año 2000, Santiago, LOM Ediciones, 2000.

⁹⁶ Sección Economía, “Un caso vital. Querrela de Impuestos Internos toca el corazón del poder económico”, La Nación, 05/09/2004. Versión electrónica disponible en: <http://www.sii.cl/SIIPRENSA/2004/0609/01.htm>. Visitado el 20/08/2009.

⁹⁷ Revisar el Capítulo II de este trabajo.

⁹⁸ Gazmuri, Cristián, Notas sobre las elites chilenas 1930-1999, Op. cit., p. 5.

⁹⁹ Barros, César, Op. cit., p. 5.

¹⁰⁰ Ibíd., p. 5.

¹⁰¹ Sobre las representaciones culturales de la élite chilena de fines del s. XIX y principios del s. XX, ver: Reyes, Soledad, “La elite femenina chilena a comienzos del siglo XX. Ideas y costumbres vistas a través de la revista Familia”, Bicentenario. Revista de Historia de Chile y América, Vol. 6, N° 1, 2007, pp. 133-155.

¹⁰² Nuestra mirada destaca el análisis de Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron sobre la reproducción de las élites a través del sistema escolar como mecanismo propio de una sociedad donde los valores burgueses han suplantado o tienden a reemplazar el orden estamental de tipo aristocrático: Bourdieu, Pierre, La réproduction. Éléments por une théorie du système d’enseignement, París, Les éditions de minuit, 1970.

¹⁰³ Sobre la idea de la existencia de una burguesía chilena, recomendamos el breve ensayo de Sergio Villalobos, donde se busca comprender el universo social y cultural de esta clase entre su apogeo y decadencia durante el siglo XIX: Villalobos, Sergio, Origen y ascenso de la burguesía chilena, Santiago, Editorial Universitaria, 2006.

¹⁰⁴ Pinto, Jorge, Op. cit., p. 169.

¹⁰⁵ Un texto que explica con claridad los desafíos que enfrentó la Iglesia Católica chilena durante este período es: Fleet, Michael & Smith, Brian, The Catholic Church and Democracy in Chile and Peru, University of Notre Dame Press, 1997.

¹⁰⁶ Fue durante la segunda conferencia del CELAM, en Medellín (11-18 de agosto de 1968) que se introdujo el mensaje en el que Iglesia Católica estableció una ‘opción preferencial por los pobres’. Sobre la reunión episcopal de Medellín y sus conclusiones, recomendamos la lectura de: Saranyana, José Ignacio &

Alejos-Grau, Carmen José, Teología en América Latina Vol. III: El siglo de las teologías latinoamericanistas (1899 - 2001), Editorial Iberoamericana, 2002, pp. 114-117.

¹⁰⁷ El 5 de marzo de 1950 llegó a Chile el primer sacerdote del Opus Dei, Adolfo Rodríguez Vidal, enviado por el fundador, Josemaría Escrivá de Balaguer, para iniciar la labor apostólica de la prelatura a través de una residencia para jóvenes universitarios, ubicada en el centro de Santiago.

¹⁰⁸ Commandari, Paula & López, María José, “Importante ofensiva de los jesuitas en Chile”, Urgente 24, 28/01/2009. Disponible en: http://www.urgente24.com/index.php?id=ver&tx_ttnews%5Btt_news%5D=117171&cHash=593d87ab93. Visitado el 01/09/2009.

¹⁰⁹ Santa Cruz, Lucía, Guzmán, Eugenio & Martinovic, Héctor, Elite y cambio social en Chile, Investigaciones UAI 2004-2005 (aún no publicada). Ver también: Santa Cruz, Lucía & Aguilar, Marcela, “Una sociedad que se mueve. Las claves de la elite de hoy”, El Sábado, 13/04/2004, pp. 22-27.

¹¹⁰ Los investigadores determinaron una lista de colegios que constituyen el lugar de estudio de la élite tradicional. Estos son: Saint George’s College, Verbo Divino, The Grange School, Tabancura, San Ignacio, Santiago College, Los Andes, Sagrados Corazones de Alameda y Villa María Academy. 72% de los miembros de la élite emergente estudió en colegios públicos. Predominan el Instituto Nacional y el Liceo N° 1 de niñas.

¹¹¹ Esto implica que sus padres obtuvieron como máximo el diploma de la educación secundaria.

[112 Stabili, María Rosaria, Op. cit., p. 275.](#)

[113 Esto fue lo que sucedió con los empresarios de origen árabe \(principalmente palestinos\), que se establecieron en Chile a fines del siglo XIX y de los cuales algunos hicieron grandes fortunas hacia la década de 1950. Para profundizar en este tema, recomendamos la lectura de: Rebolledo, Antonia, “La ‘Turcofobia’. Discriminación antiárabe en Chile 1900-1950”, Historia, Vol. 28, 1994, pp. 249-272. La historia de una de las grandes fortunas palestinas en Chile se halla en: Winn, Peter, Weavers of Revolution: The Yarur Workers and Chile’s Road to Socialism, London, Oxford University Press, 1989.](#)

[114 Rebolledo, Antonia, Op. cit., p. 253.](#)

[115 Cifras oficiales del CENSO Nacional 2002. Ver: Instituto Nacional de Estadísticas \(INE\), Censo 2002. Síntesis de Resultados, INE, Santiago, marzo 2003, p. 25. Disponible en: <http://www.ine.cl/cd2002/sintesis censal.pdf>. Visitado el 21/08/2009.](#)

[116 El proyecto de la Unidad Popular que incluía la nacionalización de industrias y la profundización de la reforma agraria, permanece, hasta el día de hoy, como una agresión insoportable en la memoria de la clase alta chilena; como una violación del ‘sagrado’ derecho de propiedad, de la tradición y del trabajo familiar.](#)

[117 Barros, César, “Por qué la elite tradicional chilena prefiere un Papa conservador”, Qué Pasa, 23/04/2005, p. 5.](#)

¹¹⁸ Ultramontano es un término peyorativo utilizado para referirse al integrismo católico, es decir, aquellas personas o grupos católicos que sostienen posiciones tradicionalistas, apegadas a la línea doctrinal anterior al Concilio Vaticano II. El término tiene su origen en la Italia del siglo XIX. Los italianos solían referirse a aquellos que nacieron en Francia y Alemania durante la Edad Media. Ultramontano significa ‘más allá de las montañas’, en referencia a los Alpes que separan a Italia y el Vaticano, cuando se sabía que había sido elegido un Papa de una región no italiana a este se le solía llamar ‘Papa ultramontano’. Fuente: Enciclopedia Católica. Disponible en: <http://ec.aciprensa.com/u/ultramonta.htm>.

¹¹⁹ Barros, César, Op. cit., p. 6.

¹²⁰ Desde Comte y Marx, pasando por autores contemporáneos como Ronald Inglehart (1997) o Bryan Wilson (1996), la secularización se ha entendido como un paso necesario desde las sociedades del antiguo régimen hacia sociedades modernas industrializadas. Inglehart y Wilson sostienen que existe una correlación entre mayores índices de educación y menores niveles de creencia religiosa. Su tesis es que, incluso en la actualidad, los mayores niveles de religiosidad se encuentran en sociedades pobres materialmente, lo que hace problemática la explicación para la existencia de élites exitosas con altos niveles de religiosidad. Thumala plantea que la aparición de una élite religiosa ligada al éxito económico no es una cuestión antimoderna ni una excepción a la regla. De acuerdo con esta mirada, el caso de la élite empresarial chilena cumpliría ambas condiciones. Por lo tanto, religiosidad y aumento de la riqueza no se oponen, sino que se complementan.

¹²¹ El trabajo más completo de esta investigadora sobre la religiosidad de la élite chilena, se encuentra en: Thumala, María Angélica, Chile's Business Elite. The role of Catholicism in the building of an Ethos, Londres, Dissertation presented for the degree of Doctor of Philosophy, Clare College, University of Cambridge, 2007.

¹²² En esto, no debemos confundir la práctica y creencias católicas de la élite (su catolicismo) con la doctrina y práctica de la Iglesia Católica oficial, que cuenta en su interior con importantes corrientes progresistas, vinculadas a la Teología de la Liberación.

¹²³ El nuevo ethos de la élite económica chilena se relaciona con el valor otorgado a la creación de riqueza como forma de proveer bienestar para toda la sociedad.

¹²⁴ Aquí coincidimos con el análisis del historiador Albert Soboul cuando dice que las élites, refiriéndose expresamente a la burguesía de la Revolución Francesa, suelen confundir los intereses de la nación con sus propios intereses. Se asumen, asimismo, como la encarnación de la nación. Soboul, Albert, *La Révolution française*, Op. cit.

¹²⁵ Sobre los tradicionales discursos pesimistas de la élite chilena, recomendamos: Correa, Sofía, “De nuestra inferioridad económica. Reflexiones sobre los límites del desarrollo capitalista chileno”, *Estudios Públicos*, N° 73, 1999, pp. 401-430; Encina, Francisco Antonio, *Nuestra inferioridad económica: sus causas, sus consecuencias*, Santiago, Ed. Universitaria, 1955.

¹²⁶Thumala, María Angélica, *Chile’s Business Elite. The role of Catholicism in the building of an Ethos*, Op. cit., p. 225.

¹²⁷ Los primeros centros educacionales privados abiertos por el Opus Dei en Chile fueron los colegios Los Andes (1969) para mujeres y Tabancura (1970), para hombres. Fuente: www.opusdei.cl. Los colegios son de propiedad de los padres, para así evitar cualquier futuro cambio de doctrina u orientación por parte de la jerarquía de la Iglesia Católica chilena.

¹²⁸ Barros, César, Op. cit., p. 6.

¹²⁹ El aislamiento no es solo social, sino que también geográfico. En la ciudad de Santiago, los barrios de la clase acomodada (zona oriente) se encuentran claramente segregados del resto de la población, creando una frontera que también da cuenta de las diferencias raciales entre los chilenos. Durante el año 2008 y 2009, se ha producido en Chile un interesante debate sobre la educación recibida por la élite en estas zonas segregadas del país. Ver: Berríos, Felipe, “Extranjero en su país”, El Mercurio, 03/01/2009. Disponible en: http://mt.educarchile.cl/MT/jjbrunner/archives/2009/01/universidades_c.html.

¹³⁰ Thumala, María Angélica, Op. cit., p. 226.

¹³¹ La cuestión de la ‘Ley natural’ adoptó un carácter prescriptivo y normativo. Los temas sobre la propiedad privada o la diferencia de clases no podían ser abordados por la Iglesia sin caer en la política.

¹³² Ibíd., p. 227.

¹³³ Ibíd., p. 232.

¹³⁴ Thumala pone el acento en la afirmación sostenida por muchos miembros de la élite económica (sean estos religiosos, agnósticos o ateos) respecto de que en Chile “tenemos valores que en las economías occidentales se están perdiendo”.

¹³⁵ Thumala, María Angélica, Op. cit., p. 109.

¹³⁶ En este sentido, la austeridad de la vieja élite terrateniente era más una imposición de la realidad del país (dada su relativa pobreza en relación a otras élites continentales y especialmente las europeas), que una aspiración como sucede hoy en día. Actualmente, Chile cuenta con varias de las fortunas más importantes de Latinoamérica y algunas incluso a nivel mundial (aquellas que superan los mil millones de dólares). Consultar: Castillo, F., “Viuda de Luksic, Matte y Piñera: las mayores fortunas de Chile”, El Mercurio, Economía y Negocios, 06/03/2008. Disponible en: <http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=43118>.

¹³⁷ Thumala, María Angélica, Op. cit., p. 141.

¹³⁸ Michael Novak es uno de los pensadores católicos estadounidenses más traducidos e influyentes entre la élite empresarial chilena. Ver: Novak, Michael, *Business as a calling: work and the examined life*, The Free Press, 1996; Novak, Michael, “Ocho argumentos sobre la moralidad del mercado”, *Estudios Públicos*, N° 55, 1994, pp. 189-211; Novak, Michael, *Catholic Ethic And The Spirit Of Capitalism*, Free Press, 1993.

¹³⁹ Thumala, María Angélica, Op. cit., p. 143.

¹⁴⁰ *Ibíd.*, p. 143.

CONCLUSIÓN

Durante los meses de mayo y septiembre de 2009, la Fundación Ciencia y Evolución realizó en Santiago de Chile uno de los más importantes seminarios internacionales sobre el pensamiento de Charles Darwin, en homenaje del 150 aniversario de la publicación del *Origen de las Especies*¹(1859). No es coincidencia que entre los asistentes se hayan encontrado varios de los más reconocidos ejecutivos, empresarios y economistas liberales del país. La cobertura mediática que recibió el evento (televisión, radio y prensa) fue bastante importante, aunque se tratase de un ciclo orientado a un exclusivo círculo de académicos y hombres de negocios. Es imposible no recordar los innumerables seminarios de management, liderazgo y espíritu emprendedor que se realizan en Chile de manera periódica y a los cuales se invita a los expertos extranjeros de moda en este tipo de estrategias. El éxito del pensamiento de Darwin entre los economistas liberales y hombres de negocios chilenos quedó demostrado con la alta asistencia de público y los numerosos reportajes dedicados al evento. La gran paradoja radica en que se trataba mayoritariamente de empresarios católicos, y no pocos de ellos también seguidores de movimientos conservadores como el Opus Dei y los Legionarios de Cristo, reconocidos críticos de la teoría de la evolución. En pocos lugares del mundo, se ha conmemorado con tanto entusiasmo el texto del científico inglés como en Chile, dejando entrever que sus principales descubrimientos los realizó en el país durante su travesía a bordo del bergantín HMS Beagle (1831-1836)².

Hemos querido rescatar este evento, en apariencia anecdótico, para ilustrar cómo la élite chilena asocia el éxito de la modernización capitalista del país a una suerte de evolución natural, en la cual los mejor dotados y más fuertes han cosechado los frutos de tres décadas de transformaciones socioeconómicas profundas. En este contexto, las ideas de Darwin surgen como la ansiada confirmación científica del éxito de la clase dirigente y del poder del pensamiento económico liberal. Se trata de una suerte de naturalización de la sociedad de mercado que se ha intentado crear en Chile desde mediados de la década de 1970. El hecho de que las tesis evolucionistas se hayan vuelto tan populares entre los empresarios y economistas liberales, refleja la necesidad de explicar las desigualdades inherentes al sistema capitalista —y en específico del

modelo económico chileno— como una problemática ‘natural’, ajena a cualquier intencionalidad humana. Las particulares condiciones históricas que explican este proceso han tendido a desaparecer del discurso de la élite, olvidando el contexto sociopolítico en el cual se desarrollaron³. Nos resulta evidente que la nueva clase dirigente chilena no puede desvincular su origen del régimen que le permitió su ascenso y consolidación, más allá de las interpretaciones naturalistas que han surgido en los últimos años.

El último capítulo de esta investigación lo dedicamos a explicar la aparición de una nueva élite en Chile, surgida de la revolución económica iniciada con el régimen militar del general Augusto Pinochet, pero que ha extendido su poder e influencia durante los gobiernos democráticos de la Concertación. Pero nuestra búsqueda por explicar en el largo plazo esta realidad, nos llevó a plantearnos un tema de fondo. Si sostenemos la existencia de un cambio radical de la sociedad chilena y del sistema económico hacia un liberalismo extremo a partir de 1975, entonces debemos poder compararlo con otro período en que dicho pensamiento haya sido predominante en el país. Fue así como optamos por explicar la evolución del pensamiento económico liberal en Chile desde principios del siglo XIX hasta su crisis y casi desaparición entre 1930 y 1973. Solo cuando contamos con estos antecedentes, estuvimos en condiciones de afirmar que lo sucedido durante los últimos treinta y cinco años constituye un cambio inédito en la concepción de la Economía Política en Chile, y que bien podemos usar el concepto de ‘revolución’ para referirnos a ello. Sabemos lo complejo del uso de dicho concepto en el campo de la historiografía, pero incluso quienes llevaron a cabo estas transformaciones lo han usado profusamente, expropiándolo del lenguaje de la izquierda chilena posdictadura militar⁴.

La nueva clase dirigente y la instauración de las ideas ultraliberales en Chile se explican por factores estructurales: los nuevos grupos de poder en Chile se originaron principalmente de grupos de la clase media y alta con buenos niveles educacionales. En su mayor parte, se formaron en la Universidad Católica de Chile a partir de la década de 1930, al mismo tiempo que la élite tradicional y sus partidos políticos tradicionales vivían una larga agonía que terminó con la desaparición de los partidos Liberal y Conservador, en 1966, y la creación del Partido Nacional⁵.

Los economistas monetaristas educados en esta universidad se transformaron en una suerte de vanguardia ideológica del régimen militar, especialmente a partir de 1975. Su convencimiento y radicalidad se sustentaban en la profunda

convicción del fracaso de la experiencia socialista de la Unidad Popular y del Estado de Compromiso, pero sobre todo de la necesidad imperiosa de reimplantar en el país el liberalismo económico por todos los medios posibles (sin exclusión). El Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 les abrió la ruta para poner en práctica una versión del liberalismo económico importado de las aulas universitarias norteamericanas. Su objetivo mayor no era la derrota del socialismo, sino de toda tentativa de injerencia del Estado y de la política en la economía, incluso si se originaba en sectores conservadores o liberales. Esa es la razón que explica su oposición extrema a la teoría estructuralista de la CEPAL. Actuaron con determinación desde 1975 gracias al apoyo del general Pinochet, quien tomó el control del gobierno y de la junta militar en 1974 al autodesignarse como Presidente de la República.

El grupo de economistas contó con condiciones inigualables para implementar un programa radical de reformas económicas ultraliberales, que se vio favorecido por el clima de represión y temor que dominó el país entre 1975 y 1977. Evidentemente, esta particular ‘revolución liberal/conservadora’ contó con su período de terror para llevar a cabo el desmantelamiento del Estado empresario y de compromiso. Sin la existencia de esta fase de violencia, resulta imposible imaginar la profundidad de las medidas económicas puestas en marcha entre 1975 y 1989. Asentadas las bases del nuevo modelo de desarrollo, el régimen militar decidió afianzar y proyectar los cambios mediante un nuevo orden institucional. Para ello elaboró una constitución política que fusionaba las ideas de los economistas monetaristas, pero también los principios del integrismo católico conservador del movimiento gremialista, e incluso algunos elementos del ‘ordo-liberalismo’ tomados de la experiencia de la democracia cristiana alemana. Esta particular fusión ideológica dio origen a una ‘nueva derecha’, imbuida de un carácter mesiánico y orientada hacia el futuro. Fue así como reemplazó a la derecha tradicional (vinculada a la oligarquía terrateniente), la cual había tenido que ceder cuotas de poder con la clase media y los sectores populares desde la década de 1920.

La idea de un mundo donde todas las relaciones humanas estén reguladas por el mercado, se encuentra en la base del proyecto de transformación económica llevado a cabo durante el régimen militar y conducido por este grupo de economistas. El uso que ellos hacen del concepto de mercado no solo implica el espacio de las relaciones de intercambio comercial, sino que tiene implicancias políticas y sociológicas profundas. Pierre Rosanvallon ha definido esta característica como la creencia en una sociedad civil autorregulada, donde la

confrontación de intereses daría como resultado una armonía que ni la política ni la moral alcanzarían. Esta sociedad de mercado se opone a las clásicas teorías del contrato social que, de acuerdo con este autor, implican una organización voluntarista del vínculo social. El carácter utópico de esta mirada sobre el capitalismo radica fundamentalmente en la creencia en la sustitución del espacio de debate de los individuos (ciudadanos), por el reino de los procesos anónimos e impersonales del mercado. Pero también se funda en una confusión inicial que Rosanvallon destaca: la asociación errónea entre capitalismo y libre mercado; en otras palabras, entre ideología y práctica económica. Visto de este modo, el capitalismo no es la realización de una utopía ni de un proyecto de sociedad. Tampoco es el resultado de una construcción racional premeditada, sino que la acumulación de prácticas económicas y sociales concretas (históricas)⁶.

El capitalismo, como tal, no puede ser asimilado a una ideología, ni tampoco a ninguna regla que no sea su propio interés⁷. Esto explica que sea sucesivamente librecambista, proteccionista, estatista o antiestatista. La afirmación de Rosanvallon de que la utopía liberal de la sociedad de mercado es ajena al capitalismo como experiencia histórica, da cuenta muy bien de la evolución del liberalismo económico en Chile desde los inicios de la República. La inédita revolución económica iniciada en Chile desde mediados de la década de 1970 (pero cuyos antecedentes se remontan al menos veinte años antes), constituye el intento más reciente, y más radical también, de llevar a cabo la utopía de la sociedad de mercado mediante una original combinación de liberalismo económico extremo (monetarismo) y conservatismo de raigambre hispanista. Lo dicho anteriormente, sin embargo, no nos impiden reconocer las inmensas transformaciones ocurridas en Chile durante los últimos treinta y cinco años. Estas van mucho más allá de la economía, y han dado como resultado una sociedad donde las relaciones de mercado rigen gran parte de la vida de los ciudadanos, y hasta el sentido común de los chilenos se ha visto modificado de manera importante⁸. Esto resulta aún más interesante cuando hablamos de un país con una tradición centralista de casi dos siglos y donde el Estado ha jugado un papel primordial en la conformación de la nación⁹. Ya lo decía el historiador conservador Mario Góngora, al referirse a los cambios vividos tras el golpe militar de 1973, en su famoso estudio Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX :

Se inicia a partir de entonces [1973] una reestructuración general de la

economía, de la sociedad y del poder estatal: en cierto modo una ‘revolución desde arriba’ (...) ¹⁰.

En otras palabras, se trató de una transformación concebida e implementada desde la cúpula del Estado pero ideológicamente anti-Estado, lo que constituye toda una ruptura histórica. La libertad económica se transformó en la base de la libertad política y de toda libertad, en lo que Góngora asocia como una semejanza con el ‘marxismo primario’ ¹¹. En este proceso, no había espacio para la restauración ni la conservación, pues el objetivo de los economistas del régimen militar era transformar radicalmente la sociedad chilena mediante la liberación de las fuerzas del mercado. Así se pretendía evitar todo retorno a un estatismo considerado como la principal causa del atraso económico de Chile y la agitación de las clases populares.

Si como bien dice Rosanvallon, la idea de una sociedad de mercado permanece esencialmente como una utopía, el Chile contemporáneo constituye un buen ejemplo de cuan profundamente se puede empujar a una sociedad hacia ese ideal. Desde mediados de la década de 1970, Chile ha vivido cambios enormes que incluso han puesto al país como un modelo de desarrollo ante los organismos de crédito internacional como el Banco Mundial, el FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo. No cabe duda de que el país ha dado un salto económico importante y las cifras de crecimiento económico de los últimos veinte años han sido las más espectaculares de toda su vida republicana. Pero más allá de la historia del éxito, creemos que la experiencia chilena esconde una violencia transformadora que pasó por sobre todos los delicados consensos sociales y políticos construidos a lo largo del siglo XX.

La mayor prueba del éxito de los nuevos grupos dirigentes surgidos del régimen militar, se aprecia en la forma en que el discurso económico liberal se ha instalado como un asunto de sentido común en prácticamente todos los sectores de la clase política. Incluso, muchos de los antiguos opositores a la dictadura hoy defienden con vehemencia el modelo de economía que le dio origen. Probablemente, el mayor éxito de esta particular revolución sea el hecho de no necesitar de sus creadores para consolidarse. En otras palabras, fueron justamente los opositores al régimen militar quienes han administrado la economía del país desde 1990, siguiendo las grandes líneas dejadas por los economistas de Chicago. Más allá de las diferencias respecto al énfasis en los

temas de seguridad social, la Concertación ha jugado con las reglas del juego de la élite económica conservadora, e integrado muchas de sus ideas en su discurso político. La revolución económica alteró profundamente los clivajes de la sociedad chilena, incluso en una de sus características más tradicionales: el vínculo con el Estado.

El argumento más solicitado es que los cambios vividos en el mundo desde la caída del Muro de Berlín han facilitado la expansión del liberalismo económico, y que lo ocurrido en Chile no constituye ninguna excepción. No obstante lo anterior, la profundidad de los cambios y la época en que se llevaron a cabo, revelan un proceso extremo de liberalización económica ocurrido al menos una década antes del hundimiento de los llamados ‘socialismos reales’. Chile resultó un espacio privilegiado de experimentación de lo que el filósofo liberal John Gray ha definido posteriormente como la ideología del capitalismo global, y aún hoy en día es considerado como un modelo exitoso de crecimiento económico para los países en desarrollo¹². Mucho menos conocida es la historia de esta transformación, sus enormes costos y el quiebre que produjo en la tradición del pensamiento económico liberal en Chile. Esta es la historia que hemos intentado dilucidar a lo largo de nuestra investigación: la genealogía de una revolución.

Notas a la Conclusión

¹ El seminario contó con el auspicio de varias de las más grandes empresas del país (Minera Escondida, ENTEL, Colbún, LAN, El Mercurio, Universidad del Desarrollo, Chilevisión, entre otras). Sitio web disponible en: <http://www.cienciayevolucion.org/revolucionardarwin/calendario.htm> (consultado el 05/11/2009).

² Uno de los principales canales de televisión chilena (Chilevisión), de propiedad de uno de los empresarios más ricos del país y candidato a la presidencia de la república en 2010 (Sebastián Piñera), difundió, durante septiembre de 2009, una emisión especial dedicada al tema (“La Travesía de Darwin”). La serie fue conducida por el ingeniero matemático Álvaro Fischer Abeliuk, un reconocido evolucionista ultraliberal, columnista de diario, y célebre por sus críticas al Estado y a todo tipo de planificación económica.

³ La siguiente cita de trabajo de Stéphane Boisard nos parece muy exacta : «Cette droite, inséparable du régime que l’a vu naître, est marquée d’une tache originelle. En choisissant de collaborer avec les militaires, la nouvelle droite accepte de facto les exactions perpétrées par l’armée, au nom de la doctrine de la sécurité nationale Elle n’a, certes, aucun contrôle sur les agissements des militaires jusqu’au 1977, année où elle obtient la dissolution des services secrets de la DINA. Mais, ces ‘sevices secrets’, si ce jeu de mot macabre est permis, ce déferlement de haine et de violence qui ont caractérisé la dictature chilienne sont les prix morale que la nouvelle droite accepte de payer pour mettre en place son projet de société»; Boisard, Stéphane, L’émergence d’une nouvelle droite : monétarisme, conservatisme et autoritarisme au Chili (1953-1983), Op. cit., p. 542.

⁴ Uno de los textos de propaganda más difundidos durante el régimen militar fue “Chile, Revolución Silenciosa”, de Joaquín Lavín, economista formado en la Universidad de Chicago y candidato a las elecciones presidenciales de 1999 y 2005. Ver : Lavín, Joaquín, Chile : Revolución Silenciosa, Zig-Zag, 1987.

⁵ Siguiendo esta argumentación, concordamos con la mirada de Cristián Gazmuri y Stéphane Boisard, quienes coinciden en otorgar a esta nueva clase dirigente un origen común en torno a la Universidad Católica de Chile y los procesos de radicalización ideológica que vivió a comienzos de la década de 1960. Consultar : Boisard, Stéphane, Op. cit., p. 539.

⁶ Rosanvallon, Pierre, Le capitalisme utopique. Histoire de l'idée de Marché, Op. cit., pp. 211-212.

⁷ La idea fundacional del capitalismo se refiere al rol central de la propiedad privada como fundamento de la sociedad. Ver : Rosanvallon, Pierre, Op. cit., p. 211.

⁸ El ideal del invidio emprendedor y del líder empresarial se ha expandido entre las diferentes clases sociales, llegando a convertirse en el modelo hegemónico del éxito personal y social. Sin embargo, los economistas monetaristas suelen destacar la necesidad de avanzar mucho más en esta materia, destacando que nunca existe ‘suficiente emprendimiento’. Ver : Morandé, Felipe, Chile, ¿País de emprendedores? Disponible en: <http://www.felipemorande.com/2009/06/13/abran-sus-mentes/>.

⁹ Góngora, Mario, Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX, Ed. La Ciudad, Santiago, 1981, p. 134; « La idea cardinal del Chile Republicano es, históricamente considerado, que es el Estado el que ha ido configurando y afirmando la nacionalidad chilena a través de los siglos XIX y

XX; y que la finalidad del Estado es el Bien Común en todas sus dimensiones: defensa nacional, justicia, educación, salud, fomento de la economía, protección a las actividades culturales, etc. ».

¹⁰ Góngora, Mario, Op. cit., p. 133.

¹¹ Ibíd., p. 135.

¹² Grey, John, False Dawn : The Delusions of Global Capitalism, New Press, UK, 2000.

Bibliografía y fuentes

ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

Archivo Nacional de Chile

Archivo Nacional de la Administración (ARNAD)

Fondo Ministerio de Economía

Fondo Ministerio de Hacienda

Archivo de la Corporación para Estudios de Latinoamérica (CIEPLAN)

Colección Estudios CIEPLAN n°1-45 (1979-1997)

Documentos de Trabajo CIEPLAN

Archivo digital del Centro de Estudios Públicos (CEP)

Colección Estudios Públicos (1980-2009)

Publicaciones CEP

Archivo del Centro de Investigación y Documentación en Historia de Chile Contemporáneo de la Universidad Finis Terrae (CIDOC)

Fondo documental y audiovisual

Archivo digital Corporación SUR

Colección Estudios Históricos

Colección Estudios Sociales

Colección Propositiones

Bibliothèque Nationale de France (BNF)

Département Droit, économie, politique, site François Mitterrand

Biblioteca Nacional de Chile

Sección periódicos y microformatos

Hemeroteca

Archivo fotográfico digital

Biblioteca digital Memoria Chilena (www.memoriachilena.cl)

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN)

Sección periódicos y hemeroteca

Biblioteca de la Pontificia Universidad Católica de Chile

Biblioteca de Humanidades

Biblioteca San Joaquín (sección Economía)

Bibliothèque de la Fondation Maison de sciences de l'homme (MSH)

FUENTES

Diarios

- La Nación (1998-2003)
- El Mercurio (1973-2003)
- La Tercera (1990-2003)
- La Época (1990-1998)
- La Segunda (1990-2000)
- Las Últimas Noticias (1990-2003)

Revistas de actualidad

- Qué pasa (1990-2000)
- Capital (1996-2003)
- Suplemento Enfoques de El Mercurio (1998-2003)
- El Sábado (2000-2003)

ENTREVISTAS

Arancibia Clavel, Patricia & Balart Páez, Francisco, Sergio de Castro. El arquitecto del modelo económico chileno (entrevistas), Santiago, Editorial Biblioteca Americana, 2007, 422 p.

Entrevista personal con el politólogo Juan Gabriel Valdés (17/03/2006), 30 minutos.

Entrevista personal con el sociólogo Eugenio Tironi (13/06/2006), 62 minutos.

Entrevista personal con el periodista Ascanio Cavallo (14/09/2007), 50 minutos.

LIBROS

Aguirre Cerda, Pedro, El problema industrial, Santiago, Universidad de Chile, 1933, 176 p.

Ahumada, Jorge, En vez de la miseria, Santiago, Editorial del Pacífico, 1958, 183 p.

Albertino, Jean-Marie & Silem, Ahmed, Comprendre les théories économiques, Paris, Éditions du Seuil, 2001, 643 p.

Álvarez, Rolando, “¿La noche del exilio? Los orígenes de la rebelión popular en el Partido Comunista de Chile”, en Valdivia Ortiz De Zárata, Verónica, Álvarez, Rolando & Pinto, Julio (Eds.), Su revolución contra nuestra revolución. Izquierdas y derechas en el Chile de Pinochet (1973-1981), Santiago, LOM

Ediciones, 2006, pp. 101-152.

Andrade, Carlos, Reforma de la Constitución Política de la República de Chile de 1980, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2002, 436 p.

Angell, Alan, Chile de Alessandri a Pinochet: en busca de la utopía, Santiago, Editorial Andrés Bello, 1993, 171 p.

Angell, Alan, Elecciones presidenciales, democracia y partidos políticos en el Chile post Pinochet, Santiago, Ediciones Centro de Estudios Bicentenario / Instituto de Historia Pontificia Universidad Católica de Chile, 2005, 182 p.

Anonime, Reglamento y aranceles reales para el comercio libre de España a Indias de 12 de Octubre de 1778, Madrid, Imprenta de Pedro Marín, 1778, 262 p.

Arancibia Clavel, Patricia, Cita con la Historia, Santiago, Editorial Biblioteca Americana, 2006, 696 p.

Arancibia Clavel, Patricia & Balart Páez, Francisco, Sergio de Castro. El arquitecto del modelo económico chileno, Santiago, Editorial Biblioteca Americana, 2007, 422 p.

Araya, Eduardo, Barría, Diego & Drouillas, Óscar, Sindicatos y políticas públicas en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Venezuela (1996-2004), Santiago, Editorial Universitaria, 2009, 159 p.

Arellano, José Pablo, Políticas sociales y desarrollo. Chile 1924-1984, Santiago, CIEPLAN, 1985, 329 p.

Arrate, Jorge & Rojas, Eduardo, Memoria de la izquierda chilena. Tomo II (1970-2000), Santiago, Javier Vergara Editor, 2003, 528 p.

Arrau, Alfonso & Avendaño, Octavio, La hacienda revivida: democracia y ciudadanía en el Chile de la transición, Santiago, RIL Editores, 2002, 68 p.

Aylwin, Patricio, Crecimiento con equidad: Discursos escogidos, 1992-1994, Santiago, Editorial Andrés Bello, 1994, 494 p.

Baraona, Pablo, Curso de economía monetaria, Santiago de Chile, Sociedad de Fomento Fabril, 1966, 25 p.

Bardón, Álvaro, Una década de cambios económicos: la experiencia chilena: 1973-1983, Santiago, Editorial Andrés Bello, 1985, 286 p.

Barr-Melej, Patrick, Reforming Chile: cultural politics, nationalism, and the rise of the middle class, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2001, 304 p.

Bauer, Carl, Against the Current: Privatization, Water Markets, and the State in Chile, Springer, 1998, 164 p.

Becker, Gary Stanley, Human capital: a theoretical and empirical analysis, with special reference to education, Chicago; London, The University of Chicago Press, 1993, 390 p.

Becker, Gary Stanley, Murphy, Kevin M., Tamura, Robert F. & National Bureau of Economic Research, Human capital, fertility, and economic growth, Cambridge, MA, National Bureau of Economic Research, 1990, 32 p.

Bethell, Leslie (Ed.), The Cambridge History of Latin America Vol. VI. 'Latin America since 1930. Economy, Society and Politics', Cambridge, Cambridge University Press, 1995, 635 p.

Bihr, Alain, La Novlangue néolibérale. La rhétorique du fétichisme capitaliste, Paris, Éditions Page deux, 2007, 236 p.

Birle, Peter, Hofmeister, Wilhelm, Maihold, Günther & Potthast, Barbara (Eds.), Elites en América Latina, Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2007, 228 p.

Bitar, Sergio, Chile, liberalismo económico y dictadura política, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1980, 181 p.

Bitran, Eduardo & Sáez, Raúl, 'Privatization and Regulation in Chile', en Bosworth, B., Dornbusch, R. & Labán, R. (Eds.), The Chilean Economy: Policy Lessons and Challenges, Brookings Institution Press, 1994, p. 456.

Bizzarro, Salvatore, Historical Dictionary of Chile, Toronto, The Scarecrow Press, Inc., 2005, 937 p.

Bobbio, Norberto, Bossetti, Giancarlo & Vattimo, Gianni, La izquierda en la era del karaoke, Buenos Aires, FCE, 1997, 87 p.

Boeninger, Edgardo, Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad, Santiago, Editorial Andrés Bello, 1998, 526 p.

Bosworth, Barry, Dornbusch, Rudiger & Labán, Raúl (Eds.), The Chilean Economy. Policy lessons and challenges., Washington D.C., The Brookings Institution, 1994, 441 p.

Bourdieu, Pierre, La reproducción. Éléments por une théorie du système d'enseignement, Paris, Les éditions de minuit, 1970, 279 p.

Boyer, Robert & Saillard, Yves, Théorie de la régulation. L'état des savoirs, Paris, Éditions La Decouverte, 2002, p.

Boylan, Thomas & Gekker, Ruvin, Economics, Rational Choice and Normative Philosophy, Galway, Routledge, 2008, 192 p.

Brahm, Enrique, Preparados para la guerra. Pensamiento militar chileno bajo influencia alemana 1885-1930, Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2003, 158 p.

Bravo Lira, Bernardino, Régimen de gobierno y partidos políticos en Chile, 1924-1973, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1986, 320 p.

Brunner, José Joaquín, La cultura autoritaria en Chile, Santiago, FLACSO & Editorial Granizo, 1981, 174 p.

Büchi, Hernán, La transformación económica de Chile. Del estatismo a la libertad económica, Bogotá, Editorial Norma, 1993, 212 p.

Cademartori, José, Chile: El modelo neoliberal, Santiago, Ediciones Chile-América CESOC, 1998, 164 p.

Campero, Guillermo, El sindicalismo internacional y la redemocratización de Chile, Santiago, Centro de Estudios del Desarrollo CED, 1984, 77 p.

Campero, Guillermo, Entre la sobrevivencia y la acción política: las organizaciones de pobladores en Santiago, Santiago, ILET, 1987, 288 p.

Campero, Guillermo, Los gremios empresariales en el período 1970-1983: comportamiento sociopolítico y orientaciones ideológicas, Santiago, ILET, 1984, 327 p.

Campero, Guillermo & Valenzuela, José, El movimiento sindical en el régimen militar chileno 1973-1981, Santiago, ILET, 1984, 380 p.

Cañas Kirby, Enrique, Proceso político en Chile: 1973-1990, Santiago, Editorial Andrés Bello, 1997, 351 p.

Capdevila, Luc & Langue, Frédérique (Eds.), Entre mémoire collective et histoire officielle. L'histoire du temps présent en Amérique latine, Rennes, PU Rennes, 2009, 280 p.

Cariola, Carmen & Sunkel, Osvaldo, Un siglo de historia económica de Chile 1830 y 1930: dos ensayos y una bibliografía, Madrid, Ed. Cultura Hispánica del Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1981, 344 p.

Carmagnani, Marcello, Desarrollo industrial y subdesarrollo económico: El caso chileno (1860-1920), Santiago, Departamento de Ciencias Históricas, Universidad de Chile, 1998, 241 p.

Castells, Manuel, Globalización, desarrollo y democracia: Chile en el contexto mundial, Santiago, Fondo de Cultura Económica Chile, 2005, 164 p.

Cavallo, Ascanio, Historia oculta de la transición, Santiago, Editorial Grijalbo, 1998, 376 p.

Cavallo, Ascanio, Los hombres de la transición, Santiago, Editorial Andrés Bello, 1992, 288 p.

Cavallo, Ascanio, Salazar, Manuel & Sepúlveda, Óscar, Historia oculta del Régimen Militar, Santiago, Ediciones La Época, 1988, 460 p.

Centre international d'études pour la rénovation du libéralisme, Le Colloque Walter Lippmann, Paris, Librairie de Médicis, 1939, 110 p.

CEPAL, Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2005, Santiago, Libros de la CEPAL, diciembre 2005, 189 p.

CEPAL, Una década de desarrollo social en América Latina, 1990-1999, Santiago, Libros de la CEPAL, marzo 2004, 300 p.

Chartier, Roger, El mundo como representación, Barcelona, Gedisa, 2005, 276 p.

Chonchol, Jacques, ¿Hacia dónde nos lleva la globalización?: reflexiones para Chile, Santiago, LOM Ediciones, 1999, 138 p.

Claassen, Emil-Maria & Lane, Georges (Eds.), Oeuvres complètes de Jacques Rueff: Politique économique, Paris, Plon, 1979, 17 p.

Claude, Marcel, 'Las miserias del desarrollo chileno', en Drake, P. & Jaksic, I. (Eds.), El modelo chileno. Democracia y desarrollo en los noventa, Santiago, LOM Ediciones, 2002, pp. 155-165.

Claude, Marcel, Una vez más la miseria: ¿Es Chile un país sustentable?, Santiago, LOM Ediciones, 1997, 216 p.

Cohen, Daniel, La mondialisation et ses ennemis, Paris, Éditions Grasset, 2004, 263 p.

Collins, Joseph & Lear, John, Chile's Free-market Miracle: A Second Look, 1995, 320 p.

Collins, Charles & Kincaid, Russell, Managing Financial Crises: Recent Experience and Lessons for Latin America, Washington (DC), International Monetary Fund, 2003, 134 p.

Comblin, José, El neoliberalismo. Ideología dominante en el cambio de siglo, Santiago, CESOC Ediciones, 2002, 253 p.

Compagnon, Olivier, 'Jacques Maritain et la naissance de la démocratie chrétienne sud-américaine: le modèle malgré lui', en Martinez, Frédéric, Lomné, Georges, Lempérière, Annick & Rolland, Denis (Eds.), L'Amérique Latine et les modèles européens, Paris, L'Harmattan, 1998, pp. 505-530.

Conan, Éric & Rousso, Henry, Vichy, un passé qui ne passe pas, Paris, Folio, 1996, 513 p.

Condliffe, John Bell, League of Nations: World economic survey, 1932-33, Geneva, League of Nations, 1933.

Contreras, Rodrigo, La dictature de Pinochet en perspective. Sociologie d'une révolution capitaliste et néoconservatrice, Paris, L'Harmattan, 2007, 301 p.

Correa, Sofía, Con las riendas del poder. La derecha chilena en el siglo XX, Santiago, Editorial Sudamericana, 2004, 313 p.

Correa, Sofía, 'El partido Conservador ante las Leyes Laicas 1881-1884', en Krebs, R. (Ed.), Catolicismo y Laicismo: seis estudios, Santiago, Pontificia Universidad Católica, 1981.

Correa, Sofía, Figueroa, Consuelo, Jocelyn-Holt, Alfredo, Rolle, Claudio & Vicuña, Manuel, Historia del siglo XX chileno. Balance paradójico, Santiago, Editorial Sudamericana, 2001, 428 p.

Cortázar, René, Política laboral en el Chile Democrático: Avances y Desafíos en los Noventa, Santiago, Dolmen Ediciones, 1993, 171 p.

Cortázar, René (Ed.), Políticas Macroeconómicas. Una perspectiva latinoamericana, Santiago, CIEPLAN, 1986, 409 p.

Courcelle-Seneuil, Jean Gustave, Informe sobre el estado de la hacienda pública del 1º de octubre de 1861, Santiago, Santiago: Imprenta Nacional, 1861, 1861, 20 p.

Courcelle-Seneuil, Jean Gustave, Tratado teórico y práctico de economía política, Valparaíso, Revista del Pacífico. Imp. y Lib. del Mercurio de Santos Tornero, 1858, 508 p.

Cristi, Renato, El pensamiento político de Jaime Guzmán. Autoridad y libertad, Santiago, LOM Ediciones, 2000, 223 p.

Cruz-Coke, Ricardo, Historia electoral de Chile: 1925-1973, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1984, 149 p.

Cusset, François, La decennie. Le grand cauchemar des annés 1980, Paris, Éditions La Decouverte, 2008, 367 p.

Dahse, Fernando, El mapa de la extrema riqueza: los grupos económicos y el proceso de concentración de capitales, Santiago, Editorial Aconcagua, 1979, 209 p.

Davis, Madeleine, The Pinochet case: origins, progress and implications, London, Institute of Latin American Studies, 2003, 266 p.

De Castro, Sergio, El Ladrillo: Bases de la política económica del gobierno militar chileno, Santiago, CEP, 1992, 193 p.

De Castro, Sergio, Exposición sobre el estado de la hacienda pública, Santiago, Talleres Graficos La Nación, 1979, 77 p.

De La Cuadra, Sergio, Las medidas económicas: exposiciones de los señores Ministros de Hacienda Pública, Economía, Fomento y Reconstrucción, Trabajo y Previsión Social, Santiago, División de Comunicación Social, 1982, 24 p.

De La Garza, Enrique (Ed.), Ciencia económica: Transformación de conceptos, Ciudad de México, Siglo XXI, 1998, 141 p.

De La Maza, Gonzalo, 'Los movimientos sociales en la democratización de Chile', en Drake, P. & Jaksic, I. (Eds.), El modelo chileno. Democracia y desarrollo en los noventa, Santiago, LOM Ediciones, 2002, pp. 377-405.

De La Maza, Gonzalo & Garcés, Mario, La explosión de las mayorías: protesta nacional 1983-1984, Santiago, Educación y Comunicación-Gráfica Andes, 1985, 134 p.

De Ramón, Armando, Biografías de chilenos. Miembros de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 1876-1973, Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 1999-2003, Vol. II, 321 p.

De Ramón, Armando & Larraín, José Manuel, Orígenes de la vida económica chilena 1659-1808, Santiago, Centro de Estudios Públicos, 1982, 416 p.

De Vos Eyzaguirre, Barbara, El surgimiento del paradigma industrializador en Chile (1875-1900), Santiago, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile, 1999, 109 p.

Denord, François, *Néo-libéralisme version française*, Paris, Éditions Demopolis, 2007, 381 p.

Devés, Eduardo, *El pensamiento latinoamericano en el siglo XX. De la CEPAL al neoliberalismo (1950-1990)*, Buenos Aires, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana / Ed. Biblos, 2003, 323 p.

Dezalay, Yves & Garth, Bryant, *The Internationalization of Palace Wars: Lawyers, Economists, and the Contest to Transform Latin American States*, Chicago, University of Chicago Press, 2002, 331 p.

Dezalay, Yves & Garth, Bryant G., *La internacionalización de las luchas por el poder. La competencia entre abogados y economistas por transfor*

mar los Estados Latinoamericanos, Santiago, ILSA/Universidad Bolivariana, 2002, 389 p.

Díaz, José, *Economía Chilena 1810-1995: evolución cuantitativa del producto total y sectorial*, Santiago, Universidad Católica, 1998, 93 p.

Díaz Nieva, José, *Chile; De La Falange Nacional a La Democracia Cristiana*, Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned), 2001, 250 p.

Dinges, John, *The Condor Years: How Pinochet and His Allies Brought*

Terrorism to Three Continents, New Press, 2004, 288 p.

Dixon, Keith, Les évangélistes du marché, Paris, Raison d'agir éditions, 1998, 111 p.

Domínguez, Jorge I., Technopols: freeing politics and markets in Latin America in the 1990s, University Park, Pennsylvania State University Press, 1997, 287 p.

Donoso, Ricardo, Alessandri. Agitador y demoledor (cincuenta años de historia política de Chile), México, Fondo de Cultura Económica, 1952, 496 p.

Doran, Marie Christine, 'Violence et démocratie dans le discours présidentiel chilien entre 1990 et 2005', en Corten, A. (Ed.), La violence dans l'imaginaire latino-américain, Québec, Presses de l'Université du Québec, 2008, pp. 305-327.

Dostaler, Gilles, Le libéralisme de Hayek, Paris, Éditions La Decouverte, 2001, 122 p.

Drake, Paul, The Money Doctor in the Andes: U.S. Advisors, Investors, and Economic Reform in Latin America from World War I to the Great Depression, North Carolina NC city, Duke University Press, 1988, 488 p.

Drake, Paul, Money Doctors, Foreign Debts, and Economic Reforms in Latin America from the 1890s to the Present, SR Books, 1993, 270 p.

Drake, Paul, Socialismo y populismo: Chile 1936-1973, Valparaíso, Eds. Universitarias de Valparaíso, 1992, 321 p.

Drake, Paul & Cruz, María Angélica, Iglesia, represión y memoria. El caso chileno, Texas, Social Science Research Council, 2004, 171 p.

Drake, Paul & Jaksic, Iván, El modelo chileno. Democracia y desarrollo en los noventa, Santiago, LOM ediciones, 2002, 535 p.

Encina, Francisco Antonio, Nuestra inferioridad económica: sus causas, sus consecuencias, Santiago, Ed. Universitaria, 1955, 274 p.

Erhard, Ludwig, Economía social de mercado: su valor permanente, Madrid, Ediciones Rialp, 1994, 169 p.

Estrada Álvarez, Jairo (Ed.), Intelectuales, tecnócratas y reformas neoliberales en América Latina, Unibiblos - U. Nal. Colombia, 2005, 458 p.

Farge, Arlette, Lugares para la Historia, Santiago, Ediciones Universidad Diego Portales, 2008, 153 p.

Fazio, Hugo, El carácter de la política económica de la Junta Militar, México, Casa de México, 1977, 54 p.

Fazio, Hugo, El programa abandonado: Balance económico social del gobierno de Aylwin, Santiago, LOM Ediciones, 1996, 182 p.

Fazio, Hugo, La transnacionalización de la economía chilena. Mapa de la extrema riqueza al año 2000, Santiago, LOM Ediciones, 2000, 339 p.

Fazio, Hugo, Mapa actual de la extrema riqueza al año 2005, Santiago, LOM Ediciones, 2005, 377 p.

Fazio, Hugo, Mapa actual de la extrema riqueza en Chile, Santiago, LOM Ediciones, 1997, 462 p.

Fazio, Hugo, TLC: El amarre del modelo, Santiago, LOM Ediciones, 2004, 172 p.

Fazio Vengoa, Hugo, La globalización en Chile: Entre el Estado y la sociedad de mercado, Bogotá, Unibiblos-U. Nal. Colombia, 2004, 233 p.

Fernandois, Joaquín, Abismo y cimiento. Gustavo Ross y las relaciones entre Chile y Estados Unidos, 1932 - 1938, Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 1996, 336 p.

Fernandois, Joaquín, Mundo y fin de mundo. Chile en la política mundial 1900-2004, Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2005, 638 p.

Fernández Abara, Joaquín, *El Ibañismo (1937-1952): un caso de populismo en la política chilena*, Santiago, Instituto de Historia Pontificia Universidad Católica, 2007, 214 p.

Fernández, Mario & Nohlen, Dieter, *El presidencialismo renovado: instituciones y cambio político en América Latina*, Santiago, Nueva Sociedad, 1998, 390 p.

Fernández-Domingo, Enrique, *Le négoce français au Chili (1880-1929)*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006, 362 p.

Ffrench-Davis, Ricardo, *Economic Reforms in Chile. From Dictatorship to Democracy*, US, The University of Michigan Press, 2002, 263 p.

Ffrench-Davis, Ricardo, *El Pacto andino, un modelo original de integración*, Santiago, Universidad Católica de Chile, Centro de Estudios de Planificación Nacional (CEPLAN), 1974, 64 p.

Ffrench-Davis, Ricardo, *Entre el NeoLiberalismo y el Crecimiento con Equidad: Tres Décadas de Política Económica en Chile*, Santiago, Dolmen, 2001, 334 p.

Ffrench-Davis, Ricardo, 'La inversión extranjera directa en Chile', en Muñoz, O. (Ed.), *Hacia un Chile competitivo: Instituciones y políticas*, 1a. ed., Santiago, Editorial Universitaria, 2003, pp. 287-324.

Ffrench-Davis, Ricardo, *Reforming the reforms in Latin America: Macroeconomics, trade, finance (introduction)*, London, Macmillan/Palgrave,

2000, 25 p.

Ffrench-Davis, Ricardo, Muñoz, Óscar & Palma, José Gabriel, 'Las economías latinoamericanas 1950-1990', en Leslie, B. (Ed.), Historia de América Latina. Economía y sociedad desde 1930 (Vol.11), Cambridge, Cambridge University Press, 1997, pp. 83-161.

Ffrench-Davis, Ricardo & Stallings, Bárbara, Reformas, crecimiento y políticas sociales en Chile desde 1973, Santiago, LOM Ediciones, 2001, 333 p.

Figueroa, Pedro Pablo, Diccionario biográfico de Chile, Santiago, Imprenta, litografía y encuadernación Barcelona, 1897-1901, 583 p.

Figueroa, Virgilio, Diccionario Histórico, Biográfico y Bibliográfico de Chile. 1800-1928, Santiago, Establecimientos Gráficos Balcells y Cía., 1928.

Fleet, Michael & Smith, Brian, The Catholic Church and Democracy in Chile and Peru, University of Notre Dame Press, 1997, 366 p.

Fontaine, Arturo, Los economistas y el presidente Pinochet, Santiago, Ed. Zig-Zag, 1988, 203 p.

Fontaine, Juan Andrés, 'Banco Central autónomo: en pos de la estabilidad', en Larraín, F. & Vergara, R. (Eds.), La transformación económica de Chile, Santiago, Santiago, CEP, 2000, pp. 393-427.

Foxley, Alejandro, 'Distribución del ingreso y agentes sociales del proceso de desarrollo en Chile: un análisis para la década de 1970', en Downey, R. (Ed.), Los actores de la realidad chilena, Santiago, Editorial del Pacífico IDEP, 1974, pp. 9-31.

Foxley, Alejandro, La economía política de la transición: el camino del diálogo, Santiago, Dolmen, 1993, 245 p.

Foxley, Alejandro, Logros y fracasos en la erradicación de la pobreza. El caso de Chile, Santiago, Universidad de Chile, 2003, 32 p.

Foxley, Alejandro, Bustos, Manuel & Sandoval, Guillermo, Conversaciones con Manuel Bustos, Santiago, Editorial Andrés Bello, 1999, 171 p. Foxley, Alejandro, Cortázar, René, Meller, Patricio, Solimano, Andrés,

Arellano, José Pablo, French-Davis, Ricardo & Muñoz, Óscar, Reconstrucción Económica para la Democracia, Santiago, Aconcagua, 1984, 330 p.

Frank, Volker, 'Politics without policy: the failure of social concertation in democratic Chile, 1990-2000', en Winn, P. (Ed.), Victims of the Chilean miracle. Workers and Neoliberalism in the Pinochet Era, 1973-2002, London, Duke University Press, 2004, pp. 71-124.

Frei Montalva, Eduardo, Chile Desconocido, Santiago, Ediciones Ercilla, 1937, 145 p.

Freidenberg, Flavia, La tentación populista: una vía de acceso al poder en América Latina, Madrid, Editorial Síntesis, 2007, 287 p.

Friedman, Milton, Capitalism and Freedom, Chicago, The University of Chicago Press, 1975, 202 p.

Friedman, Milton, Essays in Positive Economics, Chicago, University of Chicago Press, 1953, 334 p.

Friedman, Milton, A Monetary history of the United States, 1867-1960, New Jersey, Princeton University Press, 1971, 888 p.

Friedman, Milton & Friedman, Rose, Two Lucky People: Memoirs, Chicago, University of Chicago Press, 1999, 667 p.

Fuentes, Jordi & Cortés, Ilía, Diccionario político de Chile: 1810-1966, Santiago, Ediciones Orbe, 1967, 532 p.

Fukuyama, Francis, La fin de L'histoire et le dernier homme, Paris, Flammarion, 1992, 452 p.

Gárate, Manuel, 'El economista como profesional de las ciencias sociales. Reflexiones en torno a la experiencia chilena', en De Cea,

M. & Gárate, M. (Eds.), ¿Qué tipo de nexos para qué tipo de políticas? Estudio comparado en diversos campos de intervención pública en Chile, Santiago, Editorial Universidad Bolivariana, 2006, pp. 85-99.

Gárate, Manuel, 'Think Tanks y Centros de Estudio. Los nuevos mecanismos de influencia en el Chile post-autoritario', en De Cea, M., Díaz, P. & Kerneur, G. (Eds.), ¿De país modelado a país modelo? Una mirada sobre la política, lo social y la economía, Santiago, GRESCH, ICSO-UDP, Universidad Bolivariana, 2008, pp. 209-230.

Garcés, Mario, Crisis social y motines populares en el 1900, Santiago, LOM, 2003, 152 p. García, Diego, Isla, José & Toro, Pablo, Los muchachos de antes. Historias de la FECH 1973 - 1988, Santiago, Universidad Alberto Hurtado, 2006.

García, Rigoberto (Ed.), Economía y política durante el gobierno militar en Chile (1973-1987), México, Fondo de Cultura Económica, 1989, 295 p.

García, Rigoberto (Ed.), Evolución de la industria manufacturera latinoamericana, 1850-1930, Stockholm, Institute of Latin American Studies, 1980, 85 p.

Garretón, Manuel, Nuestro concepto de la política, Santiago, Lircay, 1937, 16 p.

Gazmuri, Cristián, Notas sobre las elites chilenas 1930-1999, Santiago, Documento de trabajo n° 3, Instituto de Historia Pontificia Universidad Católica

de Chile, 2001, 18 p.

Gazmuri, Cristián, Una interpretación política de la experiencia autoritaria, Santiago, Documentos de trabajo del Programa de Relaciones Internacionales, Instituto de Historia, 1996, 16 p.

Gazmuri, Cristián, Arancibia, Patricia & Góngora, Álvaro, Eduardo Frei Montalva (1911-1982), Santiago, Fondo de Cultura Económica, 1996, 526 p.

Gill, Lesley, Escuela de las Américas. Entrenamiento militar, violencia e impunidad en las Américas, Santiago, LOM Ediciones, 2005, 345 p.

Girón, Alicia, 'International Monetary Fund: From Stability to Instability The Washington Consensus and structural reforms in Latin America', en Lechini, G. (Ed.), Globalization and the Washington Consensus: its influence on democracy and development in the south, Buenos Aires, CLACSO, junio 2008, pp. 43-56.

Gobierno de Chile, Programa socio-económico: 1981-1989, Santiago, Ministerio del Interior, 1981, 54 p.

Gobierno de Chile, Declaración de Principios del Gobierno de Chile, Santiago, 1974, 33 p.

Gómez Leyton, Juan Carlos, La frontera de la democracia. El derecho de propiedad en Chile. 1925-1973, Santiago, LOM Ediciones, 2004, 378 p.

Góngora, Mario, Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX, Santiago, Ed. La Ciudad, 1981, 149 p.

González Arana, Roberto & Crisorio, Beatriz Carolina (Eds.), Integración en América Latina y el Caribe: Análisis sobre procesos de regionalización, Barranquilla, Colombia, Ediciones Uninorte, 2001, 272 p.

González, Mónica, Chile, La Conjura. Los mil y un días del Golpe, Barcelona, Ediciones B, 2000, 507 p.

Grey, John, False Dawn: The Delusions of Global Capitalism, New Press, UK, 2000, 272 p.

Grey, John, Strow Dogs: Thoughts on humans and other animals, Farrar, Straus and Giroux, 2007, 272 p.

Grez, Sergio, De la 'regeneración del pueblo' a la huelga general. Génesis y evolución histórica del movimiento popular en Chile (1810-1890), Santiago, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana DIBAM, 1998, 870 p.

Grez, Sergio, La cuestión social en Chile: Ideas y debates precursores (1804-1902), Santiago, DIBAM, 1997, 577 p.

Grove, Jorge, Descorriendo el velo: episodio de los doce días de la República

Socialista, Valparaíso, Aurora de Chile, 1933, 152 p.

Guevara, Tomás, 'La ocupación de la Araucanía'; Prolongación de las líneas del Malleco i del litoral, Historia de la civilización de la Araucanía, Santiago, Cervantes, 1898-1902, pp. 291-340.

Guillaudat, Patrick & Mouterde, Pierre, Los movimientos sociales en Chile 1973-1993, Santiago, LOM ediciones, 1998, 248 p.

Hachette, Dominique, 'Privatizaciones: reforma estructural pero inconclusa', La transformación económica de Chile, Santiago, Centro de Estudios Públicos, 2000, pp. 111-152.

Hachette, Dominique & Lüders, Rolf, La privatización en Chile, Santiago, CINDE, 1994, 308 p.

Hall, Stuart, Le populisme autoritaire. Puissance de la droite et impuissance de la gauche au temps du thatchérisme et du blairisme, Paris, Éditions Amsterdam, 2008, 200 p.

Harvey, David, A brief history of Neoliberalism, Oxford, Oxford University Press, 2007, 254 p.

Hayek, F., The Road to Serfdom, Chicago, University of Chicago Press, 1994, 320 p.

Heise, Julio, El período parlamentario (1861-1925), Santiago, Editorial Universitaria, 1982, 501 p.

Held, Gunther & Jiménez, Luis Felipe, Liberalización, crisis y reforma del sistema bancario chileno 1974-1999, Santiago, CEPAL, 1999, 60 p.

IHTP (Ed.), Écrire l'histoire du temps présent, Paris, CNRS éditions, 1992, 417 p.

Hira, Anil, Ideas and Economic Policy in Latin America: Regional, National, and Organizational Case Studies, Greenwood Publishing Group, 1998, 185 p.

Hirschman, Albert, Journeys Toward Progress: Studies of Economic Policy-Making in Latin America, Greenwood Press, 1968, 308 p.

Hobsbawm, Eric, Aux armes historiens. Deux siècles d'histoire de la Révolution Française, Paris, Éditions La Découverte, 2007.

Huneus, Carlos, El Régimen de Pinochet, Santiago, Ed. Sudamericana, 2001, 670 p.

Huneus, Carlos, 'A highly institutionalized political party: Christian Democracy in Chile', en Mainwaring, S. & Scully, T. (Eds.), Christian Democracy in Latin America: Electoral Competition and Regime Conflicts,

Stanford University Press, 2003, 404 p.

Huneeus, Carlos, La reforma universitaria: veinte años después, Santiago, CPU, 1988, 117 p.

Ibáñez, Adolfo, Herido en el ala. Estado, oligarquías y subdesarrollo. Chile 1924-1960, Santiago, Editorial Biblioteca Americana, Universidad Andrés Bello, 2003, 382 p.

Ibáñez, Pedro, Hacia una moderna economía de mercado: diez años de política económica, 1973-1983, Valparaíso, Escuela de Negocios de Valparaíso, Fundación Adolfo Ibáñez, 1984, 73 p.

Icare, Quo Vadis, Chile: Versión completa del 110 encuentro nacional de la empresa, enade '89, Santiago, ICARE, 1990, 256 p.

Jobet, Julio César, Ensayo crítico del desarrollo económico-social de Chile, Santiago, Editorial Universitaria, 1951, 233 p.

Keller, Carlos, Como salir de la crisis, Santiago, Ed. Nascimento, 1932, 32 p.

Keller, Carlos, La eterna crisis chilena, Santiago, Ed. Nascimento, 1931, 323 p.

Keller, Carlos, Un país al garete. Contribución a la seismología social de Chile,

Santiago, Ed. Nascimento, 1932, 168 p.

Kessler, Nicolas, *Le conservantisme américain*, Paris, Presses Universitaires de France, 1998, 127 p.

Kinney Giraldo, Jeanne, 'Development and Democracy in Chile: Finance Minister Alejandro Foxley and the Concertación's Project for the 1990s', en Domínguez, J. (Ed.), *Technopols: Freeing Politics and Markets in Latin America in the 1990s*, Penn State Press, 1997, pp. 229-276.

Klamer, Arjo, *Conversations with economists: new classical economists and opponents speak out on the current controversy in macroeconomics*, Totowa, N.J., Rowman & Allanheld, 1984, 265 p.

Klein, Naomi, *The Shock Doctrine. The rise of disaster capitalism*, Metropolitan Books, 2007, 576 p.

Krebs, Ricardo, Valdivieso, Patricio & Muñoz, María Angélica, *Historia*

de la Pontificia Universidad Católica de Chile: 1888 - 1988, Santiago,

Eds. Universidad Católica de Chile, 1994, 1272 p.

Krugman, Paul, *Rethinking International Trade*, MIT Press, 1994, 292 p.

Lardone, Martín, '¿Quién aprende de quién? El Banco Mundial en la reforma del Estado chileno', en De Cea, M., Díaz, P. & Kerneur, G. (Eds.), ¿De país modelado a país modelo? Una mirada sobre la política, lo social y la economía, Santiago, GRESCH, ICSO, Universidad Bolivariana, 2008, pp. 209-230.

Larraín, Felipe & Vergara, Rodrigo (Eds.), La transformación económica de Chile, Santiago, CEP, 2000, 728 p.

Larrañaga, Osvaldo, 'Distribución de ingresos: 1958-2001', en Ffrench-Davis, R. & Stallings, B. (Eds.), Reformas, crecimiento y políticas sociales en Chile desde 1973, Santiago, LOM Ediciones, 2001, pp. 295-329.

Lau, Lawrence J. & Studies, Institute for Contemporary, Models of development: a comparative study of economic growth in South Korea and Taiwan, San Francisco, Calif., ICS Press, Institute for Contemporary Studies, 1986, 217 p.

Laval, Christian, L'homme économique. Essai sur les racines du néolibéralisme, Paris, Gallimard, 396 p.

Lavín, Joaquín, Miguel Kast: Pasión de vivir, Santiago, Editorial Zig-Zag, 1986, 174 p.

Levitt, Steven & Dubner, Stephen, Freakonomics: a rogue economist explores the hidden side of everything., William Morrow Ed., 2005, 336 p.

Lijphart, Arend, Democracy in plural societies: a comparative exploration, New Haven, Yale University Press, 1977, 248 p.

Lira, Elizabeth & Loveman, Brian, El espejismo de la reconciliación política: Chile 1990-2002, Santiago, LOM Ediciones, 2002, 449 p.

Lira, Elizabeth & Loveman, Brian, Políticas de reparación: Chile 1990-2004, Santiago, LOM Ediciones, 2005, 546 p.

Lladser, María Teresa & Díaz, Harry, Centros privados de investigación en Ciencias sociales en Chile, Santiago, Academia de Humanismo Cristiano, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), 1986, 296 p.

Loveman, Brian, Chile. The legacy of hispanic capitalism, New York, Oxford University Press, 1988, 424 p.

Lúnecke Reyes, Graciela, Violencia política: (violencia política en Chile 1983-1986), Santiago, LOM Ediciones, 2000, 185 p.

Luzón Peña, Diego, Curso de Derecho Penal; parte general, Madrid, Ed. Universitas, 1999, 360 p.

Lynch, John, Las revoluciones hispanoamericanas 1808-1826, Barcelona, Ariel Historia, 1997, 382 p.

Macesich, George, *Monetarism, theory and policy*, New York, NY, Praeger, 1983, XI, 269 p.

Maira, Luis, *Los tres Chile de la segunda mitad del siglo XX*, Santiago, LOM Ediciones, 1998, 92 p.

Martner, Gonzalo, *Gobernar el mercado: Las nuevas fronteras del Estado en el siglo XXI*, Santiago, LOM Ediciones, 1999, 211 p.

Martner, Gonzalo, *Remodelar el modelo. Reflexiones para el Bicentenario*, Santiago, LOM Ediciones, 2007, 191 p.

Mayol, Alberto, *La tecnocracia: el falso profeta de la modernidad. Una crítica desde la teoría política a las propuestas tecnocráticas*, Santiago, Documento de trabajo n° 81 Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Chile, 2006, 247 p.

Mayorga, Patricia, *El Cóndor Negro. El atentado a Bernardo Leighton*, Santiago, El Mercurio Aguilar, 2003, 241 p.

Mccloskey, Deirdre, *The Rhetoric of Economics*, Wisconsin University of Wisconsin Press, 1998, 248 p.

Mellafe, Rolando, Rebolledo, Antonia & Cárdenas, Mario, *Historia de la*

Universidad de Chile, Santiago, Ediciones de la Universidad de Chile, 1992, 321 p.

Meller, Patricio, 'Consideraciones económicas en torno al gobierno del presidente Lagos', en Funk, R. (Ed.), El gobierno de Ricardo Lagos. La nueva vía hacia el socialismo, Santiago, Ediciones Universidad Diego Portales, 2006, 13 p.

Meller, Patricio, Los Chicago Boys y el modelo económico chileno, 1973-1983, Santiago, CIEPLAN, 1984, 22 p.

Meller, Patricio, Un Siglo de Economía Política Chilena (1890-1990), Santiago, Editorial Andrés Bello, 1998, 380 p.

Mendez Beltrán, Luz María, La exportación minera en Chile, 1800-1840: Un estudio de historia económica y social en la transición de la colonia a la República, Santiago, Editorial Universitaria, 2004, 215 p.

Menéndez-Carrión, Amparo, Joignant, Alfredo & Garretón, Manuel Antonio, La caja de Pandora: El retorno de la transición chilena, Santiago, Planeta/Ariel, 1999, 267 p.

Millán, Augusto, La minería metálica en Chile en el siglo XIX, Santiago,

Editorial Universitaria, 2004, 87 p.

Millar, René, 'El parlamentarismo chileno y su crisis (1891-1924)', en Godoy, O. (Ed.), Cambio de Régimen Político, Santiago, Eds. Universidad Católica de Chile, 1992.

Millar, René, Políticas y teorías monetarias en Chile: 1810-1925, Santiago, Universidad Gabriela Mistral, 1994, 454 p.

Millaud, Édouard, Acollas, René & Picot, Géorges, Courcelle-Seneuil : (1813-1892), Paris, Typographie A. Davy (Memoria Chilena), 1892, 32 p.

Minc, Alain, Les Prophètes du bonheur, Paris, Éditions Grasset & Fasquelle, 2004, 316 p.

Mizala, Alejandra & Romaguera, Pilar, 'La legislación laboral y el mercado del trabajo: 1975-2000', en Ffrench-Davis, R. & Stallings, B. (Eds.), Reformas, crecimiento y políticas sociales en Chile desde 1973, Santiago, LOM Ediciones, 2001, pp. 201-230.

Moguillansky, Graciela, 'Privatizaciones y su impacto en la inversión', en Ffrench-Davis, R. & Stallings, B. (Eds.), Reformas, crecimiento y políticas sociales en Chile desde 1973, Santiago, LOM Ediciones, 2001, p. 333.

Mönckeberg, María Olivia, El imperio del Opus Dei en Chile, Santiago, Ediciones B Chile S.A, 2003, 714 p.

Mönckeberg, María Olivia, El Saqueo de los Grupos Económicos al Estado Chileno, Santiago, Ediciones B, 2001, 269 p.

Mönckeberg, María Olivia, El negocio de las universidades en Chile, Santiago, Debate, 2007, 669 p.

Montecinos, Verónica, Economists, Politics and the State: Chile 1958-1994, Amsterdam, Rozenberg Publishing Services, 1998, 151 p.

Montecinos, Verónica, 'Notas sobre la evolución e influencia de la tecnocracia económica en Chile', en Estrada Avarez, J. (Ed.), Intelectuales, tecnócratas y reformas neoliberales en América Latina, Unibiblos-U. Nal. Colombia, 2005, p. 458.

Montecinos, Verónica, 'Notas sobre la evolución e influencia de la tecnocracia económica en Chile', en Estrada Avarez, J. (Ed.), Intelectuales, tecnócratas y reformas neoliberales en América Latina, Unibiblos - U. Nal. Colombia, 2005, pp. 151-174.

Montero, Cecilia, La revolución empresarial chilena, Santiago, Dolmen/CIEPLAN, 1997, 367 p.

Montero, Cecilia, Les nouveaux entrepreneurs: le cas du Chili, Paris, l'Harmattan, 1997, 334 p.

Morales, Juan Antonio, McMahon, Gary & Celedón, Carmen, La polí

tica económica en la transición a la democracia: Lecciones de Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay, Santiago, CIEPLAN, 1993, 179 p.

Moscoso, Pablo, '1983. Historia de un año de protesta', *Historias del siglo XX chileno*, Santiago, Vergara Eds., 2008, pp. 401-466.

Mosse, George, *La cultura europea del siglo XIX*, Barcelona, Editorial Ariel 1997, 250 p.

Moulian, Tomás, *Chile actual. Anatomía de un mito*, Santiago, LOM ediciones, 1997, 385 p.

Moulian, Tomás, *El consumo me consume*, Santiago, LOM ediciones, 1998, 73 p.

Moulian, Tomás, *El gobierno de Ibáñez: 1952-1958*, Santiago, FLACSO, 1986, 83 p.

Moyano, Cristina, *Mapu o la seducción del poder y la juventud*, Santiago, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2009, 303 p.

Muñoz, Óscar, *Chile y su industrialización: Pasado, crisis y opciones*, Santiago, CIEPLAN, 1986, 323 p.

Muñoz, Óscar, El modelo económico de la Concertación 1990-2005 ¿Reformas o cambio?, Santiago, Catalonia, FLACSO, 2007, 287 p.

Muñoz, Óscar (Ed.), Más allá del bosque: transformar el modelo exportador, Santiago, FLACSO-LOM ediciones, 2001, 328 p.

Muñoz, Óscar & Otros, El Estado y el sector privado: construyendo una nueva economía en los años 90, Santiago, Dolmen, FLACSO, 2000, 409 p.

Nagy, Silvia & Leiva, Fernando Ignacio (Eds.), Democracy in Chile: The Legacy of September 11, 1973, Sussex Academic Press, 2003, 226 p.

Navarrete, Jorge, Liberales y Comunitaristas. Reflexiones generales para un debate permanente, Santiago, Universidad Bolivariana, 2006, 147 p.

Nazer Ahumada, Ricardo, 'El surgimiento de una nueva élite empresarial en Chile: 1830-1880', en Stabili, M. R. & Bonelli, F. (Eds.), Minoranze e Culture Imprenditoriali (Cap. 2), Roma, Quaderni/Università degli studi di Roma Tre, 2000, pp. 59-84.

Nisbet, Robert, Conservadurismo, Madrid, Alianza Editorial, 1995, 169 p.

Noiriel, Gérard, Introduction à la socio-histoire, Paris, Éditions La Découverte, 2006.

Novak, Michael, *Business as a calling: work and the examined life*, The Free Press, 1996, 246 p.

Novak, Michael, *Catholic Ethic And The Spirit Of Capitalism*, Free Press, 1993, 352 p.

Nunn, Frederick M., *The military in Chilean history: essays on civil-mili*

tary relations, 1810-1973, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1976, 343 p.

Núñez, Iván, *La Descentralización y las Reformas Educativas*, Santiago, PIIE Serie Histórica, 1990, 250 p.

Oakeshott, Michael, *La actitud conservadora*, Madrid, Ediciones Sequitur, 2007, 91 p.

Ocampo, José Antonio (Ed.), *La CEPAL en sus 50 años. Notas de un seminario conmemorativo*, CEPAL, julio 2000, 164 p.

Ocampo, José Antonio & Martín, Juan (Eds.), *Une décennie d'ombres et de lumières. L'Amérique latine et les Caraïbes dans les années 90*, CEPAL, agosto 2003, 416 p.

O'donnell, Guillermo, 1966-1973, el Estado burocrático autoritario: Triunfos, derrotas y crisis, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1982, 499 p.

Olave-Castillo, Patricia, Chile: Neoliberalismo, pobreza y desigualdad social, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Económicas, 2003, 248 p.

Olave-Castillo, Patricia, El proyecto neoliberal en Chile y la construcción de una nueva economía, México, Universidad Nacional Autónoma de México. Ediciones El Caballito S.A., 1997, 204 p.

Ortega Frei, Eugenio, Historia de una alianza política: el partido Socialista de Chile y el partido Demócrata Cristiano: 1973-1988, Santiago, CED-CESOC (LOM Ediciones), 1992, 376 p.

Ortega Frei, Eugenio & Moreno, Carolina (Eds.), ¿La concertación desconcertada?: reflexiones sobre su historia y su futuro, Santiago, LOM Ediciones, 2002, 287 p.

Ortega, Luis, La Guerra Civil de 1891, 100 años hoy, Santiago, Universidad de Santiago de Chile, 1992, 184 p.

Osborne, Martin & Rubenstein, Ariel, A Course in Game Theory, MIT press, 1994, 368 p.

Otano, Rafael, Nueva Crónica de la Transición, Santiago, Lom Ediciones, 2006, 531 p.

Pinochet, Augusto, Política, Politiquería, Demagogia, Santiago, Editorial Renacimiento, 1983, 119 p.

Pinochet, Tancredo, La conquista de Chile en el siglo XX, Santiago, Ed. La Ilustración, 1909, 252 p.

Pinto, Julio, '¿Y la historia les dio la razón? El MIR en dictadura, 1973-1981', en Valdivia Ortiz De Zárate, V., Álvarez, R. & Pinto, J. (Eds.), Su revolución contra nuestra revolución. Izquierdas y derechas en el Chile de

Pinochet (1973-1981), Santiago, LOM Ediciones, 2006, pp. 153-205.

Pinto, Julio & Ortega, Luis, Expansión minera y desarrollo industrial: un caso de crecimiento asociado (Chile 1850-1914), Santiago, U. de Santiago, Depto. de Historia, 1990, 184 p.

Pinto, Julio, Vallejos, Javier & Nazer, Ricardo, Ignacio Domeyko, José Tomás Urmeneta, Juan Brügger: tres forjadores de la minería nacional Santiago, Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, 1993, 196 p.

Pinto Santa Cruz, Aníbal, Antecedentes sobre el desarrollo de la economía chilena, Santiago, Ed. del Pacífico, 1954, 136 p.

Pinto Santa Cruz, Aníbal, Chile, un caso de desarrollo frustrado, Santiago, Ed. Universitaria, 1959, 189 p.

Piñera, José, El cascabel al gato: la batalla por la reforma previsional, Zig-Zag, 1991, 172 p.

Piñera, José, Informe económico: 1976-1977, Santiago, N/A, 1977, 136 p.

Piñera, José, La revolución laboral en Chile, Zig-Zag, 1991, 171 p.

Pipino, Adelio, El Pacto Andino y el modelo de desarrollo económico chileno, Santiago, ODEPLAN, 1977, 112 p.

Pizarro, Crisóstomo, 'La primera reforma tributaria durante el gobierno de transición: concertación y debate', en Pizarro, C., Raczynski, D. & Vial Ruiz Tagle, J. (Eds.), Políticas económicas y sociales en el Chile democrático, Santiago, CIEPLAN/UNICEF, 1995, pp. 93-128.

PNUD, Informe Desarrollo Humano en Chile-Año 1998, Santiago, PNUD, 1998, 254 p.

Polanyi, Karl, The great transformation: the political and economic origins of our time, Boston, MA, Beacon Press, 2001, 317 p.

Polanyi, Karl, La Gran Transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo., México D.F., Fondo de Cultura Económica, 2003, 395 p.

Portales, Felipe, Chile: una democracia tutelada, Santiago, Editorial Sudamericana, 2000, 493 p.

Prochasson, Christophe, L'empire des émotions. Les historiens dans la mêlée, Paris, Éditions Demopolis, 2008, 253 p.

Puryear, Jeffrey, Thinking politics: intellectuals and democracy in Chile, 1973-1988: Intellectuals and Democracy in Chile, 1973-1988, Londres, John Hopkins University Press, 1994, 206 p.

Puyana, Jaime, Salgado, Wilma, Schuldt, Jürgen, García, José Ramón & Graña, Alberto, La crisis asiática: lecciones para América Latina, Quito, Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, 1998, 323 p.

Quattrocchi-Woisson, Diana (Ed.), Argentine. Enjeux et racines d'une société en crise, Paris, Editions-Le Félin, 2003, 293 p.

Quiroga, Rayén, Comercio, Inversiones y Sustentabilidad: El Caso de Chile, Santiago, Programa Chile Sustentable/Fundación Heinrich Böll, 2003, 68 p.

Quiroga, Rayén (Ed.), El tigre sin selva. Consecuencias ambientales de la

transformación económica de Chile: 1974-1993, Santiago, Instituto de Ecología Política, 1994, 490 p.

Ramírez Necochea, Hernán, La guerra civil de 1891: antecedentes económicos, Santiago, Austral Impresión, 1951, 235 p.

Ramos, Joseph, Más allá de la economía. Más acá de la utopía, Santiago, CIEPLAN, 1991, 315 p.

Redish, Angela, Bimetallism: An Economic and Historical Analysis, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, 288 p.

Ricoeur, Paul, La Mémoire, l'histoire, l'oubli, Paris, Editions du Seuil, 2000, 657 p.

Rock, David, Latin America in the 1940's: war and postwar transitions, Berkeley, University of California Press, 1994, xiv, 302 p.

Rojas Flores, Jorge, La dictadura de Ibáñez y los sindicatos: (1927-1931), Santiago, DIBAM, 1993, 190 p.

Rojas Sánchez, Gonzalo, Chile escoge la libertad: La Presidencia de Augusto Pinochet Ugarte, Santiago, Zig-Zag, 2000, 814 p.

Romero Pérez, Jorge, La crisis y la deuda externa en América Latina, San José, Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1993, 231 p.

Rosanvallon, Pierre, Le capitalisme utopique. Histoire de l'idée de marché, Paris, Seuil, 1999, 251 p.

Rosende, Francisco (Ed.), La Escuela de Chicago, Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2007, 337 p.

Rosende, Francisco (Ed.), La Escuela de Chicago. Una mirada histórica a 50 años del convenio Chicago/ Universidad Católica. Ensayos en honor a Arnold Harberger, Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2007, 337 p.

Ross, Agustín, La cuestión económica; folleto de actualidad, Valparaíso, Excélsior, 1885, 39 p.

Ross, Agustín, Reseña histórica del comercio de Chile durante la era colonial Santiago, Imprenta Cervantes, 1894, 482 p.

Ross, César, Poder, mercado y Estado: Los bancos de Chile en el siglo XIX, Santiago, LOM Ediciones, 2003, 179 p.

Roxborough, Ian, 'La clase trabajadora urbana y el movimiento obrero en América Latina desde 1930', en Leslie, B. (Ed.), Historia de América Latina. Economía y sociedad desde 1930 (Vol.12), Cambridge, Cambridge University Press, 1997, pp. 132-192.

Ruiz, Carlos, 'El conservantismo como ideología. Corporativismo, y neoliberalismo en las revistas teóricas de la derecha', en Ruiz, C. & Cristi,

R. (Eds.), El Pensamiento conservador en Chile, Santiago, Editorial Universitaria, 1992, pp. 103-123. Ruiz, Carlos & Cristi, Rento, El pensamiento conservador en Chile, Santiago, Editorial Universitaria, 1992, 163 p. Rutherford, Paul, Weapons of mass persuasion: marketing the war against Iraq, Toronto, University of Toronto Press, 2004, 226 p. Sachs, Jeffrey & Larraín, Felipe, Macroeconomía en la economía global, México, Prentice Hall Hispanoamericana, 1994, 789 p.

Sader, Emir & Gentili, Pablo (Eds.), La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social, Buenos Aires, CLACSO Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2005, 195 p.

Sagredo, Rafael, La gira del presidente Balmaceda al norte: el inicio del 'cru-do y riguroso invierno de su quinquenio', (verano de 1889), Santiago, LOM Ediciones, 2001, 203 p.

Sagredo, Rafael & Devés, Eduardo, Discursos de José Manuel Balmaceda: iconografía / recopilación de Rafael Sagredo Baeza y Eduardo Devés Valdés., Santiago, DIBAM, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 1991-1992, 684 p.

Sagredo, Rafael & Gazmuri, Cristián (Eds.), Historia de la vida privada en Chile. El Chile contemporáneo: de 1925 a nuestros días., Santiago, Aguilar Chilena Ediciones (Taurus), 2007, 430 p.

Salama, Pierre, 'L'économie argentine et l'endettement: chronique d'une crise annoncée', en Quattrocchi-Woisson, D. (Ed.), Argentine. Enjeux et racines d'une société en crise, Paris, Editions-Le Félin, 2003, pp. 265-288.

Salazar, Gabriel & Pinto, Julio, Historia Contemporánea de Chile I. Estado, legitimidad, ciudadanía, Santiago, LOM, 1999, 173 p.

Salazar, Gabriel & Pinto, Julio, Historia Contemporánea de Chile II. Actores, identidad y movimiento, Santiago, LOM, 1999, 173 p.

Salazar, Gabriel & Pinto, Julio, Historia Contemporánea de Chile III. La economía: mercados, empresarios y trabajadores., Santiago, LOM, 2002, 187 p.

Salazar, Gabriel & Pinto, Julio, Historia Contemporánea de Chile IV. Hombría y Femenidad, Santiago, LOM, 2002, 277 p.

Salazar, Manuel, Guzmán, quién, cómo, por qué, Santiago, Ediciones Bat, 1994, 294 p.

Santiso, Javier, Amérique Latine. Révolutionnaire, libérale, pragmatique, Paris, Éditions Autrement, 2005, 156 p.

Saranyana, José Ignacio & Alejos-Grau, Carmen José, Teología en América Latina Vol. III: El siglo de las teologías latinoamericanistas (1899

-2001), Editorial Iberoamericana, 2002, 776 p.

Sater, William & Herwig, Holger, *The Grand Illusion. The Prussianization of the Chilean Army*, Lincoln (Nebraska), University of Nebraska Press, 1999, 247 p.

Say, Juan Bautista, *Tratado de Economía Política o Exposición sencilla del modo con que se forman, se distribuyen y se consumen las riquezas*, Edición Digital Basada En La 4a Ed. Madrid, I. D. F. V., 1821. (Ed.), Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 1821 (version numérique).

Schama, Simon, *Auge y caída del Imperio Británico 1776-2000*, Barcelona, Editorial Crítica, 2005, 550 p.

Schamis, Hector E., *Re-forming the state: the politics of privatization in Latin America and Europe*, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2002, 204 p.

Schkolnik, Mariana & Teitelboim, Berta, *Pobreza y desempleo en poblaciones: la otra cara del modelo neoliberal*, Santiago, PET impresión, 1988, 347 p.

Schneider, Gregory, *Conservatism in America Since 1930*, NYU Press, 2003, 452 p.

Schultz, Theodore W., *Investment in human capital; the role of education and of research*, New York, Free Press, 1970, 272 p.

Schultz, Theodore W. & Committee on Basic Research in Education, Investment in education; the equity-efficiency quandary, Chicago, University of Chicago Press, 1972, 292 p.

Segal, Marcelo, Desarrollo del capitalismo en Chile: cinco ensayos dialécticos, Santiago, Editorial del Pacífico, 1953, 353 p. Sen, Amartya, L'économie est une science morale, Paris, Éditions La Decouverte, 2003, 126 p. Serrano, Margarita, La igual libertad de Eduardo Boeninger, Santiago, Uqbar Editores, 2009, 215 p. Silva Bascañán, Alejandro, Tratado de Derecho Constitucional. Tomo III:

La Constitución de 1980. Antecedentes y génesis, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1997, 1632 p.

Silva, Eduardo, 'La política económica del régimen chileno durante la transición del neo-liberalismo radical al neo-liberalismo pragmático', en Drake, P. & Jaksic, I. (Eds.), El difícil camino hacia la democracia en Chile, Santiago, FLACSO, 1992, pp. 193-241.

Silva, Patricio, Estado, neoliberalismo y política agraria en Chile, 1973-1981, CEDLA, 1987, 361 p.

Sirinelli, Jean-François, Histoire des droites en France: Tome 3, Sensibilités, Paris, Gallimard, 2006, 956 p.

Soboul, Albert, La Révolution française, Paris, Quadriga / PUF, 2006, 121 p.

Soto, Angel, El Mercurio y la difusión del pensamiento político económico liberal 1955-1970, Santiago, Centro de Estudios Bicentenario, 2003, 191 p.

Soto, Ángel, El presente es historia, Santiago, Centro de Estudios Bicentenario, 2006, 130 p.

Soto Cárdenas, Alejandro, Influencia británica en el salitre: origen, naturaleza y decadencia, Santiago, Ed. Universidad de Santiago de Chile, 1998, 675 p.

Stabili, María Rosaria, El sentimiento aristocrático. Elites chilenas frente al espejo (1860-1960), Santiago, Editorial Andrés Bello & Centro de Investigaciones Barros Arana, 1996, 571 p.

Stallings, Bárbara, 'Las reformas estructurales y el desempeño económico', en Ffrench-Davis, Ricardo & Stallings, Barbara (Eds.), Reformas, crecimiento y políticas sociales en Chile desde 1973, Santiago, LOM Ediciones, 2001, pp. 23-60.

Steiner, Philippe, La sociologie économique, Paris, La Découverte, 2007, 121 p.

Stern, Steve J., Battling for hearts and minds: memory struggles in Pinochet's Chile, 1973-1988, Durham, Duke University Press, 2006, Vol. II, 538 p.

Stiglitz, Joseph, Globalization and its discontents, W.W. Norton, 2002, 288 p.

Stuven, Ana María, *La seducción de un orden. Las elites y la construcción de Chile en las polémicas culturales y políticas del siglo XIX*, Santiago, Ediciones de la Universidad Católica de Chile, 2000, 316 p.

Sunkel, Guillermo, *El Mercurio: 10 años de educación político-ideológica, 1969-1979*, Santiago, Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales, 1983, 149 p.

Sunkel, Guillermo & Geoffroy, Esteban, *Concentración económica de los medios de comunicación*, Santiago, LOM Ediciones, 2001, 123 p.

Tagle, Matías, *La crisis de la democracia en Chile. Antecedentes y causas*, Santiago, Editorial Andrés Bello, 1992, 288 p.

Tapia Valdés, Jorge, *El terrorismo de Estado: la doctrina de la seguridad nacional en el Cono Sur México*, D.F., Nueva Imagen; Caracas: Revista Nueva Sociedad, 1980, 283 p.

Teichman, Judith, *The Politics of Freeing Markets in Latin America: Chile, Argentina, and Mexico*, UNC Press, 2001, 273 p.

Teitelboim, Berta, *Indicadores económicos y sociales*, Santiago, PET, 1984, 44 p.

Thomson, Ian & Angerstein, Dietrich, Historia del ferrocarril en Chile, Santiago, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, DIBAM, 1997, 312 p.

Thumala, María Angélica, Riqueza y piedad. El catolicismo de la elite económica chilena, Santiago, Debate-Random House Mondadori, 2007, 334 p.

Tironi, Eugenio, Autoritarismo, modernización y marginalidad: el caso de Chile 1973-1989, Santiago, SUR, 1990, 280 p.

Tironi, Eugenio, Crónica de Viaje. Chile y la ruta de la felicidad., Santiago, El Mercurio Aguilar, 2006, 262 p.

Tironi, Eugenio, El cambio está aquí, Santiago, La Tercera Mondadori, 2002, 167 p.

Tironi, Eugenio, La irrupción de las masas y el malestar de las elites, Santiago, Editorial Grijalbo, 1999, 242 p.

Titelman, Daniel, 'Las reformas al sistema de salud: desafíos pendientes', en Ffrench-Davis, Ricardo & Stallings, Barbara (Eds.), Reformas, crecimiento y políticas sociales en Chile desde 1973, Santiago, LOM Ediciones, 2001, pp. 263-294.

Toenig, Jean-Claude, L'ère des technocrates: le cas des ponts et chaussées, Paris, L'Harmattan, 1987, 317 p.

Tullock, Gordon & Lockard, Alan (Eds.), *Efficient Rent Seeking: Chronicle of an Intellectual Quagmire*, Springer, 2000, 424 p.

Valdés, Juan Gabriel, *Pinochet's Economists: The Chicago School in Chile*, Cambridge (UK), Cambridge University Press, 1995, 348 p.

Valdivia Ortiz De Zárate, Verónica, *El golpe después del golpe. Leigh vs. Pinochet. Chile 1960-1980*, Santiago, LOM Ediciones, 2003, 259 p.

Valdivia Ortiz De Zárate, Verónica, *Nacionales y gremialistas. El 'parto' de la nueva derecha política chilena, 1964-1973*, Santiago, LOM Ediciones, 2009, 420 p.

Valdivia Ortiz De Zárate, Verónica, *Nacionalismo e ibañismo*, Santiago, Universidad Católica Blas Cañas, 1995, 73 p.

Valdivia Ortiz De Zárate, Verónica, Álvarez, Rolando & Pinto, Julio, *Su revolución contra nuestra revolución. Izquierdas y derechas en el Chile de Pinochet (1973-1981)*, Santiago, LOM Ediciones, 2006, 228 p.

Valdivieso, Patricio, *Estrategias políticas de acercamiento a las nuevas elites chilenas*, Santiago, Fundación Konrad Adenauer, 2006, 48 p.

Varas, Augusto, *La política de las armas en América Latina*, Santiago, FLACSO,

1988, 537 p.

Varas, Augusto, Los militares en el poder: Régimen y gobierno militar en Chile, 1973-1986, Santiago, FLACSO-Pehuén, 1987, 246 p.

Vargas, Juan Eduardo, La Sociedad de Fomento Fabril : 1883-1928, Santiago, Eds. Historia, Universidad Católica de Chile, 1976, 53 p.

Varios, Autores, 7 Ensayos sobre Arturo Alessandri Palma, Santiago, Instituto Chileno de Estudios Humanísticos, 1979, 464 p.

Vayssière, Pierre, Un siècle de capitalisme minier au Chili, 1830-1930, Paris, CNRS, 1980, 334 p.

Vergara, Pilar, Auge y caída del Neoliberalismo en Chile, Santiago, Flacso, 1985, 270 p.

Vicuña, Manuel, La Belle Époque chilena: alta sociedad y mujeres de élite en el cambio de siglo, Santiago, Ed. Sudamericana, 2001, 322 p.

Vidal-Naquet, Pierre, Le choix de l`histoire, Paris, arléa, 2007, 125 p.

Villalobos, Sergio, El comercio y la crisis colonial: un mito de la Independencia, Santiago, Universidad de Chile, Ed. Universitaria, 1968, 382 p.

Villalobos, Sergio, Origen y ascenso de la burguesía chilena, Santiago, Editorial Universitaria, 2006, 164 p.

Villalobos, Sergio & Méndez, Luz María, Historia de la ingeniería en Chile, Santiago, Instituto de Ingenieros de Chile & Hachette, 1990, 409 p.

Villalobos, Sergio & Sagredo, Rafael, Ensayistas proteccionistas del siglo XIX, Santiago, DIBAM, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 1993, 315 p.

Wagner, Gert, Trabajo, producción y crecimiento: la economía chilena, 1860-1930, Santiago, Pontificia Univ. Católica de Chile, Instituto de Economía, 1992, 162 p.

Walker, Ignacio, Socialismo y Democracia. Chile y Europa en perspectiva comparada, Santiago, Hachette, 1990, 251 p.

Wall, David, Chicago essays in economic development, Chicago, University of Chicago Press, 1972, 370 p.

Watch, Human Rights, Los límites de la tolerancia. Libertad de expresión y debate público en Chile, Santiago, LOM Ediciones, 1998, 268 p.

Weber, Max, Le savant et le politique, Paris, La Découverte, 2003 (original de 1919), 206 p.

Weinstein, José, Los jóvenes pobladores en las protestas nacionales (1983-1984): una visión socio-política, Santiago, CIDE, 1989, 169 p.

Weyland, Kurt, 'La política económica en la nueva democracia chilena', en Drake, Paul & Jaksic, Iván (Eds.), El modelo chileno. Democracia y desarrollo en los noventa, Santiago, LOM Ediciones, 2002, pp. 65-92.

Whelan, James, Out of the Ashes: Life, Death, and Transfiguration of Democracy in Chile, 1833-1988, Washington, Regnery Gateway, 1989,

1.120 p.

Williamson, John (Ed.), Latin American adjustment: How much has happened?, Washington, D.C., Institute for International Economics, 1990, 445 p.

Williamson, John, 'The Washington Consensus revisited', en Emmerij,

L. (Ed.), Economic and Social Development Into the XXI Century, Inter-American Development Bank, 1997, pp. 48-80.

Winn, Peter, Victims of the Chilean miracle. Workers and Neoliberalism in the Pinochet Era, 1973-2002, London, Duke University Press, 2004, 423 p.

Winn, Peter, *Weavers of Revolution: The Yarur Workers and Chile's Road to Socialism*, London, Oxford University Press, 1989, 354 p. Winter, Jay, *Dreams of peace and freedom: utopian moments in the twentieth century*, Yale University Press, 2006, 261 p. Wisecarver, Daniel, *El modelo económico chileno*, Centro Internacional para el Desarrollo Económico, 1993, 546 p. Yáñez Rojas, Eugenio, *Economía social de mercado en Chile: ¿Mito o realidad?*, Munich, Hanns Seidel Stiftung, 2005, 259 p. Zapatta, Franyo, *Mitos y Realidades del Sistema Privado de Fondos de Pensiones en Chile (AFP)*, Santiago, LOM ediciones, 1997, 166 p.

ARTÍCULOS DE REVISTA

Agosin, Manuel & French-Davis, Ricardo, 'Managing capital inflows in Chile', *Estudios de Economía*, Vol. 24, n° 2, diciembre 1997, pp. 297-326.

Agüero, Felipe, '30 años después: La ciencia política y las relaciones Fuerzas Armadas, Estado y sociedad', *Revista de Ciencia Política*, Vol. 23, n° 2, 2003, pp. 251-272.

Alemparte, Julio, 'La regulación económica en Chile durante la Colonia', *Anales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile*, Vol. II, n° 5, 1936, pp. 1-13.

Alliende Edwards, María Piedad, 'La Construcción de los Ferrocarriles en Chile 1850-1913', *Revista Austral de Ciencias Sociales*, n° 5, 2001, pp. 143-161.

Amorós, Mario, 'El puño de Pinochet', *Historia* 16, n° de septiembre, 2003, pp. 38-51.

Angell, Alan, 'Some problems in the interpretation of Recent Chilean History', *Bulletin of Latin American Research*, Vol. 7, n° 1, 1988, pp. 91-108.

Angell, Alan & Pollack, Benny, 'The Chilean Elections of 1989 and the Politics of the Transition to Democracy', *Bulletin of Latin American Research*, Vol. 9, n° 1, 1990, pp. 1-23.

Aninat, Eduardo, 'Chile in the 1990s: Embracing Development Opportunities', *Finance & Development*, Vol. 37, n° 1, march 2000, pp. 19-22.

Anríquez, Gustavo, Cowan, Kevin & De Gregorio, José, 'Poverty and Macroeconomic Policies: Chile 1987-1994', *Documentos de Trabajo*, Centro de Economía Aplicada, Universidad de Chile, n° 27, 1998, pp. 42.

Antunes, Priscila, 'O sistema de inteligência chileno no governo Pinochet', *Varia hist.*, Vol.23, n° 38, 2007, pp. 399-417.

Arellano, José Pablo, 'Del déficit al superávit fiscal: razones para una transformación estructural en Chile', *Estudios Públicos*, n° 101, 2006, pp. 165-186.

Arellano, José Pablo, 'Políticas sociales para el crecimiento con equidad Chile 1990-2002', *Serie Estudios socio/económicos CIEPLAN*, n° 26, 2004, pp. 1-46.

Arellano, José Pablo & Cortázar, René, 'Inflación, conflictos macroeconómicos y democratización en Chile', Colección Estudios CIEPLAN, n° 19, 1986, pp. 57-81.

Arellano, José Pablo & Cortázar, René, 'Del milagro a la crisis: algunas reflexiones sobre el momento económico', Estudios CIEPLAN, n° 8, 1982, pp. 43-60.

Arnsperger, Christian & Varoufakis, Yanis, 'What Is Neoclassical Economics?' Post-autistic economics review, n° 38, julio 2006, pp. 2-12.

Aslanbeigui, Nahid & Montecinos, Verónica, 'Foreign Students in U.S. Doctoral Programs', The Journal of Economic Perspectives, Vol. 12, n° 3, 1998, p. 11.

Austin, Robert, 'Armed Forces, Market Forces: Intellectuals', Latin American Perspectives, Vol. vol. 24, n° 5, 1997, p. 32.

Barandiarán, Edgardo & Hernández, Leonardo, 'Origins and resolution of a banking crisis: Chile 1982-86', Central Bank of Chile Working Papers, n° 57, 1999, pp. 1-66.

Barber, William J., 'Chile con Chicago: A review essay', Journal of Economic Literature, Vol. 33, n° 4, 1995, pp. 1-8.

Barros Arana, Diego, 'Necrolojías. Don Juan Gustavo Courcelle Seneuil', Anales de la Universidad de Chile, n° 1892, p. 22.

Barros, Robert, 'Personalization and Institutional Constraints: Pinochet, the Military Junta, and the 1980 Constitution', *Latin American Politics and Society*, Vol. 43, n° 1, 2001, pp. 5-28.

Bartell, Ernest, 'Business perceptions and the transition to democracy in Chile', working paper. Hellen Kellogg Institute for International Studies, n° 184, 1992, pp. 1-42.

Barton, Jonathan, 'State Continuismo and Pinochetismo: The Keys to the Chilean Transition', *Bulletin of Latin American Research*, Vol. 21, n° 3, 2002, pp. 358-374.

Bauer, Carl, 'In the image of the market: the Chilean model of water resources management', *International Journal of Water*, Vol. 3, n° 2, 2005, pp. 146-165.

Becker, Gary, 'Human Capital and the personal distribution of income',

W.S. Woytinsky Lecture N°1. University of Michigan, n° 1967.

Bernedo, Patricio, 'Prosperidad económica bajo Carlos Ibáñez del Campo, 1927-1929', *Historia. Instituto de Historia. Pontificia Universidad Católica de Chile*, n° 24, 1989, pp. 5-105.

Bertelsen, Raúl, 'El Estado empresario en la Constitución de 1980', *Re-vista*

chilena de Derecho, Vol. 14, n° 1, 1987, pp. 115-125. Bertelsen, Raúl, Barros, Enrique & Ribera, Teodoro, 'Función del Tribunal Constitucional de 1980', Estudios Públicos, n° 27, 1987, pp. 113-129.

Bezanilla Boloña, Mauricio, 'El marco conceptual del estatuto social de la empresa chilena. Estatuto social de la empresa chilena', Revista de derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, n° XVI, 1995, pp. 55-71.

Biglaiser, Glen, 'The Internationalization of Chicago's Economics in Latin America', Economic Development and Cultural Change, Vol. 50, n° 2, January 2000, pp. 269-286.

Boisard, Stéphane 'Le modèle économique chilien : exemplarité ou singularité ?' América, n° 33, 2004, pp. 73-82.

Boisard, Stéphane, 'Le modèle économique chilien: du mythe à la réalité', Pensamiento Crítico, n° 4, 2004, pp. 1-20.

Bordo, Michael & Rockoff, Hugh, 'The Gold Standard as a 'Good Housekeeping Seal of Approval'', The Journal of Economic History, Vol. 56, n° 2, 1996, pp. 389-428.

Borzutzky, Silvia, 'From Chicago to Santiago: Neoliberalism and social security privatization in Chile', Governance-an International Journal of Policy and Administration, Vol. 18, n° 4, 2005, pp. 655-674.

Bourdieu, Pierre, 'Le champ économique', Actes de la recherche en sciences sociales, Vol. 119, n° 1, 1997, pp. 48-66.

Bourdieu, Pierre, 'Les trois états du capital culturel', Actes de la recherche en sciences sociales, Vol. 30, n° 1, 1979, pp. 3-6.

Boyer, Robert, 'L'anthropologie économique de Pierre Bourdieu', Actes de la recherche en sciences sociales, Vol. 150, n° 1, 2003, pp. 65-78.

Bradford De Long, J., 'The Triumph of Monetarism?' The Journal of Economic Perspectives, Vol. 14, n° 1, 2000, p. 11.

Brunner, José Joaquín, 'La participación de los centros académicos privados', Estudios Públicos, n° 19, invierno 1985, pp. 1-12.

Brunner, José Joaquín, 'Los gobiernos de la Concertación: social-progresismo vs neo-liberalismo', Colección Estudios CIEPLAN, n° 41, 1995, pp. 109-115.

Brunner, José Joaquín, 'Malestar en la sociedad chilena: ¿de qué, exactamente, estamos hablando?' Estudios Públicos, n° 72, primavera 1998, pp. 173-198.

Cáceres, Gonzalo, 'El neoliberalismo en Chile: implantación y proyecto 1956-1980', Mapocho. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales, n° 36, 1994, pp. 159-168.

Camou, Antonio, 'Los consejeros del príncipe. Saber técnico y política en los procesos de reforma en América Latina', Nueva Sociedad, n° 152, noviembre-diciembre 1997, pp. 54-67.

Campero, Guillermo, 'La economía política de las relaciones laborales 1990-2006', Serie Estudios Socio/Económicos, n° 37, mayo 2007, pp. 1-45.

Campero, Guillermo & Cortázar, René, 'Lógicas de acción sindical en Chile', Colección Estudios Cieplan, n° 18, diciembre 1985, pp. 5-37.

Cárcamo-Huechante, L. E., 'Milton Friedman: Knowledge, public culture, and market economy in the Chile of Pinochet', Public Culture, Vol. 18, n° 2, 2006, pp. 413-435.

Casilda Béjar, Ramón, 'América Latina y el Consenso de Washington', Boletín económico de ICE, Información Comercial Española, n° 2803, 2004, pp. 19-38.

Castiglioni, Rossana, 'The Politics of Retrenchment: The Quandaries of Social Protection under Military Rule in Chile, 1973-1990', Latin American Politics and Society, Vol. 43, n° 4, 2001, pp. 37-66.

Cavieres, Eduardo, 'Anverso y reverso del Liberalismo en Chile, 1840-1930', Historia, Vol. 34, n° 2001, pp. 39-66.

Cavieres, Eduardo, 'Chile contemporáneo. Las distancias entre el discurso oficial y las realidades históricas', Mapocho. Revista de Humanidades y

Ciencias Sociales, n° 44, 1998, pp. 197-208.

Chateau, Jorge, 'Seguridad Nacional y guerra antisubversiva', Documento de Trabajo FLACSO, n° 185, 1983, pp. 1-78.

Chmatko, Natalia, 'Les économistes russes entre orthodoxie marxiste et radicalisme libéral', Genèses, n° 47, juin 2002, pp. 123-139.

Chonchol, Jacques, 'Reflexiones sobre Chile: ¿hay alternativas al modelo neoliberal?' Estudios Avanzados, Vol. 10, n° 27, 1996, pp. 141-162.

Clavel, Carlos & Jeftanovic, Pedro, 'Causas de la emisión en Chile : 1878-1919', Revista de economía / Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas., Vol. 5, n° 10, 1983, pp. 27-34.

Colander, David, 'Retrospectives: The Lost Art of Economics', The Journal of Economic Perspectives, Vol. 6, n° 3, 1992, p. 7.

Collier, Simon, 'El comercio y las crisis colonial. Un mito de la independencia, by Sergio Villalobos R.' The Hispanic American Historical Review, Vol.53, n° 4, 1973, pp. 686-689.

Collins, Joseph & Lear, John, 'Pinochet's Giveaway. Chile's Privatization Experience', The Multinational Monitor, Vol. 12, n° 5, 1991, pp. 1-9.

Corbo, Vittorio & Hernández, Leonardo, '80 años de historia del Banco Central de Chile', *Economía Chilena*, Vol. 8, n° 3, 2005, pp. 5-27.

Correa, Sofía, 'De nuestra inferioridad económica'. Reflexiones sobre los límites del desarrollo capitalista chileno', *Estudios Públicos*, n° 73, 1999, pp. 401-430.

Correa, Sofía, 'La democracia que tuvimos. La democracia que no fue', *Revista de Sociología Universidad de Chile*, n° 14, 2000.

Correa, Sofía, 'La opción política de los católicos en Chile', Mapocho. *Re-vista de Humanidades y Ciencias Sociales*, n° 46, 1999, pp. 191-202.

Correa, Sofía, '¿Qué nos enseña la historia del siglo XX acerca de las derechas actuales?' *Política*, n° 45, 2005, pp. 147-163.

Correa, Sofía, 'Zorobabel Rodríguez, Católico Liberal', *Estudios Públicos*, n° 66, 1997, pp. 387-426.

Cortázar, René, 'Concertación Social: ¿dónde? ¿cuándo? ¿cómo? ¿para qué? ¿entre quiénes?. La estrategia del Concer-flicto', *Serie Estudios socio/económicos CIEPLAN*, n° 12, 2001, pp. 1-14.

Cortázar, René & Meller, Patricio, 'Los dos Chiles o la importancia de revisar las estadísticas oficiales', *Colección Estudios Cieplan*, n° 21, junio 1987, pp. 5-21.

Cortés Conde, Roberto, 'La crisis argentina de 2001-2002', Cuadernos de Economía, Vol. 40, n° 121, 2003, pp. 762-767.

Couyoumdjian, Juan Ricardo, 'El alto comercio de Valparaíso y las grandes casas extranjeras, 1880-1930. Una aproximación'. Historia. Instituto de Historia. Pontificia Universidad Católica de Chile, Vol. 33, n° 2000, p. 33.

Cristi, Renato, 'Jaime Guzmán, capitalismo y moralidad', Revista de Derecho (Valdivia), Vol. 10, n° 1, diciembre 1999, pp. 87-102.

Culver, William & Reinhart, Cornel, 'Capitalist Dreams: Chile's Response to Nineteenth-Century World Copper Competition', Comparative Studies in Society and History, Vol. 31, n° 4, 1989, pp. 722-744.

Cypher, J. M., 'The political economy of the Chilean state in the neoliberal era: 1973-2005', Canadian Journal of Development Studies-Revue Canadienne D Etudes Du Developpement, Vol. 26, n° 4, 2005, pp. 763-779.

Damill, Mario & Fanelli, José María, 'La macroeconomía de América Latina: de la crisis de la deuda a las reformas estructurales', Economía (CEDES), n° 100, 1994, pp. 1-64.

Davis, Tom, 'Eight Decades of Inflation in Chile, 1879-1959: A Political Interpretation', The Journal of Political Economy, Vol. 71, n° 4, 1963, pp. 389-397.

De Castro, Sergio, 'Un camino de crecimiento para Chile', Estudios Públicos, n° 53, 1994, pp. 13-35.

De Gregorio, José, 'Crecimiento económico en Chile: evidencia, fuentes y perspectivas', Estudios Públicos, n° 98, 2005, pp. 19-86.

De Gregorio, José, 'Inflación, crecimiento y bancos centrales: teoría y evidencia empírica', Estudios Públicos, n° 62, 1996, pp. 29-76.

De Gregorio, José & Tokman, Andrea, 'El miedo a flotar y la política cambiaria en Chile', Documentos de Trabajo Banco Central de Chile, n° 302, diciembre 2004, pp. 1-56.

De La Cuadra, Sergio & Valdés, Salvador, 'Myths and Facts about Financial Liberalization in Chile: 1974-1982.' Documento de Trabajo Instituto de Economía UC, n° 128, octubre 1990, pp. 1-96.

Del Campo García, Esther, 'Democracia y desarrollo en Chile: el aprendizaje de las reformas', Pensamiento Iberoamericano, n° 0, 2a época, 2007, pp. 237-263.

Denord, François, 'Aux origines du néo-libéralisme en France. Louis Rougier et le Colloque Walter Lippmann de 1938', Le Mouvement Social, Vol. 2, n° 195, 2001, pp. 9-34.

Denord, François, 'La conversion au néo-libéralisme. Droite et libéralisme économique dans les années 1980', *Mouvements*, n° 35, septembre-octobre 2004, pp. 17-23.

Denord, François 'Le prophète, le pèlerin et le missionnaire', *Actes de la recherche en sciences sociales*, Vol. 145, n° 1, 2002, pp. 9-20.

Devés, Eduardo, 'La circulación de las ideas y la inserción de los científicos económico-sociales chilenos en las redes conosureñas durante los largos 1960', *Historia*, Vol. 37, n° 2, 2004, pp. 1-24.

Devés, Eduardo, 'Los científicos económicos sociales chilenos en los largos 60 y su inserción en las redes internacionales: la reunión del foro tercer mundo en Santiago en abril de 1973', *Universum*, Vol. 21, n° 1, 2006, pp. 138-167.

Dezalay, Yves & Garth, Bryant, 'Le 'Washington consensus'. Contribution à une sociologie de l'hégémonie du néolibéralisme', *Actes de la recherche en sciences sociales*, n° 121-122, 1998, pp. 3-22.

Díaz Gallardo, José, 'La era post-Pinochet: Antecedentes y proyecciones en el ámbito de las relaciones cívico militares', *FASOC*, Vol. 12, n° 4, 1997, pp. 9-14.

Documento-Expansiva, 'Somos más, queremos más, podemos más', *Expansiva*, n° septiembre 2006, pp. 1-29.

Drake, Paul, 'El movimiento obrero en Chile: De la Unidad Popular a la

Concertación', *Revista de Ciencia Política*, Vol. 23, n° 2, 2003, pp. 148-158.

Drake, Paul, 'History of Chile, 1920-1980', *The History Teacher*, Vol. 14, n° 3, 1981, pp. 341-347.

Drake, Paul, 'La misión Kemmerer a Chile: consejeros norteamericanos, estabilización y endeudamiento, 1925-1932', *Cuadernos de Historia*, Vol. julio, n° 4, 1984, pp. 1-27.

Duran-Palma, F., 'Labour reform in a neo-liberal 'protected' democracy: Chile 1990-2001', *International Journal of Human Resource Management*, Vol. 16, n° 1, 2005, pp. 65-89.

Editorial, 'Cómo las privatizaciones mejoraron la distribución del ingreso', *Temas Públicos de Libertad y Desarrollo*, n° 735, 12/08/2005, pp. 1-4.

Edwards, Sebastián, 'Estabilización con liberalización: diez años del experimento chileno con políticas de mercado libre 1973-1983', *Estudios Públicos*, n° 14, 1984, pp. 1-39.

Escaffre, Jean-Pierre, Lojkine, Jean & Suarez, Cathy, 'L'État social, Mythe et réalités', *Nouvelle Fondation*, Vol. 1, n° 5, 2007, pp. 56-64.

Fariña, Carmen & Huerta, María Antonieta, 'El liberalismo chileno en sus orígenes: Una aproximación a sus tesis', *Estudios Públicos*, n° 43, 1991, p. 23.

Fernandois, Joaquín, 'Catolicismo y liberalismo en el Chile del siglo XX', Estudios Públicos, n° 93, 2004, pp. 131-163.

Fernandois, Joaquín, 'Verdad y mito del Chile actual', Estudios Públicos, n° 69, verano 1998, pp. 411-437.

Fernandois, Joaquín & Carrió, Macarena, 'Europa occidental y el desarrollo chileno 1945-1973', Historia, Vol. 36, n° agosto, 2003, pp. 7-60.

Fernández Jilberto, Alex, 'Neoliberal Restructuring: The Origin and Formation of Economic Groups in Chile', Journal of Developing Societies, Vol. 20, n° Sep. 2004, pp. 189-206.

Ferrada, Juan Carlos, 'La Constitución Económica de 1980: Algunas reflexiones críticas', Revista de Derecho (Valdivia), Vol. 11, n° 2000, pp. 47-54.

Ffrench-Davis, Ricardo, 'Chile, entre neoliberalismo y el crecimiento con equidad', Nueva Sociedad, n° 183, 2003, pp. 70-90.

Ffrench-Davis, Ricardo, 'Desarrollo económico y equidad en Chile: herencias y desafíos en el retorno a la democracia', Colección Estudios CIEPLAN, n° 31, 1991, pp. 31-51.

Ffrench-Davis, Ricardo, 'El experimento monetarista en Chile: una síntesis

critica', *Desarrollo Económico*, Vol. 23, n° 90, 1983, pp. 163-196.

Ffrench-Davis, Ricardo, 'La distribución del ingreso en Chile: deuda pendiente', *Quórum: Revista de pensamiento iberoamericano*, n° 14, 2006, pp. 153-160.

Ffrench-Davis, Ricardo, 'Una evaluación del modelo económico', *Estudios Públicos*, n° 11, 1983, pp. 7-39.

Ffrench-Davis, Ricardo, Leiva, Patricio & Madrid, Roberto, 'Liberalización comercial y crecimiento: La experiencia de Chile, 1973-89', *Pensamiento Iberoamericano*, n° 21, 1992, pp. 33-55.

Fischer, John, 'Commercial and Imperial Decline: Spanish Trade with Spanish America, 1797-1820', *Journal of Latin American Studies*, Vol. 30, n° 3, 1998, pp. 459-479.

Fischer, Ronald & Serra, Pablo, 'Efectos de la privatización de servicios públicos en Chile: Casos sanitario, electricidad y telecomunicaciones', *Documentos de trabajo CEA*, n° 186, junio 2003, pp. 1-102.

Flifisch, Ángel, 'La gestión estratégica de un proceso de transición y consolidación: el caso chileno', *Proposiciones*, Vol. 25, n° 1994, pp. 1-24.

Flifisch, Ángel, 'El neoliberalismo chileno: las funciones del dogmatismo', *Documento de Trabajo FLACSO*, n° 146, 1982, p. 48.

Flores Andrade, Anselmo, 'Una inevitable (y exitosa) convivencia política: empresarios y gobiernos socialistas de Chile y España', Foro Internacional, Vol. XLVI, n° 186, 2006, pp. 720-740.

Fontaine, Arturo, 'Economía Libre y Seguridad Nacional', Estudios Públicos, n° 7, 1982, pp. 1-12.

Fontaine, Ernesto, 'The CIAPEP and its contributions to the profession', Cuadernos de Economía PUC, Vol. 40, n° 121, 2003, pp. 599-606.

Fontaine, Juan Andrés, 'Transición económica y política en Chile: 1970-1990', Estudios Públicos, n° 50, 1993, pp. 229-279.

Foxley, Alejandro, 'Bases para el desarrollo de la economía chilena: una visión alternativa', Colección Estudios CIEPLAN, n° 26, junio 1989, pp. 175-185.

Foxley, Alejandro, 'Cuatro años de gestión económica', Colección Estudios CIEPLAN, n° 39, 1994, pp. 137-139.

Foxley, Alejandro, 'Experimentos neoliberales en América Latina', Colección Estudios CIEPLAN, n° 59, marzo 1982, pp. 5-149.

Foxley, Alejandro, 'Formas de la política después del autoritarismo', Colección Estudios CIEPLAN, n° 15, diciembre 1984, pp. 203-210.

Foxley, Alejandro, 'Hacia una economía de libremercado: Chile 1974 -1979', Colección Estudios Cieplan, n° 4, noviembre 1980, pp. 5-37.

Foxley, Alejandro, 'Las alternativas para la política posautoritaria', Desarrollo Económico, Vol. 25, n° 98, 1985, pp. 155-178.

Foxley, Alejandro & Muñoz, Óscar, 'Reflexiones con ocasión de los 15 años de CIEPLAN', Estudios CIEPLAN, Vol. 5, n° 32, 1990, pp. 182-190.

Frank, Volker, 'The Elusive Goal in Democratic Chile: Reforming the Pinochet Labor Legislation', Latin American Politics and Society, Vol. 44, n° 1, 2002, pp. 35-68.

Fredes, Carlos, 'Aníbal Pinto', Pensamiento Iberoamericano, n° 0, 2a época, 2007, pp. 287-290.

Frey, Bruno S. & Eichenberger, Reiner, 'Economics ans Economists: A European Perspective', The American Economic Review, Vol. 82, n° 2, 1992, p. 4.

Friedman, Milton, 'Bimetallism Revisited', Journal of Economic Perspectives, n° 4, 1990, pp. 95-104.

Friedman, Milton, 'Schools at Chicago', University of Chicago Magazine, n°

autumn 1974, 1974, pp. 11-16.

Frühling, Hugo, 'Limitando la acción coercitiva del Estado. La estrategia legal de defensa de los derechos humanos en Chile', Contribuciones FLACSO, Vol. noviembre, n° 12, 1982, 46 p.

Fuentealba, Leonardo, 'Courcelle-Seneuil en Chile, errores del liberalismo económico', Anales de la Universidad de Chile, Vol. CII, n° 1944, pp. 101-203.

Fuentes, Claudio, 'Militares en Chile: Ni completa autonomía, ni total subordinación', Chile 96. FLACSO-Chile, n° 1997, pp. 165-181.

Gallagher, John & Robinson, Ronald, 'The Imperialism of Free Trade', The Economic History Review, Vol.6, n° 1, 1953, pp. 1-15.

Gallo, Ezequiel, 'Notas sobre el liberalismo clásico', Estudios Públicos, n° 21, 1986, pp. 243-257.

Gárate, Manuel, 'Chili na de dictatuur (1990-2008): een vrije markteconomie zonder oog voor het sociale', Vrede, Belgique, n° 390, mars-avril 2008, pp. 31-33.

Gárate, Manuel, 'El modelo económico chileno en democracia', Revista Encuentro, n° 40, primavera 2006, pp. 71-81.

Garretón, Manuel Antonio, 'De la seguridad nacional a la nueva institucionalidad. Notas sobre la trayectoria ideológica del nuevo Estado autoritario', *Revista Mexicana de Sociología*, Vol. 40, n° 4, 1978, pp. 1259-1282.

Garretón, Manuel Antonio, 'Modelo y proyecto político del régimen militar chileno', *Revista Mexicana de Sociología*, Vol. 44, n° 2, 1982, pp. 355-372.

Garretón, Manuel Antonio, 'Redemocratización política en Chile. Transición, inauguración y evolución', *Estudios Públicos*, n° 42, 1991, pp. 101-133.

Garretón, Manuel Antonio, 'What Society? What Sociology? The Chilean Post-Democratization Debate', *Contemporary Sociology*, Vol. 26, n° 5, 1997, p. 3.

Gazmuri, Cristián, 'Alberto Edwards y la Fronda Aristocrática', *Historia*, Vol. 1, n° 37, 2004, pp. 61-95.

Gerrard, Bill, 'Keynes, The Keynesians and the Classics: A Suggested Interpretation', *The Economic Journal*, Vol. 105, n° 429, 1995, pp. 445-458.

Gherzi, Enrique, 'El mito del Neoliberalismo', *Estudios Públicos*, Vol. invierno, n° 95, 2004, p. 21.

Godoy, Óscar, 'Parlamento, presidencialismo y democracia protegida', *Revista de Ciencia Política*, Vol. 23, n° 2, 2003, pp. 7-42.

Goicovic Donoso, Igor, 'La refundación del capitalismo y la transición democrática en Chile (1973-2004)', *Historia Actual Online*, n° 10, primavera 2006, pp. 7-16.

Góngora, Álvaro, 'Políticas económicas', 'agentes económicos' y desarrollo industrial en Chile hacia 1870-1900', *Dimensión histórica de Chile*, n° 1, 1984, pp. 9-22.

González, Marcial, 'Condición de los trabajadores rurales en Chile', *Estudios económicos*, n° 1.885, pp. 317-321.

Grenier, Jean-Yves & Orléan, André, 'Michel Foucault, l'économie politique et le libéralisme', *Annales. Histoire, Sciences Sociales*, Vol. 62, n° 5, septembre-octobre 2007, pp. 1155-1182.

Grez, Sergio, 'Crisis económica y respuesta popular. La convergencia proteccionista en Chile', Mapocho. *Revista de Humanidades y Ciencias Sociales*, n° 41, 1997, pp. 147-168.

Grosfoguel, Ramón, 'Cambios conceptuales desde la perspectiva del sistema-mundo. Del cepalismo al neoliberalismo.' *Nueva Sociedad*, n° 183, 2003, pp. 151-166.

Guzmán, César, 'Sobre huelga y conflicto laboral en Chile', *Alternativa, ICAL*, n° 21, 2004, 4 p.

Guzmán, Jaime, 'El capitalismo y los católicos de tercera posición', *Fiducia*, Vol.III, n° 20, 1965, pp. 4-5.

H. Laurence Miller, Jr., 'On the 'Chicago School of Economics'', *The Journal of Political Economy*, Vol. 70, n° 1, 1962, p. 5. Halperin, Tulio, 'La CEPAL en su contexto histórico', *Revista de la CEPAL*, n° 94, abril 2008, pp. 7-27.

Havro, Gøril & Santiso, Javier, 'La malédiction des matières premières?' *Rèperes. Centres de développement de l'OCDE*, n° 75, septiembre 2008, pp. 1-2.

Hermet, Guy & Santiso, Javier, 'Entre justice et raison politique. L'affaire Pinochet', *Critique Internationale*, Vol. 3, n° 3, 1999, pp. 35-42.

Herrera, Felipe, 'Esquema de las tendencias de Política Económica en Chile', *Anales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile*, Vol. XII, n° 44 al 51, 1946.

Hopenhayn, Martín, 'Inclusión y exclusión social en la juventud latinoamericana', *Pensamiento Iberoamericano*, n° 3, 2a época, 2008, pp. 49-71.

Huneus, Carlos, 'El comportamiento político de los empresarios en Chile', *Revista Perspectivas*, Vol. 4, n° 2, 2001, pp. 315-337.

Huneus, Carlos, 'Technocrats and Politicians in an Authoritarian Regime. The

‘ODEPLAN Boys’ and the ‘Gremialists’ in Pinochet’s Chile’, *Journal of Latin American Studies*, Vol. 32, n° 2, 2000, pp. 461-501.

Huneus, Carlos, ‘Tecnócratas y políticos en el autoritarismo’. Los ‘ODEPLAN boys’ y los ‘gremialistas’ en el Chile de Pinochet’, *Revista de Ciencia Política*, Vol. XIX, n° 2, 1998, pp. 125-158.

Hurtado, Cristina, ‘La recepción de Courcelle-Seneuil, seguidor de Tocqueville, en Chile’, *Revista Polis*, Vol. 5, n° 17, 2007.

Ibáñez, Adolfo, ‘El liderazgo en los gremios empresariales y su contribución al desarrollo del Estado Moderno durante la década del treinta: el fomento a la producción y los antecedentes de CORFO’, *Historia. Instituto de Historia. Pontificia Universidad Católica de Chile*, n° 28, 1994, pp. 183-216.

Ibáñez, Adolfo, ‘Los ingenieros, el Estado y la política en Chile: del Ministerio de Fomento a la Corporación de Fomento: 1927-1939’, *Historia. Instituto de Historia. Pontificia Universidad Católica de Chile*, n° 18, 1983, pp. 45-102.

Iglesias, Enrique, ‘El papel del Estado y los paradigmas económicos en América Latina’, *Revista de la CEPAL*, n° 90, diciembre 2006, pp. 7-15. Jocelyn-Holt, Alfredo, ‘El desarrollo de una conciencia pública: Lastarria

y Sarmiento’, *Estudios Públicos*, n° 17, 1985, pp. 213-233.

Jocelyn-Holt, Alfredo, ‘El liberalismo moderado en Chile (siglo XIX)’, *Estudios*

Públicos, n° 69, 1998, pp. 439-485.

Johnson, Harry, 'The keynesian revolution and de Monetarist counterrevolution', The American Economic Review, Vol. 61, n° 2, 1971, pp. 1-14.

Joignant, Alfredo, 'La politique "destransitologues": Luttes politiques, enjeux théoriques et disputes intellectuelles au cours de la transition chilienne à la démocratie', Politique et Sociétés, Vol. 24, n° 2-3, 2005, pp. 33-59.

Joignant, Alfredo, 'Los doctores de la República', La Tercera, n° 21 de noviembre, 2008, p. 4.

Jouineau, Sophie, 'Chili: les élections parlementaires du 11 décembre 1997', Problèmes d'Amérique Latine, n° 31, 1998, pp. 87-108.

Jouineau, Sophie, 'Le présent ne parvient pas à effacer le passé. Au Chili, une transition qui n'en finit pas', Le Monde Diplomatique, n° avril, 1998, pp. 8-9.

Karabel, Jerome, 'Towards a Theory of Intellectuals and Politics', Theory and Society, Vol. 25, n° 2, 1996, p. 28.

Kemmerer, Edwin Walter, 'Chile returns to the gold standard', The Journal of Political Economy, Vol. 34, n° 3, 1926, pp. 265-273.

Kincaid, E., 'League of Nations: World Economic Survey 1932-33', *The Accounting Review*, Vol. 9, n° 4, 1934, pp. 348-349.

Kinsbruner, Jay, 'A Comment on the Exclusiveness of Protection in Chilean Economics at Mid-Nineteenth Century', *The Hispanic American Historical Review*, Vol. 45, n° 4, 1965, pp. 591-594.

Krugman, Paul, 'Dutch Tulips and Emerging Markets', *Foreign Affairs*, Vol. 14, n° 4, 1995, pp. 28-44.

Kurtz, Marcus, 'Chile`s Neoliberal Revolution: Incremental Decisions and Structural Transformations, 1973-1989', *Journal of Latinoamerican Studies*, Vol. 31, n° 2, 1999, pp. 399-427.

Labra, María Eliana, 'El sistema de salud de Chile: reformas del pasado, dilemas del presente', *Salud y Cambio*, Vol. 6, n° 23, 1997, pp. 7-22.

Labra, María Eliana, 'La reinención neoliberal de la inequidad en Chile: el caso de la salud', *Cad. Saúde Pública*, Vol. 18, n° 4, 2002, pp. 1041-1052.

Lagos, Ricardo, 'Dos conceptos clave de la renovación socialista en Chile', *Nueva Sociedad*, n° 101, mayo-junio 1989, pp. 114-124.

Lagos, Ricardo, 'El precio de la ortodoxia', *Colección Estudios Cieplan*, n° 12, marzo 1984, pp. 121-133.

Lagos, Ricardo, Heraldo, Muñoz. & Slaughter, Anne-Marie, 'The Pinochet Dilemma', *Foreign Policy*, n° 114, 1999, pp. 26-39.

Larraín, Felipe, 'Proteccionismo y Desarrollo Económico', *Estudios Públicos*, n° N°7, 1982, pp. 61-75.

Larrañaga, Osvaldo, 'Descentralización de la educación en Chile: una evaluación económica', *Estudios Públicos*, n° 60, 1995, pp. 243-281.

Larroulet, Cristián, 'Efectos de un programa de privatizaciones: El caso de Chile (1985-1989)', *Estudios Públicos*, n° 54, 1994, pp. 175-222.

Larroulet, Cristián, 'La lucha contra el populismo: el caso de Chile', *Serie Informe Económico LyD*, n° 172, 2006, pp. 1-22.

Larroulet, Cristián, 'Reflexiones en torno al Estado empresario en Chile', *Estudios Públicos*, n° 14, 1984, pp. 129-151.

Laurens, Bernard & Cardoso, Jaime, 'Managing Capital Flows: Lessons from the Experience of Chile', *IMF working paper*, n° 168, december 1998, pp. 1-53.

Le Fort, Guillermo & Lehmann, Sergio, 'El encaje y la entrada neta de capitales: Chile en el decenio de 1990', *Revista de la CEPAL*, n° 81, diciembre 2003, pp. 33-64.

Leal Buitrago, Francisco, 'La doctrina de Seguridad Nacional: materialización de la Guerra Fría en América del Sur', Revista de estudios sociales, n° 15, 2003, pp. 74-87.

Lebaron, Frédéric, 'La dénégation du pouvoir. Le champ des économistes français au milieu des années 1990', Actes de la recherche en sciences sociales, Vol. 119, n° 1, 1997, pp. 3-26.

Lebaron, Frédéric, 'L'impérialisme de l'économie', Actes de la recherche en sciences sociales, Vol. 121, n° 1, 1998, pp. 104-108.

Lechner, Norbert, 'El debate sobre Estado y Mercado', Documento de Trabajo FLACSO, n° 19, 1992.

Lechner, Norbert, 'El proyecto neo-conservador y la democracia', Crítica y utopía, n° 6, 1982.

Lechner, Norbert, 'Modernización y Democratización: un dilema del desarrollo chileno', Estudios Públicos, n° 70, 1998, pp. 231-242.

Ledesma De Lapeyra, Viviana, 'La junta militar y su modelo económico', Tebeto: Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura, n° 11, 1998, pp. 267-294.

Leff, Nathaniel, 'Industrial Organization and Entrepreneurship in Developing Countries: The Economic Groups', *Economic Development and Cultural Change*, Vol. 26, n° 4, 1978, pp. 661-675.

Leiva, Fernando Ignacio & Petras, James, 'Chile's Poor in the Struggle for Democracy', *Latin American Perspectives*, Vol. 13, n° 4, 1986, pp. 5-25.

Lenz, Rony, 'Proceso político de la reforma AUGE de salud en Chile: algunas lecciones para América Latina. Una mirada desde la economía política', *Serie Estudios socio/económicos CIEPLAN*, n° 38, 2007, p. 34.

Lobo, Gregory, 'Pensamientos sobre el otro 11 de septiembre. En memoria de un futuro justo', *Revista Estudios Sociales*, n° 17, febrero 2004, pp. 79-85.

Lordon, Frédéric, "Le désir de 'faire science'", *Actes de la recherche en sciences sociales*, n° 119, septembre 1997, pp. 27-35.

Love, Joseph, 'The origins of Dependency Analysis', *Journal of Latin American Studies*, Vol. 22, n° 1, 1990, pp. 143-168.

Loveman, Brian, 'Military Dictatorship and Political Opposition in Chile, 1973-1986', *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, Vol. 28, n° 4, 1986, pp. 1-38.

Loveman, Brian, "Protected Democracies' and Military Guardianship: Political Transitions in Latin America, 1978-1993', *Journal of Interamerican Studies and*

World Affairs, Vol. 36, n° 2, summer 1994, pp. 105-189.

Loveman, Mara, 'High-Risk Collective Action: Defending Human Rights in Chile, Uruguay and Argentina', *The American Journal of Sociology*, Vol. 104, n° 2, 1998, pp. 477-525.

Luciulli, Mario, 'Gaetano Mosca y el pensamiento liberal', *Anales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile*, Vol. IV, n° 6, 1957, pp. 1-7.

Lüders, Rolf, 'Una Historia Monetaria de Chile', *Cuadernos de Economía PUC*, Vol. 7, n° 20, 1970, pp. 4-28.

Mac Hale, Tomás, 'Orden, orden público, y orden público económico', *Anales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile*, Vol. VIII, n° 8, 1968, pp. 1-7.

Marcel, Mario, 'Políticas públicas en democracia: el caso de la Reforma Tributaria de 1990 en Chile', *Colección Estudios CIEPLAN*, n° 45, junio 1997, pp. 33-83.

Marcel, Mario, 'Privatización y finanzas públicas: el caso de Chile, 1985-88', *Colección Estudios CIEPLAN*, n° 26, junio 1989, pp. 5-60. Marcel, Mario & Meller, Patricio, 'Empalme de las cuentas nacionales

de Chile 1960-1985. Métodos alternativos y resultados', *Colección Estudios CIEPLAN*, n° 20, diciembre 1986, pp. 121-146.

Marchini, Geneviève, 'Chile: un precursor de las reformas financieras', México y la cuenca del Pacífico, Vol. 5, n° 15, abril 2002, pp. 17-26.

Margerun, Christine, 'A Reappraisal of Classical Economic Nationalism and Economic Liberalism', International Studies Quarterly, Vol. 43, n° 4, 1999, pp. 773-744.

Markoff, John & Montecinos, Verónica, 'El irresistible ascenso de los economistas', Nueva Sociedad, Vol. 34, n° 133, 1994, pp. 1-47.

Martínez, Javier, 'Cuatro falacias sobre la transformación chilena', Propositiones, n° 25, 1994, pp. 34-38.

Martínez Rodríguez, Gerardo, 'Causas de la Gran Depresión de los años

30: aportes recientes', Revista Universitaria. Instituto de Historia Pontificia Universidad Católica de Chile, n° 9, 1983, pp. 81-97. Masbernat, Patricio, 'Derecho Constitucional Económico', Ius et Praxis, n° 2, 2001, pp. 501-506.

Massad, Carlos, 'La función técnica y la función política del Banco Central: anatomía prenatal', Cuadernos de Economía, n° 77, abril 1989, pp. 75-90.

Mayo, John, 'Before the Nitrate Era: British Commission Houses and the Chilean Economy', Journal of Interamerican Studies and World Affairs, Vol. 11,

n° 2, 1979, pp. 283-302.

Mayo, John, 'Britain and Chile, 1851-1886: Anatomy of a Relationship', *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, Vol. 23, n° 1, 1981, pp. 95-120.

Meller, Patricio, 'Beneficios y costo de la globalización: perspectiva de un país pequeño (Chile)', *Serie Estudios socio/económicos CIEPLAN*, n° 9, 2001, pp. 1-24.

Meller, Patricio, 'El modelo económico y la cuestión social', *Serie Estudios socio/económicos CIEPLAN*, n° 1, 2000, pp. 1-37.

Meller, Patricio, 'Revisión de la reforma comercial chilena', *Colección Estudios CIEPLAN*, n° 35, 1992, pp. 5-8.

Meller, Patricio & Bravo, Claudio, 'Análisis Historiográfico de la Literatura Económica Chilena', *Serie Estudios socio/económicos CIEPLAN*, n° 4, 2000, pp. 1-36.

Michaels, Albert, 'The Alliance for Progress and Chile's 'Revolution in Liberty,' 1964-1970', *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, Vol. 18, n° 1, 1976, pp. 74-99.

Millar, René, 'Significado y antecedentes del movimiento militar de 1924', *Historia*, n° 11, 1974, p. 114.

Miller, H. Laurence, 'On the 'Chicago School of Economics'', The Journal of Political Economy, Vol. 70, n° 1, 1962, pp. 64-69.

Mizala, Alejandra, 'La economía política de la reforma educacional en Chile', Serie Estudios socio/económicos CIEPLAN, n° 36, 2007, p. 45.

Mizala, Alejandra & Romaguera, Pilar, 'La legislación laboral y el mercado del trabajo en Chile: 1975-2000', Documento de Trabajo CEA, n° 116, 2002, pp. 1-26.

Montecinos, Verónica, 'El valor simbólico de los economistas', Nueva Sociedad, n° 152, 1997, pp. 108-126.

Montero, Cecilia, 'Empresarios: ¿Demisión o Triunfo?' Asuntos Públicos (Informes), n° 79, 24/06/2001, pp. 1-6.

Montero, Cecilia, 'La evolución del empresariado chileno: ¿surge un nuevo actor?' Estudios CIEPLAN, n° 30, 1990, pp. 91-122.

Montero, Cecilia & Muñoz, Óscar, '¿Hacia donde va la sociedad chilena? Mesa redonda', Colección Estudios CIEPLAN, n° 38, 1993, pp. 95

154. Moulian, Iñaki, 'Bipolaridad en Chile 1960-1973', Revista Austral de Ciencias Sociales, n° 5, 2001, pp. 39-52.

Munck, Ronaldo, 'Workers, Structural Adjustment, and Concertacion Social in Latin America', *Latin American Perspectives*, Vol. 21, n° 3, 1994, pp. 90-103.

Muñoz, Heraldo, 'Las relaciones exteriores del gobierno militar chileno', *Revista Mexicana de Sociología*, Vol. 44, n° 2, 1982, pp. 577-597.

Muñoz, Óscar, 'Chile: El colapso de un experimento económico y sus efectos políticos', *Colección Estudios CIEPLAN*, n° 16, 1985, pp. 103-122.

Muñoz, Óscar, 'In Memoriam. Aníbal Pinto Santa Cruz (1920-1996)', *Colección Estudios CIEPLAN*, n° 41, 1995, pp. 5-6.

Muñoz, Óscar & Arriagada, Ana María, 'Orígenes políticos y económicos del Estado empresarial en Chile', *Estudios CIEPLAN*, n° 16, septiembre 1977, pp. 1-57.

Muñoz, Óscar & Celedón, Carmen, 'Chile en transición: estrategia económica y política', *Colección Estudios CIEPLAN*, n° 32, 1993, pp. 101-129.

Navia, Patricio, 'Participación electoral en Chile, 1988-2001', *Revista de Ciencia Política*, Vol. 24, n° 1, 2004, pp. 81-103.

Navia, Patricio & Walker, Ignacio, 'Gobernabilidad democrática en América Latina (Instituciones y liderazgos)', *Serie Estudios socio/económicos CIEPLAN*,

n° 29, 2006, pp. 1-39.

Nayyar, Deepak & Bhaduri, Amit, 'Le Consensus de Washington et la libéralisation de l'économie', *Revue Tiers monde*, Vol. 38, n° 150, 1997, pp. 295-310.

Nobay, Robert & Johnson, Harry G., 'Monetarism a Historic-Theoretic Perspective', *Journal of Economic Literature*, Vol. 15, n° 2, 1977, p. 15.

Novak, Michael, 'Ocho argumentos sobre la moralidad del mercado', *Estudios Públicos*, n° 55, 1994, pp. 189-211.

Nunn, Fredrick M., 'Latin American Military-Civilian Relations from Independence to the Present: A course Conspectus', *The History Teacher*, Vol. 14, n° 3, 1981, pp. 423-437.

O'brien, Patrick, 'The Costs and Benefits of British Imperialism 1846-1914', *Past and Present*, n° 120, 1988, pp. 163-200.

Ocampo, José Antonio, 'Más allá del Consenso de Washington: Una agenda de desarrollo para América Latina', *Estudios y Perspectivas (CEPAL)*, n° 26, 2005, pp. 1-28.

Olavarría, Margot, 'Protected Neoliberalism: perverse institutionalization and the crisis of representation in postdictatorship Chile', *Latin American Perspectives*, Vol. 30, n° 6, 2003, pp. 10-38.

Ortega, Luis, 'Nitrates, Chilean Entrepreneurs and the Origins of the War of the Pacific', *Journal of Latin American Studies*, Vol. 16, n° 2, 1984, pp. 337-380.

Ortiz, Eduardo, 'La Gran Depresión y su impacto en Chile, 1929-1933', *Estudios VECTOR*, n° 1982.

Oxhorn, Philip, 'Understanding Political Change after Authoritarian Rule. The Popular Sectors and Chile's New Democratic Regime', *Journal of Latin American Studies*, Vol. 26, n° 3, 1994, pp. 737-759

Oxhorn, Philip, 'Where Did All the Protesters Go?: Popular Mobilization and the Transition to Democracy in Chile', *Latin American Perspectives*, Vol. 21, n° 3, 1994, pp. 49-68.

Palieraki, Eugenia, 'La opción por las armas. Nueva izquierda revolucionaria y violencia política en Chile (1965-1970)', *Polis: Revista de la Universidad Bolivariana*, n° 19, 2008.

Palma, Gabriel, 'Chile 1914-1935: de economía exportadora a sustitutiva de importaciones', *Colección Estudios CIEPLAN*, Vol. 81, n° 12, 1984, pp. 61-88.

Parker, Cristián, 'Abstencionismo, juventud y política en Chile actual', *Estudios Avanzados Interactivos. Revista Idea*, Vol. 2, n° 4, 2001, pp. 1-23.

Pastor, Daniel, 'Origins of the Chilean Binominal Election System', *Re-vista de Ciencia Política*, Vol. 24, n° 1, 2004, pp. 38-57.

Petras, James, 'Between Skepticism and Protocol: The defection of the critical intellectuals: Reply', *Latin American Perspectives*, Vol. 20, n° 2, 1993, p. 3.

Petras, James, 'El 'milagro económico' chileno: crítica empírica', *Nueva Sociedad*, n° 113, mayo-junio 1991, pp. 146-158.

Petras, James, 'The Metamorphosis of Latin America's Intellectuals', *Latin American Perspectives*, Vol. 17, n° 2, 1990, p. 10.

Pinto, Julio, '¿Cuestión social o cuestión política? La lenta politización de la sociedad popular tarapaqueña hacia el fin de siglo (1889-1900).' *Historia. Instituto de Historia. Pontificia Universidad Católica de Chile*, Vol. 30, n° 1997, pp. 211-261.

Pinto Rodríguez, Jorge, 'Proyectos de la elite chilena del siglo XIX', *ALPHA. Revista de artes, letras y filosofía*, n° 26, julio 2008, pp. 167-189.

Pinto Santa Cruz, Aníbal, 'La ofensiva contra el Estado-Económico', *Colección Estudios Cieplan*, n° 21, junio 1987, pp. 117-127.

Pregger-Roman, Charles G., 'The Origin and Development of the Bourgeoisie in Nineteenth-Century Chile', *Latin American Perspectives*, Vol. 10, n° 2/3, 1983, pp. 39-59.

Rabkin, Rhoda, 'The Aylwin Government and 'Tutelary' Democracy: A Concept in Search of a Case?' *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, Vol. 34, n° 4, 1992, pp. 119-194.

Rebolledo, Antonia, 'La 'Turcofobia'. Discriminación antiárabe en Chile 1900 - 1950', *Historia*, Vol. 28, n° 1994, pp. 249-272.

Reder, Melvin W., 'Chicago economics: permanence and change', *Journal of Economic Literature*, Vol. 20, n° 1, 1982, p. 38.

Remmer, Karen, 'Political demobilization in Chile, 1973-1978', *Comparative Politics*, Vol. 12, n° 3, 1980, pp. 275-301.

Reyes, Soledad, 'La elite femenina chilena a comienzos del siglo XX. Ideas y costumbres vistas a través de la revista Familia', *Bicentenario. Revista de Historia de Chile y América*, Vol. 6, n° 1, 2007, pp. 133-155.

Ribera, Teodoro, 'El Tribunal Constitucional y su aporte al desarrollo del derecho. Aspectos relevantes de sus primeros 59 fallos', *Estudios Públicos*, n° 34, 1989, pp. 195-228.

Richards, Donald, 'The political economy of the chilean miracle', *Latin American Research Review*, Vol. 32, n° 1, 1997, pp. 139-159.

Riesco, Manuel & Fazio, Hugo, 'Las Asociaciones de Fondos de Pensiones (AFP), Chilenas', *New Left Review*, n° 223, 1997, pp. 90-100.

Rodríguez, Ernesto, 'Por qué soy católico y liberal y me resisto a sus consecuencias', *Estudios Públicos*, Vol. verano, n° 93, 2004.

Rojas Hernández, Jorge, 'El movimiento sindical chileno en la transición a la democracia', *Proposiciones*, n° 22, agosto 1993, pp. 54-79.

Rojas, Patricio, 'Políticas monetaria y cambiaria en Chile durante los noventa', *Estudios Públicos*, n° 78, 2000, pp. 101-135.

Romano, Ruggiero, 'Une économie coloniale: le Chili au XVIIIe siècle', *Annales. Économies, Sociétés, Civilisations*, Vol. 15, n° 2, 1960, pp. 259-285.

Rosenberg, Emily & Rosenberg, Norman, 'From Colonialism to Professionalism: The Public-Private Dynamic in United States Foreign Financial Advising, 1898-1929', *The Journal of American History*, Vol. 74, n° 1, 1987, pp. 59-82.

Rosende, Francisco, 'La Autonomía del Banco Central de Chile: Una Evaluación Preliminar', *Cuadernos de Economía PUC*, Vol. 30, n° 91, 1993, pp. 293-326.

Rubilar Solís, Luis, 'La Escuela Nacional Unificada (ENU, febrero 1973)', *Extramuros, Revista de la UMCE*, n° 3, 2004, pp. 56-65.

Ruiz, Carlos, 'Educación desarrollo y modernización', Revista de Sociología Universidad de Chile, n° 9, 1994, pp. 84-85.

Ruiz, Carlos, 'El pensamiento republicano en Chile durante el siglo XIX: notas de investigación', Revista Jurídica Universidad de Puerto Rico, Vol. 70, n° 4, 2001, p. 1024.

Ruiz-Tagle, Pablo, 'Comentario a la teoría de Courcelle Seneuil de J.

V. Lastarria', Revista de Derecho y Humanidades. Facultad de Derecho Universidad de Chile, n° 8, 2000, pp. 331-332. Ruiz-Tagle, Pablo, 'La contradicción del liberalismo católico en Chile', Estudios Públicos, n° 93, 2004, pp. 165-194.

Sagredo, Rafael, 'Chile: 1823-1831. El desafío de la administración y organización de la hacienda pública', Historia. Instituto de Historia. Pontificia Universidad Católica de Chile, Vol. 30, n° 1997, pp. 287-312.

Salinas, Augusto, 'El proyecto de una Escuela Nacional Unificada (ENU) de 1973 como antecedente del proyecto actual de una nueva LOCE', Centro de Políticas Públicas. Universidad del Desarrollo, n° 7, 2007, pp. 1-7.

Salinas Figueredo, Darío, 'La democracia en Chile. Los límites de la política en la transición', Estudios Sociológicos, Vol. XXI, n° 002, 2003, pp. 309-330.

Salvatore, Ricardo, 'The Strength of Markets in Latin America's Sociopolitical Discourse, 1750-1850: Some preliminary Observations', *Latin American Perspectives*, Vol. 26, n° 1, 1999, pp. 22-43.

San Francisco, Alejandro & Soto, Ángel, 'El gobierno del General Augusto Pinochet en Chile. 1973-1990', *Aportes*, n° 55, 2004, pp. 98-123.

Sánchez Della Chiara, María Teresa, 'La Represión. Una contribución histórica', *Encuentro XXI*, n° 11, 1998, pp. 36-39.

Sanhueza, Gonzalo, 'La crisis financiera de los años 80 en Chile: análisis de sus soluciones y su costo', *Economía Chilena*, n° 1 Abril 1999, 1999, pp. 43-68.

Santiso, Carlos, 'The contentious Washington Consensus: reforming the reforms in emerging markets', *Review of International Political Economy*, Vol. 11, n° 4, October 2004, pp. 828-844.

Santos, José, 'Anomalías del modelo neoliberal en Chile. La universidad chilena hoy: el espejismo de su progreso', *Estudios Avanzados Interactivos. Revista Idea*, Vol. 5, n° 7, 2006, pp. 1-12.

Sater, William, 'Chile and the World Depression of the 1870's', *Journal of Latin American Studies*, Vol. 11, n° 1, 1979, pp. 67-99.

Sater, William, 'Nacionalismo económico y reforma tributaria a fines del siglo XIX en Chile', *Estudios de Economía (Universidad de Chile)*, Vol. 18, n° 2,

1991, pp. 215-244.

Schamis, Héctor, 'Reconceptualizing Latin American Authoritarianism in the 1970s: From Bureaucratic-Authoritarianism to Neoconservatism', *Comparative Politics*, Vol. 23, n° 2, 1991, p. 119.

Schatan, Jacobo, 'Distribución del ingreso y pobreza en Chile', *Revista Polis*, Vol. 4, n° 11, 2005, pp. 429-457.

Scherz García, Luis, 'Reforma y contrarreforma en la Universidad Católica de Chile : (1967-1980)', *Realidad universitaria / Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea. Revista del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea*, n° 1988, pp. 36-53.

Serrano, Sol, 'La definición de lo público en un estado católico', *Estudios Públicos*, n° 76, 1999, pp. 211-232.

Serrano, Sol & Jaksic, Iván, 'In the Service of the Nation: The Establishment and Consolidation of the Universidad de Chile, 1842-79', *The Hispanic American Historical Review*, Vol. 70, n° 1, 1990, pp. 139-171.

Sheahan, John, 'Market-Oriented Economic Policies and Political Repression in Latin America', *Economic Development and Cultural Change*, Vol. 28, n° 2, 1980, pp. 267-291.

Sidney Smith, Robert, 'Spanish antimerchantism of the seventeenth century:

Alberto Struzzi and Diego José Dormer', *The Journal of Political Economy*, Vol. 48, n° 3, 1940, pp. 401-411.

Silva, Eduardo, 'Capitalist Coalitions, the State, and Neoliberal Economic Restructuring: Chile, 1973-88', *World Politics*, Vol. 45, n° 4, 1993, pp. 526-559.

Silva, Eduardo, 'Capitalist Regime Loyalties and Redemocratization in Chile', *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, Vol. 34, n° 4, 1993, p. 40.

Silva, Eduardo, 'Democracy, Market Economics, and Environmental Policy in Chile', *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, Vol. 38, n° 4, 1996, p. 33.

Silva, Eduardo, 'From Dictatorship to Democracy: The Business-State Nexus in Chile's Economic Transformation, 1975-1994', *Comparative Politics*, Vol. 28, n° 3, 1996, p. 21.

Silva, Eduardo, 'The import-substitution model-Chile in comparative perspective', *Latin American Perspectives*, Vol. 34, n° 3, 2007, pp. 67-90.

Silva, Patricio, 'Ascenso tecnocrático y democracia en América Latina', *Nueva Sociedad*, n° 152, 1997, pp. 68-77.

Silva, Patricio, 'Empresarios, neoliberalismo y transición democrática en Chile', *Revista Mexicana de Sociología*, Vol. 57, n° 4, 1995, pp. 3-25.

Silva, Patricio, 'State, Public Technocracy and Politics in Chile, 1927-1941', *Bulletin of Latin American Research*, Vol. 13, n° 3, sep. 1994, pp. 281-297.

Silva, Patricio, 'Technocrats and Politics in Chile: From the Chicago Boys to the CIEPLAN Monks', *Journal of Latin American Studies*, Vol. 23, n° 2, 1991, pp. 385-410.

Smith, Robert, 'Economists and the Enlightenment in Spain: 1750-1800', *The Journal of Political Economy*, Vol. 63, n° 4, 1955, pp. 345-348.

Stigler, George, 'The Economist and the State', *The American Economic Review*, Vol. 55, n° 1/2, 1965, pp. 1-18.

Stigler, George, 'The Economists and the Problem of Monopoly', *The American Economic Review*, Vol. 72, n° 2, 1982, pp. 1-11.

Stigler, George, 'Frank Knight as Teacher', *The Journal of Political Economy*, Vol. 81, n° 3, 1973, pp. 518-520.

Stigler, George, 'La Escuela de Chicago', *Estudios Públicos*, n° 47, 1992,

p. 182. Stigler, George, 'Perfect Competition, Historically Contemplated', *The Journal of Political Economy*, Vol. 65, n° 1, 1957, pp. 1-17.

Sur, 'La Transición Democrática y las Demandas Sociales', Hechos Urbanos, boletín de información y análisis, Vol. 91, n° noviembre-diciembre 1989, 1989, pp. 1-16.

Sznajder, Mario, 'A Case of Non-European Fascism: Chilean National Socialism in the 1930s', Journal of Contemporary History, Vol. 28, n° 2, 1993, pp. 269-296.

Tavlas, George, 'Retrospectives: Was the monetarist Tradition Invented?' The Journal of Economics Perspectives, Vol. 12, n° 4, 1998, pp. 211-222.

Tironi, Eugenio, 'Cohesión social en Chile: el retorno de un viejo tema', Quórum: Revista de pensamiento iberoamericano, n° 18, 2007, pp. 42-50.

Tironi, Eugenio, 'Culture et communication dans une période de transition (1990-1994)', Problèmes d'Amérique Latine, n° 11, octobredécembre, pp. 35-47.

Tironi, Eugenio, 'La Concertación por la democracia chilena', Revista Encuentro, n° 40, primavera 2006, pp. 82-92.

Tironi, Eugenio, 'La voluntad utópica', El Mercurio, n° 04/10/2002.

Tobin, James, 'The Monetarist Counter-Revolution Today-An Appraisal', The

Economic Journal, Vol. 91, n° 361, 1981, p. 13.

Tomic, P., 'Manufacturing modernity: Cleaning, dirt, and neoliberalism in Chile', *Antipode*, Vol. 38, n° 3, 2006, pp. 508-529.

Torrealba, A. R., 'The institutional legacies from authoritarianism in Latin America: The Chilean case', *Politica Y Gobierno*, Vol. 11, n° 1, 2004, p. 137.

Torres, Carlos Alberto, 'The State, Privatisation and Educational Policy: A Critique of Neo-Liberalism in Latin America and Some Ethical and Political Implications', *Comparative Education*, Vol. 38, n° 4, 2002, pp. 365-385.

Transparente, Chile, 'Evolución de Chile en le índice de Percepción de la Corrupción', *Documento de Trabajo Chile Transparente*, n° 6, abril 2009, pp. 1-15.

Ugalde, Antonio & Homedes, Nuria, 'Las reformas neoliberales del sector de la salud: déficit gerencial y alienación del recurso humano en América Latina', *Revista Panamericana de Salud Pública*, Vol. 17, n° 3, 2005, pp. 202-209.

Ugalde, Antonio & Homedes, Nuria, 'Why neoliberal reforms have failed in Latin America', *Health Policy*, Vol. 71, n° 1, 2005, pp. 83-96.

Valdivia Ortiz De Zárate, Verónica, 'Estatismo y Neoliberalismo: un contrapunto militar. Chile 1973-1979', *Historia (Santiago)*, Vol. 34, n° 2001, pp. 167-226.

Valdivia Ortiz De Zárate, Verónica, 'Las Fuerzas Armadas de Chile y la integración social. Una mirada histórica', Mapocho. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales, n° 48, 2000, pp. 259-311.

Valdivia Ortiz De Zárate, Verónica, 'Terrorism and Political Violence during the Pinochet Years: Chile, 1973-1989', Radical History Review, n° 85, winter 2003, pp. 182-190.

Valencia, Marco, 'Revolución neoliberal y crisis del Estado Planificador. El desmontaje de la planeación urbana en Chile. 1975-1985', Diseño Urbano y Paisaje, Vol. IV, n° 12, 2007, pp. 1-23.

Valenzuela, J. Samuel, 'The Legacy of Dictatorship: Political, Economic and Social Change in Pinochet's Chile', Journal of Latin American Studies, Vol. 26, n° 1, 1994, p. 1.

Valenzuela, Mario, 'Reprivatización y capitalismo popular en Chile', Estudios Públicos, n° 33, 1989, p. 43.

Varela Del Solar, Jorge, 'Subsidiariedad, orden público económico y seguridad nacional en la Constitución de 1980', Revista chilena de Derecho, Vol. 16, n° 2, 1989, pp. 379-390.

Vargas, María Carolina, 'El caso chileno en la Asamblea General y la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas', Revista Chilena de Derechos Humanos, n° 12, 1990, pp. 1-44.

Velasco, Andrés, 'Instituciones, credibilidad y manejo macroeconómico en Chile', Estudios Públicos, n° 77, 2000, pp. 37-67.

Véliz, Claudio, 'La mesa de tres patas', Desarrollo Económico, Vol. III, n° 1-2, 1963, pp. 1-18.

Vera, Richard, 'CIEPLAN en Chile: el camino del poder', CIID Informa, Vol. 20, n° 1, abril 1992, pp. 18-20.

Vergara, Jorge, 'La utopía neoliberal y sus críticos', Revista Polis, Vol. 2, n° 6, 2003, p. 30.

Vergara, Sergio, 'El cambio social y la estructura política', Portada, n° 12, 1970, p. 8.

Vial, Joaquín, 'Some Ideas About A New Policy Consensus For Latin America', Serie Estudios socio/económicos CIEPLAN, n° 27, 2005, pp. 1-30.

Walker, Ignacio & Jouannet, Andrés, 'Democracia Cristiana y Concertación: Los casos de Chile, Italia y Alemania', Revista de Ciencia Política, Vol. 26, n° 2, 2006, pp. 77-96.

Weaver, Stirton, 'Growth Theory and Chile: The Problem of Generalizing from Historical Example', Journal of Interamerican Studies and World Affairs, Vol.

12, n° 1, 1970, p. 55-61.

Weyland, Kurt, 'Economic Policy in Chile's New Democracy', *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, Vol. 41, n° 3, 1999, p. 29.

Weyland, Kurt, 'Growth with Equity' in Chile's New Democracy', *Latin American Research Review*, Vol. 32, n° 1, 1997, p. 30.

Wilde, Alexander, 'Irruptions of Memory: Expressive Politics in Chile's Transition to Democracy', *Journal of Latin American Studies*, Vol. 31, n° 2, 1999, pp. 473-500.

Will, Robert M., 'Economía clásica en Chile antes de 1856', *Revista Chilena de Historia y Geografía*, Vol. 44, n° 131, 1964, pp. 177-198. Will, Robert M., 'The introduction of Classical Economics into Chile', *The Hispanic American Historical Review*, Vol. 44, n° 1, 1964, pp. 1-21. Wisecarver, Daniel, "Dogmatismo" y "Pragmatismo": una década de política económica en Chile", *Estudios Públicos*, n° 11, 1983, pp. 91-134.

Wittelsbürger, Helmut, 'La política energética de Chile: de la dependencia al desarrollo sostenible. El futuro es de las energías renovables', *Diálogo Político*, n° 4, 2007, pp. 35-52.

Wright, Thomas, 'Agriculture and Protectionism in Chile, 1880-1930', *Journal of Latin American Studies*, Vol. 7, n° 1, 1975, pp. 45-58.

Younkins, Edward, 'Michael Novak's portrait of democratic Capitalism', *Journal of Markets & Morality*, Vol. 2, n° 1, 1999, pp. 8-34.

Yrarrázabal, Arturo, 'Principios económicos de la Constitución de 1980', *Revista chilena de Derecho*, Vol. 14, n° 1, 1987, pp. 97-112.

Zúñiga, Francisco, 'La gobernabilidad en un sistema presidencial: el caso de Chile', *Revista de Derecho Político*, n° 64, 2005, pp. 253-271.

ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS

Alessandri, Francisca, 'La tradición hispana y la revista Portada', *Cuadernos de Información*, 1985.

Arellano Ortiz, Pablo, 'Las AFP's no son un producto de exportación verdaderamente chileno'. *Associazione per gli Studi Internazionali e*

Comparati sul Diritto del lavoro e sulle Relazioni Industriali, 2007. Arriagada, Genaro, 'Almirante Arancibia: ¿Profesional, Militante o 'Ga

rante'?', *Asuntos Públicos*, 2001.

Barros, César, 'Mi historia del Crash', *Qué Pasa*, 2008.

Burgos, Jorge & Walker, Ignacio, 'Hacia el parlamentarismo', En Foco (Expansiva), 2003.

Capdevila, Luc, 'Le temps présent paraguayen', Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Coloquios, 2007, [en ligne], <http://nuevomundo.revues.org/index3636.html>.

Editorial, 'El saqueo de Chile', El Periodista. Santiago, 22/07/2005.

Editorial, 'Las memorias del 'padre' de los Chicago Boys', Qué Pasa, 2005.

Editorial, 'Historia y datos básicos de la Comunidad Andina', Los Tiempos, Cochabamba, Bolivia, 08-06-2007.

Fajardo, Luis, 'El regreso de los petrodólares', BBC mundo.

Gutiérrez, Néstor, 'Los derechos laborales en el régimen militar', La Nación. Santiago, 2006.

Hoehn, Marek, 'Neoliberalismo-Aportes para su conceptualización y debate', 2006.

Hoehn, Marek, 'Neoliberalismo, Vulnerabilidad y Disciplinamiento en América

Latina', 2005.

Hoehn, Marek, '¿Proyecto Neo-liberal o Neo-totalitario?', Mercado Negro, 2003.

Langue, Frédérique, 'L'histoire des sensibilités. Non-dit, mal dire ou en-vers de l'histoire? Regards croisés France-Amérique latine', Nuevo Mundo Mundos Nuevos [en ligne], Coloquios, 2006, <http://nuevomundo.revues.org/index2031.html>.

Otano, Rafael, 'Jaime Guzmán, una ausencia tan presente', El Mostrador, 31/03/2001.

Piñera, José, 'A Chilean Model for Russia', Foreign Affairs, september/october 2000.

TESIS

Boisard, Stéphane, L'émergence d'une nouvelle droite: monétarisme, conservantisme et autoritarisme au Chili (1955-1983), Toulouse, Université de Toulouse 2 le Mirail, 2001, 616 p.

Cavarozzi, Marcelo, The Government and the Industrial Bourgeoisie in

Chile : 1938-1964, Berkeley, University of California at Berkeley, 1974, 427 p.

Gárate, Manuel, Los sueños comienzan en casa : el grupo de 'La Reforma' y el primer proyecto de vida comunitaria inspirado en el modelo del rector Fernando Castillo, Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1995, 149 p.

Grez, Sergio, Les mouvements d'ouvriers et d'artisans en milieu urbain au Chili au XIXe siècle (1818-1890), Paris, EHESS, 1990, 828 p.

Heredia, Mariana, Les métamorphoses de la représentation. Les économistes et le politique en Argentine (1975-2001), Paris, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS - Paris), 2007, 626 p.

Matte, Arturo, La Alianza Liberal de 1875, Santiago, Imprenta Universitaria, 1916, 57 p.

Montecinos, Verónica, Economics and Power, Chilean economists in government 1958-1985, Pittsburg, University of Pittsburg, 1988, 484 p.

Reyes del Villar, Soledad, La revolución cultural de los años 60, vista a través del mayo francés y del movimiento estudiantil chileno, Santiago, Tesis de Licenciatura en Historia-Pontificia Universidad Católica de Chile, 1999, 179 p.

Romero, María Teresa, Profesionalización de la elite política administrativa en Chile: 1990-2004. El proceso de mantenimiento: permanencia y circulación, Santiago, Universidad de Chile, 2005, 144 p.

Simonetti de Groote, Susana, El gobierno de Carlos Dávila: (16 de Junio- 13 de Septiembre de 1932), Santiago, (Thèse) Pontificia Universidad Católica de Chile, 1993, 279 p.

Sotomayor, Hugo, La Renovación Socialista y la contingencia en la década de los ochenta: ¿La construcción de ‘un nuevo’ imaginario político?, Santiago, Tesis de Licenciatura en Historia Universidad de Chile, 2006.

Thumala, María Angélica, Chile’s Business Elite. The role of Catholicism in the building of an Ethos, Londres, Dissetation presented for the degree of Doctor of Philosophy, Clare College, University of Cambridge, 2007, 245 p.

CONFERENCIAS Y FUENTES AUDIOVISUALES

Morandé, Felipe & Noton, Carlos, ‘La conquista de la inflación en Chile’, Base para la Conferencia del Presidente de la Sociedad de Economía de Chile. Punta de Tralca, Departamento de Economía-Universidad de Chile, 2004.

Williamson, John, ‘A short History of the Washington Consensus’, From Washington Consensus towards a new Global Governance. Barcelona, 2004.

Williamson, John, ‘The Washington Consensus as Policy Prescription for Development’, Practitioners of Development. World Bank, 2004.

Parot, Carmen Luz, Estadio Nacional, Colección Memoria Viva, Alerce, Chile, en Español, 2001, DVD NTSC, 90 min.

Friedman, Milton, Free To Choose, PBS, 1980/1990, NTSC, (5 chapters).
Disponibile en : <http://www.ideachannel.tv/>.

De Certeau, Jean & Said, Marcela, Opus Dei, una Cruzada Silenciosa, Valparaíso Producciones, 2006, DVD NTSC, 52 min.

Guzmán, Patricio, Le cas Pinochet, Éditions Montparnasse, 2001, DVD PAL/NTSC, 110 min.

TRABAJOS NO PUBLICADOS

Bravo Herrera, Fernando, 'Caso de Análisis Financiero. Caso Crav S.A.'
Documento de Trabajo, Material Docente. Facultad de Economía y Negocios
Universidad de Chile, 2002, 29 p., disponible en: <http://hdl.handle.net/2250/2462>.

Couyoumdjian, Juan Pablo, 'La 'Economía en Formato Literario' en el Chile del siglo XIX', 2006, 25 p.

Garretón, Manuel Antonio, 'Popular Mobilization and the Military Regime in Chile: the complexities of the invisible transition', working paper, 1988, 22 p., disponible en: <http://www.nd.edu/~kellogg/publications/workingpapers/WPS/103.pdf>.

Llistar, David, 'El qué, el quién, el cómo y el por qué del Consenso de Washington', Observatori del Deute e la Globalització, noviembre 2002, 11 p., disponible en: <http://www.odg.cat/documents/publicacions/CW-David-NOV02.pdf>.

Orlando, Caputo, 'Chile, de nuevo uno de los países más afectado por las crisis', 2008, disponible en: <http://www.chilepress.com/blog/2008/11/chile-de-nuevo-uno-de-los-paises-mas-afectado-por-las-crisis/>.

Paredes, Ricardo & Sánchez, José Miguel, 'Organización industrial y grupos económicos: el caso de Chile', 1994, 35 p., disponible en: <http://www.ricardoparedes.cl/paperweb/grupos.pdf>.

Riesco, Manuel, 'Presuntas irregularidades en la privatizaciones de empresas estatales ocurridas con anterioridad a 1990', 2005, pp. 1-10, disponible en: http://www.cep.cl/Cenda/Cen_Documentos/Pub_MR/Varios/Privatizaciones.doc.

Roberts, Kenneth, 'Renovation in the revolution? Dictatorship, democracy, and political change in the chilean left', working paper, marzo 1994, 36 p., disponible en: <http://www.nd.edu/~kellogg/publications/workingpapers/WPS/203.pdf>.

Valenzuela, J. Samuel, 'La Constitución de 1980 y el inicio de la redemocratización en Chile', 1997, 39 p., disponible en: <http://kellogg.nd.edu/publications/workingpapers/WPS/242.pdf>.

DOCUMENTOS OFICIALES

Bardón, Álvaro, 'Informe Gemines primer trimestre', 1978, 87 p.

Cámara de diputados, 'Evolución de las normas que regularon el proceso de privatización en Chile desde 1970 a 1990', Secretaría de la Comisión de Privatizaciones 2005, 10 p., disponible en:
<http://www.navarro.cl/querellas/doc/evolucion%20normas%20privatizaciones.pdf>

Estévez, Francisco, 'Plebiscito del 5 de octubre de 1988: El comienzo de un largo camino hacia la participación ciudadana', Gobierno, M. S.

G. D., División de Organizaciones Sociales (DOS) 2008, disponible en:
http://www.participemos.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=971&Itemid=70.

Garretón, Manuel Antonio, 'Popular Mobilization and the Military Regime in Chile: the complexities of the invisible transition', working paper, 1988, 22 p., disponible en: <http://www.nd.edu/~kellogg/publications/workingpapers/WPS/103.pdf>.

Junta de Gobierno de Chile, 'Líneas De Accion De La Junta De Gobierno De Chile', Gobierno de Chile 1974, 45 p. ODEPLAN, 'Adiestramiento en preparación y evaluación de proyectos de inversión, economía-ODEPLAN', Odeplan, 1982.

ODEPLAN, 'Eficiencia económica para el desarrollo social: plan nacional indicativo de desarrollo 1976-1981', ODEPLAN 1981, 65 p. ODEPLAN, 'Preparación y presentación de proyectos de inversión', ODEPLAN, 1978, 101 p.

LISTA DE ABREVIACIONES

ACHS	Asociación Chilena de Seguridad
AFP	Administradora de Fondos de Pensiones
AFDD	Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
AFL-CIO	American Federation of Labor and Congress of Industrial Orga
AHC	Academia de Humanismo Cristiano
APRA	Alianza Popular Revolucionaria Americana
AUGE (plan)	Acceso Universal de Garantías Explícitas en Salud
BCCH	Banco Central de Chile
BHC	Banco Hipotecario de Chile
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
BM	Banco Mundial
CAN	Comunidad Andina de Naciones
CAP	Compañía de Acero del Pacífico
CASEN	Encuesta de Caracterización Socioeconómica
CED	Centro de Estudios del Desarrollo
CED (PUC)	Centro de Estudiantes de Derecho (Pontificia Universidad Cató
CENC	Comisión de Estudios de la Nueva Constitución
CENDA	Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo
CEP	Centro de Estudios Públicos
CEPAL	Comisión Económica para América Latina
CEPLAN	Centro de Estudios de la Planificación Nacional
CERC	Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea
CEREN	Centro de Estudios de la Realidad Nacional
CDU	Christlich-Demokratische Union Deutschlands
CHILECTRA	Compañía Chilena de Electricidad
CIA	Central Intelligence Agency
CIAPEP	Curso Interamericano de Adiestramiento en Preparación y Eval
CIEPLAN	Corporación de Investigaciones Económicas para América Lati
CIDE	Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación
CLACSO	Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
CMPC	Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones

CNC	Cámara Nacional de Comercio
CNI	Central Nacional de Informaciones
COAJ	Comité Asesor de la Junta de Gobierno
CODELCO	Corporación Nacional del Cobre
CODEPU	Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Puel
CONAMA	Corporación Nacional del Medio Ambiente
COPEC	Compañía de Petróleos de Chile Sociedad Anónima
COPESA	Consortio Periodístico de Chile Sociedad Anónima
CORFO	Corporación de Fomento
COSENA	Consejo de Seguridad Nacional
COVENSA	Corporación de Ventas de Salitre y Yodo de Chile
CPC	Confederación de la Producción y del Comercio
CRAV	Compañía Refinería de Azúcar de Viña del Mar
CTC	Compañía de Telecomunicaciones de Chile
CUT	Central Unitaria de Trabajadores
CW	Consensus de Washington
DC	Democracia Cristiana
DDHH	Derechos humanos
DIBAM	Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos de Chile
DINA	Dirección de Inteligencia Nacional
DINE	Dirección de Inteligencia del Ejército
DIRECON	Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales
DIRINCO	Dirección de Industria y Comercio
DFL	Decreto con fuerza de ley
DL	Decreto ley
DOS	División de Organizaciones Sociales
DS	Decreto supreme
DSN	Doctrina de la Seguridad Nacional
EMOS	Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias
ENAMI	Empresa Nacional de Minería
ENACAR	Empresa Nacional del Carbón
ENAEX	Empresa Nacional de Explosivos
ENADE	Encuentro Nacional de la Empresa
ENAP	Empresa Nacional del Petróleo
ENDESA	Empresa Nacional de Electricidad Sociedad Anónima
ENTEL	Empresa Nacional de Telecomunicaciones

ENU	Escuela Nacional Unificada
ESVAL	Empresa de Servicios Sanitarios de Valparaiso
FACH	Fuerza Aérea de Chile
FAMAE	Fábrica y Maestranzas del Ejército
FBI	Federal Bureau of Investigation
FAO	Food and Agriculture Organization
FASIC	Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas
FECH	Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile
FFCC	Empresa de Ferrocarriles del Estado
FEUC	Federación de Estudiantes de la Universidad Católica
FFAA	Fuerzas Armadas
FLACSO	Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
FMI	Fondo Monetario Internacional
FONASA	Fondo Nacional de Salud
FPMR	Frente Patriótico Manuel Rodríguez
FRAP	Frente de Acción Popular
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade
IANSA	Industria Azucarera Nacional Sociedad Anónima
IC	Izquierda Cristiana
ICARE	Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas
ICA	International Cooperation Administration
ILADES	Instituto Latinoamericano de Doctrinas y Estudios Sociales
ILPES	Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Econó
ILET	Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales
ILSA	Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos
INE	Instituto Nacional de Estadísticas
INFORSA	Industrias Forestales Sociedad Anónima
IPC	Índice de Precios al Consumidor
ISAPRE	Institución de Salud Previsional
ISI	Industrialización por Sustitución de Importaciones
IVA	Impuesto al valor agregado (TVA)
LAN Chile	Línea Aérea Nacional de Chile
LOCE	Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza
MAPU	Movimiento de Acción Popular Unitaria
MG	Movimiento Gremial (gremialismo)
MIDEPLAN	Ministerio de Planificación y Cooperación

MINEDUC	Ministerio de Educación
MIR	Movimiento de Izquierda Revolucionario
MIT	Massachusetts Institute of Technology
MOP	Ministerio de Obras Públicas
OCDE	Organisation de coopération et de développement économiques
ODEPLAN	Oficina de Planificación Nacional
OEA	Organización de Estados Americanos
OIT	Organización Internacional del Trabajo
OMC	Organisation mondiale du commerce (WTO)
ONG	Organización no gubernamental
ONU	Organización de Naciones Unidas
OPEP	Organización de Países Productores de Petróleo
OTAN	Organización del Tratado del Atlántico Norte
PC	Partido Comunista
PECC	Pacific Cooperation Council (APEC)
PEM	Programa de Empleo Mínimo
PERT	Program Evaluation and Review Technique
PDC	Partido Democratacristiano
PGB	Producto Geográfico Bruto
PIB	Producto Interno Bruto
PN	Partido Nacional
PNUD	Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo
POHJ	Programa Ocupacional para Jefes de Hogar
PPD	Partido por la Democracia
PR	Partido Radical
PS	Partido Socialista
PUC	Pontificia Universidad Católica de Chile (UC)
PYMES	Pequeñas y Medianas Empresas
RN	Renovación Nacional
SEGPRES	Secretaría General de la Presidencia
SEREMI	Secretario Regional Ministerial
SERMENA	Servicio Médico Nacional de Empleados
SERNAC	Servicio Nacional del Consumidor
SII	Servicio de Impuestos Internos
SIMCE	Sistema de Medición de la Calidad de la Educación
SOFOFA	Sociedad de Fomento Fabril

SONAMI	Sociedad Nacional de Minería
SOQUIMICH	Sociedad Química y Minera de Chile Sociedad Anónima
SNA	Sociedad Nacional de Agricultura
SNS	Servicio Nacional de Salud
TC	Tribunal Constitucional
TLC	Tratado de Libre Comercio
TRICEL	Tribunal Calificador de Elecciones
TVN	Televisión Nacional de Chile
UC	Universidad Católica
UE	Unión Europea
UNCTAD	United Nations Conference on Trade and Development
UDI	Unión Demócrata Independiente
UP	Unidad Popular
URSS	Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas